

Índice

Introducción. La memoria histórica

I. Corona, nobleza y burguesía

- Decadencia histórica
- La unidad nacional
- Guerra de la Independencia
- El turno del pueblo
- Juntas, Cortes y revolución burguesa
- Una revolución frustrada
- Alianza estratégica
- Capitalismo atrasado: desarrollo desigual y combinado
- Se prepara la tormenta
- La revolución gloriosa. Golpe militar y poder revolucionario
- La insurrección de 1869

II. El proletariado militante. Los inicios

- Lecciones de Europa
- ‘Proletarios de todos los países, ¡uníos!’
- Marxismo y anarquismo
- La Primera Internacional en la crisis revolucionaria española
- Guerra y revolución. La comuna de París
- Gobierno revolucionario
- Derrocar el Estado
- Internacionalistas bajo ataque
- Mayoría anarquista en la Regional Española
- La República de 1873. Una oportunidad perdida
- Insurrecciones y levantamientos
- Triunfo de la contrarrevolución

III. Socialistas y anarcosindicalistas

- La restauración borbónica
- Reflujo obrero
- En los orígenes del movimiento socialista
- Clase contra clase
- El arraigo del anarquismo
- Sindicalismo socialista y sindicalismo revolucionario
- La guerra de Marruecos
- La Semana Trágica
- Represión sangrienta
- Viraje hacia la colaboración de clases: la conjunción republicano-socialista
- La fundación de la CNT y el anarcosindicalismo

IV. La quiebra del régimen

- El imperialismo y la lucha por la hegemonía
- La Primera Guerra Mundial
- Reformismo y chovinismo
- Neutralidad y grandes negocios
- El expolio marroquí y las juntas militares
- La carestía de la vida
- Agitación obrera
- La crisis política se generaliza
- Agosto de 1917. Huelga general revolucionaria:
- La quiebra del régimen

V. El trienio bolchevique

- La revolución rusa
- La revolución permanente y las tesis de Abril
- El Octubre soviético
- La formación de la Internacional Comunista
- Agitación campesina en Andalucía
- Barcelona, capital obrera
- Huelga general y revolución
- El inicio de la represión
- ‘Terceristas’ en el PSOE
- Las Juventudes Socialistas y el bolchevismo
- Hacia el Partido Comunista de España
- Los anarcosindicalistas y la Tercera Internacional
- Derrota obrera: la ofensiva armada del gobierno y la patronal

VI. La dictadura de Primo de Rivera y el colapso de la monarquía

- Revolución y contrarrevolución en Europa
- El socialismo en un solo país
- La amenaza fascista
- La crisis española se profundiza. La derrota militar en Marruecos
- El golpe de Primo de Rivera
- La actitud de las organizaciones obreras
- Una dictadura bonapartista
- La guerra contra Abd-el Krim
- Corporativismo político e intervención estatal en la economía
- La colaboración socialista
- La dictadura se desmorona
- El fin de la monarquía

VII. El gobierno de conjunción republicano-socialista

- Los republicanos
- La fuerza de la izquierda en 1931
- La República y las tareas de los comunistas
- La colaboración de clases
- El bienio reformista ante la Iglesia y el ejército
- La cuestión nacional
- La reforma agraria

Tierra y libertad
La clase obrera en lucha
Indulgencia con los golpistas, brutalidad con los campesinos
Hacia los combates decisivos

INTRODUCCIÓN

LA MEMORIA HISTÓRICA

Tenemos que matar, matar y matar, ¿sabe usted? Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora espero que comprenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España

Gonzalo de Aguilera

Capitán del ejército de Franco, terrateniente y amigo personal de Alfonso XIII¹

La decisión del levantamiento militar estaba tomada por la burguesía antes de que la derecha perdiera las elecciones de febrero de 1936. Los últimos meses de Gil Robles como ministro de la Guerra prepararon al ejército para el eventual golpe de Estado, pero los planes y las discusiones en torno a esta cuestión se remontan a 1932 y 1934. A las 4 de la mañana del 17 de febrero de 1936, inmediatamente después de la primera vuelta electoral, Gil Robles incitó al primer ministro en funciones, Manuel Portela Valladares, a anular los resultados de las elecciones con su ayuda y la del Ejército. Horas más tarde, fue el general Francisco Franco, entonces jefe del Estado Mayor Central, quién lo presionó para que declarase el estado de guerra con el fin de impedir el traspaso de poderes al Frente Popular.²

Cuando el golpe militar era inminente y los oficiales leales de la Unión Militar Republicana y Antifascista (UMRA), que habían hecho acopio de toda la información al respecto, se entrevistaron con Casares Quiroga —jefe del gobierno y ministro de guerra en aquel momento— para informarle de la gravedad de la situación, la respuesta fue decepcionante. Casares Quiroga afirmó que no había peligro de golpe militar y se negó a adoptar ninguna medida de depuración de los mandos facciosos, tal como exigía la UMRA.³

Para llevar a cabo sus planes la clase dominante contaba con un aparato concienciadamente engrasado. En la lucha contra el enemigo interior, el ejército había sido empleado con saña para aplastar a los trabajadores y los jornaleros: en la Semana Trágica y la huelga general de agosto de 1917; en las luchas del trienio bolchevique y bajo la dictadura de Primo de Rivera; pero también en los seis años republicanos de 1931 a 1936, en los que el ejército y las fuerzas policiales siguieron bajo el control directo de mandos derechistas y se emplearon a fondo en la represión de las huelgas, en los horribles asesinatos de campesinos en Casas Viejas, en la persecución de los obreros revolucionarios que siguió a la Comuna asturiana de 1934. En este último caso, el mismísimo Franco puso en práctica todo un ensayo de la guerra civil, fusilando a más de 200 trabajadores y deteniendo a más de 10.000.

Este aparato militar tenía asimismo una larga experiencia en el exterior, en sus actuaciones durante las guerras coloniales, especialmente contra la población marroquí. La Legión, por ejemplo, de la cual fueron comandantes, entre otros, Millán Astray y Franco, reclutó a

¹ Citado en Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, Ed. Crítica, Barcelona, 2005, p. 277.

² Burnett Bolloten, *La guerra civil española, revolución y contrarrevolución*, Alianza Editorial, Madrid, 1995, p. 59.

³ Julio Busquets, Juan Carlos Losada, *Ruido de sables*, Ed. Crítica, Barcelona, 2003, p. 67.

lumpenes para emplearlos en las *razzias* contra los rebeldes rifeños: “Criminales comunes, pistoleros, veteranos de la Primera Guerra Mundial que habían sido incapaces de adaptarse a la paz. Tanto Franco como Millán Astray plantearon la Legión como una especie de purgatorio vital que ofrecería a los desheredados reclutas la redención mediante el sacrificio, la disciplina, las penalidades, la violencia y la muerte”.⁴

Esa brutalidad característica fue usada con todos los recursos disponibles por el ejército franquista durante la guerra civil. Eran métodos copiados de los utilizados en las guerras africanas. En la noche del 17 de julio, cuando el golpe militar se puso en marcha, en el protectorado de Marruecos fueron asesinadas 189 personas.⁵ Esa mañana aparecían los primeros cadáveres en las calles o abandonados en las playas. También comenzaría a funcionar el campo de concentración de Zeluán. En Canarias, el número de asesinados es desconocido, ya que los militares no tuvieron empacho en arrojar los cadáveres al océano.

El 18 y 19 de julio de 1936, la respuesta de miles de trabajadores en Barcelona y Madrid, y en una mayoría de grandes ciudades, abortó los planes de un rápido triunfo del golpe. A partir de ese momento, el ejército sublevado inició una sangrienta política de conquista y exterminio que puede caracterizarse de auténtico genocidio. No sólo eliminaba a los cargos civiles y militares contrarios al golpe o a los dirigentes de los partidos políticos adheridos al Frente Popular o de los sindicatos, sino a todo aquel obrero o campesino cuyo asesinato pudiera servir de escarmiento.

El objetivo de los militares y los fascistas que actuaron como tropas de limpieza en la retaguardia era sembrar un terror masivo. Había que dar a las masas una lección inolvidable. Los sublevados necesitaban aplastar su voluntad de lucha, y asesinar a decenas de miles era la mejor manera de que no se atrevieran a exigir sus derechos nunca más. La mecánica de esta política de exterminio era aterradora. Sólo en agosto de 1936, 584 personas fueron asesinadas en la ciudad de Sevilla y 1.084 en la provincia de Huelva (4.658 en todo ese año).⁶ En la ciudad de Zaragoza, los datos hablan de 2.598 víctimas registradas durante 1936.⁷ Paul Preston da una cifra general de asesinados por la represión franquista durante la guerra de 180.000 personas,⁸ a las que habría que sumar las bajas en el frente y los civiles muertos en acciones militares como los bombardeos (294 en el de Gernika y 300 en el de Alicante).

El general Yagüe, autor de la masacre de Badajoz, le habló muy claro al periodista norteamericano John Thompson Whitaker: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”⁹ La represión franquista no fue un acto de “descontrol” o una “tragedia inevitable causada por la locura de la guerra”, como algunos apologistas del franquismo señalan, sino una acción planificada y organizada sistemáticamente con objetivos bien definidos. No es casualidad que numerosos historiadores opinen que el mismísimo Hitler se inspiró en la represión franquista a la hora de lanzar la “guerra total” durante la Segunda Guerra Mundial.

Existen numerosos relatos sobre la brutal represión fascista. En muchos pueblos dejaron expuestos los cadáveres para que los vecinos se horrorizaran. La tristemente célebre matanza de Badajoz, donde según la cifra dada por el propio Yagüe se aniquiló al 10% de la población

⁴ Isaías Lafuente, *Esclavos por la patria*, Temas de Hoy, Madrid, 2004, p. 205.

⁵ Francisco Espinosa, “Julio de 1936. Golpe militar y plan de exterminio”, en *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*, Ed. Crítica, Barcelona, 2004, p. 62.

⁶ Francisco Espinosa, *op. cit.*, p. 87.

⁷ Julián Casanova, *op. cit.*, p. 99.

⁸ Paul Preston, *The Spanish Civil War. Reaction, revolution & revenge*, Harper Perennial, London, 2006, p. 202.

⁹ John T. Whitaker, *We cannot escape history*, Macmillan, New York, 1943, p. 113.

de la ciudad extremeña, es el ejemplo más claro. Este es el relato de un muchacho que entonces tenía 15 años: “Más tarde nos pasaron a la plaza de toros y nos alojaron en unos pasadizos que había por debajo de las gradas y que no había más luz que la que dejaba pasar por las ranuras o arpilleras que había en las murallas (...) Nosotros, de la familia, nos encontrábamos allí mi padre, mi hermano y yo (...) Al día siguiente empezaron los fusilamientos. El sistema que tenían era el siguiente: entraban por la puerta que daba al ruedo de la plaza un cabo bajito de la Legión y pistola en mano y cojeando porque tenía el pantalón ensangrentado como de estar herido. Este señor contaba hasta veinte, los sacaba al ruedo, donde ya esperaban los guardias civiles que componían el piquete de ejecución (...) Una vez fusilados llamaban a algunos de los que allí se encontraban para que cargaran los muertos en una camioneta chica y se los llevaban creo que al cementerio. Cuando la camioneta regresaba, contaban otros veinte, que se conoce que era la carga del vehículo o no podía con más, y así todo el día o días”.¹⁰

Otro periodista, esta vez portugués, Mário Neves, también dejó por escrito sus impresiones, dándonos una idea precisa de la magnitud de la masacre: “Hace diez horas que la hoguera arde. Un horrible hedor penetra por nuestras fosas nasales, hasta el punto que casi nos revuelve el estómago. De vez en cuando se oye una especie de crepitar siniestro de madera (...) Al fondo (...), sobre una superficie de más de cuarenta metros, más de trescientos cadáveres, en su mayoría carbonizados. Algunos cuerpos, colocados precipitadamente, están totalmente negros, pero hay otros cuyos brazos o piernas han escapado a las llamas provocadas por la gasolina derramada sobre ellos. El sacerdote que nos acompaña comprende que el espectáculo nos desagrada y trata de explicarnos: ‘Merecían esto. Además, es una medida de higiene indispensable’...”.¹¹

Desde el primer momento, la Iglesia católica fue un firme apoyo de los militares y los fascistas. Si el cardenal Gomá, primado de España, caracterizaba el alzamiento como “providencial” y la guerra como “plebiscito armado”¹², otro obispo, Pla y Denial, en su carta pastoral *Las dos ciudades*, calificó la insurrección fascista de “cruzada”. La complicidad fue absoluta, también en las ejecuciones sumarias. Como relata el sacerdote Gumersindo de Estella: “Como sacerdote y como cristiano sentía repugnancia ante tan numerosos asesinatos y no podía aprobarlos (...) Mi actitud contrastaba vivamente con la de otros religiosos, incluso superiores míos, que se entregaban a un regocijo extraordinario y no sólo aprobaban cuanto ocurría, sino aplaudían y prorrumpan en vivas con frecuencia”.¹³ Sus memorias están llenas de estremecedores relatos que describen ese “regocijo”.

A la represión fascista no escaparon las mujeres. No había distinción entre una mujer roja o una mujer casada con un rojo, aunque hubiera demostrado su beatitud. Algunas fueron asesinadas para arrancar confesiones a sus maridos o por haber bordado, en su día, una bandera republicana para el pueblo. Si el terror buscaba dar un escarmiento, con las mujeres el escarmiento tenía que ser mayúsculo: las rojas habían osado cuestionar el papel que la reacción y la “tradición” les tenían reservado, habían tratado de elevarse por encima del machismo, la ignorancia y la superstición. Los fascistas no lo podían tolerar, necesitaban que la mujer volviera a su estado de sumisión y postración.

Las que no fueron asesinadas sufrieron un calvario especialmente doloroso. No sólo se las violaba, como ocurrió en miles de ocasiones, sino que se les rapaba la cabeza, para que quedaran claramente identificadas y humilladas, y se les obligaba a tomar purgantes que las

¹⁰ Francisco Pilo Ortiz, *Ellos lo vivieron*, edición del autor, Badajoz, 2001, p. 138.

¹¹ Mário Neves, *La matanza de Badajoz*, Ed. Regional de Extremadura, 1986, p. 60.

¹² Julián Casanova, *op. cit.*, p. 49.

¹³ Gumersindo de Estella, *Fusilados en Zaragoza. 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos*, Mira editores, Zaragoza, 2003.

“purificaran” después de tanto pecado. Estas prácticas se convirtieron en habituales. Con la complicidad del clero, miles de mujeres fueron además obligadas a prostituirse a cambio de favores o vanas promesas de perdón a familiares detenidos. La desesperación llevaba a estas mujeres a someterse a cualquier cosa para tratar de salvar a su hijo, su marido o su hermano. Muchas veces estas vejaciones no servían para nada porque su ser querido ya había sido asesinado.

Ni siquiera los niños se salvaron. Citamos dos ejemplos de menores: “el de Carmelo Blanco Zambrano, de 16 años, a quien asesinaron en Fuente de Maestre (Badajoz) ‘porque se trajo un pito y un balón en el saqueo de la casa de los señoritos’, y el de Juan Manuel Martínez Báez, de 14 años, asesinado en Ribera del Fresno (Badajoz) porque ‘se enemistó con otro chico más o menos de su misma edad, al parecer hijo de un importante personaje’”.¹⁴

El vil interés monetario también jugó un papel en la represión, en la llamada *desamortización de bienes marxistas*. Aunque la mayoría de los asesinados eran gente muy humilde, se produjo un robo sistemático de sus propiedades y ahorros, por pequeños que fueran, no sólo de los individuos particulares, sino también de las organizaciones de izquierdas. Un expolio del que se beneficiaron, sobre todo, los terratenientes de toda la vida y los dirigentes de Falange, que utilizarían su nueva posición política para amasar grandes fortunas y convertirse en nuevos ricos.

No se puede entender toda esta ferocidad sin enmarcarla dentro de un profundo odio de clases. Terratenientes, empresarios, falangistas, sacerdotes... utilizaron la represión, el asesinato y las cárceles para saldar las cuentas pendientes con quienes les habían hecho frente en los años anteriores. A los jornaleros detenidos, cuando estaban a punto de ser ejecutados, era común insultarlos: “¡Preparaos, que os vamos a dar la reforma agraria!” en referencia al trozo de tierra donde arrojarían su cadáver. Este odio no finalizó con la victoria militar de Franco. Las *dos Españas*, la de los vencedores y la de los vencidos, existieron durante los cuarenta años de dictadura.

CUARENTA AÑOS DE BARBARIE

Tras el 1 de abril de 1939, “desarmado y cautivo el ejército rojo”, lo peor estaba por llegar. Para empezar, hay que recordar el desastre económico en que se sumió la inmensa mayoría de la población. Para las penurias económicas también había dos Españas, y fueron las familias obreras las que sufrieron las penalidades de la posguerra. En los primeros años de la dictadura franquista, el hambre se extendió por pueblos y ciudades. La renta nacional retrocedió a niveles de 1914 y casi 200 localidades situadas a lo largo de los frentes estaban reducidas a escombros, por lo que cuatro millones de personas no tenían hogar. Además, las enfermedades se convertían en plagas: morían 30.000 personas al año de tuberculosis. La inflación era galopante, lo que deterioraba aún más el ya de por sí bajo poder adquisitivo de los trabajadores.¹⁵ Según el historiador pro-franquista Ricardo de la Cierva, unas 30.000 personas murieron de hambre entre 1939 y 1945. Otros historiadores, al incluir también las muertes provocadas por la desnutrición, elevan la cifra a 200.000, sin duda más cercana a la realidad.¹⁶

¹⁴ Francisco Espinosa, *op. cit.*, p. 87.

¹⁵ Isaías Lafuente, *op. cit.*, pp 23-26.

¹⁶ En esta atmósfera, la corrupción y el mercado negro —el famoso estraperlo— arruinaron aún más a las familias obreras mientras que otros, incluido la burocracia falangista, se hacían de oro: “El sistema instaurado

Pero al régimen franquista no le bastaba con la victoria, necesitaba masacrar a los vencidos, aplastarlos para que nunca más se levantaran. Julián Casanova relata así la hecatombe que continuó al fin de la guerra: “No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los diez años que siguieron al final oficial de la guerra el primero de abril de 1939, después de haber asesinado ya alrededor de 100.000 ‘rojos’ durante la contienda. Medio millón de presos se amontonaban en las prisiones y campos de concentración en 1939. La tragedia y el éxodo dejaron huella. La ‘retirada’, como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista (...) Los asesinatos arbitrarios, los ‘paseos’ y la ley de Fugas se mezclaron con la violencia institucionalizada y ‘legalizada’ por el nuevo Estado”.¹⁷

Sólo en Catalunya, tras la conquista militar se celebraron 111.000 consejos de guerra.¹⁸ Entre 1936 y 1947 funcionaron 190 campos de concentración a imagen y semejanza de los alemanes. El campo de Miranda del Ebro, el que más tiempo estuvo en funcionamiento, llegó a alojar a 80.000 personas, entre ellos a 15.000 extranjeros que huían de los nazis.¹⁹

Por establecer algunas comparaciones, ese mínimo de 50.000 ejecutados —que numerosos historiadores elevan a 90.000 o incluso a más de cien mil²⁰— supera con creces la suma de las bajas sufridas por el ejército español en todas las guerras libradas durante el siglo XIX y XX en Marruecos, Cuba, Filipinas y contra los EEUU. El historiador Edward Malefakis tiene que reconocer que esa cifra teórica de 50.000 muertes es veinte veces mayor que los 2.500 fascistas ajusticiados en Paracuellos del Jarama —el ejemplo que siempre utilizan los defensores del franquismo para equiparar a víctimas con verdugos— y 151 veces más que los 330 muertos acaecidos durante los primeros meses de gobierno del Frente Popular, que, según los franquistas, fueron meses de “caos rojo” que justificaron la sublevación militar.²¹ Los datos lo demuestran: el objetivo del Estado franquista era institucionalizar el resultado de la guerra, perpetuar la venganza de la clase dominante para que el recuerdo de la derrota deprimiera a las nuevas generaciones. El miedo y el terror del Estado eran fundamentales para evitar futuros desafíos de la clase obrera.

Durante la guerra civil, utilizando los prejuicios religiosos alimentados por la Iglesia y las incoherencias y debilidades de la propia República, el bando fascista había logrado agrupar a muchos pequeños propietarios y campesinos políticamente atrasados. Terminada la guerra, la “Nueva España” capitalista y dictatorial no podía garantizar las demagógicas promesas falangistas. La represión y el terror se convertían en sostén fundamental de la dictadura.

benefició sobre todo a los grandes propietarios, que obtuvieron prebendas y lograron especular con los bienes. La aparición del mercado negro no constituyó ni mucho menos una práctica esporádica o residual, sino que probablemente por sus circuitos se produjo un volumen de transacciones superior incluso al cauce oficial. (...) La necesidad de adquirir productos a la vez necesarios y escasos coincidía con las ansias especulativas de unos pocos bien situados en el entramado económico, acrecentadas si cabe por la inoperancia de la intervención estatal. Delinquir era relativamente sencillo y, además, la recuperación de lo invertido estaba garantizada con creces. La participación en las operaciones especuladoras venía de la mano de los poderes locales, así como de numerosos funcionarios encargados de gestionar los productos recabados. Con estos ingredientes, difícilmente el Gobierno iba a tomar decisiones que afectaran a sus propios socios”. Pablo Gil, *La noche de los generales*, Ediciones B, 2004, p. 214.

¹⁷ Julián Casanova, “Una dictadura de cuarenta años”, en *Morir, matar, sobrevivir...*, p. 8.

¹⁸ *El País*, 14/09/08.

¹⁹ *El País*, 14/03/10.

²⁰ El historiador Santos Juliá, basándose en estudios realizados en 36 provincias, eleva la cifra a un mínimo de 90.000. *El País*, 13/08/06.

²¹ “Lo que falta para terminar la Guerra Civil”, en *El País*, 31/12/06.

Las leyes se adaptaron para crear una red de espionaje masivo que alimentara un clima de terror constante. Así, el instructor solicitaba informes sobre el acusado al alcalde, al jefe local de la Falange —muchas veces la misma persona—, al párroco y al comandante de la Guardia Civil, convirtiendo a estos personajes en los oídos y los ojos del régimen, una legión de chivatos que se entregaron con entusiasmo a la tarea. La Iglesia, cuyo premio fue recuperar todos sus privilegios, asumía plenamente su papel de “policía espiritual” de los tiempos de la Inquisición: “Los sacerdotes rebasaron ampliamente aquello que les pedían y se esmeraron en hacer exhaustiva relación de todas aquellas circunstancias que, basadas en hechos o rumores, pudieran agravar la situación de los acusados”.²²

En los informes se tenían que describir los antecedentes políticos y sociales del acusado, anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936,²³ es decir, las leyes represivas eran retroactivas. Así, la ley de Responsabilidades Políticas de 1939 declaraba “la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas” que desde el 1 de octubre de 1934 “contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden” y a partir del 18 de julio de 1936 “se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”.²⁴

Aunque legalmente nadie podía ser retenido sin cargos durante más de 72 horas, las autoridades se saltaban la legislación sin ningún escrúpulo y los acusados permanecían días y días en las comisarías, sometidos a brutales palizas. Cientos de presos fueron torturados y apaleados hasta la muerte; otros fueron directamente “paseados”.

Por supuesto, los chivatos eran premiados. En tiempos de miseria y hambre, se les garantizaba un puesto de trabajo, unos ingresos regulares o el perdón para algún familiar detenido. Era una manera que tenía el régimen de ampliar su base social: al implicarles en todas las injusticias imaginables, los fascistas lograban que estos individuos cerraran filas con el gobierno para evitar el regreso de los vencidos. Claro está que de las desgracias ajenas siempre hubo quienes trataron de aprovecharse. Numerosos cargos policiales y militantes falangistas les pedían dinero a sus víctimas o las chantajeaban.

En este régimen policiaco, se daba rienda suelta a los sectores más putrefactos de la sociedad, a verdaderos psicópatas que gozaban con sadismo de su labor. El religioso Gumersindo de Estella también relata como muchos de sus colegas disfrutaban durante las torturas; sentían un “placer inconfesable”, era “consolador”, lo encontraban “edificante”. “Decididos a poner su religión en todas partes —escribe Juan de Iturralde—, la pusieron también en la boca de sus víctimas, obligándoles a gritar ¡Viva España! ¡Viva Cristo Rey!”.²⁵

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas por Franco nada más finalizar la guerra fue vaciar las cárceles republicanas para reclutar a toda la escoria social que se adscribiera al Movimiento: “Se entenderán no delictivos los hechos que hubieran sido objeto de procedimiento criminal por haberse calificado como constitutivos de cualquiera de los delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones, y de cuantos con los mismos guarden conexión, ejecutados desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, por personas de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional y siempre que aquellos hechos, por su motivación político-social, pudieran

²² Cita de Contxita Mir en Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 293.

²³ Julián Casanova, *Una dictadura de cuarenta años*, p. 23.

²⁴ *Ibid.*, p. 21.

²⁵ Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 147.

estimarse como protesta contra el sentido antipático de las organizaciones y gobierno que por su conducta justificaron el Alzamiento”.²⁶

El Estado franquista se construyó con estos ladrillos, incluida por supuesto la jefatura del Estado: “ignoraban la sencillez con la que Franco despachaba las sentencias de muerte, el tristemente famoso ‘enterado’ del Generalísimo, contado posteriormente por ilustres vencedores como Ramón Serrano Súñer o Pedro Sainz Rodríguez con la gracia y la impunidad que proporciona el paso del tiempo. (...) Allí estaba a menudo, con su Caudillo, el capellán José María Bulart, que se permitía la licencia de bromear sobre el asunto: ‘¿Qué? ¿Enterrado?’. Al bueno y católico de Bulart le llegaban muchas cartas de petición de clemencia, pero él tenía por costumbre arrojarlas a la papelera”.²⁷

Otro capítulo de este horror lo constituían los presos políticos. Según Antonio Miguel Bernal, sólo entre 1939 y 1943 hubo más de 550.000 presos. Entre 1939 y 1940, en la prisión Modelo de Valencia se hacinaban 15.000 prisioneros, aunque su capacidad era de 528 reclusos, y la de Barcelona, abarrotada con 10.000 presos, fue ampliada con un correccional abandonado y las naves de una fábrica de Poblenou.²⁸ Mucho peores eran las condiciones de las cárceles femeninas: la de Las Ventas, en Madrid, con capacidad para 500, albergaba a 8.000 presas; la de Las Corts, en Barcelona, construida para 100, recluía a 2.000 mujeres.

Con unas cárceles abarrotadas, como reconocía el propio gobierno, ¿por qué no usar a todos esos ‘rojos’ como esclavos en trabajos forzados? Además era imposible fusilarlos a todos. Si el 1 de enero de 1939 tan sólo se empleaban 300 reclusos en estos menesteres, a finales de año ya eran cerca de 13.000. Y doce meses después, en enero de 1941, ascendían a 103.369, de los cuales unas 10.000 eran mujeres.²⁹ Esta práctica, tras un período de “boom” que duró hasta los años 50, se mantendría hasta 1970. Al parecer fue el propio Franco el que ideó lo que Isaías Lafuente denomina “la primera empresa de trabajo temporal que se implantó en España”.³⁰ El jesuita José Antonio Pérez del Pulgar dio forma al tinglado, organizando el llamado Sistema de Redención de Penas. Una vez más, la Iglesia proporcionaba una cobertura espiritual a las brutalidades del fascismo; en este caso, la “redención”. Pérez del Pulgar publicó en enero de 1939 el documento *La solución que da España al problema de sus presos políticos*, donde explica: “Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.³¹ La mecánica era sencilla, los presos, desesperados por abandonar las cárceles franquistas y dejar atrás las torturas, o simplemente para poder enviar algo de ayuda a sus familiares que se morían de hambre, trabajaban de sol a sol a cambio de la promesa de la reducción de la condena y 50 céntimos al día, 2 pesetas más si tenían mujer y otra por cada hijo menor de 15 años, cuando el salario normal estaba entre las 10 y las 14 pesetas diarias.³²

El Estado se otorgaba el privilegio de emplear esta mano de obra cuándo y cómo considerase oportuno, sobre todo para cubrir la demanda en oficios cualificados. La mayor parte de las tareas de reconstrucción la llevaron a cabo los presos antifranquistas: pantanos, puentes, vías férreas, minas (sobre todo las de carbón de Asturias y León); por supuesto los “monumentos” para glorificar la victoria fascista en la guerra civil, como el Valle de los Caídos, en donde en torno a 6.000 presos construyeron la futura tumba del dictador en unas condiciones laborales

²⁶ Decreto del 23 de septiembre de 1939, citado en Isaías Lafuente, *Esclavos por la patria*, p. 28.

²⁷ Julián Casanova, *Una dictadura de cuarenta años*, p. 21.

²⁸ *Ibid.*, p. 24.

²⁹ Isaías Lafuente, *Esclavos por la patria.*, p. 36.

³⁰ *Ibid.*, p. 35.

³¹ *Ibid.*, p. 39.

³² *Ibid.*, p. 43.

espantosas: según cifras oficiales, ocho de cada cien presos resultaron accidentados. Franco tenía prisa por acabar su monumento.³³

Miles de estos esclavos fueron entregados a empresarios privados, para garantizarles suficiente mano de obra, más sumisa que los trabajadores libres y de la que además se podía extraer más plusvalía: Sociedad Babcock&Wilcox de Bilbao, Sociedad Maquinista y Fundiciones del Ebro de Zaragoza, Múgica, Arellano y Cía. de Pamplona, la trefilería de Gijón, Plasencia de Armas, Asland de Córdoba, Sociedad Portland Iberia y un largo etcétera. Sin olvidar los talleres penitenciarios donde los presos fabricaban desde mantas hasta aparatos de radio. Por ejemplo, el taller penitenciario de Ocaña (Toledo) llegó a producir todos los años 40.000 maletas y el de Novelda (Alicante), 120.000 escobas.

Algunas de las obras más importantes de esos años fueron levantadas fundamentalmente con mano de obra esclava, como la reconstrucción de Belchite, el canal del Guadalquivir (conocido popularmente como “el canal de los presos”), el embalse de Benagéber (Valencia), las líneas ferroviarias Madrid-Galicia o la inconclusa Santander-Mediterráneo, el madrileño puente de Praga y la urbanización de la ribera del Manzanares, así como numerosas iglesias y conventos. La última obra donde se empleó mano de obra esclava fue la construcción, en 1970, del residencial de lujo Mirasierra, en las afueras de Madrid, por el industrial José Banús, que también había construido con esclavos la carretera de acceso al Valle de los Caídos, entre muchas otras.

Los testimonios de estos esclavos son espeluznantes: “Allí no había máquinas, sólo el pico, la pala y nuestras manos. Se formaban equipos de 50 ó 60 hombres. Un grupo picaba, el otro sacaba la tierra y la depositaba en capazos de 8 ó 10 kilos. El resto formaba una cadena de 50 ó 60 metros para depositar la tierra en los márgenes del canal que estábamos construyendo Y, salvo para comer, no parábamos ni un instante durante doce o catorce horas diarias. Si tenías que hacer las necesidades, la cadena se estiraba, pero no se paraba ni un segundo el trabajo”.³⁴

En su libro *Esclavos por la patria*, Isaías Lafuente trata de cuantificar los tremendos beneficios que consiguió el Estado franquista con esta mano de obra: “En diez años apenas se había pagado a los presos republicanos un tercio de lo que gracias a su trabajo forzado habían generado sólo en los primeros cuatro años y medio de implantación del sistema. El resto fue confiscado directamente por el régimen”. Tomando cifras oficiales sobre jornadas trabajadas y salarios, el historiador calcula que el régimen obtuvo 612 millones de euros sólo con los salarios ahorrados.

Realmente todo el Estado español se había convertido en una monstruosa cárcel. En las nacionalidades oprimidas, vascos, catalanes y gallegos lo fueron aún más, acusados de separatismo. José María de Areilza, alcalde de Bilbao tras la conquista franquista, expresó nitidamente la visión del régimen sobre la cuestión nacional: “Que quede esto bien claro: Bilbao, conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable. Ha habido, ¡vaya que sí ha habido!, vencedores y vencidos. Ha triunfado la España una, grande y libre; es decir, la España de la Falange Tradicionalista. Ha caído vencida, aniquilada para siempre, esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euskadi y que era una resultante del socialismo prietista, de un lado, y de la imbecilidad vizcaitarra, por otro (...) Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar”.³⁵

³³ *Ibid.*, p. 123.

³⁴ *Ibid.*, p. 144.

³⁵ J. M. Lorenzo Espinosa, *Un pueblo en marcha*, Ed. Gite-lpes, 2004, p. 261.

Eloy Val del Olmo explica cómo la represión franquista se cebó con las naciones oprimidas: “La obsesión de la burguesía centralista contra el separatismo nacionalista encontró su medida en la actuación de la dictadura. El uso público y escrito del euskera fue prohibido y cualquier manifestación cultural propia, castigada con saña. La enseñanza de la lengua, la tradición y el arte vasco y catalán era una tarea clandestina. Todas las conquistas de la autonomía fueron suprimidas. En Gernika, ciudad símbolo machacada por las bombas fascistas, el alcalde envió el 2 de noviembre de 1949 un requerimiento a ‘familiares y propietarios de tumbas o panteones donde figuran inscripciones en vascuence para que sean retiradas las losas y sustituidas las citadas inscripciones por otras en castellano’. (...) La persecución del euskera llevó a la promulgaciones de leyes específicas que multaban a quien lo utilizase en lugares públicos e incluso se prohibió utilizar nombres vascos en el Registro Civil”.³⁶

No podemos concluir este apartado sin referirnos a otras víctimas del franquismo, los hijos de los rojos. Los niños acompañaban a sus madres a prisión y, cuando cumplían cuatro años, si sobrevivían a las duras condiciones carcelarias, eran separados de sus madres y entregados a centros religiosos. En 1943, el número de hijos de presos tutelados por el Estado era de 12.043, la mayoría niñas.³⁷ Sin duda, como sucedería más tarde en las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, también los mandos fascistas robaron niños a las familias vencidas. Poco a poco van saliendo datos al respecto.

La educación, o mejor dicho, la “des-educación” de los niños, hijos de rojos, fue otro elemento represivo que en muchas ocasiones se pasa por alto. Todos los avances del sistema educativo republicano se fueron rápidamente al traste. Para empezar, los maestros republicanos fueron uno de los sectores más perseguidos. “Que no quede maestro vivo”, decían los requetés en Navarra.³⁸ El periódico falangista de Zaragoza *Amanecer* era contundente: “para los poetas preñados, los filósofos henchidos y los jóvenes maestros y demás parientes, no podemos tener más que como en el romance clásico: un fraile que los confiese y un arcabuz que los mate”.³⁹

El cuerpo magisterial fue profundamente purgado para eliminar a los profesores de izquierdas o con simpatías republicanas. Más de 50.000 fueron sometidos a expedientes de depuración⁴⁰ y sustituidos por mutilados de guerra y familiares de fascistas muertos, todos ellos de “inquebrantable adhesión a los principios del glorioso Movimiento Nacional”. La Iglesia jugó un papel crucial a la hora de purgar a los maestros. Por ejemplo, la circular que la Comisión Depuradora del Magisterio de Burgos envió para analizar a los maestros hacía las siguientes preguntas: “¿Se mezcló en asuntos de obreros o del campo? ¿Cantó con los niños *La Internacional* o algún otro himno parecido? ¿Saludaron los niños con puños en alto?”. Las respuestas de los sacerdotes tampoco tienen desperdicio: “malo, muy malo, muy malo, socialista”, otro practica “el maltusianismo⁴¹ más repugnante y contrario a las ley natural y divina”, otro tiene “afición a las películas rusas”... El párroco de Calamocha (Teruel), a la hora de evaluar a un maestro de Badalona, fue el más conciso: “fusilable”.⁴²

³⁶ Eloy Val del Olmo, *Euskal Herria y el socialismo*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2005, p. 160.

³⁷ *El País*, 24/12/08.

³⁸ Cita de Marino Ayerra en Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 154.

³⁹ *Amanecer*, 13/3/1937.

⁴⁰ Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 156.

⁴¹ Con lo del “maltusianismo”, los curas se referían al control de la natalidad, el uso de métodos anticonceptivos o la educación sexual.

⁴² Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 158.

Tras matar maestros y quemar libros, así era la educación que le daban a los niños: “El Santo Evangelio será leído con frecuencia y todos los sábados será explicado el de la Dominica siguiente (...) Cantos populares, himnos patrióticos, biografías de héroes y santos, lectura de periódicos (...) todo esto debe hacerse en las escuelas (...) Se arriará la bandera de la Patria todos los días, procurando rodear el acto de máxima solemnidad, mientras los niños cantan himnos patrióticos. El retrato del Caudillo presidirá la educación de futuros ciudadanos”.⁴³ El ministro de Educación franquista José Ibáñez Martín, en el cargo de 1939 a 1951, consideraba que el problema fundamental de la educación española era: “¿Cómo podrá formar el alma del niño un maestro que no sepa rezar?”,⁴⁴ por lo que entregó la educación a la Iglesia católica, que recibió suculentas subvenciones y ayudas de todo tipo, mientras que la media de la inversión estatal en la enseñanza durante el franquismo fue seis veces menor a la de los demás países de Europa Occidental,⁴⁵ acumulándose un atraso histórico que aún padecemos. Toda una generación de hombres y, en especial, mujeres padecieron un sistema educativo bárbaro que los condenó a la ignorancia.

FRANCO MURIÓ, PERO SIGUIÓ MATANDO

Toda la historia muestra que es imposible mantener encadenado al proletariado con la ayuda solamente del aparato policiaco. Es cierto que la experiencia de Italia muestra que la herencia psicológica de la enorme catástrofe experimentada se conserva entre la clase obrera mucho más tiempo que la correlación de fuerzas que engendró la catástrofe. Pero la inercia psicológica de la derrota no es más que un precario sostén. Se puede desmoronar de un solo golpe bajo el impacto de una potente convulsión.

León Trotsky, *Bonapartismo y fascismo*⁴⁶

Tan pronto como en la década de los 50, el movimiento obrero, derrotado en la guerra civil y desilusionado cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, la prometida ayuda de las democracias occidentales para derrotar la dictadura no llegó, comienza a levantar la cabeza. Ni siquiera todo el terror desplegado por el franquismo pudo evitar las primeras huelgas y las incipientes acciones sindicales, como las de las comisiones obreras en las minas asturianas. Será precisamente el movimiento obrero quien derrote a la dictadura en la década de los 70, a pesar de que el caudillo se muriera creyendo dejar todo atado y bien atado.

Hay la creencia generalizada de que la represión del régimen se suavizó tras los años inmediatos de la posguerra. Desde luego, la dictadura trató de lavarse la cara después de la derrota de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial, pero esto no significa que se ablandara. Ciertamente la magnitud de la persecución en los años 40 daba poco margen de maniobra. Todo aquel al que pudiera achacársele alguna acción en los años de la República o

⁴³ *El Noticiero* de Zaragoza, 09/03/38.

⁴⁴ Julián Casanova, *La iglesia de Franco*, p. 58.

⁴⁵ *Sindicato de Estudiantes. 20 años de historia, 20 años de lucha*. FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 113.

⁴⁶ León Trotsky, *La lucha contra el fascismo*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2004, p. 392.

en la guerra civil ya había sido sin duda purgado, bien asesinado, encarcelado o exiliado. Pero la represión continuaría.

Aunque las leyes fueron modificándose con el paso del tiempo, siempre mantuvieron su carga represiva. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, que en 1963 asumió las competencias del Tribunal Especial de la ley de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940, se mantuvo operativo una vez muerto Franco, hasta enero de 1977. De hecho, el 60% de sus procedimientos se concentran precisamente en sus últimos tres años de existencia (1974-1977), coincidiendo con el auge de la lucha obrera contra la dictadura y sus herederos.⁴⁷ En 1961, 15.202 presos políticos llenaban las cárceles franquistas.⁴⁸ En 1969, sólo en Euskal Herria había 1.953 presos políticos y 150 refugiados, y otras 890 personas habían sufrido persecución y malos tratos, de ellos 350 con heridas de primer grado.⁴⁹

En todo caso, fue una represión diferente. La represión de la posguerra fue un exterminio sistemático por parte de los vencedores ante un movimiento obrero arrodillado por la derrota. A partir de finales de los años 50, la represión gubernamental fue, cada vez más, la acción de un régimen al que sólo le quedaba desaparecer. Los asesinatos y torturas en la posguerra inmediata sembraban el terror; ahora, la represión provocaba sobre todo la incorporación de nuevas capas a la lucha y el recrudecimiento de la movilización obrera y estudiantil. Las causas penales como el proceso de Burgos, el proceso 1001 (contra la dirección clandestina de Comisiones Obreras) o contra los oficiales de la Unión Militar Democrática, las encarcelaciones y las manifestaciones disueltas a tiros (como la de la Bazán de Ferrol el 10 de marzo de 1972, en la que murieron dos trabajadores del astillero) e incluso los últimos fusilamientos de la dictadura (el 27 de septiembre de 1975, a menos de dos meses de la muerte del dictador)⁵⁰ no lograron cortar el ascendente movimiento de masas.

Uno de los puntos álgidos de esa represión fue, ya con el dictador muerto, el año 1976. El 3 de marzo en Vitoria, después de 54 días de huelgas y de incipientes embriones de poder obrero, las comisiones representativas de los trabajadores de las fábricas en lucha, la policía cargó con fuego real contra la asamblea general convocada en la iglesia de San Francisco. En total murieron cinco obreros y otros cien resultaron heridos de bala. Las declaraciones de los testigos y las transmisiones por radio de la misma policía son concluyentes: tenían órdenes de masacrar a los obreros y fueron felicitados por ello. Éste es un extracto de esas conversaciones grabadas entre policías:

“—¿Qué tal está el asunto ahora por ahí? Cambio.

“—Te puedes imaginar; después de tirar igual mil, mil tiros pues y romper toda la iglesia de San Francisco, pues ya me contarás como está toda la calle y está todo. Cambio.

“—Muchas gracias, ¿eh? Y buen servicio, Bueno espera un momentito por ahí a ver si os podéis dirigir de un momento al punto cero. Cambio.

“—(...) en la plaza de Salinas y hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.

“—De acuerdo, de acuerdo. Cambio.

⁴⁷ Jordi Rosich, “La dictadura de Franco. Esbozo histórico de un período negro de la historia española”, en *El Militante* nº 190.

⁴⁸ *Público*, 05/09/10

⁴⁹ Datos del sindicato ELA-STV, en Eloy Val del Olmo, *op. cit.*, p. 179.

⁵⁰ Recomendamos leer la narración de los fusilamientos que aparece en el libro de Eloy Val del Olmo, pp. 193-195. En ese momento el PSOE llegó a plantear: “Franco, los guardias civiles que han participado como voluntarios en el pelotón de ejecución, Arias, Juan Carlos, cada uno de los ministros del Gobierno, los falsos jueces de los falsos procesos, todos los reaccionarios que facilitan estos crímenes salvajes, todos pagarán sus culpas”. Ahí queda para la historia.

“—Oye, pero de verdad, una masacre, ¿eh?”

“—(...) Ya tenemos, ya tenemos munición; ya tenemos dos camiones de munición, ¿eh? O sea que a mansalva (...) a por ellos, sin tregua de ninguna clase. Cambio”.⁵¹

Nadie investigó esta matanza, que quedó impune, y a raíz de la cual Manuel Fraga Iribarne, que era el ministro del Interior, pronunció su famosa frase: “La calle es mía”.

El 5 de marzo fue asesinado un trabajador en Tarragona, más tarde otro obrero en Elda (Alicante) y un joven de 18 años en Basauri (Vizcaya). El 6 de mayo acontecieron los sucesos de Montejurra, donde bandas fascistas, evidentemente financiadas y organizadas por el aparato del Estado, disolvieron a tiros una concentración de los carlistas progresistas, asesinando a dos personas. La actividad de los grupos fascistas adquirirá nuevos bríos a principios de 1977, y tras perpetrar varios asesinatos (los estudiantes Arturo Ruiz y María Luz Nájera) culminarán sus acciones en la matanza de Atocha, el 24 de enero, donde masacraron a cinco abogados laboristas militantes de CCOO y el PCE. En mayo será la policía la que asesine a otros seis trabajadores en Euskadi. “La policía, la Guardia Civil y la extrema derecha provocaron más de un centenar de muertes en intervenciones represivas institucionales o en ‘incontroladas’ agresiones de carácter ‘ultra’, entre 1976 y 1980. Durante todo ese período —salvo en la primera mitad de 1976—, Adolfo Suárez preside el Gobierno y Rodolfo Martín Villa, el general Antonio Ibáñez Freire y Juan José Rosón, sucesivamente, están al frente del Ministerio del Interior”.⁵² Este saldo de sangre inocente, vertida por los disparos de la policía de Suárez y las bandas fascistas que toleraba, nunca se menciona en las crónicas oficiales sobre la Transición española.

Los políticos de este franquismo tardío, muchos de los cuales ocuparon, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, cargos de máxima responsabilidad en el gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD), la administración central, la judicatura, el ejército y la policía, y posteriormente en las altas finanzas, como el inefable Rodolfo Martín Villa, jamás tuvieron que responder de sus actos. Para echar tierra sobre su pasado y lavarles la cara presentándolos como nuevos demócratas, no sólo se puso en marcha una gran campaña mediática, también se borraron las huellas de su actuación de los archivos policiales y los ministerios. Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, refrescaba recientemente las denuncias que en su día hizo Justicia Democrática contra la Brigada Político-Social, señalando que existía un “poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias”, que persistían “torturas policiales en régimen de expresa impunidad”. El artículo donde se recogen sus declaraciones continúa así: “Y aquí es donde surgen las dudas sobre la conservación y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuación represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido durante la Transición ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que habían cometido y siguieron cometiendo hasta el final del régimen, con el propósito de garantizar su impunidad. Así lo reconoció el gobernador civil de Barcelona, Salvador Sánchez Terán, cuando justificó la destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque ‘olían a un pasado remoto’...”.⁵³ El 8 de julio de 2010, el director del gabinete del ministro del Interior se excusaba: “Hay que tener en cuenta que, con la promulgación de la Ley de Amnistía 46/1977 de 15 de octubre, se procedió a la eliminación de todos aquellos expedientes que contuviesen información de carácter político, sindical, religioso, etc.”.⁵⁴

⁵¹ “La Transición, un análisis marxista”, en MARXISMO HOY nº 9, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, 2001, p. 30.

⁵² Alfredo Grimaldos, *La sombra de Franco en la Transición*, Oyeron, Madrid, 2004, p. 246. Este magnífico libro es una estremecedora y muy documentada crónica de aquellos años.

⁵³ *Público*, 5/9/10.

⁵⁴ *Ibid.*

JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

Han transcurrido setenta años desde que finalizó la guerra civil española y treinta y cinco desde la muerte del dictador. Un largo lapso de tiempo también desde que la lucha de millones de trabajadores y jóvenes, a lo largo y ancho de todo el Estado español, derribase una cruel dictadura que se prolongó por cuarenta años. Aquella noche en la que un país entero se sumergió, donde el miedo se filtró por todos los poros de la vida cotidiana, no duró para siempre, como algunos creían. Enterrados en lo más profundo de la conciencia colectiva, los deseos de libertad, de una vida digna y con derechos, resurgieron imparables.

Millones de personas sufrieron las consecuencias de la dictadura y millones también alentaron, en las condiciones más difíciles, el combate para tumbarla. Esas personas, a pesar de ser los auténticos protagonistas de la historia, apenas son nombrados en las crónicas políticamente correctas o recordados en las conmemoraciones públicas. La historia oficial siempre se escribe con renglones torcidos, respondiendo a los intereses de la clase dominante. Las penalidades, las humillaciones, la postración vividas por generaciones están escondidas en un archivo en algún lugar del que muchos quieren olvidarse para siempre. Nuestra tarea es hacerlo visible.

El discurso oficial habla de una Transición modélica, en la que políticos responsables de todo el arco ideológico cedieron en sus intereses particulares e inmediatos para traernos la democracia que hoy disfrutamos. Si aceptáramos este guión, sería imposible entender lo que realmente pasó. El final del franquismo no lo precipitaron las reuniones en los despachos oficiales ni la conversión democrática de parte de los prohombres del régimen franquista, como Adolfo Suárez, que había sido secretario general del Movimiento Nacional y vistió la camisa azul con el yugo y las flechas, o Fraga Iribarne. Ni la inexistente generosidad de un aparato militar y policial que no fue depurado en la etapa democrática. Tampoco fue la supuesta inteligencia de un monarca que supo aprovechar una oportunidad histórica, tal como nos han remachado insistentemente en estos años, la que acabó con el régimen que lo había nombrado sucesor de Franco en la jefatura del Estado. La realidad es bien distinta.

Durante años muy duros, en las condiciones más adversas, desafiando la clandestinidad, las prisiones, los golpes de la represión y el exilio, millones de hombres y mujeres se lanzaron a un combate desigual. Al principio eran minoría, y eso hace de su tenacidad un ejemplo aún más loable. Pero su conducta contagió a muchos, y a pesar del miedo, del terrible miedo, las huelgas, las manifestaciones, las ocupaciones de empresas, las luchas callejeras se transformaron en un paisaje habitual. La sangre obrera y de la juventud corrió generosamente por las calles de nuestras ciudades y pueblos en los años sesenta y setenta, como había corrido en las dos décadas precedentes. Pero las terribles heridas provocadas por la derrota en la guerra civil, en los tres años de lucha armada contra el fascismo y revolución social que concluyeron con la victoria de la contrarrevolución franquista en 1939, ya habían cicatrizado. La lucha de los trabajadores y de la juventud obrera y estudiantil fue la punta de lanza que acabó con el franquismo. Una lucha que paralelamente abrió una nueva perspectiva, la de la transformación de la sociedad.

A principios de la década de los 70, el capitalismo vivió una gran sacudida, muy similar a la que vive actualmente. Francia en 1968, Italia en 1969, Portugal en 1974, Grecia y, por supuesto, el Estado español... numerosos países sufrieron una brutal ruptura de su equilibrio interno y se sumergieron en crisis revolucionarias o prerrevolucionarias. Una nueva página en la historia se podría haber escrito, pero la falta de una dirección política a la altura de las

exigencias impidió coronar con éxito aquellos movimientos. La movilización revolucionaria de millones de trabajadores y jóvenes no acabó, finalmente, con el capitalismo, aunque sí tuvo serias consecuencias. La primera, barrer las dictaduras del sur de Europa y conquistar los derechos democráticos que habían sido eliminados décadas atrás.

Las páginas heroicas de la batalla contra la dictadura franquista han sido emborronadas por una crónica oficial diseñada al gusto de los poderosos. Y en esa estrategia del olvido, una infamia no menos importante se tramó con el consentimiento de muchos: la que pretendía esconder, anular, borrar la historia de cuarenta años de dolor. La memoria de las víctimas del franquismo y de todos aquellos que dieron lo mejor de sí mismos para acabar con aquella pesadilla tiene que ser recuperada, estudiada y transmitida. Es la memoria de nuestra clase, la clase trabajadora, que sufrió más que nadie aquel régimen despreciable.

Han transcurrido muchos años, y no pocos se las prometían felices creyendo que, tras tanto tiempo, la clase obrera y la juventud estaría dispuesta a olvidar el pasado y pasar página. Sin embargo, gracias al tesón y la voluntad de personas maravillosas, las exigencias para rescatar la memoria histórica no sólo no han remitido, sino que se han incrementado. El trabajo anónimo y desinteresado de mucha gente ha dado grandes frutos. Mientras que en 2003 tan sólo existían 20 asociaciones de la Memoria Histórica y organizaciones de víctimas del franquismo, en 2008 eran más de 200 y su número no ha dejado de crecer, tejiendo una red por todo el Estado para exigir justicia para crímenes que siguen impunes. Y no es sólo la exigencia individual de los familiares de las víctimas de la represión franquista, que tienen todo el derecho a una legítima justicia que nunca llegó. En numerosos casos lo que se reclama es tan elemental como poder recuperar los cuerpos de los familiares desaparecidos. El único censo nacional que existe de desaparecidos —el que las asociaciones de familiares llevaron al juez Garzón en octubre de 2008— tiene 133.708 nombres.⁵⁵ Recientemente, Amnistía Internacional señaló que son 114.000 las familias que siguen sin saber dónde están los restos de sus seres queridos.⁵⁶ Pero lo más humillante de esta situación, y que dice mucho de la naturaleza de nuestra transición *ejemplar*, es que para 2008 sólo se habían recuperado 4.054 restos mortales de 171 fosas comunes. ¿Alguien puede pensar que existe justicia para las víctimas del franquismo? Cuando tanto se habla de reparar el dolor, de reconciliación, cientos de miles de familias ven negado un derecho tan elemental como saber dónde están enterrados sus familiares fusilados, asesinados vilmente y arrojados a fosas comunes. Para sonrojo del Parlamento, de los jueces, de los gobiernos que se han sucedido desde 1977, el esfuerzo de las asociaciones y de los familiares, de investigadores y voluntarios ha permitido localizar solamente en Andalucía, Aragón, Asturias, Catalunya, Euskadi y Extremadura 1.850 fosas.⁵⁷

Para las familias, así como para las víctimas que aún están con vida, esta lucha no será en vano. Su esfuerzo no sólo restablecerá la dignidad que el franquismo trató de arrebatar a cientos de miles de luchadores, a los que quitó la vida mediante ejecuciones, torturas o vejaciones de todo tipo, también impedirá que el paso del tiempo, las mentiras y calumnias que se han vertido, reforzadas a partir de una interpretación maliciosa e interesada por parte de pseudohistoriadores a sueldo de la derecha, oculten el horror sufrido.

Recuperar nuestra memoria histórica es una demanda colectiva de justicia para la clase social que luchó contra el fascismo con todas sus fuerzas, ofreciendo un ejemplo de generosidad y valor sin parangón. Aunque los reaccionarios y algunos otros que se consideran progresistas,

⁵⁵ *Público*, 6/10/2008.

⁵⁶ *Público*, 30/08/2010.

⁵⁷ Las comunidades donde gobierna el PP no han destinado ni un euro a localizar fosas comunes, aunque durante el gobierno de Aznar sí se destinaron cuantiosas subvenciones para recuperar los cuerpos de los soldados de la División Azul fallecidos en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial.

no se sabe muy bien por qué, han tratado una y otra vez de ocultar la verdad bajo frases rimbombantes sobre una supuesta “guerra entre hermanos”, para millones está muy presente que la guerra civil, como la dictadura franquista, representó un enfrentamiento entre clases sociales, entre una mayoría de obreros y campesinos, frente a los terratenientes, la burguesía, la oligarquía financiera, la casta militar y la jerarquía católica, que no dudaron en llevar a cabo un baño de sangre para defender sus sacrosantos intereses y privilegios. Los que fueron asesinados, internados en campos de concentración, torturados y vejados, arrojados a las prisiones y el exilio por cientos de miles, y los que continuamos su batalla, queremos recuperar la memoria histórica, no sólo para conseguir una justicia y dignidad nunca reconocida, sino también para aprender las lecciones del pasado y reatar el nudo con las tradiciones de toda una generación de luchadores que se levantaron en defensa de la igualdad y por una sociedad mejor.

No es casualidad que la lucha por la memoria histórica se agudizara durante las movilizaciones masivas contra el gobierno derechista de Aznar entre 2001 y 2004 y en los años posteriores de gobierno socialista, cuando fue la derecha la que trató de tomar las calles. Cuando decenas de miles sufrían los porrazos de la policía del PP en las manifestaciones contra la intervención imperialista en Irak o cuando, pocos años después, contemplaban a los dirigentes de la derecha clamar por la “unidad de España” y a los obispos desfilar contra los homosexuales y “en defensa de la familia”, la conexión con el pasado se reavivó. La identificación de la derecha de hoy con la derecha de siempre, es decir, con los verdugos de la guerra civil y los cómplices del general Franco era un proceso necesario.

La derecha española se resiste obstinadamente a dar el más mínimo reconocimiento a la Memoria Histórica. Como han demostrado con el juicio a Garzón, la reacción luchará con uñas y dientes para evitar la revisión histórica de los crímenes del franquismo. En primer lugar, por un evidente odio de clase. Los herederos del franquismo, hoy brillantes hombres de negocio, militares, altos cargos del PP, obispos y jueces, siguen sintiéndose parte de un bando victorioso. Para ellos siempre habrá dos Españas. Se sienten orgullosos de su pasado, aunque en público no lo puedan poner de manifiesto como les gustaría. Pero, además, destapar lo que realmente sucedió durante la guerra civil y la dictadura cuestiona demasiados puntos sensibles del poder capitalista de hoy en día. Pondría en evidencia a las principales familias de la oligarquía económica, que se enriquecieron gracias a la dictadura, a las condiciones de trabajo impuestas a los trabajadores, a la completa ausencia de derechos laborales y sindicales, a la mano de obra esclava... Cuestionaría, en definitiva, a los oligarcas de toda la vida, que impulsaron y colaboraron fervientemente con el golpe militar y la represión y que, por supuesto, también se beneficiaron de la política seguida por el Caudillo. También comprometería y desnudaría a amplios sectores del aparato del Estado, infiltrado hasta el tuétano por individuos ligados estrechamente al pasado franquista, no sólo en el mando de la policía, la Guardia Civil o el Ejército, también en el aparato judicial (sólo hay que echar un vistazo al Tribunal Constitucional) y la administración. Sin olvidarnos, por supuesto, de la jerarquía eclesiástica, cómplice de cuarenta años de dictadura.⁵⁸

⁵⁸ “...En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos’. Esta declaración, que podría atribuirse al cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, es una de las joyas escritas por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, en la revista *Hermandad del Valle de los Caídos*, con la que colabora asiduamente. Éste es sólo un ejemplo de hasta qué punto el Poder Judicial está bajo el control de la derecha más reaccionaria y cómo se ha mantenido una continuidad en este estamento desde la época del franquismo. Otro ejemplo ilustrativo de esta realidad lo encontramos en José Luis Requero, antiguo miembro del CGPJ, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, asociación mayoritaria de jueces) y miembro del Opus Dei, que declaraba en el año 2006 en una entrevista que ‘entre el PP y la APM existe una conjunción de intereses’ y que ‘el PP llama a la puerta de la APM para que le demos ideas’. Este magistrado se ha opuesto a la ley del Matrimonio Homosexual porque podría abrir la puerta a ‘la unión de un hombre y un animal’ y milita activamente en contra del aborto. También

¿Cómo es posible que, en un Estado que se dice democrático, conocidos reaccionarios que ocupan altos cargos en las instituciones se jacten de sus vínculos con el franquismo, y en cambio se niegue justicia para sus víctimas? Para empezar, la propia ley lo permite. Cuando el juez Garzón trató de investigar los crímenes del franquismo no sólo se enfrentó a una muralla ideológica en el poder judicial, sino también a un armazón legal que fue en su día apoyado por los dirigentes de las principales fuerzas que luchaban contra la dictadura. Efectivamente, la ley de Amnistía de 1977, presentada como la garantía para sacar de la cárcel a miles de luchadores, se convirtió en realidad en una ley de punto final que otorgaba inmunidad a todos los criminales del régimen franquista. Por supuesto, esta ley preconstitucional no ha sido derogada.

La ley es muy clara al respecto: En su artículo primero amnistiaba *“todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”*. Es decir, a cambio de “perdonar” a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes cuarenta años de represión franquista, tal como sanciona su artículo segundo, al amnistiar, entre otros *“los delitos de rebelión y sedición (...) los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley”* o *“los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”*.

Nunca hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En la Alemania de la posguerra, con todas las carencias que existieron, se condenó a muchos responsables de las atrocidades nazis, y la simbología hitleriana fue eliminada por completo de plazas públicas e instituciones. En Argentina se revisó la ley de Punto Final y se han abierto procedimientos penales contra conocidos torturadores y responsables de la dictadura militar. Obviamente, las reparaciones en todos los casos mencionados han sido muy limitadas, pues los capitalistas que apoyaron estos regímenes represivos y crueles, que exterminaron a millones de personas, no podían consentir que se juzgase al conjunto de su sistema. Pero lo ocurrido en el Estado español ha sido asombroso.

Cuando el juez Baltasar Garzón decidió declararse competente en el caso de la localización y exhumación de una parte de los aproximadamente 150.000 asesinados en la represión que siguió al levantamiento fascista de 1936, se desató una ofensiva política y judicial tremenda para impedirlo. Lamentablemente, esta campaña organizada desde la derecha acabó logrando su objetivo con el beneplácito del fiscal general del Estado y de otros más. Desde el gobierno del PSOE se sostuvo que no era el momento de investigar delitos que habían sido amnistiados en 1977, y esa muestra de debilidad envalentonó a toda la reacción enquistada en el aparato del Estado. El Tribunal Supremo logró sentar en el banquillo al juez Garzón después de aceptar a trámite una querrela presentada por tres organizaciones fascistas: Falange Española, el “sindicato” Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Estos hechos escandalosos son la mejor prueba que, tras 32 años de “libertades democráticas”, siguen sin poder investigarse los crímenes del franquismo; hay decenas de miles de víctimas, no sólo las enterradas en fosas comunes, que son consideradas delincuentes a ojos de una ley que se niega a esclarecer como fueron asesinadas. Y todo esto

ha atacado a las nacionalidades históricas demostrando el predominio del españolismo franquista más rancio en el seno de la ‘justicia independiente’, llegando a declarar que ‘los vascos se caracterizan por partir troncos y piedras’, recordando dichas declaraciones a las que en 2003 pronunció el entonces presidente del Tribunal Constitucional, Jiménez de Parga, sobre vascos y catalanes que hace mil años ‘ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana...’. Víctor Taibo, “La derecha, la ‘independencia’ del poder judicial y el caso Garzón”, en *El Militante* nº 237, abril 2010.

ocurre mientras los nombres de los fascistas que practicaron esa política de exterminio siguen adornando calles, plazas, iglesias y monumentos.

La justicia en cualquier Estado capitalista es una justicia de clase. No existe la tan cacareada “independencia” del poder judicial, que no es más que una fachada que sirve para esconder la auténtica realidad: que el aparato judicial en general, y sus altas instancias muy en particular, tienen vínculos directos, económicos y políticos con los capitalistas de cada país y siempre ampara y defiende la legislación y la propiedad de la burguesía. En el caso concreto del Estado español, el aparato judicial también es un auténtico coto franquista, que se mantuvo intacto después de la caída de la dictadura por los pactos de la Transición.

Las reivindicaciones fundamentales de las víctimas no han sido satisfechas en la ley sobre la Memoria Histórica aprobada en 2007. De hecho, queda explícitamente restringida la participación de los poderes públicos en la exhumación de cadáveres, algo básico si se quiere realmente investigar los crímenes. En ese momento hubiera sido posible impulsar, desde el PSOE, IU, CCOO y UGT, un fuerte movimiento a favor de una ley justa, tal como reclamaban las asociaciones de la memoria histórica. Existía un sentir mayoritario entre la población, el mayor desde la Transición. Pero, en lugar de eso, los dirigentes de la izquierda volvieron a caer en el viejo error de “no provocar a la reacción”.

La debilidad invita a la agresión. La derecha, envalentonada, volvió a sacar toda su artillería y, lo más irónico, para evitar que se investiguen los crímenes del franquismo utilizó leyes apoyadas por los gobiernos socialistas. Estos últimos acontecimientos demuestran que es urgente y necesario rectificar el rumbo. Las movilizaciones de decenas de miles de personas que recorrieron Madrid y otras ciudades contra esta impunidad en abril de 2009 marcan el camino a seguir. Hay que aprender las lecciones del pasado, de la Transición y de estos últimos treinta años. Las direcciones sindicales y políticas de la izquierda deben pasar de las palabras a los hechos: hay que depurar el aparato del Estado de elementos franquistas que siguen disfrutando de su posición y privilegios de antaño. La fuerza para conseguirlo existe en el movimiento obrero y la juventud. Sólo de esta manera se podrá conceder una justa y completa reparación a los cientos de miles, hombres y mujeres, víctimas de la represión y la violencia fascistas.

* * * * *

Este primer volumen de *Revolución socialista y guerra civil (1931-1939)* pretende proporcionar una visión histórica de la gran lucha de clases que desembocó en los acontecimientos de 1931-1939. No es el trabajo de un historiador profesional, sino ante todo, de un militante comprometido con la causa del socialismo. Muchas veces se argumenta que la historia sólo puede ser escrita por los que hacen de ella una profesión, por no decir que la utilizan para dar una cobertura respetable a los tópicos y prejuicios de la sociedad en la que vivimos o, más crematísticamente, obtener directamente de ella buenos y jugosos ingresos. Es evidente que este libro se encuentra en las antípodas de semejantes enfoques. La historia es en primer lugar un combate por la verdad, y la verdad es siempre concreta. Depende del punto de vista de clase que se adopte. Por eso este libro sobre la revolución española es, ante todo, un intento de plasmar y defender la memoria de sus auténticos protagonistas, los que la hicieron real, los que la pelearon y murieron por ella.

La bibliografía sobre la revolución y la guerra civil es inabarcable. Ningún otro acontecimiento de la historia contemporánea, con la excepción quizá de la Segunda Guerra Mundial, ha producido una masa de literatura, trabajos científicos y ensayos tan abundante. Una gran cantidad de los mismos nunca ha traspasado el medio académico. Otros se han convertido en manuales *clásicos*, políticamente aceptables por la opinión pública dominante.

Especialmente en los últimos años, las estanterías de las librerías se han llenado también de un tipo de material, por decir algo, profusamente publicitado y que es el fruto de una estrategia cuidadosamente planificada desde la derecha. Libros reconocibles de los nuevos escribas de la reacción, algunos de ellos militantes de la extrema izquierda en sus tiempos mozos, que han servido de ariete para revisar y justificar los crímenes del franquismo. En realidad, no superan la categoría de folletines de propaganda falangista, y su rigor es parecido al de los programas del corazón que pueblan las televisiones a cualquier hora del día.

En ese universo de obras hay también algunas que destacan. Son aquellas que conceden la palabra a los que combatieron en primera línea por la transformación social, a los que lucharon en las trincheras contra el fascismo o, simplemente, basándose en una investigación concienzuda y rigurosa, retratan el conflicto entre las clases con veracidad. Una parte de estas, hay muchas más indudablemente, se han utilizado como referencias obligadas para sostener el análisis de las páginas que siguen.

Cuando era un joven estudiante de Historia en Madrid, por motivos académicos leí mucho sobre esa época apasionante. Pero luego descubrí que sólo había arañado la superficie; incluso ahora, años después, tengo la misma sensación. En mi experiencia he llegado a la conclusión de que se puede escribir mucho y ocultar lo esencial, se puede estudiar durante años y no entender nada. Muchos de los grandes textos sobre la revolución española no se recomiendan siquiera en las facultades donde se imparte la materia. Están proscritos, olvidados en un índice censurado por las “autoridades”. No es extraño, teniendo en cuenta que la cultura oficial no es más que un pálido reflejo de la putrefacción del capitalismo. Por eso me impresionó tanto leer un libro, quizás uno de los más documentados sobre este asunto, pero que no era lectura recomendada en las aulas de la facultad, al menos cuando yo era estudiante. Ese libro, titulado *La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución* y cuyo autor es Burnett Bolloten, contiene una cita de presentación que es toda una declaración de principios. Dice así: “Aunque el estallido de la guerra civil española de julio de 1936 fue seguido de una revolución social a gran escala en la zona antifranquista —en algunos aspectos, más profunda que la revolución bolchevique—, a millones de personas lúcidas fuera de España se les ocultó no sólo su profundidad y su magnitud, sino incluso su existencia, por medio de una política de duplicidad e hipocresía de la que no hay paralelo en la historia”. Coincido plenamente con la apreciación de Bolloten. Es más, la política de ocultación que denuncia ha pervivido durante mucho tiempo y sobrevive aún.

En este primer volumen se intenta una aproximación a las raíces históricas del conflicto revolucionario, explorar el hilo de continuidad entre las grandes batallas de los años treinta y las décadas precedentes que, sin duda, forjaron las tradiciones de la clase obrera y el campesinado del Estado español. Las luchas de clases son el eje central, no sólo las libradas aquí, también las que los trabajadores europeos llevaron a cabo simultáneamente y que tanta influencia tuvieron en los acontecimientos de nuestro país. A lo largo del trabajo hay una intención evidente de profundizar en los desarrollos ideológicos y teóricos del movimiento obrero, interpretando los hechos sometidos a análisis desde el punto de vista del materialismo histórico, esto es, del marxismo revolucionario.

Por último. En mi memoria se han quedado grabadas las interminables charlas que, de adolescente, tenía cotidianamente con dos personas a las que quiero mucho. Aquellas conversaciones me descubrieron la vida de privaciones, miseria y hambre —física y espiritual—, que padecieron, pero también su compromiso fiel, inquebrantable, con los trabajadores y su causa, a pesar de todos los sufrimientos. Pero sobre todo no podré nunca olvidarme de cuando era un niño y una de estas personas, cuando terminábamos de comer en los días de fiesta y pasábamos al postre, tenía una costumbre que me era completamente inexplicable. Tomando una naranja brillante, redonda, la pelaba con mimo, sacando la monda entera con delicadeza exasperante. Apartaba la naranja a un lado y, pacientemente, comía la

monda, la rascaba con los dientes hasta dejarla tan fina como un papelillo de fumar. No podía entender esa forma de comer una naranja. Con el tiempo supe que para muchos niños como mi padre, en los años de la posguerra franquista, una naranja no era una naranja, era su monda, y cuando la encontraban rebuscando en los desperdicios la comían con pasión. También comprendí el porqué de la mirada ausente, y en ocasiones encendida, de la otra persona a la que me refiero, que protestaba cuando nos eternizábamos en estas charlas. Su mirada también tenía explicación. Mi madre no conoció a su padre, Rafael, militante anarcosindicalista fusilado por el verdugo Franco y enterrado en algún lugar desconocido de la provincia de Valencia. A estas dos personas y a millones como ellas, que son la sal de la tierra y de la historia, dedico este libro.

I

CORONA, NOBLEZA Y BURGUESÍA

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, veladas unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna (...) La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido, las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.

El manifiesto comunista, Carlos Marx-Federico Engels

La revolución española dio voz a los sin voz. A los campesinos y jornaleros desheredados, obligados a trabajar de sol a sol, cercados por la ignorancia y sometidos a hambrunas crueles. A los obreros fabriles, nacidos del aluvión humano que huía de la miseria del campo, explotados y condenados a una vida miserable en los arrabales urbanos. Ellos forjaron su conciencia en una historia de duros enfrentamientos, de huelgas reprimidas, de ocupaciones de tierras vencidas por los disparos, de encarcelamientos, exilio y muerte. Esta escuela moldeó su tradición de lucha y el carácter de sus organizaciones, puliendo su concepción de la vida y su confianza en la victoria. La revolución socialista y la guerra civil de 1931-1939 se nutrieron de esta enconada lucha de clases que se extendió a lo largo de las décadas que las precedieron.

Sólo recurriendo a una amplia perspectiva es posible comprender las causas materiales y políticas de aquellos acontecimientos. Si utilizamos este método, no es difícil observar la persistencia de un claro hilo conductor, una línea de continuidad histórica entre los tres años de lucha armada contra el fascismo y revolución social, y las grandes conmociones políticas, las huelgas y los movimientos insurreccionales del último tercio del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX. En estas sacudidas —la revolución Gloriosa de 1868, la Primera República de 1873, la Semana Trágica de Barcelona de 1909, la huelga general revolucionaria de agosto de 1917 y la ofensiva jornalera y obrera del trienio bolchevique (1918-1920)—, es posible observar cómo emergen los protagonistas de una historia silenciada. Miles de hombres y mujeres, trabajadores anónimos del campo y la ciudad, que creyeron con pasión en una vida mejor y que se levantaron, una y otra vez, contra la opresión y la injusticia.

Esta historia enfrentó a los dos antagonistas señalados por Marx en *El manifiesto comunista*: opresores y oprimidos. Una clase dominante que a lo largo del proceso histórico de consolidación del capitalismo actuó como firme defensora de la propiedad y los buenos negocios, la familia, la Iglesia y la patria. Y frente a ella, generaciones de trabajadores y campesinos, convertidos en una masa miserable, materia prima para la explotación más atroz.

Como fenómeno político, económico y social, la guerra civil no es, ni mucho menos, el reflejo subjetivo de una locura colectiva. Para los historiadores oficiales —que nunca aceptan la lucha de clases como motor de la historia, pero siempre muestran la mejor disposición a sancionar académicamente las atrocidades de aquellos a quienes sirven—, la guerra civil, cualquier guerra civil, queda envuelta en un amasijo de lamentos farisaicos, moralina hipócrita, tópicos y fraseología incapaz de explicar satisfactoriamente tales acontecimientos.

La experiencia histórica ha confirmado que ninguna clase dominante está dispuesta a abandonar el poder sin una tenaz resistencia. Jamás ha cedido sus privilegios, por obscenos e insultantes que éstos sean, si no es obligada por una lucha decidida y dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias.

La guerra civil representa la forma más extrema de la lucha entre las clases. Aparece siempre acompañando las revoluciones sociales más profundas, cuando los mecanismos políticos, jurídicos e institucionales creados para amortiguar y neutralizar las contradicciones de la sociedad están agotados e inservibles. En esos momentos, el conflicto trasciende todos los límites, las líneas defensivas levantadas en un entramado estatal perfeccionado durante siglos, y se expresa, finalmente, mediante la fuerza y la acción directa. Los viejos y conservadores poderes de la sociedad se enfrentan a aquellas fuerzas que, en su seno, representan el progreso histórico. En el caso del Estado español, las tropas de la contrarrevolución vencieron, imponiendo una era de oscurantismo y terror. Pero la historia no siempre arroja resultados negativos.

Los momentos fundamentales que han transformado la vida de la humanidad y la han hecho progresar significaron la subversión del orden establecido. Acontecimientos que nacen de la necesidad objetiva por superar unas relaciones sociales de producción caducas que, como una camisa de fuerza, impiden el desarrollo de las fuerzas productivas, la técnica y la ciencia, y que, al final, deben concluir en el derrocamiento del orden político que las mantiene. Sí, es cierto que las grandes transformaciones siempre han ido acompañadas de violencia y guerra civil, pero nunca han sido el fin perseguido por las fuerzas revolucionarias; al contrario, ambas son el hijo legítimo de las clases que monopolizan el poder, la riqueza y la cultura, obstinadas en no ceder su posición.

Las interpretaciones burguesas de la historia ocultan cuidadosamente que la consolidación del capitalismo y la democracia parlamentaria estuvieron precedidas por revoluciones e insurrecciones en nada pacíficas. En su época heroica, cuando movilizaba al conjunto de la nación bajo la bandera de la razón y las divisas de “libertad, igualdad y fraternidad”, la burguesía revolucionaria se enfrentó con los ejércitos del viejo orden feudal, barriendo los privilegios señoriales y dando paso a un nuevo desarrollo.

Este fue el caso de la revolución burguesa en Holanda, cuyo parto fue el resultado de guerras prolongadas en las que los burgueses de las ciudades utilizaron el ideario de la Reforma para combatir a la monarquía absoluta y a la jerarquía católica. A este primer alumbramiento le siguió la revolución inglesa de 1640 y la lucha de Oliver Cromwell y su *New Model Army*, un ejército revolucionario de pequeños propietarios campesinos, artesanos y jornaleros que batió a la monarquía de los Estuardos y decapitó al rey Carlos I el 30 de enero de 1649. Lo mismo puede decirse de la gran revolución francesa de 1789-1793. En palabras de Piotr Kropotkin: “[La revolución francesa] se produjo en el momento en que la burguesía, después de haberse inspirado ampliamente en la filosofía de su tiempo, llegó a la conciencia de sus derechos, concibió un nuevo plan de organización política y, fuerte por su saber, ruda en su tarea, se sintió capaz de apoderarse del gobierno, arrancándolo de manos de una aristocracia palaciega que empujaba el reino a la ruina completa por su incapacidad, su liviandad y su disipación. Pero la burguesía y las clases instruidas nada habrían logrado por sí solas si la masa de los campesinos, a consecuencia de múltiples circunstancias, no se hubiera conmovido y, por una

serie de insurrecciones que duraron cuatro años, no hubiera dado a los descontentos de las clases medias la posibilidad de combatir al rey y a la corte, de derribar las viejas instituciones y de cambiar completamente el régimen político del reino”.⁵⁹

Nadie duda hoy de la contribución histórica de la revolución burguesa en Inglaterra y Francia. La burguesía logró liquidar las viejas relaciones sociales y políticas del feudalismo, acabó con la propiedad señorial de la tierra y con los privilegios de la aristocracia. Aquellas revoluciones establecieron las bases materiales para un crecimiento vigoroso del capitalismo, el desarrollo del comercio mundial, el florecimiento del parlamentarismo burgués y el avance extraordinario de la técnica y la cultura, pero también esbozaron las líneas en que se desenvolverían las revoluciones posteriores, en otro tipo de enfrentamiento social que emergería con fuerza un siglo más tarde.

Las realizaciones revolucionarias en Inglaterra o Francia no podrían haberse coronado sin la participación activa y decidida del pueblo, de sus sectores más bajos y oprimidos, que fueron los que llevaron la lucha hasta el final. Esos revolucionarios dispuestos y valerosos que en Inglaterra constituían la base combatiente de los *levellers* (“niveladores”) y más tarde de los *diggers* (“cavadores”), o los seguidores de Marat y los *enragés* (“rabiosos”) de la Francia insurrecta de 1793, anunciaban que la lucha no había terminado. “Es incuestionable —afirmó Marat— que sólo las clases inferiores de la sociedad han sido las instigadoras y mantenedoras de la revolución: los obreros, los artesanos, el pequeño comercio, los campesinos, la plebe toda, aquellos infortunados a quienes los desvergonzados ricachones llamaban *canaille* y la insolencia romana, proletarios. Pero nadie podía suponer que sería hecha únicamente a favor de los pequeños propietarios, de los abogados y de los practicantes del fraude”.

De las entrañas de aquella revolución, que consolidó la propiedad capitalista y el Estado burgués, sus leyes e instituciones, nació también una nueva clase llamada a protagonizar un nuevo combate, profundo y permanente, que se prolonga hasta nuestros días: la clase obrera asalariada. Esta clase entendió, a través de su experiencia histórica, que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se habían prostituido bajo el imperio del máximo beneficio capitalista. A lo largo de cien años, los nuevos esclavos asalariados comprendieron lo que el revolucionario Jacques Roux, el clérigo comunista de la Revolución Francesa, señaló a los *sans-culottes*: “La libertad no es más que un fantasma inofensivo mientras existan hombres que puedan matar impunemente de hambre a otros. La libertad es un fantasma inofensivo cuando, a través de un monopolio, el rico logra ejercer el derecho a la vida y muerte sobre sus semejantes”.⁶⁰

* * * * *

Las causas profundas de la revolución española no pueden explicarse sin la forma peculiar en que el régimen burgués se consolidó en el Estado español. Sólo así es posible entender el carácter extremadamente agudo de la lucha de clases en los años treinta del siglo XX, y sus precedentes en la historia del siglo anterior. Esta forma singular determinó que, en las ocasiones y cuestiones decisivas, el grueso de la burguesía española manifestara una gran interdependencia con el viejo régimen nobiliario y la monarquía absoluta, a la que sostuvo

⁵⁹ Piotr Kropotkin, *La revolución francesa*, Ediciones B, Barcelona, 2005, p. 21.

⁶⁰ Citas de Marat y Jacques Roux, en James Joll, *Los anarquistas*, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1978, pp. 37-38. Los *sans-culottes* eran las masas populares (trabajadores, artesanos, tenderos...) que fueron la base social y los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789. El apelativo, que se traduce por “sin culottes” y era inicialmente despectivo, hace referencia a que vestían pantalones largos, en vez de las calzas cortas (*culottes*) propias de la burguesía.

hasta su último aliento. Su nervio revolucionario fue débil y vacilante, nunca llegó hasta el final en sus tareas históricas, pues, en la mayoría de las oportunidades que se le presentaron para coronarlas con éxito, siempre alcanzó nuevos acuerdos, nuevas concesiones a la corona, la nobleza y los terratenientes, hasta conformar con ellos una tupida alianza, un bloque social de poder.

DECADENCIA HISTÓRICA

La unificación de los reinos de Aragón y Castilla en el siglo XV y el establecimiento de un poderoso imperio colonial otorgaron a la monarquía española una preponderancia indiscutible en las relaciones internacionales. Pero, paralelamente, esto supuso un formidable obstáculo para el desarrollo de una producción capitalista moderna. El peculiar desarrollo del capitalismo en la península Ibérica desde el siglo XV marcó la impronta de la burguesía como clase. También es importante reseñar que, en los ocho siglos de combates entre los feudales cristianos y árabes, la Iglesia católica se alzó con un lugar preeminente, una posición que mantendría con mano de hierro ininterrumpidamente en los siglos posteriores.

Con el saqueo masivo de América, además de cubrir sobradamente las aventuras militares de la monarquía, se reforzó el parasitismo suntuario de las clases del antiguo régimen: la corte, la nobleza, la Iglesia y la burocracia feudal. El flujo de oro y plata, productos agrícolas y materias primas desde el nuevo continente, y el exterminio de millones de nativos que lo acompañó, lejos de animar el desarrollo de una potente industria manufacturera, retardaron la puesta al día de la base productiva del conjunto del país y empobrecieron el mercado interno. Careciendo de suficiente base económica, la Corona y sus aliados contrajeron una dependencia creciente de los capitales europeos, que financiaron generosamente el déficit de la monarquía. Del expolio del continente americano y de la explotación del campesinado español se obtenían los recursos que saciaban los intereses usurarios de los banqueros europeos.

La monarquía española salió derrotada en la lucha por la hegemonía económica y militar del mundo. Acosada por la potencia de naciones capitalistas emergentes como Holanda y Gran Bretaña, libró una resistencia infructuosa por mantener su vasto imperio colonial. Las miserables condiciones del atraso económico español, agudizadas por la pérdida de los territorios europeos que había controlado en los siglos XVII y XVIII, generalizaron la penuria en todo el país. En aquel período de decadencia, la crisis financiera provocada por el insostenible peso de las deudas afectó a todos los sectores productivos y extendió la ruina no sólo a los campesinos, sino también a los estratos inferiores de la nobleza.

El fruto de este proceso fue la consolidación de una reducida clase de nuevos propietarios ricos, que pronto forjó una alianza con la alta nobleza. La explotación agraria se vio perjudicada por la introducción de la ganadería a una escala desconocida hasta entonces, lo que proporcionó mayores ingresos a los propietarios. Como consecuencia de ello, la masa de población agrícola sufrió iguales perjuicios que las clases urbanas, ya que la caída en la productividad de la tierra dio lugar a enormes dificultades para asegurar la alimentación y el abastecimiento de la población más humilde.

A lo largo del siglo XVII, miles de campesinos y jornaleros españoles arrojados a la miseria no pudieron ser absorbidos por la industria, convirtiéndose así en seres marginales y vagabundos. En Inglaterra, el expolio del campesinado tuvo consecuencias dramáticas durante un período de tiempo, pero la industria manufacturera experimentó un auge

significativo apoyándose en la abundante materia prima suministrada por el ganado lanar, mientras la producción textil, localizada en las ciudades, fue integrando el excedente humano del campo; de esta manera, la producción manufacturera impulsó un potente mercado interno. La industria textil española no registró un crecimiento similar.

El carácter rentista de los grandes propietarios y los nobles tuvo como efecto conferirles una notable falta de audacia a la hora de modernizar la estructura económica del país, lo que fue la norma en los siglos posteriores. Acostumbrados a una vida de lujo y privilegios feudales, estos parásitos sociales desdeñaron la creación de una base productiva capaz de asimilar la materia prima y los hombres que el campo proporcionaba, agravando aún más la situación de la economía urbana. Las lanas de la poderosa Mesta se desviaron hacia los telares de Inglaterra, Flandes y Lyon, y, al amparo de la ruina de los labriegos, la tierra se fue concentrando en manos de la nobleza y los propietarios ricos. Son estos hechos, entre otros, los que explican el atraso de la economía española en el momento en que otros países comenzaban su tránsito al capitalismo. Esa economía atrasada y dependiente fortaleció las corrientes disgregadoras y localistas, impidiendo el desarrollo de un mercado único en el conjunto del país.

LA UNIDAD NACIONAL

Las tendencias centrífugas de las nacionalidades y regiones, sofocadas temporalmente tras la conquista militar, lejos de desaparecer, se consolidaron. Sobre esta cuestión se interrogaba Marx: “Pero, ¿cómo podemos explicar el singular fenómeno de que, pasados casi tres siglos de dinastía de los Habsburgo, seguida por una dinastía borbónica —cualquiera de ellas harto suficiente para aplastar a un pueblo—, las libertades municipales de España sobrevivan en mayor o menor grado? ¿Cómo podemos explicar que precisamente en el país donde la monarquía absoluta se desarrolló en su forma más acusada, antes que en todos los demás estados feudales, jamás haya conseguido arraigar la centralización? La respuesta no es difícil. Fue en el siglo XVI cuando se formaron las grandes monarquías, que se erigieron en todas partes sobre la base de la decadencia de las clases feudales en conflicto: la aristocracia y las ciudades. Pero en los otros grandes estados de Europa la monarquía absoluta se presenta como un centro civilizador, como la iniciadora de la unidad social. Allí era la monarquía absoluta el laboratorio en que se mezclaban y amasaban los varios elementos de la sociedad, hasta permitir a las ciudades trocar la independencia local y la soberanía medieval por el dominio general de las clases medias y la común preponderancia de la sociedad civil. En España, por el contrario, mientras la aristocracia se hundió en la decadencia sin perder sus privilegios más nocivos, las ciudades perdieron su poder medieval sin ganar en importancia moderna”.⁶¹

Muchos historiadores han intentado explicar este cuadro peculiar de retraso y decadencia recurriendo a todo tipo de razones subjetivas e incluso psicológicas. Sin embargo, sus argumentos resultan completamente insatisfactorios para entender las bases materiales y las causas esenciales del fenómeno. Hay que volver la vista al materialismo histórico para analizar estos hechos, tan bien descritos por la novela picaresca de la época. La obra de Carlos Marx sintetiza este desarrollo singular de España: “Desde el establecimiento de la monarquía absoluta, las ciudades han vegetado en un estado de continua decadencia. (...) A medida que declinaba la vida comercial e industrial de las ciudades, se hacían más raros los

⁶¹ Carlos Marx y Federico Engels, *La España Revolucionaria*, en *La revolución en España*, Ed. Progreso, Moscú, 1978, p. 11.

intercambios internos y menos frecuentes las relaciones entre los habitantes de las distintas provincias, los medios de comunicación se fueron descuidando, y los caminos reales quedaron gradualmente abandonados. Así, la vida local de España, la independencia de sus provincias y de sus municipios, la diversidad de su vida social, basada originalmente en la configuración física del país y desarrollada históricamente en función de las diferentes formas en que las diversas provincias se emanciparon de la dominación mora y crearon pequeñas comunidades independientes, se afianzaron y acentuaron finalmente a causa de la revolución económica que secó las fuentes de la actividad nacional. Y como la monarquía absoluta encontró en España elementos que por su misma naturaleza repugnaban a la centralización, hizo todo lo que pudo para impedir el crecimiento de intereses comunes derivados de la división nacional del trabajo y de la multiplicidad de los intercambios internos, única base sobre la que puede crearse un sistema uniforme de administración y de aplicación de leyes generales. Así pues, la monarquía absoluta en España, que sólo superficialmente se parece a las monarquías absolutas europeas en general, debe ser clasificada más bien junto a las formas asiáticas de gobierno. España, como Turquía, siguió siendo una aglomeración de repúblicas mal administradas con un soberano nominal a su cabeza”.⁶²

La unificación del Estado español constituyó un largo, traumático e incompleto proceso salpicado por todo tipo de contradicciones. La “nación española” no es fruto de un acto revolucionario. Aunque, en la actualidad, la derecha trate patéticamente de buscar un pasado “nacional” en la Reconquista o la unificación dinástica de las coronas aragonesa y castellana, la historia fue mucho más complicada, jalonada por guerras constantes, alianzas, rupturas y tensiones políticas permanentes entre los diferentes territorios. Lo más significativo es que este proceso de “unidad” tuvo una plasmación constitucional extraordinariamente lenta, que se prolongó durante siglos, en la cual los derechos e instituciones nacionales y regionales se fueron limitando y, en la mayoría de los casos, aboliendo mediante la conquista militar. Este tránsito hacia la “unidad” experimentó varios momentos decisivos: la supresión del derecho propio y las libertades locales de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares en los siglos XVII y XVIII; el trazado de las provincias actuales en 1833 y, finalmente, la supresión de los fueros vasco y navarro en 1839 y 1841 respectivamente.

Así pues, la “unidad” de España no fue, ni de lejos, el resultado de un escenario de acuerdo y consenso, como los apologistas del nacionalismo español proclaman. Esa “unidad” se forjó en violentas disputas, guerras dinásticas y enfrentamientos civiles que se prolongaron hasta finales del siglo XIX. El problema nacional no fue resuelto satisfactoriamente y surgió con fuerza en el período de pleno desarrollo del capitalismo. Por este motivo, la historia contemporánea del Estado español está recorrida por constantes tensiones entre la burguesía de las nacionalidades históricas, especialmente la catalana y la vasca, y el sector de la clase dominante que monopolizó el poder político fruto de ese proceso de centralización. Y esta pugna, que por supuesto en ningún caso supuso un obstáculo para la unidad entre las burguesías periféricas y la centralista en su batalla contra el campesinado pobre y el proletariado, se recrudeció en cada momento de crisis política y económica.

En el Estado español, la transición del feudalismo al capitalismo registró considerables diferencias respecto a otros países de Europa occidental. O, dicho de una manera más precisa, las viejas relaciones feudales, especialmente en el campo, y su reflejo en la superestructura política sobrevivieron durante mucho más tiempo. El Estado español nunca vivió una revolución burguesa similar a la de Holanda, Inglaterra o Francia, por lo que el carácter del desarrollo capitalista español fue mucho más semejante al de otros países atrasados, como Rusia: “La comparación, establecida más de una vez, del zarismo con el despotismo asiático

⁶² Marx y Engels, *Ibid.*, p. 12.

—escribió León Trotsky— parece mucho más natural, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el histórico. Pero, por lo que respecta a España, esta comparación conserva también toda su fuerza. La diferencia consiste únicamente en que el zarismo surgió sobre la base del *desarrollo extraordinariamente lento*, tanto de la nobleza como de los centros urbanos primitivos, mientras que la monarquía española se formó en las condiciones creadas por la *decadencia* del país y la *putrefacción* de las clases dominantes. Si el absolutismo europeo pudo desarrollarse gracias a la lucha de las ciudades, cada vez más sólidas, contra las viejas castas privilegiadas, la monarquía española, lo mismo que el zarismo ruso, hallaba su fuerza relativa en la impotencia de las viejas castas y de las ciudades”.⁶³

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

A principios del siglo XIX, España era un país agrícola dominado por la gran propiedad terrateniente. Con cerca de 37 millones de hectáreas de terreno, no más de 8 millones y medio estaban dedicadas al cultivo, mientras 12 millones se usaban para pastos. La nobleza concentraba la propiedad: 1.323 familias de rancio abolengo poseían casi 17 millones de hectáreas. Junto a esta aristocracia terrateniente, la Iglesia acaparaba cerca de millón y medio de hectáreas. Subsistían en el campo español plenas relaciones de vasallaje y, en determinadas circunstancias, los nobles podían nombrar a corregidores, alcaldes mayores y otros funcionarios municipales. A su vez, el poder de la Iglesia era tremendo: contaba con más de 85.000 curas, a los que se añadían 8.651 miembros de la Inquisición y 92.727 frailes y monjas, es decir, un miembro del ejército eclesiástico por cada 50 habitantes, la ratio más elevada de Europa después de Portugal, lo que da idea de la porción de la renta nacional que esta casta privilegiada consumía. La nobleza y la Iglesia representaban una parte decisiva de la clase dominante.⁶⁴

En este contexto, la guerra de la Independencia vino a trastocar las relaciones políticas del país, modificando la correlación de fuerzas sociales. La guerra contra el ejército napoleónico iniciada en 1808 no ha dejado de ser presentada en numerosas ocasiones de una manera desequilibrada, cuando no distorsionada. Durante algún tiempo, fue un lugar común considerarla como una revuelta de las fuerzas sociales más atrasadas y reaccionarias, subordinadas al fanatismo religioso católico, cuando en realidad el conflicto bélico puso sobre la mesa cuestiones mucho más complejas, empezando por la puesta al día del nervio revolucionario del pueblo y de sus capas más humildes.

Al inicio del levantamiento contra la ocupación francesa, España atravesaba una profunda crisis: “La metrópoli del mayor imperio del mundo estaba prácticamente en bancarrota. Durante los doce últimos años, la España de Godoy se había ido endeudando progresivamente a causa de la guerra (...) A causa de las guerras, el inicio de una revolución industrial basada en la fabricación textil en Cataluña sufrió la pérdida de su mercado más importante, el nuevo mundo español. Los grandes comerciantes en los principales puertos experimentaron un notable descenso en el comercio colonial. Una espiral inflacionista de los precios agrarios redujo el escaso poder adquisitivo de las clases populares (...) y creció el

⁶³ León Trotsky, “La revolución española y las tareas de los comunistas”, en *La revolución española (1930-1939)*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, pp. 90-91.

⁶⁴ Manuel Tuñón de Lara, *La España del siglo XIX*, Ed. LAIA Barcelona, 1976, pp. 19-21.

desempleo, especialmente, en las industrias textiles. La sequía y la peste se añadieron a la miseria y angustia generales”.⁶⁵

En tales circunstancias, la furia del pueblo llano estalló en el motín de Aranjuez del 17 de marzo de 1808, precipitando la destitución de Godoy. Cuando, inmediatamente después de este hecho, Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando VII para encontrar una salida a la situación, la crisis política se precipitó: la debilidad política del régimen recrudeció las ansias hegemónicas del imperio napoleónico, al tiempo que la nobleza española y una corona corrupta hasta la médula volvieron a mostrar su tradicional venalidad.

El poder napoleónico, presente en la península Ibérica desde la entrada de 28.000 soldados franceses en el otoño de 1807⁶⁶, no reconoció los derechos del príncipe, infructuosamente reclamados al emperador francés en abril de 1808. Finalmente, Napoleón exigió la devolución de la corona a Carlos IV, abriendo con su decisión las compuertas a una crisis militar y política que se había ido labrando en los años anteriores.

La revuelta popular del 2 de mayo de 1808, que marcó el inicio de la guerra de la Independencia contra el ocupante francés, tuvo efectos políticos inmediatos. Napoleón hizo traspasar a su persona todos los derechos de Carlos IV, y el 4 de junio de 1808 redondeó su estrategia con la proclamación de su hermano José como rey de España. “El 7 de junio de 1808 —escribió Marx— el rey José recibió en Bayona a una diputación de los Grandes de España, en nombre de los cuales el duque del Infantado, que era el amigo más íntimo de Fernando VII, se dirigió a él en los siguientes términos: ‘Señor, los grandes de España fueron siempre conocidos por su lealtad hacia sus soberanos, y V. M. hallará en ellos la misma fidelidad y afición’. El Consejo Real de Castilla aseguró al pobre José que éste era ‘el retoño eminente de una familia destinada por el cielo mismo a reinar’. No menos abyecta fue la enhorabuena del duque del Parque, al frente de una diputación del ejército. Al día siguiente, las mismas personas publicaban una proclama ordenando la sumisión general a la dinastía de los Bonaparte. El 7 de julio de 1808, la nueva Constitución era firmada por 91 españoles de la máxima distinción: entre ellos figuraban duques, condes y marqueses, así como varios superiores de órdenes religiosas. Durante las discusiones de esta constitución, lo único que juzgaron digno de ser objetado fue la abolición de sus antiguos privilegios y exenciones. Integraban el primer ministerio y la primera casa real de José las mismas personas que habían constituido el ministerio y la casa real de Fernando VII. En las clases privilegiadas, unos consideraban a Napoleón el regenerador providencial de España; para otros era el único baluarte posible contra la revolución; pero nadie creía en las posibilidades de una resistencia nacional”.⁶⁷

Esa era la verdad. La clase dominante española capituló ante Napoleón sin resistencia. El mantenimiento de sus privilegios y poder requería de una fina estrategia de colaboración política con los ejércitos invasores y su administración. La “nación española” bien valía el sacrificio de su conquista, si así se aseguraba la continuidad del poder aristocrático, terrateniente y nobiliario. A pesar de esta sumisión vergonzosa, la semilla de la rebelión germinó.

EL TURNO DEL PUEBLO

⁶⁵ Ronald Fraser, *La maldita guerra de España*, Ed. Crítica, Barcelona, 2006, p. 10.

⁶⁶ El 18 de octubre de 1807, tropas francesas entraron en España con la excusa de cruzar la península para atacar Portugal, país que se había negado a cerrarle sus puertos a Gran Bretaña, a la que Napoleón le había declarado el bloqueo económico.

⁶⁷ Marx y Engels, *op. cit.*, pp. 15-16.

La traición del viejo poder nobiliario dejó vía libre a una resistencia popular que tomó su impulso revolucionario de los sectores más explotados y oprimidos, con el campesinado desposeído jugando un papel de primer orden por derecho propio. “El país ardió en las cuatro direcciones; millares de grupos guerrilleros surgieron por doquier, como nacidos de la tierra (...) El 2 de mayo no produjo sólo una insurrección contra las tropas de Murat; destruyó los viejos poderes y dio la señal para la constitución de otros nuevos. Al tomar la iniciativa, las Juntas provinciales eran una fuerza revolucionaria a pesar de sus miserias, sus contradicciones y sus querellas. No tenían otro apoyo que el pueblo en armas (...) Es preciso tergiversar la historia (...) para no ver en esa lucha magnífica otra cosa que fanatismo religioso y aversión a los principios de la libertad”.⁶⁸

Es un hecho incuestionable que, desde el comienzo, la movilización contra el invasor adquirió un carácter netamente popular. El lunes 2 de mayo, el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses, pero fue derrotado tras un intenso combate. La traición de las autoridades locales y la superioridad de las fuerzas francesas decantaron ese primer choque. Las represalias sufridas por el pueblo madrileño a manos de Murat fueron terribles, pero la señal de Madrid se extendió con rapidez.

La rebelión tuvo consecuencias en todos los planos. Para empezar, en los primeros meses creó sus propios órganos políticos y militares ante la ausencia de un poder centralizado que pudiera satisfacer las necesidades del levantamiento popular. Fue así como surgieron las *juntas*, organismos de lucha y de organización alternativa al poder institucional del momento, que, en diferente grado y con distinto contenido en lo que se refiere a sus fines, se hicieron recurrentes en todas y cada una de las revueltas e insurrecciones de envergadura a lo largo del siglo XIX.

Toda la geografía se llenó de estas juntas, en las que confluían sectores sociales muy diversos. En Asturias, la junta se conformó como gobierno provincial después de que la multitud se apoderase de 100.000 fusiles en el depósito de armas de Oviedo. Acontecimientos similares se produjeron en Galicia, donde el pueblo se armó con 40.000 fusiles arrebatados en el depósito de A Coruña. El 27 de mayo, el alzamiento popular se extendió a Sevilla, mientras en Cádiz las manifestaciones que precedieron a la formación de la junta eran masivas. El fenómeno se reprodujo en Santander, Valladolid, Ávila, Salamanca, Badajoz, Murcia, Zaragoza... En palabras de Tuñón de Lara: “En realidad, en mayo de 1808 el Estado de la monarquía borbónica había quedado deshecho y el poder, en la plaza pública”.⁶⁹

A pesar de la pasión y el fervor popular para el combate, durante los primeros meses los ejércitos franceses lograron una serie de victorias rápidas, lo cual permitió a José I asegurar temporalmente su posición. Paralelamente, y con el fin de ensanchar su base de apoyo, el rey francés adoptó toda una serie de medidas políticas que trataban de contener el empuje de la resistencia popular y granjearse la simpatía de un sector de la burguesía liberal y del pueblo llano: suprimió los consejos tradicionales y la grandeza de España, y disolvió las órdenes mendicantes y monacales.

Un nuevo triunfo militar en Ocaña le despejó a los franceses la ruta hacia Andalucía. Con Sevilla y Málaga tomadas y Cádiz amenazado por las tropas napoleónicas, los mandos burgueses de la Junta Central cedieron el poder a una regencia, convocando una reunión de las Cortes, que abrirían su sesión en septiembre de 1810. Podría vislumbrarse que la guerra iba a allanar el camino a una revolución burguesa clásica, en un ajuste de cuentas definitivo

⁶⁸ Grandizo Munis, *Jalones de derrota, promesa de victoria*, Ed. ZYX, Madrid, 1977, p. 28.

⁶⁹ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 27.

con el antiguo régimen, pero pronto se vería que el modelo español se encaminaba hacia derroteros muy distintos.

JUNTAS, CORTES Y REVOLUCIÓN BURGUESA

A comienzos de 1810, el territorio peninsular estaba prácticamente ocupado en su totalidad, excepto Lisboa, algunas regiones gallegas, Cádiz y la España insular. En ese momento, la lucha de guerrillas adquirió una importancia creciente, por su hostigamiento constante al ejército francés y la desorganización de su sistema de comunicaciones y transportes.

La fuerza militar del levantamiento popular le creaba grandes dificultades al ejército invasor, pero a su vez provocaba otros efectos, como señala Tuñón de Lara: “El desarrollo militar de la guerra de la Independencia ofrece algunos rasgos esenciales: 1) La incapacidad y desorganización del viejo ejército de oficio para hacer frente de invasión; 2) La participación en masa del pueblo español en la lucha utilizando formas genuinas de combate y formando sus propios jefes militares; 3) La imposibilidad de mantener definitivamente la invasión al tropezar el ejército napoleónico con la resistencia popular; 4) Las dificultades crecientes de Napoleón al pretender ocupar militarmente una diversidad de países. Las características militares de esa guerra influyeron decisivamente en la formación del ejército español del siglo XIX, lo que explica su división política y que, hasta la restauración de 1874, no todos sus miembros estuvieran al servicio de las fuerzas sociales que detentan el poder del Estado. Fernando Garrido ha expresado este fenómeno en su *España Contemporánea*: ‘el pueblo, al tomar las armas, nombró sus generales para llevarlos a combate aboliendo así, de hecho, el privilegio de mandar tropas reservado hasta entonces a los nobles. Mina, el campesino; Manso, el molinero; Jáuregui, el pastor; el Empecinado, mozo de mulas, y tantos otros, salidos de la clase más ínfima, ocupaban al final de la guerra de la Independencia los primeros puestos en el ejército, cuyos oficiales, en su mayoría, eran también del pueblo. Las reacciones absolutistas de 1814 y de 1823 no pensaron nunca en destruir esta reforma radical; tan imposible les parecía hacerlo”.⁷⁰

Pasados los primeros meses de la guerra y la experiencia que supuso la formación de las juntas revolucionarias, el bloque de poder tradicional (corona, nobleza y clero), auxiliado por sectores temerosos de la burguesía, intentó retomar el control de la situación y asegurarse la iniciativa política y militar. Desde diferentes ángulos, pero con este mismo objetivo, maniobraron el Consejo de Castilla, la mayoría de la Junta Central y la Regencia. Su éxito se vio beneficiado por la debilidad del proletariado urbano, disperso e incipiente, por la ausencia de un proyecto político acabado entre los sectores más combativos del campesinado y por la inconsistencia de la propia burguesía. En palabras de Marx: “Hay dos circunstancias en relación con estas juntas, una de las cuales es una muestra del bajo nivel del pueblo en la época de su alzamiento, mientras que la otra iba en detrimento del progreso de la revolución. Las juntas fueron elegidas sobre la base del sufragio universal; pero ‘el celo de las clases bajas se manifestó en la obediencia’. Generalmente elegían sólo a sus superiores naturales: nobles y personas de calidad de la provincia, respaldados por el clero, y rara vez a personalidades salientes de la burguesía. El pueblo tenía tal conciencia de su debilidad, que limitaba su iniciativa a obligar a las clases altas a la resistencia frente al invasor, sin pretender participar en la dirección de esta resistencia (...) Así, las juntas se vieron llenas de gentes que habían sido elegidas teniendo en cuenta la posición ocupada antes por ellas y que distaban

⁷⁰ Tuñón de Lara, *op. cit.*, pp. 31-32.

mucho de ser unos jefes revolucionarios. Por otra parte, el pueblo, al designar estas autoridades, no pensó en limitar sus atribuciones ni en fijar término a su gestión. Naturalmente, las juntas sólo se preocuparon de ampliar las unas y de perpetuar la otra. Y así, estas primeras creaciones del impulso popular, surgidas en los comienzos mismos de la revolución, siguieron siendo durante todo su curso otros tantos diques de contención frente a la corriente revolucionaria cuando ésta amenazaba desbordarse”.⁷¹

A medida que las juntas pasaban a ser controladas directamente por las fuerzas conservadoras, su carácter se fue moderando drásticamente, hasta desdibujarse el alcance de sus objetivos revolucionarios. “¿Qué influencia ejerció la Junta en el desarrollo del movimiento revolucionario español? ¿Qué influencia ejerció en la defensa del país? Una vez contestadas estas dos preguntas, hallarán explicación muchos aspectos de las revoluciones españolas del siglo XIX que hasta ahora aparecían misteriosos e inexplicables. Desde el comienzo, la mayoría de la Junta Central consideró como su primordial deber sofocar los primeros arrebatos revolucionarios. Por esto amordazó de nuevo a la prensa y designó a un nuevo inquisidor general, al que, por fortuna, los franceses impidieron entrar en funciones. A pesar de que gran parte de las tierras españolas eran bienes de ‘manos muertas’ —en forma de mayorazgos y dominios inalienables de la Iglesia—, la Junta ordenó suspender la venta de estas propiedades, que había dado ya comienzo, amenazando incluso con anular los contratos privados tocantes a los bienes eclesiásticos que ya habían sido vendidos. La Junta reconoció la deuda nacional, pero no adoptó ninguna medida financiera para aliviar al presupuesto del cúmulo de cargas con que lo había agobiado una secular sucesión de gobiernos corrompidos, ni hizo nada para reformar su sistema tributario proverbialmente injusto, absurdo y oneroso, ni para abrir a la nación nuevas fuentes de trabajo productivo, rompiendo los grilletes del feudalismo”.⁷²

Lo cierto es que Napoleón había sido incapaz de comprender la voluntad de resistencia de las masas populares. Para empeorar las cosas, la cosecha de 1811 fue tan desastrosa que el hambre se extendió por toda la península, atizando el descontento popular contra el invasor. En aquel momento era obvio que la moral de los soldados de José I ya no tenía nada en común con la de los ejércitos franceses en el período de ascenso revolucionario de 1789-93; se había ido quebrando al enfrentarse a un pueblo en armas.

En unas circunstancias de aislamiento y derrotas militares importantes, aunque no decisivas, el ánimo para una resistencia victoriosa se nutrió de las apariencias de radicalización política que supuso la convocatoria de las Cortes de Cádiz y la redacción de una nueva constitución. El aliento de una perspectiva revolucionaria, al menos en palabras, que retomaba los principios doctrinales de la gran revolución francesa le dio confianza al pueblo. Un amplio sector de las masas campesinas que sostuvieron la lucha veía el esfuerzo para ganar la guerra como la antesala de profundos cambios en sus miserables condiciones de existencia. La idea de una constitución que pudiera liquidar los privilegios feudales reforzó claramente la voluntad de combate. Todos los sacrificios y penurias, las muertes y asesinatos, eran descontados por las masas del resultado final.

Con la aprobación de la Constitución por las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812, la resistencia armada contra los franceses empezó a cosechar los primeros éxitos importantes: el 22 de julio, el ejército napoleónico fue derrotado en Arapiles y forzado a emprender una huida precipitada hacia Madrid. A partir de ese momento, su declive fue imparable. En el plazo de un año, las tropas españolas, aliadas con las inglesas, vencieron en cuantas batallas libraron. Finalmente, en agosto de 1813 todo el territorio peninsular quedó libre de tropas francesas.

⁷¹ Marx y Engels, *op. cit.*, pp. 19-20.

⁷² Marx y Engels, *op. cit.*, pp. 20-25.

UNA REVOLUCIÓN FRUSTRADA

A pesar de las intenciones y las declaraciones de los políticos más radicales de la burguesía liberal, la obra “revolucionaria” de las Cortes de Cádiz no tuvo ni el alcance ni la profundidad de las realizaciones que la burguesía francesa llevó a cabo entre 1789 y 1793. “Cuando acudimos a los textos legales —señala Josep Fontana— descubrimos una realización mucho más modesta: una abolición del régimen señorial que dejaba en pie el diezmo y favorecía a los señores, que pudieron convertir sus derechos feudales en títulos de propiedad plena de la tierra, despojando a los campesinos; una libertad de imprenta que no tocaba a la esfera de lo religioso y que hacía posible que cualquier autor fuera a parar a la cárcel, una vez sometida su obra a los tribunales de censura; una Constitución que confirmaba que el catolicismo había de ser la única y exclusiva religión de los españoles ‘perpetuamente’; una pretendida abolición de la Inquisición que permitía que subsistiesen tribunales eclesiásticos ante los que se podía denunciar a cualquier ciudadano por herejía”.⁷³

La burguesía liberal española no aprovechó el éxito militar para destruir de una forma definitiva el entramado de relaciones feudales. Los signos de su escasa vitalidad revolucionaria y su carácter conservador se hicieron más evidentes. Al aceptar la disolución de las Cortes de Cádiz, en septiembre de 1813, sin ir más allá, dejaron la iniciativa a las fuerzas reaccionarias y absolutistas, que no querían saber nada de veleidades constitucionales ni de libertades públicas. La burguesía, contradiciendo las opiniones más progresistas de la intelectualidad ilustrada, prefirió la compañía de la aristocracia y la burocracia feudal, antes que apoyarse en las masas campesinas. Éstas, marginadas nuevamente del poder económico y político, cargaron sobre sus espaldas los incrementos de arrendamientos y tributos sancionados por la legislación “liberal” aprobada en Cádiz. La renuncia de la burguesía a ajustar definitivamente las cuentas con el antiguo régimen se transformó en su contrario: pavimentó el camino para la reacción absolutista, que tuvo su culminación en el golpe de Estado de Fernando VII en mayo de 1814.

La burguesía española abdicó de las tareas de la revolución democrática burguesa; para imponerlas, tendría que haber combatido frontalmente el poder de las viejas clases nobiliarias. A diferencia de la Francia revolucionaria, donde el ala burguesa más radical, apoyándose en las masas populares, derrocó por la violencia el viejo orden, unificó la nación e impuso una reforma agraria que acabó con la propiedad feudal de la tierra, y proclamó los derechos ciudadanos y la separación de la Iglesia y el Estado, sus homólogos españoles, en el turno histórico que le correspondía, prefirieron compartir el poder con las clases del antiguo régimen. Es cierto que el *termidor*⁷⁴ francés concluyó en una restauración monárquica y que muchas de las fórmulas políticas reaccionarias volvieron a activarse de la mano de la burguesía, pero las relaciones sociales de producción capitalistas se afianzaron y no hubo ninguna marcha atrás en este aspecto.

De 1814 a 1820, la reacción absolutista española volvió a poner las cosas en su lugar: reforzó el poder de las viejas clases nobiliarias, pero no resolvió ninguno de los acuciantes problemas que afligían a la mayoría de la población. Bajo la monarquía absoluta de Fernando VII se

⁷³ Josep Fontana, *La crisis del antiguo régimen 1808-1833*, Ed. Crítica, Barcelona, 1983, p. 16.

⁷⁴ Término para describir un período de reacción política sin una contrarrevolución social. Hace referencia al mes de termidor (julio en el calendario revolucionario francés) de 1794, cuando un golpe reaccionario derrocó a los jacobinos, cuyo dirigente era Robespierre, pero mantuvo las conquistas fundamentales de la Revolución Francesa de 1789.

deportó y encarceló a un buen número de políticos liberales, se sustituyeron los ministerios por secretarías dependientes directamente del rey y del Consejo Real de Castilla, se decretó el cierre de las universidades y de numerosos periódicos, y se otorgó a la Iglesia, como era tradicional, la vigilancia sobre el orden político y la moral.

Pero, a pesar de todo, las bases materiales del régimen absolutista no eran estables. El declive económico tras la independencia de las colonias americanas y la pérdida del monopolio de sus mercados afectó a todos los sectores productivos. Desde la burguesía industrial catalana, que exportaba allí sus tejidos, hasta amplios sectores de pequeños y medianos productores agrarios que vendían en América su producción de vino, aguardiente, aceite o harina, pasando por los artesanos que proveían de bienes de consumo a los productores del campo, el conjunto de la economía del país fue golpeada. El descontento social generado por la depresión económica se extendió del campo a la ciudad, incluyendo a los estratos más bajos de la burguesía y del ejército. Finalmente, la movilización popular y dos pronunciamientos militares en enero de 1820 obligaron a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, una maniobra necesaria para mantener el poder en manos de los de siempre.

El período 1820-23, conocido históricamente como el *trienio constitucional*, ratificó todas las limitaciones de la revolución liberal española. En palabras de Josep Fontana: “Los hombres del trienio manifestaron la misma ilusión reformista que hemos visto en Cádiz: el mismo deseo de conciliarse a las clases dominantes del viejo sistema y el mismo miedo a una revolución social como la francesa (...) La imagen global que nos dan estos tres años es la de una revolución frustrada. La hicieron gentes que deseaban transformar el sistema desde arriba, convenciendo a las clases dominantes de las ventajas que, a medio plazo, iba a ofrecerles el programa de las reformas constitucionales, mientras que el pueblo era mantenido al margen de la vida política. El cálculo resultó equivocado porque los privilegiados no se dejaron convencer y no depusieron su hostilidad al régimen, mientras que la tímida forma en que se conducían los gobernantes liberales les impidió ganarse el apoyo de los oprimidos del viejo sistema. Este fracaso fue especialmente grave en lo que se refiere a los campesinos, para quienes la política del constitucionalismo pareció reducirse a un aumento de los impuestos en dinero, que habían de resultar tremendamente gravosos”.⁷⁵

Las medidas adoptadas en la Constitución de 1812 y las tibias reformas que se sucedieron no lograron sus objetivos. La particularidad de este proceso estriba en la naturaleza de la burguesía española, que pronto adquirió los rasgos de una clase reaccionaria, mucho más interesada en salvaguardar las relaciones de propiedad existentes, de las que brotaban sus ingresos y su poder, que en librar una lucha consecuente y revolucionaria contra el antiguo régimen.

ALIANZA ESTRATÉGICA

La invasión, el 7 de abril de 1823, de los “Cien mil hijos de San Luis”, enviados por la Santa Alianza para restablecer la corona absoluta de Fernando VII, acabó con el trienio liberal. El monarca, que nunca olvidó los sinsabores pasados, suprimió rápidamente todos los decretos gubernamentales posteriores a 1820. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles, y las contradicciones de una sociedad profundamente desigual e injusta terminarían manifestándose con gran virulencia.

⁷⁵ Josep Fontana, *op. cit.*, pp. 31 y 39.

La inestabilidad del régimen hizo asomar grietas en la propia clase dominante, que cristalizaron en la aparición de una fracción ultraconservadora inspirada por el infante Carlos, un hermano del rey, contraria a cualquier intento de apertura. Apoyándose en la reacción eclesiástica, los carlistas, que se consideraban así mismos “realistas puros”, movilizaron una heterogénea base integrada por elementos reaccionarios del antiguo régimen y campesinos que no habían ganado nada con las reformas del trienio liberal. Desde 1827, cuando hizo público su manifiesto al pueblo español demandando la sustitución de Fernando VII por Don Carlos, el carlismo protagonizaría sucesivos levantamientos armados hasta la proclamación de la Primera República, en 1873.

En ese momento crucial, el sector de la oligarquía aristocrática en el poder con más perspectiva y conciencia de sus intereses comprendió que la movilización de las masas campesinas por los carlistas era potencialmente más peligrosa que las propias fuerzas liberales a las que había combatido. “Los terratenientes feudales hubieron de admitir que el viejo orden no podía ser restaurado y, antes que dejar que los campesinos acabasen de liquidarlo por su cuenta, prefirieron pactar con la burguesía para la mutua defensa de sus propiedades, renunciando a unos derechos incobrables que supieron transformar en títulos de propiedad burguesa de la tierra (...) Así se pudo pactar un tránsito pacífico y pactado de la sociedad feudal al nuevo orden burgués. Desgastada la monarquía absoluta, que había sido la expresión política de los intereses de la propiedad feudal, se la sustituyó por una monarquía con sufragio censatario —esto es, donde sólo votaban los que tenían un mínimo de medios de fortuna—, que era la forma más adecuada de defensa de los intereses de la nueva propiedad: de los intereses de los viejos propietarios feudales metamorfoseados en terratenientes burgueses, más de los comerciantes, industriales y rentistas. O, como diría acertadamente el marqués de Miraflores, de las ‘clases propietarias’. La revolución burguesa vino a salvar, así, la riqueza de la vieja oligarquía y a confirmar el despojo de los campesinos”.⁷⁶

Los anteriores renglones inciden acertadamente en el fondo del asunto. La burguesía española confirmó la riqueza de la vieja oligarquía y la miseria del campesinado, condenando a la mayoría de los pequeños propietarios, arrendatarios y a la masa de jornaleros sin tierra a una existencia infame. Burguesía y aristocracia feudal concluyeron una alianza estratégica y, con el paso de los años, esta oligarquía se transformó en un pilar decisivo del nuevo poder capitalista. Si su posición como gran terrateniente estaba fuera de discusión y quedó consolidada con este pacto, la aristocracia adquirió un protagonismo fundamental en las filas de la burguesía industrial y del capital bancario. Por su parte, la burguesía se ennoblecó, adquirió títulos aristocráticos y se convirtió también en propietaria terrateniente. En la práctica, los intereses de la burguesía española y de la vieja aristocracia terrateniente se combinaron de tal grado, que las rentas del suelo servían para financiar operaciones comerciales o bancarias, y viceversa, las plusvalías obtenidas de la actividad comercial e industrial, invertidas también en la compra de tierra gracias a la desamortización, reforzaron a la nueva clase de terratenientes burgueses, grandes propietarios de origen no aristocrático.

Esta es la base material y política que explica por qué la nueva clase dominante surgida de este proceso no quería saber nada de la revolución democrática burguesa. Las reformas políticas y económicas características de esta revolución, específicamente la reforma agraria y la consolidación de la pequeña propiedad campesina, tan anhelada por un sector de la intelectualidad, les eran ajenas y, como la historia demostraría, contrarias a sus intereses de clase.

En general, los intentos de modernizar la base económica de la sociedad española, es decir, de acometer reformas legislativas que favorecieran la industrialización, la aplicación de técnicas agrícolas avanzadas y la creación de un sólido mercado interno, se frustraron

⁷⁶ Josep Fontana, *op. cit.*, p. 48.

mayoritariamente o se arrastraron a través de fases de desarrollo lento y contradictorio. Entre 1835 y 1837 se produjo un impulso reformista con la desamortización de tierras eclesiásticas. El 29 de agosto de 1837, Mendizábal declaró de propiedad nacional los bienes raíces, rentas, derechos, y acciones de comunidades e institutos religiosos, la abolición de la Mesta y el fin de los privilegios de los gremios, para “garantizar la libertad de la industria y la concurrencia libre de capitales”. Pero los efectos de esta desamortización sólo reforzaron la propiedad burguesa y terrateniente de la tierra, ya que quedó limitada, en palabras de Vicens Vives, “a ser una transferencia de bienes de la Iglesia a las clases económicas fuertes (grandes propietarios, aristócratas, y burgueses), de la que el Estado sacó el menor provecho y los labradores, gran daño.”⁷⁷ En vastos territorios, especialmente en Extremadura, amplias zonas de las dos Castillas y Andalucía, no surgió, ni por asomo, la pequeña propiedad campesina sobre la que supuestamente se asentaría la modernización del país. Lo que quedó fue la gran propiedad latifundista aún más crecida y consolidada.

Las medidas adoptadas contra la Iglesia pronto fueron anuladas. En 1851, el Estado español firmó un concordato con el Vaticano por el que se reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir propiedades, devolviéndole los bienes aún no enajenados y, lo más importante, garantizando el sostenimiento material del culto y el clero. De esta manera, la Iglesia recuperó parte de sus posesiones materiales con el beneplácito de la burguesía, favor que la primera nunca olvidaría: en los años venideros, le prestaría servicios impagables.

CAPITALISMO ATRASADO: DESARROLLO DESIGUAL Y COMBINADO

La destrucción del régimen señorial y la desamortización crearon una clase de terratenientes burgueses rentistas que vivían lejos de sus propiedades. La mayoría de estos nuevos propietarios cedieron la explotación de sus tierras en grandes y pequeños arriendos, con contratos a muy corto plazo, de tal manera que la tendencia al alza de los precios agrarios y la abundancia de mano de obra determinaron que la inversión en agricultura fuera prácticamente nula. El problema de la tierra no hizo más que agigantarse, hasta convertirse en la piedra de toque de la revolución española.

Frente a un modelo de desarrollo en el que la inversión de capital y el impulso de la producción industrial eran el medio de competir con éxito en el mercado mundial y facilitar la productividad de la explotación agraria, la clase dominante española optó por conservar un capitalismo agrario atrasado y expropiador de la masa campesina. La consecuencia inevitable

⁷⁷ Enrique Llopis señala también: “La solución final que se adoptó en el conflictivo tema de los señoríos resultó bastante favorable para la nobleza. La ley de agosto de 1837 obligaba a los señores a presentar los títulos cuando se estuvieran dirimiendo sus derechos de propiedad territorial en lugares en los que hubiesen ejercido jurisdicción; ahora bien, esta norma facultaba a los señores a legalizar sus derechos probatorios en juicios instructivos en los que los pueblos no podían intervenir y en los que se otorgó validez a los fallos de los tribunales del antiguo Régimen. Ello, junto a la corrupción de los funcionarios de la justicia y a la comunión de intereses, al menos en bastantes regiones, entre la nobleza y la nueva burguesía profesional, hizo posible que remotos y dudosos derechos señoriales sobre la tierra se transformasen en derechos de plena propiedad privada sobre la misma”. (Enrique Llopis, *La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal (1790-1840)*, en *La historia económica de España*, Ed. Crítica, Barcelona, 2002 p. 181). También Nadal señala una ida semejante: “¿Cambiaron las cosas en la segunda mitad del siglo XIX, después de las reformas liberales de Mendizábal y de Madoz? Ya hemos visto que los beneficiarios de ellas fueron, en parte, los que debieron haber sido sus víctimas, lo que implica que, de hecho, salió fortalecido el sistema tradicional, tan nefasto. Pero aún hubo más (...) La gran oferta de tierras en condiciones de pago muy ventajosa desvió hacia la propiedad unos recursos financieros que, de otro modo, hubieran podido dedicarse a la industria”. Jordi Nadal, *El fracaso de la revolución industrial en España (1814-1913)*, Ed. Ariel, Barcelona, 1982, p. 83.

fue el bloqueo a las técnicas agrícolas modernas ya introducidas y desarrolladas en los países capitalistas más avanzados. La existencia de una mano de obra jornalera abundante con salarios miserables aseguraba a los grandes propietarios beneficios sustanciosos sin necesidad de modernizar la estructura productiva. Paralelamente, la amplia clase de pequeños propietarios, encadenados a préstamos usureros, hacía más profundo y extenso este fenómeno.

El carácter rentista que tempranamente adoptó la burguesía española se reforzó gracias a otro factor crucial: las necesidades de financiación de la Corona y del Estado que, después de la independencia de las colonias americanas, aumentaron considerablemente. Los gastos superaban con mucho los ingresos, agrandando un enorme boquete financiero que se intentó taponar a través de la emisión de deuda pública, cuyos títulos remuneraban los capitales a un alto interés, a la vez que actuaban en detrimento de la inversión productiva. Las plusvalías acumuladas por la actividad comercial, tras la pérdida de los mercados coloniales, se orientaron mayoritariamente a la compra de deuda y a la adquisición de tierra, acentuando así la propiedad terrateniente y el carácter especulativo y parasitario del capitalismo español.

En palabras del historiador Jordi Nadal: “El recurso al crédito se convierte en una constante de la política española; a ella se supeditan las restantes necesidades del país. Acuciado por sus apreturas dinerarias, el Estado no vacila, en efecto, en hacer la competencia a los empresarios del propio país mediante una política de remuneraciones generosas a los caudales aportados voluntariamente a sus arcas. El elevado interés de los préstamos oficiales sanciona la extrema carestía de toda clase de dinero. El daño infligido de esta forma a la economía es tremendo. El mercado de capitales, ya muy restringido de por sí, pierde su función específica —el impulso de las fuerzas productivas—, para desviarse hacia las inversiones puramente especulativas”⁷⁸.

Es un error considerar al Estado español del siglo XIX como un órgano desvinculado de la burguesía, porque evidentemente no es el caso. El carácter parasitario de la burguesía, que la descripción del profesor Nadal señala acertadamente, forma parte inseparable de las señas de identidad de la clase empresarial española.

La consecuencia de este proceso no fue otra que un mercado interior limitado y pobre, donde el poder adquisitivo de las masas campesinas era muy escaso. La debilidad del sector primario presionó decididamente al sector manufacturero, bloqueando y dificultando la aparición de una potente industria de bienes de consumo. Así, la base económica para la unificación del Estado nacional, es decir, un mercado interno vigoroso que permitiese minar las particularidades regionales y locales, se mantuvo en condiciones precarias a lo largo del siglo XIX.⁷⁹

Con una burguesía eminentemente rentista, el capitalismo español se hizo muy dependiente del capital extranjero, fundamentalmente inglés y francés, que invirtió grandes sumas en la

⁷⁸ Jordi Nadal, *op. cit.*, p. 28.

⁷⁹ “Dada la estructura productiva de España a mediados del siglo XIX, la magnitud del ahorro interno estaba determinada, en gran parte, por la acumulación de capital generada en el sector primario, y dentro de éste, en la agricultura cerealista dominante. Sin embargo, esa acumulación no se tradujo, como ya hemos visto, en inversión en esas actividades. Tampoco la clase terrateniente mostró una propensión significativa a invertir en otros sectores. Todo indica que entre los grandes propietarios españoles del interior subsistió la tradición —heredada del antiguo Régimen— de gastar las rentas agrarias en consumo suntuario y servicio doméstico. Esto beneficiaba al sector de la construcción y a las artesanías de lujo, pero, evidentemente, restaba capitales a otros sectores productivos (...) La debilidad del ahorro interno se compensó, en parte, con la entrada de capital extranjero. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los inversores internacionales sólo apreciaban tres tipos de activos: la deuda pública, los ferrocarriles y la explotación de recursos mineros”. Pere Pascual y Carles Sudrià, *El difícil arranque de la industrialización (1840-1880)*, en *La historia económica de España*, pp. 220-221.

deuda pública y monopolizó sectores enteros, como la minería del cobre, plomo y hierro, el ferrocarril, etc. Entre 1851 y 1880, Gran Bretaña controlaba el 20% de todo el capital invertido en el Estado español. La burguesía española no tuvo mayor inconveniente en facilitar la importación de maquinaria británica para la construcción del ferrocarril, impidiendo así que las industrias siderúrgicas asturiana y vasca proveyesen las manufacturas y bienes de equipo necesarios, limitando, por tanto, su desarrollo a gran escala. En esencia, se el capital foráneo llevó a cabo una explotación prolongada de las materias primas fundamentales para el desarrollo industrial del capitalismo español, sin que los beneficios de dicha explotación repercutiesen positivamente en la industria local a la escala posible y necesaria.

La dependencia del capital exterior constituyó, por tanto, otro de los rasgos distintivos del capitalismo español y tuvo consecuencias políticas obvias: lo último que les interesaba a los capitalistas británicos o franceses era propiciar un movimiento de masas que pudiera trastocar tal estado de cosas. Para las potencias imperialistas “democráticas”, apuntalar política y económicamente a la oligarquía española se convirtió en una necesidad para la buena marcha de sus negocios.

El desarrollo de la industria, lento y penoso, logró sus avances más inmediatos en el sector textil, inducidos por factores externos, como la escasez de algodón provocada por la guerra civil americana, e internos, como la necesidad imperiosa de reducir los precios debido a la debilidad del mercado. Fueron estos aspectos los que animaron las escasas transformaciones tecnológicas y el incremento de la productividad entre 1859 y 1866, cuando la industria textil recibió cerca del 40% del capital invertido en sociedades industriales por acciones. En todo caso, la industrialización siempre estuvo contenida por una estructura productiva muy atrasada y un goteo insuficiente de grandes inversiones de capital.

Considerado en términos generales, hasta mediados del siglo XIX las áreas de mayor dinamismo económico se localizaron en la agricultura de exportación (vitícola y frutícola) de la costa mediterránea y en los núcleos industriales de Andalucía (siderurgia) y Barcelona (textil), mientras los bancos más importantes se localizaban en Madrid, Bilbao, Santander, Valladolid, Sevilla, Jerez, Málaga y Cádiz.⁸⁰ Pero, en cualquier caso, el atraso y el peso de la agricultura en la economía española en el último cuarto del siglo XIX era realmente abrumador.⁸¹ El producto por habitante equivalía a menos de la mitad del británico y era un 25% inferior a los de Francia y Alemania. Tan sólo un 22,5 % de la población española residía en municipios de más de 5.000 habitantes y únicamente un 30% podía considerarse alfabetizada.

Un capitalismo débil, basado en un desarrollo desigual y combinado, fue el resultado final. En esta peculiar formación, que mantenía similitudes llamativas con el desarrollo del capitalismo ruso, la huella del pasado feudal se transmitió a través de la propiedad terrateniente de la tierra y de una superestructura política dominada por la alianza de la aristocracia y la burguesía, que además de consumir una parte muy considerable de la

⁸⁰ Juan J. Trías, *Federalismo y revolución burguesa*, Seminarios y Ediciones SA, Madrid, 1975, p. 37.

⁸¹ En el cuadro siguiente se puede observar el predominio del sector agrícola en la economía española.

1887	sector primario (65,3%)	sector secundario (17,3%)	sector terciario (17,4%)
1900	“ (66,3%)	“ (16,0%)	“ (17,7%)
1910	“ (66,0%)	“ (15,9%)	“ (18,2%)

“El débil crecimiento de la población y, por tanto, del número de consumidores no permitió un aumento del consumo semejante al de la mayoría de los países europeos, con una demografía más expansiva. Los bajos niveles de la renta per cápita, y la modestia de su incremento en términos reales, tampoco contribuyeron a elevar sustancialmente las cantidades de bienes y servicios demandados”. Jordi Maluquer de Motes, *Crisis y recuperación económica en la Restauración (1882-1913)*, en *La historia económica de España*, p. 260.

plusvalía nacional se negaba a aceptar reformas políticas sustanciales. No obstante, a pesar de todas las distorsiones y combinaciones específicas y particulares, el régimen de la servidumbre había sido liquidado legalmente y las relaciones de producción capitalista empezaban a dominar claramente.

Al considerar el tardío desarrollo del capitalismo en Rusia y otras naciones atrasadas, lo cual es oportuno revisar para comprender mejor la forma en que se configuró el modo de producción capitalista en el Estado español, Trotsky realizó las siguientes observaciones: “Los países atrasados asimilan las conquistas materiales e ideológicas de las naciones avanzadas. Pero esto no significa que sigan a estas últimas servilmente, reproduciendo todas las etapas de su pasado (...) Obligado a seguir a los países avanzados, el país atrasado no se ajusta en su desarrollo a la concatenación de las etapas sucesivas. El privilegio de los países históricamente rezagados —que lo es realmente— está en poder assimilar las cosas o, mejor dicho, en obligarse a assimilarlas antes del plazo previsto, saltando por alto toda una serie de etapas intermedias (...) El desarrollo de una nación históricamente atrasada hace, forzosamente, que se confundan en ella, de una manera característica, las distintas fases del proceso histórico. Aquí el ciclo presenta, enfocado en su totalidad, un carácter irregular, complejo, combinado. Claro está que la posibilidad de pasar por alto las fases intermedias no es nunca absoluta; se halla siempre condicionada en última instancia por la capacidad de asimilación económica y cultural del país. Además, los países atrasados rebajan siempre el valor de las conquistas tomadas del extranjero al assimilarlas a su cultura más primitiva. De este modo, el proceso de asimilación cobra un carácter contradictorio (...) Las leyes de la historia no tienen nada en común con el esquematismo pedantesco.

“El desarrollo desigual, que es la ley más general del proceso histórico, no se nos revela, en parte alguna, con la evidencia y la complejidad con que la patentiza el destino de los países atrasados. Azotados por el látigo de las necesidades materiales, los países atrasados se ven obligados a avanzar a saltos. De esta ley universal del desarrollo desigual de la cultura se deriva otra que, a falta de nombre más adecuado, calificaremos de ley del *desarrollo combinado*, aludiendo a la aproximación de las distintas etapas del camino y a la confusión de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas y modernas. Sin acudir a esta ley, enfocada, naturalmente, en la integridad de su contenido material, sería imposible comprender la historia de Rusia ni la de ningún otro país de avance cultural rezagado, cualquiera que sea su grado”.⁸²

SE PREPARA LA TORMENTA

Los anhelos de algunos políticos liberales por modernizar el país y encarrilarlo por la senda de las naciones industriales más avanzadas chocaron siempre con los intereses fundamentales del sector decisivo de la burguesía, de la aristocracia terrateniente y, por supuesto, de la corona. En términos generales, los proyectos reformistas de la intelectualidad liberal, en 1812, 1820, 1843, 1854, 1868 y 1873, y los constantes pronunciamientos militares que sacudieron el siglo XIX mostraron sus límites para llevar a cabo transformaciones de calado. Por temor a la acción independiente de las masas y por los estrechos lazos que la ligaban a nobles y terratenientes, la burguesía, incluyendo sus sectores más avanzados y liberales, acabó una y otra vez en brazos de la reacción. En lugar del derrocamiento revolucionario del

⁸² León Trotsky, *Historia de la revolución rusa*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2007, p. 27.

antiguo régimen, la historia no registra más que abortos y capitulaciones vergonzosas, acuerdos y transacciones.

La burguesía española mantuvo siempre una inclinación servil hacia la institución estatal que mejor resumía su carácter reaccionario: la monarquía. Aunque siempre fue tradición de la casa, a lo largo del siglo XIX la dinastía borbónica dio sobradas pruebas de una gran crueldad. Los desmanes autoritarios de Fernando VII tuvieron una lamentable prolongación durante el reinado de Isabel II, quien no dudó en utilizar el puño de hierro para arremeter contra los movimientos independentistas de ultramar, los motines e insurrecciones campesinas, las huelgas obreras o la agitación estudiantil. La represión dura y constante desde la cúspide del régimen se convirtió en norma, pero, a pesar de ello, los sucesivos gobiernos monárquicos no pudieron acabar con el profundo malestar que recorría la sociedad. Las grandes penurias económicas, las crisis de abastecimiento, la escasa productividad agraria y la falta de un mercado interno vigoroso que animara la actividad económica general alentaron un descontento e inquietud crecientes en los campesinos, así como en la incipiente clase obrera, la pequeña burguesía y, cómo no, en el ejército, convertido por derecho propio en un eje decisivo de la vida política española.

La base económica del capitalismo español continuó siendo muy débil, si bien en términos relativos la explotación minera, la industria textil, la siderurgia, el sistema de transportes (red de carreteras, ferrocarriles y cabotaje) y el sector financiero avanzaron progresivamente durante la segunda mitad del siglo XIX. En general, la actividad fue impulsada básicamente por los capitales extranjeros, que siguieron sosteniendo una parte importante de los grandes desembolsos de capital fijo y de la financiación de la deuda pública. Aunque el proceso de industrialización no fue para nada homogéneo, sí mantuvo un pulso constante en Cataluña y creció en Vizcaya.

Este desarrollo capitalista desigual preparó nuevas contradicciones, que, de modo más o menos abierto y más o menos constante, afectaron a la burguesía periférica de Cataluña y el País Vasco, por una parte, y a la oligarquía terrateniente, los grandes exportadores de cereal y sectores del capital financiero, por la otra. Contradicciones que tendrían su correlato en la pugna por el poder político monopolizado por el gobierno central. Sin embargo, pretender ver en estos choques divergencias estratégicas o la aparición de una burguesía progresista interesada en llevar a cabo las tareas fundamentales de la revolución democrática burguesa es un sinsentido que la misma lucha de clases se encargó de desmentir. Todas esas diferencias se diluían de inmediato cada vez que las relaciones de propiedad y los privilegios materiales y políticos del conjunto de la clase dominante se vieron amenazados por el movimiento obrero y el campesino desposeído.

En el ecuador del siglo XIX, el Estado español continuaba manteniendo su fisonomía de país eminentemente agrario: de una población activa aproximada de 4.800.000 personas, más de 3.200.000 se ocupaba en el campo. Los datos del censo de 1855 también indican que la fuerza laboral de la industria no superaba los 270.000 trabajadores, concentrados en ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Bilbao.

En este contexto, una débil clase obrera empezaba a estirar sus músculos, aunque todavía sin poder ejercer en los acontecimientos políticos una influencia semejante a la de la pequeña burguesía. Es la prehistoria del movimiento sindical, con la aparición en Catalunya de las primeras sociedades obreras.

En 1848, los efectos de la revolución en Europa, y específicamente en Francia, se dejaron sentir en pequeños alzamientos en localidades como Madrid, Vicálvaro o Barcelona, dirigidos por elementos avanzados de la pequeña burguesía. La lucha de clases se expresó, a su vez, en un ascenso de la agitación laboral, pero el movimiento obrero organizado todavía era extremadamente débil, mediatizado por el lento desarrollo industrial.

En el plano ideológico, las incipientes organizaciones obreras estaban influidas por las ideas del socialismo utópico, cuyos propagandistas estaban ligados, en su inmensa mayoría, a los sectores radicales de la pequeña burguesía implicados en el movimiento republicano. En general, hasta el sexenio revolucionario (1868-1874), las precarias organizaciones obreras del siglo XIX actuaron como muletas de la intelectualidad liberal y de la pequeña burguesía en las grandes sacudidas políticas, sin formular ningún programa de clase independiente y con un contenido acabado. Así ocurrió con las primeras huelgas espontáneas, en 1820, ayudando al triunfo de Riego y del liberalismo constitucionalista, participando en las barricadas durante el alzamiento progresista de 1854, o en los numerosos motines y pronunciamientos de ese siglo.

Las manifestaciones de este incipiente movimiento obrero se hicieron visibles a partir del verano de 1835 en forma de incendios y ataques de carácter *ludista* contra algunos establecimientos fabriles.⁸³ En 1840 apareció en Barcelona lo que podría considerarse como el primer sindicato obrero español: la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón; al año siguiente, ya existían en la ciudad sociedades obreras entre los blanqueadores, tintoreros, pintores, impresores, zapateros, carpinteros, carreteros, etc.

Coincidiendo con el pronunciamiento militar de julio de 1854, que cedió el turno de poder a los llamados “progresistas”, el movimiento obrero vivió un nuevo impulso. Las sociedades obreras se extendieron a nuevos sectores y localidades, aunque Barcelona, la ciudad industrial más importante del Estado, siguió concentrando la inmensa mayoría de las mismas. Entre finales de ese año y principios de 1855, algunas sociedades obreras catalanas entablaron negociaciones con los patronos y se llegaron a firmar los primeros contratos colectivos, pero sólo fue un espejismo de primera hora. El régimen, en consonancia con la mayoría de los fabricantes, respondió a las demandas de mejoras salariales y laborales con la disolución de las sociedades, la apropiación de sus fondos y los despidos masivos. La burguesía textil de Barcelona y los mandos militares que actuaban a sus órdenes provocaron la primera huelga general propiamente dicha en la historia de Barcelona y del Estado español: fue el 2 de julio de 1855.⁸⁴

A partir de 1857, el campo andaluz también se convirtió en un escenario importante de la lucha de clases. En el verano de ese año, una sublevación campesina estalló en la provincia de Sevilla; cuatro años más tarde, los movimientos campesinos se extendieron a Málaga, Granada y Córdoba. Con la exigencia del reparto de tierras como bandera, la agitación jornalera levantó un ejército de 600 campesinos que conquistó las localidades de Iznájar y Loja.

La crisis de la industria algodonera catalana que siguió a la guerra de Secesión estadounidense supuso el despido de miles de trabajadores y recortes en los salarios de quienes permanecieron en activo, pero no impidió que el asociacionismo obrero continuara desarrollándose. En 1862 se fundó el Ateneo Catalán de la Clase Obrera, donde en años posteriores los partidarios de la Primera Internacional jugarían un papel de dirección destacado. En Barcelona aparecieron periódicos como *El Obrero* (1864), de tendencia demócrata-cooperativista, y *La Asociación* (1866). Como culminación de ese período inicial de organización, en diciembre de 1865 se celebró en Barcelona un congreso que agrupó a cooperativas y sociedades de ayuda mutua y de resistencia, fundamentalmente de la ciudad, al que asistieron 300 delegados en representación de 22 sociedades obreras. Durante la década de los sesenta del siglo XIX, los sindicatos embrionarios adoptaron la fisonomía de sociedades de resistencia y ayuda mutua. Las circunstancias políticas locales y la tolerancia o

⁸³ El ludismo fue un movimiento obrero primitivo de principios del siglo XIX que destruía las máquinas, a las que acusaba de generar parados. Recibe su nombre de un personaje llamado Ned Ludd.

⁸⁴ Josep Termes, *Anarquismo y sindicalismo en España*, Ed. Crítica, Barcelona, 1977, pp. 21-29.

benevolencia de gobernadores civiles y alcaldes determinaban sus cortos períodos de legalidad, seguidos rápidamente de persecuciones, represión y clandestinidad.

Hacia 1866, la situación de la economía española era bastante mala, y empeoró todavía más a causa de dos crisis que confluyeron simultáneamente: una de naturaleza propiamente capitalista, desatada por la tremenda burbuja especulativa que acompañó el desarrollo ferroviario y que arrastró a numerosas sociedades y bancos a la quiebra; y otra de subsistencias motivada por las malas cosechas, especialmente en 1867. Ambas atizaron el descontento entre sectores de las capas medias urbanas, especialmente afectadas por la inflación de precios de los productos agrarios, y entre el pueblo llano que padeció las peores consecuencias de la escasez. La situación llegó a tal extremo que en el invierno de 1867-68 se reprodujeron escenas que no se veían desde hacía tiempo: el hambre reapareció y el paro masivo entre los jornaleros provocó en Andalucía una oleada de motines.

La agitación se extendió a otros lugares e, inclusive, a sectores que antaño parecían pilares del régimen. En las colonias antillanas, el saqueo de los recursos agrícolas y la persistencia de la esclavitud actuaban como fermento del sentimiento contra la metrópoli. Según datos estadísticos del gobierno español, en 1860 había cerca de 375.000 esclavos en Cuba y otros 47.000 en Puerto Rico. A los prósperos propietarios de plantaciones de caña de azúcar les era muy rentable mantener la explotación intensiva de sus propiedades con mano de obra esclava, pero la cohesión social se resquebrajaba aceleradamente, impulsando la actividad anticolonialista.

LA REVOLUCIÓN GLORIOSA. GOLPE MILITAR Y PODER REVOLUCIONARIO

El autoritarismo de Isabel II no conjuró el descontento social, pero sí contribuyó a radicalizar las posiciones de los sectores democráticos de la pequeña burguesía. A su vez, no eran pocos los elementos de la burguesía y del ejército que, sin estar nada interesados en abrir las puertas a una revolución social y política, se veían muy presionados por los acontecimientos. Todo empujaba a buscar una salida a una crisis que se descontrolaba. Era necesario reformar la fachada para preservar el edificio.

En el verano de 1868, la situación se había vuelto insostenible. La monarquía isabelina no contentaba a nadie. El gobierno se enfrentaba abiertamente con sectores pequeñoburgueses ganados por un republicanismo que se presentaba como la única alternativa para reformar y modernizar el país. Las ideas y planteamientos de estos líderes, profesores como Castelar, Salmerón o Giner de los Ríos, abogados como Pi y Margall, empezaron a tener un amplio eco entre la pequeña burguesía urbana, pero también entre capas de trabajadores y del campesinado. No defendían ninguna estrategia subversiva hacia el orden capitalista, solamente pretendían adecuar las estructuras políticas al desarrollo parlamentario y a las libertades democráticas que se perfilaban en otros países europeos. No era mucho, pero, en aquellas circunstancias, estas ideas y proclamas tuvieron un efecto electrizante en las masas, cuyo descontento general, que se extendía día a día, empujaba hacia una crisis política de envergadura.

Un nuevo pronunciamiento militar precipitó la caída del régimen isabelino. El 19 de septiembre, en la ciudad de Cádiz, el general Prim y el almirante Topete iniciaron una rebelión, la cual se consumó rápidamente con la derrota de las tropas leales a Isabel II en la batalla del puente de Alcolea, el día 28. Paralelamente, en Madrid, el general Serrano se hacía

cargo de la situación, organizando un gobierno provisional, que quedó confirmado con la llegada de Prim a la capital.

Todo parecía en orden, en el orden natural al que estaban acostumbrados los militares españoles, que se sentían dueños de la escena política. Pero la profundidad de la crisis social y económica desató unas fuerzas que en absoluto eran del agrado de los sublevados: “Al día siguiente, el pueblo de Madrid estaba la calle dando vivas a la revolución, muera a los Borbones y entonando el himno de Riego (...) Los ‘voluntarios de la libertad’, mandados por el teniente coronel Escalante, asaltaron el parque militar para armarse”.⁸⁵

La intención del golpe militar, encabezado por mandos de credenciales monárquicas y conservadoras, no era otro que promover un cambio del decorado político, una salida a la crisis pero dentro del orden establecido, en ningún caso alentar una revolución social. Los deseos estaban claros, pero, como ocurre a veces en la historia, una cosa son los deseos y otra muy diferente la dinámica de unos acontecimientos en los que la iniciativa y el arrojo del pueblo juegan, a la postre, un papel decisivo. El pronunciamiento no pudo ocultar la existencia de una situación revolucionaria: las masas estaban dispuestas a poner su sello en los acontecimientos y no dejar la marcha y el destino de los asuntos fundamentales en manos de los políticos burgueses.

La *revolución Gloriosa* de 1868, como quedó inscrita en la historia, pasó por todo tipo de fases: elecciones municipales y generales, la llegada de un rey, insurrecciones republicanas, colapso del régimen monárquico, proclamación de la Primera República, levantamientos cantonales, huelgas generales, parálisis parlamentaria, nuevos golpes militares y, finalmente, la restauración monárquica. Pero la huella más profunda del sexenio revolucionario la puso, una vez más, la acción del pueblo, sobre todo la de sus elementos más avanzados, quienes libraron una batalla frontal contra las clases dominantes y fueron víctimas de las vacilaciones y retrocesos del ala democrática de la pequeña burguesía. La gran escuela de aprendizaje de estos años, que en poco tiempo concentraron la experiencia histórica de décadas, curtió al nuevo movimiento obrero emergente, proyectando hacia el futuro su carácter revolucionario.

El pronunciamiento fue la señal para que, como ya había ocurrido otras veces en situaciones parecidas, surgiesen organismos de poder independientes del Estado. En numerosas ciudades se constituyeron juntas revolucionarias, como plataformas de agitación y organización a favor de las reivindicaciones democráticas: libertad de expresión y de asociación, separación de la Iglesia y el Estado, supresión de los impuestos al consumo, libertad de industria y comercio, sufragio universal y Cortes constituyentes, abolición del sistema de quintas y reforma del ejército, etc. Por supuesto, la instauración de la república ocupaba un lugar preeminente entre las consignas que más fervor concitaron en las jornadas revolucionarias y en muchas de esas juntas. La reivindicación republicana se había transformado, en la conciencia de los oprimidos, en el medio para solucionar los problemas endémicos del país.

El ímpetu del joven proletariado y del campesinado pobre por conquistar las nuevas libertades democráticas y acabar con la carestía de la vida, mejorar los salarios y aliviar la miseria cristalizó en numerosos terrenos. Por un lado, en la imagen de un pueblo en armas, organizado en las milicias de los Voluntarios de la Libertad, pero también en las crecientes demostraciones de fuerza de los republicanos. El panorama abierto por el golpe aterrorizó a la burguesía y al mando militar, independientemente de que se denominaran “progresistas”, “radicales” o “liberales”.

Para encauzar el movimiento y aliviar la presión, los nuevos jefes gubernamentales convocaron elecciones a Cortes constituyentes en enero de 1869. Un mes antes se celebraron elecciones municipales, que dieron una señal inequívoca de la temperatura revolucionaria del

⁸⁵ Manuel Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 265.

momento: las candidaturas republicanas triunfaron en veinte capitales de provincias, entre ellas las tres aragonesas, las tres valencianas, cinco andaluzas, tres catalanas, Murcia, A Coruña, Ourense, Santander, Toledo y Valladolid. La existencia de un peligro real para la clase dominante se hizo más evidente. “Sagasta, desde el Ministerio de Gobernación, actuó con habilidad y sin excesivos escrúpulos en la preparación y desarrollo de las elecciones. Los éxitos electorales republicanos del mes anterior le habían mostrado la necesidad de utilizar los tradicionales métodos gubernativos si deseaba contar con una mayoría de diputados monárquicos”.⁸⁶

Los esfuerzos para asegurarse el control del parlamento dieron sus frutos y los partidos burgueses de derechas obtuvieron una “victoria” aplastante: los progresistas sacaron 160 diputados; los unionistas, 80; los demócrata-monárquicos, 40; los carlistas, 30; y los clericales y el grupo capitaneado por Cánovas del Castillo, 8. A pesar de sus resultados en las municipales de diciembre, los republicanos federales sólo lograron 80 escaños, una representación muy inferior a su apoyo real, frente a una mayoría de más de 320 diputados de derechas y pro-monárquicos. Aun así, la monarquía no pudo ser restablecida hasta el 16 de noviembre de 1870, cuando Amadeo de Saboya fue votado por 191 diputados, inaugurando un reinado fugaz y precario.

Las Cortes iniciaron la redacción de una nueva constitución, aprobada en junio de 1869 y que, a pesar de las fuertes resistencias, no tuvo más remedio que recoger, muy suavemente, eso sí, el eco de la situación revolucionaria. Su articulado sancionaba formalmente la libertad de imprenta, de culto y de enseñanza; el derecho de asociación y reunión, y el papel de las Cortes como único poder legislativo. Pero, obviamente, la mayoría parlamentaria conservadora se aseguró que la forma del Estado sería la monarquía. Comparada con otros textos, la constitución de 1869 podía parecer un gran paso adelante, pero en realidad dicho avance era insuficiente para satisfacer las expectativas del pueblo.

Las elecciones a Cortes, junto con la aprobación de la constitución, pretendían encarrilar el descontento general hacia las tranquilas aguas de un parlamentarismo que llevaba el sello del fraude; así se lograría concentrar la atención de la vida pública en los lances dialécticos de sus señorías, con lo que se le daba margen de maniobra al gobierno cívico-militar. El objetivo inmediato estaba bien definido: poner punto y final a la intervención directa del pueblo en la vida política, suprimiendo rápidamente la “dualidad” de poderes que representaban las juntas y las milicias populares. Con este fin, destacados miembros de la mayoría gubernamental desarrollaron una intensa actividad en Madrid, Barcelona y otras ciudades, recurriendo a la fórmula que tan buenos frutos había dado en otras circunstancias parecidas: integrar a los jefes de las juntas en el aparato burocrático del Estado.

Aunque la maniobra, en general, fue exitosa, en el caso de la junta de Madrid hubo resistencias muy serias que reflejaban los cambios que se estaban produciendo en la sociedad. La correlación de fuerzas en 1868 no era la misma que en 1808, 1820 ó 1854. La pequeña burguesía había entrado en una fase de agitación y radicalización política, mientras la nueva clase obrera comenzaba a jugar un papel político significativo en los centros urbanos y el campesinado sin tierra mostraba disposición a sostener luchas más prolongadas. Un ejemplo de esta resistencia fue Cádiz, una ciudad de larga tradición republicana y socialista. El 5 de diciembre, en pleno período para elegir los nuevos ayuntamientos, tras semanas de desafío a las autoridades centrales por parte de la junta local, el gobernador militar de Cádiz le exigió la entrega de las armas. La reacción no se hizo esperar: los vecinos se echaron a la calle y, durante cinco días, mil voluntarios resistieron en los barrios populares el asedio de cinco mil soldados. Era la mejor evidencia de que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no sería tan sencillo suprimir el empuje del pueblo.

⁸⁶ Josep Termes, *op. cit.*, p. 49.

En los acontecimientos del sexenio revolucionario el movimiento republicano tuvo un papel protagonista indiscutible, incomparablemente superior a cualquier otro momento del siglo. La tradición del republicanismo se remonta decenios atrás y está ligado, principalmente, a los pronunciamientos liberales. En 1814-15, hubo actividades conspirativas republicanas, reprimidas por el absolutismo. Asimismo, algunos historiadores sitúan el año 1837 como un jalón fundamental de esos inicios, por la aparición de un ala progresista desgajada de los liberales. En el trienio esparterista (1840-1843), la apertura política animó un movimiento republicano más estructurado, con la formación de una junta central republicana. Para finales de 1848, la mayoría de los republicanos apoyaron la constitución del Partido Demócrata, un agrupamiento amplio que, sin embargo, no se declaraba republicano abiertamente. En el seno de esta nueva organización se produjeron diversas polémicas entre las tendencias que lo integraban, reflejando presiones de clase opuestas. Esas polémicas sólo anticiparon las contradicciones que más tarde recorrerían al Partido Republicano Federal, y que no dejarían de crecer en los años de revolución.

Específicamente, los orígenes del Partido Republicano Federal se pueden situar en octubre-noviembre de 1868, cuando el Partido Demócrata celebró una serie de reuniones en Madrid y un sector mayoritario del mismo, aplastante en su base popular, adoptó abiertamente la defensa de la república federal como forma de Estado. Otros elementos de la misma organización, con vínculos más estrechos con la burguesía, se inclinaron abiertamente por la conciliación con los partidos de la derecha monárquica. En el invierno de 1868, la escisión se hizo inevitable.

El Partido Republicano Federal se convirtió en un eje fundamental, por no decir decisivo, de los grandes acontecimientos políticos del sexenio revolucionario. La mayoría de la población depositó sus esperanzas en él, que durante un tiempo considerable encarnó las aspiraciones de un cambio profundo. En aquellas circunstancias revolucionarias —que siempre someten los programas, las organizaciones y los dirigentes a una prueba decisiva—, el Partido Republicano demostró los límites de su ideología, los intereses contradictorios que convivían en su seno y, por supuesto, las vacilaciones que dominaban a sus dirigentes a la hora de llevar a la práctica su ideario. Este partido, que representa un antecedente cualificado del republicanismo burgués y pequeñoburgués de los años 30 del siglo XX, ni supo ni quiso acometer las tareas democráticas de la revolución burguesa. Para ello tendría que haberse apoyado en el movimiento de la clase trabajadora y el campesinado, y no haber temido liderar una profunda revolución política y, sobre todo, social.⁸⁷

LA INSURRECCIÓN DE 1869

En Madrid, el Partido Republicano Federal conquistó una gran base de apoyo, como cabía esperar de una ciudad en la que el peso de la pequeña burguesía era importante y donde la industria era mucho más débil. Su fuerza se hizo palpable en la manifestación republicana del

⁸⁷ “Aunque el Partido Republicano no pretendiera limitar su base a una determinada clase social, sí puede afirmarse que la mayoría de los dirigentes republicanos federales procedían de las clases medias, sin faltar individuos procedentes de la clase trabajadora. Eran ante todo intelectuales y hombres dedicados a las profesiones liberales, como abogados, médicos, profesores, escritores, catedráticos universitarios o periodistas, aunque hubiera también algunos pequeños comerciantes. El grupo más numeroso fue los abogados, que los estudios de derecho fueron siempre un buen adiestramiento para la vida política”. Carmen Pérez Roldán, *El Partido Republicano Federal*, Ed. Endymion, Madrid, 2001, p. 305.

29 de noviembre de 1868, cuando entre 10.000 y 40.000 personas, según las fuentes, desfilaron tras sus banderas.

Aunque la pequeña burguesía daba el tono entre los cuadros dirigentes del partido, el ideario republicano contó con la simpatía de la población obrera. Las fronteras entre el republicanismo federal, el socialismo de los primeros utópicos y las formulaciones doctrinarias del anarquismo pequeñoburgués eran muy tenues, y esta confusión se mantuvo durante mucho tiempo. El ideólogo más destacado del federalismo republicano, Pi y Margall, fue el introductor de la obra de Proudhon y un defensor público de las reformas sociales, por lo que se granjeó el apoyo de muchos militantes obreros de la época, influencia que se hizo sentir incluso en las filas de los primeros internacionalistas españoles.⁸⁸ Los republicanos federales habían asumido en su programa demandas muy sentidas por la mayoría de la clase obrera, como la oposición a los impuestos sobre el consumo o el rechazo a las quintas, ese sistema de reclutamiento para la guerra colonial profundamente injusto y clasista, y del cual podían librarse los hijos de las familias acaudaladas pagando una determinada cantidad de dinero.

La demanda de la supresión de las quintas se convirtió en uno de los ejes de la movilización popular. Era tal el descrédito de este sistema, paralelo a la oposición creciente del pueblo llano a la guerra de Cuba, que incluso en los programas electorales de progresistas y demócratas, fracciones moderadas de la derecha burguesa, se hicieron guiños a favor de suprimirlo. No obstante, la ilusión duró muy poco. En marzo de 1869, el general Prim solicitó a las Cortes una nueva quinta de 25.000 hombres para enviar inmediatamente a Cuba.

En pocos meses, las reivindicaciones por las que la población se había lanzado a la lucha habían sido despreciadas por la mayoría de parlamentarios burgueses, el gobierno y los militares monárquicos. Ni la república, ni la abolición de las quintas, ni la entrega de tierras ni la reforma impositiva se habían concretado, todo lo contrario. La atmósfera de ilusión, fraternidad y unidad de los primeros momentos se disipó y una realidad desnuda, vacía de cambios reales, impulsó una nueva fase en la revolución.

Una fuerte polarización política, que presagiaba una escalada en la lucha de clases, se instaló definitivamente. En julio de 1869, nuevos disturbios protagonizados por los carlistas en Catalunya dieron la excusa al inefable Sagasta para actualizar la legislación represiva. Apoyándose en decretos de abril de 1821, se otorgaron poderes excepcionales a los gobernadores civiles, pero estos poderes, como era de imaginar, no se utilizaron para combatir a los carlistas, sino a los republicanos federales y al movimiento obrero organizado: se prohibieron las manifestaciones republicanas de cualquier tipo y se dio una vuelta de tuerca en la ofensiva para desarmar a las milicias populares. Estas medidas serían respondidas en Barcelona con una oleada de huelgas, combates callejeros y levantamiento de barricadas.

El fraude político y la evidencia de que el gobierno estaba decidido a recurrir a la represión empujaron a un sector de los republicanos federales hacia posiciones insurreccionales y al

⁸⁸ Pi y Margall escribió en 1854 *La reacción y la revolución*, donde esbozó los fundamentos de su concepción de la república federal. Pero sus ideas adquirieron plena madurez teórica tras emigrar a París en 1866, donde conoció y tradujo la obra de Proudhon *El principio federativo*. Una carta suya enviada desde París y publicada en octubre de 1868 en el periódico *La Federación* de Bilbao resume su concepción: “Todo poder central que no es resultado de un pacto entre las diversas provincias a que ha de servir el centro, anterior y superior como es y cree ser a los demás poderes, es de suyo invasor y déspota, y tiende fatalmente a dominarlo y avasallarlo todo (...) Su verdadera descentralización, la fuerte, la indestructible, la que engendra la paz y acaba con las dictaduras militares y las usurpaciones de los poderes centrales, está en el sistema federal (...) La federación no rompe la unidad de las naciones, no hace más que darles otras bases, volviendo de arriba abajo la organización del poder público. Nosotros en la federación buscamos la verdadera unidad, la unidad en la variedad, que es la unidad de la naturaleza”. Citado en Carmen Pérez Roldán, *op. cit.*, p. 105.

abandono del legalismo parlamentario.⁸⁹ El punto crítico en esta evolución se produjo a principios de octubre. Sin coordinación, sin un plan de acción centralizado, sin estado mayor ni demandas claras, los republicanos intransigentes promovieron sublevaciones en Andalucía, Valencia y Aragón. Los enfrentamientos adquirieron un carácter muy violento en Utrera, Carmona, Arcos de la Frontera, Puerto de Santa María, Jerez, Alicante y otras localidades. Pero los más duros y prolongados tuvieron lugar en Zaragoza y Valencia, donde los insurrectos resistieron nueve días de sitio antes de rendirse. Las fuerzas movilizadas por los republicanos federales alcanzaron la cifra de 40.000 hombres, que no obstante fueron aplastados por la represión gubernamental.

La insurrección de 1869 abrió heridas que en los años siguientes se hicieron aún más profundas. Por un lado, desoyendo las aspiraciones de su base y mostrando cuáles eran en verdad sus intereses de clase, la cúpula directiva del Partido Republicano Federal intentó una y otra vez llegar a acuerdos con las facciones parlamentarias de la burguesía, radicales, conservadoras o liberales. Una dinámica que, inevitablemente, les condujo a constantes concesiones políticas que sólo sirvieron para debilitar su apoyo dentro del movimiento revolucionario y para moderar su programa. En consonancia con esta línea de acción, una mayoría de los líderes republicanos del Parlamento no apoyaron el levantamiento, dejando a su suerte a los insurrectos.

Pero los dirigentes del movimiento intransigente, el ala más radical de los federales, eran también muy confusos y vacilantes. Consideraban la instauración de la república como una mera revolución política a favor de la descentralización administrativa y la federación, pero no estaban interesados en transformar las estructuras sociales y económicas del país. Esta concepción convirtió en pólvora mojada el potencial revolucionario que los intransigentes fueron capaces de movilizar, y volverían a mostrar esos mismos resultados en los levantamientos cantonalistas del verano de 1873.

A pesar del fracaso de las insurrecciones, el movimiento continuó en ascenso. A principios de 1870 se crearon ligas contra las quintas y en marzo volvieron a reproducirse manifestaciones contra el reclutamiento. La movilización popular no amilanó al gobierno, que, envalentonado tras haber aplastado la insurrección federal, el 30 de marzo aprobó por decreto una nueva quinta de 40.000 hombres. Cuando a principios de abril se intentó llamar a filas al nuevo reemplazo, en los barrios obreros de Barcelona, Málaga y Sevilla estallaron motines.

Las insurrecciones derrotadas también tuvieron otras consecuencias de mayor alcance político. En muchas localidades fueron los trabajadores y los campesinos los que sostuvieron una batalla desigual, derramando su sangre en las barricadas y sufriendo la represión, mientras los supuestos líderes del ala intransigente desertaban o llamaban al cese de los

⁸⁹ El sentimiento federal, aunque confuso, se alimentaba de las condiciones objetivas del capitalismo español: “La relación entre el débil desarrollo industrial y la debilidad del mercado interior potencia a los núcleos locales como marco de la vida económica y hace aparecer la centralización político-administrativa como una imposición arbitraria. El carácter de la capital, desvinculada de los núcleos más activos de la periferia y sede de un capital financiero en estrecha colusión con el aparato político y de cuyas especulaciones sufrirá la pequeña burguesía duramente (así en la crisis de 1866), contribuye a reforzar la imagen parasitaria de la capital, acusada de consumir la sustancia del país” (Juan J Triás, op. cit., p 35). Al respecto de lo anterior es interesante analizar la actitud general de la burguesía catalana en los acontecimientos del sexenio. Los industriales catalanes sostenían una posición contraria a la independencia de Cuba y Filipinas. Las razones eran obvias: la pérdida de estos mercados influiría muy negativamente en su cuenta de resultados. Cuando Prim llegó a plantear la posibilidad de abandonar Cuba, se granjeó la enemistad de la burguesía catalana que detentaban en la práctica el monopolio textil en las colonias. Por otra parte, mientras el gobierno provisional defendía rebajar los aranceles para obtener grano más barato, la burguesía catalana y los terratenientes alentaban firmemente el proteccionismo, unos para no tener que competir con textiles más baratos, otros para que no cayera el precio del trigo nacional. La defensa de sus intereses de clase, llevó a sectores preponderantes de la burguesía catalana a pasarse al partido alfonsino.

combates. Estas actuaciones desacreditaron a los dirigentes republicanos a los ojos de muchos activistas obreros, influidos ya por el mensaje de la Primera Internacional: “Los fracasos del federalismo republicano en 1868-1870 —escribe Josep Termes—, la insinceridad de las promesas septembrinas y la falta de éxito de los motines contra las quintas contribuyeron en gran medida al proceso de despolitización de la clase obrera (...) Los hechos relatados contribuyeron a empujar al obrerismo hacia el odio contra el Estado, hacia el desprecio a los hombres públicos, a la desconfianza en la acción política. Los dirigentes bakuninistas encontraron el terreno abonado; su teoría del abandono del quehacer político fue asimilada con cierta facilidad. Sus prédicas hicieron mella en un proletariado urbano y rural, desengañado de los políticos y escéptico en cuanto a la posibilidad de que el Estado solucionase sus exigencias más elementales”.⁹⁰

⁹⁰ Josep Termes, *op. cit.*, p. 62.

II

EL PROLETARIADO MILITANTE. LOS INICIOS.

Los acontecimientos del sexenio revolucionario (1868-1874) pusieron a prueba programas, líderes y organizaciones. En primer lugar, concedieron al Partido Republicano, a todas sus facciones, varias oportunidades para poner en práctica su programa de reformas, más o menos profundas, y batir así las resistencias de la clase dominante. Los hechos pronto colocaron las cosas en su lugar. Los republicanos burgueses y pequeñoburgueses se mostraron impotentes para completar y llevar a buen puerto la revolución que ellos mismos defendían en palabras. En todos los momentos claves, vacilaron, dejándole la iniciativa a la reacción y anticipando, de manera trágica, el comportamiento de sus sucesores después de abril de 1931.

Las causas objetivas de este fracaso hay que buscarlas en la política y la base social del movimiento republicano. En un país con una estructura económica tan atrasada y con una clase burguesa tan fundida con la aristocracia nobiliaria, las buenas intenciones no eran suficientes para coronar con éxito las reformas sociales propuestas por los republicanos. Hacía falta algo más, pero ese más resultaba demasiado: reformas políticas y económicas para dar satisfacción al problema nacional, aniquilar la propiedad latifundista y repartir la tierra, aconfesionalidad del Estado, acabar con el poder económico e ideológico de la Iglesia, depurar el ejército de elementos reaccionarios, potenciar una economía industrial moderna, aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales...

Llevar a buen puerto este programa exigía una revolución social que sólo la clase obrera, con el apoyo del campesinado pobre, podría encabezar. Pero en las condiciones objetivas de 1870, la madurez política y organizativa del naciente proletariado era claramente insuficiente para romper la correlación de fuerzas existente.

LECCIONES DE EUROPA

Las revoluciones europeas del siglo XIX marcaron un punto de inflexión en la lucha de clases contemporánea. Las fuerzas en pugna, las ideas, los métodos y los fines no eran ya los mismos de experiencias anteriores. Con la consolidación del régimen burgués y el triunfo de la economía capitalista se había trastocado radicalmente el escenario. La nueva clase dominante dejó muy claro que no estaba dispuesta a dejarse arrastrar por el movimiento ni a poner en peligro su poder económico y político. El nervio revolucionario de la burguesía europea estaba completamente agotado. Despejado el camino para el triunfo completo de las relaciones de producción capitalista tras la derrota del feudalismo, la burguesía se curó de sus sarpuillos revolucionarios, se hizo razonable y conservadora, ardiente defensora de la familia, la tradición, el orden, la propiedad: “Hoy sabemos ya que ese reino de la razón no era más que el reino idealizado de la burguesía, que la justicia eterna vino a tomar cuerpo en la justicia burguesa; que la igualdad se redujo a la igualdad burguesa ante la ley; que como uno de los derechos más esenciales del hombre se proclamó la propiedad burguesa; y que el

Estado de la razón, el «contrato social» de Rousseau pisó y solamente podía pisar el terreno de la realidad, convertido en república democrática burguesa”.⁹¹

La experiencia de 1848 en Francia clausuró el horizonte revolucionario de la burguesía. Afianzada como clase dominante, dueña de los medios de producción y del capital financiero, y encumbrada políticamente, sólo aspiraba ya a defender y mejorar su posición combatiendo al proletariado. Las credenciales de la burguesía no se circunscribían tan sólo al caso francés; los ejemplos de esta actitud reaccionaria se multiplicaron en Europa. En Alemania, Marx y Engels denunciaron con énfasis la cobardía de la burguesía para llevar a cabo sus tareas históricas. Temerosa de la acción independiente del proletariado y de verse desbordada por él, la burguesía alemana renunció a la república democrática y a la unificación de la nación sobre bases revolucionarias, y se echó en brazos de la monarquía prusiana. Pretendía, ante todo, conservar la propiedad de sus fábricas, sus beneficios, sus rentas, y, puesta ante la disyuntiva, las garantías que le ofrecía la corona, esa excrecencia del antiguo régimen, eran muy solventes. En su artículo *La burguesía y la contrarrevolución* (1848), Marx señala lo siguiente: “La burguesía alemana se había desarrollado con tanta languidez, tan cobardemente y con tal lentitud que, en el momento en que se opuso amenazadora al feudalismo y al absolutismo, se encontró con la oposición del proletariado y de todas las capas de la población urbana cuyos intereses e ideas eran afines a los del proletariado. Y se vio hostilizada no sólo por la clase que estaba detrás, sino por toda la Europa que estaba delante de ella. La burguesía prusiana no era, como la burguesía francesa de 1789, la clase que representaba a toda la sociedad moderna frente a los representantes de la vieja sociedad: la monarquía y la nobleza. Había descendido a la categoría de un estamento tan apartado de la corona como del pueblo, pretendiendo enfrentarse con ambos e indecisa frente a cada uno de sus adversarios por separado, pues siempre los había visto delante o detrás de sí misma; inclinada desde el primer instante a traicionar al pueblo y a pactar un compromiso con los representantes coronados de la vieja sociedad, pues ella misma pertenecía ya a la vieja sociedad”.⁹² Este análisis es perfectamente aplicable a la actuación de la burguesía española a lo largo del siglo XIX, inclinada también, desde el primer instante, a traicionar al pueblo y a pactar un compromiso con los representantes coronados de la *vieja sociedad*.

A mediados del siglo XIX, en toda Europa era evidente un cambio profundo en la correlación de fuerzas entre las clases y en sus actitudes e intereses fundamentales. En el caso de la pequeña burguesía, afectada por las crisis de la economía —y de una permanente inseguridad en el futuro—, su insatisfacción se manifestaba en una radicalidad en las palabras, que en la mayoría de las ocasiones no tenía correspondencia con su acción práctica. En esos mismos textos, Marx y Engels alertaban ya a los trabajadores de la necesidad de librar una lucha por sus propios objetivos de clase, independientes de la burguesía y también de la pequeña burguesía: “La actitud del partido obrero revolucionario ante la democracia pequeñoburguesa es la siguiente: marcha con ella en la lucha por el derrocamiento de aquella fracción a cuya derrota aspira el partido obrero; marcha contra ella en todos los casos en que la democracia pequeñoburguesa quiere consolidar su posición en provecho propio. Muy lejos de desear la transformación revolucionaria de toda la sociedad en beneficio de los proletarios revolucionarios, la pequeña burguesía democrática tiende a un cambio del orden social que pueda hacer su vida en la sociedad actual lo más llevadera y confortable. (...) Mientras que los pequeños burgueses democráticos quieren poner fin a la revolución lo más rápidamente que se pueda, después de haber obtenido, a lo sumo, las reivindicaciones arriba mencionadas, nuestros intereses y nuestras tareas consisten en hacer la revolución permanente hasta que sea descartada la dominación de las clases más o menos poseedoras, hasta que el proletariado

⁹¹ Engels, *Del socialismo utópico al socialismo científico*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 42.

⁹² Marx, “La burguesía y la contrarrevolución”, en *Obras Escogidas*, Ed. Progreso, Moscú, 1981, vol. I, p. 144.

conquiste el poder del Estado, hasta que la asociación de los proletarios se desarrolle, y no en un solo país, sino en todos los países dominantes del mundo, en proporciones tales, que cese la competencia entre los proletarios de estos países, y hasta que por lo menos las fuerzas productivas decisivas estén concentradas en manos del proletariado. Para nosotros no se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva”.⁹³

Las sacudidas revolucionarias de mediados de siglo en Europa, incitaron a Marx y Engels a pensar en un inmediato triunfo de la clase obrera, pero sus perspectivas no se cumplieron; en realidad, la revolución socialista se aplazó por bastante tiempo. Las razones de ello tienen que ver con la inmadurez política del proletariado europeo, subordinado, en la mayoría de los casos, a las organizaciones de “extrema izquierda” de la democracia pequeñoburguesa. Todavía no existían organizaciones revolucionarias de la clase trabajadora con una influencia de masas. La actuación cobarde de la pequeña burguesía radical en Francia y Alemania, y el consiguiente aplastamiento de los trabajadores, sellaron la derrota del movimiento.

El triunfo de la reacción burguesa en 1848, unido al reflujo consiguiente de las fuerzas proletarias, atomizadas y desmoralizadas temporalmente, creó un sustrato político favorable para un crecimiento de la economía capitalista. Europa, y más concretamente los países avanzados del continente, experimentaron un auge notable de sus fuerzas productivas, su industria y su comercio. Tal período eliminó a corto plazo las perspectivas de una revolución, pero tuvo otras consecuencias: fortaleció al proletariado industrial, de forma notable en Gran Bretaña, y dio la oportunidad, por primera vez, de establecer una organización internacional de la clase obrera. En el período histórico que se extiende desde la derrota de 1848 hasta la Comuna de París en marzo de 1871, la clase obrera vivió una gran transformación de *clase en sí a clase para sí*.

‘PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, ¡UNÍOS!’

Marx y Engels establecieron las bases teóricas del socialismo científico en *El manifiesto comunista*, cuya estrategia y programa revolucionario aportaron la claridad que necesitaba el movimiento obrero: “Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado. No proclaman principios especiales a los que quisieran amoldar el movimiento proletario. Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y por otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su conjunto. A la hora de la acción, los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás; en el aspecto teórico, tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, la marcha y los resultados generales del movimiento proletario”.⁹⁴

Las ideas del socialismo científico no sólo son un método de interpretación de la realidad social o de la historia, son una guía para la acción revolucionaria. Para fundirse con la

⁹³ Marx y Engels, “Mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas”, en *op. cit.*, p. 183.

⁹⁴ Marx y Engels, *El manifiesto comunista*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1996, p. 51.

experiencia viva de la lucha de clases, la acción necesita de la organización: “La doctrina marxista y el programa comunista no pueden remontarse encima del caos, como el Espíritu Santo, ni estar enterrados en el cerebro de algunos profetas. Necesitan un cuerpo, es decir, la organización de la vanguardia obrera”.⁹⁵ Este fue el enfoque revolucionario que dio fuerza a las ideas de Marx y Engels, y por el que lucharon toda su vida: la construcción de una organización revolucionaria internacional, sin la cual la clase obrera queda reducida a materia prima para la explotación. En 1848, el grito de guerra del *Manifiesto comunista* se convertiría en el aldabonazo de la lucha obrera hasta nuestros días: ¡*Proletarios de todos los países, uníos!*⁹⁶

Los intentos de dar forma a esta organización internacionalista de la clase obrera se sucedieron ininterrumpidamente entre 1845 y 1864, en la mayoría de las ocasiones con una vida relativamente efímera. Destacaron el de la Sociedad de Demócratas Fraternalistas, organizada en 1845 por Julian Harney en Londres, que aglutinó a refugiados políticos de toda Europa. También el Comité Internacional creado por Ernest Jones que, por medio de sus mítines masivos y manifiestos, mantuvo vivas las tradiciones del internacionalismo después de la derrota de la revolución de 1848. Y, principalmente, la Liga de los Comunistas que, basada en el trabajo de Marx y Engels, dio al movimiento obrero internacional su primera base teórica: *El manifiesto comunista*.

Tras años difíciles, en los que el movimiento pasó por enormes adversidades y aislamiento, la situación general comenzó a cambiar. La crisis económica de 1857, la guerra de independencia italiana en 1859 y el estallido de la guerra civil en Estados Unidos en 1860-61 volvieron a restablecer el sentimiento de solidaridad internacionalista entre los trabajadores europeos. Hubo también hechos no menos importantes, como la visita de delegados obreros franceses a la Exposición Mundial de Londres de 1862 y las maniobras de la clase dominante de Francia, Inglaterra y Rusia para aplastar la insurrección polaca de 1863.

Todo estos impulsos condujeron a la organización de la famosa reunión de representantes obreros franceses e ingleses en el St. Martin's Hall de Londres, el 28 de septiembre de 1864. En la misma se decidió la creación de las secciones europeas de la nueva Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), la Primera Internacional, bajo la dirección de un Comité Central y un Comité Provisional que tendría como tarea redactar unos estatutos a aprobar en un nuevo congreso internacional. Marx jugó un papel fundamental en la nueva organización. A él correspondió el discurso de apertura de la reunión: “En cuanto al presente, los dueños de

⁹⁵ Trotsky, “Argumentos y refutaciones”, en *Escritos*, 8/6/1934.

⁹⁶ Una organización obrera internacional porque el enemigo a batir, el capitalismo, es un sistema mundial: “La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó, a su vez, en el auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Media. (...) Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas nacionales, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. (...) Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza”. Marx y Engels, *El manifiesto comunista*, p. 40-43.

la tierra y los dueños del capital sólo quieren una cosa: emplear sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Lejos de favorecerla, no quieren más que continuar poniendo todo tipo de trabas a la vía de emancipación del trabajo (...) Es por lo que se ha convertido en un gran deber de la clase obrera conquistar el poder político. Parece que lo ha comprendido, ya que en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se ha hecho sentir un renacimiento simultáneo, se han hecho esfuerzos espontáneos para llegar a reconstruir el partido de la clase obrera. Ella posee un factor de triunfo: el número, pero el número sólo pesa en la balanza si la organización le da unidad y la inteligencia la dirige hacia un objetivo”.⁹⁷

Marx ponía en guardia a los trabajadores contra la estrechez de una visión economicista. La lucha sindical, por éxito que tenga, no puede resolver la cuestión decisiva de la explotación capitalista. La intención de Marx y sus seguidores era convencer pacientemente a los sectores más avanzados del movimiento obrero europeo de la necesidad de la lucha política porque sólo con el derrocamiento de la clase capitalista, a través de la acción revolucionaria e internacional de los trabajadores, sería posible su emancipación definitiva.

La formación de la Primera Internacional, fruto del esfuerzo y el trabajo de aquellos pioneros, representó un paso adelante cualitativo que permitió establecer y difundir el programa, la estrategia y la táctica del marxismo revolucionario entre el proletariado europeo y norteamericano. Pero la AIT no era una internacional marxista, sino una organización muy heterogénea compuesta por sindicalistas reformistas británicos, proudhonistas franceses, italianos seguidores de Mazzini, anarquistas, etc.⁹⁸

Combinando la firmeza en los principios con una gran flexibilidad táctica, Marx y Engels fueron logrando la mayoría en la AIT. Engels resume aquella experiencia en una carta fechada el 27 de enero de 1887: “Cuando volvimos a Alemania en la primavera de 1848, entramos en el Partido Democrático como la única manera posible de ganar el oído de la clase obrera: éramos el ala más avanzada de aquel partido, pero todavía un ala. Cuando Marx fundó la Internacional, elaboró los estatutos generales de tal forma que todos los socialistas obreros de aquel período se pudiesen adherir (proudhonistas, pierre-lerouxistas e, incluso, los sectores más avanzados de las trade unions inglesas); y tan sólo semejante amplitud hizo posible que la Internacional se convirtiese en lo que fue”. Lógicamente esta actitud prudente no evitó una dura pugna interna.

En los primeros años, las diferentes secciones nacionales dirigieron una intensa campaña por movilizar al conjunto de la clase obrera a favor de una legislación laboral progresista. Exigieron una jornada de trabajo más corta (las 8 horas) y condenaron el trabajo nocturno y todas las formas de trabajo perjudiciales para las mujeres y los niños. La Internacional impulsó la organización sindical en muchos países, pero también buscó elevar el nivel político del movimiento sindical y lograr que sus miembros fuesen conscientes de sus tareas históricas. En cuanto a las diferentes organizaciones que componían la AIT, la mayor sección era la inglesa, que agrupaba a 17 sociedades obreras que sumaban 25.000 obreros, y eso a pesar de que el London Trades Council, que jugó un importante papel en la creación de la AIT, rehusó en 1866 afiliarse a la misma. Según la propia AIT, la sección francesa, fundada en París, agrupaba a 200 militantes en 1865 y a 600 en 1866. Bélgica, el segundo país más

⁹⁷ *La Primera Internacional*, Ed. Fundamentos, Madrid, 1977, p. 27.

⁹⁸ “Esta organización, no era obra de un individuo, un ‘cuerpo pequeño con una gran cabeza’, ni una banda de conspiradores errabundos; no era ni una sombra fingida, ni un monstruo voraz, como afirmaba, en pintoresca alternatividad, la fantasía de los heraldos capitalistas, aguijoneada por los escrúpulos de su conciencia. Era simplemente una forma transitoria de la cruzada de emancipación del proletariado, cuyo carácter histórico la hacía, a la par, necesaria y perecedera”. Franz Mehring, *Carlos Marx y la I Internacional*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2008, p. 9.

industrializado de la época, sólo contaba con una sección en Bruselas. No había sección como tal ni en España ni en Italia en los primeros años, y en Alemania tenía una presencia escasa.⁹⁹

A partir de 1866, la grave crisis económica animó un importante movimiento de huelgas y movilizaciones que se extendió por todo el continente, transformando el lento crecimiento organizativo de los años precedentes. Para 1870, la sección francesa disponía de varias decenas de miles de afiliados. Algo similar sucedió en Bélgica, donde experimentó un crecimiento exponencial. A partir de 1868-69 se extendió a zonas donde no tenía presencia, como fue el caso del Estado español, donde la Federación Regional Española de la AIT (nombre que adoptó la sección española en su congreso de 1870) mantuvo un crecimiento progresivo hasta convertirse en una de las secciones con más miembros y más influyente de toda la Internacional. También en Italia y en Alemania experimentó enormes avances. Incluso las Trade Unions, en su congreso de Birmingham, recomendaron la integración en la AIT.

MARXISMO Y ANARQUISMO

Aunque Marx fue el principal teórico y dirigente de la Primera Internacional desde sus inicios, se vio arrastrado a un duro conflicto ideológico con diferentes corrientes y grupos que en el seno de la misma trataban de hacer valer sus postulados. El enfrentamiento de mayor envergadura se produjo entre los fundadores del socialismo científico y los teóricos del anarquismo, entre los cuales había tendencias diferentes, incluso contradictorias entre sí.

La lucha ideológica en el seno de la AIT, que alcanzó una virulencia tal que terminó por llevarla a la ruptura, era la expresión de ideas e intereses de clases contrapuestos. En esencia, fue una pugna entre el ascenso del proletariado revolucionario, disciplinado por el trabajo colectivo en la fábrica y decidido a disputar a la burguesía el poder político, frente a los prejuicios y la confusión ideológica del artesanado, el campesinado, la pequeña burguesía radicalizada y el lumpemproletariado, que bebían del magma ideológico de los viejos utópicos y los filósofos idealistas.

En una carta a Friedrich Bolte fechada el 23 de noviembre de 1871, Marx admite que “la Internacional se fundó para reemplazar las sectas socialistas o semisocialistas por la organización efectiva de la clase obrera para la lucha. Los primeros estatutos y la memoria inaugural así lo revelan desde el primer golpe de vista. Además, si el curso de la historia no hubiera hecho pedazos el sistema de sectas, la Internacional no hubiera podido afirmarse. El desarrollo de las sectas y el del movimiento obrero real obran, constantemente, en relación inversa. Si la clase obrera no está todavía madura para dotarse de un movimiento autónomo verdadero, las sectas tienen justificación histórica; pero, cuando alcanza esa madurez, las sectas se muestran reaccionarias en esencia. Sin embargo, en la vida de la Internacional se ha repetido lo que la historia muestra por doquier: que lo viejo pugna por reconstituirse y mantenerse dentro mismo de la nueva forma adquirida. Y la historia de la Internacional ha sido una *lucha continua del Consejo General* contra las sectas y las tentativas de los aficionados que, en el cuadro de la Internacional, buscaban situarse contra el movimiento real de la clase obrera. Esta lucha se llevó en los congresos, pero más aún en las negociaciones privadas entre el Consejo General y las diferentes secciones”.¹⁰⁰

⁹⁹ A. Kriegel, *Las internacionales obreras*, Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1968, pp. 20-21.

¹⁰⁰ Citado en Mehring, *op. cit.*, p. 83.

Para no granjearse el rechazo frontal de los proudhonianos franceses, en su alocución inaugural Marx tuvo que introducir palabras como “moral y justicia” y no hablar de los medios para llegar al socialismo. Este lenguaje cuidadoso tenía un claro objetivo: permitir que la AIT agrupara al mayor número de trabajadores, influidos por diferentes doctrinas, y, paso a paso, ir esclareciendo la confusión teórica a través de la experiencia del movimiento y la propaganda de las ideas del socialismo científico. Como precursores de la tendencia anarquista pequeñoburguesa, Proudhon y sus partidarios eran mutualistas, contrarios a las huelgas y favorables a la propiedad privada “reformada”, pretendían apartar a la mujer del trabajo productivo y defendían ardientemente el movimiento cooperativo, la banca social (“banco de crédito mutuo”) y todo tipo de reformas “progresistas”. En lo que respecta a la forma del Estado, se mostraban partidarios del federalismo pequeñoburgués. Según Marx, constituían una fracción que permaneció siempre al margen del “movimiento real de la clase”, aunque, ciertamente, conservaron una amplia influencia y preponderancia en la sección francesa hasta 1868. Sin embargo, la polémica con Proudhon no fue más que el aperitivo de un conflicto mucho más serio y relevante por sus consecuencias en el movimiento obrero organizado: el librado por Marx y Engels con el anarquismo “antiestatal”, encabezado por el revolucionario ruso Bakunin.

En 1867 Bakunin fijó su residencia en Ginebra, donde había establecido la sede de la Alianza de la Democracia Socialista, una agrupación formada por exiliados rusos, polacos, franceses, italianos y de otras nacionalidades. Después de sus experiencias fracasadas en la Liga para la Paz y la Libertad, un conglomerado que agrupaba a viejas figuras del radicalismo burgués y pequeñoburgués, como Garibaldi o Victor Hugo, Bakunin se orientó hacia la Primera Internacional: “Cuando vimos que (...) las tendencias de un sentimentalismo burgués estaban en mayoría, ningún sincero y auténtico revolucionario hubiese deseado un puesto en ella [la Liga para la Paz y la Libertad]. Probamos la herramienta y, una vez comprobada su ineffectividad, tuvimos que desecharla, no nos quedaba más recurso que emplear otra. La más adecuada nos pareció la Asociación Internacional de Trabajadores”¹⁰¹.

La actividad de los bakuninistas y su Alianza de la Democracia Socialista provocó una enconada disputa en la Internacional, que se hizo muy virulenta a partir de 1871, tras la conferencia de Londres de la AIT y, más tarde, con la derrota de la Comuna de París. La escisión final fue un golpe muy duro para Marx y Engels, ya que secciones importantes de la AIT, como la italiana y, sobre todo, la española, se inclinaron mayoritariamente hacia las tesis de Bakunin. En ambos países, los partidarios de Marx tardaron años en construir una organización sólida con influencia de masas.

La influencia del bakuninismo en estas zonas se explica por diferentes factores: el peso del campesinado y el artesanado, y la débil industrialización de estos países (en Suiza, por ejemplo, el apoyo de Bakunin en la Federación del Jura provenía de los relojeros artesanos); las tradiciones insurreccionales del movimiento, como correspondía a la preponderancia política de la pequeña burguesía; la influencia del republicanismo entre el campesinado y la

¹⁰¹ Citado en James Joll, *op. cit.*, p. 89. “...Cuando Bakunin solicitó el ingreso de la Alianza en la AIT como una organización con fisonomía propia y su petición fue rechazada, la Alianza se convirtió en la federación ginebrina de la Internacional, a la que se añadió la Federación del Jura. En principio, Ginebra y el Jura habían sido organizadas como una sola federación de la Internacional. Sin embargo, cuando los apolíticos consiguieron la mayoría en la federación, durante el congreso federal de la Suiza romanda [los cantones de habla francesa] en abril de 1870, y votaron a favor del abstencionismo en política cantonal y local, una minoría se separó. Pero esta minoría de delegados constituía la mayoría de los trabajadores afiliados de la ciudad de Ginebra. El Consejo Federal de la Internacional acordó aceptar las dos federaciones. De tal manera que existían tres grupos: la federación de Ginebra, respaldada por la mayoría de los trabajadores de la ciudad y partidaria de la lucha política; la Alianza, cuyo centro era la ciudad de Ginebra, y la federación del Jura, dirigida por James Guillaume y Adhemar Schwitzguebel, partidaria del bakuninismo”. Josep Termes, *op. cit.*, pp. 149-150.

incipiente clase obrera. Todos ellos eran elementos característicos de la lucha de clases de la época tanto en el Estado español como en Italia. En este último país, la pérdida de influencia de Mazzini entre las nuevas generaciones de jóvenes republicanos radicales abrió el camino a la penetración del pensamiento bakuninista; en el caso español, influyó decisivamente la forma en que se desarrolló la radicalización política de una amplia capa de trabajadores y campesinos durante el sexenio revolucionario.

Aunque Bakunin y sus partidarios se basaban en un programa formalmente radical, abogando por la destrucción del Estado y haciendo apología del ateísmo militante, desde el principio adolecieron de una concepción idealista de la historia y de la lucha de clases, y de una fuerte influencia del socialismo pequeñoburgués propio de los utópicos. El pensamiento bakuninista tenía su filo mellado por la confusión y la mezcolanza ideológica de la que se nutría. En algunos de sus escritos fundamentales, Bakunin deja claro que no aspiraba tanto a acabar con las clases sociales como a la igualdad entre ellas; en lugar de exigir la expropiación de los medios de producción, se conformaba con la abolición del derecho de herencia.

El credo bakuninista hizo del rechazo a la intervención en política del proletariado su piedra de toque, lo que sólo podía fomentar los prejuicios antipolíticos dentro de la clase obrera. Semejante tesis no podía dejar de provocar un duro enfrentamiento con Marx, que consideraba a las organizaciones de masas de los trabajadores, sindicatos y partidos, y su coordinación por encima de las fronteras nacionales, como una necesidad ineludible. Tal era el sentido que Marx daba a la Internacional, concebida como un movimiento político proletario, con una dirección central cuyas decisiones eran adoptadas en forma democrática y pública, sin contradecir la necesaria libertad de acción para las diferentes secciones nacionales.

En contraposición a Marx, Bakunin también elevó a principio irrenunciable la concepción de la revolución como la acción de una minoría conspirativa. Su oposición a la centralización en todas sus vertientes, la mitificación de la espontaneidad y esa predilección por darle un carácter secreto a la organización revolucionaria, al mejor estilo carbonario, abonaron las condiciones para una completa ausencia de democracia obrera en sus filas.¹⁰² Sin control real de la base militante, sin la capacidad de elección y revocabilidad, sin debate político público y democrático, el fetiche organizativo del anarquismo (la lucha contra el autoritarismo) se transformó en los hechos en su contrario: un grupo selecto de iniciados decidía por toda la organización, lo cual es una de las características distintivas del burocratismo.

Las divergencias entre marxismo y anarquismo responden también a una posición contradictoria respecto a la organización futura de la sociedad socialista. Si para los anarquistas una confederación de pequeñas unidades de productores organizadas localmente podría sustituir las relaciones de producción capitalista, el marxismo, por el contrario, defiende la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su sustitución por la propiedad y la administración colectiva de la clase obrera. El anarquismo exige el derecho de cada unidad productiva a guiarse según sus intereses; el marxismo aboga por la gestión y el control democrático del conjunto de la clase obrera sobre la economía, la política y la cultura.

¹⁰² “El pensamiento de Bakunin nunca pecó por exceso de sutileza u originalidad. Su continua devoción a la causa revolucionaria se tradujo más en conspiraciones y revueltas que en teorías en torno a futuros cambios del orden social y económico (...) Durante toda su vida se consideró como el conspirador por excelencia, asentado en el centro de una red de organizaciones clandestinas que él mismo controlaba y estructuraba, y que se apoyaban, en teoría, sobre la base de una ‘estricta jerarquía e incondicional obediencia’”. James Joll, *op. cit.*, p. 78.

Los carbonarios fueron una sociedad secreta, fundada en Italia a principio del siglo XIX y extendida después a otros países, cuyo fin era la propagación de los ideales de la Revolución Francesa.

Según los teóricos del anarquismo, el derrocamiento de la sociedad burguesa podría ser el resultado de una labor paciente de educación e instrucción popular, de la actividad prolongada del sindicalismo, de la huelga general insurreccional, o de la combinación de varios de estos factores, según la escuela libertaria de que se trate. Los anarquistas, enemigos de “todo poder”, rechazaban frontalmente cualquier forma de Estado, aunque fuese un Estado obrero de transición al socialismo. El marxismo defiende la revolución socialista para derrocar el capitalismo y la dictadura del proletariado como expresión organizada del nuevo poder obrero, que en realidad sería un semi-Estado en disolución. “Todos los socialistas — escribía Engels— están de acuerdo en que, como resultado del advenimiento de la revolución social, el Estado político, y con él la autoridad política, desaparecerán; es decir, las funciones políticas perderán su matiz político para transformarse en simples funciones administrativas y defensoras de los verdaderos intereses de la sociedad. Pero los enemigos del *autoritarismo* piden que ese Estado políticamente autoritario se suprima de un plumazo, incluso antes de proceder a la destrucción de las condiciones sociales que lo fomentaron”.¹⁰³

La cuestión de la participación de la clase obrera en política y su organización como partido independiente de las formaciones burguesas y pequeñoburguesas se convirtió en el principal campo de batalla entre marxistas y anarquistas. Al considerarla la única vía consecuente para lograr la emancipación económica, la Primera Internacional asumió la lucha política de la clase obrera como el eje fundamental de su acción. En palabras de Marx: “El movimiento político de la clase obrera tiene por objeto, por supuesto, la conquista del poder político por la clase trabajadora, y para ello es necesario que, previamente, se haya desarrollado hasta cierto punto una organización de la clase obrera surgida a su vez de las luchas económicas de la misma (...) Todo movimiento en el que la clase obrera se presente *como clase* contra las clases dominantes e intente obligarlas por medio de la presión exterior es un movimiento político. Por ejemplo, el intento de una fábrica en particular, o incluso una industria en particular, de forzar una reducción de la jornada de trabajo por huelgas, etc. es un movimiento puramente económico. El movimiento que tiene como objetivo hacer aprobar una *ley* que establezca la jornada de 8 horas, etc. es un movimiento *político* (...) Y de esta manera, a partir de los distintos movimientos económicos de los trabajadores, surge en todas partes un movimiento *político*; es decir, un movimiento *de clase* que tiene por objeto imponer sus intereses de forma general, en una forma que posee una fuerza de compulsión para toda la sociedad (...) Cuando la clase obrera no es aún lo suficientemente avanzada en su organización como para llevar a cabo una campaña decisiva contra el poder, es decir, el poder político de las clases dominantes, debe en todo caso entrenarse para ello mediante una agitación continua y una actitud hostil a la política de las clases dominantes. De lo contrario seguirá siendo un juguete en sus manos”.¹⁰⁴

La consigna de los bakuninistas a favor de la abstención política, en todo momento y situación, significaba, en la práctica, la subordinación de la clase obrera a los partidos burgueses. La lucha contra los capitalistas, contra sus organizaciones políticas y patronales, contra su parlamento, contra su Estado, es una lucha política o no es nada. La organización de la clase obrera en partidos independientes de la burguesía con un programa de clase revolucionario es la precondition para el éxito de la revolución social. El ideario anarquista, más o menos elaborado, con más o menos matices, entró siempre en crisis cuando trascendió los límites del debate teórico y fue contrastado en la lucha de clases real. En ese momento, las ideas anarquistas mostraron sus grandes limitaciones, su impotencia como doctrina revolucionaria, incapaz de igualarse al heroísmo y la entrega de sus militantes. La

¹⁰³ Citado en James Joll, *op. cit.* p. 99

¹⁰⁴ Carta de Marx a Bolte, 23 de noviembre de 1871, en Marx y Engels, *Correspondencia*, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1987, p. 262-63.

incongruencia del planteamiento antipolítico bakuninista, del fetiche antiparlamentario, cosechó las peores consecuencias en las mareas altas de cada período revolucionario.

LA PRIMERA INTERNACIONAL EN LA CRISIS REVOLUCIONARIA ESPAÑOLA

La crisis que desembocó en la revolución Gloriosa de 1868 y los acontecimientos que se sucedieron en un intervalo de tan sólo seis años, moldearon las tradiciones revolucionarias del nuevo movimiento obrero. En unas condiciones de aguda desigualdad social, penurias económicas extremas y bajo gobiernos reaccionarios y represivos, el margen para llegar a acuerdos con patronos y terratenientes, cada vez que se desataban luchas reivindicativas, era muy escaso. Cualquier reforma, cualquier avance por modesto que fuese, era el resultado directo de una intensa lucha entre las clases.

A través de un proceso lleno de pruebas y frustraciones, los sectores más conscientes de la clase obrera buscaron el camino para una actuación organizativa y política independiente. Ésta fue una gran experiencia para la generación de trabajadores revolucionarios que participaron en la fundación de la sección española de la Primera Internacional.

La revolución abrió una nueva perspectiva de organización para una clase obrera que entraba de lleno en los acontecimientos del país. Las reformas conquistadas por la movilización popular, en concreto la libertad de asociación, animaron la aparición de nuevas organizaciones, como la barcelonesa Dirección Central de Sociedades Obreras, que agrupó a tejedores, canteros, cerrajeros, impresores, ebanistas, sastres, y que más tarde, en un congreso celebrado el 23 de febrero de 1869, se convertiría en el Centro Federal de Sociedades Obreras.¹⁰⁵ En aquel momento, aunque ya habían transcurrido cinco años desde la fundación de la Primera Internacional, la mayoría de los trabajadores españoles organizados estaban todavía muy influidos por el programa del Partido Republicano Federal.

Sin duda, el paso más importante para dotar a la clase obrera española de un programa propio fue la constitución de la sección de la Primera Internacional, que coincidió con el contexto revolucionario del país y con el inicio de la pugna entre marxistas y anarquistas. El papel de la Alianza de la Democracia Socialista, y más concretamente de Bakunin, en esa fundación está fuera de discusión. Fue él quien decidió enviar un delegado de confianza para trabar contacto con los obreros españoles y organizar la Internacional y la tendencia anarquista. Ese hombre fue Giuseppe Fanelli, quien en noviembre de 1868 estableció las primeras bases en Madrid y en mayo del año siguiente en Barcelona, con un núcleo más potente y mejor organizado.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Al congreso acudieron 100 delegados que aprobaron por unanimidad defender la república federal.

¹⁰⁶ Sería erróneo pensar que desde el principio existió una coherencia en el mensaje que Fanelli difundió y que los adherentes a la AIT apoyaban sin fisuras el programa anarquista. Como los hechos revelaron, el conocimiento que Fanelli tenía en aquel momento de las ideas bakuninistas era bastante incompleto, y no estaba familiarizado con las divergencias entre marxistas y anarquistas. La impresión que se transmitió a los trabajadores y dirigentes obreros españoles fue que la ADS constituía el centro político de la AIT y, por tanto, que los estatutos y el programa aliancista representaban los principios básicos aprobados por la internacional. Tuvieron que sucederse toda una serie de acontecimientos, celebrarse las conferencias y congresos de la AIT, para que los activistas y dirigentes españoles conocieran en detalle la naturaleza política de las divergencias y se posicionaran mayoritariamente del lado bakuninista. Un análisis de los orígenes de la Primera Internacional en el Estado español y del papel de los partidarios de Bakunin se puede consultar en el libro ya citado de Josep Termes y en la obra clásica de Anselmo Lorenzo *El proletariado militante, memorias de un internacional*, edición de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, Madrid, 2005; también es interesante el texto del historiador libertario Abel Paz, *Los internacionales en la región española 1868-1872*, edición del autor, 1992.

El Centro Federal de Sociedades Obreras, dirigido por Farga Pellicer, se transformó en el foco de propaganda de la Internacional y comenzó en Barcelona la publicación de su periódico, *La Federación*. Según los datos proporcionados por el profesor Termes, las organizaciones integradas en el Centro Federal eran 34, con alrededor de 7.000 afiliados que pronto empezaron a desplegar una intensa actividad huelguística.

Como ya se ha señalado, los primeros militantes obreros de la Internacional no podían dejar de reflejar la presión ideológica de los republicanos federales en su andadura inicial. Una influencia que fue diluyéndose, aunque no de golpe, en base a duras experiencias, especialmente tras el levantamiento de los republicanos intransigentes en 1869. Paso a paso, los obreros más radicalizados sacaron conclusiones, comprendiendo, muy a su pesar, que la legalidad parlamentaria, en la que tanto confiaban los líderes republicanos, no resolvería sus necesidades ni sus aspiraciones. Este proceso se vio reforzado por la evolución política de los dirigentes de la sección española, inclinados crecientemente hacia las ideas anarquistas por los contactos y la correspondencia mantenida con Bakunin tras la participación de los delegados catalanes en el IV Congreso de la AIT, celebrado en Basilea en septiembre de 1869. En definitiva, nuevas ideas y tácticas de combate se abrían paso a través de las viejas formas del asociacionismo obrero.

El paso decisivo en la consolidación de la sección española fue la celebración de su primer congreso, en junio de 1870 en Barcelona. Según Anselmo Lorenzo, reunió a 90 delegados, que representaban a 140 sociedades y 15.000 afiliados. El congreso expresó la realidad del movimiento obrero organizado: 74 de los delegados pertenecían a las sociedades obreras catalanas, aunque también había representantes procedentes de Valladolid, Arahál, Jerez, Baleares, Valencia, Alcoy y cinco delegados del grupo madrileño. El congreso fue un triunfo del grupo en torno a Farga Pellicer, que logró el apoyo mayoritario a las ideas anarquistas: se declaró enemigo de todo gobierno, ya fuese monárquico o republicano, y se pronunció públicamente contra la política del republicanismo federal, abogando, en términos generales, por el abstencionismo político. No obstante, en cuanto a la participación o no en política, los anarquistas “puros” tuvieron que hacer concesiones. Mientras que se recomendaba a las sociedades obreras el abstenerse de participar como colectivo en cualquier actividad de sesgo político, se reconocía el derecho de los individuos, incluyendo los militantes de la AIT, a afiliarse e, incluso, postularse como dirigentes del Partido Republicano Federal. Esta contradictoria resolución debilitaba la posición de la clase trabajadora, a la que se negaba la posibilidad de organizarse políticamente de manera independiente, mientras, en la práctica, permitía a los republicanos pequeñoburgueses seguir manteniendo una clientela abundante en las bases de las organizaciones obreras.¹⁰⁷

A partir del congreso de Barcelona, los progresos de la Regional Española fueron rápidos: en septiembre de 1871 contaba con trece federaciones locales constituidas —entre ellas, Barcelona, Valencia, Madrid, Santander, Bilbao, Cartagena, Málaga, Cádiz y Sevilla— y otras 33 en proceso de constitución. Según los datos de la Regional, en febrero de 1872, un año antes de la proclamación de la Primera República, contaba con 12.514 militantes, y en agosto ya superaban los 15.000.

¹⁰⁷ “Si bien no todos los delegados asistentes al congreso apoyaban los postulados de Bakunin, no es menos cierto que el programa anarquista sí contaba con el apoyo de la mayoría, quienes tenían un perfil muy definido: antipolíticos, antiestatistas, colectivistas y favorables al sindicalismo bajo ciertas condiciones. Otros dos sectores representados en la reunión eran, por un lado, los sindicalistas radicales, más o menos ligados a los bakuninistas y entre los que se encontraban tanto elementos antipolíticos como partidarios de la actividad política, y, por otro, el sector cooperativista, moderado, con relaciones con los republicanos radicales y poco partidarios de la lucha sindical”. Termes, *op. cit.*, pp. 65-133.

GUERRA Y REVOLUCIÓN. LA COMUNA DE PARÍS

Muchos de los interrogantes que la polémica teórica entre marxistas y anarquistas había colocado encima de la mesa fueron resolviéndose con la experiencia de la lucha de clases, más concretamente a partir de la Comuna de París, en marzo de 1871. La primera revolución proletaria de la historia despejó, en gran medida, los elementos centrales de la controversia.

Veinte años antes de la Comuna, el 2 de diciembre de 1851, un golpe militar había llevado al poder a Luis Napoleón Bonaparte, tras la derrota de la insurrección obrera de junio de 1848. El nuevo régimen bonapartista prohibió las organizaciones obreras y, aprovechándose del auge económico, aumentó considerablemente el poder del capital financiero y de los grandes industriales. Parecía que el futuro del nuevo imperio estaba asegurado, pero la crisis económica de 1869 y el resurgimiento de la lucha de clases cambió por completo el panorama. Sometido a la presión interna, el régimen bonapartista se entregó a una estrategia muy arriesgada: buscó en la guerra con Alemania y la anexión de nuevos territorios el medio para resolver sus propias contradicciones domésticas. En palabras de Von Clausewitz, la guerra se transformó en la continuación de la política por otros medios. En agosto de 1870, los ejércitos franceses marcharon contra los de Bismarck en una aventura militarista que acabó en un completo desastre.

Engels señaló que la guerra es siempre la ecuación más compleja. Multitud de factores entran en juego. Las guerras reaccionarias por motivos anexionistas o imperialistas, arrancan a las masas de su rutina cotidiana; y, aunque al principio la atmósfera se llene del veneno chovinista y la propaganda gubernamental, habitualmente dan paso a crisis políticas profundas que trastocan todas las certezas y muestran descarnadamente la decadencia del sistema. Cuando se disipan los vapores de la borrachera patriótica, las masas empiezan a tener una actitud más reflexiva: examinan más detenidamente las acciones del Estado, de los generales, de los políticos y de la prensa, en un grado infinitamente superior al de los tiempos de paz. Mucho más cuando la guerra acaba en derrota. La pretensión de Napoleón III de amputarle a Alemania una parte de sus territorios fue el principio de su propio fin. El 2 de septiembre, cerca de Sedán, en la frontera oriental de Francia, el ejército de Bismarck derrotó a las tropas francesas y capturó al emperador junto a 100.000 soldados. Cuando la derrota fue conocida, las masas parisinas tomaron las calles exigiendo la proclamación de una nueva república democrática.

La oposición burguesa republicana, que había colaborado cínicamente con el régimen de Napoleón III, estaba aturdida y llena de temor ante el movimiento de los trabajadores parisinos, pero tuvieron que ceder a la presión y declarar la república el 4 de septiembre de 1870. El nuevo gobierno republicano burgués, de “defensa nacional”, prometió que no cedería ni una sola pulgada de territorio, a lo que los prusianos respondieron con un cerco militar sobre París. Ciertamente, los republicanos burgueses no creían que la ciudad pudiese ser defendida, pero la actitud de la población, y más concretamente la de la Guardia Nacional —una suerte de milicia popular formada por decenas de miles de ciudadanos parisinos, entre los que destacaban los obreros, muchos de los cuales se encontraban organizados en las filas de la Internacional—, fue muy diferente. La presencia de miles de trabajadores en armas era una amenaza mucho más peligrosa para la burguesía francesa que las tropas prusianas. En esas circunstancias, el gobierno de “unidad nacional” decidió que lo mejor sería capitular cuanto antes, una maniobra que no podía hacerse pública, pero que se empezó a tejer a través de negociaciones secretas con Bismarck.

La burguesía también intentó aislar París apoyándose en las zonas rurales, cuyos votos habían dado la mayoría a los conservadores y monárquicos en las elecciones a la Asamblea Nacional. La Asamblea designó como jefe de gobierno a un empedernido reaccionario, Adolphe Thiers, pero sus cálculos resultaron equivocados. Los trabajadores y sectores pobres de la población parisina, a pesar de todas las privaciones y la escasez general, apoyaron las manifestaciones armadas de la Guardia Nacional, denunciaron a Thiers y a los monárquicos como traidores, y se comprometieron a una “lucha a muerte” en defensa de la República.

Los planes de rendición y la amenaza de la restauración monárquica transformó la Guardia Nacional. Se eligió un Comité Central de la Federación de Guardias Nacionales, que representaba a 215 batallones, equipados con 2.000 cañones y 450.000 armas de fuego, y se aprobaron unos nuevos estatutos en los que se declaraba “el derecho absoluto de los guardias nacionales a elegir a sus dirigentes y revocarlos tan pronto como perdieran la confianza de sus electores”. “El Comité Central de la Guardia Nacional —señala Trotsky— era, de hecho, un Consejo de Diputados de los obreros armados y de la pequeña burguesía. Un Consejo tal, elegido directamente por las masas que han entrado en el camino de la revolución, representa una excelente estructura ejecutiva. Pero al mismo tiempo, y justamente a causa de su ligazón inmediata y elemental con unas masas que se encuentran tal y como las encontró la revolución, refleja no sólo los puntos fuertes de masas, sino también sus debilidades: manifiesta indecisión, atentismo, tendencia a la inactividad tras los primeros éxitos. El Comité Central de la Guardia Nacional necesitaba ser dirigido. Era indispensable disponer de una organización que encarnase la experiencia política del proletariado y estuviese presente por todas partes”.¹⁰⁸

Thiers, que les había prometido a los representantes rurales de la Asamblea restaurar la monarquía, maniobró para poner fin lo antes posible a la situación de *doble poder* en París. A las 3 de la madrugada del 18 de marzo, el gobierno envió 20.000 soldados regulares al mando del general Lecomte con la pretensión de tomar los cañones de Montmartre, controlados por la Guardia Nacional. Los tomaron sin dificultad, pero no habían tenido en cuenta la necesidad de medios para después transportarlos. Cuando las tropas se encontraron rodeadas por una multitud de trabajadores, incluidos mujeres y niños, entró en acción la Guardia Nacional. Algunos soldados empezaron a confraternizar con los guardias nacionales. Lecomte ordenó a sus hombres disparar a la multitud. Nadie disparó. Los soldados y los guardias nacionales se aplaudían mutuamente y se abrazaban. Aparte de un breve intercambio de fuego en la plaza Pigalle, el ejército se desmoronó ante la Guardia Nacional sin ofrecer resistencia. Lecomte y Clément Thomas, el ex comandante de la Guardia Nacional que había disparado a los trabajadores en 1848, fueron arrestados. Los soldados los ejecutaron poco después.

Presa del pánico, Thiers huyó de París a Versalles y ordenó al ejército y a los servicios civiles abandonar la ciudad y los fuertes circundantes. Quería salvar lo que quedaba del ejército y evitar el contagio del París revolucionario. En la capital, el viejo aparato del Estado había quedado fuera de juego y la Guardia Nacional tomó los puntos estratégicos de la ciudad sin hallar resistencia. Por la tarde se formó un gobierno revolucionario basado en el poder armado de la Guardia Nacional.

GOBIERNO REVOLUCIONARIO

La primera disyuntiva a la que se enfrentó el Comité Central fue qué hacer con el poder. Los elementos proletarios propusieron que la Guardia Nacional persiguiera a Thiers y a los restos

¹⁰⁸ León Trotsky, *Las lecciones de la Comuna*, en Marxist Internet Archive.

del ejército hasta Versalles, para acabar definitivamente con su posición. Pero la mayoría de los miembros del Comité Central eran hombres muy moderados, sin el temperamento ni las ideas necesarias para resolver las tareas del momento. En lugar de un plan de acción decidido para aplastar a la burguesía y a la contrarrevolución, decidieron organizar las elecciones a la Comuna que, finalmente, se celebraron el 26 de marzo. Mientras tanto, Thiers utilizó ese valioso tiempo para urdir una campaña de propaganda y mentiras contra París y, con la ayuda de Bismarck, reforzarse militarmente para preparar un nuevo ataque contra la ciudad.

La recién elegida Comuna sustituyó el Comité Central de la Guardia Nacional por un gobierno revolucionario formado por personalidades que, mayoritariamente, se podrían considerar como “republicanos de izquierda”, pequeños burgueses radicales que admiraban el régimen jacobino de la Revolución Francesa. De sus 90 miembros, 25 eran trabajadores, 13 pertenecían al Comité Central de la Guardia Nacional y 15, a la AIT. Entre los trabajadores más radicales predominaban los seguidores de August Blanqui, que, al igual que su líder, eran hombres enérgicos dispuestos a tomar medidas drásticas, pero con ideas políticas muy vagas.

Bajo el impulso revolucionario de las masas, la Comuna realizó reformas importantes: eliminó los privilegios de los funcionarios estatales, congeló los alquileres, los talleres abandonados pasaron a estar controlados por los trabajadores, limitó el trabajo nocturno y aprobó medidas para garantizar la subsistencia de los pobres y los enfermos. Se requisaron los edificios públicos para uso de quienes no tenían un techo. La educación pública se abrió para todos, lo mismo ocurrió con los teatros y los centros culturales. En ese estado de efervescencia, la Comuna se convirtió en un gran parlamento en el que miles de hombres y mujeres del pueblo debatían sobre todos los aspectos de la vida y sobre cómo organizar la sociedad en interés del bien común.

En las condiciones adversas en que surgió la Comuna, la ausencia de cualquier precedente histórico que pudiera servir de guía, de una dirección y de un programa claro, combinado con la crisis económica de una ciudad asediada, necesariamente obligó a los trabajadores a caminar a tientas a la hora de resolver las tareas que implicaba organizar la nueva sociedad. Los errores de los dirigentes de la Comuna fueron muchos y muy variados. Marx y Engels criticaron muy duramente que la Comuna no hubiera tomado el control del Banco de Francia, que seguía pagando millones de francos a Thiers para armarse contra París. Lo mismo puede decirse de las vacilaciones de los primeros días y de la negativa a perseguir a los ejércitos de Thiers hasta Versalles. No obstante, las iniciativas más sobresalientes adoptadas por la Comuna, y concretamente por los trabajadores avanzados, iban en la dirección de emancipar social y económicamente a la clase asalariada.

Aislada del resto de Francia, la Comuna fue derrotada el 28 de mayo después de duros combates entre los comuneros y el ejército contrarrevolucionario de Versalles. Las fuerzas de Thiers causaron una terrible carnicería en la que murieron más de 30.000 hombres, mujeres y niños; varios miles más fueron asesinados en las semanas siguientes. Y 7.000 detenidos fueron desterrados a Nueva Caledonia. “El orden reinaba sobre París. Por todas partes ruinas, muertos, siniestros crujidos. Los oficiales caminaban por el medio de la calle, provocadores, haciendo sonar el sable; los suboficiales copiaban su arrogancia (...) Los emigrados de Versalles, los inmundos seres que arrastran en pos de sí las victorias cesáreas, ensordecían los bulevares. Este populacho se abalanzaba desde el miércoles sobre los convoyes de los prisioneros, aclamaba a los gendarmes a caballo (se vio a algunas damas besar sus botas), aplaudía el paso de los carruajes ensangrentados, acaparaba a los oficiales que contaban sus proezas en las terrazas de los cafés, materialmente acosados por las prostitutas (...) Los cementerios de París absorbieron todo lo que podían contener. Las víctimas innumerables, unas junto a otras, descalzas, llenaron inmensas zanjas en el Père Lachaise, en Montmartre, en Montparnasse, adonde el recuerdo del pueblo va a buscarlas todos los años. Otras fueron

llevadas a Charonne, a Bagnole, a Bicêtre, a Bercy, donde se utilizaron las trincheras abiertas durante el sitio, e incluso algunos pozos (...) Como la inhumación de este ejército de muertos excedía a todas las fuerzas, se trató de disolverlos. Las casamatas habían quedado llenas de cadáveres; se extendieron sobre ellas sustancias inflamables y se improvisaron hornos crematorios, que formaron una inmensa papilla. En el cerro Chaumont se hizo una hoguera colosal inundada de petróleo, y por espacio de varios días, un humo denso y nauseabundo empenachó los jardines (...) Las matanzas en masa duraron hasta los primeros días de junio y las ejecuciones sumarias, hasta mediados del mismo mes (...) El jefe de la justicia militar confesó que había habido diecisiete mil cadáveres; pero un gran número de personas fueron muertas o incineradas fuera de París. No es exagerado decir que llegaron a veinte mil, cifra admitida por los funcionarios oficiales”.¹⁰⁹

DERROCAR AL ESTADO

El 9 de septiembre de 1870, el Consejo General de la Primera Internacional publicó un manifiesto sobre la guerra dirigido a todos los trabajadores de Europa y, en concreto, a los alemanes y franceses. El manifiesto, escrito por Marx, denunciaba la política de anexiones propugnada por el Estado Mayor prusiano tras la derrota francesa y advertía de que semejante política impondría lo más parecido a un estado de guerra permanente en Europa, una nueva época de militarismo, disputas territoriales y odio chovinista. Apoyándose en el espíritu militante del internacionalismo proletario, el manifiesto hacía un llamamiento a los trabajadores alemanes a establecer una paz honorable y a reconocer la república francesa. Asimismo, se instaba a los trabajadores de Francia a no confiar en los republicanos, burgueses sin escrúpulos, y, en las difíciles circunstancias del otoño de 1870, a utilizar la nueva república para seguir construyendo y ampliando la organización política de la clase obrera, independiente de las formaciones burguesas y pequeñoburguesas. En aquel momento, la Primera Internacional no planteaba una lucha abierta por el poder, sino una táctica que reforzase la organización del proletariado.

Esos eran los consejos de Marx y Engels, pero la historia encuentra derroteros muy peculiares para expresar sus necesidades. Tras el levantamiento de la Guardia Nacional y el establecimiento de la Comuna, Marx y Engels apoyaron fervorosamente a los obreros parisinos. A pesar de las dificultades, del debilitamiento que había experimentado a causa de la guerra y de la represión que se batió sobre sus militantes, la Primera Internacional prestó todo su apoyo al movimiento revolucionario y grabó en su bandera el heroísmo de los comuneros, cuyo ejemplo combatiente quedaría como un legado imperecedero.

La táctica preconizada por Marx en septiembre de 1870 fue la de rehuir un combate prematuro contra fuerzas muy superiores, algo lógico considerando la aplastante superioridad de las tropas prusianas. Ese consejo, que posteriormente fue superado por el desarrollo de la lucha de clases, no impidió a Marx y Engels sacar toda una serie de conclusiones valiosísimas de la experiencia de la Comuna de París, que ayudaron a definir con mucha más precisión la estrategia revolucionaria para la toma del poder y las bases políticas de la dictadura del proletariado. A Bakunin y sus partidarios, que también participaron en los acontecimientos, estas consideraciones les tenían sin cuidado; ellos vieron la respuesta de los trabajadores franceses a la traición de los republicanos como un campo de pruebas idóneo para animar la insurrección por encima de cualquier consideración de la situación concreta

¹⁰⁹ H. Prosper-Olivier Lissagaray, *La Comuna de París*, Ed. Txalaparta, Tafalla, 2003, pp. 433-441.

del momento, de la correlación de fuerzas, de un plan elaborado o de una estrategia. ¡Para qué esos nimios detalles, si la lucha revolucionaria y su éxito dependen del ejemplo de una minoría!

Pensando que Francia sería el inicio de un incendio revolucionario en toda Europa, Bakunin eligió la ciudad de Lyon, donde en septiembre de 1870 se había producido un levantamiento, para poner en práctica sus ensayos. En consonancia con toda una tradición *putchista* y autoproclamatoria del movimiento libertario, Bakunin y sus compañeros se instalaron en el ayuntamiento, donde declararon la abolición del Estado y su sustitución por la federación revolucionaria de la Comuna. El intento fue tan ridículo que pereció apenas hicieron acto de presencia los soldados. Desmoralizado, Bakunin abandonó Francia con una amarga sensación de fracaso.

Aunque la Comuna de París ofreció enseñanzas útiles, para el movimiento anarquista y, específicamente, para Bakunin selló sus prejuicios sobre el Estado. En lugar de darse cuenta de que una de las razones principales de la derrota de la Comuna fue su aislamiento del resto de Francia, los anarquistas sacaron como conclusión que la victoria sobre la burguesía se aceleraría con el rápido desarrollo de movimientos comunales locales, aislados y fragmentarios, reforzando así su concepción antiautoritaria, antiestatal y anticentralista. Lo mismo se puede decir de su sectaria y estéril consideración sobre la organización y la participación en política de la clase obrera. Lamentablemente, los prejuicios anarquistas se propagaron inmediatamente a la situación revolucionaria del Estado español y encontraron un terreno fértil y abonado en las filas de la Regional Española.

Marx explicó que la teoría es una guía para la acción, y la acción proporciona a su vez los elementos necesarios para ajustar y corregir las consignas y las tácticas, y para fundamentar nuevas consideraciones teóricas. En eso consiste la relación dialéctica entre la teoría y la práctica revolucionarias. Estudiando las revoluciones de 1848 y de la Comuna de París, Marx y Engels asimilaron las enseñanzas del movimiento vivo de la lucha de clases, fueron profundizando en su concepción de la revolución, en las tácticas revolucionarias y en las tareas del proletariado en el poder.

La Comuna ofreció una panorámica muy concreta sobre todos estos aspectos. En primer lugar, suprimió el ejército permanente y la policía, sustituyéndolos por el pueblo en armas; reemplazó a los burócratas de carrera por funcionarios elegidos directamente por la población y revocables en todo momento; acabó con el poder de la Iglesia, etc. La teoría marxista del Estado, esbozada por Marx en *El manifiesto comunista*, y ampliada después de dos décadas de lucha de clases, se completó finalmente. La Comuna de París demostró que no basta con apropiarse del aparato del Estado burgués, es necesario destruirlo y sustituirlo por un Estado obrero de transición, que no sería una adaptación o una copia de la antigua maquinaria estatal burguesa, sino un Estado bajo el control y la administración democrática de la mayoría de la población. Esta idea fue expuesta en un manifiesto del Consejo General de la AIT escrito por Marx y conocido como *La guerra civil en Francia*, la obra de referencia sobre la Comuna que sintetiza las conclusiones a las que llegaron Marx y Engels y que, en vísperas del triunfo revolucionario de octubre de 1917, tendría su continuidad en el libro de Lenin *El Estado y la revolución*.¹¹⁰

¹¹⁰ “La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al poder, no podía seguir gobernando con la vieja máquina del Estado; que, para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera tenía, de una parte, que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella, y, de otra parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en cualquier momento (...) En segundo lugar, todos los funcionarios, altos y bajos, estaban retribuidos como los demás trabajadores. El sueldo máximo abonado por la Comuna era de 6.000 francos. Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y la caza de cargos, y esto sin contar con los mandatos imperativos que, por añadidura, introdujo la Comuna para los diputados a los cuerpos representativos

INTERNACIONALISTAS BAJO ATAQUE

La represión que se cernió sobre la Comuna afectó a toda la AIT. “La actuación de Thiers fue aprobada por todos los gobiernos de Europa porque, al destruir la Comuna, derrotaba también a la Internacional y al movimiento revolucionario del continente (...) La derrota de la Comuna contribuyó a hacer evidente la idea de que la revolución proletaria era todavía lejana. La actividad internacional de la AIT decae, su labor decrece, disminuyen sus afiliados y pierde dirigentes y núcleos de influencia. Sólo en España y, en menor grado, en Italia, la Internacional sigue desarrollándose y ganando adherentes. El período de auge de la AIT no coincide con el de la Federación Regional Española; a partir de 1871 se inicia la decadencia de aquélla, mientras la Federación Regional sigue una línea ascendente, alcanzando en 1873 —en época republicana— su máximo desarrollo, su punto más brillante”.¹¹¹

La derrota de la Comuna tuvo consecuencias en el Estado español. Por un lado, relanzó una furiosa persecución contra la sección española de la Primera Internacional, persecución en la que participaron activamente las facciones parlamentarias de la burguesía, aunque en diferentes grados. Asimismo, la sangrienta represión de la Comuna a manos de la reacción francesa, vestida de “republicana”, deshizo el mito de que los republicanos estarían al lado de los trabajadores en la defensa de sus derechos. Paso a paso se hizo más profunda la brecha entre los sectores avanzados de la clase obrera, encuadrados ya definitivamente en la Internacional, y el republicanismo burgués y pequeñoburgués. Los ejemplos son muy abundantes. *La Emancipación*, el periódico madrileño de la Internacional, publicó el 24 de julio de 1871 un texto titulado “De por qué combatimos al partido republicano”, donde se planteaba que era incapaz, “a causa de sus preocupaciones y de su organización burguesa, de llevar a cabo la revolución social”. Los republicanos, con su tibieza y su conducta vacilante, con sus semirreformas y su ambición de mando, con su miedo a quedarse fuera de la ley, contribuían a “sostener esta viciosa y corrompida organización social”. El periódico afirmaba que la república, la democracia, el progreso y la libertad no debían ser fórmulas vanas ni palabras engañosas.¹¹²

A lo largo de 1871, la represión contra los internacionalistas españoles se recrudeció. Sagasta envió instrucciones a los gobernadores provinciales concediéndoles poderes ilimitados para perseguirlos, y el 3 de junio anunció que no estaba dispuesto a tolerar su propaganda subversiva. El gobierno planteó en las Cortes un amplio debate sobre la legitimidad jurídica de la Primera Internacional, una falaz coartada para promulgar medidas de excepción contra los internacionalistas. Con todo, la honda preocupación del gobierno y de la burguesía era, sin duda, un reconocimiento de los progresos de la organización y su influencia real en los acontecimientos políticos. En el debate, extensamente documentado por las actas

(...) En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la república democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, es un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, lo mismo que hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los lados peores de este mal, entretanto que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo este trasto viejo del Estado. Últimamente, las palabras ‘dictadura del proletariado’ han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de París: ¡he ahí la dictadura del proletariado!”. Engels, Introducción de 1891 a *La guerra civil en Francia*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2003, pp. 20-22.

¹¹¹ Termes, *op. cit.*, p. 136.

¹¹² Pérez Roldán, *op. cit.*, p. 164.

parlamentarias de la época, sólo algunos dirigentes republicanos, entre otros Pi y Margall y Salmerón, salieron en defensa de las garantías jurídicas para que la Internacional pudiese seguir desarrollando libremente su actividad, pero no se comprometieron de ninguna manera con sus fines ni objetivos. En su discurso parlamentario, Salmerón, futuro presidente de la Primera República, fue muy explícito al reconocer que el Partido Republicano no tenía problemas en amparar una tendencia a favor de la reforma social, sin ocultar que con ese objetivo trataba de impedir una explosión revolucionaria.

Después de atronadoras sesiones en las Cortes contra la actividad de los trabajadores y sus organizaciones, definida en medios gubernamentales como “la utopía filosofal del crimen”, la mayoría parlamentaria autorizó a los gobernadores civiles a disolver sindicatos y secciones de la Internacional. En tal situación, el Consejo Federal de la Regional Española decidió que sus dirigentes más destacados (F. Mora, Anselmo Lorenzo y Morago) se exiliaran provisionalmente en Portugal.¹¹³

La represión enconó las discrepancias entre los partidarios españoles de Marx y de Bakunin. Cuando el Consejo Federal de la Regional Española decidió por unanimidad la creación de grupos secretos de defensores de la Internacional —para mantener la actividad clandestina en caso de que la organización fuese totalmente prohibida—, ya no podía evitar que las divergencias entre marxistas y anarquistas cristalizaran abiertamente. Si los anarquistas seguían siendo una mayoría en las secciones locales y provinciales, algunos de los miembros de su Consejo Federal, con una influencia importante en la federación madrileña y entre los tipógrafos, se inclinaban hacia el marxismo. Dirigentes como Francisco Mora, José Mesa y Pablo Iglesias habían sido ganados a las ideas del socialismo científico a través del contacto personal con Paul Lafargue, dirigente socialista francés de origen cubano y yerno de Marx, que se refugió en España tras la represión de la Comuna, y por la asidua correspondencia intercambiada entre Engels y Mora.

MAYORÍA ANARQUISTA EN LA REGIONAL ESPAÑOLA

Los incidentes que dieron lugar al primer conato de ruptura de la sección española están ampliamente explicados y documentados. En septiembre de 1871 se celebró en Londres una conferencia de la AIT, en la que Anselmo Lorenzo representó a la Regional Española. Veintitrés delegados asistieron a la reunión de Londres, incluidos los miembros del Consejo General de la AIT Marx, Engels y Johann Eccarius.

Entre otras resoluciones, la conferencia aprobó una declaración insistiendo en que los trabajadores de cada país constituyesen su propio partido político, independiente de cualquier partido burgués. Asimismo, ratificó la disolución de la Alianza de la Democracia Socialista. Es significativo que, a propuesta de Marx, la conferencia expresara un reconocimiento especial a la Regional Española por su cumplimiento ejemplar del deber: por el número de miembros, era una de las secciones más fuerte de la Internacional y también era la única que había abonado puntualmente sus cotizaciones. Como era de esperar, los resultados de la conferencia provocaron la oposición encendida de los líderes anarquistas que, inmediatamente, convocaron su propia reunión para el 12 de noviembre en Sonvilier (Suiza), en la que rechazaron todas las decisiones adoptadas en Londres.

¹¹³ Termes, *op. cit.*, p. 148.

Cuando Anselmo Lorenzo volvió a España para dar cuenta de la conferencia, fue incapaz de dar un informe detallado y completo de las divergencias planteadas. Su carácter contemporizador y el hecho de que la personalidad de Marx causara en el patriarca del anarquismo español una profunda impresión le empujaron, en aquel momento, a una postura mesurada. Todavía se hallaba lejana la imagen que en su obra *El proletariado militante* dibujó de sí mismo como antimarxista de la primera hornada.¹¹⁴

Tras la conferencia de Londres, la evolución del grupo dirigente madrileño hacia las ideas marxistas se reforzó notablemente. Pero en realidad era un hecho aislado, ya que, entre enero y febrero de 1872, la inmensa mayoría de las federaciones locales de la Regional Española habían discutido y aceptado las posiciones aprobadas en el congreso anarquista de Sonvilier. Los marxistas estaban en franca minoría en la sección española de la Internacional.

Una serie de incidentes sirvieron de justificación a una ruptura política previsible. El primero tuvo que ver con la carta enviada en el mes de febrero por seis de los redactores marxistas del periódico madrileño *La Emancipación*, algunos de ellos miembros del Consejo Federal de la Regional Española, a una asamblea de los republicanos federales. En la misma solicitaban una definición concreta respecto a la posición que mantendrían los republicanos hacia la Regional Española en el caso de que alcanzaran el poder, además de pedir otras opiniones sobre la problemática de la clase obrera, etc. Utilizando como excusa esta carta, los elementos anarquistas de la federación madrileña se remitieron a las resoluciones aprobadas en el congreso de 1870 y en la conferencia de Valencia de septiembre de 1871 para desautorizar a los partidarios de Marx ante los republicanos federales. La respuesta no se hizo esperar, y José Mesa reiteró públicamente que la misiva había sido enviada en nombre del Consejo Federal y que, por lo tanto, se debería considerar un documento oficial de la AIT. Como reacción, los miembros anarquistas de la federación madrileña expulsaron a los redactores de *La Emancipación*, decisión que, sin embargo, fue revocada por el Consejo Federal, incluyendo el voto favorable de Anselmo Lorenzo.

En cualquier caso, la escisión ya era un hecho en la práctica, tanto a escala nacional como internacional, y aunque fue postergada hasta que el II Congreso de la Regional dictaminase al respecto, nada pudo impedir una ruptura que tenía bases políticas y principistas muy serias. En el II Congreso, celebrado en abril de 1872 en Zaragoza, 16 de los 44 delegados participantes eran miembros activos de la Alianza. Aunque formalmente se acordó la retirada de las expulsiones, las resoluciones volvieron a ratificar el programa anarquista y bakuninista, una orientación política que quedó garantizada con la elección de un Consejo Federal formado íntegramente por aliancistas.

La ruptura definitiva entre marxistas y anarquistas españoles se produjo dos meses más tarde, en junio, tras la exigencia planteada por el Consejo General de la AIT de disolución de la Alianza de la Democracia Socialista. Apoyando firmemente la solicitud, una parte considerable de los líderes de la federación madrileña, antiguos aliancistas y ahora partidarios de Marx y del Consejo General de la AIT, propusieron la disolución de la Alianza en la sección española. Para dar fuerza a la petición, los internacionalistas de Madrid remitieron, en una famosa circular, la correspondencia política enviada desde Suiza por Bakunin a sus partidarios, en la que instaba a fortalecer la Alianza, de manera secreta, como centro director del movimiento revolucionario. Las acusaciones de Marx y del Consejo General sobre una conspiración contra las decisiones adoptadas democráticamente en los congresos eran justificadas, pero, en el fondo, la escisión no respondía a razones organizativas, sino políticas.

La decisión de los marxistas madrileños de hacer públicos esos materiales, sacando a la luz, además, los nombres de los aliancistas más prominentes, provocó la reacción airada de los

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 154.

anarquistas. No sólo protestaron enérgicamente, sino que el órgano de los internacionalistas de Barcelona, *La Federación*, dominado por los bakuninistas, reprodujo los estatutos españoles de la Alianza y su programa con la firma de los dirigentes de la organización. Con este acto denunciaban lo que durante mucho tiempo consideraron una “delación policial” de los marxistas madrileños. En realidad, la escisión buscó un cauce para expresarse, y lo hizo de muy diferentes maneras. El ruido montado por los anarquistas españoles a raíz de ese incidente no podía ocultar que las diferencias programáticas, tácticas y estratégicas en el seno de la Primera Internacional habían llegado a un punto de no retorno.

Este enfrentamiento decisivo reveló la verdadera influencia de marxistas y bakuninistas en la Regional Española: sólo las secciones de Cádiz y Sevilla respondieron a la petición de los madrileños y únicamente la primera de ellas se mostró partidaria del Consejo General de la Internacional. En consecuencia, Mesa, Pagés y Lafargue fueron expulsados de la sección de oficios varios de Madrid por los bakuninistas que la dominaban. La escisión se consumó: los partidarios de Marx fundaron la Nueva Federación Madrileña el 8 de julio de 1872, que fue reconocida inmediatamente por el Consejo General de la AIT en Londres.

Después del congreso internacional de La Haya en septiembre de 1872, que terminó con la exclusión de Bakunin y sus partidarios, y tras la organización por estos últimos de un congreso anarquista en Saint-Imier (Suiza), el Consejo Federal de la Regional Española intentó consolidar su hegemonía frente a los marxistas madrileños. El 24 de diciembre de 1872, la Regional Española celebró su tercer congreso en Córdoba, con la participación de 46 delegados, ratificando las decisiones del congreso de Saint Imier y, obviamente, rechazando las adoptadas en La Haya.

En contraste con la fortaleza de los anarquistas, las dificultades que atravesaba la Nueva Federación Madrileña, su precaria influencia en la base de la Internacional y la presión que ejercía la mayoría bakuninista la llevaron a una situación de parálisis. Su órgano de expresión, *La Emancipación*, desaparecería en abril de 1873 y, como tal, la Nueva Federación se disolvería a mediados de ese mismo año sin jugar ningún papel destacado en los tormentosos acontecimientos del momento.

En esas fechas, la sección española de la Primera Internacional contaba con 236 secciones y 20.352 militantes, una cifra destacable en comparación con la situación adversa de la AIT en el resto de Europa.¹¹⁵ La AIT se extendió a nuevas áreas de la península, logró integrar en sus filas a trabajadores industriales y jornaleros del campo, y dio un paso adelante en la unificación sindical de la clase obrera.¹¹⁶ En palabras de Termes: “La ideología anarquista, en un principio patrimonio de una reducida minoría, ganaba a gran parte de la masa obrera socialmente activa. Esta ideología, de clara raíz bakuninista, fue expuesta en los congresos, en las asambleas locales y en los mítines; la prensa obrera se encargó de difundirla. Cerca de treinta semanarios internacionalistas la propagaban con machacona constancia (...) Se ha sobrevalorado el papel desarrollado en la Internacional por algunas figuras importantes

¹¹⁵ En Catalunya, la Internacional se había fortalecido considerablemente. Sólo en Barcelona tenía más de 7.500 miembros y sus avances sindicales habían sido importantes, con la afiliación en marzo de 1871 de la federación de las Tres Clases del Vapor, la importante sociedad obrera barcelonesa integrada por tejedores mecánicos, tiradores y jornaleros. También en Levante los avances fueron muy significativos: en Alcoy contaba con más de 2.500 miembros y en Valencia, con 1.100. Las cifras para Andalucía también reflejaban un crecimiento sostenido.

¹¹⁶ “La Federación Regional incitó a sus afiliados, a partir de agosto de 1871, a organizar Uniones de Oficios, cuya misión era asociar las federaciones nacionales de oficios semejantes. Se recogía así el ejemplo dado por las *Tres Clases del Vapor* o *Unión de tejedores mecánicos, hilanderos y jornaleros*, que tenía 8.500 miembros en diciembre de 1870 (*La Federación*, 12 de diciembre de 1870). En agosto se fundó la *Unión de constructores de edificios*, que intentaba agrupar a los obreros del ramo de la construcción; en noviembre la *Unión Manufacturera*, potente sindicato textil (con 28.000 federados en mayo de 1872)”. Termes, *op. cit.*, p. 183.

(Lorenzo, F. Mora, Morago, Mesa, Farga, Sentiñón, Alerini), que han sido consideradas como las claves de la Federación Regional (...) Pero junto a todos estos, hallamos, deliberando en los congresos, hablando en los mítines y dirigiendo las manifestaciones, a un amplísimo grupo de gentes —menos brillantes pero mucho más representativas— que defienden y hacen suyos, en todo o en parte, los principios colectivistas (...) la escisión alteró muy superficialmente la Internacional española (...) Militantes afiliados a unas doce o quince federaciones locales siguieron a la Nueva Federación Madrileña; los miembros de cerca de trescientas federaciones se mantuvieron fieles a los principios que creían eran los fundamentales de la Internacional: apoliticismo, antiestatismo, federalismo y colectivismo”¹¹⁷.

LA REPÚBLICA DE 1873. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Las maniobras políticas de Amadeo de Saboya y de la élite gubernamental no lograban dar satisfacción a las fuerzas sociales con las que se encontraban en disputa, es decir, la pequeña burguesía radicalizada, las masas de campesinos sedientos de tierra y la emergente clase obrera. La gran inestabilidad política se manifestó en una multitud de hechos: el asesinato de Prim, el fraccionamiento de los partidos burgueses, el rebrote de la guerra carlista, la intensificación de la insurrección independentista en Cuba, etc. La figura del rey no era ninguna garantía para contener una crisis política que crecía día a día y que a principios de 1873 seguía sin control.

En la histórica tarde del 10 de febrero de ese año, mientras grupos armados organizados por los generales vigilaban las calles de Madrid, en las Cortes los diputados se declararon en sesión permanente con el fin de encontrar una salida al *impasse*. A la mañana siguiente, Amadeo de Saboya abdicó y, tras tres horas de intenso debate, los diputados y senadores, constituidos en Asamblea Nacional, aprobaron, por 256 votos a favor y 32 en contra, la proposición presentada por los líderes republicanos: “la Asamblea Nacional asume todos los poderes y declara como forma de gobierno de la nación la república, dejando a las Cortes constituyentes la organización de esta forma de gobierno”.

La proclamación de la Primera República española abrió las compuertas a la fase más radical de la crisis revolucionaria del sexenio. En primer lugar, reveló la estrechez del apoyo social de la derecha burguesa, incapaz de resolver una situación que se le había ido de las manos. Desacreditada, con una mayoría de la población hostil, desbordada por las dificultades de la coyuntura económica, la burguesía pensó que el cambio de formato político no tendría por qué alterar las bases de su dominación. Aceptando por obligación la llegada de la república, pretendió desde el primer momento desgastar aún más a los republicanos y neutralizar la acción de las organizaciones obreras. La aceptación de una realidad impuesta por las necesidades del momento no significó, en ningún caso, que la burguesía renunciase a hacer de la república un nuevo tinglado político en su beneficio. “En realidad, la proclamación de la República fue la solución dada por un grupo de políticos a un callejón sin salida, pues embarcados todos los hombres de la revolución de 1868 en la monarquía saboyana, quedaron (...) con el poder entre las manos y sin ninguna fórmula de vida política”. Los dirigentes parlamentarios burgueses fueron explícitos al respecto de sus intenciones, y así lo expresó el radical Cristino Martos en la sesión del 11 de febrero de 1873: “Nosotros creemos dos cosas; primero, que la monarquía no es una abstracción, que la monarquía es una realidad que se

¹¹⁷ Termes, *op. cit.*, pp. 174-177.

encarna en la vida de las sociedades humanas, ¿y dónde, señores, pregunto yo a todos los españoles imparciales y amantes de la patria, dónde vamos nosotros, los radicales, a encarnar ahora el principio de la monarquía? ¿Lo vamos a encarnar en la restauración? Esto, con perdón de todas las opiniones, para nosotros, radicales, sería una quimera (...) ¿Vamos a pensar en la quimera de una nueva elección de monarca después de todo lo sucedido? Pues pensaríamos en otro imposible. De modo que pensamos que el principio monárquico es un buen guardador de la libertad y de la democracia; pero no teniendo encarnación posible de este principio, yo pregunto, ¿es que honradamente podemos hacer otra cosa que votar la república? Por eso vamos a votarla”.¹¹⁸

No sería la primera ni la última vez que la clase dominante, para conjurar la amenaza de una revolución, adoptara la máxima “cambiar algo para que todo siga igual”, una táctica oportunista que, sesenta años más tarde, ya en los estertores del régimen monárquico de Alfonso XIII, viejos políticos monárquicos como Maura y Alcalá Zamora entendieron perfectamente. “Los monárquicos de la víspera —los propios ministros del gobierno de Amadeo— se tornaron en republicanos. Pero en realidad, la República comenzó siendo un continente sin contenido, es decir, una República con escaso números de republicanos. De los dos grandes partidos del período monárquico —constitucionales y radicales— el radical (...) decidió pasarse con armas y bagajes a la República. Constituirá así el grupo de ‘republicanos nuevos’ o ‘republicanos de ocasión’”.¹¹⁹

El nuevo gobierno, formado la misma noche del 11 de febrero, era una coalición de radicales burgueses y republicanos. Con la intención de conferirle ante la opinión pública un ropaje inequívocamente tricolor, los líderes del Partido Republicano Federal integraron en él a sus figuras más destacadas. Al frente se situó Figueras como presidente, Pi y Margall como ministro de Gobernación, Salmerón en la cartera de Justicia y Castelar en la de Estado. Pero, a pesar de todo, de las maniobras calculadas y de los acuerdos cínicos, la República representaba, más que en ningún otro momento desde el triunfo de la Gloriosa, la posibilidad de llevar a cabo la revolución democrática burguesa. Ya no se trataba tan sólo de la fracción liberal de la burguesía, sino de su ala izquierda y republicana, aliada a la pequeña burguesía urbana, la que iba a disponer de la posibilidad de acometer las reformas políticas y económicas tan esperadas.

Las juntas revolucionarias reaparecieron de nuevo en muchas ciudades para revocar ayuntamientos y diputaciones controlados por elementos monárquicos y reaccionarios. Sin embargo, los jefes republicanos estaban preocupados principalmente por mantener la legalidad burguesa, muy temerosos de la falta de reconocimiento del nuevo régimen por las potencias europeas, concentradas en la ofensiva represiva contra el movimiento obrero tras la experiencia de la Comuna. La esencia de clase del régimen republicano se manifestó con toda crudeza.

Pi y Margall, cabeza del ala izquierda de los republicanos federales y, sin duda, el representante más claro de la tendencia democrática en aquel período, vaciló permanentemente. Su impotencia para llevar a la práctica sus propias ideas era una expresión de la incoherencia política de la pequeña burguesía. Las ocasiones perdidas se sucedieron sin solución de continuidad desde el mismo momento en que Pi y Margall fue nombrado ministro de la Gobernación. Una de sus primeras decisiones fue ordenar la disolución inmediata de las juntas y la restauración en los ayuntamientos y diputaciones de los mismos alcaldes y gobernadores monárquicos que se habían destacado en la represión antiobrera. “La primera ocasión fue la del 13 de febrero (...) En toda España se han establecido juntas revolucionarias que han depuesto a los ayuntamientos monárquicos: ‘Di al punto —nos

¹¹⁸ Juan Ferrando Badía, *La Primera República Española*, Edicusa, Madrid, 1973, p. 132.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 133.

cuenta [Pi y Margall]— las más apremiantes y severas órdenes para disolver los ayuntamientos’. Primera ocasión perdida. ‘Si me hubiese propuesto hacer la federación de abajo arriba, a pesar de mis compromisos, no habría seguido esta conducta. Con que hubiera combatido tíbamente las juntas, el movimiento se habría extendido pronto a las capitales de provincias. El gobierno y aun la asamblea no habrían tardado en desaparecer, arrollados por la corriente revolucionaria’. El profesor Badía, que cita las elocuentes reflexiones de Pi y Margall, concluye tajante: “Paradojas de la política, un revolucionario teórico hacía la contrarrevolución desde el poder”.¹²⁰

Este inicio decepcionante se vio confirmado por las acciones posteriores. Las tímidas medidas del gobierno a favor de la supresión de los impuestos de consumo, la amnistía a los insurrectos de 1869 o la promesa de supresión de las quintas eran insuficientes. La situación era completamente favorable para que los republicanos impulsasen reformas de gran calado apoyándose en unas masas dispuestas a luchar. Por ejemplo, podrían haber depurado a fondo el ejército de militares reaccionarios. Cuando el 23 de abril de 1873 el gobierno, y Pi y Margall como ministro de la Gobernación, desarticulaban un intento de golpe militar monárquico en el que participaban activamente los radicales, las posibilidades de poder enfrentar esta tarea estaban completamente maduras. Los paralelismos con la historia posterior no dejan de ser asombrosos: también en agosto de 1932 una oportunidad semejante se abrió para el gobierno republicano tras la intentona golpista de Sanjurjo. Pero, en ambos casos, la respuesta al desafío militar fue la misma. “Los radicales —descubierta su conspiración— estaban en la ilegalidad. Pi se hubiera podido convertir en un dictador revolucionario, ‘El partido tenía puesto en mí los ojos’. Pero más liberal —esencialmente liberal— que revolucionario, renunció a las consecuencias naturales de la situación política. ‘Si yo hubiese querido —nos dice— que al día siguiente se hubiese proclamado la República federal, proclamada habría quedado’. Resistió sin embargo las presiones, las exigencias del partido, que pretendía apurar los resultados del triunfo. ‘Todos creían entonces que, por los acontecimientos del 23 de abril, el Gobierno había pasado a ser una dictadura revolucionaria’ (...) ‘A todo y a todos contestaba que había que atenerse a la ley de la Asamblea del 11 de marzo, y dejar a las Cortes Constituyentes la definición y la organización de la República’. Dejó pasar, de esta manera, la gran ocasión revolucionaria”.¹²¹

La proclamación de la república abrió un nuevo período tormentoso en la lucha de clases en el campo y la ciudad. En 1873, los campesinos sin tierra, que a comienzos del siglo XIX no llegaban a un millón, superaban los dos millones.¹²² La masa jornalera, que soportaba unas condiciones de explotación despiadadas, vio en la República una oportunidad para conquistar una vida digna. Sin esperar más tiempo, miles de campesinos y jornaleros pasaron a la acción directa y protagonizaron numerosas ocupaciones de fincas y haciendas en Andalucía y Extremadura. En numerosas localidades se formaron comités campesinos, que prolongaron sus acciones con la destitución de alcaldes y el nombramiento de otros elegidos directamente por las asambleas de vecinos. Ante esta situación, el gobierno republicano reaccionó inmediata y concluyentemente: “La euforia entre los braceros duró poco tiempo. El nuevo gobierno republicano, gobierno de transición, de colaboración entre radicales [burgueses] y viejos republicanos, deseaba granjearse la benevolencia de los propietarios. Las autoridades intervinieron actuando con dureza y la calma fue impuesta con el auxilio de las armas. De hecho, y en lo que se refiere a la cuestión agraria, nada cambió en España con la proclamación de la República (...) al impedir el reparto de tierras, utilizando las tradicionales

¹²⁰ Badía, *op. cit.*, p. 194.

¹²¹ *Ibid.*, p. 195. Las palabras literales de Pi y Margall están tomadas de su obra *La república de 1873*.

¹²² Santiago Álvarez, *El problema agrario y la posición de los comunistas*, Ediciones de la Torre, Madrid, 1977, p. 21.

y no muy bien vistas fuerzas armadas, el nuevo régimen se granjeó la enemiga de los campesinos”.¹²³

La clase obrera también esperó de la República reformas sociales, económicas y políticas rápidas e inmediatas; el margen de confianza se había estrechado tras cinco años de promesas incumplidas y decepciones constantes.

En 1873, la Regional Española contaba con 236 federaciones locales y aproximadamente 20.000 afiliados. Su fortaleza estaba directamente relacionada con la rapidez con que se desarrollaba la crisis social, económica y política del país. La agitación obrera aumentó desde el momento mismo de proclamación de la República, con la organización de mítines en Barcelona a los que asistieron decenas de miles de trabajadores. Sin embargo, los dirigentes anarquistas recibieron la república con ácidas críticas y completa desconfianza, como quedó patente en una circular distribuida a los pocos días:

“AIT. Circular nº 8.- La Comisión Federal de la Federación Regional española a todos los internacionalistas.

“Compañeros: Un cambio inesperado en la política de la clase media ha producido una transformación en el nombre de la organización gubernamental de la presente corrompida sociedad burguesa, a consecuencia del estado ruinoso de la hacienda y de la guerra civil, fomentada por los fanáticos partidarios de la inquisición y del rey absoluto, instituciones criminales y absurdas que no deben ni pueden volver. El resultado de ese cambio en la política burguesa, que, si bien afecta mucho en la forma, es de casi ningún resultado en el fondo de la presente organización autoritaria y centralizadora, ha sido la caída de Amadeo y la proclamación de la República por los mismos monárquicos que un día antes ensalzaban las bondades de la monarquía.

“Nosotros hemos visto con satisfacción el cambio mencionado, no por las garantías que pueda dar a la clase obrera, siempre esquilmada y escarnecida en todas las organizaciones burguesas, pero sí porque la República es el último baluarte de la burguesía, la última trinchera de los explotadores del fruto de nuestro trabajo, y un desengaño completo para todos aquellos hermanos nuestros que todo lo han esperado y esperan de los gobiernos, no comprendiendo que su emancipación religiosa y económica deben ser obra de los trabajadores mismos”.¹²⁴

Las posibilidades de reconquistar el apoyo de estos sectores dependían de un comportamiento firme y decidido por parte del Partido Republicano, de reformas de calado; pero su actuación fue la contraria. La actitud del gobierno ante demandas muy sentidas por los internacionalistas, concretamente la desmovilización del ejército, cuyos mandos monárquicos se habían mostrado incapaces de combatir a los carlistas mientras dedicaban sus energías a reprimir a los trabajadores, fue totalmente decepcionante. Los jefes republicanos, temerosos de provocar a los elementos reaccionarios del ejército, atacaron duramente la propaganda antimilitarista de los internacionalistas. Si su respuesta a las peticiones de reforma agraria y ocupaciones de tierras fue enviar las tropas, nada hizo en cuanto a la reforma militar, salvo confirmar a los oficiales monárquicos en sus puestos y reclamar sus servicios para reprimir las manifestaciones de descontento que se sucedieron en los meses siguientes.

¹²³ Termes, *op. cit.*, pp. 198-199.

¹²⁴ Anselmo Lorenzo, *El proletariado militante, memorias de un internacional*, Edición de la CS Solidaridad Obrera, Madrid, 2005, p. 342.

INSURRECCIONES Y LEVANTAMIENTOS

Los debates sobre la participación en política, zanjados con la ruptura entre anarquistas y marxistas, se reprodujeron en el seno de la sección española de la AIT. El enfrentamiento entre los partidarios de la actividad sindical, desde los precursores del anarcosindicalismo en todas sus variantes hasta los sindicalistas reformistas, y los doctrinarios del anarquismo se empezó a enquistar en este período. “El núcleo dirigente aliancista de la Internacional no confiaba demasiado en las virtudes sociales de la lucha sindical y la aceptaba a regañadientes (para no enajenarse a la masa de militantes sindicalistas, base de la Internacional española) (...) Al mismo tiempo, los aliancistas se quejaban del dinero gastado en huelgas y administración, creyendo que si se hubiese dedicado esta suma a la propaganda se habrían conseguido muchos más prosélitos”.¹²⁵

Estas diferencias en el movimiento libertario español reaparecieron en todos y cada uno de los períodos de auge de la lucha de clases de los sesenta años posteriores. Aunque se enmascararan tras supuestas discrepancias sobre la acción sindical, muchas de esas divergencias reflejaron las contradicciones surgidas de proclamar el abstencionismo político radical y la práctica cotidiana de numerosos trabajadores que no renunciaban a poner su sello en la lucha política. A medida que aumentaban sus efectivos y enraizaba en la clase obrera, la AIT sufría las presiones directas del movimiento. Desde los sectores que por su extracción pequeñoburguesa se inclinaban abiertamente hacia prácticas reformistas y posibilistas de colaboración con los republicanos, hasta aquellos otros que no veían útil el doctrinarismo anarquista para la acción sindical.

Como era de esperar, las mayores discrepancias se concentraron en Catalunya, concretamente en Barcelona, donde la AIT echó raíces más profundas y existía un movimiento obrero que, por su posición, podía ejercer una influencia clara y directa sobre los acontecimientos. Cuando en mayo de 1873 se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, los internacionalistas celebraron numerosas reuniones de sus consejos locales para discutir una posición común, y aumentaron las presiones a favor de participar en ellas, apoyando a los candidatos intransigentes del republicanismo o a candidatos obreros propios. Finalmente, los jefes de la Alianza lograron imponer su programa antipolítico y abstencionista, pero su posición quedó bastante al descubierto.

En el informe que Engels redactó sobre los acontecimientos del verano de 1873 (*Los bakuninistas en acción*), denuncia la actitud de los anarquistas: “El gobierno convocó elecciones a Cortes constituyentes. ¿Qué posición debía adoptar la Internacional? Los jefes bakuninistas estaban sumidos en la mayor perplejidad. La prolongación de la inactividad política se hacía cada día más ridícula y más insostenible; los obreros querían ‘hechos’. Y, por otra parte, los aliancistas llevaban años predicando que no se debía intervenir en ninguna revolución que no fuese encaminada a la emancipación inmediata y completa de la clase obrera; que el emprender cualquier acción política implicaba el reconocimiento del Estado, el gran principio del mal; y que, por lo tanto, y muy especialmente, la participación en cualquier clase de elecciones era un crimen que merecía la muerte. El citado informe de Madrid [Engels se refiere a la Nueva Federación Madrileña] nos dice cómo salieron del aprieto:

‘Los mismos que, desconociendo los acuerdos tomados en el congreso general de La Haya sobre la acción política de la clase trabajadora y rasgando los estatutos de la Internacional, introdujeron la división, la lucha y el desorden en el seno de la federación española; los

¹²⁵ Termes, *op. cit.*, p. 187.

mismos que no vacilaron en presentarnos a los ojos de los trabajadores como unos políticos ambiciosos, que, con el pretexto de colocar en el poder a la clase obrera, pugnaban por adueñarse del poder en beneficio propio; esos mismos hombres que se dan el título de revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc., se han lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política burguesa; no han trabajado para dar el poder político a la clase proletaria, idea que ellos miran con horror, sino para ayudar a que conquistase el gobierno una fracción de la burguesía, fracción compuesta de aventureros, petulantes y ambiciosos, que se denominan republicanos intransigentes.

‘Ya en vísperas de las elecciones generales para las Constituyentes, los obreros de Barcelona, Alcoy y otros puntos quisieron saber qué política debían seguir los internacionalistas, tanto en las luchas parlamentarias como en las otras. Se celebraron con este objeto dos grandes asambleas, una en Barcelona y otra en Alcoy, y los separatistas (los aliancistas) se opusieron con todas sus fuerzas a que se determinara cuál había de ser la actitud política de la Internacional (¡de la suya, nótese bien!), resolviéndose que la Internacional, como asociación, no debe ejercer acción política alguna; pero que los internacionales, como individuos, podían obrar en el sentido que quisieran y afiliarse en el partido que mejor les pareciese, siempre en uso de la famosa autonomía. Y ¿qué resultó de la aplicación de una teoría tan bizarra? Que la mayoría de los internacionales, incluso los anárquicos, tomaron parte en las elecciones, sin programa, sin bandera, sin candidatos, contribuyendo a que viniese a las Constituyentes una casi totalidad de burgueses, con excepción de dos o tres obreros, que nada representan, que no han levantado ni una sola vez su voz en defensa de los intereses de nuestra clase y que votan tranquilamente cuantos proyectos les presentan los reaccionarios de la mayoría’.¹²⁶

Los sectores anarquistas de la Alianza reforzaron el carácter sectario y aventurero de su política. Declarándose partidarios de la vía insurreccional, se volvieron cada vez más renuentes a una acción sindical revolucionaria. El progreso organizativo del movimiento obrero en Barcelona y su amplitud se convirtió en un obstáculo para la táctica de los anarquistas “puros”. Las pretensiones de pequeños círculos secretos, con sus métodos conspirativos aparentemente autosuficientes para conmocionar al resto de los oprimidos, chocaba con la experiencia de los trabajadores a los que se pretendía agitar. Una mayoría de las secciones barcelonesas y catalanas no les siguieron en el camino propuesto.

La polarización política no amainó en los primeros meses de la República. Al contrario, las aspiraciones frustradas no hicieron más que radicalizar a los sectores que teóricamente constituían la base social del nuevo régimen. Un paso en ese proceso fue la decisión de aprobar nominalmente la república federal en las Cortes constituyentes el 8 de junio de 1873, y la redacción de una nueva constitución, de la que sólo llegó a debatirse el título primero. En realidad, a pesar de sus declaraciones formales, el gobierno, y especialmente los sectores más conservadores del Partido Republicano, que controlaban el grupo parlamentario, no estaba dispuesto a llevar a cabo las reformas políticas necesarias para la implantación de una república federal.

Pi y Margall, al frente de ejecutivo republicano desde junio tras la salida de los radicales y del boicot al Parlamento por parte de la derecha, trataba inútilmente de conciliar y contentar a todas las partes. Quería un acuerdo con los republicanos intransigentes y, a su vez, consolidar la base popular de la República, para lo cual adoptó algunas medidas legislativas progresistas, como el establecimiento de jurados mixtos entre patronos y obreros, y la regulación del trabajo de los menores de 16 años. Pero la radicalización de la base social de los republicanos se exacerbaba ante la ausencia de medidas reales. “La situación se ponía cada día más tensa y los ‘intransigentes’ pensaban ya en la insurrección cantonal. Era fácil sembrar el desconcierto porque mientras en las Cortes se teorizaba sobre los derechos del hombre, en Andalucía y

¹²⁶ “Los bakuninistas en acción”, en Marx y Engels, *España revolucionaria, op.cit.*, p. 236.

Extremadura los hombres seguían trabajando la tierra para el señor. Las autoridades locales agravaban la situación, cerrando los locales obreros o prohibiendo sus reuniones, como sucedió en Jerez, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda, Valencia, Palma, etc.”¹²⁷

La historia de 1869 se volvió a repetir: los llamados republicanos intransigentes, descontentos por la lentitud del gobierno en implantar las reformas federales y que no habían cejado en sus empeños insurreccionales, se alzaron en armas a mediados de julio en diversas ciudades de Andalucía (Málaga, Cádiz, y Granada), en Valencia y en Cartagena. Estos pronunciamientos cantonalistas, sin perspectiva ni estrategia, conectaban con la irritación de la pequeña burguesía y la insatisfacción de la clase obrera y del campesinado. Todo se mezclaba. Por un lado, la desafección de los trabajadores, por otro, un sentimiento, que había prendido con fuerza entre elementos de los republicanos pequeño burgueses más radicales, de que el gobierno de Madrid, la burocracia central, el ejército, se habían convertido en un freno para el progreso de las provincias más prósperas, ligadas al comercio, la industria y la agricultura capitalista. Las fuerzas centrífugas se alimentaban de la crisis económica y política, de tal forma que el problema nacional, enmascarado y distorsionado de mil maneras, volvería insistentemente al centro de la lucha política.

El movimiento cantonalista como tal fue desautorizado formalmente como una maniobra burguesa por los líderes aliancistas de la Regional Española, pero esto no impidió que en diferentes zonas los militantes internacionalistas, y numerosos trabajadores, se batieran en las barricadas en una lucha improvisada y sin esperanza. “La insurrección tuvo mayor importancia en la zona de Levante y en Andalucía, aunque con características distintas en ambos casos. Mientras que en Levante hubo un predominio burgués, en Andalucía el componente social fue muy importante. Dice por ejemplo Clara E. Lida que ‘mientras el Cantón de Cartagena no se apartó de la política republicana federal que sus líderes habían defendido desde la facción intransigente’, en muchos cantones andaluces los comités de salud pública dieron a la insurrección una ‘marcada tendencia socialista’, e incluso estos comités estuvieron integrados no sólo por republicanos, sino también por internacionalistas, hasta llegar a dominar éstos el de Sanlúcar de Barrameda”.¹²⁸

Es cierto que no hubo ninguna decisión por parte de los líderes aliancistas de la AIT española en promover el levantamiento cantonal, aunque, en su prensa internacional, los bakuninistas se atribuyeron su paternidad en varias ocasiones. Con todo, los anarquistas no renunciaban a sus pretensiones de desencadenar la revolución social aprovechando la declaración de la República Federal y la crisis provocada por los republicanos intransigentes, pretensiones que no pudieron rebasar determinados límites. En Barcelona, los anarquistas partidarios de la vía insurreccional quedaron en minoría dentro de las secciones obreras de la AIT. No hubo insurrección ni levantamientos, sino huelgas y paros en demanda de mejoras laborales y de más contundencia en la lucha contra los carlistas. Pero en la ciudad alicantina de Alcoy, sede del Consejo Federal de la Regional Española desde finales de 1872 y donde la fuerza de la AIT era indiscutible, los partidarios de la Alianza sí lograron poner en práctica sus métodos. Tras la convocatoria de una huelga general el 7 de julio, la intransigencia del alcalde republicano en no aceptar las demandas laborales y políticas planteadas y su recurso a la fuerza desencadenaron día y medio de combates. Los internacionalistas se hicieron con el control de la ciudad y organizaron un comité revolucionario, en el que participaban también destacados republicanos intransigentes. Pero la insurrección de Alcoy quedó aislada y fue derrotada.

¹²⁷ Manuel Tuñón de Lara, *La España del siglo XIX*, op. cit., p. 17.

¹²⁸ Pérez Roldán, op. cit., p. 240.

TRIUNFO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN

“La Primera República española repite las etapas de toda revolución clásica. Un primer momento moderado, una situación radical y una reacción de signo nuevamente reaccionario”.¹²⁹ El gobierno, totalmente desbordado por los acontecimientos, entró en crisis. La guerra de Cuba, la sublevación carlista, la oposición activa de la derecha y los monárquicos, y la pérdida de apoyo entre la clase trabajadora y los sectores más radicales de la pequeña burguesía llevaron a Pi y Margall, presidente del gobierno republicano desde el 11 de junio, a dimitir el 18 de julio, para evitar encabezar la represión que se cernía sobre los insurrectos.

La salida del líder federalista no supuso ninguna solución, al contrario, la República se inclinó más a la derecha. Salmerón, nuevo presidente de la república, encargó a los generales monárquicos Martínez Campos y Pavía el aplastamiento del levantamiento cantonalista en Levante y Andalucía. Así describe Tuñón de Lara aquellos acontecimientos: “Y todo eso lo hacía con el ejército tradicional, con los mandos tradicionales. Salmerón lo dijo meses después: ‘Yo no he querido nunca hacer un ejército republicano (...), pero sí he querido y quiero que no decidan los militares la marcha política del país, que no disponga el sable de la suerte de la República’. Y esto lo decía don Nicolás pocas horas antes de que el sable de uno de quienes él confirmó en el poder, el sable de Pavía, asestase un golpe de muerte a la República. Y otro de ‘sus’ sables, el de Martínez Campos, remataría la empresa un año más tarde”.¹³⁰

Después de días y semanas de asedio y combates, o meses en el caso de Cartagena, los levantamientos fueron aplastados. A finales de julio, Pavía había sofocado el movimiento cantonalista en Andalucía, pero Martínez Campos no pudo entrar en Valencia hasta el 8 de agosto, enfrentándose a una dura resistencia de los trabajadores y de la junta revolucionaria de la ciudad. El último enclave resistente, la ciudad de Cartagena, que pudo mantenerse gracias a su emplazamiento geográfico y al cinturón de fuertes que la rodeaba, fue tomado finalmente en enero de 1874. Decenas de prisioneros fueron fusilados sin juicio, cientos de republicanos intransigentes y trabajadores fueron encarcelados y numerosas federaciones de la AIT sufrieron los golpes de la represión, incluyendo su disolución, como fue el caso de las gaditanas. En septiembre de 1873, Salmerón fue remplazado por el aún más conservador Castelar, que no sólo no dudó en ordenar la toma militar de Alcoy y el encarcelamiento de los internacionalistas, sino que declaró el estado de sitio, la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación de la pena de muerte para los insurrectos y los soldados insubordinados.¹³¹

Tras la derrota de la insurrección cantonal, la conspiración en los cuarteles se desarrolló sin pausa ni obstáculos. Los generales pronto se ofrecieron a Castelar para dar un golpe de Estado y asestar un mazazo definitivo al régimen republicano, y aunque Castelar se negó a aceptar la propuesta, no hizo ningún intento de apartar a esos generales de sus puestos. Con la crisis acelerándose, a finales de diciembre Salmerón propuso a Castelar un plan para “salvar

¹²⁹ Badía, *op. cit.*, p. 180.

¹³⁰ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 19. No es posible, al leer estas palabras, dejar de pensar en los paralelismos con lo ocurrido en los días de julio de 1936 que precedieron al golpe militar de Franco. Cuando el gobierno conocía perfectamente lo que se estaba cocinando en los estados mayores, cuando los militares leales de la UMRA (Unión de Militares Republicanos Antifascistas) habían informado a Azaña, a Casares Quiroga y a otros de los planes golpistas de Franco, Mola y compañía, los líderes republicanos también los confirmaron en sus puestos.

¹³¹ Termes, *op. cit.*, p. 230.

la República”: salida de los ministros derechistas del gobierno, depuración de los generales sospechosos, organización de un ejército nacional dirigido desde Madrid por el gobierno, discusión y voto inmediato de la constitución. Castelar rechazó tajantemente el plan de Salmerón.

En esos meses, la contrarrevolución se hizo cada vez más audaz. Las palabras de Pi y Margall son un buen testimonio de ello: “Mis sucesores, Salmerón y Castelar, cerrando los ojos a la experiencia, perdiendo por completo de vista que la República tenía aquí mucha menos fuerzas que en Francia y era, por lo tanto, más inconveniente quebrantarla, se decidieron, llevados sin duda por el mejor deseo, a dominar las insurrecciones republicanas sólo por el hierro y el fuego. Pretendieron que debían combatirlos antes y con más encarnizamiento que la de don Carlos y llegaron a considerar vergonzosa y en desdoro de su autoridad toda transacción con los rebeldes. Ametrallaron pueblos, bombardearon ciudades, desarmaron milicias, persiguieron y prendieron hasta por sospechas, y dejaron que el general Pavía quitase y pusiese a su antojo ayuntamientos, estableciendo, por donde quisiese que pasase, una verdadera tiranía. Aplaudían los conservadores, pero siendo cada vez más exigentes y empujando cada vez por su camino a nuestro Gobierno. El primero de mis sucesores [Salmerón] recordó y quiso pararse. Fue arrollado por la corriente, y vino otro, siguiéndola, sin pensar ni un momento en atajarla ni en ganar sus márgenes, y puso a los tres meses atada de pies y manos a la República a las plantas de un soldado. ¡Con qué júbilo, con qué fruición nos leían aquellos gobiernos en las Cortes los telegramas en que se daba cuenta de las victorias obtenidas sobre los pueblos insurrectos! Las cantaban ellos y los suyos en todos los tonos, sin advertir que cantaban los funerales de la República”.¹³²

El 2 de enero de 1874, cuando las Cortes abrieron sus sesiones y el gobierno fue derrotado por un escaso margen de votos, el golpe de Estado se precipitó. Al día siguiente, el general Pavía ocupaba militarmente las calles céntricas de Madrid y cercó el Congreso de los Diputados, logrando fácilmente su capitulación. Lo que sucedió después es la crónica de la consolidación de la contrarrevolución burguesa a través de sucesivos gobiernos cívico-militares, hasta que un nuevo golpe, encabezado esta vez por los generales Martínez Campos y Primo de Rivera, restableció la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, el primogénito de Isabel II, a finales de diciembre de 1874.

En palabras de Tuñón de Lara: “Los gobiernos republicanos de 1873, los teorizantes llegados al poder sin visión muy precisa de la realidad social y ya temerosos de llevar una revolución hasta sus últimas consecuencias, dejaron incólumes todo el poder material y todos los resortes de acción en manos de las clases conservadoras del ‘antiguo régimen’ que, desposeídas del mando político, temían verse pronto desposeídas de su privilegiada situación económica. En realidad, no hacía sino proseguirse el proceso iniciado al abrirse el ciclo revolucionario en 1868. La burguesía española, que tenía interés en desembarazarse de la tutela y los privilegios de la aristocracia, no pasaba de tímidos ensayos por miedo al ‘cuarto estado’”.¹³³

En menos de un año las esperanzas puestas en los líderes republicanos se consumieron amargamente. La contrarrevolución fue preparada paso a paso por la política de unos dirigentes que no podían desprenderse de sus ataduras de clase y temían, por encima de todo, el movimiento independiente de las masas. Sin éstas y contra éstas, era imposible llevar a buen término las medidas democráticas y radicales que debían barrer el poder y los privilegios de la alianza aristocrático-burguesa. Las lecciones del sexenio revolucionario se

¹³² Pi y Margall, *La República de 1873, apuntes para escribir su historia*, citado en el artículo de Joaquín Maurín, “La Primera República”, en *La Nueva Era. Antología de una revista revolucionaria*, Ediciones Júcar, Madrid, 1977, p. 89.

¹³³ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 23.

proyectarían trágicamente seis décadas después, en el momento culminante de la revolución española.

III

SOCIALISTAS Y ANARCOSINDICALISTAS

La derrota de la Comuna de París abrió un nuevo ciclo político y económico en Europa. La furia reaccionaria de los gobiernos del continente, además de la legislación antisocialista contra las organizaciones obreras, llevó a la disolución de la Primera Internacional. La clase trabajadora tuvo que agachar la cabeza durante unos cuantos años, lo que contribuyó considerablemente a una nueva fase de acumulación capitalista, con consecuencias importantes.

En muy poco tiempo, Alemania se transformó en una potencia industrial. El avance de las fuerzas productivas acentuó la concentración de capital, con la aparición de los monopolios y, con ello, las condiciones para el desarrollo del imperialismo y el dominio del capital financiero. Impulsados por el crecimiento de la economía y la conquista del mercado mundial, se desató una carrera desenfrenada por la explotación de las colonias y por un nuevo reparto del mundo. Esta nueva etapa de la historia del capitalismo concluyó en un conflicto militar sin precedentes.

LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA

En el Estado español, el panorama sintonizaba con los nuevos aires que soplaban en Europa. El régimen de la Restauración borbónica fruto de la victoria contrarrevolucionaria, suprimió de raíz las tímidas reformas políticas recogidas formalmente en la Constitución de 1869 y, por supuesto, las llevadas a cabo por las Cortes republicanas. Las instituciones representativas pasaron a mejor vida y, en su lugar, una asamblea de ex diputados y ex senadores eligió una “comisión de notables” para redactar un nuevo texto “constitucional”, aprobado finalmente en junio de 1876 y que dotó de amplios poderes a la monarquía.

En el nuevo ordenamiento, el rey poseía derecho a veto y era obligatorio que las decisiones legislativas de las Cortes fuesen sancionada por él, estaba facultado para designar a una parte de los senadores y de la presidencia del Senado, le correspondía convocar las Cortes, suspenderlas, cerrar sus sesiones y poder disolver separada o simultáneamente la parte electiva del Senado y del Congreso de los Diputados. Y, por supuesto, el gobierno era responsable ante el soberano. El monarca concentraba en sus manos la capacidad para decidir sobre todas las cuestiones políticas esenciales. Al mismo tiempo, un proceso de centralización administrativa y política se puso en marcha como respuesta del ejército, la corona y la burguesía a las intentonas federales y las insurrecciones cantonales. Entre otras decisiones, la monarquía suprimió los fueros vascos en julio de 1876, incorporando su territorio al reclutamiento militar obligatorio y al pago de derechos e impuestos.

Uno de los fenómenos más sobresalientes de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX fue la configuración definitiva de la clase dominante a través de una constante interpenetración entre las grandes familias de la nobleza, los grandes propietarios agrarios (aristócratas o burgueses) y una clase capitalista que fortaleció su poder económico. Los negocios coloniales y los derivados de las guerras carlistas, las inversiones y exportaciones

de la industria minera, la producción siderúrgica y eléctrica, el transporte y, por supuesto, el sistema bancario y financiero prosperaron. Una tupida red de intereses comunes se fue tejiendo a través de estos negocios, los matrimonios y el ennoblecimiento de la burguesía. Las cien familias más ilustres de la oligarquía española conformaron una realidad que aún subsiste en la actualidad.¹³⁴

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885 y la regencia de María Cristina, los dos principales partidos de la burguesía, el Conservador, de Cánovas, y el Liberal, de Sagasta, construyeron minuciosamente un entramado de alternancia en el gobierno gracias al sistema caciquil del encasillado¹³⁵. Parecía que la vida pública se podía controlar con mano de hierro.

No obstante, bajo esta fachada aparentemente sólida, las contradicciones de un capitalismo débil y atrasado no dejaban de aumentar. Las tendencias subyacentes se expresaron en numerosos asuntos que afectaron a la estabilidad del régimen. Para empezar, lo que no pudieron impedir conservadores ni liberales, ni el conjunto de la clase dominante, fue el eclipse definitivo del pasado imperial de la corona española y de sus vanas aspiraciones de gran potencia. Con los últimos años del siglo, la lucha contra el colonialismo español en Marruecos entró en una fase ascendente, pero el golpe más duro llegaría en 1898, con la pérdida definitiva de las últimas colonias de ultramar.

El retroceso del movimiento obrero permitió a la burguesía española aumentar sus tasas de beneficios, y aunque en el último tercio del siglo XIX el país mantuvo su carácter agrario, la industrialización registró nuevos avances. Dialécticamente, este proceso de crecimiento industrial, más vigoroso desde finales de siglo, tendría efectos políticos importantes: permitió la ampliación de las concentraciones proletarias en las zonas tradicionales (Cataluña) y la aparición de otras vinculadas a la minería y la siderurgia (Vizcaya, Asturias). Y así, una nueva generación de obreros fue emergiendo tras el fracaso del sexenio revolucionario, nutriéndose de la inmigración campesina. Un proceso lento pero ininterrumpido en el que decenas de miles de nuevos asalariados se hacinaban en los arrabales de las ciudades en condiciones terribles de miseria, marginalidad y explotación. La anterior clase obrera, con un peso social más limitado y ligada al viejo sistema de producción artesanal, fue dando paso a un proletariado que enlazaba sus viejas tradiciones políticas y organizativas con otras nuevas y más avanzadas, a pesar de la herida que el triunfo contrarrevolucionario le había infligido.

Con la subida al trono de Alfonso XIII, el 17 de mayo de 1903, las estructuras políticas del reinado de su padre se mantuvieron inmovibles, incluyendo la retrograda constitución de 1876. El nombre de Alfonso XIII quedó asociado a la continuidad de un sistema político basado en las fuerzas más conservadoras de la sociedad. En su haber destaca una política al servicio de los intereses de los poderosos: desde la represión sangrienta del movimiento obrero a la guerra colonial de Marruecos; el amordazamiento de las libertades de expresión, organización y reunión; la ampliación de los privilegios de la Iglesia y, por supuesto, la acumulación de una fortuna multimillonaria a costa del robo del patrimonio público. Fue así

¹³⁴ Respecto a la fusión entre la burguesía y la vieja aristocracia, Jesús Infante, estudioso de las grandes fortunas, señala: “Hay también, sin embargo, herederos de grandes títulos nobiliarios que forman parte de los consejos de administración de modernas empresas, aunque por lo general esta presencia corresponde a miembros de una burguesía aristocratizada con títulos nobiliarios a partir del siglo XIX. El proceso fue doble, porque la burguesía industrial y también en parte financiera o crediticia, y en otros muchos casos usurera, se aristocratizó adquiriendo títulos nobiliarios, lo cual provocó una renovación de los círculos cerrados y endogámicos de una aristocracia en declive. Paralelamente, la burguesía se adaptó al molde ideológico de la aristocracia, que proponía unos valores del pasado con raigambre medieval considerados socialmente hasta entonces como supremos”. Jesús Infante, *Los muy ricos. Las trescientas grandes fortunas de España*, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1998, pp. 29 y 34. Tuñón de Lara también documenta profusamente este proceso.

¹³⁵ El sistema del encasillado consistía en que el gobierno adjudicaba los escaños a dedo, en función de los acuerdos entre partidos.

como Alfonso XIII, igual que sus predecesores en el trono, sellaron una alianza a sangre y fuego con los propietarios del país.

REFLUJO OBRERO

El futuro de las organizaciones obreras, a pesar de todas las adversidades, también se fue escribiendo en este período. Tras la traición a sus expectativas por la pequeña burguesía republicana, el movimiento obrero nacido de la gran crisis del sexenio revolucionario se enfrentó a duras pruebas. Las dificultades propias de la clandestinidad, la desarticulación de las sociedades obreras y el atraso económico allanaron el camino a la ofensiva de los empresarios y los terratenientes, respaldados por un gobierno dispuesto a reprimir sin contemplaciones las demandas más básicas de los trabajadores y los campesinos.

La respuesta obrera al golpe militar de finales de 1874 fue muy débil. Los internacionalistas habían quedado seriamente dañados tras el fracaso de los levantamientos cantonalistas y la amarga experiencia de Alcoy, derrotas que empujaron a los dirigentes anarquistas del Consejo Federal a radicalizar aún más su discurso insurreccional. En semejante contexto, esta actitud sólo podía enfrentarles más agriamente con los sectores que dentro de la sección española de la AIT mantenían una presencia real entre los trabajadores.

Los aliancistas fracasaron en su intento de desencadenar la “revolución social” con sus métodos *putchistas* y su programa anarco-colectivista y, en todo caso, tampoco evitaron que una masa considerable de trabajadores se batiera en las barricadas junto con los republicanos intransigentes. La ausencia de una posición de clase independiente y su aversión hacia la política pusieron de manifiesto los límites de la estrategia anarquista. En su análisis del papel de los bakuninistas en los acontecimientos del verano de 1873, Engels es muy crítico: “Examinemos, pues, el resultado de toda nuestra investigación: 1) En cuanto se enfrentaron con una situación revolucionaria seria, los bakuninistas se vieron obligados a echar por la borda todo el programa que hasta entonces habían mantenido. En primer lugar, sacrificaron su dogma del abstencionismo político y, sobre todo, del abstencionismo electoral. Luego, le llegó el turno a la anarquía, a la abolición del Estado; en vez de abolir el Estado, lo que hicieron fue intentar erigir una serie de pequeños Estados nuevos. A continuación, abandonaron su principio de que los obreros no debían participar en ninguna revolución que no persiguiese la inmediata y completa emancipación del proletariado, y participaron en un movimiento cuyo carácter puramente burgués era evidente. Finalmente, pisotearon el principio que acababan de proclamar ellos mismos, principio según el cual la instauración de un gobierno revolucionario no es más que un nuevo engaño y una nueva traición a la clase obrera, instalándose cómodamente en las juntas gubernamentales de las distintas ciudades, y además casi siempre como una minoría impotente, neutralizada y políticamente explotada por los burgueses (...) 3) Lo único que ha quedado en pie de los llamados principios de la anarquía, de la federación libre de grupos independientes, etc., ha sido la dispersión sin tasa y sin sentido de los medios revolucionarios de lucha, que permitió al Gobierno dominar una ciudad tras otra con un puñado de tropas y sin encontrar apenas resistencia”.¹³⁶

¹³⁶ “Los bakuninistas en acción”, en *España revolucionaria*, p. 252. Por otro lado, la escisión de la internacional entre marxistas y bakuninistas se consumó definitivamente en septiembre de 1873 con la celebración en Ginebra de sendos congresos. Los anarquistas, que contaron con la participación de delegados de Gran Bretaña, Suiza, Francia, Países Bajos, Bélgica y España, se solidarizaron con la actuación de los internacionalistas españoles (representados en el congreso por Farga Pellicer, García Viñas, Alerini, Brousse y Marquet).

Entre 1870 y 1873, la sección española de la Primera Internacional se había extendido ampliamente a las comarcas andaluzas, Castilla y País Valenciano, además, por supuesto, de Catalunya, donde se encontraban sus principales bastiones. Pero la represión la golpeó en un momento de reflujo general del movimiento. La Regional Española fue suprimida por decreto gubernamental en 1874, lo que obligó a sus dirigentes a pasar a la clandestinidad. El período comprendido entre febrero de 1874 y 1881, fecha en la cual las sociedades obreras pudieron reaparecer amparadas por la permisividad del gobierno liberal, está tamizado por la brutal represión gubernamental contra el movimiento internacionalista.

El aislamiento del movimiento obrero, la represión y la clandestinidad aceleraron el apoyo de destacados líderes aliancistas españoles a las tácticas del terror individual,¹³⁷ tácticas que no eran aceptadas por una masa obrera en retirada ni tampoco por un sector de los propios aliancistas que había logrado conservar su conexión, aunque precaria, con el movimiento. El auge de las ideas nihilistas indicaba la fuerte presión de la situación objetiva y la desmoralización colectiva que se vivía en las filas de los internacionalistas de filiación anarquista. En poco tiempo, estas contradicciones cristalizaron en una ruptura interna: por un lado, los firmes defensores de los métodos de la violencia individual, los aliancistas madrileños, encabezados por Viñas y González Morago; por otro, los partidarios de la reconstrucción de las sociedades obreras, posiciones que representaban los dirigentes sindicales aliancistas de Barcelona, mucho más ligados al movimiento real de los trabajadores. Esta última fracción, de la que formaba parte Farga Pellicer, entre otros, utilizó su peso real en las organizaciones obreras de Barcelona para destituir, en febrero de 1881, a la comisión federal de la Región Española, eliminando al secretario de la misma, Anselmo Lorenzo.

En 1881, y bajo la cobertura de un nuevo gobierno liberal, las asociaciones obreras de Barcelona empezaron a remontar la situación de postración vivida en los años anteriores. Los anarcosindicalistas aprovecharon la situación para reanudar la actividad pública. El 20 de marzo organizaron una asamblea obrera para defender la reconstrucción de una nueva federación regional de trabajadores basada en un esquema organizativo muy similar al del congreso de Barcelona de 1870: los sindicatos de oficio y las federaciones locales.¹³⁸ Tres meses después, el 10 de junio, más de mil obreros de la construcción de Barcelona y las localidades limítrofes se reunieron para plantear la lucha por la jornada de ocho horas.

Todo este trabajo preparatorio culminó en septiembre de 1881 con la celebración de un congreso en Barcelona, al que acudieron 140 delegados en nombre de 162 federaciones, que tomó la decisión de reorganizar las fuerzas de la Internacional bajo el nombre de Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Los rápidos progresos alcanzados se pusieron de relieve en el congreso de 1882, en Sevilla, con la presencia de 216 delegados en representación de 633 secciones, 218 federaciones y cerca de 59.000 afiliados.¹³⁹ El congreso declaró su filiación anarco-colectivista, apoyó la reivindicación de la jornada de ocho horas y proclamó como meta la revolución social.

Sin embargo, la perspectiva de avance quedó frustrada rápidamente tras los turbios sucesos de la Mano Negra en Andalucía, que permitieron al gobierno realizar un gran montaje

¹³⁷ El congreso internacional de los bakuninistas de septiembre de 1877, celebrado en Verviers y que tuvo una presencia muy escasa de sociedades obreras, era una buena radiografía del estado general de descomposición del movimiento anarquista. Los representantes españoles (García Viñas y González Morago) defendieron ardientemente los métodos del terrorismo individual, *la propaganda del hecho*, sintonizando perfectamente con la desesperación que cundió entre las filas libertarias en el contexto político de reacción y que marcó todo un período de atentados nihilistas en el Estado español, Francia, Italia, Rusia y EEUU.

¹³⁸ Termes, *op. cit.*, p. 301.

¹³⁹ Juan Gómez Casas, *Historia del anarcosindicalismo español*, Malatesta Editorial, Madrid, 2006, p. 86.

publicitario y judicial contra las organizaciones anarquistas y lanzar de nuevo una andanada represiva contra la FTRE. Se detuvo a miles de campesinos, se dictaron 300 condenas de cárcel y se produjeron 8 ejecuciones. El III Congreso de la FTRE se celebró en Valencia y congregó a 152 delegados en representación de 222 federaciones y 539 asociaciones. La reunión condenó los actos de la Mano Negra, pero no pudo impedir el descontento de sectores anarquistas minoritarios que seguían defendiendo el terrorismo individual.

Finalmente, la Federación colapsó en pocos años y al congreso de Madrid de 1887 solamente concurrirán 16 delegados; en 1888, el congreso de Valencia dio por disuelta la organización y fundó en su lugar la Organización Anarquista de la Región Española, que en octubre de 1889 pasaría a denominarse Pacto de Unión y Solidaridad.¹⁴⁰ La historia del movimiento anarquista en la década siguiente es una crónica de fragmentación, atomización y aislamiento.

EN LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO SOCIALISTA

Los seguidores españoles de Marx y Engels fueron marginados de los acontecimientos de 1873 por la poderosa influencia del movimiento anarquista. No obstante, esa minoría contaba entre sus filas con militantes experimentados que habían jugado un papel relevante en el Consejo Federal de la sección española (Iglesias y Mora) y que disfrutaban de cierta influencia entre los trabajadores madrileños, concretamente entre los tipógrafos. En 1871 se constituyó la Asociación del Arte de Imprimir, que en 1873 libraría una batalla sindical de importancia. La movilización de los tipógrafos convenció definitivamente a Mora y Pablo Iglesias para entrar en sus filas, imprimiendo una orientación marxista a su actividad; en 1874, Pablo Iglesias sería nombrado presidente de la misma. Tras la disolución, a mediados de 1873, de la Nueva Federación Madrileña, este núcleo de trabajadores impresores daría vida, algunos años más tarde, al Partido Socialista Obrero Español.¹⁴¹

Los primeros años de existencia del grupo marxista estuvieron inevitablemente condicionados por la extrema dificultad de las condiciones objetivas. Apenas pudo ampliar su radio de influencia, pero sí realizó una ardua labor de unificación política. Uno de sus dirigentes, José Mesa, ex redactor de *La Emancipación*, se trasladó a París después de ser incluido en las listas negras de la patronal, por su actividad sindical. Esto reforzó los lazos con los socialistas franceses, gracias a los numerosos contactos que Mesa mantuvo con el dirigente socialista francés Paul Guesde (Mesa llegó a convertirse en uno de los redactores jefes del periódico socialista *L'Égalité*) y a la copiosa literatura y correspondencia enviada a sus compañeros del círculo madrileño, informando en detalle de las actividades y el pensamiento de los socialistas franceses.

Las discusiones y reuniones de los primeros socialistas llevaron a la fundación, el 2 de mayo de 1879, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sus filas mantendrían una coordinación muy laxa entre sí, cuando todavía se trataba de pequeños núcleos ganados en diferentes puntos de la geografía (Madrid, Guadalajara, Asturias, Barcelona). La Asociación del Arte de Imprimir jugó un papel destacado en esta tarea de extender el partido, las ideas y reclutar militantes. El paso siguiente en la conformación de una organización más sólida y

¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 87.

¹⁴¹ La Asociación aportó 16 de los 25 fundadores del PSOE en 1879, llenaron los dos primeros comités nacionales del partido y ocuparon, por lo menos, tres puestos en la ejecutiva desde 1879 a 1925. Richard Gillespie, *Historia del Partido Socialista Obrero Español*, Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 25.

cohesionada tendría lugar diez años después, con la celebración del primer congreso de la organización. En cualquier caso, en estos años iniciales toman forma una serie de ideas fundamentales de la nueva organización que ya aparecían esbozadas en el programa elaborado por la comisión designada en el acto de fundación.¹⁴²

“Considerando: Que esta sociedad es injusta porque divide a sus miembros en dos clases sociales antagónicas: una, la burguesía, que poseyendo los instrumentos de trabajo es la clase dominante; otra, el proletariado, que no poseyendo más que su fuerza vital es la clase dominada; que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia política; que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del cual se vale para dominar al proletariado.

“Por otra parte: considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el sistema social que las produce; que esto no puede conseguirse sino de un modo: transformando la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera; que el arma más poderosa con que el proletariado ha de destruir los obstáculos que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos.

“Por todas estas razones, el Partido Socialista declara que tiene por aspiración: 1º) La posesión del poder político por la clase trabajadora. 2º) La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la nación. 3º) La constitución de una sociedad sobre la base de la federación económica, de la organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos de ambos sexos”.¹⁴³

Si el programa define con claridad las señas de clase del partido, no deja de preservar ideas muy arraigadas en el acervo político de la Regional Española de la Primera Internacional, por ejemplo, cuando se refiere a la “federación económica” o a la “organización científica del trabajo”. Algunos historiadores han visto en este hecho la prueba de una influencia predominante, en estos primeros años, de la visión sindicalista y societaria de los núcleos internacionalistas, incluso del ideario bakuninista.¹⁴⁴ Pero en general, aunque es innegable la persistencia de ese rastro, estos enfoques infravaloran el calado de la ruptura política de Pablo Iglesias y sus compañeros con las ideas anarquistas, y su esfuerzo por defender, en las condiciones políticas de las últimas décadas del siglo XIX, el programa, la táctica y la orientación estratégica del marxismo revolucionario.

Es un hecho innegable que, en sus orígenes, la asimilación de la doctrina marxista por el PSOE estuvo tamizada por las ideas provenientes del socialismo francés de aquel período, sobre todo a través de los trabajos de Paul Lafargue y Jules Guesde, responsable del Partido Obrero francés, que adolecían de una potente carga de simplificaciones y vulgarizaciones. Guesde tenía un conocimiento parcial del marxismo y, por ejemplo, era partidario de la *ley de hierro* de los salarios¹⁴⁵ de Lassalle —que Marx había fustigado implacablemente en su obra

¹⁴² Parece que el borrador del programa fue enviado a Mesa, quien a su vez lo reenvió a Londres, donde Marx y Engels lo revisaron.

¹⁴³ Luis Gómez Llorente, *Aproximación a la historia del socialismo español (hasta 1921)*, Ed. Edicusa, Madrid 1972, pp. 84-85.

¹⁴⁴ Ver Antonio Elorza y Michel Ralle, *La formación del PSOE*, Ed. Crítica, Barcelona, 1989.

¹⁴⁵ Conocida en la literatura socialista española como la *ley de bronce*

Crítica del programa de Gotha. La transmisión, por así decirlo, de esta visión esquemática del marxismo llenó las páginas del semanario *El Socialista*, fundado el 12 de marzo de 1886, que durante un largo período se convirtió en el vehículo organizador del socialismo español.

CLASE CONTRA CLASE

La experiencia de los acontecimientos revolucionarios del sexenio, de la Comuna de París y de las posiciones políticas defendidas por Marx y Engels en la lucha contra el anarquismo quedó plasmada en toda una serie de textos, que contribuyeron a dar cohesión doctrinal al PSOE en sus primeros años. Es evidente que los trabajos iniciales de Iglesias, como el célebre *Programa de nuestro Partido*, contienen los rasgos más sólidos, desde el punto de vista marxista, de toda su producción teórica. El contenido no es ajeno, tampoco, a las batallas políticas que tuvo que librar ese primer núcleo para reafirmarse y ganar audiencia entre la clase obrera, condicionados como estaban por la influencia anarquista en el movimiento sindical o el respaldo electoral que cosechaban las organizaciones pequeñoburguesas republicanas en los medios proletarios. Otro factor que también explica el lenguaje del partido y su propaganda clasista fue, sin duda, la naturaleza reaccionaria del régimen de la Restauración, que excluyó sistemáticamente de las instituciones a la izquierda. Los dirigentes del PSOE contaban obviamente con un margen menor de maniobra para centrar su actuación en la lucha parlamentaria y reformista del que dispusieron los grandes partidos socialistas de occidente.

En los orígenes del socialismo español, Pablo Iglesias defendió una línea de oposición a la colaboración de clases, especialmente, con los republicanos: “Cuando decimos que los partidos republicanos son tan burgueses como los monárquicos por defender con igual interés que éstos los privilegios de la clase capitalista, su respuesta es el silencio (...) Afirmamos que su temple revolucionario como fracciones avanzadas de la burguesía es cada vez menor y que sólo procuran convencer a la clase poseedora de que la República no lesionará ni quebrantará en nada sus intereses (...) La República que han soñado los trabajadores no es la República burguesa, la República que deja en pie el dominio de la clase parasitaria y con él la explotación y la miseria. La República a la que aspira la clase trabajadora es la república del trabajo, aquélla donde la igualdad económica y social es un hecho, y esa República sólo es el socialismo”.¹⁴⁶

No suena mal el Pablo Iglesias de los primeros años, a la vista de los acontecimientos históricos que se sucedieron posteriormente. Sus artículos de ese período abordaron los principios básicos del marxismo respecto a la democracia burguesa y el parlamentarismo: “Nosotros defendemos el sufragio universal por ser un excelente medio de agitación y propaganda para nuestras ideas: pero le negamos la virtud de poder emancipar a la clase proletaria (...) Nosotros no incurrimos en la candidez de que nuestras ideas puedan tener mayoría en los parlamentos, diputaciones, ayuntamientos. Si conseguimos que nuestros representantes lleguen a estas instituciones, no esperamos que sus esfuerzos y que sus trabajos hagan cambiar el rumbo de la nave burguesa. En el parlamento lograremos que la clase obrera adquiera educación revolucionaria [pero] la conquista del poder político sólo podrá alcanzarse revolucionariamente y nada más que revolucionariamente (...) Las libertades políticas (...) no serán jamás una verdad para el obrero en el sistema capitalista: Mermaidas

¹⁴⁶ Pablo Iglesias, “Los enemigos principales del Partido Obrero”, en *El Socialista* n° 78, 2/11/1887.

siempre, lo serán mucho más todavía cuando los obreros, valiéndose de ellas, adopten cohesión y unidad y logren poner en aprieto los intereses de los señores”.¹⁴⁷

En otros terrenos, como en la lucha contra las guerras imperialistas, Pablo Iglesias se reafirmó en la tradición marxista: “Si los esfuerzos de las huestes del socialismo para detener la matanza con la que sueñan las clases privilegiadas fueran infructuosos y la guerra estallase, nuestros bríos (...) deberán tener por único objetivo dar un nuevo giro a aquélla, y de guerra nacional, de un país contra otro, convertirla en guerra social, de clase, de pobres contra ricos, de explotados contra explotadores”.¹⁴⁸

A pesar de las carencias teóricas, el enfoque clasista del pensamiento marxista llegó a una generación de trabajadores españoles, convirtiéndose en un componente destacado de su ideología. En comparación, este *marxismo* de los primeros socialistas españoles los sitúan a cien leguas de las teorías revisionistas y reformistas del socialismo español y europeo de principios del siglo XX, y de las formulaciones estalinistas de la década de los años treinta, por no decir del programa que defienden en la actualidad la gran mayoría de los partidos socialistas. En una escala histórica, las “simplificaciones” teóricas del Pablo Iglesias de los primeros años resisten mucho mejor la prueba del tiempo que las doctrinas del nuevo laborismo y la tercera vía, por citar un ejemplo, aunque se podrían poner muchos más. Cualquier artículo de *El Socialista* de aquella época heroica tiene un carácter más científico y mayor rigor teórico y conceptual, que la tediosa producción sociológica de los profesores de la posmodernidad socialdemócrata.

Estos textos, y otros similares, aportaron mucho a la educación de un sector avanzado de los trabajadores, aunque esto haya sido ocultado sistemáticamente por todos aquellos que han pretendido demostrar que el marxismo sólo rozó al Partido Socialista Obrero Español.¹⁴⁹ Es cierto que, junto a este análisis clasista, el PSOE se caracterizó tempranamente por una forma posibilista de entender la lucha de clases y muy especialmente la acción sindical. No obstante, la penetración de las tendencias reformistas o el conservadurismo sindical no fueron fenómenos propios del socialismo español, sino que afectaron de lleno a todos los partidos de la Segunda Internacional.

La polémica historiográfica en torno al “programa” socialista de esos años ha nutrido la literatura universitaria, pero, en general, como muchas de las disputas académicas desconectadas de la lucha de clases, ésta ha respondido más a esquemas apriorísticos que a un intento de comprender las bases materiales sobre las que se fue configurando el pensamiento socialista. La explicación de una supuesta “anormalidad” socialista española en relación a sus homólogos europeos presenta los mismos puntos débiles que la llamada “anormalidad” anarquista española. El marxismo no fue asimilado en condiciones diversas y de un modo contradictorio sólo en el Estado español; ocurrió lo mismo en la mayoría de los países europeos, incluso en aquellos donde la ortodoxia marxista era aparentemente más sólida, como Alemania, a cuya socialdemocracia Marx y Engels dedicaron trabajos muy críticos.

La obsesión de Pablo Iglesias por reforzar la organización a cualquier precio, su oposición a la acción directa y su insistencia en la educación propagandística de las masas obreras a través del ejemplo moral marcaron por muchos años el rumbo del partido. Sin embargo, estas

¹⁴⁷ Pablo Iglesias, *El programa de nuestro Partido*.

¹⁴⁸ Pablo Iglesias, *El Socialista* nº 46, 21/1/1887.

¹⁴⁹ “El pablismo surgió como la transacción, como una mezcla de praxis reformista (que a veces parecía revolucionaria debido a la exclusividad de la estructura de poder) y de radicalismo verbal (...) Aunque Iglesias no preparó al PSOE ni a la UGT para la acción revolucionaria, sí contribuyó mucho a elevar el nivel de organización y de conciencia políticas en el movimiento obrero, con lo cual mejoró las perspectivas de una actividad insurreccional efectiva”. Gillespie, *op. cit.*, p. 36.

ideas no eran originales, mantenían una gran sintonía con las que estaban en boga dentro de la socialdemocracia alemana, austríaca, francesa o italiana, y que fueron criticadas por una minoría de cuadros marxistas.¹⁵⁰ Por tanto, las tendencias revisionistas no son patrimonio del PSOE y las acusaciones de indigencia teórica hacia los líderes socialistas españoles se podrían aplicar a muchos de los dirigentes socialdemócratas europeos de la época. Es necesario recordar que las aportaciones sustanciales al arsenal teórico del marxismo y el desarrollo de sus ideas fundamentales salieron de una capa de revolucionarios que no se contaba por decenas, sino por unidades: Plejánov, Lenin y Trotsky en el socialismo ruso; Kautsky, Mehring y Rosa Luxemburgo en el alemán.

Con el tiempo, la dirección socialista fue degradando progresivamente la teoría marxista y asimilando los postulados del reformismo, específicamente la política de colaboración de clases, la cual se vio reforzada por el atraso socioeconómico del Estado español.¹⁵¹ La producción posterior de literatura socialista por parte de los dirigentes socialistas españoles, realmente fue escasa y carente de profundidad.

Ciertamente, el *pablismo* demostró su ineficacia para la lucha revolucionaria. Con los años agudizaría sus rasgos más conservadores, paternalistas y reformistas, chocando frontalmente con los sindicalistas revolucionarios, y con aquellos que, desde las filas del movimiento socialista, intentaron reatar el nudo de las auténticas tradiciones del marxismo tras el triunfo bolchevique de 1917. Esto tampoco impidió que, tres años después de proclamada la Segunda República y tras el fracaso del gobierno de conjunción, el movimiento socialista se viese sacudido de arriba abajo. Entre 1934 y 1936, una parte muy considerable de los militantes del PSOE, de las juventudes y del sindicato, fueron atraídos por el marxismo, germinando en las filas socialistas las fuerzas potenciales con las que se podría haber construido un partido revolucionario de masas. Irónicamente, muchos de los críticos más ácidos del *pablismo*, que se consideraban a sí mismos bolcheviques, fueron incapaces de prever este proceso, de anticiparlo y, peor aún, cegados por su sectarismo, de intervenir en él para coronarlo con éxito.¹⁵²

EL ARRAIGO DEL ANARQUISMO

¹⁵⁰ Rosa Luxemburgo escribió dos grandes trabajos al respecto: *Reforma o revolución y Huelga de masas, partido y sindicato*. Ambos están publicados por la FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS.

¹⁵¹ En palabras de Juan Andrade, el dirigente de las Juventudes Socialistas que encabezó la primera escisión procomunista del PSOE: “El socialismo, el ugetismo español, durante el proceso de su desarrollo ha revestido frecuentemente en su actuación práctica los caracteres de una organización obrera de tipo filantrópico, con un programa universal que repetía pero que no adaptaba. Se convertía en su propaganda en una mixtura sensiblera y llena de obrerismo primitivo, que planteaba sus reivindicaciones en un plano de generosidad. Se recortaban las alas a los principios y a las aspiraciones que los mismos suscitaban, para impedir los vuelos de largo alcance que lograban remontar en el resto de Europa y que aquí quedaban encerrados en una aplicación plebeya (...) Se abandonaba la cultura política para entregarse por entero a los aspectos administrativos de la organización. De ahí esa limitación de aspiraciones que ha caracterizado a los viejos cuadros y que les ha privado de atractivo proselitista”. Juan Andrade, citado en la introducción de Manuel Pérez Ledesma a los *Escritos de Pablo Iglesias*, Ed. Ayuso, Madrid, 1976, vol. I, p. 30.

¹⁵² Aunque esta cuestión será tratada extensamente en el segundo volumen de esta obra, nos referimos a la actuación de dirigentes como Joaquín Maurín, Andreu Nin y Juan Andrade —líderes del Bloque Obrero y Campesino, el primero, y de la Izquierda Comunista Española, los segundos, y más tarde fundadores del POUM—, respecto a Largo Caballero y la izquierda socialista del PSOE, la UGT y, especialmente, las Juventudes Socialistas.

La historiografía sobre el movimiento obrero español ha mantenido una larga polémica acerca de las causas del arraigo del anarquismo y del anarcosindicalismo. Algunos autores, como Gerald Brenan, llegaron a explicarlo por el carácter apasionado y mediterráneo de los pueblos españoles, lo cual no aclara, por ejemplo, la amplia presencia anarquista entre los trabajadores coruñeses, entre los campesinos y pescadores vigueses, los metalúrgicos asturianos o los obreros zaragozanos. En la misma línea de buscar explicaciones culturales o nacionales se sitúa el dirigente anarcosindicalista Joan Peiró, que escribió: “Es Cataluña la cuna del federalismo. Sabiendo esto, se sabe por qué Cataluña es impermeable al socialismo marxista y se sabe también por qué el anarquismo ha tenido y tendrá aquí la más fuerte expresión de vitalidad. (...) El carácter del obrero catalán es profundamente laborioso y revolucionario, mientras que las directivas del socialismo madrileño están representadas por la apatía ante del trabajo y la avidez ante los cargos burocráticos”.¹⁵³ Estas justificaciones no trascienden el terreno de las razones psicológicas o los prejuicios nacionales y locales, pero que no sirven para comprender un fenómeno que es, ante todo, político y social.

En términos generales, el anarquismo arraigó en países donde la concentración en grandes empresas no era alta y el campesinado tenía un peso predominante. Su programa político se adaptaba mejor a las ideas de los pequeños campesinos propietarios, fustigados por el atraso de su producción agraria y la competencia de la gran agricultura capitalista, de los artesanos e, incluso, de los trabajadores de pequeñas empresas que mantenían fuertes lazos con el campo. El individualismo, la percepción del Estado como responsable de las cargas impositivas que arruinaban el fruto de su trabajo y anulaban su libertad individual, y el apoliticismo —que encontraba un terreno fértil en la medida que cundía el desencanto con los políticos burgueses y pequeñoburgueses radicales que los utilizaban como fuerza de choque en sus maniobras políticas, para luego volverles la espalda— pudieron surgir más fácilmente en estas clases. De hecho, la concepción anarquista del proletariado, imprecisa y carente de una base científica, se adaptaba bien a las aspiraciones de esos sectores. Incluso Bakunin, pretendiendo establecer una definición más acabada del sujeto revolucionario, se fijó en las filas del lumpemproletariado, otorgándole características especialmente positivas para ese papel: “Estando casi totalmente incontaminado por toda la civilización burguesa, lleva en su corazón, en sus aspiraciones, en todas las necesidades y las miserias de su situación colectivista, todos los gérmenes del socialismo futuro, y es la única con suficiente poder hasta hoy en día para iniciar la Revolución Social y conducirla hasta el triunfo”.¹⁵⁴

En su corpus filosófico, el anarquismo proclama la lucha por una sociedad en la que los individuos se relacionen libremente, según su propia voluntad. En el terreno económico, esto se concreta en la defensa de una federación de productores que intercambian libremente las mercancías, asociándose entre ellos en condiciones de respeto e igualdad. A mediados del siglo XIX, con una gran masa de pequeños productores, tanto rurales como urbanos, el individualismo anarquista tenía una base social sobre la que apoyarse. Proudhon, el precursor más inmediato del anarquismo, defendía una economía mercantil, pero aborrecía su desarrollo ulterior inevitable: la concentración del capital, la desaparición de la libre competencia y el dominio del monopolio, es decir, aspiraba a un capitalismo imposible. En el terreno político, propugnaba la disolución del poder central en pequeñas comunidades inspiradas en una idealización del pasado precapitalista.

Aunque el radicalismo anarquista atrajo a numerosos sectores descontentos y oprimidos de la sociedad, los primeros activistas de *la idea* no proclamaban la lucha de clases, sino el humanismo. Esto fue más acentuado, incluso, en el caso español. Gerald Brenan, refiriéndose

¹⁵³ Joan Peiro, *Las ideas y el sentido revolucionario*. Citado en Albert Balcells, *El arraigo del anarquismo en Cataluña. Textos de 1926-1934*, Ed. Júcar, Madrid, 1979, p. 92.

¹⁵⁴ Citado en *Marxismo y revolución, una crítica del anarquismo*, documento de *El Militante*, Madrid, 2000.

al anarquismo en la Andalucía rural de finales del siglo XIX, señala al respecto: “*La idea*, como se llamaba, era difundida por los pueblos por los ‘apóstoles’ anarquistas. En las gañanías de los cortijos, en las aldeas perdidas, a la luz del candil de aceite, los apóstoles hablaban de la libertad, la igualdad y la justicia a auditorios entusiasmados. Se formaban pequeños círculos en los pueblos y aldeas que creaban escuelas nocturnas en las cuales muchos campesinos aprendían a leer, se hacía propaganda antirreligiosa y se practicaba a menudo el vegetarianismo y la abstención del alcohol. (...) Pero la característica principal del anarquismo andaluz era su milenarismo ingenuo. Cada nuevo movimiento o huelga era considerado como la inmediata aparición de una nueva época de plenitud en la que todos — hasta la Guardia Civil y los terratenientes— serían libres y felices. Nadie sabía explicar cómo se conseguiría este objetivo: fuera del reparto de tierras (y ni siquiera esto en algunas zonas) y la quema de la iglesia parroquial, no existía ninguna propuesta positiva”.¹⁵⁵

El movimiento anarquista español del último tercio del siglo XIX, como hemos analizado, creció a partir de las luchas de clases del sexenio revolucionario, pero es difícil hablar de un movimiento anarquista homogéneo o puro. Los anarquistas españoles estuvieron influidos por distintas fuentes teóricas, aunque todas ellas caracterizadas por su naturaleza pequeñoburguesa, y acusaron las presiones de las diferentes clases que protagonizaban las luchas de aquel momento. Desde el inicio, las observaciones doctrinales del bakuninismo enlazaron con el pensamiento político de los socialistas utópicos, y con las ideas radicales de la pequeña burguesía republicana, que bebían de los utópicos y del federalismo y que mantenían su influencia entre los sectores organizados de los trabajadores. También el sindicalismo en sus diferentes variantes, incluyendo las sociedades obreras que practicaban una acción descaradamente oportunista, influyó en la configuración del pensamiento y la acción anarquista en todas sus variantes.¹⁵⁶

El auge del capitalismo y el desarrollo de las fuerzas productivas aceleraron la crisis de la producción artesanal y de la agricultura de subsistencia. Aunque la base agraria seguía siendo predominante en la economía de la Europa meridional, no es menos cierto que el boom

¹⁵⁵ Gerald Brenan, *El laberinto español*, Plaza y Janés, Madrid, 1994, p. 185.

¹⁵⁶ “La crítica moral y política del poder, el antipoliticismo bakuninista, el lenguaje político de la revolución, con su acento progresista, democrático-radical, socialista utópico, republicano, pudieron asentarse sobre una base ideológica, solidaria y proudhoniana, democrática en política, que estaban fermentando desde finales de los años cuarenta. Casi todos esos internacionalistas, bakuninistas, anarquistas de la primera generación, habían militado en el partido republicano, en el federalismo pimargalliano. No fue, por lo tanto, sólo el bakuninismo el que inspiró la Federación Regional Española (FRE), la organización formal de la Internacional en España, constituida en Barcelona en el Congreso de junio de 1870. La FRE se apoyó en una tradición política democrático-radical, cooperativista y asociacionista, a la que añadió el colectivismo y el antiestatismo, todo ello filtrado con las experiencias de los trabajadores, artesanos, campesinos, ‘proletarios’ fabriles en Barcelona, durante esos conflictivos años”. Julián Casanova, *Auge y declive del anarcosindicalismo en España*, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, p. 48.

También las divisiones en el pensamiento anarquista propiamente dicho dejaron su sello, como era natural, en el movimiento libertario español. Como señala Juan Gómez Casas: “En la concepción colectivista que tiene como inmediatos inspiradores a Proudhon y Bakunin, la retribución del trabajo está basada sobre la evaluación de la hora de labor. La sociedad organizada federativa y democráticamente retribuiría a sus miembros con arreglo a su trabajo personal, haciendo concesiones a la independencia personal y al incentivo. La escuela comunista libertaria, representada en primer lugar por Kropotkin, Malatesta, Reclus y Cafiero, ataca esta doctrina: bajo el régimen colectivista, el trabajador conserva su condición de asalariado, esclavo de la comunidad que ‘compra y vigila su fuerza de trabajo’. ‘La remuneración proporcional a las horas de trabajo proporcionadas por cada uno no puede ser un ideal, todo lo más una solución temporal. Habrá que terminar con la moral extraída de los libros de contabilidad, con la filosofía del debe y del haber. Ese modo de retribución procede de un individualismo mitigado en contradicción con la propiedad colectiva de los medios de producción (...) Una nueva forma de posesión exige una nueva forma de retribución (...) Todos los productos debidos al trabajo deben pertenecer a todos y cada uno deberá tomar libremente su parte. A cada uno según sus necesidades, tal debiera ser el lema del comunismo libertario”. Gómez Casas, *op. cit.*, p. 89.

capitalista de finales de siglo XIX y principios del XX afectó a estos países y empujó a cientos de miles de campesinos hacia las ciudades, arrancándolos de su medio natural para nutrir la base del proletariado industrial. En este contexto material cambiante, las contradicciones doctrinarias del anarquismo se hicieron cada vez más evidentes. La crisis del anarquismo de fin de siglo no fue sólo el resultado de la represión policial, fue un reflejo de la polarización creciente entre la burguesía y la clase obrera.

La internacional bakuninista celebró su último congreso en 1877. Después de esta fecha, una crisis en la industria relojera arruinó las pequeñas empresas familiares de los Alpes suizos, cuyo espacio fue ocupado por la producción a gran escala en Ginebra. Esto supondría el fin del principal punto de apoyo social que tenían los bakuninistas en Europa central y fue algo más que un hecho anecdótico o casual, era un indicio de los nuevos tiempos. Sin embargo, el fenómeno no era homogéneo. La presencia del anarquismo se mantuvo en España, Italia, Rusia y, en menor medida, Francia, y las razones no sólo deberían buscarse en el atraso económico de estos países. El anarquismo logró arraigar entre el proletariado español a una escala superior a la del socialismo marxista, por lo menos hasta comienzos de la segunda década del siglo XX.

Analizando el fenómeno en su conjunto y huyendo de una visión unilateral, hay muchos factores que explican la importancia y permanencia del movimiento anarquista en España. Pero es obvio que intentando constreñir con esquemas y moldes la historia de la lucha de clases en general, y de las organizaciones obreras en particular, es imposible realizar un análisis que tenga en consideración la multitud de factores que la determinan.

La “aversión” a la política entre los sectores más oprimidos de la sociedad española tenía bases firmes. En los jalones más importantes de la malograda revolución burguesa, el campesinado fue utilizado en las empresas liberales, pero nunca vio satisfechas sus demandas. Este hecho recurrente generó frustración y resentimiento hacia la política, que no se debilitó con el tiempo. El ideario anarquista encontró, en los diferentes momentos de auge de la lucha de clases de finales del siglo XIX y principios del XX, un terreno abonado para su desarrollo. Por otra parte, los sectores organizados y más conscientes del proletariado español recogieron las tradiciones del período anterior, pero en un marco social y económico diferente que alentaba nuevas aspiraciones.

La clase obrera de principios de siglo se forjó de una manera explosiva. Ese proletariado urbano se nutrió de ex campesinos colocados en situaciones de explotación límite, con organizaciones de resistencia muy precarias, enfrentados a la codicia de los patrones que no dudaban en recurrir al ejército y la Guardia Civil para reprimir sus demandas. Esa actitud violenta de la patronal industrial y agraria también contribuyó a que el anarquismo y el anarcosindicalismo mantuviesen una preponderancia entre los oprimidos. Los anarquistas conectaron con las aspiraciones de una masa de jornaleros hambrientos hartos de esperar a ver realizadas unas promesas de reforma agraria repetidamente traicionadas. El sindicalismo revolucionario se enfrentó con más tesón y energía a las provocaciones patronales y conquistó más derechos para los trabajadores que las prudentes maniobras parlamentarias de los reformistas (republicanos y socialistas incluidos). Por tanto, los factores que explican este arraigo están relacionados con la propia configuración de la sociedad burguesa española, la tradición histórica del anarquismo desde los tiempos de la Primera Internacional, la dureza de la lucha de clases y, especialmente, con el rechazo primario al carácter reformista y posibilista de la dirección socialista (PSOE y UGT); todo ello empujó a capas muy amplias de trabajadores y campesinos radicalizados a organizarse en las filas del anarcosindicalismo.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Julián Casanova señala a este respecto: “Convendría, por ello, recordar de nuevo algo que las investigaciones más recientes parecen probar: el anarquismo no fue un fenómeno ‘excepcional’ y ‘extraordinario’ de la historia

SINDICALISMO SOCIALISTA Y SINDICALISMO REVOLUCIONARIO

El desastre de 1898 y la guerra contra EEUU pusieron de manifiesto la putrefacción y decadencia del régimen de la Restauración. Con la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, la corona española decía adiós a importantes mercados para la producción nacional. La crisis económica afectó, sobre todo, a la industria catalana, especializada en la producción textil y dependiente en un grado considerable del comercio con las ex colonias (suponía el 95% de sus ventas al extranjero¹⁵⁸); pero esta crisis también reveló las débiles bases en las que se sustentaba el aparato productivo, apoyado en una industria obsoleta con mínimas inversiones en tecnología y que obtenía sus beneficios de los privilegios coloniales, la política proteccionista del gobierno y, principalmente, de la sobreexplotación de la clase obrera.

A pesar de la lenta recuperación económica de principios del siglo XX¹⁵⁹, impulsada por la repatriación de los capitales coloniales y que culminaría en el auge económico de los primeros años de la Primera Guerra Mundial, la inestabilidad política y el desencanto general prepararon un nuevo giro en la lucha de clases. En la primera década del siglo, el proceso de concentración industrial se intensificó, afectando principalmente a la industria siderometalúrgica, en el norte y en el centro del país, a la industria química, que se benefició de los altos aranceles, y a la industria textil catalana. Paralelamente, el movimiento migratorio interior se puso de nuevo en marcha: en 1910, el porcentaje de personas nacidas en una provincia distinta a la que estaban censadas era cercana al 40% en Madrid y Barcelona, y en torno al 26% en Vizcaya.¹⁶⁰ Todo ello supuso el crecimiento cuantitativo de un proletariado que soportaba unas ínfimas condiciones de trabajo y salario.¹⁶¹ La pauperización de las familias obreras en un momento de permisividad gubernamental favoreció el activismo sindical.

Desde sus orígenes, el PSOE se orientó con claridad a conquistar apoyos en las sociedades obreras, una estrategia de penetración entre la clase que cristalizó finalmente en la

de España, si se entiende por 'normal' y 'ordinario' lo que sucedía en los restantes países de Europa occidental hasta bien entrado el siglo XX, hasta que se produjo el tránsito del anarquismo al anarcosindicalismo, desde formas de organización basadas en grupos de afinidad ideológica hasta un encuadramiento sindical más formal y disciplinado asentado en el oficio o ramo de la producción en que trabajasen los afiliados. Sólo con la constitución y consolidación de la CNT como un movimiento de masas en los años 1917-1921 y 1931-1937 comenzó la 'atipicidad' española, porque por esas fechas —y salvo en Argentina y Suecia— el sindicalismo revolucionario, antipolítico y de acción directa había desaparecido del resto del mundo (...) Hasta esa conservación en anarcosindicalismo, España presenció tendencias en el asociacionismo obrero muy similares a Francia o Italia: adscripción a las posiciones bakuninistas, declive de la Primera Internacional, aparición del terrorismo en los años noventa y expansión de la doctrina del sindicalismo revolucionario durante los primeros años del siglo XX". Julián Casanova, *op. cit.*, p. 46.

¹⁵⁸ Manuel Tuñón de Lara, *El movimiento obrero en la historia de España*, Ed. Taurus, 1972, p. 309.

¹⁵⁹ "De 1901 a 1909 se crearon 11.303 sociedades anónimas, con un capital que sobrepasaba los 3.500 millones de pesetas (...) Si el primer decenio del siglo conoció un impulso de las inversiones como no se había producido hasta entonces, se debió en primer lugar a la repatriación de capitales; en segundo, a la necesidad de exportar capitales que tenían las grandes potencias extranjeras; en mucho menor grado a la acumulación capitalista de los exportadores de minerales, empresarios de siderurgia y terratenientes que tomaban acciones de la banca; por último, no es posible ignorar el caso de ciertos grupos de capitalistas que hicieron pingües negocios con los suministros a ambos ejércitos durante la segunda guerra carlista (...) Esa época tuvo sin embargo consecuencias menos agradables para la industria ligera, principalmente, la textil (la más importante de España) y la azucarera (...) la pérdida de los mercados coloniales significó un duro golpe". Tuñón de Lara, *op. cit.*, pp. 137-139.

¹⁶⁰ Jordi Nadal, *La población española*, Ed. Ariel, Barcelona, 1966, p. 190.

¹⁶¹ Según Tuñón de Lara, a principios de siglo había más de un millón de trabajadores industriales.

constitución de Unión General de Trabajadores (UGT), creada el 12 de agosto de 1888, pocos días antes de la celebración del primer congreso del PSOE (23 al 25 de agosto). En la reunión fundacional de la UGT participaron 29 delegados representando a 44 sociedades de oficios (26 catalanas y 16 de Castilla) y a un total de 5.154 afiliados, de los que 1.391 correspondían a la Federación Tipográfica Española. El congreso eligió como presidente del sindicato socialista a Antonio García Quejido.

Durante años, la UGT tuvo escasa implantación en Catalunya y una presencia limitada en los principales núcleos obreros. Una situación que cambió con el crecimiento económico y la industrialización: en el año 1900, la UGT agrupaba a 126 secciones y 26.088 afiliados, que en 1904 habían ascendido a 363 y 55.817 respectivamente. Nuevas zonas, como Vizcaya y Asturias, proporcionaron un flujo de militantes al sindicato socialista, que pudo así compensar su debilidad organizativa en Catalunya y sobrepasar en estas provincias a los anarquistas en cuanto a encuadramiento obrero se refiere, pues éstos seguían careciendo de una confederación sindical de carácter estatal; en 1910, fecha de fundación de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), el número de miembros del sindicato socialista rondaba los 43.000.¹⁶² El PSOE también decidió en 1904 fundar la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas (FNJS), que pronto destacaría como la corriente más permeable a las ideas del marxismo.

Por su parte, los núcleos sindicalistas anarquistas empezaron una difícil labor de reconstrucción de las organizaciones obreras en Catalunya. Organizaron huelgas, que tuvieron un carácter muy descoordinado e improvisado. Las dos movilizaciones generales fracasadas de 1901 y 1902, lejos de aumentar la influencia de los anarquistas, la mermaron. Estas experiencias fallidas tendrán consecuencias a lo largo del período que transita entre 1902 y 1907, cuando el viejo modelo anarco-comunista que se había transmitido en los núcleos libertarios desde finales del siglo XIX entró en crisis. Muchos sindicalistas y anarquistas empezaron una reconsideración general de sus tácticas influidos por el auge del sindicalismo revolucionario que estaba teniendo lugar en Francia.

A partir de junio de 1907, los intentos de agrupar en una amplia organización al conjunto de las sociedades obreras de Barcelona animó tanto a militantes sindicalistas como socialistas, entre ellos Fabra Rivas, portavoz del PSOE en Catalunya.¹⁶³ Los esfuerzos fructificaron el 3 de agosto de 1907, con la constitución formal de una nueva federación local barcelonesa de sociedades de resistencia al capital, Solidaridad Obrera (SO), cuyo manifiesto fundacional fue suscrito por 35 de las 70 organizaciones existentes en ese momento en la ciudad. Solidaridad Obrera experimentó un importante crecimiento y para su primer congreso (septiembre de 1908) agrupaba a 109 sociedades; en mayo de 1909 había alcanzado la cifra de 15.000 afiliados en toda Catalunya, fundamentalmente en Barcelona y las localidades cercanas.

El panorama abierto en el sindicalismo catalán empujó a muchos militantes anarquistas locales a integrarse en Solidaridad Obrera, aconsejados, sin duda, por figuras muy representativas del movimiento libertario, como Anselmo Lorenzo o el propio Ferrer i Guardia. Tan sólo una minoría de los anarquistas persistió en sus ideas anarco-comunistas y en su apoyo a las tácticas terroristas. En cualquier caso, este giro tuvo mucho que ver con el ascenso de la corriente sindicalista revolucionaria surgida en Francia como respuesta a la

¹⁶² Una extensa y documentada historia de la UGT se puede consultar en el trabajo de Santiago Castillo *Historia de la UGT. Un sindicalismo consciente 1873-1914* (vol. I) y *Entre la revolución y la reforma 1914-1931* (vol. II), en Siglo XXI Editores.

¹⁶³ El auge del sindicalismo socialista de principios de siglo se vio cortado en el caso de Catalunya: la organización retrocedió de 5.240 miembros en 1904 a 1.159 en 1907, una crisis de afiliación que también acusó la federación catalana del PSOE.

deriva reformista de los dirigentes socialistas, pero también con la pretensión de superar la esterilidad de los planteamientos anarquistas, que con su *propaganda del hecho* y sus actos nihilistas se habían aislado de las grandes masas obreras. Las ideas esenciales de este sindicalismo habían adquirido naturaleza en el congreso de la CGT francesa de octubre de 1906, celebrado en la ciudad de Amiens. La declaración fundamental de aquel congreso, conocida históricamente como la *carta de Amiens*, señalaba lo siguiente:

“La CGT agrupa, fuera de toda escuela política, a todos los trabajadores conscientes de la lucha que hay que llevar a cabo para la desaparición del salario y del patronato. El Congreso considera que esta declaración es un reconocimiento de la lucha de clases que opone, en el terreno económico, a los trabajadores en rebeldía contra todas las formas de explotación y opresión tanto materiales como morales, utilizadas por la clase capitalista contra la clase obrera. El Congreso aprecia esta afirmación teórica en los siguientes puntos:

“En la acción reivindicativa cotidiana, el sindicalismo persigue la coordinación de los esfuerzos obreros, el incremento del bienestar de los trabajadores mediante la realización de mejoras inmediatas, tales como la disminución de las horas de trabajo, el aumento de los salarios etc.

“Pero esta tarea sólo es un aspecto de la actividad del sindicalismo; éste prepara la total emancipación, que sólo se puede conseguir mediante la expropiación capitalista; preconiza como medio de acción la huelga general y considera que el sindicato, que hoy es una agrupación de resistencia, será en el futuro la agrupación de producción y de distribución, base de reorganización social.

“El Congreso declara que ésta doble tarea, diaria y futura, deriva de la situación de asalariados que gravita sobre la clase obrera y que impone a todos los trabajadores, cualesquiera que fueren sus opiniones o sus tendencias políticas o filosóficas, el deber de pertenecer a la agrupación esencial que es el sindicato.

“En consecuencia, y en lo que atañe a los individuos, el Congreso afirma la total libertad para el afiliado de participar, fuera de la agrupación corporativa, en aquellas formas de lucha que correspondan a su concepción filosófica o política, limitándose a exigirle, en reciprocidad, que no introduzca en el sindicato las opiniones que profesa en el exterior.

“En lo concerniente a las organizaciones, el Congreso declara que, a fin de que el sindicalismo obtenga su máximo de eficacia, la acción económica debe ejercerse directamente contra la patronal, no teniendo las organizaciones confederadas, en tanto que agrupaciones sindicales, que preocuparse de los partidos y las sectas que, fuera y paralelamente a ellas, puedan perseguir, con toda libertad, la transformación social”¹⁶⁴.

A pesar de la confusión teórica de la declaración, el sindicalismo revolucionario suponía un paso adelante respecto a las viejas ideas individualistas y anarco-comunistas de las organizaciones libertarias. Es cierto que mantenía su rechazo doctrinario a la participación del sindicato en política, algo imposible de cumplir en la práctica; que la *carta* no decía apenas nada del tipo de sociedad alternativa al capitalismo tras la revolución social; que sustituía el papel del partido revolucionario por el sindicato, al que también convierte en el modelo que debe adoptar la nueva sociedad, o que elevaba a fetiche la idea de la huelga general revolucionaria como medio para acabar con la sociedad capitalista; pero la *carta de*

¹⁶⁴ Antonio Bar, *La CNT en los años rojos*, Ed. Akal, Madrid, 1981, p. 56. Este trabajo contiene una extensa y detallada documentación sobre la organización del movimiento anarcosindicalista y la CNT entre 1910 y 1926.

Amiens reconocía la necesidad de la lucha de clases y la acción revolucionaria colectiva de los trabajadores, asestando un duro golpe a la mentalidad individualista del anarquismo.¹⁶⁵

El sindicalismo revolucionario no pudo mantener su coherencia interna, y de su seno saldrían posteriormente tendencias oportunistas, social-chovinistas y favorables a la colaboración de clases, como en el caso de un sector de la dirección sindical francesa a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Pero también una amplia capa de sindicalistas revolucionarios de toda Europa fue atraída irresistiblemente a la causa del socialismo y del comunismo, sobre todo tras el triunfo de la revolución de Octubre en 1917. La adhesión de la CNT a la Tercera Internacional, en su congreso de 1919, fue testimonio del enorme eco que encontraron las ideas del bolchevismo entre esos activistas.

LA GUERRA DE MARRUECOS

Tras la pérdida de las colonias, la burguesía española necesitaba un nuevo campo de acción y nuevos mercados. En su carrera por controlar Marruecos, y antes de que en 1912 se sancionara legalmente la ocupación, Francia y España se lanzaron a diversas acciones de rapiña para conquistar territorio. Una de esas acciones militares fue la que desencadenó la guerra de 1909 y la consiguiente insurrección obrera de Barcelona, conocida como la *Semana Trágica*.

La expansión colonial española en África se remonta a mediados del siglo XIX. Ya en 1848 tropas españolas habían invadido las islas Chafarinas, pero fue en 1859 cuando el ejército español, comandado por O'Donell, se adentró en Marruecos. A principios de 1860, O'Donell tomó Tetuán, forzando a los marroquíes a firmar un tratado infame por el que se ampliaban los perímetros de Ceuta y Melilla, cedían Ifni a la corona española y Tetuán quedaba en manos del ejército como garantía de pago de una indemnización por valor de veinte millones de duros. A pesar de la pérdida del imperio de ultramar, la clase dominante española no había olvidado las "buenas virtudes" del saqueo y el expolio de los pueblos coloniales; a finales de 1893, más de 20.000 soldados velaban en Marruecos por sus intereses imperialistas.

Al comenzar el siglo XX, Francia ya había conquistado Túnez y Argelia, llegando por el oeste hasta la frontera con Marruecos, dando "forma" a su ansiado proyecto de un gran imperio colonial norteafricano. Pero en el tablero de los movimientos imperialistas de la época, la potencia dominante de Europa, Gran Bretaña, se dispuso a prestar algunos servicios a la corona española. La maniobra obviamente no era inocente. La burguesía británica no quería ver instalada frente a su base de Gibraltar, tan esencial para el control de la navegación en el estrecho, a un país que pudiera hacerle frente. España no era Francia, e interponerla como un pequeño muro de contención frente a la expansión francesa era un mal menor para Gran Bretaña. En cualquier caso, Gran Bretaña se vio obligada a ceder ante Francia en la cuestión marroquí precisamente cuando ésta observó que los británicos, tras haber puesto su bota imperial en Egipto, ponían sus ojos en el Sudán. Fue así cómo, en 1907, Gran Bretaña reconoció, en un acuerdo secreto, el derecho de Francia a mantener el orden en el interior de Marruecos, y Francia, a su vez, se manifestó a favor del poder de Londres sobre El Cairo. A

¹⁶⁵ "El sindicalismo revolucionario encarna, a la hora presente, lo que en el marxismo de verdadero, de profundamente original, de superior a todas las fórmulas, a saber, que la lucha de clases es el alfa y omega del socialismo; que no es un concepto sociológico para uso de los sabios, sino el aspecto ideológico de una guerra social emprendida por el proletariado contra todos los jefes de industria; que el sindicato es el instrumento de la guerra social". George Sorel y otros, *El sindicalismo. Origen, tácticas y propósitos*, Barcelona, 1934, p. 63.

España le tocaron algunas migajas en el reparto: se reconocieron los intereses de la corona española en Marruecos y las posesiones en su costa mediterránea.

Finalmente se había llegado al acuerdo de dividir Marruecos en dos áreas de influencia: una francesa, con la mayoría del territorio, y otra española, con la costa mediterránea y algún que otro enclave. Aunque el sultán de Marruecos era un títere del imperialismo, las tribus no aceptaron el dominio colonial. El gobierno español fue incapaz de garantizar el orden en su zona de influencia, y las presiones del imperialismo francés para una intervención militar se intensificaron.

En julio de 1909, y ante la oposición de los rifeños a ver esquilgadas sus riquezas naturales, el ejército decidió enviar refuerzos para salvaguardar la explotación minera de Uixan por los contratistas españoles. Las principales empresas mineras que explotaban los yacimientos marroquíes eran la Compañía Norteafricana, constituida con capitales franceses, y la Sociedad Española de Minas del Rif, propiedad del conde de Romanones, el marqués de Comillas, el conde Güell y un grupo de capitalistas madrileños.¹⁶⁶ Además, el marqués de Comillas era también el dueño de la compañía marítima encargada de transportar las tropas a Marruecos; por eso los barcos partían de Barcelona.

El conde de Romanones relata así la formación de la compañía minera: “Hace algún tiempo se me presentó un ingeniero francés pidiéndome carta de presentación para el general Marina [jefe de la guarnición de Melilla]. Era éste favor insignificante y lo concedí gustoso. Marchó a Melilla, y a poco me escribía de allí notificándome haberse presentado como mensajero mío y encargado de mis negocios. Supe también que iba para ciertos negocios mineros, y entonces se me ocurrió que era empeño patriótico no dejar en manos extranjeras lo que para España podía ser imponderable elemento de riqueza. Envié a Melilla, Tetuán y Ceuta y sus alrededores a dos ingenieros amigos míos. Fruto de su viaje fue una memoria donde se puntualizaba la esplendidez de los colosales tesoros mineros de aquellas comarcas y, muy singularmente, las de Benibuifrufr. Calcule usted. Montañas enormes de material riquísimo; tanto, que da un rendimiento del 75% del peso bruto, cuando el de Bilbao no llega al 50%. Tierras de aluvión al pie de esas montañas, donde la labor de siglos ha ido llevando el mineral hasta el punto de dar un rendimiento del 75%. Y todo ello a las puertas de Melilla, costando una peseta el acarreo de la tonelada de mineral, en tanto que cuesta el transporte de Casablanca y otros puntos a la costa nueve pesetas. Mi sangre de minero (toda mi familia se ha dedicado a la minería, yo soy el único político de ella) se inflamó ante aquel auténtico tesoro. Pensé en los beneficios que reportaría a mi patria la explotación de las minas, y como entonces se hablaba mucho de la ‘penetración’, pensé en hacerla. Unido a Güell, MacPherson y Clemente Fernández, reconstituimos nuestra sociedad con un capital efectivo de dos millones”.¹⁶⁷

No se puede hacer una descripción más precisa del carácter colonialista de la guerra en Marruecos, de los fines de saqueo y latrocinio perseguidos por los grandes capitalistas españoles. Las pretensiones de fabulosos negocios en Marruecos acariciadas por las grandes familias de la oligarquía española fueron la auténtica causa de esa criminal intervención militar que, a su vez, encontró un eco favorable en la mezquindad del mando castrense. Después de la humillación sufrida en la guerra contra EEUU, los generales corruptos exigían un nuevo conflicto, en el que poder recuperar el honor perdido. En esto consistían las

¹⁶⁶ Francisco Olaya, *Historia del movimiento obrero español (1900-1936)*, Ediciones Solidaridad Obrera, Madrid, 2006, p. 223.

¹⁶⁷ Citado en Gómez Llorente, *op. cit.*, p. 145.

soflamas patrióticas de la burguesía, los militares y la monarquía de Alfonso XIII. Desde antes de su inicio, la guerra fue conocida popularmente como “la guerra de los banqueros”.¹⁶⁸

Ante la provocación española, los marroquíes no se quedaron de brazos cruzados y atacaron a las tropas españolas, que tuvieron que refugiarse en Melilla. La debilidad de la guarnición melillense frente a la ofensiva de los rebeldes rifeños decidió al gobierno a proteger la plaza colonial con nuevos refuerzos, incluyendo la movilización de reservistas. Adelantándose a la previsible reacción popular contra tal decisión, Antonio Maura, jefe del gobierno, decidió clausurar las Cortes el 4 de junio y, reuniendo al Consejo de Estado cinco días más tarde, aprobó un presupuesto extraordinario para la guerra de más de tres millones de pesetas. Esto incendió la ira popular, atizada por la decisión de trasladar a trabajadores que ya habían sido licenciados de sus obligaciones militares.

Los reservistas eran, en su mayor parte, obreros cabezas de familia, de los que dependían mujeres y niños y que en muchos casos no contaban con ninguna otra fuente de ingresos. El gobierno no daba ninguna ayuda a las familias afectadas. Pero, además, el reclutamiento del ejército era profundamente clasista. Los jóvenes burgueses podían librarse del servicio militar obligatorio pagando 1.500 pesetas o enviando un sustituto.

LA SEMANA TRÁGICA

La guerra polarizó la sociedad. En las tradiciones de la clase obrera, el movimiento contra la guerra colonial tenía importantes antecedentes que se remontaban cuatro décadas atrás, particularmente a las luchas contra las quintas del sexenio revolucionario. Desde entonces, la oposición a la movilización de quintas para la guerra de Cuba o la intervención en el norte de África fue parte de la actividad de las organizaciones obreras. En el caso del PSOE, su propaganda anticolonial adolecía de un contenido de clase consecuente, pues, aunque se centraba en la oposición al reclutamiento de trabajadores, no abogaba claramente por la independencia de Cuba o de los territorios marroquíes. Incluso el lema socialista más popular contra el reclutamiento (“O todos o ninguno”) dejaba en el aire una ambigüedad evidente respecto a la naturaleza imperialista de la guerra. En cualquier caso, las movilizaciones populares contra la intervención en Marruecos obligaron a los dirigentes socialistas a aumentar el filo revolucionario de su denuncia.

Cuando los planes bélicos eran ya evidentes, el 13 y el 15 de julio de 1909 se produjeron en Barcelona masivas manifestaciones de mujeres que llamaban a los soldados, listos para embarcar, a que arrojasen sus fusiles y se negasen a combatir. Una manifestación similar se organizó en Madrid, donde las estaciones de ferrocarril fueron ocupadas para impedir la salida de los trenes repletos de soldados. A pesar de que finalmente las tropas fueron embarcadas y llegaron a Melilla, su moral quedó minada. Los rifeños no dieron respiro a los ocupantes, con ataques sucesivos el 18 y 20 de julio. Para ocultar el desastre, el gobierno de Maura trató de engañar a la población negando la envergadura de las operaciones militares y calificando a los rebeldes de grupos terroristas y bandoleros, pero la extensión de los combates le obligó a enviar nuevos refuerzos.

La oposición al carácter clasista y colonialista de la guerra prendió profundamente. “No sería difícil ni extraordinario —advertía Pablo Iglesias en un mitin celebrado el 18 de julio en el cine Edén de Madrid— que algún reservista prefiriese apuñalar a un ministro o a cualquier

¹⁶⁸ Joan C. Ullman *La Semana Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912)*, Ed. Ariel, Barcelona, 1972, p. 312.

elevada personalidad, antes que ir a matar gentes que defienden su patria con el mismo valor que los españoles defendieron la suya en 1808. No son en este caso los marroquíes, sino el gobierno, los enemigos del pueblo español. Hay que combatir al gobierno empleando todos los medios. En vez de tirar hacia abajo, deben tirar hacia arriba. Si es preciso, los obreros irán a la huelga general”.¹⁶⁹ Mientras tanto, la Federación Catalana del PSOE aprobaba en Barcelona la siguiente moción: “Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista. Considerando además que, dado el sistema español de reclutamiento en el ejército, sólo los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran, la Asamblea protesta enérgicamente: 1) Contra la acción del gobierno español en Marruecos. 2) Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultan el dolor de los reservistas, de sus mujeres y de sus hijos dándoles medallas y escapularios en vez de proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan la ausencia del jefe de familia. 3) Contra el envío a la guerra de ciudadanos útiles a la producción y, en general, indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podían formar regimientos de curas y frailes que, además de estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia, ni hogar ni son de utilidad alguna al país. 4) Contra la actitud de los diputados republicanos, que no han aprovechado su inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en sus protestas contra la guerra”.

Toda la semana estuvo marcada por manifestaciones callejeras en Barcelona, Madrid y otras localidades. Ante las noticias de los primeros enfrentamientos y la muerte de reservistas, los ánimos se encendieron. En un mitin del PSOE en Terrassa, en el que participaron 4.000 obreros, se aprobó una resolución a favor de la convocatoria de una huelga general, que la dirección de UGT se mostró dispuesta a convocar en todo el Estado para el 2 de agosto. No obstante, la noticia de la derrota militar española en Ait Aixa, con un balance de 26 soldados muertos y otros 230 heridos, aceleró los acontecimientos. Los dirigentes de Solidaridad Obrera se decidieron a organizar un comité central de huelga, en el que también participó la Federación Catalana del PSOE a través de Fabra Rivas, y convocó una huelga general para el lunes 26 de julio en Barcelona. El domingo 25, la decisión fue ratificada en una asamblea con 250 delegados fabriles de toda la comarca barcelonesa.

La huelga general fue secundada masivamente. Los participantes en la asamblea del domingo se habían distribuido en la madrugada para preparar grupos de piquetes en las principales fábricas de la ciudad. Al grito de “¡Cerrad por nuestros hermanos de Melilla!”, los trabajadores secundaron decididamente la huelga. Una vez más, el papel más activo en los piquetes corrió a cargo de las mujeres. El paro se extendió como la pólvora desde los suburbios hasta el centro. A media mañana, toda la actividad económica de Barcelona estaba paralizada. El gobierno trató de proteger el servicio de tranvías, pero, tras varios enfrentamientos entre la Guardia Civil y los manifestantes, tuvo que desistir de su empeño. Por la tarde, la ciudad estaba en manos obreras. Los trabajadores habían conseguido armas, se enfrentaron a la Guardia Civil y a la policía, y asaltaron algunas comisarías para liberar a los presos políticos. Para evitar la llegada de refuerzos, cortaron las líneas férreas, al tiempo que en los barrios obreros se alzaban cientos de barricadas. La policía se había dispersado, incapaz de frenar el movimiento.¹⁷⁰

En tales circunstancias, el aparato del Estado se dividió entre los partidarios de reprimir el movimiento recurriendo al ejército —como Juan de la Cierva, ministro de la Gobernación— y los que no querían utilizar a las tropas temiendo que confraternizaran con los trabajadores

¹⁶⁹ Miguel Martín, *El colonialismo español en Marruecos*, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1973, p. 36. Esta obra es imprescindible, aunque curiosamente jamás fue reeditada y en muy pocas ocasiones es mencionada en la abundante historiografía sobre la Segunda República y la guerra civil. La mayoría de los datos históricos sobre la cuestión marroquí recogidos en este libro están tomados de la misma.

¹⁷⁰ Jaime García, *La Semana Trágica, a 100 años de la insurrección obrera*, en *El Militante*, nº 218 y 219.

—como Osorio, el gobernador de Barcelona—. Las dudas se aclararon con rapidez cuando el gobierno cesó, esa misma tarde, al gobernador civil y declaró la ley marcial en Barcelona. Pero las maniobras de la burguesía chocaron con la voluntad de combate de los trabajadores. Cuando el general Santiago, ahora al mando de la ciudad, pretendió ejecutar las órdenes sacando a la calle a los soldados acuartelados, muchos de ellos reservistas, una parte considerable de la tropa confraternizó con los trabajadores. En las calles de Barcelona, y durante varias jornadas, el poder del Estado quedó en suspenso.

El ánimo de victoria empujó a los trabajadores a continuar la movilización. La huelga, radicalizada por la represión y el paro patronal, se prolongó 24 horas más, extendiéndose a numerosas comarcas: Sabadell, Badalona, Tarrasa, Mataró, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Sant Feliu de Llobregat, Sitges, Tarragona, Calahorra, Alcoy y otras localidades se sumaron. En algunas de ellas surgieron juntas revolucionarias, que se hicieron brevemente con el poder municipal.

El comité central de huelga se vio rápidamente desbordado por los acontecimientos. Habían concebido la huelga como una movilización pacífica de la clase obrera para obligar al gobierno a detener el envío de tropas a Marruecos, pero en ningún caso enfocaron la lucha por el poder a través de una insurrección obrera. Por ejemplo, el comité de huelga de Sabadell puso un contingente de 1.500 obreros armados a disposición del comité central de Barcelona, ofrecimiento que fue rechazado por éste.¹⁷¹ Lo que se estaba expresando iba mucho más allá de una movilización antibélica, era el producto de décadas de explotación y de resentimiento contra los gobiernos reaccionarios de la monarquía restaurada. Las condiciones para un movimiento revolucionario en todo el Estado eran claramente propicias, y ese gran potencial se podría haber convertido en realidad a condición de que hubiera existido una dirección política con un programa, una táctica y una visión estratégica. Sin embargo, sin un plan para extender la huelga revolucionaria al conjunto del país, sin una táctica concreta para generalizar las juntas revolucionarias y coordinarlas, sin un programa para el poder, los dirigentes de las organizaciones obreras consumieron grandes energías en convencer a los líderes republicanos, tanto radicales como catalanistas, para que se pusieran a la cabeza del movimiento y proclamaran la república, sino en todo el Estado, al menos en Catalunya. Sus esfuerzos fueron infructuosos. El 27 de julio, radicales y republicanos se reunieron en el ayuntamiento de Barcelona y, tras muchas deliberaciones, decidieron volver a sus casas.

Las organizaciones obreras no plantearon la lucha fuera de la provincia de Barcelona. El 27 de julio en Madrid, Pablo Iglesias refrendó la convocatoria de huelga general para el 2 de agosto (que nunca se celebraría), pero ni el PSOE ni la UGT se decidieron a lanzar el movimiento de solidaridad con los obreros barceloneses. Mientras tanto, el ministerio de la Gobernación hizo correr el bulo de que la insurrección en Catalunya formaba parte de un movimiento separatista.

En ausencia de una dirección revolucionaria que marcara una orientación política consecuente y unos objetivos concretos a la insurrección, el Partido Radical trató de ocupar ese vacío y, de paso, alejar el movimiento de la senda revolucionaria. Con las fábricas cerradas y el aparato represivo del Estado aparentemente impotente, los dirigentes radicales (Lerroux estaba en el extranjero, tenía la curiosa virtud de desaparecer del mapa cuando la situación se complicaba), encauzaron los sentimientos anticlericales de la población contra las iglesias y conventos.¹⁷²

¹⁷¹ Tuñón de Lara, *El movimiento obrero en la historia de España, op. cit.*, p. 436.

¹⁷² “En mayo de 1901, Lerroux fue elegido diputado por Barcelona, obteniendo más votos que el viejo Pi y Margall. El programa demagógico lerrouxista, con su lenguaje anticlerical, aparentaba la defensa de la causa obrera y en numerosas ocasiones era difícil de diferenciar de muchas de las ideas que propagaban los viejos

La Iglesia católica era profundamente odiada por las masas. No sólo recibía ingentes subvenciones del Estado (más de 20 millones de pesetas anuales), sino que sus posesiones y poder económico eran tremendos. En 1912, Fomento del Trabajo, la patronal catalana, reconocía que la Iglesia controlaba un tercio del capital en España. Numerosos bancos, negocios e industrias le pertenecían directa o indirectamente. Su fusión con los capitalistas y terratenientes era total. La Iglesia hacía una ostentación arrogante de su poder y oprimía a millones de personas. Controlaba, en régimen casi de monopolio, la mayoría de las instituciones asistenciales: cuidado de ancianos y huérfanos, comedores sociales y, sobre todo, la enseñanza.¹⁷³

El crecimiento de un movimiento huelguístico que había superado los objetivos inmediatos de la lucha, combinado con las vacilaciones de una dirección carente de una orientación clara, abrieron el terreno para que los radicales trataran de canalizar las energías revolucionarias sin cuestionar el orden capitalista. Para ellos, era mejor que los obreros quemaran conventos a que ocuparan las fábricas o establecieran sus propios órganos de poder de clase. El primer convento que ardió en Barcelona fue el lunes 26 por la noche, pero fueron el martes y el miércoles, con la ciudad controlada por los trabajadores, cuando se desató la oleada de incendios. Hasta 80 edificios religiosos fueron pasto de las llamas. Esto no impidió que muchos obreros que participaron en los asaltos distinguieran sus objetivos. El espíritu de los trabajadores era “rescatar a los frailes y monjas”, en la creencia popular de que muchos de los novicios y novicias entraban obligados en las órdenes religiosas. No sólo se garantizó la integridad física de los religiosos, sino que las riquezas encontradas en su interior fueron incendiadas junto con los edificios. No hubo pillaje.

dirigentes del anarquismo. Para 1909, el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux era una fuerza con gran influencia en el panorama político catalán. Sectores importantes de la clase obrera con derecho a voto lo dirigían a este partido pequeño-burgués, hasta el punto que en las elecciones municipales de mayo de 1909 fue el partido ganador en Barcelona, quedando a un concejal de la mayoría absoluta, con más de 35.000 votos”. Ullman, *op. cit.*, p. 172.

El Partido Radical creó redes sociales de alimentos, protección social y educación orientadas a los trabajadores más precarios. Contaba con una organización juvenil compuesta de milicias armadas, los Jóvenes Bárbaros, que defendían los mítines del partido y atacaban los de los demás grupos políticos. También tenía dos organizaciones femeninas, las Damas Rojas, de extracción obrera, que combinaba las acciones reivindicativas con las asistenciales, y las Damas Radicales, donde se agrupaban las mujeres pequeñoburguesas, que sobre todo realizaban una acción cultural. Pero tras esa red social sólo había un intento de desviar la energía revolucionaria de la clase obrera hacia la arena del parlamentarismo. Lerroux, aunque hacía demagógicos llamamientos a la revolución social, centraba su discurso en denunciar el catalanismo (utilizado por la burguesía catalana para dividir a los trabajadores entre catalanoparlantes y emigrantes) y, sobre todo, en un violento anticlericalismo: “Alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres”, exhortaba Lerroux a los Jóvenes Bárbaros. (Joan C. Ullman, *op. cit.*, 178-180).

El surgimiento de Solidaridad Obrera supuso un duro golpe para las aspiraciones de los radicales. Desde el primer momento, la táctica de Lerroux fue tratar de controlar el sindicato o destruirlo: “He destruido Solidaridad Catalana [la coalición electoral catalanista] y destruiré Solidaridad Obrera”. Desde octubre de 1908 hasta la Semana Trágica, se produjeron constantes enfrentamientos entre anarquistas, socialistas y sindicalistas, por un lado, y radicales, por otro, por el control de SO.

¹⁷³ Los barrios obreros de Barcelona eran enormes concentraciones chabolistas sin agua corriente ni gas. De una población de 550.000 habitantes, se calcula que más del 40% eran analfabetos (el 60% en los barrios obreros) y que había más de 10.000 prostitutas, fundamentalmente obreras en paro y con hijos, o jóvenes sirvientas expulsadas por sus antiguos señores. Por supuesto, la explotación infantil era una práctica común: excluyendo el servicio doméstico y tareas como recaderos, etc., había unos 20.000 menores trabajando, sobre todo en la industria textil. (Ullman, *op. cit.*, p. 129).

Muchas familias obreras de Barcelona aspiraban a que sus hijos saliesen de las condiciones de vida miserables que llevaban, lo que pasaba porque recibieran una educación de calidad, pero la Iglesia cerraba ese camino, motivo por el cual los pedagogos anarquistas y racionalistas que trataban de impulsar una educación laica y accesible al pueblo, como Ferrer i Guardia, contaban con gran prestigio popular.

REPRESIÓN SANGRIENTA

Poco a poco, la energía revolucionaria de los obreros se fue extinguiendo. A partir del jueves 29, las tropas del general Santiago fueron reforzadas con cientos de guardias civiles, lo que le permitió recuperar el control de la ciudad. Tras aplastar las últimas barricadas en los barrios obreros de Clot y Horta, el sábado el gobierno logró acabar con la insurrección. Durante la semana, más de 70 obreros (algunas fuentes elevan la cifra a 104) habían sido asesinados por la policía, por francotiradores instalados en las azoteas y en combates en las barricadas. Más de 500 resultaron heridos, y muchos de ellos morirían en sus casas conscientes de que si acudían a recibir asistencia sanitaria serían encarcelados. Pero la represión más cruel vino tras la derrota.

Más de 2.500 trabajadores fueron detenidos por los militares, hasta el punto de que se habilitaron barcos para internar a los presos porque su número excedía la capacidad de las cárceles barcelonesas. Inmediatamente, el aparato judicial se puso a trabajar a toda máquina, dejando constancia del carácter vengativo del régimen monárquico y de su intención de dar una lección inolvidable a los trabajadores. Los tribunales de excepción militares procesaron a 1.725 detenidos. Entre el 1 de agosto de 1909 y el 19 de mayo de 1910 se realizaron 216 consejos de guerra, que dictaron 175 condenas de destierro, 59 de cadena perpetua y 5 penas de muerte. En pocos días, además de la represión sangrienta que se cebó sobre miles de trabajadores y sus familias, las autoridades militares cerraron 120 escuelas y 34 centros obreros. Los sindicatos fueron perseguidos y tuvieron que pasar nuevamente a la clandestinidad.

De los crímenes perpetrados por el gobierno y los mandos militares destacó, por su injusticia y crueldad, el fusilamiento, el 13 de octubre, de Francisco Ferrer i Guardia, pensador anarquista y director de la Escuela Moderna de Barcelona. Su procesamiento fue una de las mayores farsas de la historia de la justicia burguesa y su asesinato desató movilizaciones en varios países de Europa. El martirio de Ferrer i Guardia se convirtió en un símbolo de la falta de humanidad de la monarquía de Alfonso XIII.

La Semana Trágica marcó un punto de inflexión en la lucha de clases. Para empezar, aceleró la crisis política de la Restauración. La oleada de movilizaciones internacionales denunciando la represión contra los trabajadores barceloneses forzó a Alfonso XIII a destituir al impopular Antonio Maura. A partir de entonces, los dos partidos políticos dinásticos, los liberales y los conservadores, que se alternaban pacíficamente en el poder amañando las elecciones, sufrieron numerosas escisiones, de las cuales nunca lograron recuperarse.

Por otra parte, la intervención en Marruecos se convirtió en un gran fiasco. En diciembre, el gobierno dio por terminada la campaña militar sin haber conseguido ninguno de sus objetivos, un anticipo de las enormes dificultades con que se toparía en los siguientes años (la guerra del Rif se prolongó de 1911 a 1926). La aventura colonial española en el norte de África tendría efectos políticos y sociales perturbadores, introduciendo una desestabilización crónica en el régimen.

La Semana Trágica tuvo también otras consecuencias. La burguesía catalana, que había coqueteado con el movimiento obrero y las organizaciones republicanas para ampliar la base social de su regionalismo, iniciaría a partir de entonces un rápido tránsito hacia la derecha. El terror a la clase obrera convencería a estos “patriotas” de que sus intereses de clase estaban por encima de las bravatas en defensa de los derechos democráticos y nacionales de Catalunya. La clase obrera también aprendió lecciones valiosas. La lucha de sus sectores más avanzados contra el Partido Radical, que había constituido una de las señas de identidad de

Solidaridad Obrera, encontró un eco mucho mayor. Una parte considerable de la autoridad de los radicales colapsó al desvelarse su demagogia y su cobardía en los momentos difíciles. La represión pasó de largo entre los dirigentes pequeñoburgueses del radicalismo, que iniciaron una prolongada evolución hacia posturas reaccionarias.

VIRAJE HACIA LA COLABORACIÓN DE CLASES: LA CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA

Desde 1891, el PSOE había obtenido en las diferentes convocatorias electorales resultados modestos, que se explican, en gran medida, por el carácter reaccionario del sistema electoral censatario. Luchando contra los obstáculos colocados por los políticos de la alternancia, el progreso electoral de los socialistas fue evidente desde principios del siglo XX¹⁷⁴, conquistando un apoyo creciente en los ayuntamientos; si en los comicios municipales de 1895 sólo habían obtenido concejales en tres localidades (Bilbao, Ferrol y Mataró), diez años más tarde esa representación se había multiplicado por diez, incluyendo Madrid, donde fueron elegidos concejales Pablo Iglesias, Rafael García Ormaechea y Francisco Largo Caballero.

A medida que la participación electoral del partido daba sus frutos, el enfoque inmediato de esta cuestión y de la política de alianzas suscitó un arduo debate en las filas socialistas. En 1903, la agrupación madrileña, de gran ascendencia en el seno del partido, aprobó, por 107 votos contra 72, una resolución a favor de llegar a pactos electorales con los republicanos, resolución que en aquel momento fue rechazada por el Comité Nacional del PSOE. Pero la discusión no quedó zanjada y fue el VIII Congreso del PSOE (1908) el que dio luz verde a la posibilidad de llegar a acuerdos con los partidos republicanos en “casos excepcionales”. Esas “excepciones” llegarían a raíz de la fuerte represión desatada por el gobierno Maura tras la Semana Trágica de 1909. La amenaza de un ataque generalizado contra los derechos democráticos sirvió en bandeja la cobertura para el giro político que se había estado incubando: en noviembre de ese año quedó formalizado el pacto electoral con los partidos republicanos, la llamada *conjunción republicano-socialista*, para las elecciones municipales de ese año y las legislativas de 1910. Se iniciaba así una tradición que arraigó poderosamente en los dirigentes socialistas y que se convertiría en un axioma de su acción política.

La conjunción republicana-socialista situó la defensa de las libertades políticas y la consigna de la república burguesa como un eje de la agitación socialista e indudablemente limitó las perspectivas revolucionarias del partido. A partir de ese momento, las tendencias reformistas de la dirección socialista se acentuaron, el énfasis en la preservación de la organización a cualquier precio tomó aún más fuerza. Con el paraguas de la coalición, pero sobre todo debido a la repulsa popular por los acontecimientos de la Semana Trágica, Pablo Iglesias conseguirá ser elegido diputado por Madrid en las elecciones generales de 1910.

A pesar de que las aspiraciones democráticas de las masas eran evidentes y de que las reformas políticas —en defensa del parlamentarismo democrático burgués y el sufragio universal— contaban con la simpatía de millones, la clase dominante no estaba dispuesta a realizar concesiones. El atraso del capitalismo español no dejaba mucho margen para un discurrir calmado de la lucha de clases. La ausencia de derechos políticos plenos era consustancial a la naturaleza reaccionaria del poder político. Que dirigentes del PSOE hicieran una bandera de la lucha por la democracia no era en sí ninguna dejación de los

¹⁷⁴ Una panorámica detallada de la evolución electoral del PSOE en el período mencionado puede consultarse, entre otros, en el citado libro de Luis Gómez Llorente.

principios del marxismo. El problema surgió cuando esa bandera se convirtió en un fin en sí mismo, cuando se situó la democracia política como el objetivo estratégico del partido, desvinculándolo por completo del combate fundamental: la transformación socialista de la sociedad.

El giro hacia la colaboración de clases y el reformismo, como hemos señalado anteriormente, no fue una aportación original de Pablo Iglesias; el deslizamiento oportunista de los dirigentes del PSOE estaba en completa sintonía con la evolución, a un ritmo u otro, de los partidos más importantes de la Segunda Internacional, que tuvo su expresión más dramática en la capitulación patriótica de la socialdemocracia durante la Primera Guerra Mundial.

La Segunda Internacional empezó donde había acabado la Primera: unió y organizó a millones de trabajadores, creó partidos socialistas y sindicatos de masas en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, etc., y defendió, al menos de palabra, los principios del marxismo revolucionario. Las décadas de 1870 y 1880 estuvieron dominadas por la fuerte reacción política que recorrió Europa. El crecimiento de las fuerzas productivas, la derrota de la Comuna de París y la disolución de la Primera Internacional infundieron confianza a la clase dominante. Sin embargo, las condiciones objetivas de aquel período ayudaron también a una mayor organización del proletariado. Tanto los sindicatos como los partidos socialistas agruparon más fuerzas y ganaron un terreno considerable en aquellos años.

Alemania se convirtió en el país donde la Segunda Internacional se desarrolló con más fuerza e ímpetu. Tras la guerra franco-prusiana de 1870, la monarquía y los *junkers*¹⁷⁵ habían logrado unificar la nación, sentando las bases para una expansión capitalista similar a la vivida por Inglaterra tres décadas antes.¹⁷⁶ Apoyada en este proceso, la burguesía alemana trató de aplastar a la socialdemocracia mediante las leyes antisocialistas decretadas por el canciller Bismarck. Pero todos los intentos fueron vanos, y la socialdemocracia manifestaba un nervio formidable y un porvenir imponente: “Las elecciones han demostrado que no tenemos nada que esperar de la debilidad de hacer concesiones a nuestros adversarios. Hemos ganado respeto y nos hemos convertido en una fuerza gracias a una resistencia desafiante. Sólo se respeta al poder, y sólo mientras seamos poderosos seremos respetados por los filisteos. Cualquiera que haga concesiones, dejará de ser una fuerza y será despreciado. La mano de hierro puede hacerse sentir a través de un guante de terciopelo, pero tiene que hacerse sentir. El proletariado alemán se ha convertido en un grandioso partido: que sus representantes sean dignos de él”. Así se expresaba Engels tras las elecciones de 1890, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) superó el millón y medio de votos. De sus palabras se desprendía también una seria advertencia contra las tentaciones oportunistas de sus dirigentes.

En Francia, Jules Guesde organizó un potente partido socialista. En Inglaterra se fundaron asociaciones para hacer propaganda a favor de las ideas marxistas y socialistas. También en Dinamarca, Suecia, Bélgica, Suiza, Austria e Italia se dieron las condiciones propicias para crear partidos marxistas. Finalmente, la fundación oficial de la Segunda Internacional se llevó

¹⁷⁵ Aristocracia terrateniente prusiana, que constituía también el sector más reaccionario del ejército alemán.

¹⁷⁶ Las consecuencias de este fenómeno fueron analizadas por Engels en una carta a Bebel del 11 de diciembre de 1884: “Nuestra gran ventaja es que la revolución industrial está en pleno apogeo, mientras que en Francia o Inglaterra en lo que concierne a su aspecto principal, está detenida (...) Nuestra revolución industrial puesta en marcha por la revolución de 1848 con su correspondiente progreso burgués (débil pero progreso al fin) fue acelerada enormemente gracias a: 1) la destrucción de los obstáculos internos de 1866 a 1870, y 2) por los millones franceses [indemnización pagada a Alemania después de derrota de 1871]. Así, hemos obtenido una revolución industrial mucho más profunda y completa y, especialmente, más amplia que la de otros países; y esto con un proletariado perfectamente fresco e intacto, no desmoralizado por derrotas y finalmente, gracias a Marx, con un conocimiento de las causas del desarrollo económico y político, y de las condiciones de una revolución inminente, como no lo habían tenido ninguno de nuestros predecesores”.

a cabo en el centenario de la Revolución Francesa, en 1889, en un congreso organizado por los socialistas alemanes y franceses.

La formación de la Segunda Internacional se produjo en un período de auge económico capitalista, lo que dejó su sello en los nuevos partidos. Fueron años de lucha parlamentaria y por las reformas sociales, al menos en Europa occidental. Gracias al crecimiento económico y a la explotación de las colonias, la burguesía de los países más potentes pudo realizar concesiones, sobre todo a la aristocracia obrera, las capas superiores de la clase trabajadora. En estas condiciones, fue cristalizando un ejército de arribistas y burócratas que nutrían el aparato sindical, político y parlamentario de la socialdemocracia, una capa con intereses ajenos a la clase obrera y que vivía en la atmósfera material y psicológica de la pequeña burguesía radical e ilustrada. Las bases para el revisionismo se establecieron a lo largo de esos años.

Este proceso también afectó de lleno, aunque con las singularidades propias de un país atrasado, al PSOE. La perspectiva de la revolución socialista en el Estado español quedaba hipotecada por la colaboración entre el principal partido obrero y el ala liberal de la pequeña burguesía. La concepción de que los problemas fundamentales de la nación podían resolverse a través de la implantación de un régimen burgués parlamentario fue el vértice del programa socialista hasta la proclamación de la Segunda República. Este esquema teórico de la revolución por etapas, primero la burguesa, con su entramado de instituciones parlamentarias y de hipotéticas reformas políticas y sociales, y luego una etapa para la “implantación del socialismo”, una vez que la educación de las masas y la participación en las instituciones permitiesen al proletariado una posición hegemónica en la sociedad, había sido desmentido con rotundidad por los movimientos revolucionarios de fines del siglo XIX, y lo sería de manera aún más definitiva por la revolución rusa de 1917. Sin embargo, a pesar de los hechos, este esquema persistió como una losa en el programa de la izquierda española, hasta llegar a convertirse en el obstáculo fundamental para la victoria de los trabajadores en 1936-39.

Dicho esto, la historia del PSOE registró, desde su fundación hasta la Segunda República, la presión inapelable de la lucha de clases, no sólo de las fases de declive y retraimiento, también de los ascensos y los períodos de radicalización. Estos flujos y reflujos del movimiento obrero interactuaban con el partido. Los giros a la derecha, hacia la política de colaboración de clases, se alternaron con bandazos hacia la izquierda en los momentos de crisis económica y política aguda. Como organización de masas del proletariado español, el PSOE no podía permanecer al margen de los tremendos acontecimientos del primer tercio del siglo XX; al contrario, estaba condenado a que las sacudidas políticas rompieran regularmente su equilibrio interno.

Después de 1909, la influencia del PSOE y de la UGT fuera de Catalunya creció gracias precisamente a la organización de campañas de solidaridad con los represaliados de la Semana Trágica. En ese período, el sindicato socialista inicia una recuperación notable: más de 77.000 afiliados en marzo de 1911, 128.914 en septiembre de 1912 y 147.729 en enero de 1913.¹⁷⁷ En cuanto al movimiento obrero de Barcelona y las comarcas catalanas, los socialistas pagarían un precio por las vacilaciones y la falta de dirección de la que habían hecho gala. Ellos le pudieron haber dado una orientación política revolucionaria a la insurrección y un carácter estatal a la lucha, pero su enfoque reformista y posibilista no les diferenció positivamente de los dirigentes anarcosindicalistas, que lograron conservar el grueso de sus apoyos en las sociedades obreras catalanas. Al fin y al cabo, a ellas pertenecían la mayoría de las víctimas de la represión y fue a ellas a las que el gobierno persiguió con más saña.

¹⁷⁷ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 175.

LA FUNDACIÓN DE LA CNT Y EL ANARCOSINDICALISMO

Desde que se constituyó Solidaridad Obrera hasta el primer congreso nacional de la CNT en 1911, el movimiento obrero de corte anarcosindicalista había vivido un importante renacimiento. En noviembre de 1907 se creó la Federación Regional Extremeña y en noviembre de 1909 hubo intentos de organizar una SO andaluza; surgieron también una gran cantidad de federaciones locales en toda la península, entre las que destacaron las de Coruña, Zaragoza, Gijón y Granada, que en su momento servirían de plataforma para la extensión de la CNT. Paralelamente, se inició también la reorganización de las viejas federaciones nacionales de oficio (campesinos, toneleros, vidrieros...), muchas de las cuales intentaron ligarse a SO y consideraron como propio su órgano de expresión, *Solidaridad Obrera*.¹⁷⁸

Los dirigentes sindicales influidos por el sindicalismo revolucionario, así como los militantes anarcosindicalistas, se apoyarían en los acontecimientos revolucionarios de 1909 para reforzar su presencia en el movimiento obrero catalán y dar su paso más ambicioso, anhelado desde la disolución de la sección española de la Primera Internacional. Conscientes de los límites de su influencia por no contar con una organización estatal, utilizarían las mermadas fuerzas de Solidaridad Obrera¹⁷⁹ para lanzar una organización en todo el Estado. También en el seno de la federación catalana se produciría una mayor homogeneización ideológica, que ganó en profundidad tras la retirada de los militantes socialistas, opuestos a la creación de una nueva confederación sindical que pudiera competir con la UGT. Esta decisión facilitó una mayor unificación de las posiciones del sindicalismo revolucionario con las del anarcosindicalismo en las organizaciones obreras catalanas.

El salto definitivo llegaría en noviembre de 1910, cuando Solidaridad Obrera celebró su segundo congreso y en él decidió crear la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La convocatoria tuvo bastante éxito, con 126 delegados en representación de 106 sociedades de resistencia (35 de las cuales eran de fuera de Catalunya) y 7 federaciones locales. Un año más tarde (8 al 10 de septiembre de 1911) se organizó, también en Barcelona, el I Congreso de la CNT, con 140 sindicatos adscritos y 26.571 afiliados, la mayoría de Cataluña y Zaragoza. La constitución de la CNT supuso la definitiva consolidación orgánica del sindicalismo revolucionario en España, cuyo alcance estatal tendría una repercusión profunda en la historia del movimiento obrero.

Desde su fundación hasta la celebración del primer congreso, el crecimiento de la CNT fue realmente importante. En agosto de 1911, J. J. Morato le atribuye 23.758 afiliados, agrupados en 123 entidades obreras. Un mes más tarde, *Solidaridad Obrera* publicó el día de la inauguración del I Congreso cenetista una lista detallada de las 139 sociedades obreras pertenecientes a la confederación, con un total de 25.915 militantes. Barcelona era su epicentro, con 40 sindicatos adheridos y 7.279 afiliados.

Las razones de este crecimiento son diversas. En primer lugar, la creciente actividad huelguística: el año 1911 contabiliza más de 151 conflictos con más de 35.000 trabajadores involucrados. La acción de la CNT atrajo a un número considerable de estos obreros a sus

¹⁷⁸ Antonio Bar, *op. cit.*, pp. 151 y 231.

¹⁷⁹ “El militante sindicalista José Prat cifraba en unos 15.000 los afiliados a SO poco antes de que estallaran los sucesos de julio de 1909; tras la represión, SO inicia su reconstrucción con una afiliación en torno a 4.500 miembros”. Antonio Bar, *op. cit.*, p. 229.

filas.¹⁸⁰ En segundo lugar, el giro político del movimiento socialista afianzó las posiciones ideológicas de la CNT: “Fue precisamente el establecimiento de la conjunción republicano-socialista uno de los motivos principales que contribuyeron al éxito del sindicalismo revolucionario; en el sentido de que ello fue visto —incluso dentro de las fuerzas socialistas— como una colaboración de los socialistas con las fuerzas burguesas, lo cual suponía, para los sectores sindicalistas, una confirmación de las críticas que ellos hacían no sólo a la política como una cosa de burgueses, sino a los socialistas por seguir una línea electoralista y de colaboración”.¹⁸¹

Como ocurrió con SO, la mayoría de los militantes anarquistas se sumaron a la nueva organización, incorporando su bagaje ideológico pero aceptando, además, una gran cantidad de ideas del sindicalismo revolucionario. Este sector anarcosindicalista, cuyas líneas fronterizas en el plano ideológico se fueron confundiendo con las de muchos sindicalistas revolucionarios, fue adquiriendo una clara preponderancia en las filas de la CNT. El éxito de los anarcosindicalistas se explica, en gran medida, por su abandono de las ideas del anarquismo puro, de las concepciones más individualistas, conspirativas y humanistas, en beneficio de la acción de masas y la lucha de clases. El nuevo marco organizativo reflejaba los cambios objetivos y, a su vez, las repercusiones de éstos en todo el universo anarquizante. En palabras de Julián Casanova: “Aparecieron, en las tres primeras décadas del siglo XX, nuevos ingredientes que tuvieron importantes consecuencias para la formación de las clases trabajadoras y la transformación del movimiento anarquista. El capitalismo industrial y la ‘explosión urbana’ de algunas ciudades contribuyeron a consolidar en esos años la forma clásica de organización obrera, el sindicato. El discurso ritual de la clandestinidad y de la ‘subcultura’ anarquista, de los *grupos de afinidad* y de *acción*, de los ateneos obreros y de las escuelas laicas, se hizo público, se topó con un desarrollo paralelo de los lenguajes de clase, en la prensa, en los talleres y fábricas, en el campo y en la calle. Siguió coexistiendo ambos discursos, el de la clandestinidad, de la acción, y el del sindicalismo; el de la visión corporativa del trabajo con el de la conciencia de clase. Pero el segundo se abrió camino sobre el primero, y de una vinculación laxa de las ideas libertarias se pasó a un encuadramiento más disciplinado y de masas. El anarquismo transitó al anarcosindicalismo. Y ahí comenzó, como ya se ha dicho, la *atipicidad* española”.¹⁸²

La aceptación general del programa y los métodos organizativos del sindicalismo revolucionario no dejaba a los dirigentes y militantes a salvo de sus contradicciones doctrinarias, las agudizaba todavía más. La acción sindical, aunque sea con una orientación política consecuente, no es suficiente para acabar con el capitalismo y construir una nueva sociedad. Sin una táctica para ganar a las amplias masas trabajadoras al programa de la revolución social; sin una estrategia consecuente, más allá de la huelga general, para derrocar

¹⁸⁰ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 158.

¹⁸¹ Antonio Bar, *op. cit.*, p. 175.

¹⁸² Casanova continúa: “Farga Pellicer, Francesc Tomás, Fermín Salvochea murieron antes de que apareciera la CNT. Anselmo Lorenzo, el «abuelo», murió en 1914. Y salieron al escenario público militantes que ya habían bebido de las visiones libertarias del mundo tan en boga en los años 90, como Joan Montseny, Teresa Mané (Federico Urales y Soledad Gustavo, como se les conoció después) o Ricardo Mella, y sindicalistas de nuevo cuño, menos preocupados por el adoctrinamiento y más centrados en las reivindicaciones obreras. Si se exceptúa a los anarquistas de acción tan identificados con Durruti, Ascaso y García Oliver, que vivieron sus momentos dorados en la República y en los primeros meses de la guerra civil, casi todos los que se tomaron en serio el sindicalismo revolucionario, sus luchas diarias y sus sueños utópicos, forjaron sus rebeldías en los años de la Primera Guerra Mundial, participaron en la definición ideológica de ese sindicalismo en sus principales congresos (1918, 1919, 1931 y 1936) y dirigieron u orientaron los grandes órganos periodísticos que, encabezados por *Solidaridad Obrera*, tanto identificaron al movimiento. Ahí sobresalieron Salvador Seguí, pronto asesinado, Ángel Pestaña y Joan Peiró, pero también Eleuterio Quintanilla, Eusebio Carbó, Valeriano Orobón Fernández o José Villaverde”. Julián Casanova, *op. cit.*, pp. 52-53.

el Estado burgués; rechazando la participación política y negando la necesidad de un partido obrero para conquistar el poder, la acción sindical por sí sola es incapaz de cumplir las tareas de la revolución socialista. La emancipación de la clase obrera no se puede realizar fábrica a fábrica porque su explotación y opresión es el resultado de un sistema socioeconómico, el capitalismo, basado en unas determinadas relaciones sociales de propiedad y en una superestructura política: el Estado burgués.

A medida que el anarcosindicalismo aumentaba su influencia real en la clase obrera, los choques entre la teoría anarquista y la práctica del movimiento de masas se hicieron más evidentes. Muy a su pesar, el anarcosindicalismo se vio obligado a tomar postura frente a los acontecimientos nacionales, y la contradicción entre las necesidades tácticas, estratégicas y programáticas del proletariado revolucionario, por un lado, y los prejuicios anarquistas sobre la política y el poder, por el otro, se convirtieron, en los momentos decisivos, en un obstáculo formidable para la victoria.

IV

LA QUIEBRA DEL RÉGIMEN

En los años previos a la Primera Guerra Mundial, la concentración y monopolización del capital alcanzó tal grado, que la base sobre la que se había levantado el capitalismo decimonónico —la vieja “competencia” del pequeño industrial y del comerciante emprendedor— había pasado a mejor vida. El mundo vivía una feroz lucha entre los monopolios capitalistas por conquistar fuentes de materias primas, rutas comerciales y territorios. La fase imperialista del desarrollo capitalista desembocaría, finalmente, en una guerra abierta entre las potencias.

Un acontecimiento de implicaciones históricas como la Primera Guerra Mundial, que hizo tambalear los cimientos del orden capitalista y precipitó una oleada de revoluciones sociales, debía tener, a la fuerza, un fuerte impacto en la sociedad española. A pesar de sus singularidades y debilidades orgánicas, de la neutralidad gubernamental, el capitalismo español no podía escapar a semejante crisis.

EL IMPERIALISMO Y LA LUCHA POR LA HEGEMONÍA

En 1916, Lenin escribió *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, un amplio estudio sobre ese fenómeno, que se convirtió en un clásico del materialismo histórico y de la economía política marxista: “Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del imperialismo, debería decirse que el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Una definición tal comprendería lo principal, pues, por una parte, el capital financiero es el capital bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el capital de los grupos monopolistas de industriales y, por otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial, que se expande sin obstáculos en las regiones todavía no apropiadas por ninguna potencia capitalista, a la política colonial de dominación monopolista de los territorios del globo, enteramente repartido (...)”

“Pero las definiciones excesivamente breves, si bien son cómodas, pues resumen lo principal, son, no obstante, insuficientes, ya que es necesario deducir de ellas especialmente rasgos muy esenciales del fenómeno que hay que definir (...) conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus cinco rasgos fundamentales siguientes, a saber: 1) la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este ‘capital financiero’, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular; 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por

los trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes”.¹⁸³

Dar salida a la producción, incrementar las cuotas de ganancia, asegurar nuevos mercados, fuentes de materias primas y un amplio ejército de reserva de mano de obra, éste fue el acicate que empujó irresistiblemente a las principales potencias capitalistas a la colonización y el saqueo de nuevos territorios. A lo largo de cuarenta años, Gran Bretaña aumentó su ya vasto imperio colonial haciéndose con el control de Egipto y África del Sur. Francia ocupó Túnez e Indochina. Italia hizo lo propio con Abisinia, mientras la Rusia zarista completaba sus conquistas en Asia Central y penetraba hasta Manchuria. Alemania, aunque había llegado tarde al reparto del mundo, no renunció a su tajada: conquistó en África su primera colonia (Namibia) y se lanzó a la aventura imperialista en los mares del Sur, además de mantener en Turquía una preponderancia económica y política que no dejaba de crecer. También EEUU hizo lo propio en América Latina, despojando a España de los restos de su antiguo imperio y poniendo un pie en Asia con la incorporación de Filipinas a su área de influencia. Siguiendo el ejemplo de sus predecesores hispanos en América, los estados capitalistas utilizaron la guerra de ocupación y el saqueo económico para aplastar a las masas del mundo colonial.

Las condiciones objetivas para un enfrentamiento militar entre las potencias capitalistas maduraron a igual ritmo que la expansión imperialista. Aunque su escenario fue el mundo entero, la espoleta del conflicto se situó en los Balcanes, un área integrada por un mosaico de pueblos y nacionalidades oprimidas que concentró todas las ambiciones de las potencias europeas. En esta batalla por los Balcanes, la decadencia del imperio otomano disparó las pretensiones anexionistas de los países imperialistas más próximos (Rusia, Austria-Hungría, Italia) y de los económicamente más potentes (Alemania, Francia y Gran Bretaña).

En sus maniobras, las potencias instrumentalizaban, a su vez, los sueños expansionistas de los jóvenes estados y nacionalidades balcánicas. En nombre de una supuesta “autodeterminación nacional”, la autocracia rusa respaldó abiertamente el movimiento nacionalista serbio, que ansiaba crear la Gran Serbia, mientras la monarquía austro-húngara se encargaba de propagar su dominio político y militar, aplastando cualquier derecho democrático nacional de las nacionalidades que integraban Austria-Hungría. El interés por obtener una posición hegemónica en la zona contagiaba a la clase dominante de todos los países, incluidos los más débiles: las divisas reaccionarias de la “Gran Grecia”, la “Gran Bulgaria” o, incluso, la “Gran Rumanía” motivaban a las burguesías de estas jóvenes naciones, tras las cuales se escondía la mano del gran capital europeo. La escalada imperialista fue progresiva. En octubre de 1908, el imperio austro-húngaro se anexionó Bosnia y Herzegovina, ante la impotencia del imperio otomano y las amenazas de Serbia, que, respaldada por Rusia, insistía en su pretensión de crear la Gran Serbia. En la cuestión de los estrechos (apertura del Bósforo y los Dardanelos), el zar de Rusia se enfrentó tanto con Alemania como con Austria-Hungría, rechazando firmemente cualquier concesión que lo dejase en desventaja.

La tensión estalló en octubre de 1912 con la primera de las guerras balcánicas, en la que Turquía sufrió una severa derrota. El tratado de Londres (mayo de 1913) trocó el imperio otomano, aunque el reparto no resolvió nada.¹⁸⁴ Los Balcanes se habían convertido en un

¹⁸³ Lenin, *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2007, p. 98.

¹⁸⁴ Turquía cedió una parte importante de su territorio y todas las islas del mar Egeo. Grecia se anexionó Salónica, Creta y el sur de Macedonia. El norte de Macedonia pasó a manos de Serbia. Bulgaria obtuvo Tracia y la costa del mar Egeo. Las apetencias territoriales se mantuvieron con fuerza y Bulgaria, respaldada por los imperios centrales, atacó Serbia, provocando el inicio de la segunda guerra balcánica en junio de 1913. En esta ocasión, Rumanía, Grecia, Montenegro y Turquía intervinieron a favor de Serbia, provocando la derrota búlgara. En agosto de 1913, la paz de Bucarest, por la que Bulgaria perdió definitivamente Macedonia y otros

avispero en el que la cuestión nacional no encontraría solución bajo el capitalismo y el dominio imperialista. La crisis estaba madura y condujo, irremediabilmente, a la Primera Guerra Mundial.

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro-húngaro, el 28 de junio de 1914, proporcionó la excusa para el inicio de las hostilidades.¹⁸⁵ Como es norma en las guerras imperialistas, ésta también fue justificada con los argumentos más nobles y elevados: “defensa de la democracia, la cultura y los valores de Occidente”, “rechazó al militarismo agresor”, “seguridad colectiva”..., en definitiva, el amplio catálogo de mentiras para esconder la esencia de clase de las guerras de rapiña.

Entre todos los teóricos marxistas de la época, Lenin explicó mejor que nadie la naturaleza del conflicto y los intereses en juego: “Ninguno de los dos grupos de países contendientes es mejor ni peor que el otro en lo que se refiere a saqueos, atrocidades y crueldades sin fin de la guerra. Pero, para embaucar al proletariado y desviar su atención de la única guerra verdaderamente emancipadora, es decir, de la guerra civil contra la burguesía, tanto de su ‘propio’ país como de los países ‘ajenos’, la burguesía de cada país se esfuerza para alcanzar este sublime objetivo, con patrañas sobre el patriotismo, en enaltecer el significado de ‘su’ guerra nacional y en dar fe de que aspira a vencer al adversario en aras de la ‘emancipación’ de todos los demás pueblos, salvo el suyo propio, y no en aras del saqueo y las conquistas territoriales”.¹⁸⁶

La derrota de los imperios centrales, tras cuatro largos años de guerra encarnizada, dejó un saldo brutal: más de diez millones de soldados murieron en las trincheras. En Francia, los

territorios como Dobruja, “selló” el conflicto. La aspiración serbia de una salida al mar también se vio frustrada.

Sobre la cuestión balcánica, Trotsky escribió en 1914: “La creación de relaciones normales de vida nacional y desarrollo económico en la península balcánica es inadmisibles si el zarismo y Austria-Hungría siguen existiendo. El zarismo es ahora el indispensable almacén militar para el imperialismo financiero de Francia y el poder colonial conservador de Inglaterra. Austria-Hungría es el principal apoyo del imperialismo alemán. La guerra, aunque originada por choques entre familias privadas, entre los nacionalistas y terroristas serbios y la policía política de los Habsburgo, muy pronto reveló su verdadero y fundamental carácter: una lucha a vida o muerte entre Alemania e Inglaterra. Mientras los bobos e hipócritas hablan de defensa, de libertad nacional e independencia, la guerra anglo-alemana es hecha verdaderamente en pro de la libertad de explotación imperialista de los pueblos de la India y de Egipto, por una parte, y de la división imperialista de los pueblos de la Tierra, por la otra”. *Comunismo: guerra y paz*, también conocido como *La guerra y la Internacional*, Juan Pablo Editores, México, 1973, p. 11.

¹⁸⁵ La provocación fue utilizada por el imperio austro-húngaro para imponer sus pretensiones a Serbia. El 28 de julio, Austria-Hungría le declaró la guerra. Por su parte, el 30 de julio, el zar Nicolás II decretó la movilización general de las tropas y el 31 de julio el gobierno alemán, agitando el “peligro de guerra inminente”, envió un ultimátum a Rusia exigiendo su renuncia a la movilización general y un memorando a Francia emplazándola a declarar su neutralidad en caso de una guerra entre Alemania y Rusia. Para garantizar esa neutralidad, según el gobierno alemán, Francia debería entregar a Alemania las fortalezas militares de Verdún y Toul. Los argumentos “defensivos” para la movilización de la opinión pública a favor de cada contendiente se escogían con cinismo calculado por uno y otro bando. Finalmente, el 1 de agosto Alemania le declaró la guerra a Rusia y el 3 de agosto, a Francia. Entre el 3 y el 4 de agosto, el gobierno alemán, para “defender” las conquistas de la democracia, “amenazadas” por el zarismo, decidió invadir Bélgica. El 4 de agosto, Gran Bretaña dirigió un ultimátum a Alemania exigiéndole que garantizase la neutralidad belga, lo que equivalía a una declaración de guerra. El 11 y 12 de agosto, franceses y británicos se sumaron al combate contra Austria-Hungría.

¹⁸⁶ Lenin, *La guerra y la socialdemocracia de Rusia*. Marxist Internet Archive.

mueritos rondaron el millón y medio, a los que hay que sumar tres millones de heridos y más de 1.100.000 mutilados. En Alemania, murieron más de 1.800.000 soldados y hubo más de cinco millones de heridos e inválidos. En Austria-Hungría, los muertos se acercaron al millón y medio. En Rusia, el número fue considerablemente mayor: cinco millones murieron hasta 1920, incluyendo los caídos en los dos años de guerra civil e intervención imperialista contra el Estado obrero soviético. En Gran Bretaña, los muertos ascendieron a 750.000, cifra que se eleva a un millón si incluimos las bajas de los pueblos coloniales sometidos al imperio británico. En Italia, cerca de 800.000; en Serbia, 360.000; EEUU perdió 115.000 soldados.¹⁸⁷

Más de 570.000 civiles franceses y en torno a 750.000 alemanes murieron a consecuencia del hambre y las epidemias. La cifra de refugiados por los combates aumentó exponencialmente: más de un millón de alemanes huyeron de Polonia, los países bálticos, Alsacia y Lorena. Hungría recibió más de cuatrocientos mil refugiados; Bulgaria, doscientos mil. La ocupación de Serbia por las tropas austriacas provocó la deportación de más de 150.000 personas. En 1915, más de ocho mil serbios y montenegrinos internados en campos de confinamiento por el ejército austriaco murieron de sarna y tifus. La guerra turco-griega provocó el éxodo de más de un millón de familias griegas y hubo pogromos sangrientos contra ellas en la costa de Anatolia, después de que los ejércitos griegos, que habían avanzado en territorio turco, realizasen su propia política de limpieza étnica contra los turcos. Los armenios fueron víctimas de un genocidio a manos del ejército turco: cientos de miles fueron asesinados. El odio caló en lo más profundo de los Balcanes y el oriente europeo, un odio atizado por la agitación nacionalista que las diferentes potencias europeas cultivaron sin escrúpulos.

No había antecedentes en la historia universal de tamaña carnicería. La destrucción de la economía y la riqueza cultural y el sufrimiento terrible de millones de inocentes tuvo su contrapunto en los fabulosos negocios que la guerra propició. Los dueños de las empresas encargadas del suministro y la producción de armamento, los responsables del acaparamiento y la especulación con los alimentos, los traficantes de toda clase de productos hicieron de la guerra un negocio lucrativo y amasaron beneficios millonarios. En contraste, la mayoría de la población europea se vio reducida a una existencia miserable.

Los cuatro años de contienda colapsaron la economía. La producción agrícola se redujo un 30% y la industrial, un 40%. “Los imperios centrales (Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria, Turquía) se hallaban reducidos a un hambre genialmente organizado”, escribió Víctor Serge.¹⁸⁸

La guerra imperialista destruyó lo creado por el trabajo de generaciones, pero sus efectos políticos fueron aún más devastadores para el orden capitalista. Una gran conmoción recorrió la sociedad de arriba abajo, poniendo en cuestión todas las viejas creencias, todos los prejuicios introducidos por la clase dominante, y encendiendo la llama de la revolución socialista por el continente.¹⁸⁹ En toda Europa estalló un clamor contra la guerra, y la clase obrera ocupó el centro de ese movimiento desafiante. De 1916 a 1917, la cifra de huelguistas

¹⁸⁷ Rosario de la Torre, “Los problemas de la paz”, en *Siglo XX Historia Universal*, Temas de Hoy, Madrid 1997, t. 7, p. 8.

¹⁸⁸ Víctor Serge, *El año I de la revolución rusa*, Siglo XXI Editores, México, 1983, p. 183.

¹⁸⁹ La incorporación de la mujer al proceso productivo facilitó esta transformación de la clase obrera: millones de mujeres sometidas a la explotación fabril, sin contacto con sus maridos masacrados en el frente, adquirieron aceleradamente conciencia de su situación y jugarían un papel de vanguardia en los acontecimientos revolucionarios que estaban por venir. Si en Francia, antes de 1914, tan sólo había 17.000 mujeres empleadas en la industria metalúrgica, en 1917 ascendían a 300.000 y en 1918, a más de 400.000. En Alemania se pasó de 1.400.000 trabajadoras en el metal, a más de 2.100.000 en 1918. Algo similar ocurrió con los jóvenes que todavía no tenían edad para combatir. En Alemania, el número de mineros menores de 16 años se multiplicó por siete y el de metalúrgicos, por cuatro. Gabriel Cardona, “Los horrores de la guerra”, en *Siglo XX Historia Universal*, t. 5, p. 80.

pasó en Gran Bretaña de 276.000 a 872.000; en Francia, de 41.000 a 294.000; en Italia, de 136.000 a 170.000; en Alemania, de 129.000 a 667.000.¹⁹⁰ Estas cifras reflejan los movimientos de oposición obrera cuando todavía los frentes estaban activos. A ellas habría que sumar los miles de desertores en todos los ejércitos, los motines en numerosos regimientos que se negaban a combatir de los ejércitos francés, italiano y ruso, y las manifestaciones de masas exigiendo el fin de la guerra y las privaciones.

Después de años de lucha encarnizada, de destrucción general, toda la propaganda de la burguesía se desmoronó como un castillo de naipes y las ideas revolucionarias se apoderaron de la conciencia de millones de hombres y mujeres. A pesar del predominio de la reacción durante largos años, el topo de la historia había realizado su callada labor.

REFORMISMO Y CHOVINISMO

La guerra imperialista colocó a las organizaciones obreras ante una prueba decisiva. Sí, la matanza en las trincheras tenía fines absolutamente reaccionarios; sí, la Segunda Internacional había movilizado en numerosos congresos a sus mejores oradores contra el peligro de guerra y advertido que la clase trabajadora respondería con la oposición más firme en caso de que estallara¹⁹¹, la capitulación de la mayoría de los dirigentes socialdemócratas a la hora de la verdad fue un aldabonazo para el movimiento obrero mundial.

Como hemos señalado, el auge económico, que había durado tres décadas, consolidó en las filas de la Internacional una casta de funcionarios sindicales y del partido que disfrutaban de una posición material privilegiada. La actividad en el parlamento y otras instituciones y organismos, que absorbía las energías de la dirección y de los cuadros intermedios de muchas organizaciones obreras, fortaleció el cretinismo parlamentario hasta convertirlo, en muchos casos, en la tendencia dominante, infundiendo un espíritu de respetabilidad y reconocimiento social al aparato socialdemócrata. Las presiones de la aristocracia obrera, que constituía una firme base de apoyo de la burocracia reformista, y la constante penetración de ideas de clases ajenas, a través de la opinión pública burguesa, acabaron por convertir a muchos dirigentes de los partidos de la Segunda Internacional, marxistas e internacionalistas en sus orígenes, en lugartenientes de los capitalistas en el seno de la clase obrera.

La Segunda Internacional colapsó como organización revolucionaria. Las declaraciones previas se convirtieron en humo y la lucha internacionalista contra la guerra, tarea que se había impuesto como objetivo prioritario, fue sustituida por el ardor patriótico en apoyo a la

¹⁹⁰ *Ibid.*, p. 80.

¹⁹¹ El VII Congreso de la Segunda Internacional, reunido en Stuttgart del 18 al 24 de agosto de 1907, había incluido en la resolución adoptada sobre la guerra, que constituyó el punto central de los debates, una enmienda propuesta por Lenin y Rosa Luxemburgo en la que se afirmaba: “En caso de que, a pesar de todo, la guerra sea desencadenada, la clase obrera de los distintos países y sus representantes en los parlamentos deben procurar, por todos los medios, aprovechar la crisis económica y política provocada por la guerra para agitar a las masas populares y acelerar el hundimiento de la dominación capitalista de clase”.

El VIII Congreso se reunió en Copenhague del 28 de agosto al 3 de septiembre de 1910, y en él se reiteraron los planteamientos básicos de Stuttgart. Tras el estallido de la primera guerra balcánica (octubre de 1912), y ante el inminente peligro de guerra imperialista mundial, la Segunda Internacional celebró un congreso extraordinario en Basilea el 24 y 25 de noviembre, que aprobó por unanimidad un manifiesto declarando que los obreros considerarían un delito disparar unos contra otros.

Las resoluciones de estos congresos fueron votadas por una amplia mayoría, que incluía a los líderes más representativos de la Segunda Internacional. Pero en 1914, muchos de ellos se incorporarían como ministros en gobiernos de “unidad nacional” con la burguesía pocos días después del inicio de la guerra mundial.

burguesía nacional respectiva. El internacionalismo proletario dejó paso al socialpatriotismo, la defensa de la “patria” envuelta en una fraseología socialista.

La responsabilidad de la dirección fue inmensa, especialmente en Alemania, dado que el SPD era el partido más fuerte y mejor organizado de la Segunda Internacional. Esta bancarrota fue retratada por Rosa Luxemburgo en 1916: “¿Y qué presenciamos en Alemania cuando llegó la gran prueba histórica? La caída más profunda, el desmoronamiento más gigantesco. En ninguna parte la organización del proletariado se ha puesto tan completamente al servicio del imperialismo, en ninguna parte se soporta con menos oposición el estado de sitio, en ninguna parte está la prensa tan amordazada, la opinión pública tan sofocada y la lucha de clases económica y política de la clase obrera tan abandonada como en Alemania”.¹⁹²

Las organizaciones obreras de Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Austria-Hungría, Rusia, Alemania, Italia, etc., fueron arrastradas a la guerra por sus dirigentes. Fue el precio a pagar por el abandono de un punto de vista clasista e internacionalista en su programa y en su acción cotidiana. La lucha por la revolución fue sustituida por el frente único con los capitalistas nacionales: La *unión sagrada* bajo una misma bandera de los dirigentes obreros y de la burguesía a la que teóricamente decían combatir. El llamamiento de Marx y Engels en *El manifiesto comunista* —¡Proletarios de todos los países, uníos!— se cambió por el de: ¡Proletarios de todos los países, asesinaos en las trincheras en defensa de vuestra burguesía!

En medio de esta traición, sólo un pequeño núcleo de socialdemócratas permaneció fiel a los principios del internacionalismo y luchó contra el socialpatriotismo. Los marxistas rusos, encabezados por Lenin, fueron los más consecuentes en su oposición revolucionaria a la guerra. Estuvieron acompañados por una minoría de internacionalistas, como Trotsky, los alemanes Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que organizaron la oposición a la guerra en las filas del SPD, el holandés Pannekoek, el rumano Christian Rakovski, los socialistas serbios, encabezados por Lapschewitsch y Kazlerowitsch, que en el parlamento se opusieron valientemente a los créditos de guerra solicitados por su gobierno, las minoría de los partidos socialistas búlgaro e italiano... en total, un pequeño puñado de revolucionarios intransigentes aislados en un continente en guerra.¹⁹³

Los bolcheviques llevaron a cabo una gran agitación contra la guerra imperialista: “Sería totalmente erróneo olvidar que toda guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. La actual guerra imperialista es la continuación de la política imperialista de dos grupos de grandes potencias, y esa política es originada y nutrida por el conjunto de las relaciones de la época imperialista. Pero esta misma época ha de originar y nutrir también, inevitablemente, la política de lucha contra la opresión nacional y de lucha del proletariado contra la burguesía, y por ello mismo, la posibilidad y la inevitabilidad, en primer lugar, de las insurrecciones y guerras nacionales revolucionarias; en segundo lugar, de las guerras e insurrecciones del proletariado contra la burguesía; en tercer lugar, de la fusión de los dos tipos de guerras revolucionarias”.¹⁹⁴

¹⁹² Rosa Luxemburgo, *La crisis de la socialdemocracia*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid 2006 p. 11.

¹⁹³ Este pequeño núcleo de internacionalistas intentó agrupar sus fuerzas en dos conferencias celebradas en las ciudades suizas de Zimmerwald y Kienthal. La primera se celebró del 5 al 8 de septiembre de 1915, y en ella Lenin formó la llamada izquierda de Zimmerwald, en la que se encuadró Trotsky, que fue el redactor del manifiesto aprobado en la reunión. La segunda se celebró del 24 al 30 de abril de 1916. Ambas conferencias contribuyeron a agrupar a los elementos internacionalistas de los partidos de la Segunda Internacional y establecieron un terreno de colaboración que cristalizaría definitivamente en 1919 con la creación de la Internacional Comunista.

¹⁹⁴ V. I. Lenin, *El programa militar de la revolución proletaria*, en MARXISMO HOY nº 14, p. 60. FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS.

Lenin no se equivocaba en sus previsiones. La guerra imperialista abrió las puertas al triunfo de la revolución proletaria en Rusia y su extensión a muchos de los países beligerantes: Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria, Italia, etc. Una nueva era de la lucha de clases se hizo presente, espoleada por la firme voluntad de millones de trabajadores y campesinos dispuestos a derrocar el capitalismo. Las consecuencias de la misma fueron tremendas. Las filas de la Segunda Internacional se agrietaron con el triunfo bolchevique de octubre de 1917, dando paso a una tercera internacional revolucionaria, la Internacional Comunista. Durante un lapso de cuatro años, de 1917 a 1921, la situación se escapó del control de la burguesía.

En el Estado español, a pesar de la neutralidad observada en la guerra mundial y de los fabulosos beneficios que la oligarquía financiera, industrial y agraria obtuvo con ella, una gran crisis política aceleró la descomposición del régimen de la Restauración. El auge del movimiento obrero y jornalero, jalonado por la gran huelga revolucionaria de agosto de 1917 y las luchas del llamado trienio bolchevique, se combinaron con el impacto de la revolución rusa. La conciencia de la clase obrera y del campesinado —y, por supuesto, sus organizaciones tradicionales, tanto socialistas como anarcosindicalistas— experimentaron una gran transformación.

NEUTRALIDAD Y GRANDES NEGOCIOS

Al finalizar el siglo XIX, España era un país capitalista basado en un desarrollo *desigual y combinado*. Un país con un pasado imperial que había perdido todas sus colonias y se vio “colonizado” por el capital extranjero. Un territorio que, en lugar de ser una nación unificada política y económicamente, era más bien un conglomerado de nacionalidades y regiones señaladas por su historia singular, donde coexistían zonas muy atrasadas económicamente, predominantemente agrarias y con medios de comunicación arcaicos, y otras que agrupaban polos industriales y núcleos urbanos de alta concentración obrera.

En los comienzos del reinado de Alfonso XIII, alrededor de un 2% de los grandes propietarios poseía el 47% de las tierras cultivadas del país, explotadas con técnicas extensivas y con tasas de productividad muy bajas.¹⁹⁵ Los grandes propietarios sólo invertían para incrementar su patrimonio territorial, y en el sector financiero, nutriendo así las cuentas corrientes de los bancos y la financiación de la deuda pública. En partes muy importantes de la geografía española se dejaba de lado la modernización y tecnificación agrícolas a la par que se acentuaba el carácter parasitario de la clase terrateniente. Para cientos de miles de proletarios agrícolas y campesinos humildes, las primeras décadas del siglo XX estuvieron llenas de penurias; medio millón de ellos emigraron a América tan sólo en el primer decenio.

El subdesarrollo agrario se había convertido históricamente en el freno más notable para el crecimiento industrial, especialmente de la producción de bienes de consumo. No obstante, a partir de 1910 la industrialización experimentó un avance, que se vería reforzado, en proporciones desiguales, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese crecimiento de la industria, la oligarquía financiera, industrial y terrateniente, así como el capital extranjero, obtuvieron jugosas ganancias. No es ninguna exageración afirmar que la parte del león de la economía española se concentraba en poco más de 100 familias, que constituían el

¹⁹⁵ Tuñón de Lara, *La España del siglo XX*, Ed Laia, Barcelona 1981 t. I, p. 19.

Según Pierre Broué y E. Temimme, “el arado romano estaba más difundido que el arado de hierro. Los rendimientos por hectárea figuraban entre los más bajos de Europa y más del 30% de las tierras cultivadas permanecían en barbecho”. *La revolución y la guerra de España*, Fondo de Cultura Económica, México, 1971, p. 23.

núcleo duro de la oligarquía y que, a su vez, tomaban las decisiones políticas fundamentales.¹⁹⁶

Los análisis más rigurosos del proceso económico y político en que se formó la moderna clase capitalista española no dejan de reconocer esta confluencia de intereses. Aristócratas, terratenientes, banqueros, industriales, grandes comerciantes, etc., a pesar de sus contradicciones, integraban una misma clase social, con intereses materiales coincidentes y con el poder político en sus manos. Este proceso de enriquecimiento de la burguesía discurría paralelamente a los ennoblecimientos reales y al establecimiento de vínculos familiares con la aristocracia, que ya citamos en el capítulo anterior. La fusión entre el capital industrial, el capital financiero y la nobleza agraria se aceleró en el primer cuarto del siglo XX. Como señala Jesús Infante: “Así surge una nueva aristocracia de apellidos bancarios, como el clan familiar formado por los Urquijo (marqués de Urquijo, de Bolarque y de Amurrio), los Ussía y Cubas (marqués de Aldama), junto con los Cubas Erice (marqués de Fontalba). Este clan familiar constituyó bancos, a escala de todo el país: en 1918, el Urquijo, y en 1919, el Central. Por su parte, en Vizcaya existían familias ennoblecidas como los Ybarra (marqués de Arriluce), los Arreche (conde de Arreche), los Carega (conde de Cadagua), los Churrua (conde de Motrico) y, en general, con o sin título aristocrático, las familias de industriales mineros, siderúrgicos —y luego banqueros— vizcaínos como los Chavarri, Lezama-Leguizamón, Aresti, Zubiría, Delclaux, Gandarias y Sota, que fueron elevados al nivel máximo de categoría social por su poder económico (...) En Cataluña ocurre el mismo fenómeno que en Vizcaya: condes de Caralt, conde y vizconde de Güell, marqués de Comillas, empresarios industriales, así como el conde de Godó, editor del periódico *La Vanguardia*, del mismo modo que el editor del periódico *ABC*, Luca de Tena, fue hecho marqués en Madrid. Por otra parte, bodegueros de vinos y licores en Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, como Domecq, González, Osborne o Ferry se incorporaron también a la aristocracia en Andalucía.

“El fenómeno económico era irreversible y de tal magnitud, que la incidencia en la dinámica financiera e industrial a una escala y política a otra, era un hecho incontrovertible. Las nuevas élites españolas eran decididamente industriales y bancarias, y aunque quedaban todavía los grandes feudos latifundistas y ganaderos, muchos de sus titulares empezaron a relacionarse con las nuevas familias, bien por parentesco, bien por alianzas económicas; las grandes fortunas agrícolas de la aristocracia se fusionaron con la burguesía industrial, que alcanzaba y superaba a una aristocracia anclada económicamente en el pasado. Como resultado de tales fusiones surgieron las grandes fortunas de España. Inevitablemente, todo este ascenso de una

¹⁹⁶ Los historiadores liberales, incluyendo a algunos que han ocupado cargos de responsabilidad en gobiernos socialistas, han presentado una visión más suave de esta plutocracia, en nombre de un supuesto análisis histórico “riguroso” y “científico”. Este es el caso, entre otros, de Mercedes Cabrera, ex ministra de Educación. En la introducción de su documentada obra *El poder de los empresarios. Política y economía en la España contemporánea (1875-2000)*, escrita conjuntamente con Fernando del Rey, señala al respecto (p. 10): “Huímos de los [conceptos] demasiados genéricos y clásicos, como el de ‘burguesía’, ‘clase dominante’ u ‘oligarquía’, porque simplifican en exceso situaciones de suyo intrincadas y porque sus connotaciones ideológicas o morales lastran su efectividad analítica. Preferimos hablar de élites aunque, como ha señalado recientemente un especialista en el tema, Pedro Carasa, pequemos con ello de eclecticismo. (...) hablamos de empresarios o de empresariado en un sentido extenso y, probablemente, poco ortodoxo en términos económicos: de ‘capitanes de industria’, pero también de propietarios agrarios y arrendatarios; de fabricantes, industriales y comerciantes; de banqueros, hombres de negocio y directores de empresa; de ‘productores’, si no fuera porque este término decimonónico suena hoy arcaico y está en desuso. En resumen de un conjunto social heterogéneo [!] por su origen [!], estilo de vida [!!!], prestigio social [!!!!] y capacidad de influencia [!!!!!!], irreductible en definitiva a una única realidad [!!!!!!] salvo que nos empeñemos en mantener el concepto más rancio de clase social [!!!!!!!], y aún así, en tan largo recorrido histórico, se nos demostraría incapaz de explicar nada [!!!!!!!]”. Huelga decir que muchos otros historiadores no tienen estos prejuicios a la hora de hablar con propiedad de la clase capitalista.

nueva oligarquía industrial y bancaria hasta el rango de las aristocracias de familia y tierras comportaba el consiguiente acceso a los dispositivos de poder, proceso que fue lentamente realizado durante el primer tercio del siglo XX. Así, muchas de las fortunas amasadas con negocios coloniales, aumentadas en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, y luego a partir de la posguerra en 1918, con los boom de las minas del norte, el inicio de la siderurgia, la implantación de las industrias básicas, el equipamiento de infraestructuras de las ciudades, los transportes... tuvieron un desarrollo espectacular, con beneficios enormes, y llegaron a participar en la más alta escala política”.¹⁹⁷

La declaración de neutralidad ante la Primera Guerra Mundial, proporcionó grandes oportunidades de negocio a la oligarquía económica española. Para abastecer los mercados europeos, sometidos al esfuerzo bélico, especialmente Francia y Gran Bretaña, destino de la mayor parte de la producción de guerra española, se desarrollaron nuevas industrias y aumentaron considerablemente las inversiones de capital.¹⁹⁸ Las más beneficiadas fueron las industrias vinculadas a los sectores extractivos: el carbón, que aumentó considerablemente su producción, el cinc y el cobre, aunque en este caso la propiedad de las empresas estaba en manos de capital británico. También la siderurgia se vio recompensada: las ganancias netas de Altos Hornos de Vizcaya entre 1917 y 1918 oscilaron entre los 100 y los 150 millones de pesetas. La situación era similar respecto a las navieras, las papeleras o el sector textil, impulsado por la neutralidad de EEUU, que aseguró el abastecimiento de algodón. También los grandes propietarios agrarios obtuvieron exorbitantes ingresos en la mayor parte de los ramos, especialmente en el aceite de oliva, la remolacha azucarera, el trigo, el centeno y la cebada.

El historiador Tuñón de Lara señala el grado de concentración del capital y de la producción industrial española en la segunda década del siglo XX y el dominio que sobre este proceso ejerció el capital financiero: “...La creación de nuevas empresas y sociedades anónimas, aprovechando la coyuntura favorable de aquellos años, forma parte de la misma historia de esos importantes grupos financieros que, *cada vez con más fuerza*, iban afirmando su hegemonía sobre un complejo bancario-industrial. En la creación de importantes empresas electromecánicas desempeñaron los primeros papeles los bancos del norte (Urquijo, Bilbao, Vizcaya). Se formaron, entre otras, la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (que tomó en principio en arriendo la ya existente Fábrica de vagones de Beasáin), la Sociedad Española de Construcciones Electromecánicas, la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, la Babcock&Wilcox (en la que el Banco Urquijo está unido a capitales británicos). En 1912 se había creado la Unión Eléctrica Madrileña y en 1918, la de Saltos del Duero...”.¹⁹⁹ Las instalaciones industriales habían experimentado también un rápido proceso de concentración: en la gran metalurgia, de 762 empresas a principios de siglo se pasó a 311 en 1918. Pero, a pesar de todo el avance que la industrialización registró en este período, el 60% de la población activa seguía siendo agraria.

Los bancos fueron los más beneficiados por el maná de la guerra mundial. “Los beneficios de la banca se habían duplicado entre 1915 y 1917 (...) La cartera de valores de los bancos pasó de 564 millones en 1915 a 1.071 en 1918 y a 2.344 en 1921. Se consolidaron así un pequeño número de grupos financieros en torno a los más importantes bancos: el Hispano Colonial, presidido por Claudio López Bru, marqués de Comillas; el Hispano Americano, presidido por Antonio Basagoiti Arteta; el Banco Español de Crédito, que desde 1917 dirigía José Gómez Acebo y Cortina, marqués de Cortina; el de Bilbao, presidido por Julio Arreche; el Vizcaya,

¹⁹⁷ Jesús Infante, *Los muy ricos...*, p. 88.

¹⁹⁸ Entre 1916 y 1919, el promedio anual de capitales de nuevas sociedades anónimas fue de 580 millones de pesetas, frente a los 171 millones de 1913. Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 28.

¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 33.

el Crédito de Unión Minera, etc. Los consejeros de estos siete bancos se sentaban también en los consejos de otras 264 sociedades que representaban algo más del 7% de las sociedades constituidas, pero absorbían el 49% del capital desembolsado”.²⁰⁰

El capital financiero y la omnipresencia del latifundio en el centro, oeste y sur del país constituían los dos obstáculos más importantes a los que se enfrentaba cualquier estrategia de cambio social. Un programa de reformas progresistas en beneficio de las masas, como la reforma agraria, la solución al problema crónico de los bajos salarios y el desempleo, por citar algunos de los más perennes, no podría llevarse a cabo de manera satisfactoria sin atacar a esa oligarquía financiera y a los terratenientes, lo que implicaba una lucha directa contra las bases mismas del orden capitalista. Esta era la piedra de toque de la revolución. Pero desde la derrota de la Semana Trágica (1909) hasta el inicio de la guerra civil (1936), el argumento recurrente de una parte mayoritaria de los dirigentes reformistas del PSOE fue que la revolución no podía traspasar los límites de las realizaciones democráticas. La insistencia en considerar la revolución como una sucesión de etapas totalmente desconectadas entre sí (primero, la revolución democrática burguesa y, en un tiempo indefinido, la revolución socialista) obviaba una pregunta crucial: ¿cómo acometer las transformaciones necesarias para entregar la tierra al campesinado, mejorar la vida de la clase obrera o acabar con la monarquía sin cuestionar el poder de la oligarquía industrial y financiera, de los grandes terratenientes, que poseían el control de las palancas económicas y políticas del país?

EL EXPOLIO MARROQUÍ Y LAS JUNTAS MILITARES

El poder de esta oligarquía terrateniente burguesa requería un aparato militar para luchar contra el enemigo interior, pero el devenir del régimen burgués español facilitó que la casta militar adquiriese una considerable notoriedad política. Hacia principios del siglo XX, el ejército contaba con unos 150.000 efectivos, de los que 25.000 eran jefes y oficiales, entre ellos 470 generales. “Después de la guerra contra Napoleón —señaló Trotsky— surgió en España una nueva fuerza: la oficialidad metida en política, la joven generación de las clases dominantes, heredera de la ruina del que fue en otro tiempo gran imperio y desclasada en un grado considerable. En el país del particularismo y del separatismo, el ejército ha adquirido, por la fuerza de las cosas, una importancia enorme como fuerza de centralización y se ha convertido no sólo en el punto de apoyo de la monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las fracciones de las clases dominantes y, ante todo, de su propio descontento”.²⁰¹

El desastre de 1898 había alimentado un gran resentimiento entre la oficialidad. Unos años después, en el marco de la escalada colonialista europea, la corona, la casta militar y los grandes plutócratas intentaron recuperar las ínfulas imperiales con una sangrienta aventura en Marruecos. Pero los misioneros armados nunca son bien recibidos. Entre 1909 y 1923, la intervención colonial se saldó con grandes derrotas para los ejércitos españoles, sucesivas crisis políticas entre ellas la Semana Trágica de Barcelona, caídas de gobiernos, robo y

²⁰⁰ Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, *El poder de los empresarios, política y economía en la España contemporánea*, Ed. Taurus, Madrid, 2002, p. 175.

²⁰¹ León Trotsky, “La revolución española y las tareas de los comunistas”, en *La revolución española (1930-1939)*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 92.

corrupción en las finanzas públicas e, indirectamente, precipitó el golpe militar de Primo de Rivera.²⁰²

En 1912, el gobierno de Alfonso XIII firmó con Francia un nuevo acuerdo por el que se legalizaba la incursión colonial española bajo la fórmula de un protectorado. Se confirmaba, por tanto, la división territorial de Marruecos entre un poder dominante francés y un secundario español. En estos casos, como es habitual, fueron las masas del campesinado las que pagaron el precio más alto, mientras los señores feudales marroquíes capitularon constantemente. Pero a pesar de las cesiones humillantes de los sultanes Muley Abdelaziz y Muley Hafid a las pretensiones del imperialismo francés, las sublevaciones contra los ocupantes se sucedieron por todo el territorio: desde el Atlas Medio y el Gran Atlas, en el sur, hasta las zonas del Yebala y el Rif en el norte. La lucha por la liberación nacional de Marruecos adquirió una gran envergadura.

La organización del protectorado español en Marruecos tomó como modelo el de la zona francesa. Se dispuso que su territorio, así como todas las autoridades consulares y militares, dependieran del comandante general de Ceuta, que actuaría como alto comisario. Para las tareas administrativas, policiales y de control de las mejores tierras y riquezas, tributos sobre la población y organización de servicios básicos, se crearon tres delegaciones civiles que, como era de esperar, se convirtieron en el coto privado de traficantes de todo signo, en primer lugar del estamento militar, que hizo suculentos negocios a costa del pueblo marroquí. A partir de la firma del tratado hispano francés de 1912, el gobierno movilizó al ejército en una progresiva ocupación del territorio marroquí. Tetuán fue tomado en 1913.

Las campañas militares españolas se enfrentaron a una fuerte resistencia en la región del Rif, y si la clase dominante española y su brazo militar actuaron con gran crueldad para aplastar la resistencia de los rifeños, demostrando la misma saña de la que hacían gala cuando se trataba de oprimir a los campesinos y trabajadores españoles, no es menos cierto que estos últimos cumplieron lealmente con su deber internacionalista. “Ningún proletariado del país colonizador —escribe Miguel Martín— se opuso con la firmeza de la clase obrera española a las aventuras colonialistas. La agitación anticolonial de los trabajadores quedará históricamente como modelo, como ejemplo práctico de solidaridad, de internacionalismo proletario. Hasta los años finales de la década de los veinte, en que la alianza militar entre el colonialismo español y el francés logró aplastar militarmente al pueblo marroquí, los sindicatos y partidos obreros españoles mantuvieron sistemáticamente una oposición a la conquista colonial y una defensa de la independencia del Estado marroquí, escribiendo páginas heroicas del movimiento obrero español”.²⁰³

Las dificultades y los reveses sufridos en Marruecos fueron una afrenta para la vanidad de los militares y estimuló su descontento. Una irritación creciente que tenía también otras causas, como la desigualdad en la escala de ascensos y promociones, y los celos que entre muchos militares de escala inferior despertaban los privilegios de un reducido grupo de generales y altos mandos. El descontento de la oficialidad se convirtió, en los años de la guerra mundial, en un gran quebradero de cabeza para la monarquía, pero, ante todo, era una manifestación indirecta, aunque muy relevante, de la profunda crisis que atravesaba el régimen de la Restauración.

²⁰² “La voracidad mesiánica de un monarca, el afán de algunos militares españoles deseosos de provocar situaciones bélicas con las que adornar su hoja de servicios o trepar en el escalafón y la atracción que suponía para la oligarquía española la política imperialista de Francia llevaron a España a violar la independencia y unidad del Estado marroquí. Con lo que pasamos a formar parte de las potencias coloniales, en calidad de enanos colonialistas, pues los 300.000 km² que Madrid había robado no eran nada comparados con los treinta y tres millones de Londres, los diecisiete millones del Moscú zarista, los once millones de París, los tres millones de Berlín y el millón y medio de Washington y Tokio”. Miguel Martín, *op. cit.*, p. 33.

²⁰³ *Ibid.*, p. 33.

En aquellos años, el ejército español era una maquinaria atrasada en comparación con los ejércitos europeos. Una parte muy elevada del presupuesto del Estado era devorada por los gastos militares —en torno al 25%, pero en ocasiones sobrepasó el 50%— y de este, la parte del león iba a parar a los salarios de la numerosa oficialidad, un 60% del presupuesto militar, mientras que el conjunto de la tropa absorbía el 30% y el 10% restante se destinaba a equipamiento.²⁰⁴

La insatisfacción general que inundaba los cuartos de bandera tras la frustrante experiencia marroquí, la fuerte polarización social y política, la inflación haciendo estragos en el nivel de vida de las masas y en los salarios de muchos suboficiales, el creciente movimiento reivindicativo de los trabajadores y el estallido de luchas obreras a una escala que no se había visto desde 1909, el desgaste evidente del gobierno... todo se combinó para que a finales de 1916 surgieron las *Juntas* de Defensa, el canal por el que los militares pretendieron intervenir, y decidir, en la vida pública del país, y dejar en evidencia su descontento y sus propias exigencias.²⁰⁵ Estas juntas se fueron configurando como un auténtico poder dentro del Estado, y plantearon, cada vez con más audacia, sus demandas corporativas y políticas: exigieron la plena autonomía de los mandos a la hora de decidir la política de ascensos y promociones del estamento militar,²⁰⁶ reclamaron subidas salariales y, sobre todo, criticaron abiertamente al gobierno y al parlamento por su incapacidad para contener el ascenso de la lucha de clases y la actividad de los anarcosindicalistas. Las juntas y, en general, el cuerpo de oficiales no estaban dispuestos a tolerar un movimiento obrero que pusiera en peligro el sistema y la estructura política de la Restauración; si los órganos civiles no mostraban la diligencia necesaria para imponer el orden, la casta de oficiales sí estaba dispuesta, aunque eso implicase un gobierno militar.

LA CARESTÍA DE LA VIDA

Los enormes beneficios empresariales del período no se tradujeron en mejoras de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La dificultad de importar productos de los países europeos en guerra provocó una espiral inflacionista. Según Tuñón de Lara, entre 1914 y 1916 las patatas aumentaron su precio un 118'2%; el azúcar, un 53'2%; el bacalao, un 39'2%; los huevos, un 21'2%. Entre 1913 y 1920 la inflación prácticamente se dobló.²⁰⁷ Los salarios no podían soportar tales incrementos. En los tres primeros años de guerra, el jornal medio de los obreros cualificados osciló entre 5 y 5'50 pesetas por una jornada de nueve a once horas y el de los jornaleros no pasaba de 1 ó 1'50. En contraste con el gran aumento del precio de los productos básicos, el salario medio sólo creció en torno a un 10%, aunque en el

²⁰⁴ Gerald H. Meaker, *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*, Ed. Ariel, Barcelona, 1978, p. 96.

²⁰⁵ El primer impulso hacia la formación de las juntas provino de la guarnición de Barcelona, que en una zona donde el regionalismo y la agitación obrera era tan acentuada, “gustaba considerarse como campeona de la unidad nacional y del orden civil”. *Ibid.*, p. 99.

²⁰⁶ “La incapacidad del régimen por mantener una institución militar viable, el impacto de la inflación y un sistema de favoritismos crecientes en torno al rey, bajo el cual la concesión de recompensas, condecoraciones y promociones se había vuelto cada vez más injusta. Las camarillas militares que se beneficiaban de este sistema eran, fundamentalmente, los militares africanistas, es decir, los jóvenes oficiales que, por méritos de guerra en Marruecos, esperaban acelerar su ascenso en el escalafón, y los oficiales seleccionados, en su mayoría generales, que habían ganado el favor de la camarilla palaciega y de las oligarquías políticas. Finalmente llevó a una actividad organizada que canalizaba la frustración de los militares”. *Ibid.*, p. 98.

²⁰⁷ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 25.

campo la pérdida de poder adquisitivo fue mucho mayor.²⁰⁸ La escasez y el hambre eran la nota común en muchos rincones de Andalucía, Extremadura y Castilla, lo que reforzó el proceso de inmigración interior, especialmente hacia Barcelona, Madrid y Bilbao.

Un porcentaje importante de la población española del primer cuarto de siglo XX puede englobarse en la categoría de pobres, con unos niveles de vida que rozaban la subsistencia, además de elevadas cifras de analfabetismo, alrededor del 50% entre los adultos. Los primeros tres años de contienda mundial resultaron en una prosperidad económica que fue acaparada por la burguesía, mientras la mayoría de la población se empobrecía aún más; el auge temporal de la economía no suavizó las contradicciones sociales, sino, por el contrario, las polarizó: “Mientras que más de mil millones de pesetas-oro permanecían encerrados en los sótanos del Banco de España y los políticos y los industriales se regocijaban de la prosperidad española, el hambre y el paro se extendían, así como la carestía de pan daba lugar a disturbios en diferentes ciudades”.²⁰⁹

A partir de 1916, el pulso reivindicativo adquirió nuevo vigor, en el marco ya de una escasez crónica y alza de los precios (entre ellos, el del pan) a lo que sumó el aumento del desempleo en numerosos sectores. El auge huelguístico, por tanto, no puede entenderse sin tener en cuenta el poderoso efecto que, entre amplias capas de la clase obrera, tuvo el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo. Una situación desesperada, sometidos al cerco de la escasez, la inflación descontrolada y el desempleo, transformó las luchas económicas de los trabajadores en un movimiento con un claro contenido político, contra el gobierno y el régimen monárquico. “Podría decirse, pues, que lo verdaderamente significativo en este momento del conflicto generalizado en la España del primer tercio del siglo XX es la transformación de un problema social creciente (...) en un conflicto político imparabile”.²¹⁰ Este es el telón de fondo que explica la crisis política de 1917 y la gran huelga general de agosto.

AGITACIÓN OBRERA

El avance de la industria en paralelo a la guerra mundial fortaleció al proletariado: entre 1910 y 1918, el número de mineros pasó de 90.000 a 113.000; el de metalúrgicos, de 61.000 a 200.000; el de obreros textiles, de 125.000 a 213.000; y el de trabajadores del sector del transporte, de 150.000 a 212.000.²¹¹ Este crecimiento numérico se reflejó positivamente en las organizaciones sindicales. En 1914, la UGT contaba con 127.804 afiliados y unos 15.000 la CNT, que había sido desbaratada por completo después de la Semana Trágica. Pero a mediados de 1918, las cifras habían dado un vuelco espectacular: la UGT agrupaba a 89.601 afiliados y la CNT sobrepasaba los 700.000.²¹²

Entre 1916 y 1920, el movimiento huelguístico inició un ascenso imparabile. La agitación obrera, desencadenada primariamente por motivos económicos, pronto se transformó en una ofensiva política de largo alcance. La conciencia de clase revolucionaria desbordó en

²⁰⁸ *Ibid.*, p. 34.

²⁰⁹ Meaker, *op. cit.*, p. 62.

²¹⁰ Julio Aróstegui, *Francisco Largo Caballero, dirigente de la UGT: 1917, la primera gran prueba*, en *Claridad*, primavera verano 2008, nº 14 CEF UGT, Madrid 2008.

²¹¹ Juan Antonio Lacomba, *La crisis española de 1917*, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1970, p. 31.

²¹² Los datos de UGT, en Santiago Castillo, *Un sindicalismo consciente*, incluido en la revista *Claridad* de primavera-verano de 2008. Los de CNT, en Juan Gómez Casas, *op. cit.*, p. 129.

numerosas ocasiones los objetivos de las organizaciones obreras y, finalmente, colocó al régimen de la Restauración ante una crisis de la que no se recuperaría.

Durante la Primera Guerra Mundial, el PSOE osciló entre la defensa de la neutralidad y una postura aliadófila, sobre todo tras la invasión alemana de Bélgica y Francia. El 2 de agosto de 1914, el partido aprobó un manifiesto contra la guerra muy aligerado de contenido internacionalista, en el que se pedía al gobierno que dirigiera a los países beligerantes, "...el deseo de nuestro país de que se resolviese por procedimientos pacíficos las diferencias entre las naciones" y "que se mantuviera a España en la más estricta neutralidad sin dejar por esto de hacer cuanto pudiera para poner término a la lucha".

La guerra fue objeto de polémica en el seno del movimiento socialista, pero sería después del triunfo bolchevique en 1917, y tras el balance de la capitulación de los dirigentes de la Segunda Internacional, cuando adquirió su carácter más enconado. Hasta ese momento, la mayoría de los dirigentes del PSOE, inclinados hacia los aliados, se agruparon en torno a las figuras reconocidas de Pablo Iglesias, Julián Besteiro y Largo Caballero. Pero había más sectores, empezando por los aglutinados en torno al periódico *Acción Socialista*, dirigido por Andrés Saborit, que publicaba los artículos antibélicos que *El Socialista* rechazaba, y también una fracción minoritaria, dirigida por García Cortes y Núñez Arenas, que sostuvo una línea cercana a la conferencia de Zimmerwald. Con este último sector se posicionaron algunos dirigentes de las Juventudes Socialistas de Madrid, entre los que figuraban Ramón Almoneda, Ramón Merino Gracia y José López y López; de hecho, las Juventudes Socialistas de Madrid fue la única agrupación socialista española que se adhirió a la conferencia de Zimmerwald.²¹³

Respecto a la CNT, se opuso totalmente a la guerra, a la que caracterizó como un conflicto ajeno a los intereses de los trabajadores, y rechazó con firmeza la propaganda chovinista y patrioter. En su periódico *Solidaridad Obrera* se pudo leer: "Con respecto a la patria (...) los obreros no tenían razones para defenderla. La patria nos lleva por la fuerza a la guerra. La patria nos mata de hambre y hemos de emigrar. La patria nos fusila cuando pedimos pan. La patria nos desahucia cuando no podemos pagar el alquiler".²¹⁴

Como hemos señalado, en 1916 se produjo un cambio en la curva huelguística. Los conflictos se sucedieron con rapidez: en enero, la huelga de los trabajadores de la construcción de Barcelona se convirtió en huelga general; en febrero, hubo huelga general en Valencia; en marzo, la Guardia Civil mató a un obrero e hirió a otros cinco durante una multitudinaria manifestación en Logroño. También hubo grandes huelgas en Asturias.²¹⁵

En esa atmósfera cargada de tensión, el 12 y 13 de mayo de 1916 tuvo lugar el congreso de UGT. En el mismo, los delegados asturianos Manuel Llana e Isidoro Acevedo, tradicionalmente en posiciones muy moderadas, defendieron la oportunidad de convocar una huelga general de ámbito estatal conjuntamente con la CNT. La presión desde la base del movimiento obrero, golpeada por la carestía de la vida y el aumento del desempleo, llevó a los líderes asturianos a proponer esta medida con el fin de arrancar al gobierno concesiones y, naturalmente, para ganar credibilidad entre una masa obrera muy descontenta. La afiliación a la UGT había descendido hasta los 110.000 adherentes, mientras la CNT se estaba recuperando. Tras el debate, el congreso rechazó la propuesta, pero sí aprobó un plan de acción en diferentes fases. Se elaboró una plataforma reivindicativa bastante amplia, que

²¹³ Los socialistas mayoritarios, partidarios del pacifismo y simpatizantes de los aliados, y los minoritarios tuvieron su primera confrontación en el X Congreso del PSOE, celebrado en Madrid del 24 al 31 de octubre de 1915. La reunión apoyó la resolución redactada por Jaime Vera y defendida por Julián Besteiro en la que se alababa la neutralidad del partido, con un guiño hacia las posiciones aliadas. Meaker, *op. cit.*, p. 42.

²¹⁴ *Solidaridad Obrera*, 11/5/1917.

²¹⁵ Meaker, *op. cit.*, p. 64.

proponía desde la rebaja de las tarifas del transporte, un plan de obras públicas, la regulación del comercio exterior y acabar con los gastos improductivos. Seguidamente, esta plataforma se difundiría organizando para un mismo día mítines públicos y manifestaciones en toda la geografía. Finalmente, y tras estas acciones, el Comité Nacional de UGT “tendría el conocimiento suficiente del estado de ánimo de los trabajadores y podría estudiar la convocatoria de una huelga general en el plazo de tres meses”.

Paralelamente al congreso ugetista, la CNT celebró en Valencia una reunión con 70 delegados representando a 700 organizaciones. El eje del debate fue similar al que centró la discusión en el congreso ugetista: se trató sobre una amplia campaña de lucha contra la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, añadiendo la exigencia de amnistía para los presos políticos. La reunión también marcó un punto de inflexión importante: por primera vez después de mucho tiempo, dirigentes cenetistas reconocidos, como Ángel Lacort, de la federación de Zaragoza, o Salvador Seguí, lograron que se aceptara la posibilidad de llegar a acuerdos con la UGT para impulsar la movilización obrera.

La unidad de acción entre los dos grandes sindicatos abrió una nueva perspectiva para el movimiento y la respuesta preventiva desde el gobierno de Romanones. Las negociaciones entre los sindicatos se iniciaron en mayo y culminaron, a mediados de julio, en una reunión celebrada en Zaragoza entre Besteiro, Largo Caballero y Vicente Barrio, en representación de la UGT, y Salvador Seguí, Ángel Pestaña y Lacort, por la CNT. El 17 de julio, al mismo tiempo que la lucha de los ferroviarios arrancaba una importante victoria a la Compañía del Norte, CNT y UGT firmaron el llamado pacto de Zaragoza, con la publicación de un manifiesto unitario en el que ambos sindicatos defendían la huelga general para obligar al gobierno a ceder. Entre la clase obrera, el pacto CNT-UGT levantó un enorme entusiasmo, proporcional al temor que le infundió a la burguesía: Romanones suspendió de inmediato las garantías constitucionales y ordenó la detención de sus firmantes.

La unidad de acción sindical estimuló la confianza de los trabajadores y el radio de sus acciones. En un proceso de causa y efecto, la actividad sindical se robusteció gracias a la celebración de una gran cantidad de actos sindicales unitarios cumpliendo con lo firmado en Zaragoza. En una nueva reunión entre UGT y CNT celebrada el 26 de noviembre también en esa ciudad, se acordó convocar una huelga general de 24 horas para mediados de diciembre. Las principales reivindicaciones eran la contención de los precios, medidas a favor del empleo, la amnistía para los presos políticos y el fin de la intervención militar en Marruecos.

La huelga general, la primera de carácter estatal, se fijó para el 18 de diciembre y fue todo un éxito: en la lucha participaron un número de trabajadores mucho mayor que los afiliados a los sindicatos. Sin embargo, la burguesía se negó tajantemente a realizar ninguna concesión sustancial. Tras un primer momento de vacilación, con Romanones prometiendo atender las demandas obreras, todo quedó en aguas de borrajas. En abril de 1917, el gabinete Romanones fue reemplazado por otro encabezado por García Prieto, al que meses más tarde sucedió un gobierno dirigido por el ultraconservador Dato. La frustración por la intransigencia gubernamental empujó un peldaño más arriba la presión sobre las organizaciones obreras. Era evidente que el régimen no estaba dispuesto a ceder; el problema no era de naturaleza económica, sino, ante todo, política.

En esta tesitura, la idea de una huelga general revolucionaria comenzó a cobrar fuerza. Una huelga que derrocará el régimen de la Restauración. Y aquí radicaba realmente el problema. ¿Cómo poner fin al régimen monárquico? ¿Con qué estrategia de lucha y con qué sustituirlo? En la mente de los dirigentes socialistas no se dibujaba ninguna otra opción que no fuese la de un gobierno provisional de coalición con los burgueses y pequeños burgueses republicanos, y la proclamación de una república burguesa. Convencidos de la concepción etapista, pensaban en un cambio de régimen político, pero sin alterar las bases sociales y

económicas del poder burgués y, por lo tanto, del sistema capitalista. Este enfoque implicaba, a su vez, la subordinación de los trabajadores a los acuerdos que se pudiesen alcanzar con los partidos republicanos.

LA CRISIS POLÍTICA SE GENERALIZA

La unidad de acción entre la UGT y la CNT continuó con diferentes reuniones, como la del 5 de marzo de 1917 en Madrid que acordó elaborar otro manifiesto llamando a la convocatoria de una huelga general en el plazo de tres meses, y que fue redactado en su mayor parte por Besteiro. Pero en esta fase, la unidad sindical ya no era el punto esencial; en el plan global de los dirigentes socialistas, el proletariado industrial y el movimiento jornalero quedaban reducidos a meros auxiliares de una acción donde la conspiración y las maniobras parlamentarias eran lo fundamental. Con esta orientación, y tras intensos contactos mantenidos por los líderes socialistas con los jefes republicanos de todo color, el 16 de junio de 1917 quedó constituido un “comité revolucionario” del que formaban parte, entre otros, Largo Caballero y Julián Besteiro por el PSOE-UGT, Alejandro Lerroux por el Partido Republicano Radical y Melquíades Álvarez por el Partido Reformista. Un comité de colaboración de clases, que presagiaba el desenlace final. La CNT como tal estuvo ausente del comité, aunque en Catalunya, donde era predominante, colaboró con él extraoficialmente.

Así pues, la cúpula socialista, atada al carro de los republicanos burgueses y pequeño burgueses, orientó sus esfuerzos hacia un golpe de mano antimonárquico para proclamar unas Cortes constituyentes y un nuevo ordenamiento constitucional. La conquista de los derechos democráticos se desvinculaba de una estrategia más ambiciosa que preparase el derrocamiento de la corona y del orden capitalista que la sostenía.

En el verano de 1917, las grietas del régimen monárquico reflejaban una crisis profunda del sistema. Y en esas circunstancias, una clase dominante con un historial tan reaccionario no estaría dispuesta a realizar concesiones tan fácilmente, y esto incluía cualquier reforma significativa de la legislación política que aumentase los derechos democráticos. La razón era evidente: un grado mayor de libertades públicas facilitaría la agitación política y sindical entre la clase obrera y la radicalización de los conflictos económicos, lo que inevitablemente fortalecería a la izquierda.

La actuación táctica del “comité revolucionario” se planteó en dos direcciones: conseguir el apoyo de las juntas de Defensa, y ganar la colaboración práctica de la autodenominada asamblea de parlamentarios convocada en Barcelona para el 19 de julio, auspiciada por la burguesía catalana. Los dirigentes socialistas no sólo depositaron su confianza en los republicanos, sino que pretendieron atraer al cuerpo de oficiales hacia sus “astutos” proyectos revolucionarios. Ingenuamente pensaban aprovecharse del descontento militar, pero el estamento castrense, especialmente la oficialidad de mayor rango, estaba profundamente identificado con el rey y la oligarquía. Los lazos que lo unían con la burguesía y el aparato del Estado monárquico eran lo suficientemente sólidos y probados como para que este hecho hubiese sido percibido por los dirigentes socialistas.

Respondiendo a la situación de emergencia y con el fin de desactivar el descontento en los cuartos de banderas, Alfonso XIII concedió ventajas sustanciosas a los militares y, en lugar de designar un gobierno moderado, otorgó el mando a un político reaccionario de su absoluta confianza, Eduardo Dato. La labor gubernamental de Dato no defraudó: despreciando las demandas de la oposición a favor de elecciones anticipadas, clausuró las Cortes, suspendió

las garantías constitucionales y amenazó con arrestar a los diputados y senadores que acudieran a la asamblea de Barcelona. El carácter del régimen oscilaba cada día más hacia el bonapartismo, señalando la debilidad de una clase dominante que sólo podía basarse en la represión para enfrentarse a un movimiento obrero que persistía en su desafío.

El otro cesto en el que los dirigentes socialistas habían depositado todas sus esperanzas, la asamblea de parlamentarios, mostró su auténtica naturaleza: estaba dominada por la Lliga Regionalista de Catalunya, la fuerza más representativa de la burguesía industrial catalana, liderada por el archirreaccionario Cambó. Los regionalistas catalanes pretendían agitar el espantajo de la asamblea para convencer al gobierno de Madrid y a la corona de llevar a cabo una reforma constitucional por arriba para evitar una revolución por abajo. Por supuesto, dentro de sus cálculos confiaban en poder arrebatar la preponderancia política a la burguesía agraria y comercial castellano-andaluza. Pero una vez que quedó claro que el gobierno de Dato no accedería a la convocatoria de Cortes constituyentes, la Lliga redujo sensiblemente su protesta y, sobre todo, llamó a no participar en los planes revolucionarios.²¹⁶ La asamblea de parlamentarios, en la que participaron 68 diputados y senadores, transcurrió lastimosamente, hasta que fue dispersada por la policía sin ninguna oposición por parte de los presentes.

Más allá de los límites de las mesas de negociación y de las ínfulas conspirativas, los dirigentes obreros carecían de cualquier plan serio. Los jefes socialistas y republicanos pretendían dirigir el potente movimiento de descontento como si fuese un grifo: abriéndolo y cerrándolo a conveniencia, algo que, aparentemente viable sobre el papel, no se podría aplicar con tanta facilidad a la dinámica viva de la lucha. Efectivamente, los acontecimientos se presentarían de forma bastante diferente a como esperaban los líderes del “comité revolucionario”.

Sin hacer mucho caso de estas maniobras por arriba, el empuje de la lucha obrera precipitó los acontecimientos. Desde el 4 de julio, una dura huelga de los metalúrgicos bilbaínos, apoyada por los mineros, involucró a 27.000 obreros. En Asturias continuaba la huelga de solidaridad con los despedidos de la fábrica de explosivos de Santa Bárbara de Cayés.²¹⁷ Por su parte, la huelga minera se había extendido por las cuencas de Asturias, Cartagena y Peñarroya. El cuadro era tremendo: a principios de agosto, la agitación obrera era general en Vitoria, Murcia, Santander, Lorca y la cuenca minera de Barcelona.²¹⁸

El 19 de julio comenzó una gran huelga en Valencia como respuesta al despido de 35 ferroviarios de la Compañía del Norte, a raíz de un conflicto mantenido el año anterior. El secretario de la Federación Ferroviaria de la UGT era Daniel Anguiano. Tanto la patronal como el gobierno de Dato entablaron un duro pulso para doblegar a los trabajadores y, aumentando el grado de la provocación, despidieron a más de 40 ferroviarios valencianos. El 3 de agosto, la Federación Nacional de Ferroviarios Españoles (Sindicato del Norte) publicó en *El Socialista* un manifiesto titulado “A los ferroviarios y a la opinión. Cómo se provoca un conflicto”, en el que denunciaba la intransigencia de la Compañía y del gobierno, y apoyaba a sus compañeros valencianos. Al mismo tiempo, la solidaridad se extendía entre los ferroviarios de las principales ciudades, que amenazaron con una huelga general en todo el país para el 10 de agosto en caso de que la Compañía se negara a readmitir a los despedidos.

²¹⁶ En aquellos días, la dirección de la Lliga distribuyó una circular “instando al pueblo catalán a evitar todas las manifestaciones públicas, permanecer en su trabajo, en sus tiendas y fábricas, eludir los grupos en las calles”. Meaker, *op. cit.*, p. 105.

²¹⁷ Joan Serrallonga i Urquidí, *Motines y revolución, España, 1917* Ayer, Nº 4, 1991, pp. 169-192.

²¹⁸ Lacomba, *op. cit.*, p. 234.

El conflicto concitó la atención de la opinión pública y, por supuesto, del movimiento obrero. Finalmente, los dirigentes socialistas, presionados por el amplio descontento que bullía en la base ugetista y, en general, en el conjunto de la clase obrera, y también por el temor de verse desbordados, se sumaron al movimiento iniciado en Valencia y empujaron hacia la huelga general. Lacomba señala: “Conviene insistir en que las ejecutivas de la UGT y del PSOE no querían ir a la huelga en agosto y actuaron arrastradas por los acontecimientos. Su resistencia a la acción se debía a dos razones: en primer lugar, ‘la evolución de la conciencia, el espíritu de la clase trabajadora, estaba ya terminada, sabiendo perfectamente toda la clase trabajadora cuál era la misión que tenía que cumplir’, pero no ocurría lo mismo en los grupos burgueses que tenían que encargarse del gobierno provisional y que debían apoyar la huelga. No mediaba pacto entre Cambó y los socialistas, pero éstos esperaban la formación de un gobierno burgués, progresista y auténticamente democrático, y pensaban que estos sectores de la burguesía no estaban aún preparados ideológicamente para la acción revolucionaria; en segundo lugar, aspiraban contar con el ejército: ‘queríamos aplazar la huelga general para poder influir legítimamente en el espíritu de la milicia, para que ésta no fuese una fuerza de choque en manos del gobierno que desbaratase el movimiento’”.²¹⁹

AGOSTO DE 1917. HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA

La huelga general quedó finalmente aprobada para el lunes 13. Se acordó constituir un comité de huelga formado por Largo Caballero y Anguiano, por la UGT, y Julián Besteiro y Andrés Saborit, por el PSOE, al cual se incorporó Virginia González, fundadora de la organización femenina socialista. Siguiendo un guión que, en líneas generales, reproducirían en diciembre de 1930 y octubre de 1934, este “comité revolucionario” no tenía previsto nada o casi nada para desarrollar la acción, menos aún planes de armamento o de formación de milicias obreras. La coordinación entre los grandes centros fabriles brilló por su ausencia y la participación de los trabajadores agrícolas fue ignorada. En definitiva, carente de objetivos de clase para instaurar un gobierno de los trabajadores, la huelga de agosto se convirtió en un gran movimiento de masas, pero su enorme potencial revolucionario fue malogrado por una dirección sin perspectivas.²²⁰

La idea de compartir con la burguesía liberal republicana la dirección política de la huelga y constreñir los objetivos de la lucha a reformas políticas de carácter burgués paralizó el alcance de la acción revolucionaria. Los “republicanos” —como Melquíades Álvarez, que en octubre de 1934 jalearía la represión contra los mineros asturianos desde la tribuna parlamentaria, reivindicando la masacre de Thiers contra la Comuna de París— no eran aliados fiables para los trabajadores. Lo mismo se puede decir de demagogos reaccionarios como Lerroux o de políticos capitalistas como Cambó. Estos representantes de lo que entonces se consideraba el ala liberal de la burguesía temían mucho más a los trabajadores, que convivir con la monarquía de Alfonso XIII, por mucho que les repeliesen sus formas

²¹⁹ *Ibid.*, p. 251. La última frase entrecomillada pertenece a un discurso de Besteiro, sesión 28 de mayo de 1918.

²²⁰ En palabras de Tuñón de Lara: “...La asistencia [que la clase obrera] podía esperar de los partidos de la clase media y de cierta burguesía no pasó de lo personal (...) mientras que los trabajadores del campo (prácticamente ignorados por quienes venían preparando ese movimiento), estuvieron ausentes (...) Se tenía, pues, la idea de que la revolución burguesa tenía que ser dirigida por la burguesía (concepción análoga a la de los mencheviques rusos en 1905) y que el movimiento obrero actuaba de fuerza de choque, pero no de fuerza dirigente o hegemónica. Se razonaba con un esquema propio de la revolución Francesa de fines del siglo XVIII, cuando apenas existía clase obrera, como si el crecimiento de ésta no hubiese acentuado los temores y vacilaciones de la burguesía...”. *El movimiento obrero en la historia de España*, Ed. Sarpe, Madrid, 1985, vol. II, p. 112.

autoritarias. Por encima de todo, no se podían desprender de sus orígenes e intereses de clase. Cualquier acción que oliese a revolución les era completamente ajena.

El manifiesto del “comité revolucionario” no iba más allá de los lugares comunes a favor de la democracia y de una nueva Constitución. Con el título “A los obreros y a la opinión pública”, se hizo público el 12 de agosto y demandaba “un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador, y prepare, previas las modificaciones imprescindibles en una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras de unas Cortes constituyentes”. También se agregaron unas instrucciones genéricas para la organización de la huelga, recordando la necesidad de que fuera pacífica, sin uso de la violencia.

El desarrollo de la huelga acusó inmediatamente la ausencia de una táctica revolucionaria. Parece evidente que la coordinación entre las diferentes zonas, y entre la UGT y la CNT, fue bastante precaria, por no decir inexistente. El día de inicio de la lucha, el comité de huelga socialista fue detenido en Madrid mientras celebraba una reunión en la calle del Desengaño. Los obreros madrileños esperarían en vano unas instrucciones que nunca llegaron. “Las masas —escribió Isidro Acevedo después— estaban ‘dispuestas a todo’, pero carecían de dirección, así como de armas que les hubieran permitido resistir contra las actividades esencialmente punitivas de la tropa”.²²¹ A pesar de las carencias, la huelga en la capital fue ampliamente secundada por los tipógrafos, albañiles y panaderos. El 13 de agosto se produjeron choques con la policía y hubo numerosas detenciones, el transporte de tranvía quedó muy afectado y el paro también prendió con fuerza en el comercio y los cafés. Al mediodía, el gobierno ya había declarado la ley marcial, clausurado la Casa del Pueblo y ordenado la detención de su comité.

El movimiento se extendió a todo el país. “La huelga fue mayoritaria en algunas poblaciones industriales y en algunas zonas agrarias. Fue tenue en Castilla la Vieja, aunque Santander tuvo un paro clamoroso; fue dura y breve en Barcelona y los núcleos industriales cercanos, y larga y grave en Asturias, León y Vizcaya. Estas zonas, junto con Madrid, Barcelona y Valencia, fueron el ápice del movimiento. Éste duró media semana en las poblaciones de menor fuerza sindical; cinco días y una semana, respectivamente, en Madrid y Barcelona; y mayor tiempo en Asturias y León; en un pueblo de esta provincia, en Cistierna, se llegó a proclamar la república; y Sabadell y Bilbao fueron, quizás, las ciudades que presenciaron los sucesos más sangrientos”.²²² La huelga ferroviaria fue ampliamente secundada por los afiliados de los sindicatos en Galicia, Andalucía y la zona norte, especialmente Asturias, pero encontró un escaso apoyo en las líneas Madrid-Zaragoza-Alicante y Madrid-Cáceres-Portugal.

En las cuencas mineras de Huelva, Bilbao, Asturias, León y Murcia, la huelga fue mayoritaria. También en Euskadi fue seguida masivamente en las zonas industriales y urbanas. En Vizcaya se generalizó en la cuenca minera, y en Bilbao y su comarca fue todo un éxito, afectando a decenas de miles de obreros, que siguieron en paro hasta el día 20; en Eibar, el paro duró una semana. En Asturias también tuvo gran repercusión en Oviedo. En Valencia fue también mayoritario, con los ferroviarios y trabajadores del puerto como punta de lanza.

En Catalunya, la dirección fue asumida por la CNT. Salvador Seguí y Ángel Pestaña jugaron un papel muy destacado. Los líderes cenetistas intentaron imprimir un carácter más combativo a la lucha, aunque también mantuvieron contactos con los republicanos de Marcelino Domingo y los catalanistas radicales de Macià. El problema, en su caso, seguía siendo el mismo: la CNT no tenía una estrategia esencialmente diferente a la de la dirección

²²¹ Meaker, *op. cit.*, p. 122.

²²² Lacomba, *op. cit.*, p. 259.

socialista ni había intentado ganar a la base socialista para un programa revolucionario. El paro en Barcelona tuvo un seguimiento rotundo, y en la tarde del 13 el gobierno declaró el estado de guerra, ocupando los puntos estratégicos de la ciudad con numerosas tropas (el capitán general Miláns del Bosch había concentrando 12.000 soldados). Durante las dos jornadas siguientes, los militantes anarcosindicalistas levantaron barricadas en la ciudad y protagonizaron choques armados con los militares. La represión se recrudeció tanto en Barcelona como en las ciudades colindantes. En Sabadell, el ejército cañoneó la sede local del sindicato, donde los trabajadores revolucionarios se habían hecho fuertes.

La huelga se prolongó hasta una semana en muchas localidades, pero fue finalmente derrotada. La falta de una dirección revolucionaria y la brutal represión pesaron en la balanza.²²³ Los militares de las juntas de Defensa, en los que confiaban algunos líderes socialistas, se ensañaron con los trabajadores; más de un centenar fueron asesinados y más de dos mil, detenidos. La mayor represión se dio en la cuenca minera asturiana, donde la huelga se mantuvo hasta finales de agosto, así como en las minas de Río Tinto (Huelva), donde hubo 500 despidos y 90 sindicalistas fueron entregados a la autoridad militar. Los representantes socialistas en el “comité revolucionario” vivieron en sus propias carnes la represión: “En el proceso abierto contra el comité de huelga, parece que las juntas quisieron condenarlos a la pena máxima, pero el gobierno no aceptó la condena extrema. Finalmente, el Consejo de Guerra se reunió el 27 de septiembre y dictó sentencia contra el comité, que fue aprobada el 4 de octubre; la condena fue a ‘la pena de reclusión perpetua, accesorias e inhabilitación absoluta perpetua’.”²²⁴ Alfonso XIII recompensó generosamente a los mandos militares por los servicios prestados.

Los trabajadores escribieron una página heroica en agosto de 1917. La acción asestó un golpe decisivo a la monarquía, y las tradiciones revolucionarias volvieron a emerger con fuerza, de manera desafiante, poniendo en evidencia la actuación de los dirigentes, una constante que se mantendría a lo largo de las dos décadas siguientes. “Los disturbios de España, en el verano de 1917 —señala Meaker— carecieron, por supuesto, de la grandeza y el impacto de largo alcance que tuvo la revolución rusa. Pero, aun careciendo de grandeza dramática, constituyeron, sin embargo, una experiencia revolucionaria auténtica que señaló el fin efectivo del sistema de la Restauración, que había durado cuatro décadas. Como la revolución rusa, la española fue producto de tensiones estructurales, que venían de muy atrás, en una sociedad predominantemente agraria, y que se precipitaron como resultado de la crisis político-económica originada por la guerra”.²²⁵

Las lecciones de esta gran huelga revolucionaria confirmaron, en la práctica, que la teoría de la revolución por etapas y de alianza con los burgueses republicanos era completamente estéril para lograr una transformación radical de las estructuras políticas, sociales y económicas. La huelga de 1917 puso sobre la mesa que la auténtica democracia sería

²²³ ¿Por qué fracasó la huelga?, se pregunta Lacomba: “No hubo una preparación, en la clase proletaria, para la huelga; además, el sistema nervioso de la insurrección —los organismos de dirección— falló en los primeros momentos, lo que dejó en el aire el movimiento. Los trabajadores acudieron solos, la huelga fue ‘un ensayo de revolución obrera —dice Araquistáin— como último recurso, sin intervención apreciable del viejo republicanismo. Muchos republicanos, al contrario, vieron probablemente con enojo aquel movimiento que perjudicaba en lo inmediato a sus intereses capitalistas y envolvía una amenaza, en lo remoto, para el vigente régimen de propiedad’; junto a esto hubo una falta de unidad en los objetivos políticos del proletariado (...) Pero el punto clave para explicar el fracaso de la huelga estuvo, quizá, en la inhibición burguesa; hubo en ella una falta de voluntad revolucionaria; en el momento decisivo, la burguesía industrial —vasca y catalana, especialmente—, ante el temor de que la revolución no pudiese ser contenida una vez iniciada, hizo marcha atrás y abandonó a los obreros; también la pequeña burguesía republicana hizo defeción”. *Ibid.*, pp. 281-282.

²²⁴ *Ibid.*, p. 274.

²²⁵ Meaker, *op. cit.*, p. 94.

conquistada por la revolución socialista, lo que requería de una estrategia y un partido revolucionario a la altura.

LA QUIEBRA DEL RÉGIMEN

La derrota de la huelga de agosto no trajo la estabilidad política ansiada por la clase dominante ni paralizó la actividad del movimiento obrero. La sentencia contra los dirigentes socialistas tuvo el efecto contrario, al animar un vasto movimiento pro-amnistía en los meses siguientes, con mítines y manifestaciones por todo el país de apoyo a los líderes encarcelados, como las 30.000 personas que desfilaron por las calles de Madrid el 25 de noviembre.

En el plano organizativo, las secuelas de la derrota fueron mucho más superficiales que en ocasiones anteriores. En general, la potencia de los sindicatos permaneció intacta. La CNT, que después de agosto radicalizó sensiblemente su lenguaje, experimentó un crecimiento tremendo, que llegaría a su punto culminante en 1919, cuando alcanzó su registro de afiliación histórico. La huelga de agosto también abrió un frente de lucha que había permanecido pasivo: el movimiento jornalero, que en los dos años siguientes protagonizaría una enorme oleada de ocupaciones de fincas y motines. Pero la radicalización política de las organizaciones obreras, incluida la de un sector considerable del PSOE, se hizo mucho más patente tras el triunfo de la revolución rusa de Octubre de 1917 y el movimiento insurreccional que recorrió Europa.

La huelga había dejado a la monarquía tocada. El gobierno multiplicó sus gestos y maniobras para intentar soldar una estructura política dañada irreparablemente. Los regionalistas catalanes manifestaron su disposición a entrar en el gobierno, y en noviembre quedó listo un ejecutivo de unidad nacional. El miedo a la revolución obrera llevó al conjunto de la burguesía a aparcarse sus diferencias tácticas, para unirse contra un proletariado que había dado señales muy serias de su capacidad para cuestionar el sistema capitalista y sus instituciones.²²⁶

Lo cierto es que, a pesar de los movimientos de Alfonso XIII y de los intentos de presentar un frente común de todos los partidos burgueses, una situación de inestabilidad crónica y crisis política se apoderó del gobierno y la monarquía. Los problemas endémicos de la inflación, la escasez de productos de subsistencia, el desempleo, incluso el hambre, arreciaron en el último año de la guerra mundial. Apenas transcurridos cuatro meses desde agosto, 1918 comenzó con nuevas huelgas y movilizaciones obreras. Una oleada de conflictos prendió en numerosos sectores: correos y telégrafos, tipógrafos, panaderos, etc. A finales de enero, las manifestaciones se sucedían en Barcelona y Valencia, y el gobierno volvió a decretar el estado de guerra. Pero la represión ya no tenía el efecto deseado. En numerosas ciudades, las mujeres obreras, desesperadas, asaltaron mercados y tahonas en busca de alimentos y pan; en Málaga se enfrentaron con la Guardia Civil y hubo muertas y heridas. Hechos similares se

²²⁶ “El problema del regionalismo y de su viraje venía desde la huelga de agosto, en que la negativa de la Lliga a participar la había desacreditado ante los ojos de muchos de los que la sostenían. La burguesía catalana se hallaba, pues, dispuesta a contentarse con el pacto secreto que, según frase de Cambó, habían sellado Barcelona y Madrid; pacto que convertía a Castilla en tributaria económica de Catalunya y a Catalunya en tributaria política de Castilla. De esta manera, situados ante una coyuntura revolucionaria, la oligarquía terrateniente y la alta burguesía industrial, se entendieron antes de dejarse rebasar por el movimiento revolucionario. Y así, la Lliga –conservadora– se hizo más clerical y reaccionaria; y ello determinó la aparición de nuevos partidos catalanistas, más orientados hacia la izquierda”. Lacomba, *op. cit.*, p. 321.

reproducían en Granada, Alicante, Palma de Mallorca, Zaragoza, Santander, A Coruña, Cádiz, etc. “La situación era, pues, de evidente gravedad. La guerra social, la guerra entre las clases, era cada día mayor”.²²⁷

Incapaz de resolver una crisis que se le escapaba de las manos, el monarca y sus allegados disolvieron las Cortes para tratar de ganar tiempo. Pero las elecciones generales de febrero no lograron calmar los ánimos; al contrario, la clase obrera se volcó en las urnas con el PSOE, que presentó como candidatos a los miembros del comité de huelga encarcelados y obtuvo un éxito formidable, seis diputados: Pablo Iglesias y Julián Besteiro (Madrid), Largo Caballero (Barcelona), Indalecio Prieto (Bilbao), Andrés Saborit (Oviedo) y Daniel Anguiano (Valencia). Significativamente, Lerroux y Melquíades Álvarez perdieron sus escaños; su descrédito creciente entre las masas obreras era un buen termómetro del avance de la conciencia de clase.

Tras un mes de deliberaciones, en marzo quedó constituido otro gobierno de “unidad nacional”, con Antonio Maura como presidente, Dato en la cartera de Estado, García Prieto en Gobernación, Romanones en Justicia y Cambó en Fomento. Era el segundo gabinete de “concentración” tras el encabezado por García Prieto en noviembre. Después de la formación del nuevo gobierno, y para liberar, aunque fuese parcialmente, la gran tensión acumulada, la burguesía tuvo que hacer concesiones: el 9 de mayo proclamó una amnistía, y los cuatro miembros socialistas del comité de huelga que habían sido elegidos diputados realizaron un recorrido triunfal desde el penal de Cartagena hasta Madrid, donde la multitud los aclamó.

La irrupción de una clase obrera con objetivos propios y conciencia revolucionaria marcó la quiebra definitiva del régimen de la Restauración. “En el siglo XIX —escribe Lacomba— era aún posible una revolución burguesa; en el siglo XX, el proletariado español era ya una fuerza organizada, ansiosa de intervenir en la vida del país. Por ello, con su actuación, rebasó a la burguesía; esto la atemorizó y la llevó a inclinarse hacia la oligarquía. A partir de ese momento, el burgués confió su permanencia, histórica y política, en la defensa de los valores tradicionales, respaldados por el aparato administrativo y represivo del Estado. Se produjo una tácita conjunción oligárquico-burguesa con la que, respaldándose y apoyándose mutuamente, se intentó poner un valladar al avance proletario”.²²⁸

²²⁷ *Ibid.*, p. 333.

²²⁸ *Ibid.*, p. 346.

V

EL TRIENIO BOLCHEVIQUE

“El rasgo característico más indiscutible de las revoluciones —escribió Trotsky— es la intervención directa de las masas en los acontecimientos históricos. En tiempos normales, el Estado, sea monárquico o democrático, está por encima de la nación; la historia corre a cargo de los especialistas de este oficio: los monarcas, los ministros, los burócratas, los parlamentarios, los periodistas. Pero en los momentos decisivos, cuando el orden establecido se hace insoportable para las masas, éstas rompen las barreras que las separan de la palestra política, derriban a sus representantes tradicionales y, con su intervención, crean un punto de partida para el nuevo régimen. Dejemos a los moralistas juzgar si esto está bien o mal. A nosotros nos basta con tomar los hechos tal como nos los brinda su desarrollo objetivo. La historia de las revoluciones es para nosotros, por encima de todo, la historia de la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos”.²²⁹

La Primera Guerra Mundial abrió las puertas de par en par a la revolución. Lo que parecía el sueño imposible de una minoría de internacionalistas aislados y perseguidos por todo el continente europeo, se hizo realidad en uno de los eslabones más débiles de la cadena capitalista: el imperio ruso. Las carnicerías en las trincheras, la desmoralización de las tropas, la ansiada paz, la escasez y las privaciones en la retaguardia, todo se concentró en sólo cinco días, del 23 al 27 de febrero de 1917. En esas jornadas históricas, iniciadas por una huelga espontánea de las trabajadoras textiles de San Petersburgo, un poderoso levantamiento de masas conquistó el apoyo entusiasta de los soldados y derrocó al zar Nicolás II, poniendo punto y final a trescientos años de monarquía despótica.

LA REVOLUCIÓN RUSA

La revolución de Febrero fue consecuencia directa de la guerra imperialista, como en 1905 la derrota humillante de los ejércitos zaristas en la guerra ruso-japonesa había llevado a la primera revolución rusa. Las experiencias y lecciones de 1905, especialmente la huelga general revolucionaria y, por supuesto, los sóviets²³⁰, los órganos de poder obrero surgidos en el transcurso de aquellos acontecimientos, fueron retomadas doce años después.

La revolución de Febrero estuvo dirigida por los obreros y soldados (campesinos en uniforme), pero fue la burguesía liberal la que asumió el poder formal del país. La historia de las revoluciones no sigue jamás un curso rectilíneo o prefijado, pasa por diferentes fases, da giros caprichosos y plantea tareas que son difíciles de prever. Pero una cosa sí está confirmada por la historia: cuando la burguesía se encuentra en una situación límite, ante una

²²⁹ León Trotsky, *Historia de la revolución rusa*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2007, p. 18.

²³⁰ Los sóviets (“consejos obreros”), nacidos en septiembre de 1905 como comités de huelga formados por delegados de las fábricas, terminaron convirtiéndose en un poder obrero paralelo a la legalidad zarista. Los sóviets coordinaron su actividad y asumieron tareas de gestión económica y dirección de la vida pública: control obrero en las fábricas, organización del transporte, reparto de víveres, etc. Al igual que la Comuna de París en 1871, el sistema de sóviets se revelaba como la forma embrionaria de organización del futuro Estado obrero de transición al socialismo.

revolución social que amenaza con barrer su poder político y económico, adoptará el ropaje que mejor le convenga para preservar sus privilegios. En la liquidación de la monarquía zarista la burguesía no tuvo protagonismo alguno, pero, como ocurriría con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, cuando Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura se subieron al carro del movimiento de masas y cambiaron sus credenciales monárquicas por unas republicanas de última hora, en Rusia el partido kadete²³¹ tampoco dudó en abandonar al zar a su suerte. Su “descubrimiento” del republicanismo venía perfectamente al caso, igual que la creación inmediata de un “comité provisional” de la Duma para cubrir el vacío de poder y hacer descarrilar cuanto antes una revolución que nunca habían pretendido.

La bandera de la conciliación entre las clases y el “consenso” no sólo fue agitada por los experimentados políticos burgueses, que entendían perfectamente la gravedad de la situación. Los dirigentes reformistas del movimiento obrero se convirtieron en los mejores aliados de la burguesía, que se apoyaría en ellos para tratar de sortear las dificultades del momento. Pero la revolución de Febrero no sólo creó una fachada de poder legal. Retomando las tradiciones de 1905, los trabajadores habían puesto su sello en los acontecimientos alumbrando otro poder, en este caso mucho más real: el Sóviet de diputados obreros.

En cada revolución social profunda, la conciencia de las masas no se forja de una vez por todas y de antemano. En las etapas iniciales, después de los primeros triunfos, el ambiente de euforia y confraternización, las loas a la *democracia* y la concordia, tienen por un tiempo efectos narcotizantes: es el turno de los oportunistas y arribistas. Ese ambiente proclive a la “unidad” y la conciliación en los primeros meses de la revolución rusa tuvieron su correspondencia en la elección de un comité ejecutivo provisional del Sóviet, el órgano dirigente del mismo, dominado por los eseristas y los mencheviques.²³² Ambas organizaciones eran firmes partidarias de la colaboración de clases con la burguesía.

Eseristas y mencheviques mantenían el viejo esquema teórico según el cual la revolución rusa tenía que desembocar en el triunfo de un régimen burgués “democrático”. Partiendo de este presupuesto fundamental, el comité ejecutivo del Sóviet propuso al “comité provisional” de la Duma, integrado por los políticos burgueses, que formasen un gobierno provisional y se hicieran cargo del poder. Pero una cosa eran las intenciones de estos dirigentes obreros y otra muy diferente las opiniones que predominaban en las filas del movimiento revolucionario y sus sectores de vanguardia. Mientras las negociaciones y componendas con los ministros burgueses dominaban la agenda política del comité ejecutivo, las delegaciones de obreros y soldados del Sóviet se dedicaban a organizar la vida cotidiana en Petrogrado, estableciendo el control de las subsistencias, de la guarnición, ocupando el Banco del Estado, la Tesorería, la Fábrica de Moneda, dirigiendo el transporte, planteando abiertamente el control obrero de la producción... se levantó un doble poder que no podría durar mucho tiempo sin un desenlace.

Las organizaciones reformistas y los partidos burgueses tenían tareas urgentes que resolver, como acabar con la guerra, repartir la tierra y mejorar las condiciones de vida de la mayoría

²³¹ Partido Demócrata Constitucionalista, así llamados por su acrónimo en ruso (KDT). Principal partido de la burguesía monárquica liberal rusa. Aspiraba a un entendimiento con el zarismo, exhortaba a crear una monarquía constitucional y defendía la propiedad terrateniente. Apoyaron la represión zarista contra la revolución de 1905. Tras el triunfo de la revolución de Octubre, se convirtieron en los enemigos más encarnizados de los bolcheviques.

²³² Los *eseristas*, llamados así por su acrónimo (SR), eran los miembros del Partido Social-Revolucionario, un partido pequeñoburgués surgido de la unificación de diferentes grupos populistas, cuyas concepciones eran una amalgama ecléctica de reformismo y anarquismo. Los *mencheviques* eran la tendencia reformista de la socialdemocracia rusa. Recibieron su nombre en el II Congreso del POSDR (1903), dado que en las votaciones para elegir el Comité Central quedaron en minoría (*menshinstvó*), mientras que los socialdemócratas revolucionarios, encabezados por Lenin, obtuvieron la mayoría (*bolshinstvó*) y fueron llamados bolcheviques.

de la población, pero ninguna fue abordada. Todas las promesas, todos los juramentos a favor del pueblo fueron traicionados. Por sus negocios y pretensiones anexionistas, la burguesía rusa estaba atada al régimen de propiedad heredado del zarismo y, en consecuencia, a las burguesías imperialistas del bloque aliado. En tales circunstancias, la política de colaboración de clases se acentuó. Los mencheviques se encontraron pronto en el gobierno, y de todos sus principios “socialistas” no quedó en pie ninguno. Para ellos el proletariado debía subordinarse incondicionalmente a la burguesía y renunciar al poder. Engañando a los campesinos con discursos, mientras garantizaban a los terratenientes sus propiedades, pretendieron continuar la guerra hasta la “victoria final”, exigiendo nuevos sacrificios a una población exhausta.

La presión del conciliacionismo y la propaganda a favor de la “unidad” también afectó a las filas del partido bolchevique. A pesar de agrupar a la vanguardia del proletariado revolucionario, algunos dirigentes bolcheviques en el interior de Rusia, como Kámenev y Stalin, vacilaron y adoptaron una línea conciliadora. En marzo, tras regresar del destierro, ambos se hicieron cargo de la dirección del periódico del partido, *Pravda*, e imprimieron un giro derechista a su política. En el número de marzo de 1917, se puede leer: “la misión fundamental consiste (...) en la instauración del régimen democrático republicano”. En el manifiesto bolchevique “A los pueblos del mundo”, aprobado el 14 de marzo y también redactado por ambos, se afirmaba: “Mientras el soldado alemán obedezca al káiser, el soldado ruso debe permanecer en su puesto, contestando a las balas con balas y a los obuses con obuses. Nuestra consigna no debe ser un ¡Abajo la guerra! sin contenido. Nuestra consigna debe ser ejercer presión sobre el gobierno provisional con el fin de obligarle (...) a tantear la disposición de los países beligerantes respecto a la posibilidad de entablar negociaciones inmediatamente (...) entre tanto, todo el mundo debe de permanecer en su puesto de combate”. Estas ideas reflejaban las presiones de mencheviques y eseristas, y la enorme confusión que había penetrado en la dirección bolchevique.

Exiliado en Zúrich y separado de Rusia por un continente en guerra, Lenin intentaba hacer oír su voz y escribía constantes notas y artículos contra la posición defensiva del *Pravda*. El 6 de marzo telegrafió a sus correligionarios: “Nuestra táctica: desconfianza absoluta, negar todo apoyo al Gobierno provisional (...); no hay más garantía que armar al proletariado”. En todos sus mensajes, Lenin era tajante: mejor estar solos que seguir la táctica de confundir la guerra imperialista con una guerra defensiva y progresista. Nada más pisar suelo ruso en el mes de abril, Lenin declaró la hostilidad al Gobierno Provisional, es decir, a la coalición con la burguesía. En el mitin a su llegada a la estación de Finlandia de Petrogrado, afirmó con rotundidad: “No está lejos el día en que, respondiendo a nuestro camarada Karl Liebknecht, los pueblos volverán las armas contra sus explotadores (...) La revolución rusa (...) ha iniciado una nueva era. Viva la revolución socialista mundial”.

Como todos los grandes marxistas, Lenin se apoyó en la experiencia viva de la revolución para poner al día la teoría y las tareas del movimiento. Durante Febrero, el proletariado, junto con los soldados, había establecido a través de los sóviets un embrión de poder obrero paralelo, que los partidos reformistas habían subordinado a la burguesía. Fue la política reaccionaria del Gobierno Provisional la que aceleró la radicalización y la desconfianza de los trabajadores de vanguardia, muchos de los cuales habían confiado previamente en la visión aterciopelada de la revolución suministrada por mencheviques y eseristas. Defendiendo que solamente una revolución socialista podía llevar a cabo la paz sin anexiones y la entrega de la tierra a los campesinos, Lenin combatió intransigentemente a aquellos que querían constreñir el movimiento revolucionario a los límites de la “república democrática”, y esto incluyó a sectores de la propia dirección bolchevique. Su programa, que pronto se convertiría en la plataforma política del partido bolchevique y de la revolución de Octubre, ha pasado a la historia con el nombre de las *tesis de Abril*.

LA REVOLUCIÓN PERMANENTE Y LAS TESIS DE ABRIL

Marx y Engels explicaron que las condiciones objetivas para la construcción del socialismo se encontraban presentes en los países capitalistas más avanzados. Esta idea, que ha sido utilizada de muy diferentes formas para respaldar todo tipo de conclusiones, no hacía más que reconocer una obviedad: que el socialismo necesita de un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas para ser realidad. Marx y Engels jamás afirmaron que la clase obrera debería abstenerse de tomar el poder en los países capitalistas atrasados o cederle el turno a la burguesía para que ésta llevase a cabo las tareas democráticas pendientes.

A través de la experiencia de las luchas revolucionarias de 1848, Marx y Engels llegaron a la conclusión de que la burguesía había agotado su papel progresista y perdido todo interés en la revolución: “la burguesía (...) de repente descubrió que no sólo había engendrado a unos cuantos trabajadores industriales, sino a una clase obrera, una clase que, aunque medio adormecida, sin embargo se despertaba poco a poco y se desarrollaba en un proletariado revolucionario por la esencia de su misma naturaleza. Y ese proletariado, que en todas partes había ganado batallas para la burguesía, presentaba ahora sus demandas, especialmente en Francia, demandas incompatibles con la supervivencia de todo el orden burgués. El 23 de junio de 1848 estalló en París la primera gran lucha entre las dos clases. El proletariado fue derrotado después de cuatro días de combates. De ahí en adelante, el grueso de la burguesía, en toda Europa, se pasó al lado de la reacción y se unió con los burócratas, los nobles y los sacerdotes, a los que acababa de derrocar con la ayuda de los trabajadores, a fin de luchar contra los ‘enemigos de la sociedad’, esos mismos trabajadores”.²³³

A pesar de la tergiversación que el estalinismo hizo de la teoría marxista de la revolución proletaria, Marx y Engels abogaron por la independencia política del proletariado y rechazaron que la burguesía europea, en las condiciones del desarrollo capitalista de mediados del siglo XIX, pudiese encabezar una lucha consecuente y revolucionaria por las demandas democráticas. Su renuncia a la realización de las tareas de la revolución democrática burguesa, encaradas con éxito en su época ascendente en Inglaterra (1640) o Francia (1789), era una característica contrarrevolucionaria de la burguesía en su madurez. En sus textos de la época, Marx y Engels alertaron a la vanguardia obrera de la necesidad de pelear por sus propios objetivos de clase, independientes también de la pequeña burguesía, impotente en la práctica para enfrentarse con éxito a las fuerzas combinadas de la reacción feudal y de la burguesía.²³⁴ En sus posteriores elaboraciones teóricas, especialmente tras la Comuna de París, Marx y Engels no hicieron sino ratificar esa idea.

Los debates que polarizaron y dividieron la socialdemocracia rusa a principios del siglo XX, en los que también participaron activamente destacados dirigentes del SPD alemán y de la Segunda Internacional, cobraron una nueva perspectiva a la luz de acontecimientos como la revolución rusa de 1905. En esencia, lo que la discusión revelaba no era otra cosa que la pugna entre los defensores del programa del socialismo científico y los que proponían una revisión fundamental de los principios teóricos, la estrategia y las tácticas del marxismo.

En 1905, la mayoría de los dirigentes del SPD y sus correligionarios reformistas en el Partido Obrero Social-Demócrata Ruso (POS DR) consideraban que Rusia necesitaba de una revolución burguesa nacional para convertirse en un país capitalista moderno. De aquí se

²³³ Engels, *La política de sangre y hierro de Bismarck (El papel de la violencia en la historia)*, Ed. Hadise, México DF, 1971, p. 47.

²³⁴ Véase, por ejemplo, el “Mensaje al Comité Central de la Liga de los Comunistas”, de 1850.

desprendía que el proletariado debería limitarse a actuar como fuerza auxiliar de la burguesía liberal, sin sobrepasar el marco de las reivindicaciones democráticas burguesas. Solamente después de un período prolongado (e indefinido) de desarrollo capitalista, la clase obrera agruparía las fuerzas suficientes para iniciar la transformación de la sociedad, utilizando para ello los mecanismos del parlamentarismo burgués. En definitiva, la revolución se presentaba como una sucesión de etapas: primero, una fase democrática burguesa, y luego, la fase socialista. Este enfoque formalista, que estaba instalado con fuerza en el cuerpo teórico del movimiento socialdemócrata, también en la dirección del PSOE, negaba el desarrollo dialéctico de la historia. Marx y Engels habían señalado acertadamente que en la época de consolidación capitalista, la burguesía se había convertido ya en una fuerza social conservadora y contrarrevolucionaria.

A finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, muchos de los más ardientes partidarios de la revolución por etapas, que en líneas generales se consideraban marxistas, revisaron otros aspectos del socialismo científico, empezando por la concepción marxista del Estado. Con estos mimbres teóricos se justificó la paz social, la cooperación sindical en órganos de cogestión económica junto a los patronos y la entrada de dirigentes socialistas en gobiernos burgueses. Finalmente, la teoría etapista de la revolución, en la medida que convertía en un fin estratégico la defensa de la democracia burguesa, llevó inevitablemente a que los líderes reformistas de la Segunda Internacional capitularan ante sus burguesías en 1914. Posteriormente darían su colaboración para aplastar la revolución socialista en numerosos países europeos.

Una minoría de cuadros, encabezados por Rosa Luxemburgo en Alemania y Lenin y Trotsky en Rusia, se rebeló ante tal distorsión del marxismo. Sus escritos al respecto son abundantes, reafirmando en la política de independencia de clase y demostrando que el enfoque mecánico y formalista del etapismo falsificaba tanto las condiciones materiales del desarrollo capitalista en Rusia como la auténtica correlación de fuerzas entre las clases.

El capitalismo ruso de inicios del siglo XX mostraba similitudes asombrosas con el español. Rusia se había incorporado tarde a la economía capitalista mundial y sufría una fuerte dependencia de los capitales exteriores, franceses e ingleses mayoritariamente. Su estructura económica y social estaba marcada por la supervivencia de relaciones semifeudales: la servidumbre de la gleba había sido abolida en 1861, pero la tierra seguía en manos de una oligarquía de nobles y burgueses, mientras millones de campesinos desposeídos arrastraban una vida miserable. El atraso endémico del campo coexistía con las grandes fábricas e industrias de los principales núcleos urbanos, muchas de ellas altamente tecnificadas.²³⁵ La burguesía liberal, aunque no tenía en sus manos el monopolio del poder político del Estado, que seguía controlado por el zar y la nobleza, sí formaba un bloque social y económico con el régimen autocrático, que por otra parte velaba por sus lucrativos negocios. En todas las ocasiones en que pudo encabezar la lucha contra el zarismo, como en la revolución de 1905, la burguesía liberal optó por aliarse con él para conjurar el peligro de una acción independiente del proletariado. Su defensa de la democracia terminaba allí donde empezaban sus ingresos y privilegios.

Respondiendo a los reformistas, los marxistas rusos demostraron que, debido a su debilidad y a su dependencia del capital imperialista, la burguesía era incapaz de llevar a cabo las tareas de su propia revolución: la reforma agraria, el desarrollo industrial y acabar con la opresión

²³⁵ El 80% de la población rusa vivía en el campo. Millones de jornaleros sin tierra trabajaban en inmensos latifundios y protagonizaban revueltas periódicas, reprimidas por la autocracia zarista. La clase obrera rusa se nutrió de los millones de campesinos expulsados de las aldeas tras el fin formal de la servidumbre. La industrialización creó un proletariado muy concentrado: en 1914, el 41'4% de los obreros rusos trabajaban en fábricas de más de 1.000 obreros, mientras que en EEUU sólo representaban el 17'8%.

nacional. No era la burguesía, sino la clase obrera encabezando a la nación, especialmente a las masas de campesinos pobres, la que tenía en sus manos la resolución de dichas tareas. León Trotsky planteó este enfoque dialéctico en su celebre teoría de la *revolución permanente*: “La idea de la revolución permanente fue formulada por los grandes comunistas de mediados del siglo XIX, por Marx y sus adeptos, por oposición a la ideología democrática, la cual, como es sabido, pretende que, con la instauración de un Estado ‘racional’ o democrático, no hay ningún problema que no pueda ser resuelto por la vía pacífica, reformista o progresiva. Marx consideraba la revolución burguesa de 1848 únicamente como un preludio de la revolución proletaria. Y, aunque ‘se equivocó’, su error fue un simple error de aplicación, no metodológico. (...) El ‘marxismo’ vulgar se creó un esquema de la evolución histórica según el cual toda sociedad burguesa conquista tarde o temprano un régimen democrático, a la sombra del cual el proletariado, aprovechándose de las condiciones creadas por la democracia, se organiza y educa poco a poco para el socialismo. Sin embargo, el tránsito al socialismo no era concebido por todos de un modo idéntico: los reformistas sinceros (tipo Jaurès) se lo representaban como una especie de fundación reformista de la democracia con simientes socialistas. Los revolucionarios formales (Guesde) reconocían que en el tránsito al socialismo sería inevitable aplicar la violencia revolucionaria. Pero tanto unos como otros consideraban a la democracia y al socialismo, en todos los pueblos, como dos etapas de la evolución de la sociedad no sólo independientes, sino lejanas una de otra. (...)

“La teoría de la revolución permanente, resucitada en 1905, declaró la guerra a estas ideas, demostrando que los objetivos democráticos de las naciones burguesas atrasadas conducían, en nuestra época, a la dictadura del proletariado, y que ésta ponía a la orden del día las reivindicaciones socialistas. En esto consistía la idea central de la teoría. Si la opinión tradicional sostenía que el camino de la dictadura del proletariado pasaba por un prolongado período de democracia, la teoría de la revolución permanente venía a proclamar que, en los países atrasados, el camino de la democracia pasaba por la dictadura del proletariado (...) El segundo aspecto de la teoría caracteriza ya a la revolución socialista como tal. A lo largo de un período de duración indefinida y de una lucha interna constante, van transformándose todas las relaciones sociales. La sociedad sufre un proceso de metamorfosis. (...) En esto consiste el carácter permanente de la revolución socialista como tal (...) El carácter internacional de la revolución socialista, que constituye el tercer aspecto de la teoría de la revolución permanente, es consecuencia inevitable del estado actual de la economía y de la estructura social de la humanidad. El internacionalismo no es un principio abstracto, sino únicamente un reflejo teórico y político del carácter mundial de la economía, del desarrollo mundial de las fuerzas productivas y del alcance mundial de la lucha de clases. La revolución socialista empieza dentro de las fronteras nacionales; pero no puede contenerse en ellas (...) Considerada desde este punto de vista, la revolución socialista implantada en un país no es un fin en sí, sino únicamente un eslabón de la cadena internacional. La revolución internacional representa de suyo, pese a todos los reflujos temporales, un proceso permanente”.²³⁶

²³⁶ León Trotsky, *La revolución permanente*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2001, p. 38. Además de este texto, para profundizar en la teoría de la revolución permanente es indispensable el libro de Trotsky *1905. Resultados y perspectivas*, también editado por la FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS. Por su parte, Rosa Luxemburgo llegó a conclusiones muy parecidas tras realizar balance de la revolución rusa de 1905: “...La gran industria —con todas sus consecuencias, la moderna división de clases, los fuertes contrastes sociales, la vida moderna en las grandes ciudades y el proletariado moderno— domina en Rusia, es decir, se ha convenido en la forma de producción decisiva del desarrollo actual. De ahí resulta esta situación histórica contradictoria y extraña, en la que la revolución burguesa, según sus tareas formales, es realizada por un proletariado moderno con conciencia de clase, que, al mismo tiempo, en un plano internacional, es el símbolo de la decadencia de la democracia burguesa. No es la burguesía actualmente el elemento revolucionario dirigente, como en las anteriores revoluciones de occidente, en las que la masa proletaria, disuelta en la pequeña burguesía, actuaba como masa de maniobra, sino, por el contrario, ahora es el proletariado con conciencia de

En abril de 1917, las ideas de Trotsky y el programa leninista de la revolución confluyeron plenamente. El día 4, Lenin expuso sus tesis en varias reuniones de militantes bolcheviques y mencheviques, causando sensación entre los activistas de base y hostilidad entre los dirigentes mencheviques y algunos bolcheviques. Sus ideas fundamentales eran las siguientes:

1. La guerra es imperialista, de rapiña. Es imposible acabar con ella, con una paz democrática, sin derrocar el capitalismo.
2. La tarea de la revolución es ahora poner el poder en manos del proletariado y los campesinos pobres. Ningún apoyo al Gobierno Provisional. No a la república parlamentaria, volver a ella desde los sóviets es un paso atrás. Por una república de los sóviets de diputados obreros, soldados y campesinos.
3. Supresión de la burocracia, el ejército y la policía. Armamento general del pueblo.
4. Nacionalización de todas las tierras y puesta a disposición de los sóviets locales de jornaleros y campesinos.
5. Nacionalización de la banca bajo control obrero.
6. La revolución rusa es un eslabón de la revolución socialista mundial. Hay que construir inmediatamente una internacional revolucionaria, rompiendo con la Segunda Internacional.

Algunos dirigentes bolcheviques, como Zinóviev y Kámenev (Stalin ya se había replegado tras la llegada de Lenin a Petrogrado), desconcertados por el rumbo de los acontecimientos y la perspectiva de la toma del poder, se atrincheraban en la vieja fórmula de la “dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos”,²³⁷ obviando las enseñanzas aportadas

clase el elemento dirigente e impulsor, mientras que las capas de la gran burguesía son en parte directamente contrarrevolucionarias y en parte débilmente liberales, y sólo la pequeña burguesía rural, junto a la intelectualidad pequeña burguesa urbana, se encuentran decididamente en la oposición y hasta tienen conciencia revolucionaria.

Pero el proletariado ruso, que está llamado a desempeñar el papel dirigente en la revolución burguesa, va a la lucha libre de todas las ilusiones de la democracia burguesa y con una conciencia fuertemente desarrollada de sus propios y específicos intereses de clase en medio de una aguda contradicción entre el capital y el trabajo. Esa contradictoria relación se manifiesta en que, en esta revolución burguesa formalmente, la contradicción entre la sociedad burguesa y el absolutismo es dominada por la contradicción entre el proletariado y la sociedad burguesa, en que la lucha del proletariado se dirige simultáneamente, y con la misma fuerza, contra el absolutismo y contra la explotación capitalista, en que el programa de las luchas revolucionarias se orienta con la misma intensidad tanto hacia la conquista de las libertades políticas como hacia la conquista de la jornada de ocho horas y de una existencia material digna para el proletariado...”²³⁶ Rosa Luxemburgo, *Huelga de masas, partido y sindicato*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2003, pp. 79-80.

²³⁷ La historiografía estalinista ha tratado de presentar de una forma distorsionada el debate en el seno del POSDR tras el fracaso de la revolución de 1905, que lo dividió profundamente entre la línea proletaria y consecuente, y la oportunista y conciliadora. Como balance, Trotsky escribió sus magníficos trabajos *1905 y Resultados y perspectivas*, en donde desarrolló su teoría de la revolución permanente. Por su parte, Lenin también denunció el carácter contrarrevolucionario de la burguesía y se opuso ardientemente a la política de colaboración de clases. Lenin sintetizó la idea de los bolcheviques sobre el régimen que debería realizar las tareas democráticas de la revolución en la fórmula “dictadura democrática revolucionaria de obreros y campesinos”. Como él mismo explicó posteriormente, la fórmula tenía una validez temporal, como contraposición a la postura de colaboración de clases de los mencheviques. En los años previos a 1917, Trotsky calificó esa consigna de “definición algebraica”, ya que, al no ser una clase homogénea, el campesinado no podía jugar un papel político independiente. Sus capas inferiores (jornaleros, pequeños propietarios, arrendatarios) oscilaban hacia el proletariado, mientras que las superiores (medianos y grandes propietarios) estrechaban lazos con la burguesía y la autocracia. Por tanto, el problema campesino no podía resolverse en abstracto; era imprescindible un gobierno que rompiera decisivamente con la burguesía y el capitalismo. La revolución de Febrero confirmaría su análisis. En el transcurso de aquellos meses revolucionarios, Lenin también sacó conclusiones: la fase democrática ya se había agotado y era necesario que la clase obrera tomara el poder e iniciara una revolución socialista que se encargaría de completar las tareas democráticas. Esta fue la esencia del golpe de timón que representaron las tesis de Abril.

por tres meses de revolución. Por su parte, Lenin había comprendido la dinámica de la revolución desde la caída del zar en febrero, y defendió enérgicamente la reorientación del partido:

“... ‘Nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para la acción’, decían siempre Marx y Engels, burlándose con justicia de quienes aprendían de memoria y repetían, sin haberlas digerido, ‘fórmulas’ que, en el mejor de los casos, sólo podían trazar las tareas *generales*, que necesariamente cambian en correspondencia con la situación económica y política *concreta* de cada *período* particular del proceso histórico. ¿Por qué *hechos* objetivos, exactamente establecidos, debe guiarse ahora el partido del proletariado revolucionario al determinar las tareas y las formas de su acción? En mi primera *Carta desde lejos* (‘La primera etapa de la primera revolución’), publicada en *Pravda*, números 14 y 15, del 21 y 22 de marzo de 1917, y en mis tesis, yo defino ‘la peculiaridad del momento presente en Rusia’ como el período de *transición* de la primera etapa de la revolución a la segunda. Y por eso consideraba que la consigna fundamental, la ‘tarea del día’ en *este* momento era: ‘¡Obreros! Habéis hecho prodigios de heroísmo proletario y popular en la guerra civil contra el zarismo. Debéis hacer prodigios de organización proletaria y popular para preparar vuestro triunfo en la segunda etapa de la *revolución*’ (*Pravda*, nº 15). ¿En qué consiste, pues, la primera etapa? En el paso del poder del Estado a la burguesía. Hasta la revolución de febrero-marzo de 1917, el poder del Estado en Rusia lo detentaba una vieja clase, a saber: la nobleza feudal terrateniente, encabezada por Nicolás Romanov. Después de esta revolución, el poder se encuentra en manos de *otra* clase, de una clase nueva, a saber: *la burguesía*. El paso del poder del Estado de manos de una clase a las de otra *clase* es el primer síntoma, el síntoma principal, el síntoma más importante de la *revolución*, tanto en el sentido estrictamente científico de este concepto, como en el sentido político, práctico. Por tanto, la revolución burguesa o democrático-burguesa en Rusia *ha terminado*.”

“Ya oímos el alboroto de los contradictores que gustan de llamarse ‘viejos bolcheviques’: ¿acaso no hemos dicho siempre que la revolución democrática burguesa sólo termina con la ‘dictadura democrática y revolucionaria del proletariado y el campesinado’? ¿Acaso la revolución agraria, también democrático-burguesa, ha llegado a su fin? ¿Acaso no es un hecho, por el contrario, que *aún no* ha comenzado? Contesto: las consignas y las ideas bolcheviques han sido, *en general*, plenamente confirmadas por la historia, pero *concretamente* las cosas han sucedido de *modo distinto* a lo que (quienquiera que fuese) podía esperarse; han sucedido de modo más original, más peculiar, más variado. Ignorar, olvidar este hecho sería parecerse a aquellos ‘viejos bolcheviques’ que más de una vez jugaron ya un triste papel en la historia de nuestro partido, repitiendo sin sentido una fórmula *aprendida de memoria*, en lugar de *estudiar* la peculiaridad de la nueva situación, de la realidad viva.”

“La ‘dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y el campesinado’ *ya* se ha visto realizada (en cierta forma y hasta cierto punto) en la revolución rusa, pues esta ‘fórmula’ prevé solamente una *correlación de clases*, y no *la institución política concreta que realiza* esta correlación, esta colaboración. ‘El Sóviet de Diputados Obreros y Soldados’: ahí tienen ustedes, ya plasmada por la vida, ‘la dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y los campesinos’. Esta fórmula ha envejecido ya. La vida la ha sacado del reino de las fórmulas al reino de la realidad, la ha revestido de carne y hueso, la ha concretado y *con ello* le ha dado una forma nueva.”

“A la orden del día está ya una tarea distinta, nueva: la escisión entre los elementos proletarios *en el seno* de esta dictadura (los antidefensistas, los internacionalistas, los ‘comunistas’ que están por el paso a la Comuna) y los elementos *pequeños propietarios o pequeñoburgueses* (Chjeídze, Tsereteli, Steklov, los socialistas revolucionarios y demás defensistas revolucionarios, enemigos de que se siga el camino que lleva a la comuna,

partidarios del ‘apoyo’ a la burguesía y al gobierno burgués). Quien *en el momento actual* habla sólo de ‘dictadura democrático-revolucionaria del proletariado y el campesinado’ va a la zaga de la vida, *se ha pasado en la práctica*, en virtud de ello, a la pequeña burguesía y está en contra de la lucha de clases proletaria, por lo que debe ser entregado al archivo de las rarezas ‘bolcheviques’ prerrevolucionarias (puede llamársele: archivo de ‘viejos bolcheviques’).²³⁸

La fase abierta con la revolución de Febrero frustró las expectativas de los trabajadores, los soldados y los campesinos que la habían protagonizado; ninguna de las reformas prometidas se concretó, pero los capitalistas y el Estado Mayor ruso, conscientes de que los meses transcurridos no habían servido para descarrilar el movimiento, preparaban cuidadosamente un golpe contrarrevolucionario.

EL OCTUBRE SOVIÉTICO

La revolución fue una gran escuela para millones de obreros, campesinos y soldados. Las jornadas de Julio, la represión contra los bolcheviques, los planes para la ofensiva militar en el frente occidental, el intento de golpe fascista de Kornílov... estos acontecimientos y la experiencia de las masas terminaron por inclinar la balanza definitivamente a favor de los bolcheviques y la política de Lenin y Trotsky. El apoyo al partido y al programa de la revolución socialista creció irresistiblemente en los sóviets, los regimientos y el campo.

El temor de Lenin sobre la actitud de los llamados viejos bolcheviques no era infundado. Es una ley que, en los momentos históricos en que se necesita un viraje brusco y la máxima audacia, hasta el partido más preparado y con un espíritu más revolucionario le cuesta adaptarse. Eso fue lo que le ocurrió al Partido Bolchevique cuando tuvo que pasar de la propaganda y la agitación a la lucha directa por el poder. Dudas y vacilaciones sobre las posibilidades de triunfar, que reaparecen en las disyuntiva decisiva. Lenin y Trotsky siguieron la máxima de Saint Just cuando en el momento crítico de la gran revolución francesa declaró: “Quién hace revoluciones a medias no hace sino cavar su propia tumba”.

Ante todo, las jornadas previas a la insurrección pusieron de manifiesto la importancia del *factor subjetivo* de la revolución, es decir, el partido y su dirección. La comprensión correcta de la situación del momento, la evaluación sobria de la correlación de fuerzas entre las clases y la confianza total en la clase obrera hicieron posible el triunfo de Octubre. La decisión final del Comité Central bolchevique, reunido el día 10, fue trascendental. Después de que la mayoría de los sóviets obreros y campesinos, los regimientos y los cuarteles se hubieran pronunciado por el poder de los sóviets y contra el gobierno capitalista, las condiciones para la insurrección armada estaban maduras. En palabras de Lenin, “la historia no perdonará a los revolucionarios que puedan vencer hoy pero corren riesgo de perderlo todo si aguardan a mañana”.

El Comité Militar Revolucionario (CMR), organismo militar creado por los bolcheviques y encabezado por Trotsky, agrupaba a 200.000 soldados, 40.000 guardias rojos y decenas de miles de marineros. El 24 de octubre (7 de noviembre según el calendario vigente en Rusia en aquel entonces), las tropas del CMR, dirigidas desde el Instituto Smolny, trabajaron durante todo el día y toda la noche ocupando puentes, estaciones, cruces, edificios... Veinticuatro

²³⁸ Lenin, “Cartas sobre táctica”, en la edición de la FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS de *Las tesis de Abril*, Madrid, 1997, pp. 26-28. Otro texto fundamental, que concreta el programa bolchevique para el poder, es “Las tareas del proletariado en nuestra revolución”, incluido en dicha edición.

horas después, el palacio de Invierno estaba tomado y el gobierno de coalición detenido. El último reducto del poder burgués había pasado a manos del CMR prácticamente de forma incruenta. Ese mismo día, el II Congreso de los sóviets, con mayoría bolchevique y de los eseristas de izquierdas, tomaba el poder en sus manos y daba paso al primer gobierno obrero de la historia. El internacionalismo proletario fue inscrito en la primera resolución aprobada por el congreso: un llamamiento a todos los pueblos en guerra para luchar por una paz democrática y sin anexiones. Rusia había dado el primer paso, había enseñado a los trabajadores del mundo el camino a seguir, que era posible derrocar el capitalismo y empezar a construir una sociedad sobre nuevas bases.

La opinión pública burguesa y sus académicos a sueldo han intentado, y siguen intentándolo generación tras generación, descalificar la revolución de Octubre por todos los medios a su alcance. De entre la montaña de calumnias y distorsiones vertidas a lo largo de casi un siglo, la más persistente, reforzada por decenas de libros y folletos que son presentados como trabajos respetables y “científicos”, transforma el Octubre soviético en un golpe de Estado bolchevique que truncó, supuestamente, el florecimiento de un régimen “democrático” y parlamentario en suelo ruso. La realidad, sin embargo, no se compadece con esta visión interesada. Si la revolución de Octubre no se hubiese coronado con éxito, en Rusia no habría triunfado la democracia parlamentaria, sino una dictadura militar fascista, un régimen de horror y represión más sangriento, si cabe, que el zarismo. Por otra parte, siempre se ha intentado estigmatizar la revolución de Octubre como una orgía de sangre y violencia, otra distorsión absolutamente contraria a la verdad. La insurrección en Petrogrado fue esencialmente pacífica y se hizo de forma democrática: la aplastante mayoría de la clase obrera, los campesinos y los soldados, representados en los sóviets de toda Rusia, respaldaban a los bolcheviques y su programa de “paz, pan y tierra” y “todo el poder a los sóviets”. Nadie movió un dedo por salvar al Gobierno Provisional.

Una vez derrocado el gobierno de los capitalistas, era necesario sentar las bases del nuevo orden revolucionario. Lenin y sus compañeros tenían claro que, sin democracia obrera, sin la participación consciente de las masas, la revolución estaba abocada al fracaso. En diciembre de 1917 Lenin señalaba: “Una de las tareas más importantes, si no la más importante, de la hora presente consiste en desarrollar con la mayor amplitud esa libre iniciativa de los obreros y de todos los trabajadores y explotados en general en su obra creadora de organización. Hay que desvanecer a toda costa el viejo prejuicio absurdo, salvaje, infame y odioso de que sólo las llamadas ‘clases superiores’, sólo los ricos o los que han cursado la escuela de las clases ricas, pueden administrar el Estado, dirigir la estructura orgánica de la sociedad capitalista”.

239

El III Congreso de los Sóviets de toda Rusia (enero de 1918) aprobó una directiva traspasando todos los poderes de la vieja administración zarista a los sóviets locales: “Todo el país tiene que quedar cubierto por una red de nuevos sóviets”. En ese congreso, Lenin insistió que las masas debían tomar la iniciativa: “se envían con mucha frecuencia al gobierno delegaciones de obreros y campesinos que preguntan cómo deben proceder, por ejemplo, con estas o aquellas tierras. Y yo mismo me he encontrado con situaciones embarazosas al ver que no tenían un punto de vista muy definido. Y les decía: ustedes son el poder, hagan lo que deseen hacer, tomen todo lo que les haga falta, les apoyaremos”. Pocos meses después, el congreso del partido bolchevique, declararía que ‘una minoría, el partido, no puede implantar el socialismo. Podrán implantarlo decenas de millones de seres cuando aprendan a hacerlo ellos mismos’.

²³⁹ Citado en el capítulo *De la insurrección de octubre a la formación de la Tercera Internacional*, “En defensa de la revolución de octubre”, VVAA, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid 2007, p 95.

Octubre alumbró el régimen más democrático de la historia. Los partidos burgueses tuvieron libertad de acción y propaganda durante los primeros meses. Pero los capitalistas rusos y sus aliados imperialistas no podían tolerar una revolución que los había echado del poder y amenazaba con transformarse en un imán para las masas de occidente. La reacción de la burguesía y los gobiernos de toda Europa fue brutal: a principios de 1918, fuerzas navales francesas y británicas ocuparon Múrmansk y Arcángel, y poco después marchaban hacia Petrogrado. En abril, los japoneses entraron en Vladivostok, mientras fuerzas militares alemanas ocupaban Polonia, Lituania, Letonia y Ucrania en colaboración con los generales blancos Krásnov y Wrangel. La ofensiva de las bandas armadas de la contrarrevolución, dispuesta a ajustar cuentas con aquellos que habían osado tocar la propiedad sagrada de los millonarios y terratenientes rusos y de los banqueros y especuladores imperialistas, duró cinco años. Hasta veintiún ejércitos imperialistas agredieron militarmente a la Rusia revolucionaria, para intentar acabar con el joven Estado obrero soviético. Pero los trabajadores y los campesinos rusos, bajo la dirección política de los bolcheviques, organizaron una asombrosa resistencia y triunfaron. La clave de su éxito no fue la superioridad del armamento ni la ayuda de una potencia exterior, sino la voluntad y la moral de millones de combatientes que peleaban por la tierra y las fábricas, por el futuro de sus familias. El programa revolucionario del bolchevismo se convirtió en el arma más poderosa, levantando de las ruinas de una sociedad descompuesta por tres años de guerra mundial un poderoso Ejército Rojo de más de cinco millones de hombres.

LA FORMACIÓN DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Octubre ratificó la concepción leninista del partido proletario y la revolución socialista. El dilema entre el éxito o el fracaso de la revolución se resolvió gracias a diferentes factores, entre los que destacan dos: por un lado, la presencia en los acontecimientos de una organización con una política correcta y miles de cuadros que fueron capaces de ligarse a los sectores más avanzados de la clase obrera en las fábricas, el ejército, el campo y los sóviets; y por otro, el papel político de Lenin y Trotsky, que permitió mantener firme el rumbo hacia la toma del poder. Sin ese partido, sin esa dirección y esos militantes que dieron una expresión consciente a las aspiraciones de las masas, la victoria no habría sido posible: “En el año 1917 —escribió León Trotsky—, Rusia pasaba por una crisis social muy grave. No obstante, sobre la base de todas las lecciones de la historia uno puede decir con certeza que, de no haber sido por la existencia del Partido Bolchevique, la inconmensurable energía revolucionaria de las masas se hubiera gastado infructuosamente en explosiones esporádicas y los grandes levantamientos habrían concluido en la más dura dictadura contrarrevolucionaria. La lucha de clases es el principal motor de la historia. Necesita un programa correcto, un partido firme, una dirección valiente y de confianza —no héroes de salón y de frases parlamentarias, sino revolucionarios dispuestos a ir hasta el final—. Esta es la principal lección de la revolución de Octubre”²⁴⁰.

El triunfo en Rusia no significó que el entendimiento de Lenin y los bolcheviques se nublara. Lenin nunca contempló la posibilidad de construir el socialismo aisladamente en un país agrícola y atrasado como la Rusia de 1917, pero tampoco era fatalista: aunque las condiciones objetivas para el socialismo no estaban maduras en Rusia, la victoria abrió con fuerza la perspectiva de la revolución en Europa, particularmente en algunos países capitalistas avanzados, como Alemania. El triunfo en las naciones capitalistas más

²⁴⁰ León Trotsky, Writings, 1935-36 Pathfinder Press New York, 1977 p. 166.

desarrolladas sería fundamental para socorrer a la atrasada Rusia. En un escrito del 8 de noviembre de 1918, Lenin reafirmaba la perspectiva internacionalista del bolchevismo: “Desde el principio de la revolución de Octubre, nuestra política exterior y de relaciones internacionales ha sido la principal cuestión a la que nos hemos enfrentado. No simplemente porque desde ahora en adelante todos los estados del mundo están siendo firmemente atados por el imperialismo en una sola masa sucia y sangrienta, sino porque la victoria completa de la revolución socialista en un solo país es inconcebible y exige la cooperación más activa de por lo menos varios países avanzados, lo que no incluye a Rusia (...) Nunca hemos estado tan cerca de la revolución proletaria mundial de lo que estamos ahora. Hemos demostrado que no estábamos equivocados al confiar en la revolución proletaria mundial”.²⁴¹ El internacionalismo de los bolcheviques no venía dado por sentimentalismos vacíos. ¡Era una cuestión de vida o muerte!

La guerra mundial y el triunfo bolchevique abrieron una época de revolución y contrarrevolución. Por toda Europa estallaron motines en los ejércitos, huelgas generales, movimientos insurreccionales y revoluciones: “Toda Europa —escribió Lloyd George, primer ministro británico durante la guerra, al primer ministro francés Clemenceau en un memorando secreto de marzo de 1919— está llena del espíritu de la revolución. Hay un profundo sentimiento no sólo de descontento, sino de rabia y revuelta entre los trabajadores en contra de las condiciones de posguerra. Todo el orden existente, en sus aspectos políticos, sociales y económicos, está siendo cuestionado por las masas de la población de una punta a otra de Europa”. A duras penas la burguesía podía contener la situación y sólo lo logró precariamente apoyándose en las viejas organizaciones socialdemócratas y en los sindicatos reformistas.

En Alemania, el levantamiento de los marineros de Kiel, en noviembre de 1918, fue la señal para el inicio de la revolución socialista. En pocas semanas, el país quedó cubierto por los consejos de obreros y soldados, la monarquía de los Hohenzollern fue depuesta y se proclamó la república. Pero los dirigentes socialdemócratas de derechas actuaron con mucha más audacia que sus colegas rusos. Utilizando su posición dirigente en los consejos, boicotearon su consolidación y coordinación nacional, al tiempo que maniobraban con los generales para aplastar a la izquierda revolucionaria, dirigida por la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Frente la insurrección de los obreros berlineses a principios de enero de 1919, los ministros socialdemócratas dieron a los militares orden de liquidar por las armas a los insurrectos y matar a sus líderes más destacados. El asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht a manos de los *Freikorps*, los “cuerpos libres” sobre los que años después se montarían las fuerzas de choque del partido nazi, fue el preludio de una represión salvaje contra los obreros comunistas. La socialdemocracia alemana continuó la obra iniciada en agosto de 1914.²⁴²

El triunfo del octubre soviético y la represión posterior de la revolución europea abrieron una grieta irreparable en el movimiento socialdemócrata. En la mayoría de los partidos de la Segunda Internacional surgieron tendencias comunistas, y los dirigentes reformistas sólo pudieron mantener una base entre los sectores más atrasados y pasivos de la clase trabajadora. La era de la revolución hizo posible reatar las auténticas tradiciones

²⁴¹ *De la insurrección de Octubre a la formación de la Tercera Internacional... op. cit*

²⁴² Existen muchos y buenos estudios de la revolución alemana. Reseñamos algunos de ellos: Pierre Broué, *Revolución en Alemania*, A. Redondo editor, Barcelona, 1973; Rosa Luxemburgo, *Obras Escogidas*, Ediciones Era, México, 1978; Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, *Escritos sobre la revolución alemana*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2009; Sebastián Haffner, *La revolución alemana de 1918-1919*, Inédita Editores, Barcelona, 2005; Peter Nettle, *Rosa Luxemburgo*, Ediciones Era, México, 1969; Paul Frölich, *Rosa Luxemburgo, vida y obra*, Ed. Fundamentos, Madrid, 1976; Victor Serge, *El año I de la revolución rusa*, Siglo XXI editores, México, 1983.

internacionalistas del movimiento obrero. El proyecto de los delegados marxistas que participaron en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal se hizo viable, la creación de una nueva internacional revolucionaria era ya posible. En palabras de Lenin: “La Tercera Internacional fue fundada bajo una situación mundial en que ni las prohibiciones ni los pequeños y mezquinos subterfugios de los imperialistas de la Entente o de los lacayos del capitalismo, como Scheidemann en Alemania y Renner en Austria, son capaces de impedir que entre la clase obrera del mundo entero se difundan las noticias acerca de esta Internacional y las simpatías que ella despierta. Esta situación ha sido creada por la revolución proletaria, que, de un modo evidente, se está incrementando en todas partes cada día, cada hora”.²⁴³ El 24 de enero de 1919, la dirección del Partido Comunista Ruso (bolchevique), los partidos comunistas de Polonia, Hungría, Alemania, Austria, Letonia y Finlandia, la Federación Socialista Balcánica y el Partido Obrero Socialista norteamericano realizaron el siguiente llamamiento: “Los partidos y organizaciones abajo firmantes consideran como una imperiosa necesidad la reunión del primer congreso de la nueva internacional revolucionaria. Durante la guerra y la revolución se puso de manifiesto no sólo la total bancarrota de los viejos partidos socialistas y socialdemócratas, y con ellos de la Segunda Internacional, sino también la incapacidad de los elementos centristas²⁴⁴ de la vieja socialdemocracia para la acción revolucionaria”.

El congreso fundacional de la Internacional Comunista se celebró en marzo de 1919. En ese momento, el Estado obrero soviético estaba sometido al cerco de la intervención militar imperialista, lo que impidió la asistencia de muchos delegados. No obstante, las jóvenes fuerzas de la Internacional Comunista establecieron las bases políticas que habían sido delineadas en los años precedentes por Lenin y Trotsky: oposición frontal a los intentos de reconstruir la Segunda Internacional con la misma forma que tenía antes de la guerra, denuncia del pacifismo burgués y de las ilusiones pequeñoburguesas en el programa de paz del presidente estadounidense Wilson, defensa de la teoría marxista del Estado y crítica de la democracia burguesa como una forma de dictadura capitalista sobre el proletariado.²⁴⁵ La conclusión del congreso fue clara: la Internacional Comunista lucharía por agrupar a la vanguardia revolucionaria del proletariado en una internacional marxista homogénea.

En los años siguientes se produciría un trasvase constante de obreros socialistas a las filas de la Internacional Comunista. Esta presión obligó a muchos dirigentes que en el pasado habían mantenido posiciones reformistas a mostrar su apoyo, de palabra, a la nueva organización. En marzo de 1919 se adhirió el Partido Socialista Italiano; en mayo, el Partido Obrero noruego y el Partido Socialista Búlgaro; en junio, el Partido Socialista de Izquierda sueco. En Francia, los comunistas ganaron la mayoría en el congreso de Tours del Partido Socialista (1920): el ala de derechas se escindió con 30.000 miembros y el Partido Comunista Francés se formó con 130.000. El Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania (USPD) se escindió del SPD en octubre de 1920, en el congreso de Halle, y la mayoría se fusionó con el Partido Comunista Alemán, que se transformó en una organización de masas. Lo mismo ocurrió en Checoslovaquia.

La revolución de Octubre y la formación de la Internacional Comunista también afectaron de lleno al Estado español. Miles de militantes del PSOE, las Juventudes Socialistas y la CNT,

²⁴³ Lenin, “La Tercera Internacional y su lugar en la historia”, en *En defensa de la revolución de Octubre*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2007.

²⁴⁴ Término que se aplica a las organizaciones o personas que están en una posición intermedia (“centro”) entre el reformismo y el marxismo, ya sea porque estén evolucionando desde el primero hacia el segundo o viceversa.

²⁴⁵ Ver *La Internacional Comunista. Tesis, manifiestos y resoluciones de los cuatro primeros congresos*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2009.

incluidos muchos de sus cuadros dirigentes, fueron atraídos por las ideas del bolchevismo, sentando las bases que darían lugar al nacimiento del comunismo español.

AGITACIÓN CAMPESINA EN ANDALUCÍA

La huelga de agosto de 1917 acabó en una derrota, aunque el reflujo del movimiento fue muy limitado y temporal. Entre 1918 y 1920, la combinación del gran descontento provocado por la crisis económica²⁴⁶ con el impacto del triunfo bolchevique, fundamental para explicar el nuevo ambiente combativo de las masas, dio lugar a una ofensiva general de la clase obrera. El movimiento jornalero en Andalucía y los trabajadores industriales catalanes protagonizaron una oleada de ocupaciones de tierras, huelgas masivas y enfrentamientos con el ejército y la policía, de una envergadura hasta entonces desconocida. Aquellos tres años ininterrumpidos de guerra de clases, conocidos como el *trienio bolchevique*, mostraron el avance formidable de la conciencia socialista de miles de trabajadores y la creciente madurez de las condiciones objetivas para la revolución socialista, pero también dejaron al desnudo las contradicciones y carencias de la izquierda revolucionaria española.

El impacto de los acontecimientos en Rusia no fue menor al de otros países europeos, aunque sí tuvo ciertas singularidades. La más importante, sin duda, fue que las organizaciones socialistas no fueron el único receptor del triunfo bolchevique. La existencia de un gran sindicato anarcosindicalista, con tradición, impregnado de un espíritu combativo y con una influencia real en las secciones decisivas del movimiento obrero, amplificó considerablemente sus efectos. Las similitudes entre la estructura de clases en Rusia y en España —una masa de millones de jornaleros desheredados, un movimiento obrero en claro ascenso y con una conciencia de clase fortalecida, y una monarquía autoritaria basada en el ejército, la nobleza y la burguesía fundidos en un mismo bloque de poder— hacían que la revolución rusa ejerciese una atracción irresistible. El movimiento anarcosindicalista acogió con júbilo las noticias del Octubre soviético, lo que contrastó marcadamente con las manifestaciones públicas de cautela y prevención de los dirigentes del PSOE, pese a que el entusiasmo también prendió entre las bases socialistas, en Madrid, Asturias, Vizcaya... En cualquier caso, los militantes anarquistas y anarcosindicalistas dieron su adhesión entusiasta a la revolución rusa como la prueba práctica, y en positivo, de que la lucha mantenida durante largos años podría culminar con éxito.

Toda la prensa anarquista reflejó ese apoyo al bolchevismo, incluida la orientada por los que se llamaban a sí mismos anarquistas puros, como el periódico *Tierra y Libertad*, que no dejó de reproducir proclamas en apoyo a la revolución aludiendo al partido de Lenin como “aquellos que han puesto en práctica los principios de justicia y equidad del comunismo anarquista”.²⁴⁷ Cada noticia proveniente de Rusia era propagada y tamizada por el crisol del catecismo anarquista español. Y era difícil otro tipo de reacción, pues los anarquistas veían en la audacia bolchevique la realización de muchas de sus aspiraciones más sentidas. Eso fue

²⁴⁶ El fin de la guerra supuso el declinar del “boom” exportador por la vuelta a los mercados europeos de las grandes empresas francesas, británicas, etc. Sectores fundamentales como el carbón o el textil entraron en una fase de contracción, que se acentuó por la ausencia de inversión en maquinaria. Cuando los capitalistas españoles, tras desaprovechar el aumento espectacular de sus beneficios para invertir y así ganar productividad, vieron perder sus mercados europeos, no encontraron más solución que descargar sobre la clase obrera todo el peso de la crisis. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 1920 el poder adquisitivo de los salarios había caído un 20% respecto a 1914.

²⁴⁷ Meaker, *op. cit.*, p. 145.

lo que ocurrió con los decretos de expropiación de los terratenientes y entrega de la tierra a los campesinos aprobados por el Sóviet Panruso de Obreros, Campesinos y Soldados, publicados profusamente en la prensa anarquista y anarcosindicalista. Las noticias de las realizaciones agrarias de los bolcheviques, cuando millones de campesinos españoles estaban sedientos de tierra, circularon como la pólvora por los cortijos y pueblos de Andalucía, pero sus efectos no se limitaron a los braceros, también causaron una honda impresión entre los anarquistas barceloneses y los trabajadores que influenciaban. Otro tanto sucedió con la actitud de los bolcheviques a favor de una paz sin anexiones, apoyada con fervor por la mayoría de los grupos anarcosindicalistas.

Está fuera de discusión que el triunfo bolchevique generó una amplia reflexión sobre los principios bakuninistas: las ideas sobre un Estado obrero de transición, la dictadura del proletariado o el papel de la organización revolucionaria fueron reconsideradas, mucho más tras la publicación del libro de Lenin *El Estado y la revolución*, cuyo impacto fue muy considerable. La posición leninista a favor de la destrucción del Estado burgués y su crítica demoledora a la tergiversación de la teoría marxista a manos de los próceres de la Segunda Internacional cautivaron a muchos militantes y dirigentes anarquistas. Manuel Buenacasa, futuro secretario del comité nacional de la CNT, se transformó en un entusiasta seguidor de la revolución de Octubre y de los sóviets, a los que comparaba con las federaciones obreras anarcosindicalistas. El mismo fenómeno afectó a un amplio sector de los sindicalistas revolucionarios franceses y alemanes.

El horizonte y las expectativas de millones de oprimidos se elevaron como nunca había ocurrido en la historia precedente: parafraseando a Marx, las ideas se apoderaron de la mente de las masas explotadas y se transformaron en una fuerza material. Así fue como la consigna “Viva Rusia”, pintada con brocha y en letra gruesa, llenó las paredes blancas de los cortijos y se convirtió en el grito de guerra del mayor movimiento campesino desde comienzos de siglo. En la primavera y el verano de 1919, las ocupaciones de fincas improductivas y las huelgas generales se sucedieron en las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, así como en gran parte de Málaga y Huelva; un movimiento agrario que se extendió a Extremadura, Valencia, Murcia y Aragón, y que enlazaría con el de los trabajadores industriales de Catalunya. De esta insurrección jornalera en los campos andaluces levantó acta Juan Díaz del Moral en su celebre libro *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*: “A fines del año, la prensa burguesa y la prensa obrera esparcieron a los cuatro vientos el relato de un hecho estupendo: en Rusia los bolcheviques se habían hecho dueños del poder público, y de la noche a la mañana aplastaron a la burguesía e instauraban un régimen netamente proletario y se disponían a ajustar la paz con Alemania. La noticia produjo el efecto de un explosivo entre los militantes del proletariado español, especialmente entre sindicalistas y anarquistas. Los toques de llamada resonaron, como al comenzar el siglo, en todos los confines de la Península; los propagandistas y directores del movimiento obrero, muy desalentados a la sazón, se aprestaron otra vez a la pelea; los periódicos anarquistas y sindicalistas difundieron la buena nueva entre sus correligionarios conscientes, muy escasos por entonces, y los de Cataluña publicaron y repartieron un folleto, repleto de ilusiones, dando a conocer el suceso. Desde diciembre de 1917 no hay número de *Tierra y Libertad*, *Solidaridad Obrera*, de Barcelona; *La Vida del Cantero* de Madrid, y *La Voz del Campesino* de Jerez, que no llene sus columnas con noticias y fervientes loas de la gran revolución. Y, como siempre, el entusiasmo encendió los corazones andaluces antes de los de las demás regiones; y, a diferencia de las exaltaciones anteriores, fue la provincia cordobesa la que constituyó la vanguardia del ejército proletario y la que trabó los primeros combates con la burguesía”.²⁴⁸

²⁴⁸ Juan Díaz del Moral, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, Alianza Editorial, Madrid, 1977, p. 267. Díaz del Moral fue un intelectual de convicciones liberales que participó en varios de los proyectos de reforma agraria del gobierno de conjunción republicano-socialista. Para escribir su libro realizó un estudio

La confianza del movimiento en sus propias fuerzas se robusteció gracias a la actividad incansable de los propagandistas anarquistas y anarcosindicalistas. En muy poco tiempo, la organización de los jornaleros avanzó formidablemente. Según Díaz del Moral, tan sólo en la provincia de Córdoba, “como cada lugar y cada aldea, por minúscula que fuese, quiso tener su centro obrero, y como en algunos pueblos funcionaban dos o tres, y como los clausurados por la autoridad entraban de nuevo en liza disfrazados con otro nombre, en los años del trienio llegaron al Gobierno Civil más de 140 reglamentos de asociaciones de proletarios; en un año escaso, desde junio de 1918 al 15 de mayo de 1919, se constituyeron cerca de 100 sociedades obreras”.²⁴⁹ Las ocupaciones de fincas, la llamada a la organización y los acontecimientos rusos aceleraron el proceso de toma de conciencia entre los jornaleros: “La palabra esquirolo llegó a ser la más grave de las injurias. El infeliz que, por necesidad o por gratitud al amo, dejaba de inscribirse en el Centro o no secundaba la huelga se veía acosado por los muchachos, por las mujeres, por sus compañeros, con el denigrante vocablo. No es de extrañar, pues, que hasta el otoño de 1919 las huelgas agrarias se convirtieran siempre en generales. No sólo en la región sindicalista, cuyos centros cobijaban toda la población obrera, sino en las localidades socialistas y neutrales, el paro era secundado por los jornaleros no asociados, por los pequeños propietarios, por los artesanos y hasta por el comercio. Espontáneamente u obligadas por sus familias, las criadas de servicio, y en ocasiones las nodrizas, abandonaban también las casas de sus amos”.²⁵⁰ Este cambio en la conciencia de los campesinos pobres de Andalucía, y más específicamente de aquellos que vivían en los pueblos del sur del Guadalquivir, también fue retratado por Constancio Bernaldo de Quirós, del Instituto de Reformas Sociales (IRS).²⁵¹ Según su testimonio, entre los campesinos había penetrado “la convicción de lo que llamaban la ‘nueva ley’, decretada no sabían por quién, cuándo ni dónde, pero de la que hablaban públicamente con toda ingenuidad, incluso ante los señores, con tranquila alegría, puesto que en su virtud, ellos, últimos representantes de tantas generaciones desheredadas, deshechas en polvo bajo la tierra, después de haberla fecundado con su labor y su dolor, su sudor y sus lágrimas y hasta su sangre, veían, al fin, la hora de la inversión de posiciones y del reparto de los bienes de la vida”.²⁵²

El movimiento campesino andaluz se desarrolló en tres fases de gran exaltación revolucionaria. En la inicial (mayo-junio de 1918), una gran parte de las huelgas acabaron en resonados triunfos, lo que animó considerablemente el ímpetu organizador, con la creación de numerosos sindicatos y centros obreros en muchas localidades y pueblos. Una segunda fase remontó en el otoño, motivada por el aumento del paro tras la cosecha. El movimiento adquirió más profundidad, extensión y organización tras el congreso sindicalista organizado del 25 al 27 de octubre en la localidad de Castro del Río. Una semana después, estallaron huelgas y ocupaciones coordinadas en treinta y cuatro pueblos de la provincia de Córdoba. La movilización continuó hasta el verano de 1919, alcanzando su máxima expresión en la huelga general de marzo. Según Manuel Buenacasa, en muchos de estos pueblos se realizaron “verdaderos experimentos de expropiación colectiva de riqueza capitalista”. En mayo de

sistemático tanto de las organizaciones como de las publicaciones jornaleras de la época, fundamentalmente en la provincia de Córdoba, dejando un cuadro memorable de aquellas luchas.

²⁴⁹ *Ibid.*, p. 275.

²⁵⁰ *Ibid.*, p. 333.

²⁵¹ Instituto de Reformas Sociales (1904-1924), fue una institución impulsada por la Monarquía de Alfonso XIII. En los albores de la creación del IRS, Antonio Maura llamó la atención sobre “la necesidad de efectuar la revolución desde arriba para evitar que otros la hagan desde abajo”. Los otros eran el creciente proletariado industrial y el formado por los jornaleros del campo. Con el Instituto se pretendió dar una salida conservadora y regulada desde el poder al “problema obrero”. El Instituto intentó una incipiente regulación de las relaciones laborales, desde el trabajo de los niños hasta la promoción de casas baratas, pasando por la inspección del trabajo. Sus resultados reformadores fueron realmente magros.

²⁵² C. Bernaldo de Quirós, *El espartaquismo agrario andaluz*, Ed. Reus, Madrid, 1919, p. 39.

1920 se organizó la tercera huelga general en Córdoba, en lo que sería la fase más intensa del conflicto agrario. La reacción gubernamental no tardó en llegar: el gobierno Maura envió 20.000 soldados a Andalucía bajo el mando del general Emilio Barrera, que ocuparon militarmente numerosos pueblos, clausuraron los centros obreros y encarcelaron a decenas de activistas. La represión militar se prolongó durante todo el año 1920.

La lucha del proletariado rural fue formidable. En 1918, el número de huelgas rurales fue de 68; al año siguiente, el Instituto de Reformas Sociales registraba 188, y la cifra alcanzaba 194 en 1920. También los datos sobre horas perdidas y huelguistas, muestran las dimensiones tan amplias que adquirió el movimiento: se pasó de 1,8 millones de jornadas perdidas en huelgas en 1917 a 7,3 millones en 1920; el número de huelguistas, de 71.400 a 244.700 en el mismo periodo.²⁵³

Mientras el campo andaluz hervía de agitación, los líderes socialistas estaban centrados en la campaña electoral de 1918 y volvieron a ratificar sus acuerdos con los republicanos de izquierdas. Ni pretendían llamar a un movimiento semejante al de agosto de 1917, ni ofrecer una alternativa política más allá de sus tradicionales demandas de libertades públicas, jornada de ocho horas o aumentos salariales, sin respaldarlas en una táctica combativa consecuente. Su negativa a encabezar el nuevo auge de la lucha de clases implicó que los líderes sindicalistas y anarcosindicalistas de la CNT se hicieran con la dirección efectiva del movimiento, mostrando todas las fortalezas de esa gran organización proletaria, pero también las debilidades tácticas y estratégicas de sus dirigentes. Aunque eran luchadores honestos y estaban mucho más impregnados de espíritu revolucionario, los líderes anarcosindicalistas fueron prisioneros de sus prejuicios antipolíticos, que los llevaron constantemente a un callejón sin salida. Los dirigentes anarcosindicalistas carecían de la visión de los bolcheviques rusos. Hicieron de las huelgas un fetiche, adjudicándoles un *infalible* papel catalizador para desatar insurrecciones. Estas tendencias *putchistas* mantenidas a cualquier precio, eran el reflejo de una completa inconsistencia estratégica: nunca se plantearon la formación de comités o juntas obreras como órganos revolucionarios, y, sobre todo, se negaron a construir un partido obrero para la toma del poder.

El esfuerzo de organización anarcosindicalista en los pueblos andaluces, pero también en Valencia, Murcia y Zaragoza, permitió una gran penetración de la CNT entre los braceros y los campesinos. A finales de marzo de 1920, Salvador Seguí informó al comité nacional de las siguientes cifras de afiliación: Aragón, 60.000; Andalucía, 160.000; Levante, 180.000. Pero algunas veces los éxitos son más peligrosos que los fracasos. El crecimiento de la militancia cenetista llevó a sus dirigentes a sobrestimar sus fuerzas pensando que nada ni nadie podría pararlas. Y este aumento de los efectivos, que abrió al sindicato como una auténtica organización de masas, volvió a sacar a la palestra el enfrentamiento interno entre anarquistas y anarcosindicalistas intransigentes, por un lado, y aquellos líderes de la CNT que tenían sobre todo una visión sindicalista, y gradualista, de la lucha obrera. La vieja pugna que recorría las filas del anarquismo y el anarcosindicalismo español desde finales del siglo XIX emergió nuevamente durante el trienio bolchevique.

BARCELONA, CAPITAL OBRERA

²⁵³ Datos citados en Edward Malefakis, *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Editorial Ariel, Barcelona 1976, p 179

El poderoso movimiento campesino interactuó con el auge huelguístico de los trabajadores industriales catalanes creando una coyuntura explosiva. En palabras del historiador Gerald H. Meaker, “para el otoño de 1918 era evidente que España iba deslizándose hacia una situación revolucionaria o prerrevolucionaria. Y esta crisis, que hacia marzo de 1919 había llevado a algunos de los principales periódicos conservadores a pedir una dictadura para salvar al país del bolchevismo, llevaba en sí algo que la crisis de agosto de 1917 no tuvo: una dimensión tanto urbana como rural”.²⁵⁴

En ese momento, la táctica en el frente industrial de los anarcosindicalistas sufrió un giro con el lanzamiento de los *sindicatos únicos*, un indudable paso adelante que permitió superar la fragmentación de las viejas organizaciones obreras por oficios, confiriendo un carácter centralizado y unificado al movimiento obrero. En la primavera de 1918, la nueva orientación tuvo su plasmación en la creación de la Confederación Regional Andaluza, pero el acontecimiento más importante tendría lugar del 28 de junio al 1 de julio en el barrio barcelonés de Sants, con la celebración del congreso de la Confederación Regional del Trabajo (CRT), la organización cenetista en Catalunya. Hacer crecer la organización y dotarla de potencia y capacidad de acción fue el eje de los dirigentes sindicalistas del congreso, entre los que destacaron Salvador Seguí, Salvador Quemades, Camilo Piñón, todos ellos elegidos para el comité de la CRT, y Ángel Pestaña, que continuaría como director del periódico cenetista *Solidaridad Obrera*. La orientación sindicalista de la nueva dirección de la CRT no impidió que el comité nacional de la CNT, elegido tres meses después, estuviera encabezado por Manuel Buenacasa, un representante de los anarcosindicalistas intransigentes.

Con la creación de los sindicatos únicos en aquellas condiciones de ascenso revolucionario, decenas de miles de trabajadores de Catalunya, Levante y Andalucía se afiliaron a la CNT, que avanzó mucho más y más rápido que la UGT. Sólo en Catalunya, la CNT pasó de 107.096 afiliados a finales de 1918 a 345.000 a finales de 1919, alcanzando los 700.000 en todo el país e implantándose en zonas como Asturias y Vizcaya, tradicionales bastiones socialistas. La combatividad cenetista, su propaganda a favor de la revolución de Octubre y la actividad incansable de sus activistas conectaron con las aspiraciones del movimiento obrero y campesino mucho mejor que los métodos rutinarios y conservadores de la UGT.

Las comarcas proletarias de Catalunya eran un cóctel explosivo, en lo que también influyó la llegada de riadas de inmigrantes desde los pueblos de Valencia, Murcia y Almería, que llenaron las fuerzas más activas del anarcosindicalismo y de los grupos de acción confederales. Pero, sin duda, el factor más trascendental que alentó la radicalización política del proletariado catalán fue la intransigencia de los patronos, muchos de ellos vinculados a la Lliga Regionalista. Tras comprobar en la práctica la extensión y profundidad del movimiento sindical, los capitalistas catalanes no tardaron mucho en moverse en la dirección inequívoca de aplastarlo. Durante tres años, en las fábricas de Barcelona y sus comarcas industriales se libró una guerra de clases sin cuartel.

La primera gran prueba para la CRT después del congreso de Sants tuvo lugar a partir del 5 de febrero de 1919, con el inicio de la huelga en la Compañía de Fuerza e Irrigación del Ebro, popularmente conocida como *La Canadiense*. Esta compañía señera, de capital canadiense y británico, se encargaba de generar y suministrar a Barcelona la energía eléctrica proveniente del Ebro, y contaba con una gran planta en el Paral·lel. La forma en que dio comienzo la lucha ilustra bien la radicalización del proletariado barcelonés, no sólo de su vanguardia, sino también de sus sectores teóricamente más atrasados y sin experiencia, que no tardarían en

²⁵⁴ Meaker, *op. cit.*, p. 172.

pasar a la primera línea de la movilización. En La Canadiense no existía la CNT y la plantilla no contaba con experiencia sindical, pero, un mes antes del inicio de la huelga, los trabajadores de las oficinas empezaron a organizarse en un sindicato para luchar contra la temporalidad de sus contratos. La respuesta del gerente, F. Lawton, fue hacer fijos a ocho trabajadores, pero con un salario menor, y cuando éstos no lo aceptaron, fueron despedidos. El 5 de febrero, el resto de la plantilla comenzó una huelga por la readmisión de los despedidos y ocupó las oficinas. La respuesta patronal fue contundente: la policía desalojó las instalaciones y hubo 117 despidos más.

Tras esto, los empleados se pusieron en contacto con la CRT, que formó un comité para dirigir la huelga con trabajadores de La Canadiense y militantes cenetistas. La orientación sindical y política del conflicto estuvo a cargo de Salvador Seguí y los responsables del comité de la CRT, que lo vieron como una gran oportunidad para establecerse en una empresa clave y como un pulso con la patronal y las autoridades para lograr definitivamente el pleno reconocimiento del sindicato regional cenetista. La lucha se prolongó durante 44 días. Gracias al Sindicato Único de Obreros de Agua, Gas y Electricidad de la CNT, el paro se extendió a otras compañías eléctricas catalanas, incluyendo los transportes de la provincia de Barcelona, que quedaron paralizados; también se sumaron los obreros textiles, de tal forma que el conflicto, iniciado en una empresa sin tradición, se convirtió en una huelga general de la industria que afectó al 70% de todas las fábricas de la zona de Barcelona.

Las muestras de apoyo y solidaridad con la huelga eran un buen testimonio de la temperatura revolucionaria del proletariado: en el momento en que la patronal trató de publicar un ultimátum amenazando a los obreros con el despido, el Sindicato de Artes Gráficas impuso una censura roja en todos los periódicos de Barcelona; la aparición del comunicado se retrasó siete días. Durante semanas, los empresarios, secundados por el gobierno, intentaron infructuosamente doblegar la huelga. Utilizaron todos los medios a su alcance, incluido el capitán general de Catalunya, Miláns del Bosch, que ordenó la militarización de todos los trabajadores del sector del agua, gas y electricidad entre los 21 y los 31 años. La respuesta fue formidable: la mayoría de los empleados militarizados no se presentó al trabajo y los pocos que lo hicieron rehusaron cumplir con sus tareas. La resistencia masiva de los huelguistas, respaldados por la solidaridad general de la clase, desató una espiral represiva: cerca de 3.000 trabajadores fueron internados en la prisión de Montjuic y se decretó el estado de guerra en la provincia. Pero la voluntad de lucha de los trabajadores permanecía inquebrantable y el gobierno de Romanones no tuvo más remedio que patrocinar las negociaciones entre la patronal y el comité de huelga.

La lucha terminó con una tremenda victoria obrera. La idea del sindicalismo revolucionario de que no se puede conseguir en la mesa de negociación lo que no se ha conquistado previamente con la movilización se hizo realidad. El acuerdo final recogía que todos los trabajadores encarcelados, exceptuando los pendientes de juicio, serían puestos en libertad y que todos los despedidos serían readmitidos en sus puestos sin ningún tipo de sanción, pero además se arrancó la subida de los jornales y el pago de los salarios no percibidos por los días de huelga. La victoria tenía un alcance histórico. Utilizada correctamente, se podría haber convertido en una poderosa palanca no sólo para elevar el nivel de conciencia de los trabajadores, algo que en parte se logró, sino como un paso decisivo en la organización política de las masas obreras en la lucha por el poder. En esencia, en la huelga de Barcelona, como ya había ocurrido en la gran huelga general de agosto de 1917, la clase obrera se vio a sí misma como clase, las capas más rezagadas entraron en contacto con la vanguardia y los fundamentos de la sociedad burguesa fueron puestos en cuestión. Al convertirse en general, la huelga de La Canadiense también dejó claro algo fundamental: no existe una muralla infranqueable entre las demandas económicas y las reivindicaciones políticas. Al paralizar

por completo la actividad productiva, los trabajadores en lucha se hicieron conscientes de su poder.

HUELGA GENERAL Y REVOLUCIÓN

La huelga general de Barcelona y las huelgas campesinas en Andalucía crearon unas condiciones inmejorables para levantar una organización revolucionaria que se plantease seriamente ganar a la mayoría del movimiento obrero, incluyendo a la base ugetista, a una estrategia para la toma del poder. En las condiciones de 1918-19, uno de los ejes de esa estrategia pasaba por la formación de juntas revolucionarias, órganos de poder obrero a partir de los comités de huelga existentes, y su coordinación a escala local, regional y estatal. Pero la actitud de los dirigentes cenetistas volvió a poner en evidencia su falta de perspectivas y de una alternativa revolucionaria coherente.

El desenlace de la huelga en la capital catalana fue utilizado por el ala “pura” o “intransigente” de los anarquistas, que había logrado una gran influencia entre los obreros radicalizados, para intentar continuar una ofensiva general contra la patronal y desencadenar, sin ningún plan serio, la ansiada insurrección. Estos intentos hicieron aflorar las divisiones internas en la CNT. Muchos “puros” se consideraban a sí mismos bolcheviques, pero sólo veían la épica de la revolución, el momento triunfal de la insurrección, y no el paciente trabajo previo, las tácticas, el programa y la estrategia que permitieron a los bolcheviques conquistar el apoyo consciente de la mayoría de la clase obrera y del campesinado rusos. Por otro lado, los cenetistas encabezados por Salvador Seguí veían en la victoria de la huelga una oportunidad de oro para el único fin que vislumbraban posible: consolidar una fuerte organización sindical para la lucha económica de los trabajadores. Aunque de forma completamente distorsionada, los dos enfoques que polarizaron la CNT en aquellos años dibujaban la disyuntiva entre reforma y revolución. Pero ambas visiones adolecían de una comprensión científica de las tareas del momento, tareas que los marxistas revolucionarios sí se habían planteado a fondo después de arduas polémicas con los reformistas y de un balance político de la lucha de clases.

Los críticos del socialismo científico siempre han clamado contra el supuesto desprecio de los marxistas hacia las reformas. Esta objeción, utilizada para acusar a los revolucionarios de radicales, utópicos y poco prácticos, es una burda tergiversación. Los marxistas jamás desdeñan la lucha por las mejoras de las condiciones de vida y de trabajo de las masas oprimidas, todo lo contrario. ¿De qué manera podría la clase obrera ganar confianza en sus propias fuerzas si no es a través de mil y una batallas cotidianas, incluidas las huelgas? Por otra parte, el marxismo nunca ha dejado de hacer conscientes a los trabajadores del carácter temporal y transitorio de muchas de las conquistas que se logran arrancar: la clase dominante intentará eliminarlas en cuanto tenga oportunidad. Y es obvio que oportunidades hay, pues la correlación de fuerzas no se puede mantener indefinidamente a favor del proletariado. Por tanto, los marxistas consideran las reformas como parte de una lucha más amplia, por la emancipación completa de los trabajadores, por la transformación socialista de la sociedad.

Cualquier conquista sería del movimiento obrero siempre es el producto de la movilización, no de la habilidad negociadora de los dirigentes sindicales. Las victorias elevan la confianza de la clase en sus propias fuerzas y refuerzan la conciencia socialista del movimiento. A este respecto Trotsky señalaba: “la revolución despierta, precisamente ésta es su fuerza, a las masas trabajadoras más atrasadas, más despreciadas, más oprimidas. Su despertar toma la forma de la huelga. Por medio de la huelga, las diferentes capas de las masas trabajadoras se

dan a conocer, se relacionan entre sí, experimentan sus propias fuerzas y las de su enemigo. Una capa despierta y contamina inmediatamente a otra. La consecuencia de esto es que la huelga se hace absolutamente inevitable. Los comunistas no deben alarmarse, pues en esto consiste la propia fuerza creadora de la revolución. Únicamente por medio de estas huelgas, con todos sus errores, sus ‘excesos’, sus ‘exageraciones’, es como el proletariado se pone en pie, se une en un todo y comienza a sentirse y a concebirse a sí mismo como una clase, como una fuerza histórica viva. Las revoluciones nunca han avanzado bajo el látigo de un cochero. Excesos, errores, sacrificios, así es la naturaleza de la revolución (...) Para conquistar esta fuerza, el partido debe lanzarse con todos sus medios hacia ese ‘movimiento elemental o semielemental’ a punto de evolucionar; no para contenerlo, sino para aprender a dirigirlo, para adquirir autoridad y fuerza en el mismo seno de la lucha”.²⁵⁵

La relación entre la huelga general y la revolución es muy estrecha. No todas las huelgas generales surgen de condiciones revolucionarias o desencadenan procesos revolucionarios, pero entre las huelgas económicas y las huelgas políticas no existe una muralla china, y, en determinadas condiciones, las primeras pueden convertirse en un movimiento revolucionario que cuestione los pilares del orden burgués. Esta es precisamente la lección que Rosa Luxemburgo trató de explicar exhaustivamente analizando la revolución rusa de 1905: “Los acontecimientos de Rusia nos muestran la huelga de masas como inseparable de la revolución. La historia de la huelga de masas en Rusia es la historia de la revolución rusa (...) Sólo en los períodos revolucionarios, cuando se resquebrajan los cimientos y los muros de la sociedad de clases, una acción política puede arrancar de la indiferencia, en pocas horas, a las capas del proletariado hasta entonces pasivas, lo que se manifiesta, naturalmente, a través de una batalla económica tormentosa. Repentinamente electrizados por la acción política, los obreros reaccionan de inmediato en el campo que les es más próximo: se sublevan contra su condición de esclavitud económica. (...) Es así cómo la revolución crea las condiciones sociales en las que es posible esta transformación directa de la lucha económica en la política y de la política en la económica, que encuentra su expresión en la huelga de masas.”²⁵⁶

La revolución, o mejor dicho su triunfo, no dependen sólo de la energía desplegada por las masas. La voluntad de lucha debe fundirse con una dirección revolucionaria, que difícilmente puede improvisarse en el curso del combate. Es cierto lo que Rosa Luxemburgo insistió en señalar: las revoluciones no pueden ser decretadas por ningún organismo dirigente. La justificación histórica de la dirección es prever la dinámica del proceso, avanzar el programa y las consignas, definir una táctica adecuada y ganar a las masas para la causa. Sólo una dirección que haya estudiado los problemas profundos de la historia del movimiento obrero; que haya asimilado las lecciones de sus derrotas, mucho más abundantes que las victorias; que se haya vinculado estrechamente, desde el período previo al estallido de la revolución, con lo mejor de esas masas y que haya demostrado su disposición a correr los riesgos más graves estará en condiciones de dirigir con posibilidades de éxito. Este fue el caso del bolchevismo, porque demostró, en la arena de la práctica, su superioridad política frente al resto de las tendencias.

EL INICIO DE LA REPRESIÓN

²⁵⁵ *El papel de las huelgas en una revolución*, en León Trotsky, *Escritos sobre la revolución española*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2010, p. 229.

²⁵⁶ Rosa Luxemburgo, *Huelga de masas, partido y sindicato*, pp. 59-61.

Aunque la revolución de Octubre tenía miles de partidarios en las filas de la CNT, los dirigentes de la facción que más se identificaba con el bolchevismo estaban lejos de haber asimilado su programa, estrategia y tácticas. La victoria de La Canadiense fue utilizada por estos sectores como un trampolín para continuar la batalla contra la patronal, sin considerar el cansancio natural que afectaba a los obreros y sin atender la tarea más importante: utilizarla para implantar un partido bolchevique entre las masas cenetistas. Los prejuicios antipolíticos, las tradiciones *putchistas* y el fetiche de la huelga general captaron de nuevo la voluntad de estos militantes revolucionarios. Confrontaron su posición con el sector sindicalista “puro”, en concreto con los esfuerzos de Salvador Seguí y otros líderes que querían poner fin al conflicto y concentrar las energías en reforzar la Confederación. Seguí tuvo que utilizar todos sus recursos dialécticos y todo el peso de su considerable autoridad política y moral.²⁵⁷

La huelga de La Canadiense también suscitó una dura controversia en el seno de la clase dominante. No todos estaban de acuerdo con las concesiones realizadas por el gobierno de Romanones: la insatisfacción era generalizada entre los empresarios y los militares veían en el acuerdo una capitulación. “La huelga de La Canadiense les había advertido de la fuerza potencial de la CNT —señala Meaker— y preferían darle la batalla sin mayor dilación. Fueron muchos los capitalistas que opinaron que era una cuestión de vida o muerte eliminar a la poderosa organización obrera antes de que alcanzara aún más poder (...) El plan del ejército y los patronos se afirmaba sobre una guerra virtual de exterminación destinada a liquidar los sindicatos en sus etapas formativas”.²⁵⁸

La provocación no tardó mucho en llegar. Miláns del Bosch se negó a poner en libertad a un grupo de obreros detenidos durante la huelga. La ira que esta decisión desató fue aprovechada por los grupos anarquistas para imponerse dentro de la CRT y forzar la convocatoria de una nueva huelga general para el 26 de marzo, una propuesta que no tenía en consideración el desgaste de los trabajadores, evidente tras los 44 días de huelga. Los anarquistas más intransigentes tampoco ampliaron el alcance de las reivindicaciones más allá de la libertad para los detenidos, algo que no contribuía a aumentar la cohesión del movimiento después de un combate tan prolongado.

En esta ocasión, la capitania general y la patronal aprovecharon a fondo la oportunidad para activar todos los mecanismos represivos, debilitar seriamente a la CRT y desmoralizar a los trabajadores. Fue la señal para el uso generalizado de las fuerzas parapoliciales del somatén, la antigua guardia rural, que llegó a encuadrar en sus grupos de choque a 8.000 miembros. El gran patrocinador y organizador del somatén fue la Lliga Regionalista, que lo utilizó para sabotear la huelga, perseguir a los sindicalistas con la amenaza de las armas y proteger las tiendas y comercios de la pequeña burguesía.

En las primeras jornadas, la huelga fue seguida de manera muy disciplinada y la actividad productiva de la capital catalana se detuvo en una proporción considerable. Pero a medida que pasaban los días el seguimiento fue disminuyendo bajo la represión policial y patronal. Para añadir más confusión, el gobierno de Romanones intentó desactivar el conflicto con la promulgación, el 3 de abril, del decreto de las 8 horas. Pero este gesto no bastó para parar una dinámica que había desbordado ya los intentos de conciliación, y a los pocos días Romanones fue sustituido por Maura. La opción de un enfrentamiento a gran escala con el movimiento sindicalista se abrió paso entre las fuerzas decisivas de la clase dominante. La situación de los trabajadores barceloneses era realmente complicada, dado que el desgaste hacía muy difícil mantener el pulso mucho tiempo más. Paradójicamente, en las filas cenetistas los que

²⁵⁷ En un mitin el 20 de marzo en la plaza de toros de Las Arenas, ante cerca de 20.000 trabajadores, Salvador Seguí logró convencer a la mayoría, ante las acusaciones y críticas de un grupo bastante amplio de anarquistas y anarcosindicalistas que se oponían a cualquier tipo de acuerdo.

²⁵⁸ Meaker, *op. cit.*, p. 224.

apreciaban con mayor claridad que la situación se estaba volviendo insostenible eran los dirigentes más moderados, los sindicalistas que ante todo querían preservar la fuerza organizada del movimiento sindical y que el 7 de abril llamaron a poner fin a la huelga. Al cabo de una semana, todos los huelguistas habían retornado al trabajo.

Como era de esperar, la derrota de la huelga permitió a la patronal, a la Lliga Regionalista y a las fuerzas militares que las respaldaban endurecer su ofensiva. La factura que le pasaron a la CNT fue la detención, entre mayo y agosto, de miles de sus militantes; muchos tuvieron que refugiarse en la clandestinidad. La idea de lanzar una batalla frontal para diezmar la CNT cobró fuerza entre la burguesía, que había comprendido a la perfección la envergadura de la amenaza que se cernía sobre ella: el ascenso revolucionario de 1918-19 y el dato de que solamente durante 1919 en la ciudad de Barcelona se habían perdido 3'25 millones de jornadas de trabajo en huelgas que implicaron a cerca de 156.000 trabajadores la convencería definitivamente de emplear todos los medios a su alcance, legales y extralegales, para ganar esa guerra de clases.

'TERCERISTAS' EN EL PSOE

El impacto de la revolución bolchevique en las filas de las organizaciones socialistas y anarcosindicalistas españolas culminó finalmente en el surgimiento del primer núcleo comunista, después de un proceso lleno de dificultades, numerosos reagrupamientos fraccionales y desencuentros.²⁵⁹

La percepción de la revolución rusa en las filas del PSOE estuvo mediatizada, inicialmente, por la ambigüedad calculada que en 1918 y 1919 manifestaron ante ella sus líderes tradicionales y más conocidos, ambigüedad determinada por las enormes simpatías pro-bolcheviques en la base militante del partido y de sus juventudes, y también entre una capa significativa de cuadros de primera fila. Dirigentes como Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Indalecio Prieto o Largo Caballero prefirieron orillar durante un tiempo cualquier pronunciamiento claro al respecto y centrar la actividad del partido en la contienda electoral de febrero de 1918, en la que el PSOE obtuvo resultados notables como ya señalamos: seis diputados (de los cuales cuatro estaban encarcelados por ser miembros del comité de huelga en agosto de 1917) y 144 concejales en 58 ayuntamientos.

Los primeros partidarios de la revolución soviética en el seno del PSOE iniciaron su campaña política poco tiempo después de su triunfo. Eran hombres y mujeres conocidos del socialismo español, como Virginia González, José Verdes Montenegro, Mariano García Cortés, Manuel

²⁵⁹ La historia de la formación del PCE y sus relaciones con la Internacional Comunista ha sido abordada en numerosos estudios. No obstante, hay mucho material que distorsiona y tergiversa las fuentes, para ajustarse a la historia oficial que el estalinismo creó posteriormente. En cualquier caso, sí existen trabajos rigurosos. Citamos algunos aunque se encuentren hace tiempo agotados y descatalogados: Gerald H. Meaker, *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*, Ed. Ariel, Barcelona, 1978, uno de los libros más documentados y sistemáticos de la historia del período formativo del comunismo español y que, por razones imposibles de entender, está descatalogado desde hace más de treinta años. Pelai Pagès, *Historia del PCE desde su fundación hasta 1930*, Ediciones Ricou (Hacer), Barcelona, 1978. Manuel Tuñón de Lara, *El movimiento obrero en la historia de España*, Ed. Sarpe, Madrid, 1985. Joan Struch, *Historia del PCE (1920-1939)*, El Viejo Topo, Barcelona, 1978. Andrew Ch. Durgan, *Bloque Obrero y Campesino (1930-1936)*, Ed. Alertes, Barcelona, 1966. Pelai Pagès, *El movimiento trotskista en España (1930-1935)*, Ed. Península, Barcelona, 1977. Juan Andrade, *Apuntes para la historia del PCE*, Ed. Fontamara, Barcelona, 1979. Una visión estalinista de la historia del PCE se puede encontrar en Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo, *Queridos Camaradas. La Internacional Comunista y España (1919-1939)*, Ed. Planeta, Barcelona, 1999.

Cordero, Ramón Almoneda, Núñez Arenas o García Quejido. En agosto de 1918 iniciaron la publicación del periódico *Nuestra Palabra*, cabecera tomada del periódico editado por Trotsky en París (*Nashe Slovo*), que se convirtió en la tribuna pública de los *terceristas*, como se conoció a los pro-bolcheviques en las filas del partido.²⁶⁰ Su actividad durante el otoño de 1918 y la primavera de 1919 se centró en la propaganda y la solidaridad con la revolución rusa, organizando numerosos mítines y actos, como la manifestación promovida por la Agrupación Socialista de Madrid el 1º de mayo de 1919, cuando una multitud considerable desfiló desde la plaza de Isabel II hasta la puerta de Alcalá con repetidos gritos de “¡Viva Rusia!”. El apoyo a la revolución bolchevique se vio reforzado por la honda decepción que provocaron el armisticio y la firma del tratado de Versalles.²⁶¹

Los terceristas también plantearon una amplia crítica de aspectos fundamentales de la política del partido, empezando por los pactos con los republicanos burgueses y la teoría de la revolución por etapas. Intentaron aplicar en el PSOE lo que consideraban eran los principios del bolchevismo. Cándido Val, en nombre de los jóvenes socialistas madrileños, reflejaba bien el empuje de la nueva orientación: “Deseamos que se haga en España una revolución esencialmente socialista, exclusivamente del pueblo y para el pueblo. Estamos en contra de toda la burguesía, roja o azul (...) una república burguesa no satisface nuestras aspiraciones”.²⁶² Era evidente que el enfrentamiento doctrinal no sólo se derivaba de los acontecimientos exteriores: la fuerte presión de la lucha de clases y la pasividad de la dirección del partido durante el trienio bolchevique actuaron como catalizadores de una oposición cuya influencia crecía día a día.

Para neutralizar a los terceristas, los dirigentes reformistas del PSOE, al igual que los de otros partidos de la Segunda Internacional, recurrieron a un discurso centrista: la revolución estaba bien para Rusia... pero la aplicación del programa, la estrategia y las tácticas leninistas en España estaba fuera de lugar. Una cosa era mostrar simpatías hacia la revolución rusa, para no perder apoyo entre unas bases cada vez más favorables a ella, y otra muy diferente adoptar de manera consecuente la política bolchevique.²⁶³

²⁶⁰ Pelai Pagès, *Historia del PCE desde su fundación hasta 1930*. Ediciones Ricou (Hacer), Barcelona, 1978, p. 17.

Hubo otras publicaciones terceristas que aparecieron en aquel período, como la revista *El Sóviet*, de diciembre de 1918, *La chusma encanallada*, editada por algunos suboficiales expulsados del ejército, *La Batalla*, editada en Asturias, y especialmente el semanario *La Internacional*, animado por veteranos militantes socialistas como Núñez Arenas y García Quejido.

²⁶¹ Los dirigentes socialistas en torno a Besteiro, Largo Caballero y Pablo Iglesias habían manifestado el mismo seguidismo que sus colegas de la dirección de la Segunda Internacional hacia el presidente estadounidense Wilson, calificando de triunfo de la democracia la propuesta de organizar la Liga de las Naciones. Pero esta actitud contrastaba con el sentimiento de decepción y hostilidad que entre una buena parte de los militantes del partido y las juventudes habían provocado las draconianas condiciones del tratado de Versalles. Como escribió Torralba Beci en *El Socialista*, no era “la paz de los pueblos, la paz del derecho y de la reconciliación”, sino más bien una paz inicua y peligrosa, un arreglo capitalista e imperialista que producía una “terrorífica visión de nuevas guerras” (Meaker, *op. cit.*, p. 279).

²⁶² *El Sol*, 11/11/1918.

²⁶³ “Dirigentes como Besteiro, Largo Caballero y Prieto participaron cuando menos en alguno de los mítines pro-bolcheviques invocando los nombres de Luxemburgo y Liebknecht, martirizados, y ocasionalmente insertaron vivas a la Rusia soviética” (Meaker, *op. cit.*, p. 173). El XI Congreso del PSOE (24 de noviembre al 3 de diciembre de 1918) vivió una controversia importante sobre la colaboración ministerial en un posible gobierno republicano y un intenso debate sobre la cuestión agraria. La propuesta de disolver la coalición republicano-socialista fue rechazada, pero el congreso también demostró la confusión reinante en las filas socialistas y las cautelas que tenían que adoptar los dirigentes socialistas: “Con respecto al régimen bolchevique, todos los delegados del PSOE se sintieron ahora capaces de unirse en un emocionado saludo a la revolución rusa, como ‘el triunfo del espíritu revolucionario del proletariado’, y en la resolución protestando contra toda intervención en la república soviética. Con igual presteza, la mayoría de los delegados coincidieron en apoyar la Liga de las Naciones propuesta por el presidente Wilson. El congreso concluyó con una declaración de fe

El influjo de la radicalización del movimiento obrero no dejaba de penetrar en las filas socialistas, y éste era terreno abonado para las simpatías hacia el bolchevismo. Los intentos de la dirección por reconducir la situación se sucedieron. En nombre de la UGT y el PSOE, Largo Caballero y Julián Besteiro participaron en las reuniones de reconstrucción de la Internacional Socialista y de la Internacional Sindical de Ámsterdam, con el afán de presentar una alternativa viable para que el partido permaneciese en la vieja casa. Pero la fundación de la Internacional Comunista en marzo de 1919 dio nuevos bríos a las tendencias favorables a ella en el seno del partido, en paralelo al aumento de la desconfianza y de las críticas más amargas hacia la Segunda Internacional. La dirección socialista no pudo aplazar por más tiempo el debate.

El primer congreso extraordinario para discutir sobre la afiliación internacional del PSOE fue convocado para el mes de diciembre de 1919, en una atmósfera realmente difícil para la dirección. En septiembre, la poderosa Agrupación Socialista de Madrid se había pronunciado a favor de la disolución de la alianza con los republicanos, a pesar de la vehemente oposición de Largo Caballero; en octubre, los socialistas asturianos habían organizado un congreso especial en Oviedo que manifestó un gran entusiasmo pro-bolchevique. No fueron los únicos signos de que la situación se les estaba escapando de las manos a los viejos dirigentes reformistas.

El apoyo a los bolcheviques cristalizó con rapidez en las Juventudes Socialistas. “La revolución rusa y la fundación de la Tercera Internacional —señala Juan Andrade— produjeron una profunda transformación en el seno de las Juventudes Socialistas, principalmente en Madrid. La Juventud Socialista de Madrid había estado integrada hasta entonces principalmente por hijos de militantes socialistas, impregnados del espíritu reformista del partido, viviendo en el culto paternalista del ‘Abuelo’ (Pablo Iglesias). La revolución rusa y el entusiasmo que despertó en el porvenir del proletariado internacional dio lugar a que se incorporasen a la Juventud numerosos jóvenes obreros, no ligados con el pasado, ajenos al espíritu familiar que reinaba en la Juventud Socialista hasta entonces y que, preocupados por los problemas que planteaba la Tercera Internacional, se entregaron a estudiarlos para aplicarlos a la situación concreta en España”.²⁶⁴ Muchos líderes de la federación juvenil y numerosos militantes de base se convirtieron en firmes partidarios del grupo *Nuestra Palabra*, un apoyo que aumentó también gracias a la actividad del Grupo de Estudiantes Socialistas de Madrid, fundado poco antes de la huelga de agosto de 1917 por jóvenes radicalizados de clase media.²⁶⁵

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS Y EL BOLCHEVISMO

El congreso extraordinario del PSOE tuvo lugar en la Casa del Pueblo de Madrid del 10 al 15 de diciembre de 1919, coincidiendo con otro congreso de enorme trascendencia, el de la CNT

republicana, unánimemente aprobada, en la cual se afirmaba que no podía esperarse bajo la monarquía ninguna reforma fundamental” (*Ibid.*, p. 178).

²⁶⁴ Juan Andrade, *Apuntes para la historia del PCE*, Ed. Fontamara, Barcelona, 1979, p. 21.

²⁶⁵ En toda Europa, la revolución rusa arrastró a sectores de la pequeña burguesía, especialmente a la intelectualidad radicalizada. En el Estado español, no pocos elementos destacados de los círculos republicanos burgueses y pequeñoburgueses, especialmente intelectuales, periodistas y escritores, manifestaron su entusiasmo por los acontecimientos revolucionarios de Rusia. Entre la juventud estudiantil, tradicional bastión de la reacción, la enorme fuerza que el movimiento obrero demostró en aquellos años atrajo a su causa a numerosos estudiantes de capas medias.

en el teatro de la Comedia de la misma capital. Ambos congresos se desarrollaron en un ambiente de apoyo a la revolución bolchevique, aunque indudablemente la temperatura era bastante más elevada en el cenetista, donde no hubo una oposición reformista tan clara como la del cónclave socialista.

La sesión principal del congreso del PSOE estuvo dominada por las intervenciones de los líderes veteranos, sobre todo Besteiro. En sintonía con la táctica predominante en los círculos dirigentes de muchos de los partidos europeos de la Segunda Internacional, el líder más cualificado del ala derecha pronunció un discurso marrullero para aplacar a los delegados izquierdistas, con constantes elogios a la revolución rusa. En su calculada maniobra, Besteiro llegó a manifestar su creencia de que los principios que gobernaban la conducta de los bolcheviques eran “exactamente los mismos principios que deben inspirar las actividades de todos los militantes de la [Segunda] Internacional” e incluso afirmó que la dictadura del proletariado era “indispensable” para el triunfo del socialismo. Pero obviamente se trataba de un truco dialéctico: las consideraciones de Besteiro sobre la dictadura del proletariado eran condicionales, no se podían aplicar *indiscriminadamente*, y mucho menos en España, donde la estrategia de la revolución por etapas seguía siendo, para el astuto retórico, completamente válida y la única posible. Llegados a este punto, Besteiro retomó las ideas de Kautsky adaptándolas al lenguaje corriente de los dirigentes socialistas españoles: la meta de la revolución socialista era la democracia parlamentaria, y en todo caso “la ‘dictadura del proletariado podía ser simplemente un parlamento poderoso dominado por los trabajadores’”.²⁶⁶

Las argucias de parlamentario afloraron con destreza en el discurso de Besteiro. No contento con el contrabando político anterior, intentó convencer al auditorio de que la mejor manera de defender la revolución rusa era fortalecer la Segunda Internacional. Otros líderes de la vieja escuela no se anduvieron por las ramas y se inclinaron sin ambigüedad por un choque frontal con los terceristas. Fue el caso de Indalecio Prieto, que en su discurso acusó a los terceristas de veleidades típicas de los intelectuales. Las intervenciones de los delegados probolcheviques se centraron en las cuestiones fundamentales: denunciaron el papel de la Segunda Internacional durante la guerra mundial y la continuidad de su política de colaboración de clases con su apoyo vergonzoso a la Liga de las Naciones, criticaron la visión parlamentarista de la transformación socialista, defendieron la dictadura del proletariado no como una fórmula rusa, sino como parte del programa del socialismo y, por supuesto, la afiliación del PSOE a la nueva internacional.

El enconamiento del debate colocó a los delegados, por primera vez, ante la posibilidad real de una escisión del partido, una perspectiva que aturdió a los veteranos líderes reformistas, pero que también causaba una profunda impresión en la mayoría de los dirigentes terceristas, que no se inclinaban por tal salida en ese momento. En definitiva, en aquel ambiente de temor, los dirigentes de ala derecha llegaron a un acuerdo entre bastidores para presentar una resolución de permanencia en la Segunda Internacional incluyendo, eso sí, una serie de cláusulas “de seguridad” para hacer más aceptable la propuesta: se exigía la depuración de los elementos “cuya conducta no se hubiera ajustado a lo que los principios socialistas demandan” y se llamaba a adoptar “las medidas necesarias para lograr la fusión en un solo organismo de las secciones afiliadas actualmente a la Segunda y Tercera internacionales”. La resolución presentada fue aprobada por 14.000 votos (los delegados representaban a las agrupaciones) contra 12.497. Para Gerald H. Meaker, ese estrecho margen y el hecho de que no se realizará una votación directa en torno a la cuestión de la afiliación a la Internacional Comunista “sugiere que en una lucha limpia entre la Segunda y la Tercera Internacional, ésta

²⁶⁶ Meaker, *op. cit.*, p. 301.

hubiera triunfado fácilmente”.²⁶⁷ Hay también otros elementos que refuerzan esta idea, y es que el congreso, a pesar de las intervenciones en contra de Besteiro, Largo Caballero e Indalecio Prieto, aprobó por 14.435 votos contra 10.040 la propuesta de los terceristas de disolver la alianza que el PSOE mantenía desde 1910 con los republicanos.

El congreso no cerró, ni mucho menos, la cuestión de la afiliación internacional del PSOE. La decisión de permanecer en la vieja internacional no hizo desaparecer la insatisfacción que sentía la base del partido, y aceleró la escisión en la organización socialista que con más entusiasmo había acogido el triunfo de Octubre y el llamado a construir una nueva internacional revolucionaria: la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas (FNJS).

En su V Congreso (diciembre de 1919), las Juventudes Socialistas decidieron no respetar la decisión del congreso del partido y adherirse a la Internacional Comunista. Y no sólo eso: una mayoría de sus dirigentes, altamente refractarios al reformismo parlamentarista y a las maniobras burocráticas del aparato del partido, y muy críticos también con lo que consideraban vacilaciones y tendencias conciliadoras de la fracción tercerista, planearon la formación del Partido Comunista. Este paso cobró fuerza en enero de 1920 con la llegada a Madrid de tres delegados de la IC, entre ellos Michael Borodin y M. N. Roy (futuro fundador del Partido Comunista de la India). Borodin mantuvo entrevistas con destacados dirigentes terceristas del PSOE y con representantes del Comité Nacional de la FNJS. La propuesta de los delegados de la IC de constituir el Partido Comunista fue aceptada con entusiasmo por los representantes de la FNJS, que decidieron hacerlo lo antes posible.

Así fue cómo el Comité Nacional de la FNJS, a través de una circular que se tendría que dar a conocer a la organización en las reuniones programadas a tal efecto para el 15 de abril de 1920, hizo pública su decisión: la Federación Nacional de las Juventudes Socialistas se convertía en el Partido Comunista Español un año antes de que los terceristas del PSOE se decidieran finalmente a dar el paso. El nuevo partido, a pesar de la voluntad y el entusiasmo de sus promotores, no cosechó el apoyo esperado: de los 5.000 afiliados que se calcula tenía la FNJS en esos momentos, no más de mil se adhirieron al PCE, cuyo núcleo más activo estaba en Madrid. La oposición de los líderes terceristas del PSOE a un paso que consideraban prematuro y que, en su opinión, no debería darse sin lograr el apoyo de la mayoría de la militancia socialista también creó dificultades, como que la mayoría de los jóvenes socialistas de Asturias y Vizcaya no siguieran a su dirección nacional aunque eran proclives a la IC. Estos hechos avivaron los enfrentamientos y las recriminaciones entre los terceristas del partido y los jóvenes dirigentes del PCE, que no hicieron más que aumentar en intensidad en los dos años siguientes.

La base del PCE estaba compuesta mayoritariamente de jóvenes obreros, aunque en la dirección predominaban los que provenían de la intelectualidad de clase media. El Comité Nacional quedó constituido como sigue: secretario general del partido, Ramón García Merino, maestro de escuela; secretario adjunto, Luis Portela, tipógrafo; vocales, José Illescas, Eduardo Ugarte, Emeterio Chicharro, Ricardo Marín, Rito Esteban, Tiburcio Picó y Juan Andrade, que fue designado director de *El Comunista*, el órgano de expresión del partido.²⁶⁸ Enfrentados a la presión y la presencia abrumadora de un fuerte movimiento anarcosindicalista de masas y un PSOE que, al menos por el momento, se mantenía unido, los jóvenes dirigentes comunistas empezaron a mostrar signos de una clara deriva ultraizquierdista, al menos de un marcado antiparlamentarismo, que se convirtió en su seña de identidad por un período prolongado. Algunos de sus dirigentes más cualificados, como Juan Andrade, se identificaron inmediatamente con las posiciones mantenidas en el interior de la Internacional Comunista por los izquierdistas holandeses (Anton Pannekoek y H.

²⁶⁷ *Ibid.*, p. 306

²⁶⁸ Juan Andrade, *op. cit.*, p. 26.

Gorter), italianos (Amadeo Bordiga), los comunistas vieneses o los dirigentes del Partido Comunista Obrero Alemán (KAPD), con los que Lenin y Trotsky mantuvieron agrias polémicas en el II Congreso de la IC.

Las limitaciones y el aislamiento no rebajaron el entusiasmo de estos pioneros del comunismo español por construir el nuevo partido. A lo largo de 1920 se dedicaron con tenacidad a organizarlo, intentando establecer, a pesar de la hostilidad manifiesta del aparato ugetista, vínculos con los sindicatos²⁶⁹ y realizando una intensa labor de propaganda.

HACIA EL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

El ascenso de las luchas y la politización creciente de la clase obrera y la juventud no sólo permitió a los anarcosindicalistas extender su radio de acción y aumentar su afiliación a niveles históricos, también las organizaciones socialistas experimentaron un crecimiento importante. En la primavera de 1920, el PSOE tenía en torno a 53.000 afiliados y la UGT, 211.000. Es muy significativo que el apoyo a los terceristas creciese en Vizcaya y Asturias, bastiones proletarios del movimiento socialista. A pesar de que en ambas zonas el aparato ugetista era muy fuerte, muchos mineros y metalúrgicos socialistas fueron ganados para la causa de la revolución rusa y la Internacional Comunista. Este hecho revelaba que los intentos desesperados de la dirección reformista del PSOE por evitar el apoyo a las tesis bolcheviques chocaban con una lucha de clases cada vez más polarizada y explosiva.

Tras la escisión de la FNJS, los acontecimientos no hicieron más que aumentar la presión a favor de la Internacional Comunista. La dirección del PSOE se vio forzada a convocar un nuevo congreso extraordinario para el 19 de junio de 1920, pero en esta ocasión la correlación de fuerzas le fue claramente desfavorable. Cuando en el plenario se votó la permanencia en la Segunda Internacional, se levantaron menos de una docena de manos. El ambiente entre los líderes reformistas era de pesimismo y amargura. Fabra Rivas y Besteiro continuaron sus maniobras para impedir un giro tercerista definitivo y abogaron por la afiliación del partido a la Internacional Segunda y Media.²⁷⁰ Largo Caballero pronunció un discurso sin convicción. Finalmente, y ante la fuerte presión de los delegados, se acordó el ingreso en la Internacional Comunista por 8.269 mandatos a favor, 5.016 en contra y 1.615 abstenciones, pero, como en ocasiones anteriores, la dirección logró desnaturalizar el resultado de la votación a través de una maniobra: la decisión definitiva se tomaría tras un conocimiento detallado de las famosas veintiuna condiciones de adhesión exigidas por el II Congreso de la IC.²⁷¹ Para llevar a cabo el acuerdo, se trasladaría a Moscú una delegación

²⁶⁹ Lograron ganar una audiencia en la huelga de los metalúrgicos madrileños de finales del año gracias a José Illescas, uno de los fundadores del partido, que fue elegido secretario del comité de huelga. Los intentos por conquistar una base en el movimiento obrero se extendieron a los sindicatos de la CNT, para lo cual enviaron delegados en tareas de propaganda a Barcelona, Zaragoza y Valencia.

²⁷⁰ La Internacional Segunda y Media fue fundada en 1921 por partidos y grupos centristas, como el USPD alemán, que, bajo la presión del ambiente revolucionario entre las masas, habían roto con la Segunda Internacional. La conferencia aprobó una resolución que aplaudía la revolución en Rusia, Alemania y Hungría, a la par que condenaba la dictadura del proletariado y elogiaba la democracia burguesa. Aunque criticaban a la Segunda Internacional, no tenían con ella diferencias políticas esenciales porque su misión principal era intentar frenar la creciente influencia comunista entre los trabajadores. En mayo de 1923, dos meses después del cierre del período revolucionario abierto en 1918 en Alemania, ambas se reunificaron.

²⁷¹ Bajo la presión de los acontecimientos, viejos líderes reformistas y pacifistas solicitaron su ingreso formal en la IC. La amenaza de infiltración de las viejas tendencias oportunistas en las filas de la nueva organización era grande. El II Congreso (1920) la intentó contrarrestar con la aprobación de 21 condiciones para la afiliación a la

formada por Daniel Anguiano, en representación de los terceristas, y Fernando de los Ríos, por los defensores de la Segunda. El avance de las posiciones pro-bolcheviques quedó sancionado, no obstante, con elección de un comité ejecutivo dominado por los terceristas.

El golpe recibido por la dirección fue muy duro. Sus constantes maniobras no conseguían frenar el apoyo creciente a las tesis comunistas entre la base socialista, ni tampoco entre los cuadros. Para contrarrestar los efectos de la decisión del congreso, el ala reformista decidió atrincherarse en el otro componente del movimiento socialista, donde eso todavía era posible, la UGT. El congreso de UGT, celebrado a finales de junio y dominado abrumadoramente por el aparato, se pronunció inequívocamente contra la entrada en la IC (17.919 mandatos a favor y 110.902 en contra). El congreso también estimó que no se podía caracterizar la situación social del país de crisis prerrevolucionaria, con las consecuencias tácticas y estratégicas que ello tenía. Las tendencias reformistas en la dirección ugetista durante ese período convulso presagiaban lo que ocurriría unos años más tarde, durante la dictadura de Primo de Rivera.

La socialista no fue la única delegación española al II Congreso de la Internacional Comunista. Otras dos coincidieron en Moscú con los delegados socialistas: una de la CNT, encabezada por Ángel Pestaña, y otra del joven PCE, con Ramón García Merino al frente, aunque sólo los cenetistas llegaron a tiempo para participar en las sesiones congresuales. Tras entrevistarse con los líderes bolcheviques, incluido Lenin, los delegados socialistas no cambiaron en nada sus puntos de vista previos. A su vuelta, y tras dar un informe en el Comité Nacional del PSOE, se decidió convocar un nuevo congreso extraordinario del 9 al 13 de abril de 1921, que sin duda fue el más agrio y tumultuoso de todos los celebrados hasta la fecha, pues no en vano las decisiones a adoptar tenían una trascendencia histórica.

La importancia del momento movilizó todas las energías y recursos de los dirigentes reformistas. Todo valió para generar una atmósfera de miedo hacia la escisión, especialmente la utilización de la autoridad moral y personal de los iconos socialistas. Pablo Iglesias, gravemente enfermo, publicó numerosos artículos en la prensa del partido contra la escisión, llegando a plantear en alguno que la afiliación a la IC supondría en la práctica la disolución del partido y que las cárceles se llenasen de militantes socialistas; también envió una carta a los delegados calificando de “dictatoriales” las 21 condiciones. Las agrupaciones con más peso, por su número de militantes y tradición histórica, también se movilizaron: la de Madrid se pronunció a favor de la Internacional Segunda y Media por 243 votos frente a 147 favorables a la Comunista. Por el contrario, en Asturias y en Vizcaya, el apoyo a ésta fue muy mayoritario.

La extrema polarización del congreso se reflejó en la vehemencia de los discursos pronunciados. Las 21 condiciones centraron la controversia. El ala reformista planteó que su aceptación implicaría la expulsión de todos aquellos militantes que votasen contra ellas. Recurriendo al chantaje emocional, aseguraron que también Pablo Iglesias, el fundador del partido, sería expulsado. El discurso de Largo Caballero fue claro y conciso: “He sido siempre caracterizado como reformista, y no estoy avergonzado de esto, pero sí me avergonzaría de hacer declaraciones revolucionarias y luego en la práctica ser un oportunista o un arribista”. Largo Caballero se pronunció contra las 21 condiciones y afirmó: “No las

Internacional Comunista, en las que se criticaba el socialpacifismo de los centristas y se exigía una ruptura tajante con el programa de los imperialistas estadounidenses (el desarme, la Liga de las Naciones...). El congreso también ratificó su posición contra el régimen interno de la Segunda Internacional y las relaciones diplomáticas de aparato, que hacían de la internacional una federación de partidos autónomos que les permitía actuar en abierta contradicción entre ellos ante hechos trascendentales de la lucha de clases. La nueva internacional se construyó como un partido mundial, sobre la base de un programa y una acción comunes y los métodos del centralismo democrático. Como era de esperar, muchos de los centristas y conciliadores a quienes el II Congreso impidió afiliarse mostraron su auténtico carácter e intenciones uniéndose a la Internacional Segunda y Media.

acepto, no votaré por ellas. Y, en consecuencia, como no dejaré el partido, seré expulsado de él".²⁷² Las posiciones terceristas fueron defendidas por Virginia González, el asturiano Isidoro Acevedo y el joven Ramón Lamonedá, que pronunció el último discurso del congreso. En la votación, los partidarios de la Internacional Segunda y Media triunfaron por un margen pequeño: 8.807 mandatos frente a los 6.094 favorables a la Internacional Comunista.

La ruptura era un hecho. Las fuerzas de los terceristas, como las votaciones dejaban claro, eran sólidas y sus filas contaban con dirigentes históricos, entre ellos un reconvertido Óscar Pérez Solís, que realizó una transición fulgurante desde la derecha del partido a la izquierda comunista. Nada más conocerse el resultado, Pérez Solís, en nombre de los terceristas, leyó el manifiesto que explicaba las razones políticas de la ruptura, y 34 delegados abandonaron la sala, la mayoría representantes de las agrupaciones de Asturias, Vizcaya y Madrid. Reunidos inmediatamente en la Escuela Nueva, proclamaron el nacimiento del Partido Comunista Obrero Español (PCOE).

Durante el siguiente año y medio, los dos partidos comunistas existentes (el PCOE y el Partido Comunista Español) mantuvieron agrios enfrentamientos y una difícil coexistencia. Los jóvenes del PCE no lograban expandirse y sus planes de penetración en el movimiento sindical no dieron los frutos esperados. Además, sus intentos por arraigar en los sindicatos de la CNT y su decidido apoyo a las huelgas convocadas por ésta les acarrearón la inmediata represión gubernamental.

Los intentos de unificar ambos partidos, iniciados en la primavera de 1921, acabaron en fracaso. En consecuencia, los dos enviaron su respectiva delegación al III Congreso de la IC, cuyo comienzo estaba fijado para el 22 de junio de ese año, a las que se sumaría una tercera compuesta por sindicalistas comunistas de la CNT, de la que formaban parte Joaquín Maurín y Andreu Nin. Nada más acabar el congreso, los dirigentes de la Internacional retomaron la cuestión de la unidad comunista, acordándose promover la pronta unificación de los dos partidos. Las discusiones comenzaron en noviembre, ya de regreso en España, bajo los auspicios del delegado de la Internacional, Antonio Graziadei.

En aquellas fechas, el PCOE podría rondar los 4.500 militantes, con una influencia importante en los sindicatos de la UGT, mientras el PCE contaría con unos 2.000 miembros. Pero a pesar de todos los esfuerzos, la pugna entre ambos partidos se prolongó durante meses, alimentada por las tendencias ultraizquierdistas de algunos de los líderes del PCE, como Andrade y Ugarte, aunque otros de sus dirigentes, como Merino Gracia, el secretario general, oscilaron hacia las posiciones del PCOE. En abril de 1922 llegó otro delegado del comité ejecutivo de la IC, el suizo Jules Humbert-Droz, con la intención de resolver definitivamente la disputa. Finalmente, ambos grupos se unificaron en un congreso celebrado del 14 al 19 de marzo de 1922, dando vida al Partido Comunista de España.

LOS ANARCOSINDICALISTAS Y LA TERCERA INTERNACIONAL

Numerosos sectores del sindicalismo revolucionario y anarcosindicalista, que habían repudiado la política colaboracionista de los líderes de la Segunda Internacional, se sintieron poderosamente atraídos por el triunfo revolucionario de Octubre y la política del bolchevismo. En Francia, un importante grupo de estos sindicalistas revolucionarios,

²⁷² Meaker, *op. cit.*, p. 470.

encabezados por Monatte y Rosmer²⁷³, que habían mantenido una posición internacionalista durante la guerra, se adhirió a la Tercera Internacional, ocupando un papel dirigente en el Partido Comunista Francés durante sus primeros años. En Gran Bretaña, muchos delegados obreros (Shop Steward) se acercaron a los bolcheviques y un buen número de ellos engrosaron las filas del Partido Comunista británico. Este también sería el caso de los IWW en EEUU.²⁷⁴

La publicación y posterior traducción al alemán y francés de la obra de Lenin *El Estado y la revolución* tuvo un gran impacto en estos círculos. “Las tesis teóricas y prácticas de Lenin sobre la realización de la revolución —escribía, en septiembre de 1919, el anarquista alemán Eric Musham desde la fortaleza de Augsbach, donde estaba prisionero— han dado a nuestra acción una nueva base. Ya no hay obstáculos inseparables para la unificación del proletariado revolucionario entero. Los anarco-comunistas, ciertamente, han tenido que ceder en el punto de desacuerdo más importante entre las dos grandes tendencias del socialismo; han debido renunciar a la actitud negativa de Bakunin ante la dictadura del proletariado y rendirse en ese punto a la opinión de Marx (...) Yo espero que los camaradas anarquistas que ven en el comunismo el fundamento de un orden social justo seguirán mi ejemplo”.²⁷⁵

Los anarcosindicalistas españoles no escaparon a esta influencia: “El impacto ideológico de la revolución bolchevique entre los anarcosindicalistas fue decisivo. Entre estos militantes, menos doctrinarios y de mentalidad más tenaz que los anarquistas ‘puros’, el prestigio de los bolcheviques logró poner en cuestión hasta el mito central cenetista de la espontaneidad revolucionaria y suscitó su jacobinismo latente. Durante un período de casi tres años mostrarían una preocupación más realista que en el pasado por los problemas del poder y de la organización revolucionaria. Sin embargo, no dejaron de ser anarquistas por su temperamento básico y se cuidaron de seguir teniendo un pie puesto en los grupos anarquistas hasta cuando se lanzaban a la actividad sindical o cuando alababan en sus escritos al bolchevismo (...) durante 1919-1920 continuaron hablando con sorprendente franqueza de la necesidad de la organización revolucionaria y de una dictadura transitoria”.²⁷⁶

En el II Congreso de la CNT, celebrado en diciembre de 1919 en Madrid en el teatro de La Comedia, y que contó con más de 400 delegados, el apoyo a la Internacional Comunista y la revolución rusa era mayoritario, apoyo que se vio favorecido por el enfrentamiento entre los anarcosindicalistas “puros” y los sindicalistas de inclinaciones más reformistas. El balance de la huelga de La Canadiense y el recrudecimiento de la represión habían abierto un surco profundo en las filas cenetistas. Esta disputa estuvo permanentemente en el centro de los debates. La tensión alcanzó también un grado importante cuando se abordó la cuestión de la unidad con la UGT, incluida la posibilidad de fusión,²⁷⁷ defendida por los delegados

²⁷³ Alfred Rosmer fue un destacado sindicalista revolucionario francés ganado al bolchevismo que jugó un importante papel en los primeros años de la IC, siendo miembro de su comité ejecutivo. Dejó testimonio de ese período y de la evolución de muchos cuadros anarquistas al comunismo, en su bien documentado libro *Moscú bajo Lenin* (Ed. Era, México DF, 1982). Rosmer no fue el único en abrazar, desde el sindicalismo revolucionario o el anarquismo, las ideas bolcheviques. Otro ejemplo fue Victor Serge, que inmortalizó los primeros meses de la revolución en una gran obra, *El año I de la revolución rusa* (Siglo XXI Editores, México).

²⁷⁴ IWW (Industrial Workers of the World) fue una organización obrera intergremial que dirigió exitosamente huelgas masivas y combatió la política de colaboración de clases de los líderes reformistas de la AFL (Federación Americana del Trabajo). Aunque poseía rasgos anarcosindicalistas (negaba la lucha política y renunció a actuar entre los miembros de la AFL), algunos de sus dirigentes, como G. Haywood, apoyaron la revolución de Octubre e ingresaron en el PC estadounidense.

²⁷⁵ Publicado en *Bulletin Communiste*, 22/7/1920, citado en Alfred Rosmer, *Moscú bajo Lenin*, Ed. Era, México DF, 1982, p 60.

²⁷⁶ Meaker, *op. cit.*, p. 292 .

²⁷⁷ A finales del verano de 1918, el comité nacional de UGT, respondiendo a la presión de los terceristas, intentó llegar a un entendimiento con la CNT para conseguir “lo antes posible la fusión de todas las fuerzas laborales

asturianos y que contaba con el apoyo velado de Salvador Seguí y Ángel Pestaña. El rechazo a la misma fue encabezado por Enrique Valero, del Sindicato de la Construcción de Barcelona, quien presentó una resolución muy dura logrando el apoyo mayoritario de los delegados.

En ese congreso, la CNT se encontraba en su apogeo, con una afiliación que superaba los 700.000 miembros. Como organización de masas del proletariado, el impacto de la revolución rusa tuvo el efecto de un terremoto: sus cimientos ideológicos sufrieron una sacudida tremenda. Ningún otro acontecimiento conmovió de forma tan notoria los principios doctrinales sobre los que se asentaba la tradición cenetista como lo hizo el bolchevismo. El congreso del teatro de la Comedia fue un claro testimonio. Según Antonio Bar, “en contra de todo lo que se pudiera pensar, fueron precisamente los sectores anarquistas los que, defendiendo la revolución rusa, defendieron también arduamente no sólo la concepción, sino la realización de la dictadura del proletariado, como uno de los elementos imprescindibles del proceso revolucionario”. El dirigente anarcosindicalista Buenacasa, reconoció posteriormente que la “inmensa mayoría de nosotros se consideraban a sí mismos, auténticos bolcheviques”²⁷⁸ Eusebio Carbó, más tarde miembro del Secretariado de la AIT, la internacional anarquista, se interrogaba en el congreso: “¿Somos enemigos de la dictadura? Desde el punto de vista de los principios, sí; desde el punto de vista de la realidad apremiante, inaplazable, no. (...) Nosotros justificamos la dictadura (...) la queremos, si ella ha de servir para establecer en el mundo, de un modo definitivo, el imperio de la justicia; por eso, nosotros admiramos y queremos la dictadura del proletariado”.²⁷⁹

En el debate sobre la Internacional Comunista, los delegados intransigentes fueron sus más ardientes defensores. Sin duda alguna, la hostilidad de los dirigentes ugetistas y socialistas hacia ella jugó su papel. Pero el factor decisivo fue la enorme conexión de la revolución bolchevique con la conciencia de la militancia revolucionaria de la CNT. Ese era el imán, la auténtica fuerza que movía las simpatías de miles de activistas y trabajadores anarcosindicalistas. Por fin, la propuesta de afiliación a la IC, presentada por el delegado valenciano Hilario Arlandis, carpintero ex anarquista y uno de los pocos que sí habían asimilado el ideario bolchevique, fue aprobada por abrumadora mayoría. Pero, a pesar del entusiasmo de los presentes, la decisión no era un cheque en blanco: la resolución también declaraba que la CNT era firme defensora de los principios sostenidos por Bakunin y, sobre todo, que la adhesión a la IC tenía un carácter provisional y se mantendría hasta el momento en que se pudiese celebrar en España un congreso que estableciera los principios de una nueva internacional obrera. En la práctica, la resolución era una fórmula de compromiso entre quienes querían una adhesión incondicional y los sindicalistas “puros” que, como Salvador Seguí, eran moderadamente favorables a la misma, pero recelaban abiertamente de los objetivos revolucionarios de la IC. El congreso designó a Ángel Pestaña, Salvador Quemades y Eusebio Carbó para asistir al II Congreso de la Internacional Comunista.

Las enormes ilusiones de la base y de gran parte de sus dirigentes en la revolución de Octubre eran la mejor prueba de la permeabilidad de los trabajadores cenetistas a las ideas del genuino marxismo. Muchos militantes de la CNT habían entrado en sus filas repelidos por el reformismo parlamentario y el posibilismo político de los dirigentes de la UGT y el PSOE, que en los momentos trascendentales se sometieron a los republicanos. Este rechazo explica la actitud “apolítica” de secciones importantes del proletariado cenetista y la aceptación de

del país en una sola organización nacional”. Obviamente, los dirigentes ugetistas no hicieron nada por llevar esa resolución a la práctica.

²⁷⁸ Buenacasa dirigió *El Comunista*, periódico libertario de Zaragoza de tendencia probolchevique, que se publicó de 1919 a 1920. (*La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la I Internacional hasta el final de la Guerra Civil*, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona, 1991, vol. I, Tomo 1, pp 338-339)

²⁷⁹ Antonio Bar, *op. cit.*, pp. 501-503.

las ideas anarquistas. Pero, ahora, la revolución rusa mostraba a las claras la necesidad de un partido obrero y de una estrategia para conquistar el poder y mantenerlo contra los enemigos de la revolución.

La contradicción entre la voluntad revolucionaria de los militantes cenetistas y sus prejuicios antipolíticos no podía resolverse con facilidad, pero eso no impidió que la atracción por el bolchevismo siguiera extendiéndose en el seno de la CNT. Sus cuadros más conscientemente bolcheviques, animados por dirigentes como Joaquín Maurín, Andreu Nin, Pere Bonet o Hilario Arlandis, tenían una influencia considerable en Catalunya, y aunque su aproximación al comunismo fue un tanto traumática por los orígenes sindicalistas de los que procedían, no fue menos apasionada.

La detención y el posterior asesinato por la policía de Evelio Boal, secretario del comité nacional de la CNT, en marzo de 1921 dio a estos sindicalistas comunistas la posibilidad de aumentar su proyección e influencia. En unas condiciones de represión generalizada, los comités de la CRT y la CNT fueron continuamente desarticulados y sus miembros, asesinados o encarcelados. El propio Andreu Nin estuvo a punto de ser asesinado por los pistoleros de los Sindicatos Libres²⁸⁰ en noviembre de 1920, pero logró huir y pasar a la clandestinidad. Tras el asesinato de Boal y las sucesivas detenciones de otros dirigentes, Nin fue cooptado para el comité nacional clandestino y designado secretario general en funciones. En fechas similares, Joaquín Maurín llegó al comité de la CRT, también en la clandestinidad, y no tardó en convertirse en su figura más destacada. Todos esto abrió una puerta para que los cenetistas pro-bolcheviques difundiesen sus ideas con mayor amplitud, para lo que contaron, además, con un punto de apoyo inesperado: el periódico de Lérida *Lucha de Clases*, que actuaba como periódico de los pro-bolcheviques, se convirtió en la práctica en el principal órgano de expresión de la CNT catalana debido a la suspensión gubernativa de *Solidaridad Obrera*, el periódico oficial de la Confederación.²⁸¹

La sucesión de acontecimientos en la revolución rusa y en la lucha de clases del Estado español tendrían un efecto determinante en la evolución posterior de la tendencia comunista de la CNT. Aunque el fervor por la revolución bolchevique se mantendría entre la base, la casi unanimidad del congreso de 1919 se rompió dos años más tarde. En ello influyeron el desfavorable informe de Ángel Pestaña sobre el II Congreso de la IC y sus entrevistas con destacados dirigentes de la revolución, entre ellos León Trotsky. No menos importante fueron otros hechos acaecidos en momentos de extrema gravedad para la supervivencia del Estado obrero en Rusia, como la represión del levantamiento de Kronstadt o el enfrentamiento del Ejército Rojo con la guerrilla campesina comandada por el anarquista ucraniano Majnó. A pesar de todo, las posibilidades del comunismo estaban completamente abiertas en las filas de la CNT. Fue el proceso de degeneración burocrática que vivió la república soviética lo que

²⁸⁰ Organización sindical amarilla fundada por elementos carlistas, y financiada por la patronal.

²⁸¹ En medios anarquistas ha sido moneda común menospreciar la influencia de la revolución rusa en la CNT, pero lo cierto es que sus efectos se dejaron sentir en todos los niveles de la organización, no sólo en la base. En Barcelona, los pro-bolcheviques lograron una influencia importante, si bien en ningún caso decisiva, en diferentes sindicatos: metal, transporte, impresión, empleados del comercio. A raíz de la invitación para asistir al congreso constituyente de la Internacional Sindical Roja (ISR), a celebrar en Moscú en julio de 1921, la CNT organizó en abril un pleno nacional en la ciudad de Lérida, para elegir la delegación a enviar. Reflejando la importancia que a la dirección le merecía esa invitación, se aprobó que acudiesen Jesús Ibáñez, representante de la Federación Asturiana, Hilario Arlandis, de Valencia, Joaquín Maurín, de la Regional catalana, y Andreu Nin, por el Comité Nacional. Los acompañó Gastón Leval, en representación de la Federación de Grupos Anarquistas de Barcelona. Tras el congreso de la ISR, Ibáñez y Maurín fueron detenidos, el primero nada más regresar y el segundo en febrero de 1922. Arlandis, Leval y Nin fueron detenidos en Berlín, pero mientras los primeros fueron rápidamente liberados, Nin fue acusado por el gobierno español del asesinato de Dato y se reclamó su extradición. Tras pasar más de tres meses en prisión, Nin regresó a la URSS y se integró en la dirección ejecutiva de la ISR.

levantó una barrera entre los anarcosindicalistas y el estalinismo, lo cual no impidió, a pesar de todo, que el desarrollo futuro de la revolución española volviera a brindar grandes oportunidades para atraer a una amplia capa de ellos a las filas del auténtico comunismo.

El 11 de junio de 1922, la CNT celebró en Zaragoza una conferencia, que decidió separarse de la Tercera Internacional y afiliarse a la nueva internacional anarcosindicalista que iba a ser fundada en Berlín.²⁸² Los dirigentes cenetistas más proclives al sindicalismo (Ángel Pestaña, Salvador Seguí), los anarquistas radicales, como Galo Díez, cabeza visible de los ácratas antibolcheviques, y otros que, como Manuel Buenacasa, habían defendido ardorosamente la revolución bolchevique y la adhesión a la Internacional Comunista, pero que ahora estaban completamente desilusionados, superaron sus diferencias y sellaron un pacto para combatir la influencia comunista en la CNT. De esta manera retomaron el control de la dirección y retiraron a la CNT de la Internacional Sindical Roja y de la IC, decisiones que coincidieron con el reflujo de la lucha jornalera y el aumento de la represión contra los cenetistas.²⁸³

Por su parte, los sectores pro-comunistas se reagruparon ese mismo año con la constitución de los Comités Sindicalistas Revolucionarios (CSR), creados por militantes asturianos, catalanes, valencianos, etc. Los CSR aparecían públicamente como “el agrupamiento, dentro de la CNT, de todos aquellos que luchan por la acción revolucionaria, ahuyentando toda influencia reformista y toda desviación de la lucha de clases. No compartirá ningún espíritu sectario que pueda perjudicar el aunamiento proletario”.²⁸⁴ Los CSR se posicionaban en contra del posibilismo *sindicalista* de muchos dirigentes y cuadros intermedios de la CNT, y del sectarismo de los grupos anarquistas que rehuían la unidad de acción con la UGT y, sin reconocerlo, pretendían en la práctica convertir la CNT en un partido anarquista con otro nombre. Aunque algunos anarquistas acusaron a los CSR de “infiltración comunista”, lo cierto es que la mayor parte de sus miembros no eran conscientemente comunistas, más bien se acercaban al comunismo a través de su propia experiencia y por la enorme impresión que les causó la revolución de Octubre. Según A. Bar, “[la presencia de los CSR] en la base confederal fue considerable y permanente”. Su fuerza fundamental radicaba en Catalunya, donde contaban con una influencia importante en Lérida, y también en el Sindicato Único Minero de Asturias.

La creación de los CSR también puso en evidencia los límites de la doctrina “antiautoritaria” de los dirigentes anarquistas, que rechazaron burocráticamente su reconocimiento “para evitar que los comunistas, bajo el disfraz de sindicalistas, continúen su labor de proselitismo”. En cualquier caso, la influencia bolchevique en la CNT también se evidencia en que muchos de los dirigentes del PCE en los años veinte y treinta provenían de sus filas (como José Díaz, secretario general del partido en la guerra civil) o que los dos cabezas visibles de los cenetistas pro-bolcheviques (Joaquín Maurín y Andreu Nin) serían años

²⁸² La nueva organización, que recuperó las siglas de la Primera Internacional (AIT, Asociación Internacional de Trabajadores), celebró su primer congreso en Berlín del 25 de diciembre de 1922 al 2 de enero de 1923.

²⁸³ En la conferencia de Zaragoza, el predominio de los sindicalistas se dejó sentir en toda una serie de decisiones. Para empezar, en la negativa a trasladar el Comité Nacional de la CNT de Barcelona a Zaragoza, donde los anarquistas y anarcosindicalistas tenían la mayoría; también en la propuesta de pago a los liberados del sindicato promovida por Salvador Seguí y en la elección de un Comité Nacional dominado por los dirigentes más moderados, con Joan Peiró como secretario general, e integrado también por Seguí, Pestaña, José María Martínez, Eusebio Carbó y Galo Díez. Pero lo más significativo fue la aprobación de una resolución donde se declaraba abiertamente la naturaleza política de la CNT y que ésta no podía inhibirse de ningún problema de la vida nacional.

²⁸⁴ Antonio Bar, *op. cit.*, p. 573.

después respectivamente los dirigentes del Bloque Obrero y Campesino y de la Izquierda Comunista y, a partir de septiembre de 1935, del Partido Obrero de Unificación Marxista.²⁸⁵

DERROTA OBRERA: LA OFENSIVA ARMADA DEL GOBIERNO Y LA PATRONAL

Entre mayo y agosto de 1919, la CNT sufrió una dura persecución gubernativa. Pero por encima de las adversidades, que no fueron pocas, los obreros y los cuadros anarcosindicalistas mantuvieron su espíritu de lucha, logrando reorganizar sus sindicatos y avanzar en la clandestinidad. En ese año y los dos siguientes, el ascenso huelguístico, la influencia del bolchevismo, la radicalización política de miles de activistas y, sobre todo, la feroz represión policial y militar propiciaron un cambio paulatino en la correlación de fuerzas dentro de la CNT y la CRT, que terminó desplazando de la dirección al sector sindicalista “puro”.

Ese cambio interno no supuso una transformación fundamental en los esquemas ideológicos de los sectores más ácratas de la CNT. Tras el fracaso de la huelga general de abril en Barcelona, seguían confiando en sus esquemas *putchistas* para conseguir una insurrección, y cuando no recibían la respuesta esperada por parte de los trabajadores, su frustración los llevaba directamente a las tradicionales acusaciones sobre el “bajo nivel de conciencia” de los obreros o sus “inclinaciones materialistas”. En lugar de ver las luchas parciales como una vía para aumentar el grado de organización y de conciencia revolucionaria, en la mayoría de las ocasiones las consideraban como un estorbo para la lucha contra el orden burgués. A pesar de sus loas a la revolución bolchevique, nunca se les pasó seriamente por la cabeza aplicar sus enseñanzas en las condiciones prerrevolucionarias que se daban en aquel momento, ni mucho menos emprender la tarea de conquistar a la masa de obreros cenetistas para construir un partido revolucionario como en Rusia. La gran fluctuación política de los militantes anarcosindicalistas hacía, en la práctica, muy difícil encontrar una cohesión táctica y mucho menos estratégica. Incluso entre los militantes más intransigentes existían divisiones: por un lado, los más tradicionales y veteranos, como Buenacasa, Boal o Carbó, asentados en la estrategia del sindicalismo revolucionario de inspiración bakuninista, y, por otro, los llegados a la Confederación en los últimos años de la guerra mundial o en la posguerra, como Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso o Juan García Oliver, que nutrieron los grupos de acción de la CNT.

La brutal represión también jugó en contra de las opciones de los sindicalistas, favoreciendo las tesis de las acciones individuales. A la represión policial, militar y de los sicarios de la patronal, los pistoleros de los Sindicatos Libres, se contrapuso la intervención armada de los

²⁸⁵ El afluente sindicalista del comunismo no terminó de encajar en el PCE. Como dice Meaker: “Maurín y los sindicalistas comunistas de Cataluña no alcanzaron nunca una relación estrecha con los comunistas ‘políticos’ de Madrid y del norte. Este hecho reflejaba, en parte, sólo la distancia geográfica y la fuerza de las diferencias regionales, así como un sentimiento residual de autosuficiencia y amor propio sindicalista. Pero el retraimiento de los sindicalistas-comunistas con relación al Partido Comunista también se derivaba de las dudas acerca de la capacidad de los dirigentes del partido. Las luchas fraccionales, al parecer interminables, de los comunistas habían causado una pobre impresión, y los hombres de *Lucha Social* confiaban tan poco en el PCO como en el viejo PCE. La escisión de los terceristas del Partido Socialista, en abril de 1921, no despertó gran entusiasmo en Cataluña; por el contrario, se dudaba que los del PCO fueran a adquirir cualidades revolucionarias con sólo cambiar de nombre (...) los sindicalistas-comunistas, pues, mantenían una casi completa independencia del Partido Comunista. Había una completa autonomía de ambos lados, acompañada de ocasionales contactos para finalidades específicas (...) por ejemplo, en la instrumentalización del Frente Único y en la campaña contra la guerra de Marruecos (...) Así pues, continuó habiendo, de hecho, dos movimientos comunistas en la nación: uno político, centrado en Madrid y el norte, y otro sindicalista, centrado en Cataluña y Valencia”. *Op. cit.*, p. 548.

grupos de acción, los atentados y el ajusticiamiento de los represores y los patronos más significados.²⁸⁶ La vuelta a los métodos del terrorismo individual, de larga tradición en el anarquismo español, no resolvió nada ni permitió organizar una respuesta colectiva a la ofensiva burguesa; al contrario, esos métodos, que predominaron en la fase de reflujo del movimiento de masas, sirvieron de coartada a la burguesía para desatar una guerra sin cuartel, y en muchos casos unilateral, no sólo contra los grupos armados, sino también contra los activistas y dirigentes de la CNT. Las acciones armadas de pequeños grupos arrinconaron cualquier intento de utilizar la enorme fuerza de que disponía la CNT, incluso en aquellas condiciones difíciles, para levantar una resistencia de masas bien organizada y coordinada en todo el Estado, incluyendo la autodefensa armada de los trabajadores a partir de los comités de fábrica y los sindicatos. Para ello hubiera sido necesaria otra visión política, que tampoco los sindicalistas “puros” estaban en condiciones de proponer.

A partir del otoño de 1919, la patronal catalana decidió lanzar una guerra a muerte contra la CNT. Todos los gestos para apaciguar la situación, que llevaron a Seguí incluso a entablar negociaciones con el Instituto de Reformas Sociales, no sirvieron de nada. A pesar del acuerdo que formalmente se alcanzó sobre un estatuto provisional de relaciones laborales, el segundo congreso de los empresarios catalanes tenía en mente una solución muy distinta: decretar un cierre patronal masivo, que tuvo su anticipo el 14 de noviembre, cuando en numerosas fábricas apostaron guardias para impedir la entrada a todos aquellos que fueran reconocidos como líderes sindicales. Esta provocación patronal provocó una explosión de furia, lo que, una vez más, puso la iniciativa en manos de los anarquistas más extremistas. La CRT dio la orden de reiniciar todas las huelgas y las negociaciones con el IRS quedaron rotas. Por su parte, los patronos aprovecharon la ocasión para poner en marcha, a partir del 25 de noviembre, el mayor cierre patronal de la posguerra, dejando inactivos a 200.000 obreros, y que se prolongó hasta el 26 de enero de 1920.²⁸⁷ Los dirigentes anarquistas sobrestimaron sus fuerzas, convencidos de que no habría represión capaz de doblegar la voluntad de lucha de cientos de miles de obreros. Pero, en esta ocasión, la alianza del gobierno y la patronal, de la policía, el ejército y los somatenes, resultaría una fuerza muy poderosa.

Paralelamente a los acontecimientos de Barcelona, la radicalización de los trabajadores registraba avances significativos en otras zonas, espoleada por el agravamiento de la crisis económica y el crecimiento generalizado del desempleo. La ofensiva obrera se extendió. En Madrid estalló una huelga general de 10.000 trabajadores de la construcción; en abril, se pusieron en huelga los mineros asturianos; más tarde les tocó el turno a los trabajadores de La Naval de Bilbao, los mineros de Peñarroya, los metalúrgicos de Mieres... En 1920 hubo 1.060 huelgas, con más de 244.000 trabajadores involucrados.²⁸⁸ El ascenso de la curva huelguística no era el único indicio sobre el ambiente entre la clase obrera: ese también fue el año del congreso del PSOE que aprobó la adhesión a la Internacional Comunista.

A las noticias procedentes del frente interno se sumaban las que llegaban del exterior, también de un marcado tinte revolucionario. En Rusia se consolidaba el poder bolchevique y el Ejército Rojo marchaba sobre Varsovia. En Francia, los sindicalistas revolucionarios

²⁸⁶ “El desenlace de la huelga de marzo de 1919 y la represión posterior, el despido de militantes sindicales por parte de los patronos, las listas negras que dejaron a decenas de militantes sin posibilidad de encontrar trabajo, todos estos elementos contribuyeron a la aparición del terrorismo individual en las filas de la CRT. Un número importante de los obreros despedidos engrosó las filas de los ‘grupos de delegados especiales’, es decir, los grupos de acción; como señaló Pestaña, el carácter lumpen del reclutamiento poco a poco fue desnaturalizando sus objetivos”. Meaker, *op. cit.*, p. 233.

²⁸⁷ Meaker, *op. cit.*, p. 246.

²⁸⁸ La curva huelguística de aquellos años se puede apreciar en el siguiente cuadro, extraído del trabajo de Enrique Guerrero *El socialismo en la dictadura de Primo de Rivera*. <http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolitico-1978-1-13040&dsID=PDF>

organizaron en mayo una serie de huelgas con la intención de lanzar una huelga general de alcance nacional. Italia se encontraba sumida en una oleada de ocupaciones de fábrica.

Los acontecimientos revolucionarios en el Estado español se inscribían en el ciclo político que dominó Europa tras la Primera Guerra Mundial. Indudablemente los factores de índole doméstica jugaron un papel importante, pero la causa de la revolución mundial apuntada por el triunfo de Octubre conquistó la conciencia de millones en los campos y las ciudades, y aunque no existía una organización como el partido bolchevique, el crecimiento y la fortaleza de la CNT y la combatividad de sus militantes representaban una clara amenaza. La burguesía española entendió la gravedad de la coyuntura. Todos estos factores, añadidos al hecho de que los capitalistas no podían permitirse que, en condiciones de recesión económica, su tasa de ganancias se viese amenazada, aumentaron en la clase dominante el temor a una revolución, temor que acabó por inclinar la balanza. El gobierno de Dato despejó el camino hacia la represión brutal y la violencia armada contra los trabajadores: dieron comienzo los años de plomo, en los que la actuación criminal de Martínez Anido, el tristemente famoso gobernador militar de Barcelona, regó Barcelona de sangre obrera.

La represión contra la CNT fue encarnizada: se clausuraron decenas de centros obreros, sindicatos y periódicos. A principios de 1921, todos los sindicatos de Barcelona y la propia CRT fueron ilegalizados, cerca de un centenar de líderes cenetistas fueron detenidos y se suspendió la publicación del *Solidaridad Obrera*. También hubo represión fuera de Cataluña: en Zaragoza, A Coruña, Gijón, fueron disueltos numerosos sindicatos. La oleada represiva coincidió con el aumento del desánimo en las filas obreras, tremendamente golpeadas por el cierre patronal, que había dejado sin salario durante dos meses a decenas de miles de obreros barceloneses.

A partir de 1921, el epicentro de la actividad huelguística se trasladó al norte, donde los sindicatos respondieron con huelgas defensivas muy duras a la pretensión empresarial de rebajar drásticamente los salarios. Fue un período de luchas de los mineros y los metalúrgicos asturianos y vizcaínos, y de enfrentamientos entre el PSOE y el joven PCE por ganar la hegemonía en esos bastiones del movimiento obrero.

En sintonía con las tendencias de fondo, las dificultades a las que se enfrentó el comunismo español desde su unificación, en marzo de 1922, hasta el golpe militar de septiembre de 1923 fueron muy importantes. La estrategia de desbancar al aparato socialista entre los obreros organizados del norte fracasó estrepitosamente. La firme resistencia de la cúpula reformista, que seguía manteniendo bajo su férreo control a la UGT y los métodos totalmente erróneos de los dirigentes comunistas vizcaínos, en concreto los intentos de asaltos armados a casas del pueblo y mítines socialistas por parte de Pérez Solís y sus grupos de choque, dejaron un amargo sabor de derrota. Un elemento que ayudó al fracaso fue, sin duda, la persistencia de una tradición socialista y anarcosindicalista que no era fácil de eliminar. El PSOE, a pesar de sus posturas extremadamente moderadas durante el trienio bolchevique, había conservado su aureola de honestidad entre amplias masas de la clase obrera, para las que seguía siendo su organización tradicional. El radicalismo verbal de Pablo Iglesias, la denuncia intransigente de la monarquía y la oposición en las Cortes a los desmanes gubernamentales concitaban un apoyo considerable entre los trabajadores y entre capas radicales de la pequeña burguesía. En el flanco izquierdo, la influencia de la CNT no podía más que dificultar la implantación del PCE entre los sectores más avanzados del movimiento obrero.

En consecuencia, los intentos del PCE por ampliar su base obrera a través de la política del frente único, aprobada en el III Congreso de la Internacional Comunista, fracasaron. El comité nacional de la UGT manifestó su total oposición a participar en una alianza con el PCE, y llegó al punto de expulsar de sus filas a todas las organizaciones que participaran en un frente único con él. Fue el caso del sindicato de la madera de Madrid, que en agosto de

1922, durante la huelga del sector, se integró en un comité impulsado por los comunistas. También la CNT rechazó el frente único. La adversa situación de la lucha de clases, la represión policial y los efectos de la estalinización de la Tercera Internacional tuvieron efectos demoledores para el PCE. A mediados de los años veinte, el partido había quedado reducido a un grupo de exiliados en París, con pocas conexiones en el interior del país y sin apenas presencia en los núcleos obreros más importantes.

Golpeados por la represión, el debate en las filas cenetistas entre partidarios y contrarios a los grupos de acción rebrotó. En una asamblea clandestina de la CRT convocada en enero de 1922 a la que asistieron unos 300 delegados, Seguí y Pestaña hablaron por primera vez, de manera franca y abierta, contra el terrorismo individual y previnieron de la gravedad de sus consecuencias. Tras una larga discusión, la asamblea estuvo de acuerdo en suspender los atentados y volver a los métodos del sindicalismo revolucionario.²⁸⁹ Pero los grupos de acción siguieron con su actividad e ignoraron tal decisión, un síntoma claro e inequívoco del declive del movimiento de masas.

En el interludio de abril de 1922, el gobierno de Sánchez Guerra restableció algunas garantías constitucionales, pero no representaba el sentir de la burguesía, que había resuelto aparcar las diferencias tácticas en su seno y concentrarse en el objetivo fundamental: contener la amenaza revolucionaria.

La escalada armada de Martínez Anido, las continuas detenciones de sindicalistas, entre ellos Salvador Seguí, el asesinato de decenas de activistas y dirigentes y los consiguientes contragolpes de los grupos de acción dominaron la escena. El impulso revolucionario del trienio bolchevique decaía en el bastión de la clase obrera revolucionaria, Barcelona, y los intentos por reanimar la actividad de los obreros, como la huelga convocada en noviembre de 1921 por la CRT clandestina, no revirtieron la tendencia ni sirvieron para hacer frente a la embestida de la burguesía. Las acciones individuales de los grupos armados, incluido el atentado contra Dato, no hicieron más que agravar la represión y el retraimiento de los trabajadores.

A lo largo de 1921, según datos de la CNT, más de 3.000 militantes catalanes fueron encarcelados. En el sur, los anarcosindicalistas también fueron diezmados y la mayoría de los sindicatos campesinos creados entre 1918 y 1919 desaparecieron.²⁹⁰ La burguesía intentó darle a la clase obrera un escarmiento que no olvidara. Asesinó, encarceló y persiguió hasta la extenuación a la vanguardia revolucionaria de los trabajadores. Al crimen de Evelio Boal, asesinado a tiros en la oscuridad de la noche en aplicación de la ley de Fugas, le siguió la muerte de Salvador Seguí en marzo de 1923, acribillado por sicarios de la patronal en una calle de Barcelona. La burguesía intentó aplastar la voluntad de combate del proletariado y su firme orientación hacia la revolución socialista. Y en parte lo logró temporalmente imponiendo la única paz que conoce la clase dominante: la paz de los cementerios. La crónica de la lucha de clases desde comienzos de 1922 hasta el pronunciamiento militar de Primo de Rivera, en septiembre de 1923, está perlada de una sucesión ininterrumpida de derrotas obreras, incursiones punitivas y asesinatos a cargo de los pistoleros de los Sindicatos Libres.

Si una observación superficial podría sugerir que la tensión se mantenía, el auge revolucionario iniciado en 1918 perdía fuelle a marchas forzadas. La mayoría de las huelgas de 1922 y 1923 tuvieron un carácter defensivo y casi todas se saldaron con derrotas severas.

²⁸⁹ Meaker, *op. cit.*, p. 412.

²⁹⁰ Con la represión desatada y el reflujo del movimiento obrero, los anarquistas intransigentes, basados en los grupos de acción, impusieron su predominio en la CNT clandestina. En Catalunya establecieron la Federación de Grupos Anarquistas, que se coordinó con otros grupos anarquistas del país. La FGA fue precursora de la Federación Anarquista ibérica (FAI), que se fundaría en 1927.

La tendencia general marcaba una línea descendente, por más que los dirigentes anarcosindicalistas de la CNT siguieran haciendo de las huelgas el fetiche de la revolución y que el movimiento obrero mantuviera temporalmente una capacidad de resistencia y movilización fuera de Cataluña.

La derrota de la clase obrera y la desarticulación de su vanguardia revolucionaria, encuadrada en la CNT, fue aprovechada sin titubeos. La amenaza había sido tan real, tan cercana, que había que asegurar que no se repetiría. Esta fue la fuerza motriz que llevó al golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923 y a una dictadura que se prolongaría durante seis años. Pero el capitalismo español y la monarquía de Alfonso XIII estaban en tal estado de descomposición, que la ayuda de los militares fue insuficiente. El primer ensayo general de la contrarrevolución española en el siglo XX dio lugar a un régimen bonapartista débil que no rindió los frutos esperados. La clase obrera resurgió, sumó a su ejército nuevas fuerzas y se preparó para tomar el cielo por asalto. En la siguiente ocasión, el proletariado y los campesinos españoles escribirían una página memorable en la historia de la revolución socialista.

VI

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y EL COLAPSO DE LA MONARQUÍA

La Primera Guerra Mundial y el triunfo bolchevique en Rusia rompieron el equilibrio capitalista y abrieron una etapa revolucionaria a escala internacional. Pocos países quedaron al margen de aquella conmoción que, como Lenin y Trotsky habían previsto, empezó en una nación atrasada hasta extenderse por el mundo con una fuerza y velocidad proporcional a la destrucción causada por la guerra. La revolución contagió a las naciones que habían tenido una implicación directa en la contienda, pero también sacudió a los países atrasados y las colonias, donde se sucedieron grandes movimientos de masas a favor de la emancipación nacional.

La trascendencia del derrocamiento del capitalismo en Rusia está fuera de discusión. Como toda revolución social profunda, condicionó la evolución de la economía y las relaciones entre las clases y las naciones durante las siguientes décadas. En el corto plazo, la formación de la Internacional Comunista significó la organización del proletariado revolucionario a una escala jamás vista antes. Ni la Primera ni la Segunda Internacional agruparon nunca a tantos partidos revolucionarios, ni contaron en sus filas con millones de trabajadores dispuestos a combatir con tanto fervor por la transformación socialista de la sociedad. En consecuencia, el Octubre ruso encendió la luz de alarma en los estados mayores de la burguesía mundial, dispuesta a rechazar con todos los medios a su alcance los asaltos revolucionarios de los trabajadores europeos en los años de la posguerra.

REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN EN EUROPA

La crisis revolucionaria se contagió de un país a otro desde que los bolcheviques instauraron la república de los sóviets en Rusia: Finlandia a comienzos de 1918 y Alemania y Austria en noviembre; en 1919, la insurrección espartaquista en Berlín y la proclamación de la república soviética en Hungría y Baviera; entre 1919 y 1921, Gran Bretaña vivió una oleada de huelgas y motines obreros; en 1920, el movimiento revolucionario y las ocupaciones de fábricas en Italia; en 1921, nueva insurrección en Alemania central; de 1918 a 1921, el trienio bolchevique en el Estado español; en 1923, insurrección en Bulgaria y crisis revolucionaria en Alemania; en 1924, insurrección obrera en Estonia.²⁹¹

²⁹¹ En Austria, la crisis revolucionaria tuvo una evolución muy parecida a la de Alemania: como consecuencia del movimiento revolucionario de Viena, en diciembre de 1918, tras la abdicación del emperador, se proclamó la república democrática. La socialdemocracia logró contener el movimiento revolucionario en los límites del parlamentarismo burgués, hasta que éste fue suprimido por el golpe de Estado de Dollfuss en 1934.

La revolución de 1918 en Finlandia fue una consecuencia de la revolución de Octubre y de la proclamación de la independencia de Finlandia en diciembre de 1917, reconocida por el gobierno soviético en enero de 1918. Los trabajadores de Helsinki intentaron proclamar la república obrera y constituyeron para tal fin un gobierno revolucionario en la ciudad, pero la burguesía lanzó una brutal guerra civil apoyándose en las guardias blancas contrarrevolucionarias organizadas por el general Mannerheim. Entre finales de abril y junio de 1918, el terror blanco asesinó a 4.725 personas, y en total no hubo menos de 8.380 asesinatos de obreros y soldados comunistas. Murieron también unos 12.000 prisioneros, de los aproximadamente 80.000 encarcelados en prisiones y campos de concentración por la contrarrevolución, la mayoría de ellos por hambre, desnutrición y

1919 fue el año en que la burguesía se vio en mayores dificultades para sofocar la rebelión. Para lograrlo recurrió a la violencia, utilizando para ello las tropas desmovilizadas por el fin de la guerra, sobre todo sus cuerpos de oficiales y los regimientos políticamente más atrasados. La estrategia contrarrevolucionaria de la burguesía encontró un punto de apoyo fundamental en los dirigentes socialdemócratas, que se prestaron entusiastas a la tarea de aplastar a los obreros insurrectos. En Alemania, la actuación de la socialdemocracia y de las tropas de choque de la burguesía, reprimiendo y asesinando a miles de militantes comunistas, conjuró temporalmente la amenaza revolucionaria. Pero la correlación de fuerzas era tan desfavorable a los capitalistas, que los intentos de imponer una dictadura militar fracasaron: la violencia contrarrevolucionaria tuvo que combinarse con concesiones y reformas para aplacar a los trabajadores. La derrota de la revolución socialista en 1919 tuvo como subproducto el alumbramiento de un régimen de democracia burguesa: la república de Weimar.

La represión salvaje y la traición abierta de los dirigentes reformistas fueron esenciales para la derrota obrera. Pero la reacción se benefició de un elemento inesperado que obró contra los trabajadores: los errores tácticos y estratégicos de los jóvenes partidos comunistas europeos, que, a pesar de su entusiasmo y devoción por la causa del socialismo, en no pocos casos carecían de la experiencia y el nivel político necesarios. Como los hechos demostraron, la asimilación de las lecciones de la revolución rusa no dejaba de ser bastante superficial e incompleta.

La traición de los viejos partidos reformistas y la falta de comprensión de lo que realmente significaba la política bolchevique empujaron a determinados sectores del movimiento revolucionario hacia posiciones sectarias y ultraizquierdistas. Muchos de los nacientes partidos comunistas (alemán, italiano, británico, holandés...) se vieron afectados por esta enfermedad infantil, como la definió Lenin. Los ultraizquierdistas se pronunciaban contra el trabajo paciente en las organizaciones de masas, se oponían a la participación en las elecciones parlamentarias y propugnaban el boicot electoral en toda circunstancia, defendían el abandono de los sindicatos de masas y la construcción de “sindicatos rojos”. El ultraizquierdismo estaba lleno de los lugares comunes del anarquismo. Al cretinismo parlamentario le contraponían el cretinismo antiparlamentario; ante el poder y la influencia de los sindicatos reformistas, se conformaban con crear pequeñas sectas sindicales que aislaban a los obreros de vanguardia y, lejos de debilitar a la burocracia sindical, en realidad la fortalecían. Los representantes más destacados de esta tendencia fueron el KAPD alemán, el italiano Amadeo Bordiga, los ex tribunistas holandeses dirigidos por Gorter y Pannekoek y algunos líderes comunistas británicos.²⁹²

enfermedad. En un país de 3.300.000 habitantes, las ejecuciones y las muertes en las prisiones sumaron 20.000 personas, unas diez veces más que en la guerra civil de Irlanda. (Julián Casanova, “Una dictadura de cuarenta años”, en *Morir, matar, sobrevivir*, Ed. Crítica, Barcelona, 2002, p. 6).

La república soviética húngara se estableció en marzo de 1919, tras la unificación de los partidos socialdemócrata y comunista. Con la creación del Consejo de Trabajadores y Soldados presidido por Béla Kun, la república soviética sólo pudo mantenerse hasta el mes de agosto, cuando la coalición de fuerzas contrarrevolucionarias de terratenientes y militares abrieron Budapest a las tropas rumanas, que aplastaron la revolución.

La república soviética de Baviera fue proclamada en febrero de 1919 y fue parte del proceso revolucionario iniciado en noviembre de 1918.

La insurrección búlgara, dirigida por los comunistas, tuvo lugar en septiembre de 1923. El gobierno reaccionario asesinó a 5.000 revolucionarios.

²⁹² Una parte considerable de los debates del II Congreso de la Internacional Comunista se centraron en la lucha abierta contra las tendencias ultraizquierdistas. El manifiesto del congreso, escrito por Trotsky, subrayaba los principios de la estrategia marxista contra esta política aventurera: “La Internacional Comunista es el partido mundial de la insurrección proletaria y de la dictadura proletaria. Para ella no existen otros objetivos ni otros problemas que los de la clase obrera. Las pretensiones de las pequeñas sectas, cada una de las cuales quieren

Ante el peligro que estas tendencias sectarias representaban para el desarrollo de la Internacional Comunista, Lenin escribió su famoso libro *La enfermedad infantil del 'izquierdismo' en el comunismo*, en el que analizó la política de los bolcheviques en los sindicatos, respecto al parlamentarismo, en la lucha por las reformas y en lo concerniente a la estrategia. “Precisamente la absurda ‘teoría’ de la no participación de los comunistas en los sindicatos reaccionarios —señala Lenin— demuestra del modo más evidente con qué ligereza consideran estos comunistas ‘de izquierda’ la cuestión de la influencia sobre las ‘masas’ y de qué modo abusan de su criterio acerca de las ‘masas’. Para saber ayudar a la ‘masa’ y conquistar su simpatía, su adhesión y su apoyo, no hay que temer las dificultades, las quisquillas, las zancadillas, los insultos y las persecuciones de los ‘jefes’ (que, siendo oportunistas y socialchovinistas, están en la mayor parte de los casos en relación directa o indirecta con la burguesía y la policía) y se debe *trabajar* sin falta *allí donde estén las masas*. Hay que saber hacer toda clase de sacrificios y vencer los mayores obstáculos para llevar a cabo una propaganda y una agitación sistemáticas, tenaces, perseverantes y pacientes precisamente en las instituciones, sociedades y sindicatos, por reaccionarios que sean, donde haya masas proletarias o semiproletarias. Y los sindicatos y las cooperativas obreras (estas últimas, por lo menos, en algunos casos) son precisamente las organizaciones donde están las masas (...) En Inglaterra, Francia y Alemania, millones de obreros pasan *por primera vez* de la completa falta de organización a la forma más elemental e inferior, más simple y accesible de organización (para los que se hallan todavía impregnados por completo de prejuicios democrático-burgueses): los sindicatos; y los comunistas de izquierda, revolucionarios pero insensatos, quedan a un lado, gritan: ‘¡Masa! ¡Masa!’, pero ¡¡se niegan a actuar en los sindicatos, so pretexto de su ‘espíritu reaccionario’!! E inventan una ‘unión obrera’ nuevecita, pura, limpia de todo prejuicio democrático-burgués y de todo pecado corporativo y de estrechez profesional, que será (¡qué será!), dicen, amplia y para ingresar en la cual se exige solamente (¡solamente!) ¡¡El ‘reconocimiento de los sóviets y de la dictadura del proletariado’!! ¡Es imposible concebir mayor insensatez, mayor daño causado a la revolución por los revolucionarios ‘de izquierda’!”.²⁹³

La polémica con los izquierdistas jugó un papel importante para preservar las fuerzas de la naciente internacional en unas circunstancias objetivas que cambiaron bruscamente. Después de grandes combates, de innegables muestras de heroísmo y voluntad revolucionaria, la burguesía logró asestar un duro golpe a las perspectivas de la Internacional Comunista de un rápido triunfo en Europa. La clase dominante pudo restablecer temporalmente sus posiciones y aumentó su confianza en sí misma, dejando en claro que más de un siglo monopolizando el poder no habían pasado en balde. Como señaló Trotsky en 1921: “Lo que hemos visto en el curso de los diez años últimos es la ruina, la descomposición de la base económica de la sociedad capitalista y la destrucción de la riqueza acumulada. Actualmente estamos en plena crisis, una crisis aterradora, desconocida en la historia, y que no es una simple crisis periódica

salvar a la clase obrera a su modo, son extrañas y contrarias al espíritu de la Internacional Comunista. Esta no posee la panacea universal, el remedio infalible para todos los males, sino que saca lecciones de la experiencia de la clase obrera en el pasado y en el presente, y esta experiencia le sirve para reparar sus errores y desviaciones. De allí extrae un plan general y sólo y adopta las fórmulas revolucionarias de la acción de masas (...) A la vez que combate de la manera más decidida el reformismo de los sindicatos, el arribismo y el cretinismo de los parlamentos, la Internacional Comunista no deja de condenar el sectarismo de aquellos que invitan a los proletarios a abandonar las filas de organizaciones sindicales que cuentan con millones de miembros y a ignorar a las instituciones parlamentarias y municipales. Los comunistas de ningún modo se alejan de las masas engañadas y vendidas por los reformistas y los patriotas sino que aceptan luchar con ellas dentro de las organizaciones de masas y de las instituciones establecidas por la sociedad burguesa, de manera de poder acabar con esta última rápidamente”, en *La Internacional Comunista. Tesis, manifiestos y resoluciones de los cuatro primeros congresos*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, p. 177.

²⁹³ Lenin, *La enfermedad infantil del 'izquierdismo' en el comunismo*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1998, p. 61.

‘normal’ e inevitable en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas del régimen capitalista; esta crisis significa hoy la ruina y el desastre de las fuerzas productivas de la sociedad burguesa. (...) la curva del desarrollo económico capitalista tiende, a través de todas sus oscilaciones, hacia abajo y no hacia arriba. Sin embargo, ¿quiere esto decir que el fin de la burguesía llegará automática y mecánicamente? De ningún modo. La burguesía es una clase viva que ha surgido sobre determinadas bases económicas y productivas. Esta clase no es un producto pasivo del desarrollo económico, sino una fuerza histórica, activa y enérgica. Esta clase ha sobrevivido a sí misma, o sea, se ha convertido en el más terrible freno del desarrollo histórico. Esto no quiere decir que esta clase esté dispuesta a cometer un suicidio histórico ni que se disponga a decir: ‘Como la teoría científica de la evolución histórica dice que soy reaccionaria, abandono la escena’. ¡Evidentemente esto es imposible! Por otra parte, no es suficiente que el Partido Comunista reconozca a la clase burguesa como condenada y casi liquidada para considerar segura la victoria del proletariado. No. ¡Todavía hay que vencer y derrocar a la burguesía!’²⁹⁴

La radicalización de amplios sectores de la clase obrera y el campesinado europeos dejó paso a un período de reflujó, que coincidió además con un agravamiento de la crisis económica. En aquellas condiciones adversas, avanzar en la construcción de los partidos comunistas equivalía a ganar posiciones firmes en el movimiento obrero y ligarse a las luchas defensivas de los trabajadores. Para vencer y derrocar a la burguesía había que fortalecer, perfeccionar y curtir el factor subjetivo de la revolución proletaria, es decir, el partido comunista, y conquistar el apoyo consciente de la mayoría de la clase obrera.

La burguesía aprovechó la derrota revolucionaria y la dura crisis económica para lanzar una ofensiva general contra los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores. Las concesiones realizadas en los momentos más críticos de la ofensiva revolucionaria se recuperaban ahora con intereses añadidos. Los dirigentes de la Internacional Comunista plantearon un giro táctico hacia una política defensiva que, mediante acciones por reivindicaciones concretas —como aumentos salariales, reducción de jornada, subsidio obrero, derechos democráticos—, permitiese a los comunistas llegar a la base obrera de las organizaciones socialdemócratas. Esta táctica, aprobada en el III Congreso de la IC (1921) y que recibió el nombre de *frente único*, se resume en el lema “marchar separados, golpear juntos”. Los comunistas querían entrar en contacto con la base socialdemócrata a través de acciones contra el enemigo común, pero garantizando la total independencia de su partido y la defensa del programa revolucionario. El llamado a la unidad de acción no sólo se dirigía a la base de la socialdemocracia, sino también a sus dirigentes, que obviamente reaccionaron con gran hostilidad. Los líderes de la Segunda Internacional no estaban dispuestos a emprender una lucha unitaria por ese tipo de reivindicaciones, y mucho menos cuando sólo podrían ser arrancadas a la burguesía mediante acciones de carácter revolucionario.

Aunque las derrotas del período 1919-1923 permitieron una estabilización precaria de la situación, la política de las potencias vencedoras colocó cargas de dinamita en los cimientos de la sociedad. A la salida de la guerra mundial, Europa se encontró en una posición de subordinación frente a EEUU, pero también más atomizada y debilitada por la fundación de un gran número de pequeños estados. En palabras de Trotsky: “El inglés Keynes llamó a Europa casa de locos y, en efecto, desde el punto de vista del progreso económico, toda esta novedad de pequeños estados que la reducen, con su sistema de aduanas, etc., se presenta como un monstruoso anacronismo, como una absurda incursión de la Edad Media en el siglo

²⁹⁴ León Trotsky, *Una escuela de estrategia revolucionaria*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 80.

XX. En el momento en que la península balcánica está en una situación de barbarie, Europa se balcaniza”.²⁹⁵

La nueva correlación mundial de fuerzas surgida de la guerra reforzó las ambiciones anexionistas de Francia y Gran Bretaña y su afán por someter al pueblo alemán a un expolio humillante. Con el tratado de Versalles (junio de 1919), Alemania perdió una séptima parte de su territorio nacional y fue obligada a indemnizar a los aliados con 20.000 millones de marcos-oro antes de mayo de 1921, una cifra que la conferencia de Londres (abril 1920) aumentó a 132.000 millones, a pagar en los veinticinco años siguientes. La Internacional Comunista denunció implacablemente esta política de revancha de las potencias imperialistas: “Embriagada por su chovinismo y sus victorias, la burguesía francesa se considera ya dueña de Europa. En realidad, Francia nunca estuvo, desde todo punto de vista, en una situación de dependencia más servil con respecto a sus rivales más poderosos, Inglaterra y EEUU. Francia impone a Bélgica un programa económico y militar, y transforma a su débil aliada en provincia vasalla, pero frente a Inglaterra desempeña, en mayor dimensión, el papel de Bélgica. Por el momento, los imperialistas ingleses dejan a los usureros franceses la tarea de hacerse justicia en los límites continentales que les son asignados, logrando de ese modo que recaiga sobre Francia la indignación de los trabajadores de Europa y de la propia Inglaterra. En ambos casos contaron con la colaboración leal de la socialdemocracia, de sus parlamentarios y ministros, contra los trabajadores revolucionarios”.²⁹⁶

Las contradicciones no resueltas, y agravadas por los draconianos acuerdos de la posguerra, resurgieron con una virulencia mayor en poco menos de seis años. En 1929 la economía mundial sufrió un crack sin precedentes en la historia del capitalismo. Tras el breve interludio de los “felices 20”, la nueva recaída del capitalismo anunció una nueva era de revoluciones proletarias en Alemania y otros países, pero también de contrarrevoluciones y guerras.

Los acontecimientos de 1917-1923 habían probado que la burguesía no abandonaría el poder sin una lucha encarnizada. La clase dominante estaba dispuesta a todo en aras de asegurar la continuidad del capitalismo, aunque eso significara sacrificar y mandar a mejor vida las instituciones de la democracia parlamentaria en que tanto creía la socialdemocracia. La clase obrera pagó un precio muy alto por la derrota de la revolución en la primera mitad de la década de los veinte. Cuando las oportunidades se pierden, nuevas circunstancias aparecen. La historia nunca se repite mecánicamente. El fracaso de la revolución, especialmente en Alemania, dejó al Estado obrero soviético aislado en unas condiciones materiales espantosas, lo que originó fenómenos no previstos. La falta de apoyo de las economías más avanzadas complicó de manera considerable la edificación del socialismo en Rusia. El hundimiento de

²⁹⁵ *Ibid.*, p. 62.

Trotsky subrayó el carácter reaccionario de este hecho: “El programa de emancipación de las naciones pequeñas, que había surgido durante la guerra, condujo a la derrota total y al sometimiento absoluto de los pueblos de los Balcanes, vencedores y vencidos, y a la balcanización de una parte considerable de Europa. Los intereses imperialistas de los vencedores los llevaron a separar de las grandes potencias vencidas algunos pequeños estados que representaban a nacionalidades distintas. En este caso no se trataba de lo que se denomina el principio de las nacionalidades a la libre determinación: el imperialismo consiste en romper los marcos nacionales, incluso los de las grandes potencias. Los pequeños estados burgueses recientemente creados sólo son los subproductos del imperialismo. Al crear, para contar con un apoyo provisorio, toda una serie de pequeñas naciones, abiertamente oprimidas u oficialmente protegidas, pero en realidad vasallos (Austria, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Bohemia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Georgia, etc.) dominándolas mediante los bancos, los ferrocarriles y el monopolio del carbón, el imperialismo los condena a sufrir dificultades económicas y nacionales intolerables, conflictos interminables, sangrientas querellas”. “Manifiesto del II Congreso de la IC”, en *La Internacional Comunista. Tesis, manifiestos y resoluciones de los cuatro primeros congresos*, p. 157.

²⁹⁶ *Ibid.*, p. 155.

la economía y el retroceso a condiciones de barbarie, forzado por años de intervención imperialista contra la Rusia soviética, minó progresivamente las bases de la democracia obrera. Los sóviets y el Partido Comunista pasaron a ser controlados por una casta burocrática cuyos intereses materiales y políticos se fueron consolidando en abierta contradicción con los del proletariado mundial. La perspectiva internacionalista de la revolución fue sustituida por la estrechez nacional del socialismo en un solo país.

EL SOCIALISMO EN UN SOLO PAÍS

Las dificultades que afrontaron los bolcheviques fueron formidables. Rusia era un país muy atrasado y, tras siete años de guerra ininterrumpida, la clase obrera se encontraba extenuada y la estructura productiva, en un estado de práctica destrucción y parálisis.

El punto de vista marxista sobre la transición al socialismo se apoya en una idea muy concreta: gracias a la expropiación de la burguesía y la socialización de los medios de producción, la planificación socialista de la economía bajo el control democrático de la clase obrera puede hacer avanzar las fuerzas productivas a una gran velocidad. Y esto es absolutamente necesario, pues sólo con un alto desarrollo de la industria y la agricultura y con una elevación constante de la productividad del trabajo se pueden crear las condiciones materiales para una sociedad sin clases. Una vez que la clase obrera sea liberada de la penosa tarea de bregar cotidianamente por su supervivencia, podrá emplear sus energías y talento en la administración de toda la vida social: la política, la economía y la cultura. Sin el control y la participación directa de las masas no puede existir la democracia obrera, el régimen de la dictadura proletaria.

En la práctica, a pesar de que el gobierno bolchevique adoptó inmediatamente la jornada de 8 horas, para así facilitar la participación de los trabajadores en las tareas de la administración estatal, las dificultades económicas, las penurias, el esfuerzo de la guerra civil y la reconstrucción del país obligaron a renunciar a esta medida y a prolongar la jornada laboral. Las dificultades materiales para aplicar las medidas que Lenin había señalado para la gestión, control y administración del Estado obrero se hicieron muy agudas. Desde 1917 a 1921, la miseria y el colapso económico se extendieron por toda la Unión Soviética, desmoronando su tejido industrial y agrícola. En condiciones extremas, el Ejército Rojo demostró su enorme capacidad de combate frente a veintiún ejércitos extranjeros invasores, pero su triunfo histórico, sin el cual hubiera sido imposible la supervivencia de la URSS, no evitó que las consecuencias de la guerra fueran devastadoras. La antigua barbarie resurgió con crudeza, en medio de una gran pauperización y una disputa brutal por los pocos recursos existentes.

La lucha de clases en el seno de la URSS no tuvo tregua durante aquellos primeros años. Golpeados por la contrarrevolución y por unas condiciones objetivas extremadamente adversas, los bolcheviques expropiaron y nacionalizaron la inmensa mayoría de las fábricas, establecieron el monopolio del comercio exterior y procedieron a levantar una administración obrera. Pero las insuficiencias económicas eran muy grandes. El intercambio de mercancías entre el campo y la ciudad se redujo drásticamente. En 1918, el suministro mensual de cereales no alcanzaba ni la mitad del habitual, lo que obligó a la dirección bolchevique a imponer el monopolio estatal del trigo y las requisas forzosas de grano. La lucha por el cereal se convirtió, en palabras de Lenin, en la lucha por el socialismo. La maltrecha industria no podía ayudar al campesinado a incrementar la productividad agraria porque era incapaz de suministrarle bienes de consumo. Toda la producción fue sometida a un régimen militar. En 1918 se nacionalizó el comercio interior y, para poder realizar de forma equitativa la

distribución, la población se agrupó en cooperativas, subordinadas al Congreso de Alimentación. Este conjunto de medidas recibieron el nombre de *comunismo de guerra*.

En 1919, el porcentaje de obreros de la construcción se redujo un 66% y el de ferroviarios, un 63%. La cifra global de obreros industriales descendió de los tres millones de 1917 al 1.240.000 de 1920. El propio Lenin describió aquellas condiciones insoportables: “El proletariado industrial, debido a la guerra y la pobreza y ruina desesperadas, se ha desclasado, es decir, ha sido desalojado de su rutina de clase, ha dejado de existir como proletariado. El proletariado es la clase que participa en la producción de bienes materiales en la industria capitalista a gran escala. En la medida en que la industria a gran escala ha sido destruida, en la medida que las fábricas están paradas, el proletariado ha desaparecido. A veces aparece en las estadísticas, pero no se ha mantenido unido económicamente”.²⁹⁷

En 1917, Lenin definió las condiciones para un Estado obrero sano: 1) Elecciones libres y democráticas a todos los cargos del Estado. 2) Revocabilidad de todos los cargos públicos. 3) Que ningún funcionario reciba un salario superior al de un obrero cualificado. 4) Que todas las tareas de gestión de la sociedad las asuma gradualmente toda la población de manera rotatoria. “Reduzcamos el papel de los funcionarios públicos al de simples ejecutores de nuestras directrices, al papel de inspectores y contables, responsables, revocables y modestamente retribuidos (en unión, naturalmente, de los técnicos de todos los géneros, tipos y grados); ésa es nuestra tarea proletaria. Por ahí se puede y se debe empezar cuando se lleve a cabo la revolución proletaria”.²⁹⁸

Sin embargo, en las condiciones materiales de Rusia esta perspectiva era inviable. Para construir el socialismo en Rusia se requería el triunfo de la revolución en al menos algunos de los países más desarrollados de Europa. Lenin nunca se engañó a este respecto: “Desde el principio de la revolución de Octubre, nuestra política exterior y de relaciones internacionales ha sido la principal cuestión a la que nos hemos enfrentado. No simplemente porque desde ahora en adelante todos los Estados del mundo están siendo firmemente atados por el imperialismo en una sola masa sucia y sangrienta, sino porque la victoria completa de la revolución socialista en un solo país es inconcebible y exige la cooperación más activa de por lo menos varios países avanzados, lo que no incluye a Rusia (...) Siempre hemos dicho, por lo tanto, que la victoria de la revolución socialista sólo se puede considerar final cuando se convierte en la victoria del proletariado por lo menos en varios países avanzados”.²⁹⁹

Las consecuencias de ese vasto fenómeno de atomización y dispersión de la clase obrera se revelaron dramáticas para la viabilidad de la democracia obrera. En muchos casos, las estructuras soviéticas dejaron de funcionar, los sóviets, como órganos del poder obrero, declinaron o fueron sustituidos por los comités del partido. Las tareas de la administración del Estado eran cubiertas, cada vez en mayor proporción, por un número creciente de viejos funcionarios del régimen zarista, mientras los mejores cuadros comunistas servían en el frente como comisarios rojos o consagrados a la reconstrucción de la economía. Lenin, observaba con gran preocupación el rumbo que tomaban los acontecimientos. En el IV Congreso de la Internacional Comunista advirtió: “Tomamos posesión de la vieja maquinaria estatal y ésa fue nuestra mala suerte. Tenemos un amplio ejército de empleados gubernamentales. Pero nos faltan las fuerzas para ejercer un control real sobre ellos (...) En la cúspide tenemos no sé cuántos, pero en cualquier caso no menos de unos cuantos miles (...) Por abajo hay cientos de miles de viejos funcionarios que recibimos del zar y de la sociedad burguesa”. En otros escritos remachó la misma idea: “Echamos a los viejos burócratas, pero

²⁹⁷ Citado en Ted Grant, *Rusia. De la revolución a la contrarrevolución*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1997, p. 84.

²⁹⁸ *Ibid.*, p. 104.

²⁹⁹ *Ibid.*, p. 78.

han vuelto (...) llevan una cinta roja en sus ojales sin botones y se arrastran por los rincones calientes. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que combatir a esta escoria una y otra vez, y si la escoria vuelve arrastrándose, tenemos que limpiarla una y otra vez, perseguirla, mantenerla bajo la supervisión de obreros y campesinos comunistas a los que conozcamos por más de un mes y un día”.³⁰⁰

A la falta de control por parte de la clase obrera se le unieron las dificultades para abastecer las ciudades y el hambre en el campo. Pronto se sucedieron estallidos y manifestaciones del campesinado y de la clase obrera contra la escasez. En 1921 se produjo un levantamiento agrario en Támara; ese mismo año, la guarnición naval de Kronstadt se sublevó contra el poder de los sóviets. Esta amenaza a la revolución era aún más grave que la agresión imperialista. El desgaste, la división en el campesinado y la escasez general obligaron a los bolcheviques a dar un giro. En 1921, la introducción de la Nueva Política Económica (NEP) supuso una gran concesión política con el objetivo de restablecer el intercambio comercial en el campo y aliviar la insoportable presión social y económica que se cernía sobre el Estado obrero.³⁰¹

Las viejas palabras de Marx planeaban sobre los líderes bolcheviques: “El desarrollo de las fuerzas productivas es prácticamente la primera condición absolutamente necesaria para el comunismo por esta razón: sin él, se socializaría la indigencia y ésta haría resurgir la lucha por lo necesario, rebrotando, consecuentemente, todo el viejo caos”. Pero, a pesar de la NEP, los problemas continuaron. En 1923, la divergencia entre los precios industriales y los agrarios aumentó. La productividad del trabajo en la industria era muy baja, lo que implicaba precios altos para los productos industriales, a la par que los beneficios obtenidos por los pequeños campesinos eran insuficientes para darles acceso a dichos productos. Al mismo tiempo, los *kulaks*, los campesinos acomodados, fortalecían su posición en el mercado comprando al pequeño productor y acaparando grano, convirtiéndose así en el único interlocutor del Estado en el mundo rural. Esto se reflejaba también en los sóviets locales, donde la influencia de los kulaks era cada vez mayor. Las tendencias pro-burguesas en el campo crecían y se desarrollaban en paralelo al fortalecimiento y al aumento del peso de la burocracia.

Tras un período de tensiones colosales, esperanzas e ilusiones en el triunfo revolucionario del proletariado europeo, el péndulo giró y el reflujo de la clase obrera rusa, junto a su dispersión, el agotamiento de sus fuerzas y la desmovilización de millones de hombres del Ejército Rojo, jugaron un papel decisivo en la formación de la nueva burocracia. A finales de 1920, el número de funcionarios del Estado había pasado de poco más de 100.000 a 5.880.000, y seguía creciendo. Muchos no eran comunistas, ni siquiera obreros avanzados, sino que provenían del viejo aparato zarista; miles de ellos incluso fueron enrolados en el Ejército Rojo como especialistas militares, aunque bajo la supervisión de comisarios políticos. “La reacción creció durante el acoso de las dos guerras que siguieron a la revolución y los acontecimientos la nutrieron sin cesar (...) La joven burocracia formada

³⁰⁰ *Ibid.*, pp. 109-110.

³⁰¹ La NEP sólo puede entenderse desde la óptica de las condiciones hostiles que rodeaban la transición al socialismo en Rusia. El fracaso de la revolución europea y las dificultades internas obligaron a emprender una retirada táctica. En el X Congreso del PCUS se anunció la sustitución del sistema de requisita forzosa del grano por un impuesto en especie, con lo que los campesinos podían disponer de un excedente para comerciar en el mercado. El objetivo último era estimular la economía agrícola. Inicialmente se trataba de una experiencia limitada y supeditada a la economía planificada: el Estado siguió concentrando toda la industria pesada, las comunicaciones, la banca, el sistema crediticio, el comercio exterior y una parte preponderante del comercio interior.

precisamente para servir al proletariado se sintió árbitro entre las clases y adquirió una autonomía creciente”.³⁰²

En medio de la escasez generalizada, el aparato burocrático aprovechaba su posición para obtener ventajas materiales y se independizaba cada vez más de cualquier control de la clase obrera. Las dificultades, tanto internas como externas, se convirtieron en la fuerza motriz del triunfo del estalinismo. La cadena de fracasos revolucionarios en Europa occidental, especialmente el de 1923 en Alemania³⁰³, dio nuevos bríos a esta dinámica y concedió la fuerza suficiente al aparato burocrático para pensar, ilusoriamente, que el socialismo podría construirse “paso a paso” dentro de las fronteras nacionales de Rusia. Fueron factores materiales y sociales, el atraso económico y el fracaso revolucionario en Europa occidental, los que condujeron al aislamiento de la URSS, preparando así el terreno para el triunfo de la burocracia. La teoría antimarxista del socialismo en un solo país³⁰⁴ implicó la subordinación de los intereses de la revolución mundial a la construcción *burocrática* del socialismo en Rusia.

LA AMENAZA FASCISTA

La derrota del proletariado europeo fue un factor de primer orden en la degeneración burocrática de la Unión Soviética. Pero el fracaso revolucionario abrió la puerta a otro fenómeno de consecuencias difíciles de prever en aquel momento: el fascismo. En Italia fue donde primero triunfó.

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Italia era una nación capitalista atrasada, con una economía marcada por el desarrollo desigual. Al calor de la contienda se había producido un fuerte crecimiento industrial en el norte, concentrado en el triángulo Génova-Milán-Turín, y alrededor de Terni y Nápoles en el centro y sur. Los obreros industriales sumaban por aquel entonces 4.350.000. A pesar de ello, las debilidades estructurales del capitalismo italiano se manifestaban en su gran dependencia del capital financiero exterior, en que debía importar todo tipo de maquinaria, materias primas y bienes de consumo, y en una agricultura muy poco productiva basada en grandes latifundios en el sur del país trabajados por una masa de jornaleros.³⁰⁵ Su estructura de clases era muy semejante a la del Estado español.

El fermento político entre los trabajadores y los campesinos italianos, atizado por la inflación y el crecimiento del desempleo al acabar la guerra, aumentó considerablemente con las

³⁰² Trotsky, *La revolución traicionada*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 1989.

³⁰³ En 1923 se produjo otro punto de inflexión al estallar una nueva crisis revolucionaria tras la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr. La respuesta de los trabajadores alemanes fue inmediata: se organizaron grandes huelgas de masas y un potente movimiento de delegados de fábrica se convirtió en el referente de decenas de miles de trabajadores. Los obreros alemanes giraron hacia los comunistas, que ganaron la mayoría en numerosos sindicatos. También se empezaron a formar brigadas armadas. El SPD estaba desorientado y la burguesía, profundamente dividida. Era el momento de una estrategia clara para tomar el poder. Pero cuando lo que se requería era iniciativa y decisión, los dirigentes de la IC implicados en el trabajo en Alemania, Stalin y Zinóviev, frenaron la acción revolucionaria. Los trabajadores alemanes sufrieron la tercera derrota en sólo cinco años.

³⁰⁴ “¿Qué significa la posibilidad del triunfo del socialismo en un solo país?” se interrogaba Stalin, “Significa la posibilidad de resolver las contradicciones entre el proletariado y el campesino con las fuerzas internas de nuestro país, contando con las simpatías y el apoyo de los proletariados de los demás países, pero sin que previamente triunfe la revolución proletaria en otros países” (Stalin, *Cuestiones del leninismo*).

³⁰⁵ Claudio Villa, *Gramsci y la revolución Italiana*, en MARXISMO HOY nº 11, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS.

noticias del triunfo bolchevique. Esas fueron las condiciones para el formidable giro a la izquierda en las filas del Partido Socialista Italiano³⁰⁶ y para la gran oleada huelguística que entre 1918 y 1920 se extendió por los campos meridionales y el norte industrial. Fueron los años del *bienio rojo*, cuando gigantescas huelgas obreras dominaron Florencia, Bolonia, Palermo, Milán, Roma, Turín, Nápoles... y el movimiento jornalero protagonizó ocupaciones de tierras (cerca de 28.000 hectáreas en dos años) y se crearon potentes sindicatos agrarios, las Ligas Rojas. Aquel movimiento de masas arrancó concesiones y mejoras salariales, la reducción de la jornada a 8 horas, el reconocimiento de los sindicatos y reforzó los consejos de fábrica, auténticos órganos de poder proletario. El efecto en el PSI de este giro a la izquierda de las masas obreras y campesinas fue doble: primero, con el crecimiento de su ala centrista (*maximalistas*), y en segundo lugar, con un espectacular resultado en las elecciones de noviembre de 1919, en las que obtuvo 156 diputados, convirtiéndose en el primer partido del Parlamento. El ascenso de la lucha obrera también quedó plasmado en el vertiginoso avance de la Confederación General del Trabajo (CGdL), que pasó de unos 250.000 miembros antes de la guerra a 2.200.000 a finales de 1919.

Los consejos de fábrica eran el mejor testimonio de la atmósfera revolucionaria. En septiembre de 1919 se publicó en Turín el programa de los consejos, elaborado por los propios trabajadores de la Fiat: “1) Los comisarios de fábrica son los únicos y autorizados representantes sociales de la clase proletaria, elegidos por sufragio universal por todos los trabajadores en el mismo lugar de trabajo (...) 3) (...) Los sindicatos tendrán que continuar su actual función, que es la de negociar con los patronos buenas condiciones de salario, horario y normas de trabajo para el conjunto de los trabajadores de las diferentes categorías, dedicando todos sus conocimientos adquiridos durante las luchas del pasado (...). Los consejos encarnan, en cambio, el poder de la clase obrera, ordenada por taller, en contra de la autoridad patronal. Los consejos socialmente encarnan la acción de todo el proletariado en la lucha para la conquista del poder público, para la abolición de la propiedad privada. 4) Los trabajadores organizados en los consejos (...) rechazan como artificial, parlamentarista y falso cualquier otro sistema que los sindicatos deseen seguir para conocer la voluntad de las masas organizadas. La democracia obrera no se basa en el número ni en el concepto burgués de ciudadano, sino en las funciones del trabajo, en el lugar que la clase obrera naturalmente asume en el proceso de la producción industrial (...) 7) Las asambleas de todos los comisarios de los talleres de Turín afirman con orgullo y certeza que su elección y la formación de consejos representa la primera afirmación concreta de la revolución comunista en Italia. Se compromete a dedicar todos los medios a su disposición para que el sistema de los consejos (...) se difunda irresistiblemente y consiga en el menor tiempo posible que sea convocada una conferencia nacional de los delegados obreros y campesinos de toda Italia”.

Las condiciones para la revolución socialista en Italia estaban madurando a gran velocidad. En la conferencia de Bolonia, el PSI se tuvo que comprometer formalmente a “construir sóviets en dos meses”, además de adherirse por aclamación a la Internacional Comunista. La correlación de fuerzas era claramente desfavorable a la burguesía y al aparato del Estado. En definitiva, las posibilidades para crear y coordinar por todo el país un poder obrero alternativo al parlamento burgués, partiendo de los consejos de fábrica y las Ligas Rojas, eran enormes. Pero las masas esperaron en vano las directrices del PSI, y pronto comprobarían

³⁰⁶ La revolución rusa provocaría en muy poco tiempo la formación de una corriente comunista en el seno del PSI, cuyos miembros más relevantes serían los jóvenes Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga. De hecho, ambos participaron en 1917, junto con los centristas Serrati y Lazzari, en la reunión clandestina de la corriente maximalista, contraria a la guerra imperialista. Al año siguiente, los maximalistas ganarían el congreso del partido con el 70% de los votos, pero, pese a su retórica radical, jamás asimilaron el programa del marxismo ni defendieron una estrategia consecuentemente revolucionaria en 1919-1920. Bordiga y Gramsci, los futuros dirigentes del PCI, fundarían dos periódicos pro-bolcheviques de gran influencia: *Il Soviet* de Nápoles y *L'Ordine Nuovo* de Turín.

que una cosa era votar resoluciones para conectar con la atmósfera pro-bolchevique predominante entre la base y otra muy distinta poner la maquinaria del partido al servicio de una estrategia revolucionaria para tomar el poder.

Las vacilaciones de los dirigentes socialistas y su negativa a impulsar el movimiento fueron aprovechadas por la patronal. En abril de 1920, la huelga lanzada por los comités de fábricas de Turín por reivindicaciones parciales fue rechazada por los grandes empresarios metalúrgicos con un cierre patronal general. La respuesta no se hizo esperar. La Federación Obrera Metalúrgica (FIOM) de Turín, dominada por Gramsci y sus camaradas pro-bolcheviques de *L'Ordine Nuovo*, organizó una huelga que duró casi 20 días y que implicó a medio millón de trabajadores de todo el Piamonte, incluidos los campesinos. Gramsci y sus compañeros propusieron una huelga general nacional indefinida para preparar la insurrección, pero no lograron el apoyo de la dirección del partido ni de la CGdL.

La patronal del metal, envalentonada después de ese primer choque, lanzó una nueva provocación y se negó a negociar con la FIOM las condiciones de los convenios colectivos. Pero en esta ocasión la presión de la base obrera prevaleció. Cuando, a finales de agosto, la dirección de Alfa Romeo evacua la fábrica y cierra las puertas de acceso para terminar con una huelga, la FIOM llama a los trabajadores a ocupar las fábricas para tratar de impedir que los empresarios vuelvan a recurrir al cierre patronal. “Esta ocupación de fábricas —escribe Angelo Tasca en su magnífico libro sobre el fascismo italiano— es, en su origen, un simple y mal sucedáneo de la huelga (...) un medio más económico para imponer el nuevo contrato colectivo de trabajo. Los dirigentes de la FIOM han escogido la vía del mínimo esfuerzo: creían que con la ocupación de las fábricas pronto provocarían la intervención del gobierno, y algunos de ellos incluso acariciaban —sin atreverse a confesarlo— la esperanza de que la ocupación tendría un desenlace político con la participación de los socialistas en el poder”. Pero el llamamiento de la FIOM desató un poderoso movimiento de ocupación de empresas que contó con la participación de decenas de miles de trabajadores. “El 31 de agosto —continúa Tasca—, los obreros invaden 280 empresas metalúrgicas de Milán y, en los días siguientes, el movimiento se extiende a toda Italia, adelantándose, en ocasiones, a las órdenes de los dirigentes. Se empieza por las fábricas metalúrgicas, pero como estas fábricas necesitan materias primas y accesorios que les son proporcionados por otras industrias, la ocupación se extiende a éstas para hacer posible la continuación del trabajo de las primeras. La dirección de las empresas pasa a los consejos de fábrica, que se esfuerzan en continuar la producción. En esta tarea, las comisiones obreras únicamente pueden contar consigo mismas, ya que todos los ingenieros y casi todos los técnicos y empleados han abandonado las fábricas por orden de la organización patronal”.³⁰⁷

Las ocupaciones pusieron sobre el tapete la cuestión del poder. Durante algunas semanas, los consejos de fábrica controlaron la producción, ante la impotencia de los patronos, pero una situación así no puede durar mucho tiempo. El control obrero de la producción, síntoma inequívoco de la madurez que la crisis revolucionaria va alcanzando, es una fase transitoria, un puente necesario para continuar profundizando la ofensiva obrera hasta expropiar política y económicamente a la burguesía. Septiembre marcó el punto decisivo para coordinar las ocupaciones de fábrica con el movimiento campesino de las Ligas Rojas en una estrategia clara hacia la toma del poder. Pero, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores, la dirección del partido no tenía ningún plan revolucionario, no había preparado la sublevación ni el armamento obrero. Por su parte, los maximalistas, ardientes partidarios en palabras de la revolución de Octubre, dieron muestras de una completa carencia de táctica y estrategia revolucionarias, más allá de sus buenos discursos a favor de los sóviets. En cuanto a la dirección reformista de la CGdL, sabotó todo lo que pudo el movimiento revolucionario.

³⁰⁷ Angelo Tasca, *El nacimiento del fascismo*, Ed. Ariel, Barcelona, 2000, pp. 86-87.

Tras diez días de resistencia, las fábricas seguían ocupadas. Pero sin planes para una huelga general nacional y sin una estrategia insurreccional, el poder se escapó de las manos de los trabajadores. El movimiento de ocupaciones de fábricas, que se podría haber transformado en el preludio de la lucha por el poder, terminó, a pesar de las concesiones de la patronal y el gobierno, con un sabor muy amargo: “Los obreros han obtenido, además del contrato colectivo, el control sindical sobre la industria. Pero, ¿qué puede significar a sus ojos esta ambigua comisión, instituida por decreto de 15 de septiembre, en comparación con la ilusión vislumbrada durante algunas semanas en las fábricas ocupadas?”.³⁰⁸ A finales de septiembre de 1920, las fábricas fueron desalojadas por miles de soldados siguiendo las directrices del gobierno burgués de Giolitti, y las concesiones legales quedaron aparcadas en las discusiones infructuosas del Parlamento burgués.

El bienio rojo fue una clara advertencia de que un triunfo revolucionario, como en Rusia, era perfectamente posible. Pero no llevó hasta el final la lucha y eso tuvo graves consecuencias. Así lo señala Tasca en su obra: “Con la ocupación de las fábricas, la burguesía ha recibido una conmoción psicológica que explica su violencia y que determina sus sucesivas actitudes. Los industriales se han sentido heridos en sus derechos a la propiedad y el mando; se han visto eliminados de las fábricas, en las que, bien o mal, el trabajo se proseguía en su ausencia. Han sentido el estremecimiento del que ha sido rozado por la muerte y que, vuelto a la vida, se siente un ‘hombre nuevo’ (...) La hora del fascismo ha llegado”.³⁰⁹

La burguesía tomó buena nota de lo ocurrido, apoyando abiertamente a las tropas de choque fascistas de Benito Mussolini. En los años del bienio rojo, las guardias fascistas habían sido entrenadas como una milicia antiobrera para aterrorizar a los trabajadores y golpear sus organizaciones. El intento fracasado de tomar el poder en septiembre de 1920 fue lo que permitió a los capitalistas socavar las conquistas obreras de los años previos y colocar todo el peso de la crisis económica sobre sus espaldas y las de la clase media. De esta manera, y ante la incapacidad del PSI para ofrecer una salida revolucionaria, la pequeña burguesía italiana quedó a merced de la demagogia fascista. Las milicias de Mussolini fueron reforzadas por miles de estudiantes, parados, comerciantes y profesionales arruinados; la desesperación de la pequeña burguesía proporcionó una base de masas a los fascistas y les dio la confianza necesaria para aumentar la audacia de sus acciones.

Después de septiembre, los fascistas comenzarían una ofensiva general contra el movimiento obrero, para la que contaron con el apoyo del aparato estatal capitalista. “En esa época — escribe Daniel Guérin— las escuadras fascistas no sólo cuentan con los subsidios de la gran burguesía, sino con el apoyo material y moral de las fuerzas represivas del Estado: policías, carabineros, ejército. La policía recluta para las escuadras a gente fuera de la ley, con amenazas o con promesas de tolerancias. Presta sus vehículos a los escuadristas, niega permisos de uso de armas a los obreros y campesinos y los concede o los proroga a los fascistas. La fuerza pública tiene órdenes de no intervenir cuando atacan a los fascistas y, de hacerlo, sólo si los rojos resisten. Con frecuencia, policías y fascistas preparan de común acuerdo las agresiones contra las organizaciones obreras (...) Los magistrados, por su parte, distribuyen ‘siglos de cárcel a los antifascistas y siglos de indulgencia a los convictos del fascismo’. En 1921, el ministro de Justicia, Fera, envió una circular a la magistratura aconsejando que dejen dormir los expedientes sobre las acciones criminales de los fascistas. Pero el apoyo decisivo es el que les presta el ejército. El 20 de octubre, el general Badoglio, jefe del Estado Mayor, envía una circular confidencial a los jefes de las regiones militares. Les anuncia que los oficiales que están siendo desmovilizados (unos 60.000 en aquel momento) irán a los centros más importantes, con obligación de afiliarse a los fascios de

³⁰⁸ *Ibid.*, p. 93.

³⁰⁹ *Ibid.*, pp. 91-92.

combate, para dirigirlos y encuadrarlos (...) En noviembre de 1921, con la colaboración del general Gandolfi, las escuadras se funden en una verdadera organización militar (...) ‘Miles de hombres armados —cuenta Malaparte— hasta 15.000 ó 20.000 en ciertas ocasiones, caen de pronto sobre una ciudad o varias aldeas, yendo rápidamente de una provincia a otra en sus camiones’. Atacan las sedes de los sindicatos, las cooperativas y diarios obreros; a primeros de agosto de 1922, se apoderan del ayuntamiento de Milán y de Livorno, dos municipios socialistas; incendian los locales del diario *Avanti*, de Milán; del diario *Lavoro*, de Génova, y ocupan el puerto de esta ciudad, plaza fuerte de las cooperativas obreras de los estibadores. Con esta táctica desgastan y desmoralizan al proletariado organizado, privándole de sus medios de acción, de sus puntos de apoyo, en espera de aniquilarlo definitivamente después de la conquista del poder”.³¹⁰

La amenaza fascista colocó al PSI y a los sindicatos ante una disyuntiva decisiva. ¿Cómo afrontaron las organizaciones obreras el avance del fascismo? ¿Cómo reaccionaron frente a la burguesía y su aparato estatal? “En lugar de explicar la naturaleza del fascismo a los trabajadores y qué ocurriría si Mussolini llegaba el poder —escribe Ted Grant— los dirigentes [socialistas] persistieron en engañarse a sí mismos y a sus seguidores diciendo *que el Estado capitalista les protegería de la amenaza de estas bandas ilegales* (...) Los socialistas llegaron incluso al punto de firmar un pacto de paz con Mussolini el 3 de agosto de 1921. Esto se hizo a iniciativa del primer ministro liberal, que deseaba ‘reconciliar’ a los socialistas con los fascistas (...) Los camisas negras utilizaron esta posición para prepararse mejor. Denunciaron el pacto y redoblaron su ofensiva contra las organizaciones obreras. Los socialistas suplicaban al Estado para que emprendiera alguna acción contra los fascistas. Y el Estado lo hizo. *Empezaron las redadas, no contra los fascistas, sino contra los trabajadores y sus organizaciones*”.³¹¹

El fiasco de la política de los dirigentes socialistas para combatir el fascismo provocó que miles de militantes de izquierdas de diferentes tendencias, sindicalistas revolucionarios, socialistas de izquierda, jóvenes comunistas, organizaran sus propios grupos de autodefensa antifascistas denominados *Arditi del Popolo* (“Atrevidos del Pueblo”). Desgraciadamente, el joven y débil Partido Comunista³¹² adoptó una postura ultraizquierdista hacia el frente único antifascista, negándose a integrarse en los Atrevidos del Pueblo y creando sus propios escuadrones de acción, postura duramente criticada por Lenin y la dirección de la Internacional Comunista. En todo caso, el deseo de combatir a los fascistas y desarmarlos estaba firmemente arraigado entre las masas. Así, en la primavera de 1922, la clase obrera volvió a la batalla, muy intensa entre junio y julio, obligando a los sindicatos a formar la Alianza Italiana de los Trabajadores, pero las cúpulas reformistas hicieron todo lo posible para que los obreros no desbordaran los límites de la legalidad burguesa.³¹³ A menos de dos años del bienio rojo, la clase obrera protagonizó una nueva oleada de luchas contra el fascismo pero, una vez más, carecía de una dirección revolucionaria, o al menos de una dirección probada. Los líderes del PSI, que pretendían que el gobierno reaccionario parase los

³¹⁰ Daniel Guérin, *Fascismo y gran capital*, Ed. Fundamentos, Madrid, 1973, pp. 160-162.

³¹¹ Ted Grant, “La amenaza del fascismo. Qué es y cómo combatirlo”, en *Obras*, vol. I, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2007, p. 188.

³¹² El fracaso revolucionario de septiembre de 1920 empujaría al nacimiento del Partido Comunista Italiano, tras la escisión vivida por el PSI en su congreso de enero de 1921, en Livorno.

³¹³ La AIL estaba formada por la CGdL (1.850.000 afiliados en 1922, de los que 415.000 eran la minoría comunista; la mayoría se repartía entre maximalistas y fieles a Turati y D’Aragona), la USI (sindicato anarcosindicalista escindido de la CGdL en 1912, con 320.000 afiliados); la UIL (175.000 afiliados), el SFI (un sindicato ferroviario anarquista con 120.000 afiliados) y la FLP (portuarios, 100.000 afiliados). La actitud de los dirigentes del PCI hacia este frente único fue sectaria, oscilando entre la participación crítica y el boicot.

pies a los fascistas³¹⁴, llamaron a una “huelga por la legalidad” para finales de agosto, cuando los trabajadores ya estaban agotados tras meses de batalla desarticulada y desarmada contra la represión.

A partir de esta segunda derrota, el camino quedó completamente allanado para los fascistas. Los ataques de las bandas de Mussolini se hicieron aún más duros, obligando a los comunistas a pasar a la semiclandestinidad. Pero lo fundamental es que la decisión de apoyar a Mussolini para que se apoderase del poder había sido tomada. Los líderes de la Asociación de la Banca, la Federación de la Industria y la Federación Agrícola, que habían financiado con millones de liras la marcha fascista sobre Roma de octubre de 1922, lo apoyaban incondicionalmente. Finalmente, y a pesar de que los fascistas sólo tenían 35 diputados de un total de 600, el rey, obediente ante las exigencias de la burguesía, entregó el poder a Mussolini. Los dirigentes socialistas hicieron como si no pasase nada. Participaron activamente en las elecciones de abril de 1924, las últimas de aquel período, pero se mantuvieron impotentes ante la escalada fascista. Como señala Daniel Guérin: “Cuando, a raíz del asesinato de Matteotti, la indignación conmueve toda la península, los socialistas no saben explotar la situación: ‘En aquel momento preciso en que hubiera sido necesario salir a la calle y lanzarse a la insurrección —dice Nenni, dirigente del ala izquierda del PSI—, fue la táctica de la lucha legal en el terreno judicial la que prevaleció’. La oposición se contentó con no aparecer en el parlamento, en señal de protesta, retirándose del Aventino, como la antigua plebe. ‘¿Qué hacen nuestros enemigos? —dice Mussolini en la cámara— ¿Desencadenan huelgas generales o al menos parciales? ¿Organizan manifestaciones en la calle? ¿Tratan de provocar revueltas en el ejército? Nada de eso. Se limitan a las campañas de prensa’ [discurso de julio de 1924]”.³¹⁵

Una vez en el poder, Mussolini liquidó con rapidez las instituciones parlamentarias, ilegalizó las organizaciones obreras, asesinó a cientos de activistas y encarceló u obligó a exiliarse a miles más. Tras quebrar la capacidad de resistencia del movimiento obrero organizado, el Estado autoritario de Mussolini, a través de su legislación reaccionaria, les proporcionó a los grandes empresarios los medios legales para que obtuviesen grandes plusvalías. Las noticias del triunfo fascista en Italia entusiasmaron a la burguesía española y europea: no había mejor prueba de que la amenaza revolucionaria se podía combatir exitosamente, aunque fuera a costa de implantar una dictadura y acabar con las instituciones de la democracia burguesa.

LA CRISIS ESPAÑOLA SE PROFUNDIZA. LA DERROTA MILITAR EN MARRUECOS

La apuesta de la clase dominante española a favor de una salida autoritaria se reforzó con los acontecimientos italianos. Una capa de los generales españoles, de profundas convicciones reaccionarias, ya hacía tiempo que se había convencido de que sólo la fuerza militar podría acabar con la crisis del país. También Alfonso XIII se sentía atraído por esta opción, y en varias ocasiones les confesó a sus allegados la posibilidad de asumir personalmente el mando de un golpe militar. Con una clase obrera replegada tras el trienio bolchevique, las posibilidades de éxito para un golpe que pusiera punto y final a la sucesión de gobiernos inestables³¹⁶ y amordazase a los trabajadores habían madurado. La derrota militar en

³¹⁴ Turati, portavoz del PSI, apeló al rey en julio de 1922 para “recordarle que él era el defensor supremo de la Constitución”.

³¹⁵ Guérin, *op. cit.*, p. 191.

³¹⁶ La sucesión de gobiernos entre 1917 y 1923 es un reflejo de la enorme inestabilidad política del período. En 1917 hubo tres: dos encabezados por Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas (Partido Liberal), y otro por

Marruecos, en plena crisis política, fortaleció definitivamente estas tendencias en la cúspide del Estado.

A principios de la década de los veinte, el auge de la lucha de clases no impidió que el ejército y los plutócratas persistieran en su aventura colonial en Marruecos. Los intereses económicos que se ventilaban y el prestigio del Estado Mayor jugaron un papel de primer orden en añadir más desestabilización a una situación política que había perdido el equilibrio hacía años. Sin duda, la derrota de las tropas coloniales españolas frente al movimiento de liberación nacional que empezó a gestarse en el Rif determinó en un grado importante los acontecimientos políticos posteriores.

Con el fin de asestar un golpe militar al núcleo más importante de las tribus rifeñas, en enero de 1921 el ejército español, al mando del comandante general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, inició operaciones militares para alcanzar la bahía de Alhucemas. La moral de la tropa, integrada por soldados procedentes de levas forzosas, mal entrenada, escasamente pagada y peor alimentada, con un armamento pésimo, era muy baja. A pesar de todo, entre mayo de 1920 y junio de 1921, el general Silvestre logró un rápido avance a lo largo de 130 kilómetros, sin apenas sufrir bajas. Para consolidar esas posiciones llegó a acuerdos con los jefes tribales, a los que entregó cantidades importantes de dinero para asegurarse su lealtad, pero dejando intacto su armamento. Las fuerzas militares de la comandancia de Melilla se repartieron entre 144 puestos (blocaos), separados entre sí por una distancia variable (de 20 a 40 kilómetros), a lo largo de los 130 kilómetros, lo que hacía imposible organizar una defensa adecuada.³¹⁷ La situación de la tropa en aquellos emplazamientos era infrahumana, agobiados por el calor asfixiante de la mañana y el frío de la noche, en condiciones higiénicas insalubres, con las ratas y los piojos campando a sus anchas.

En mayo de 1921, el grueso del ejército español estaba concentrado en su campamento base, en la localidad de Annual, desde donde el general Silvestre pretendía lanzar el asalto final sobre Alhucemas. Entre Melilla y Annual, las tropas españolas disponían en teoría de tres plazas fuertes, distantes entre sí unos 30 Km., y para defender el campamento se había establecido un anillo formado por pequeños fortines cuya guarnición oscilaba entre los 100 y 200 hombres. A finales de mayo, las tropas del general Silvestre cruzaron el río Amekran y establecieron una fortificación en el monte Abarrán. En ese momento, las amenazas del líder de las cabilas³¹⁸ rifeñas fueron despachadas con arrogancia por el general Silvestre: “Este hombre, Abd el-Krim, es un necio. No voy a tomarme en serio las amenazas de un pequeño caíd bereber a quien, hasta hace poco, había otorgado clemencia. Su insolencia merece un nuevo castigo”.³¹⁹ Esta actitud de desdén arrogante hacia el líder nacionalista rifeño tuvo su precio. A media tarde del 1 de junio, Abd el-Krim inició el ataque contra Abarrán: el ejército español sufrió 141 bajas, incluyendo a todos los oficiales menos uno. Animado por el éxito, el ejército guerrillero de Abd el-Krim atacó al día siguiente la base costera de Sidi Dris, que cercó durante 24 horas, tras las cuales fue rechazado. La moral de los rifeños era exultante: en sólo unos días, los rebeldes armados pasaron de 3.000 a 11.000 hombres.

Eduardo Dato Iradier (Partido Conservador). En 1918 otros tres, encabezados por Antonio Maura y Montaner (Partido Conservador), García Prieto y Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, conde de Romanones (Partido Liberal). En 1919 también hubo tres: el de Maura (Partido Conservador), el de Joaquín Sánchez de Toca (Partido Conservador) y el de Manuel Allendesalazar (Partido Conservador). En 1920, Dato se situó de nuevo al frente del ejecutivo. En 1921, hubo dos, uno de Allendesalazar y otro de Maura. En 1922 otros dos, con José Sánchez Guerra y Martínez (Partido Conservador) y con, de nuevo, el viejo prohombre de la monarquía, García Prieto. En total, quince gobiernos en siete años.

³¹⁷ El ejército español disponía de 19.923 hombres para controlar los 5.037 km² del territorio que ocupaba.

³¹⁸ Comunidades bereberes.

³¹⁹ Miguel Martín, *op. cit.*, p. 68.

La arrogancia de los militares españoles jugó a favor de los rifeños. A pesar de esos ataques, no se tomó ninguna medida para proteger el campamento de Annual. Al contrario, Silvestre se desplazó a Melilla para entrevistarse con el general Dámaso Berenguer, alto comisario español en Marruecos, a fin de conseguir más recursos para lo que pensaba sería la ofensiva final sobre Alhucemas. Pero sus cálculos resultaron estar totalmente equivocados. El 17 de julio, Abd el-Krim lanzó un gran ataque. En la guarnición de Igueriben, 350 soldados fueron sitiados hasta que el día 22 cayó en manos rifeñas. “Las tropas acorraladas en Igueriben, contaba uno de los supervivientes, habían agotado sus reservas y, careciendo de agua, tenían que lamer la parte húmeda de las rocas y beber orina con azúcar”.³²⁰ La confianza de los soldados emplazados en Annual se desmoronó a pesar de los refuerzos. En una semana, se pasó de los 3.100 soldados que había al inicio del ataque contra Igueriben, a 5.000 hombres (3.000 españoles y 2.000 marroquíes). En total, 3 batallones y 18 compañías de infantería, además de 3 escuadrones de caballería y 5 baterías artilleras, una fuerza absolutamente insuficiente frente a 18.000 rifeños armados con fusiles y animados por una moral de victoria.

La historia es conocida. Sin apenas víveres ni municiones, sin agua, el general Silvestre y los oficiales al mando acordaron la evacuación. En lugar de orden y planificación, el caos más absoluto se apoderó del mando y la tropa ante el avance de tres columnas rifeñas de 2.000 hombres cada una. Los planes de evacuación saltaron en pedazos y la policía indígena, encargada de cubrir la huida de las tropas españolas, se unió a Abd el-Krim. En su inmensa mayoría, los soldados huyeron a la carrera en completo desorden. El general Silvestre se disparó un tiro en la sien, aunque otra versión habla de que fue abatido por los rifeños. Durante las cuatro horas que duró el ataque, murieron unos 2.500 soldados españoles, a los que hay que sumar otros 1.500 caídos en las posiciones defensivas en torno a Annual.

“Cuando se extendieron las noticias del desastre español —escribe Miguel Martín—, miles de rifeños se apresuraron a unirse a Abd el-Krim. Muy pronto todo el Rif estuvo en armas contra los invasores y la mayor parte de los regulares de la región comenzaron a desertar (...) El general Navarro, segundo en mando después de Silvestre, intentó durante siete días contener la derrota. Finalmente el 29 de julio, reunió a 3.000 fugitivos para mantenerse en Monte Arruit, a 70 Km. de Annual y a 30 de Melilla. El 2 de agosto es liberado Nador por los rifeños, el 3 toman Zeluán, días después cercan Monte Arruit (...) El pánico reinaba en la ciudad [de Melilla]. Se esperaba la entrada de Abd el-Krim de un momento a otro. Juan Berenguer, en su novela *Melilla la codiciada*, describe el ambiente: ‘en la mañana del día 23 de julio de 1921, se celebraron como de ordinario los oficios divinos en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. En alguien pudo más el miedo que el pudor de la entereza masculina y esparció la noticia de que los moros venían carretera adelante, desde Nador, dispuestos a penetrar en la ciudad. Pocos minutos fueron suficientes para que la nueva se esparciese por Melilla entera, produciéndose un movimiento inolvidable; en las calles corría la gente alocada demandando refugio en la vieja fortaleza, los patios de los cuarteles se vieron asaltados. Huían gentes dando gritos por las calles, como si ya vinieran los rebeldes, y en el furor de la desmoralización se produjeron escenas horrorosas’. El 24 de julio llegaban 4.500 soldados procedentes de Ceuta a mando de Sanjurjo, González Tablas y Franco”.

Los rifeños tuvieron al alcance de la mano un triunfo decisivo. El valor y la audacia de los campesinos liderados por Abd el-Krim podían haber barrido la resistencia de los mandos africanistas en Melilla, pero, en el momento decisivo, las vacilaciones y la falta de una política revolucionaria consecuente por parte de los líderes del movimiento nacionalista marroquí jugaron un papel muy negativo: “Abd el-Krim no intentó entrar. Si lo hubiese hecho, es indudable de que también hubiese liberado Melilla. ¿Por qué no lo hizo? Creemos

³²⁰ *Ibid.*, p. 69.

que subestimó sus propias fuerzas y sobrevaloró las de los españoles. Militarmente la ciudad era suya, porque dominaba el [monte] Gurugú; moralmente sus hombres estaban dispuestos, mientras que los españoles procuraban buscar el barco que les llevase hasta Málaga y, después de su impresionante triunfo, era bastante superior numéricamente. A la vez, debió pensar que tomar Melilla tendría tal repercusión internacional que las potencias europeas podían coaligarse contra él. Temor sin sentido, puesto que lo que había hecho, hacer retroceder a los españoles hasta el mismo borde del mar, tenía igual significado. De cualquier forma, Melilla siguió en manos coloniales por la falta de decisión de los rifeños más que por las virtudes de un ejército derrotado”.³²¹

Abd el-Krim se granjeó el apoyo masivo de la población rifeña, al punto de que proclamó la República del Rif y mantuvo el desafío contra la ocupación durante años. La derrota militar española de 1921 fue tremenda. El número de muertos oscila según las fuentes: el expediente de la comisión Picasso, que investigó el desastre, los cifra en 13.363 (10.973 españoles y 2.390 colaboradores marroquíes), frente a sólo mil rifeños. Indalecio Prieto da la cifra de 8.668 españoles muertos o desaparecidos. Pero no fue sólo la sangre vertida de los trabajadores y campesinos españoles lo que dejó al descubierto esta nueva aventura militar de la burguesía española. El desastre de Annual destapó la olla podrida en que se había convertido el ejército monárquico: “Después de una docena de años de guerra contra un enemigo manifiestamente inferior (...) poco a poco fueron conociéndose detalles de las hazañas militares. Silvestre no consultaba a su Estado Mayor porque consideraba que sus cojones suplían cualquier planificación. Los aviones de la base aérea de Zeluán no despegaron porque los pilotos, normalmente, pasaban el día en Melilla. En 1920, once capitanes que habían cumplido la misión de tesoreros en sus unidades dimitieron para evitar que fueran descubiertos sus desfalcos —un millón de pesetas había desaparecido de Larache en manos de estos oficiales de Intendencia—. El centenar largo de cañones que había caído en manos de Abd el-Krim fueron abandonados sin hacer uso de ellos. El presupuesto del jaifa de Tetuán era de ocho millones y medio de pesetas, medio millón menos que la familia real española (...) y para tan brillantes logros el *Anuario Militar* nos dice que el ejército contaba con 466 generales en activo y que el presupuesto militar consumía más del 51% de los fondos del Estado. El capítulo de gastos especiales reservados a Marruecos había crecido en tres veces y media, entre 1913 y 1921”.³²²

El desastre de Annual originó una tremenda crisis política que en nada favorecía los planes contra el movimiento obrero. Es más, la complicación de la cuestión colonial podía reactivar la lucha de masas en un momento de gran incertidumbre. La caída del gobierno de Allendesalazar dio paso a otro de concentración nacional, en agosto de 1921, con Antonio Maura al frente, pero las divisiones entre los políticos burgueses sobre la estrategia a seguir en Marruecos no hacía más que aumentar el descontento en los cuartos de bandera, ya muy exacerbado en aquellos años de ascenso revolucionario.

EL GOLPE DE PRIMO DE RIVERA

La investigación del desastre en el norte de África amenazaba con hundir todavía más el prestigio de la monarquía y, lo que era peor, comprometerla directamente con unos mandos militares que habían mostrado un enorme desprecio por la vida de sus soldados. Cuando el

³²¹ *Ibid.*, p. 70-71.

³²² *Ibid.*, p 78-79.

ministro de la Guerra ordenó al general Juan Picasso elaborar el expediente que lleva su nombre, sonaron todas las alarmas. El 18 de abril de 1922, la comisión encargada del informe concluyó sus investigaciones, habiéndose limitado a estudiar las operaciones militares en su aspecto técnico y soslayando las decisiones políticas. Su principal conclusión fue la incapacidad de los oficiales para hacer frente a la situación, por lo que proponía juzgar a 39 de ellos. Aunque el Consejo Supremo de Justicia Militar aprobó el expediente provisional y sus recomendaciones, la presión de la izquierda y el sentimiento contra la aventura militar, muy extendido entre la población, obligaron al gobierno a crear una comisión especial de las Cortes, integrada exclusivamente por liberales y conservadores, a fin de estudiar el expediente y ampliar la investigación. Para octubre de 1922, se habían presentado acusaciones contra 77 oficiales, pero los partidos republicanos y el PSOE solicitaron también una investigación sobre la implicación del rey. Demasiado “atrevimiento” para los militares y la Corona. El expediente Picasso no vería la luz hasta nueve años después.³²³

La crisis política se hizo insostenible. Cuando en abril de 1923 se convocaron nuevas elecciones a Cortes, los pilares del régimen de la Restauración estaban definitivamente quebrados. La convocatoria electoral pilló a las organizaciones obreras en pleno reflujó. Mientras la CNT llamó a la abstención, los comunistas apenas pudieron hacer oír su voz, diezmados por la represión —en enero, el secretario general, Núñez de Arenas, había sido acusado de un delito de lesa majestad por un artículo sobre Marruecos publicado en *La Guerra Social*, por lo que tuvo que exiliarse en Francia—. En Barcelona, la abstención fue considerable y los socialistas sólo consiguieron 3.000 votos. Pero el resultado del PCE fue mucho peor: en Madrid, el más votado de sus candidatos (Almoneda) consiguió 1.392 votos, frente a los 21.417 de Julián Besteiro. El PSOE consiguió siete diputados, su mejor resultado hasta ese momento. Perdida la oportunidad de la situación revolucionaria y ante una amenaza golpista que cada día era más evidente, una parte considerable de la clase obrera, especialmente en Madrid, concentró su voto en los candidatos socialistas.

Gracias al caciquismo tradicional, el bloque liberal logró 223 escaños, lo que representaba el triunfo de los partidos que habían pedido públicamente responsabilidades por el desastre de Annual. Los resultados sentaron muy mal en los círculos castrenses, que seguían reprochando al gobierno y a los partidos que los apoyaban su negativa a conceder recursos materiales y humanos para continuar la guerra. Los debates en las Cortes, desde que abrieron sesión el 6 de abril hasta su clausura en el verano, giraron en torno a la cuestión marroquí.

En 1923 la situación era crítica. A pesar de que la ofensiva revolucionaria estaba en claro descenso, la burguesía no podía aceptar aquella inestabilidad ni el precario equilibrio entre las clases. El gobierno, el parlamento y los viejos políticos liberales y conservadores se desacreditaban día a día sin poder resolver una situación que había escapado a su control. En semejante coyuntura, sectores decisivos de la oligarquía estaban dispuestos a todo con tal de restaurar su tasa de beneficios y acabar de una vez por todas con la crisis política crónica. Ya lo habían dejado claro, al menos desde 1921, inclinando la balanza hacia una solución represiva para aplastar las organizaciones obreras.³²⁴ Ante la evidencia de que el movimiento

³²³ El antiguo diputado Bernardo Mateo Sagasta Echevarría ocultó el expediente en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Allí permaneció hasta la proclamación de la Segunda República, cuando fue devuelto a las Cortes y publicado.

³²⁴ La plutocracia industrial, se mostraba completamente intransigente al respecto, apoyando a individuos como Félix Graupera, presidente de la patronal barcelonesa en los años de posguerra y auspiciador de los años de plomo, que presentó su programa en el congreso de 1919 de la Confederación Patronal, celebrado en Barcelona: “La situación que el desarrollo del sindicalismo ha creado a la producción nacional es ya insoportable moral y materialmente. No parece que lo entiendan así los gobiernos de España que, de concesión en concesión, van sometiendo a la clase patronal a un régimen imposible de humillaciones y cargas materiales” (Mercedes Cabrera, *op. cit.*, p. 192). Ese llamamiento precedió al gran cierre patronal en la ciudad condal.

obrero carecía de una dirección revolucionaria a la altura de las circunstancias, la burguesía decidió aprovechar la oportunidad y resolver la situación en los términos más satisfactorios para ella. Si el control del orden público estaba en un grado considerable en manos de los militares, ¿por qué no dar un paso más y cederles el poder político para estabilizar la situación y garantizar un período prolongado de paz social?

En medio de continuas fricciones entre el gobierno y los militares, el 24 de julio de 1923 las Cortes suspendieron sus sesiones, aplazando hasta octubre la presentación del expediente Picasso. Simultáneamente, la situación en Marruecos empeoraba ante la audacia de los rifeños y la incapacidad del ejército español para recuperar el control del territorio. La decisión de recurrir a nuevas quintas aumentó el descontento: se sucedieron los motines entre los soldados, que se negaban a ser embarcados, y nuevas protestas obreras contra la guerra, como las organizadas por el PCE entre los mineros de Peñarroya y Bilbao. La crisis política alcanzó un punto crítico en septiembre, cuando varios ministros dimitieron por su negativa a aceptar las exigencias del Estado Mayor para enviar más hombres y aumentar el presupuesto militar. Intereses estratégicos de primer orden confluían tratando de buscar una salida al *impasse*.

Cuando el 13 de septiembre de 1923 el jefe del gobierno, García Prieto, hizo pública una nota informando de la declaración del estado de guerra en Catalunya por parte de su capitán general, Miguel Primo de Rivera, la suerte del sistema pseudoparlamentario de la Restauración quedó echada. Los intentos de que el rey parase el golpe y detuviese a los implicados fueron patéticos, pues Alfonso XIII recibió entusiasmado las noticias de la asonada. Al día siguiente, despachó cortésmente la petición de su gobierno al respecto e inmediatamente procedió a confirmar a Primo de Rivera como presidente del gobierno.

El golpe militar buscaba salvar el capitalismo español a través de una dictadura bonapartista, autoritaria y corporativa. Fueron años muy difíciles para los obreros revolucionarios y su vanguardia organizada, colmados de represión, cárcel y clandestinidad, pero también de desorientación por la vergonzosa colaboración de los dirigentes reformistas del PSOE con el régimen. Tiempos en que los sermones de no pocos compañeros de viaje desmoralizados pronosticaban una larga vida a la dictadura. Pero, a pesar de todas las apariencias iniciales, en seis años el régimen militar se desmoronó y la monarquía de Alfonso XIII entró en su agonía.

LA ACTITUD DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

La reacción de las organizaciones obreras frente al golpe militar fue muy limitada, aunque hay que distinguir entre aquellas que trataron de movilizar y las que simplemente hicieron vagas declaraciones públicas de fe en la democracia pero se negaron en redondo a impulsar la lucha. Entre las primeras destacó el PCE, que, pese a su escasa influencia, trató por todos los medios a su alcance de organizar una respuesta. El 31 de agosto, el PCE creó un comité del frente único en Madrid, junto con la CNT y la Federación de Grupos Anarquistas local, al cual los cenetistas de Barcelona y los socialistas se negaron a adherirse. El mismo día del golpe, los grupos madrileños del PCE y la CNT hicieron público un manifiesto anunciando la formación de un comité de acción para luchar contra la dictadura y la guerra de Marruecos. El PCE llamó en Bilbao a una huelga general de 24 horas, la única en todo el Estado español, en la que también participaron militantes socialistas.

La represión contra el PCE fue fulminante: en noviembre, destacados dirigentes de su comité central fueron encarcelados; en diciembre, las detenciones se extendieron a diversas ciudades.

Hubo numerosos registros y clausuras de locales, y a partir de ese momento el partido fue perseguido incesantemente, con un comité central tras otro cayendo en manos de la policía. La dictadura de Primo cortó de cuajo el precario desarrollo del PCE, acentuando las enormes dificultades objetivas y subjetivas que habían condicionado su avance.³²⁵

La resistencia al golpe en Catalunya fue nula. Aunque la destitución de Martínez Anido había permitido una cierta reestructuración de la CNT, su situación era realmente difícil. Tras el golpe, Martínez Anido reaparecería como ministro de la Gobernación. El plan de la CNT era llegar a un acuerdo con la UGT para lanzar una huelga general conjunta contra el golpe. A tal fin, Manuel Buenacasa se trasladó a Madrid para entrevistarse con Pablo Iglesias y convencerlo. Pero tanto este último como Largo Caballero, que también participó en la reunión, rechazaron la propuesta.

Con el golpe ya en marcha, las pugnas internas en la CNT se desataron una vez más. Lo cierto es que, después del trienio bolchevique, la clase obrera catalana estaba exhausta y la tendencia era de reflujo general. El debate en torno a la postura que la CNT debería adoptar frente a la dictadura agudizó el enfrentamiento entre los partidarios de una actuación abierta y los que planteaban pasar a la clandestinidad, un debate resuelto por la propia realidad. “Durante los primeros cuatro años de la dictadura —señala José Peirats— la actividad de los militantes quedó reducida a una labor doctrinaria intermitente. Clausurados los sindicatos en Cataluña y suprimido el diario *Solidaridad Obrera*, subsisten en algunas capitales de provincias algunos periódicos con vida más o menos precaria”.³²⁶ En la práctica, la CNT dejó de existir, golpeada por una represión sin tregua, en la que los anarquistas pudieron controlar los maltrechos comités clandestinos, aunque sin apenas influencia real entre los trabajadores.

Tras su comportamiento refractario hacia los grandes acontecimientos revolucionarios del trienio bolchevique, la actitud de las direcciones del PSOE y la UGT hacia el golpe no podía sorprender. Sus posturas en aquellos años habían ofrecido una prueba inequívoca del abandono de una orientación revolucionaria. Declinaron conscientemente encaminar aquel gran movimiento de masas hacia la revolución, así que, tras el golpe, no estaban preparados en absoluto para ofrecer una resistencia seria, salvo vagas declaraciones de condena y, sobre todo, una cautela miserable, con vistas a asegurar la continuidad de su actividad bajo el gobierno militar.

Al conocerse en Madrid el golpe, las comisiones ejecutivas del PSOE y la UGT mantuvieron una reunión extraordinaria e hicieron público un manifiesto —firmado por Pablo Iglesias y Francisco Núñez, en nombre del partido, y Largo Caballero y Besteiro, por el sindicato— en el que, tras señalar que “ningún vínculo de solidaridad ni siquiera de simpatía política” les ligaba al gobierno golpista, llamaban al pueblo a no tomar ninguna iniciativa sin recibir antes las directrices de ambas organizaciones. El 15 de septiembre, reunidas de nuevo, tomaron el siguiente acuerdo: “1) Ratificarse en los acuerdos publicados el día 13. 2) Reiterar a la clase trabajadora la necesidad de abstenerse de tomar cualquier iniciativa a que pudiera ser invitada por impacientes de buena fe o por elementos que aspiren, con apariencias engañosas, a lanzar

³²⁵ “El fracaso del surgimiento [en el Estado español] de ese gran partido leninista se debió, en cierto grado, a causas puramente contingentes (...) su mayor desgracia fue el hecho de que (sobre todo, a causa de las habilidades tácticas de los socialistas anti-Comintern) nació tarde (en abril y noviembre de 1921) y, así, salió a escena cuando la ola revolucionaria de la posguerra y el entusiasmo pro-bolchevique ya habían sobrepasado la cima. Entre otras cosas, este retraso significó que el nuevo partido iba a encontrarse, en plena fase de formación, con toda la fuerza de las medidas represivas que siguieron a la muerte de Dato y al desastre de Annual: dos acontecimientos con los que los comunistas no tuvieron ninguna relación, pero por los cuales pagaron un alto precio. El partido sufrió severamente a resultas de las medidas gubernamentales, y el reiterado encarcelamiento de los militantes comunistas fue un obstáculo formidable para las actividades organizadoras y de afiliación”. Meaker, *op. cit.*, p. 613.

³²⁶ José Peirats, *La CNT en la revolución española*, AA La Cuchilla, Colombia, 1988, p. 39.

al proletariado a movimientos estériles que puedan dar pretexto a represiones que ansía para su provecho la reacción. 3) Hacer constar nuevamente que estos comités proceden con independencia de toda organización ajena al Partido Socialista y a la UGT, y reclaman para sí exclusivamente la responsabilidad de las instrucciones que en este momento dan a sus afiliados y simpatizantes, así como recabarán las que puedan dar en circunstancias distintas, si éstas les aconsejasen a variar de conducta”. Días después, en una nota oficiosa, “negaban que el Partido y la Unión hubieran autorizado a nadie para declarar movimientos ni algaradas que no creían oportunos en orden a la propia supervivencia del movimiento obrero. Al tiempo rechazaban la propuesta de frente único que se les había formulado”.³²⁷

El 22 de septiembre, *El Socialista* invitaba a actuar “dentro de los cauces legales, sin dar el menor pretexto a resoluciones que, no beneficiando las ideas, perjudicarían los intereses del proletariado y el país en general”.³²⁸ El 1 de octubre, Manuel Llana, dirigente de la UGT asturiana, se entrevistó con el dictador gracias a la mediación del gobernador militar de Oviedo, el general Bermúdez de Castro, con el que el dirigente asturiano mantenía una buena relación. En la entrevista se trató acerca de la colaboración de la UGT y el PSOE con la dictadura, un objetivo permanente de Primo de Rivera para sus proyectos de “reconstrucción nacional”. Lo cierto es que Llana no hizo ninguna consulta a los dirigentes de los comités nacionales de la UGT y del PSOE antes de la entrevista, tras la cual declaró: “No hay nada que temer”. Un mes más tarde, el gobernador militar de Madrid, duque de Tetuán, realizó una visita, que tuvo mucha publicidad, a la Casa del Pueblo, considerada muy satisfactoria en medios del nuevo régimen. La actitud del aparato socialista en esos días dibujó anticipadamente su política de colaboración, apenas disimulada, con el nuevo régimen militar.

UNA DICTADURA BONAPARTISTA

Es innegable que la experiencia de Mussolini inspiró a Primo de Rivera, que lo cubrió de elogios cuando se reunió con él, presentándolo como “el apóstol de la campaña contra la anarquía y la corrupción política”. Pero, a pesar de sus deseos, Primo nunca contó con la base de masas de la que disfrutó el régimen fascista italiano en sus primeros años, una diferencia muy notable que pesaría decisivamente en el desenlace final.

A la hora de caracterizar la naturaleza política de la dictadura primorriverista es necesario comprender las particularidades del contexto social. Si la dominación capitalista se realiza normalmente, al menos en los países más desarrollados, a través de un régimen de democracia burguesa, en los más atrasados la capacidad para comprar la paz social mediante concesiones a los trabajadores es mucho menor. En condiciones de democracia burguesa, la principal muleta de la burguesía son las direcciones reformistas de las organizaciones sindicales y políticas de la clase obrera, pero en el Estado español esta línea de defensa se mostró absolutamente inadecuada. Llegados a un punto decisivo, los capitalistas españoles prescindieron de sus representantes políticos tradicionales y su sistema parlamentario, tras dar sobradas muestras de incapacidad para resolver una crisis que se hacía agónica. Así fue cómo se despejó el camino para entregar el poder a un general como Primo de Rivera. En palabras de Ted Grant:

³²⁷ Enrique Guerrero, *El socialismo en la dictadura de Primo de Rivera*, <http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolitico-1978-1-13040&dsID=PDF>.

³²⁸ Meaker, *op. cit.*, p. 609.

“Esa es la esencia del bonapartismo: la delegación del poder en una figura que se presenta como árbitro entre las clases, como moderador de los diferentes intereses, pero que inevitablemente defiende los de la clase dominante (no necesariamente sin tensiones entre ésta y aquél). El bonaparte surge cuando existe un cierto empate entre las clases, en el sentido de que la burguesía no puede seguir dominando como antes y la clase obrera no es capaz todavía de tomar el poder (para lo cual, entre otras cosas, es un elemento fundamental la existencia de un partido revolucionario con una influencia determinante en el movimiento) (...) El bonapartismo, el *dominio de la espada sobre la sociedad*, representa una situación donde el Estado asume una independencia relativa de las clases, equilibrándose entre clases hostiles y arbitrando entre ellas. Sin embargo, sigue siendo un instrumento sobre todo de los grandes capitalistas. Napoleón se basó en el apoyo de los campesinos y pudo mantenerse durante todo un período histórico debido al desarrollo de las fuerzas productivas en Francia durante tal período. Así, Napoleón el Pequeño³²⁹ estableció su poder en Francia con un golpe de Estado en 1851. Marx, en *El 18 brumario de Luis Bonaparte*, describió la situación de la siguiente forma: ‘El Estado ha retrocedido a su forma más primaria, donde prevalece el dominio despiadado de la espada y el gobierno tiránico’. (...) Esa es la esencia del bonapartismo: una dictadura policiaco-militar, desnuda, el ‘árbitro’ con la espada. Un régimen que indica que los antagonismos dentro de la sociedad se han hecho tan grandes que la maquinaria estatal, para ‘regular’ y ‘ordenar’ estos antagonismos, mientras permanece como un instrumento de los dueños de la propiedad, asume cierta independencia respecto a todas las clases. Un ‘juez nacional’ que concentra el poder en sus manos, que ‘arbitra’ personalmente los conflictos dentro de la nación, enfrentando a una clase contra otra, pero que sin embargo sigue siendo una herramienta de los dueños de la propiedad”.³³⁰

Los párrafos anteriores analizan con claridad el fenómeno del bonapartismo y sirven para caracterizar la dictadura de Primo de Rivera como un régimen bonapartista y diferenciarlo del fascismo. En un artículo escrito para responder a las simplificaciones de los estalinistas, Trotsky señalaba lo siguiente: “¿Qué es el fascismo? El nombre se originó en Italia. ¿Fueron fascistas todas las dictaduras contrarrevolucionarias, o no? Nos referimos a las anteriores al advenimiento del fascismo en Italia. La última dictadura española de Primo de Rivera (1923-1930) es calificada como fascista por la Internacional Comunista. ¿Es esto correcto o no? Nosotros creemos que es incorrecto. En Italia, el movimiento fascista fue un movimiento espontáneo de amplias masas, con nuevos líderes desde sus bases. En sus orígenes es un movimiento plebeyo dirigido y financiado por el gran poder capitalista. Surgió de la pequeña burguesía, de las capas proletarias más bajas y, hasta cierto punto, de las masas proletarias. Mussolini, un ex socialista, es un hombre que se formó a sí mismo y surgió de este movimiento. Primo de Rivera era un aristócrata. Poseía un alto grado militar, ocupaba un puesto administrativo importante y era gobernador jefe de Cataluña. Realizó su movimiento con la ayuda de fuerzas estatales y militares. Las dictaduras en España e Italia son dos formas dictatoriales totalmente diferentes. Es necesario distinguir una de otra”.³³¹

³²⁹ Luis Napoleón, así apodado por las enormes diferencias con su tío Napoleón el Grande.

³³⁰ Ted Grant, “Democracia o bonapartismo en Europa. Respuesta a Pierre Frank”, en *Obras*, vol. I, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, pp.154-155. En este trabajo sobresaliente, Ted Grant sigue los análisis realizados por Trotsky, que abordó la cuestión del bonapartismo y el fascismo en muchos textos que representan una de sus principales contribuciones al desarrollo de la teoría marxista. La mayoría de ellos han sido publicados por la FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS en *La lucha contra el fascismo*.

³³¹ Citado por Manuel Pastor en *Ensayos sobre la dictadura: bonapartismo y el fascismo*. Ed. Tucur, Madrid, 1977 p. 103.

El profesor Raúl Morodo también analizó la cuestión: “¿Cómo se puede tipificar la dictadura de Primo de Rivera? Ante todo, no fue un fascismo (...) A mi juicio, tanto por la relación de las clases entre sí como por los instrumentos organizativos que monta Primo de Rivera (política plebiscitaria, identificación jefe-pueblo) e incluso por la propia ideología ambigua del dictador —más, desde luego, que los amigos que le rodean—, el

Los rasgos bonapartistas del régimen de Primo ya están presentes en su demagógica proclama del 13 de septiembre: “Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando la Patria, no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política, de los hombres que, por una u otra razón, nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonoroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos dicen no dejan gobernar, aludiendo a los que han sido su único, aunque débil, freno, y llevaron a las leyes y costumbres la poca ética sana, este tenue tinte de moral y equidad que aún tienen, pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles que representen nuestra moral y doctrina (...) Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la Patria preparamos. Españoles: ¡Viva España y viva el Rey!”.

Los grandes exponentes de la burguesía nacional, especialmente los empresarios catalanes, se implicaron activamente en el golpe: “La dictadura española —escribió Francesc Cambó más tarde— nació en Barcelona y la creó el ambiente de Barcelona, donde la demagogia sindical tenía una intensidad y una cronicidad intolerables”.³³² En palabras de Tuñón de Lara, “Cambó colmó de alabanzas ‘la obra que acaso en julio de 1917 no debieron retrasar [los generales] ni un minuto’ (...) En realidad, la Lliga [Regionalista] había apoyado entusiastamente el gesto del capitán general de Cataluña, que fue despedido por representantes calificados de la misma (y de la organización patronal Fomento del Trabajo) al tomar el tren para Madrid”.³³³ La víspera del golpe, Primo de Rivera se reunió en el hotel Font Romeu de Barcelona con diversos personajes, entre ellos el presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Puig i Cadafalch. Primo les leyó su manifiesto y los presentes le prometieron el apoyo del empresariado catalán a cambio de la protección a las industrias y la concesión de autonomía para Catalunya. Por su parte, el conde Güell y futuro tercer marqués de Comillas, amigo de Primo desde que en 1911 fue de voluntario a África, no se apartó de su lado en la noche del 12 al 13 de septiembre, como tampoco lo hizo Alfonso Sala, destacado industrial y político monárquico.³³⁴ Pero no sólo la burguesía catalana apoyó entusiastamente el golpe. Lo más granado del capital industrial y financiero, por no hablar de los grandes terratenientes, vio en la asonada de Primo el camino más efectivo para restablecer el orden: “Como capitán general de Barcelona y amigo íntimo de los empresarios textiles catalanes, Primo era perfectamente consciente de la amenaza anarquista a que estaban sometidos. Además, por su procedencia de una familia terrateniente de Jerez, también tenía conciencia de las agitaciones campesinas del llamado trienio bolchevique de 1918 a 1921. Así pues, Primo era el defensor pretoriano ideal de la coalición de empresarios y terratenientes que se había consolidado durante la gran crisis de 1917”.³³⁵

pronunciamiento militar viene configurado por dos notas: regeneracionismo y bonapartismo (...) Por ello, en gran medida, se puede definir la dictadura de Primo de Rivera como la versión española del bonapartismo. En otras palabras: la institucionalización del regeneracionismo con la técnica bonapartista”. Raúl Morodo, “El 18 Brumario español: La dictadura de Primo de Rivera”, en la revista *Triunfo*, Madrid, 15 septiembre 1973, pp. 22-27.

³³² Mercedes Cabrera, *op. cit.*, p. 194.

³³³ Tuñón de Lara, *Historia y realidad del poder*, Edicusa, Madrid, 1967, p. 118.

³³⁴ Mercedes Cabrera, *op. cit.*, p. 195.

³³⁵ Paul Preston, *La política de la venganza*, Ediciones Península, Barcelona, 2004, p. 55.

Primo de Rivera juró su cargo de jefe de gobierno el 15 de septiembre, nombró un directorio militar y declaró el estado de guerra, que duraría hasta el 16 de marzo de 1925. Los empresarios catalanes aplaudieron sus primeras decisiones, entre ellas la institucionalización del somatén y los nombramientos de Martínez Anido y de Arlegui como subsecretario de Gobernación y director general de Seguridad respectivamente. El gobierno de la espada conectaba perfectamente con las aspiraciones patronales. Fomento del Trabajo Nacional afirmó que el directorio militar tenía un “sola urgente misión que cumplir, proceder a formar una nueva estructura política, un nuevo sistema parlamentario que, eso sí, hiciera imposible el retorno de los antiguos elementos, tarea para la que no debía marcarse plazo fijo alguno”. Conectando con este ardor depurador, Primo reemplazó a los gobernadores civiles por comandantes militares, mientras 1.400 delegados militares recorrían el país destituyendo funcionarios. Pero, en realidad, pronto quedó claro que las estructuras del régimen anterior permanecieron, en lo esencial, inmovibles: “Sin duda, la inmensa mayoría de las élites del poder económico y del linaje aristocrático no estuvieron ausentes de las decisiones de la Dictadura, ni siquiera de la colaboración personal en muchos casos (...) El aparato caciquil, lejos de desaparecer, era utilizado para la Unión Patriótica, para el nombramiento de ayuntamientos por real decreto, para la organización del somatén. Nada, absolutamente nada cambiaba en un pueblo de la provincia de Salamanca, o de Córdoba, o de Lugo o de Badajoz”.³³⁶

Las primeras decisiones y gestos del dictador fueron del completo agrado de la burguesía, pero algunas veleidades demagógicas de su manifiesto causaron inquietud. Por ejemplo, la promesa de que toda denuncia de prevaricación, cohecho o inmoralidad “debidamente fundamentada” sería castigada. El 12 de octubre de 1923, Primo declaró incompatibles, con efectos retroactivos, “las altas funciones ministeriales con la de directores, consejeros, abogados o asesores de las grandes compañías o empresas de servicios públicos o contratistas del Estado”.³³⁷ En realidad, los deseos de Primo de insuflar en la actividad económica la decimonónica moral cuartelera y desconectarla del aparato político del Estado no tardarían en verse negados por sus propios actos. En este terreno, es evidente que la maquinaria estatal se colocó al servicio de los grandes monopolios capitalistas y de la oligarquía del país, que se vieron favorecidos por un amplio surtido de enchufismo, subvenciones y prebendas de todo tipo, a pesar de las iniciales promesas del dictador al hacerse con el poder.

LA GUERRA CONTRA ABD EL-KRIM

Una de esas promesas fue resolver de manera digna el problema de la guerra en Marruecos. Según estimaciones francesas, en diciembre de 1924 el ejército de la República del Rif contaba con más de 60.000 hombres, 100.000 fusiles, 300 piezas de artillería y cuerpos de ingenieros y transmisiones. Según Miguel Martín, “en los primeros días de marzo de 1924, la presión rifeña sobre el sector de Melilla se incrementó, atacando la posición avanzada de Tizi Azza. A la vez, las cabilas situadas en el cuadrilátero comprendido entre el río de Tetuán, Ayyeva, Uad Lau y la carretera de Tetuán a Xauen se incorporaban a la lucha, exterminando a las tropas españolas por toda la región (...) Ello vino a dar más extensión y claridad al movimiento nacional de liberación, que ya no podía ser limitado al Rif. Daba al mismo tiempo a la guerra una fuerza material y moral que provocó la derrota en todos los frentes españoles (...) A principios de julio, la ofensiva había alcanzado proporciones considerables.

³³⁶ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 121. La Unión Patriótica fue el partido creado por Primo.

³³⁷ Mercedes Cabrera, *op. cit.*, p. 197.

Casi todos los pueblos españoles situados en las montañas que rodeaban la ciudad estaban sitiados. Las tropas de ocupación eran incapaces de recobrar la iniciativa, aunque la fuerza aérea se desquitaba bombardeando y ametrallando una serie de pueblos en el territorio dominado por los nacionalistas, matando a cientos de mujeres y niños”.³³⁸

Con Abd el-Krim llevando la iniciativa, Primo de Rivera intentó pactar con él, para lo cual inició conversaciones secretas. La propuesta inicial fue la de conceder la “autonomía” a los rifeños en la zona que estos controlaban, propuesta rechazada por Abd el-Krim, que puso cuatro condiciones para la paz: 1) Reconocimiento de la independencia del Rif. 2) Pago por España de una indemnización de 20 millones de pesetas. 3) Entrega al gobierno del Rif de quince aviones y ciento veinte baterías de artillería de montaña. 4) Salida de todos los españoles de Marruecos.

Las perspectivas del conflicto no eran nada halagüeñas para la burguesía española. En una entrevista concedida al periodista inglés Webb Millar, Primo de Rivera declaró: “Abd el-Krim nos ha derrotado. Posee las ventajas inmensas del terreno y del fanatismo de sus seguidores. Nuestras tropas se hallan agotadas por una guerra que ha durado años. No ven el porqué de tener que luchar y morir por un pedazo de territorio sin valor alguno. Personalmente soy partidario de una completa retirada de África y de permitir a Abd el-Krim la posesión de sus dominios. Hemos gastado incontables millones de pesetas en esta empresa, sin recibir jamás un solo céntimo. Decenas de miles de hombres han muerto por un territorio cuya posesión no vale. Pero no podemos retirarnos totalmente porque los británicos no nos lo permitirían. Gran Bretaña ejerce una gran influencia sobre el rey y, como usted sabe, la reina es una princesa inglesa. Gran Bretaña teme que, si nos retiramos, el territorio será ocupado por Francia, lo que anularía el dominio sobre el estrecho de Gibraltar de los británicos. Es vital para los intereses imperiales de Inglaterra tener una potencia militar inferior, como España, al otro lado de Gibraltar. No le interesa tener allí una potencia fuerte como Francia”.³³⁹

En efecto, el problema marroquí no era sólo de incumbencia española. Los intereses imperialistas en juego, tanto económicos como geoestratégicos, afectaban a dos potencias europeas. Una victoria de los rebeldes rifeños aumentaría peligrosamente el riesgo de contagio de la insurrección al Marruecos francés. Pero Francia no sería la única potencia perjudicada. El imperio británico ocupaba vastos territorios con población árabe en Egipto y Palestina. Por tanto, lo último en lo que estaba interesado era en proporcionar aliento a la lucha por su liberación nacional. Los intereses imperialistas pesaron decididamente en los acontecimientos. Doce años después, en plena guerra civil, el gobierno del Frente Popular se negó a conceder la independencia al Marruecos español y a estrechar la colaboración militar y política con Abd el-Krim. La pretensión de no contrariar a las “democracias parlamentarias”, es decir, a los intereses imperialistas de Francia y Gran Bretaña, condicionaron esta trágica decisión, que a su vez permitió a Franco controlar efectivamente su retaguardia marroquí y continuar con el reclutamiento de unas tropas vitales para los frentes.

Las declaraciones de Primo de Rivera causaron un hondo malestar entre la casta de militares africanistas y también entre los capitalistas con intereses en Marruecos. La presión fue tremenda en aquellos meses. El relato de los acontecimientos que hace Miguel Martín en su libro merece ser reseñado: “A mediados de julio, el dictador visitó Melilla. El día 19 fue invitado a un banquete por los oficiales de la Legión y los Regulares, en los cuarteles avanzados de Ben Tieb. Hasta ese momento, Primo de Rivera seguía firme en su idea de semiabandonar Marruecos. Los oficiales temían lo peor y decidieron expresar su descontento.

³³⁸ Miguel Martín, *op. cit.*, p. 89.

³³⁹ *Ibid.*, p. 90.

Las paredes del comedor estaban pintadas con *slogans* tales como ‘El espíritu de la Legión es ciego y fieramente agresivo’. El menú se componía casi exclusivamente de platos hechos con huevos. Primo de Rivera aceptó la humillación (...) la provocación fue redondeada por el brindis de Franco: ‘Quisiéramos que, en esta primera vez que un jefe de gobierno llega a la Legión, nuestros corazones estuviesen henchidos de alegría; pero desgraciadamente no es así porque una terrible duda nos domina el alma’ (...), finalizando del siguiente modo: ‘Este que pisamos, señor presidente, es terreno de España porque ha sido adquirido por el más alto precio y pagado con la más cara moneda: la sangre española derramada’. Cuando acabó, los gritos de ‘¡Viva la Legión!’ y algún otro de ‘¡Abajo el dictador!’ cubrieron el recinto. A continuación habló Primo de Rivera. Comenzó señalando que la obediencia ciega al mando también debería ser una de las consignas de la Legión; y entró a explicar sus ideas sobre Marruecos, diciendo que ni el honor militar ni el nacional se verían mancillados en sus proyectos. Al llegar a este punto fue interrumpido con silbidos y abucheos. Ante tal reacción, Primo de Rivera dio un giro a su exposición, asegurando a los oficiales que la campaña proseguiría hasta ser concluida con éxito y que lo que él proponía era una retirada estratégica. Acabando con la siguiente advertencia: ‘Ahora os hablo así; pero el día en que os sean dadas órdenes, sean las que fueran, no tendréis más derecho que a obedecer’.³⁴⁰

Las concesiones realizadas por Primo fueron insuficientes. Franco dimitió tras el banquete, colocando en una difícil posición a la dictadura, pues era uno de los mandos con más “prestigio” entre aquella casta de oficiales reaccionarios. La dimisión desató muestras de solidaridad entre la oficialidad de la Legión, incluso entre mandos militares de Madrid. El pulso tuvo su efecto, pues Primo de Rivera, que se había negado a aceptar la dimisión, suspendió el repliegue de tropas hacia Melilla. La tensión llegó al punto de que los jefes de las tropas de choque destinadas en Marruecos amenazaron incluso con detener a Primo de Rivera.

La situación empeoraba día a día por la ofensiva de las tropas rifeñas, que en el otoño humillaron nuevamente a las tropas coloniales. “En 60 días hemos contabilizado 60 derrotas. Estamos evacuando una tras otra (más de 200) todas las posiciones obtenidas en 16 años de sangrientos combates”, afirmaba el diario *España Nueva*. A comienzos de 1925, los rifeños dominaban todo el norte de Marruecos, salvo los enclaves de Melilla, Ceuta, Tánger y Larache: “Fuera de estas bases militares, la bandera de la República del Rif —roja con un rombo blanco en el centro y, dentro de él, una media luna de color verde y una estrella de seis puntas del mismo color— ondeaba en todas las cabilas (...) La derrota del colonialismo español era total. Un ejército de guerrilleros, irregular, un pueblo atrasado (...) habían vencido a un ejército regular, un pueblo ‘europeo’ y a profesionales de la guerra, generales, coroneles, etc. ¿Cómo explicarlo? No es difícil cuando ya hemos visto las cualidades estratégicas que adornaban a los jefes militares (...) cuando la espina dorsal era —como dice Barea [se refiere a la obra de Arturo Barea *La forja de un rebelde*]— una masa de campesinos analfabetos al mando de oficiales irresponsables. Por otra parte, su moral de combate era nula, muchas guarniciones entregaban su armamento a cambio de libertad (...) La corrupción total: ‘Si no te prestas a robar para otros y para ti, te quitarán la plaza, te trasladarán después, te mandarán a donde revientes de hambre y correrás el riesgo de un tiro a cada momento. Si se te ocurre hablar o protestar, hay medios más sencillos: te quitarán los galones de sargento por cualquier falta corregida y aumentada, y hasta un accidente puede ocurrirle a cualquiera’, son los argumentos dados por un compañero al sargento Barea, para que participara en la acción civilizadora de España en Marruecos”.³⁴¹

³⁴⁰ *Ibid.*, p. 91-92.

³⁴¹ *Ibid.*, pp. 94-95.

En aquel momento, cuando las posiciones militares españolas estaban a punto de perderse, el imperialismo francés corrió en su auxilio, para evitar que el desmoronamiento del poder colonial español se transformase en el preámbulo de su propia derrota. “Hasta el verano de 1925 —señala Miguel Martín— los franceses se vieron bastante apurados para evitar que Taza y Fez fueran liberadas por los rifeños (...) Ante tal insurrección, el gobierno francés se vio obligado trasladar al mariscal Lyautey y nombrar en su puesto a T. Steeg. También nombró al general Nahum como jefe de operaciones y encargó al mariscal Petain la misión de dirigirlos. Simultáneamente llegaban a Marruecos unidades de refuerzo, en su mayor parte veteranos, que con anterioridad habían participado en la gran guerra de 1914. A la vez, celebraban largas reuniones en Madrid para llegar a establecer planes militares conjuntos y para determinar claramente los límites entre ambos protectorados, firmándose un tratado el 21 de julio. Siete días después, Petain visita Tetuán. El acuerdo suponía que los españoles pondrían en práctica el tan discutido plan de desembarco en la bahía de Alhucemas, cerca de la capital del estado del Rif, Axdir, mientras que los franceses invadirían desde el sur, cogiendo a Abd el-Krim entre dos fuegos. El 8 de agosto se iniciaban las operaciones; mientras Abd el-Krim, con objeto de impedir el desembarco, ponía cerco a Tetuán, 10.000 hombres desembarcaron en Alhucemas, atrincherándose después de haber penetrado únicamente kilómetro y medio hacia el interior”.³⁴²

En las primeras semanas de septiembre, los combates librados para desalojar a los rifeños fueron feroces. A finales de octubre, los franceses recuperaron todo el territorio que habían perdido en el sur. En abril de 1926, Francia y España concedían la autonomía al Rif en asuntos agrícolas, administrativos y económicos, subordinándola al Protectorado. La demanda de independencia de Abd el-Krim, que rompió las negociaciones, fracasó; la superioridad de las tropas francesas y españolas, actuando conjuntamente, obligó al líder rifeño a rendirse el 25 de mayo y aceptar su destierro en la isla francesa de la Reunión, en el océano Índico. La paz de los cementerios se impuso, completada con una limpieza de guerrilleros que se prolongó hasta julio de 1927. “La reacción celebró con efusión el fin de la guerra. El 12 de octubre fue proclamado como fiesta de la Paz, y los obispos, de *tedéum* en *tedéum*, agradecían al Todopoderoso los crímenes que se habían cometido y la feroz represión que caía sobre los rifeños. De 1927 a 1930, una oleada de terror recorrió todas las cabilas. Para que la ‘pacificación’ no fuese alterada, se buscaban los indicios más pequeños que pudiesen suponer cualquier intento de organización o propaganda nacionalista. A finales de 1927, Primo de Rivera, hizo un *paternal* llamamiento a los marroquíes: ‘No ignoró que aún hay rebeldes. Por ellos, otros no se someten, por temor. El miedo a los malos es el más indigno de los miedos. Los hombres buenos luchan contra el engaño, el mal y las pasiones. Y vosotros sois buenos y nobles, y debéis proceder bien. Esperad tranquilos, gozad de vuestra paz, y si alguno queda por entregar su arma, que lo haga pronto, pues el fusil es vuestra perdición. No os importe el desarme. Sed honrados, verídicos, leales y trabajadores, y Alá os hará ricos y felices. Podéis vivir con más tranquilidad y dicha que ningún pueblo, y os la comprometen los que os engañan, conduciéndoos a la rebelión. Apartadlos de vosotros y dadles muerte, y seréis ricos y felices’.”³⁴³

³⁴² *Ibid.*, pp. 98-99.

³⁴³ *Ibid.*, pp. 100-101.

CORPORATIVISMO POLÍTICO E INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ECONOMÍA

El triunfo en el Rif dio seguridad a Primo de Rivera y un barniz de estabilidad a su dictadura. El directorio militar, operativo durante dos años, fue sustituido por uno civil, que se mantuvo los siguientes cuatro. La apariencia de un régimen civil, en el que despuntaban hombres que no provenían del antiguo sistema de partidos, como José Calvo Sotelo, designado ministro de Hacienda, no podía ocultar el carácter reaccionario del sistema imperante. Los derechos democráticos, cercenados desde la proclamación de la dictadura, continuaron aplastados. Desde el 18 de septiembre de 1923, un decreto prohibía el uso de otra lengua que no fuera el castellano, ni de símbolos como las banderas vasca o catalana. En 1925, la Mancomunitat de Catalunya, institución político-administrativa creada en 1914 por la Lliga Regionalista, fue disuelta. A pesar de haber recibido el apoyo entusiasta de la burguesía catalana, Primo de Rivera empezó su acción gubernamental eliminando todas las expresiones políticas de su autonomía. Por supuesto, las organizaciones obreras, exceptuando las socialistas, estuvieron sometidas a una dura persecución.

Al poco tiempo de la instauración del directorio civil, Primo de Rivera puso en marcha su proyecto de partido, la Unión Patriótica. En sus cálculos pesaba la posibilidad de convertir las simpatías, más o menos declaradas, con que amplios sectores de la pequeña burguesía habían recibido el golpe, en una organización política de masas. Pero esta ambición fue un sueño irrealizable. La Unión Patriótica, lejos de superar el viejo sistema de partidos, se convirtió en el refugio de viejos notables y caciques, junto a individuos conservadores y ávidos de privilegios que provenían de las profesiones liberales. Una mezcla de funcionarios, propietarios agrarios, industriales y comerciantes, presidentes de cámaras de comercio e industria, de bancos y cajas de ahorros, la gran mayoría fervientes católicos, nutrieron la Unión Patriótica. Pero esta abigarrada masa de pequeños burgueses reaccionarios que buscaban el amparo de la dictadura para continuar con sus negocios tradicionales, no podía servir de cimiento sólido para un régimen condicionado por las contradicciones estructurales del capitalismo nacional.

En septiembre de 1926, Primo planeó apuntalar su dictadura levantando una estructura institucional corporativa, un engendro de asamblea designada directamente por el régimen o, más exactamente, por el dictador. Era una nueva maniobra bonapartista. A través de un manifiesto dirigido a la nación, declaró caduco el sistema parlamentario y anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva, donde estarían “representadas en la proporción debida todas las clases e intereses”. Para este primer intento de institucionalización del régimen, el dictador se sirvió de un simulacro patético de plebiscito —utilizando para ello una campaña de hojas petitorias en la que cualquiera podía estampar su firma—, pero perdió el apoyo de algunos políticos tradicionales de la derecha, que no querían verse excluidos de la vida pública.³⁴⁴ A través de un real decreto del 14 de septiembre de 1927, la Asamblea Nacional Consultiva quedó constituida con representantes municipales, provinciales, de la Unión Patriótica y del Estado, con miembros por *derecho propio* y con las llamadas “representaciones de la cultura, la producción, el trabajo, el comercio y demás actividades de la vida nacional”. La exposición de motivos del decreto que la creaba dejaba claro las atribuciones de la Asamblea Nacional: “No ha ser Parlamento, no legislará, no compartirá soberanías. Pero por encargo del Gobierno y aun por iniciativas propias, colaborará en su obra con carácter e independencias garantizadas, por su origen, por su composición y por sus fueros”.

³⁴⁴ Fue el caso de Sánchez Guerra, que, en un gesto cargado de impotencia, dirigió una carta a Alfonso XIII pidiendo un gobierno con el general Berenguer al frente.

Este intento de Estado corporativo se completó con toda una serie de decisiones en materia económica que, en esencia, impulsaron una nueva fase de dominio del capital financiero, a la vez que una inversión pública muy importante, especialmente en infraestructuras y grandes industrias, de la que se beneficiaron los monopolios capitalistas. En marzo de 1924, Primo de Rivera creó un Consejo de Economía Nacional, presidido por él mismo e integrado por 88 miembros, de los cuales 17 eran técnicos oficiales y el resto, miembros de organizaciones corporativas y asociaciones económicas. Un mes después se publicó una ley de apoyo a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de las ya existentes, y se dio un nuevo empuje al Banco de Crédito Industrial. El Plan Nacional de Infraestructuras fue el gran motor económico y se prestó un respaldo considerable a la renovación de los ferrocarriles, con la creación de la Caja Ferroviaria y el Estatuto Ferroviario, cuyos pedidos beneficiaron a las empresas privadas. La Federación de Industrias Nacionales organizó la Constructora de Obras Públicas SA, para optar los planes proyectados por el Estado.

En esta estrategia de apoyo que el Estado brindó a los capitalistas privados, la dictadura creó, también en 1924, el monopolio de petróleos CAMPSA y entregó la red telefónica a la multinacional norteamericana ITT. La participación estatal en la economía se completó con diversos organismos: el Patronato de Fines Especiales, el Consejo Nacional de Combustibles, las confederaciones hidrográficas, el Comité Regulador de la Industria Algodonera, el Consejo Nacional Arrocero... Otro pilar del programa económico de la dictadura fue su política de subvenciones a las grandes empresas: compañías mineras, navieras (donde el conocido bucanero fascista Juan March obtuvo unos beneficios fabulosos con el transporte marítimo de su compañía, Transmediterránea) y ferrocarriles. El entramado económico de Primo, que provocó una alta burocratización de la actividad económica, no impidió que floreciera una tupida red de favoritismos que tuvo episodios sonados, como la entrega del monopolio del tabaco a Juan March. En definitiva, esta política de capitalismo de Estado, que mantenía ciertas semejanzas con el sistema del fascismo mussoliniano y el nazismo, puso las arcas públicas a disposición de la oligarquía, asumiendo las grandes inversiones en capital fijo que no le eran rentables, subvencionó directamente actividades empresariales y robusteció las medidas proteccionistas y la política de precios fijos para beneficiar a la industria nacional. Todo esto, combinado con una legislación laboral en la que se excluía la acción de los sindicatos, permitió que los grandes capitales lograran aumentar considerablemente la plusvalía arrancada a la clase trabajadora.

En un contexto de auge económico de una parte importante del continente europeo, en ausencia de conflictos laborales de importancia, con el apoyo de las inversiones estatales y con el relanzamiento de la inversión privada tras el apaciguamiento temporal de la lucha de clases, los años de la dictadura de Primo de Rivera vieron un crecimiento significativo de la actividad económica. Entre 1922 y 1930, la producción industrial avanzó a una tasa del 5% anual y el conjunto de la economía, a un promedio del 3%.³⁴⁵ Las regiones ya industrializadas, como Cataluña o el País Vasco, experimentaron un boom económico notable acompañado de un aumento del empleo. La población ocupada en la agricultura bajó del 57% al 45% y el parque automovilístico se duplicó en seis años. Pero esto no acabó con el desarrollo desigual del Estado español ni cambió sustancialmente el panorama en las zonas del sur y el oeste peninsular, dominadas por la gran propiedad terrateniente.

Una cosa sí está clara: los beneficios empresariales no dejaron de crecer bajo la dictadura. La lluvia de millones obtenida por las grandes empresas en aquellos años no puede explicarse sin la dureza que la dictadura usó contra el movimiento obrero. El 26 de noviembre de 1927, Primo de Rivera aprobó un decreto, de claro aroma mussoliniano, para llevar a cabo la organización corporativa del trabajo. En el texto veían la luz los tristemente famosos comités

³⁴⁵ Cabrera, *op. cit.*, p. 207.

paritarios, integrados por vocales obreros y patronales y presididos por un delegado del gobierno, en los que la UGT decidió participar.³⁴⁶ El reflujo obrero después de 1923, junto con la práctica desarticulación de la CNT y el PCE y la actitud colaboradora de la UGT y el PSOE, permitió que la conflictividad laboral descendiese acusadamente durante la dictadura. La paz social elevó la tasa de ganancia a los niveles de los primeros años de la guerra mundial. En palabras de Tuñón de Lara: “Un hecho es evidente durante este período: la tendencia hacia la concentración del poder económico y la política económica favorable a las grandes empresas, cuya prosperidad aumenta también a causa de la buena coyuntura económica reinante en Europa. Hubo empresas que en 1930 llegaron a declarar un 55% de beneficios (Minas del Rif), 30% (La Basconia) (...) de 1923 a 1928, las cotizaciones en Bolsa de las acciones de Explosivos Río Tinto aumentaron un 200%, las de Papelera en más de un 100%, las de Altos Hornos en un 80%”.³⁴⁷ Según Mercedes Cabrera: “Fueron muchas las empresas que se beneficiaron de los planes del Estado directa o indirectamente (...) La Siderúrgica del Mediterráneo y la Maquinista Terrestre y Marítima aumentaron sus beneficios entre 1925 y 1929 un 51%; la Unión Eléctrica Madrileña declaró unos beneficios en 1928 un 90% mayores que los de 1923; La Canadiense mejoró su balance un 100% en los dos primeros años del directorio civil”.³⁴⁸

La idea de que la dictadura colisionó con los intereses del gran capital no se corresponde con la realidad. Como en otros regímenes bonapartistas, las concesiones de la burguesía a la burocracia militar en ningún caso hicieron disminuir sus fuertes beneficios económicos, ni debilitaron su control de las palancas fundamentales de la vida pública: “Al desarrollarse las ramas de producción con tendencia a la concentración y al monopolio, en estrecha ligazón con los grandes bancos, las familias de empresarios que hemos visto ascender desde el último tercio del siglo XIX —la mayoría ennoblecida por Alfonso XIII—, así como el núcleo de familias de grandes propietarios con abolengo aristocrático, acrecentaron su poder en la vida económica de país. A la cabeza de todos los sectores de la producción señalados encontramos siempre a las familias Urquijo-Ussía, Herrero de Collantes, Güell (marqués de Comillas), Cambó, Bertrán y Musitu, Gamazo, Coll, Ventosa, duque de Alba, Aresti, Echevarría, De la Mora, Benjumea, etc., y a los numerosos representantes del capital británico, francés y alemán”.³⁴⁹ La dictadura tampoco tocó ningún privilegio de la aristocracia terrateniente.

Es cierto que algunas decisiones de Primo de Rivera provocaron desavenencias con los prohombres de la industria vizcaína y con sectores de la burguesía catalana, especialmente tras la vuelta de tuerca en la centralización política del Estado, pero esos roces no podían ocultar que, en lo fundamental, la clase dominante se beneficiaba de sus medidas. La política económica de la dictadura proporcionó grandes dividendos a la burguesía de todo el país, lo que no significa que no introdujera nuevos elementos de inestabilidad que jugarían en su

³⁴⁶ Con la nueva ley se aprobaron 27 corporaciones en representación de otros tantos sectores de la producción, cuya célula básica era el *comité paritario* local (cinco obreros y cinco patronos, con un presidente y vicepresidente nombrados por el ministerio de Trabajo, Comercio e Industria), con capacidad para reglamentar las condiciones de trabajo y retribución, y que éstas a su vez pudiesen servir de base a los contratos de trabajo individuales y colectivos. El conjunto de comités paritarios de un mismo oficio constituían la *corporación*, cuya función sería el estudio de los jornales y salarios existentes en los distintos oficios para establecer un salario mínimo por profesiones, que estaba compuesta por consejos con una representación de ocho vocales patronos y ocho obreros, elegidos por los comités paritarios que la integraban. En la cumbre, la Comisión Delegada de Consejos, en la que además de obreros y patronos, figura el Estado (su presidente y el director general de Trabajo). Las actividades agrarias se reglamentaron por otro real decreto, del 12 de marzo de 1928, que instituyó tres corporaciones: la del Trabajo Rural, la de la Propiedad Rústica y la de la Industria Agrícola. Enrique Guerrero, *El socialismo en la dictadura de Primo de Rivera*, op. cit.

³⁴⁷ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 121.

³⁴⁸ Cabrera, *op. cit.*, p. 212.

³⁴⁹ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 173.

contra. La política de obras públicas y de aumento del déficit presupuestario animó la actividad económica, pero también rompió con la estabilidad monetaria, un hecho que empeoró por la especulación bursátil al calor del crecimiento económico, especialmente con la venta masiva de pesetas en el mercado mundial desde 1928. La deuda pública se disparó en aquellos años: de 11.822 millones de pesetas en 1923 a 20.084 en 1929.

Con la ralentización del crecimiento, las contradicciones antes señaladas se transformaron en divergencias entre la oligarquía económica y los ministros del ramo: mientras Cambó y los industriales catalanes y vascos eran partidarios de la devaluación de la moneda, aunque eso conllevara el aumento de los precios, el ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, quería incrementar los ingresos del Estado a través de una relativa unificación fiscal y la creación de un tímido impuesto sobre las rentas y las ganancias. Una maniobra fiscal que chocaba con los intereses de los grandes capitalistas industriales, razón por la cual nunca llegó a materializarse.

LA COLABORACIÓN SOCIALISTA

La actitud de las organizaciones socialistas hacia la dictadura marcó un punto de inflexión en su trayectoria histórica. El afán de preservar a cualquier precio los avances organizativos del pasado, puesta en cuestión por los años de ascenso revolucionario y la escisión comunista, sirvió de coartada para la colaboración con la dictadura. Los dirigentes del PSOE suministraron un gran balón de oxígeno para un régimen que representaba la negación completa del ideario socialista.

Para justificar esa colaboración se utilizaron todo tipo de formalismos, precedidos de declaraciones solemnes a favor de la legalidad democrática. Pero lo cierto es que el interés de Primo de Rivera por lograr la anuencia de los dirigentes socialistas fue correspondido, en numerosas ocasiones, con la participación de representantes ugetistas en los organismos corporativos de la dictadura. Los choques que en este período se sucedieron entre los líderes del partido y del sindicato no eran, en ningún caso, reflejo de divergencias principistas o doctrinarias, sino diferencias de orden táctico y de cálculo político.

La actitud del aparato del partido fue definida formalmente en la declaración que el Comité Nacional realizó el 9 de enero de 1924: “Por unanimidad, se decide que los socialistas no acepten cargos públicos que no sean de elección popular o representación oficial de organismos obreros y designados por estos directamente, rigiendo este acuerdo con carácter nacional a partir del momento en que se adopta”. En realidad, el aparato del PSOE estaba dominado por los parlamentarios, cuyos intereses y aspiraciones fueron bloqueados tras la supresión de las Cortes. Por su parte, la dirección ugetista, que había sido rebasada ampliamente en los años anteriores por la acción de los anarcosindicalistas, contemplaba la nueva situación abierta de una manera mucho más “práctica”. Con la CNT desarticulada y atomizada en pequeños grupos clandestinos, la posibilidad de que la UGT rentabilizase su actividad reformista y se convirtiese en el único referente sindical reforzó entre sus dirigentes la idea de colaborar y aprovecharse de los resquicios que la dictadura ofrecía. Una vez más, se manifestaba la tendencia de los sindicalistas al pragmatismo. Al fin y al cabo, la colaboración con la dictadura era la culminación lógica de un enfoque que aislaba la acción sindical de una perspectiva revolucionaria y que elevaba la colaboración de clases a quintaesencia de la política.

Los gestos conciliadores de los líderes socialistas hacia la dictadura se prodigaron en muchos planos. Cuando el directorio militar prohibió las manifestaciones del 1º de Mayo de 1924, las organizaciones socialistas acataron la prohibición. Fue la señal para una participación temprana en los órganos públicos del tinglado corporativo, y así, en el mes de junio, la Comisión Ejecutiva de la UGT consideró oportuna la participación de tres de sus miembros (Wenceslao Carrillo, Manuel Cordero y Francisco Núñez Tomás) en el Consejo Interventor de Cuentas, participación que se amplió más tarde a la Comisión Interina de Corporaciones del ministerio de Trabajo, a la que se incorporaron Largo Caballero y Andrés Saborit.

La actitud de los dirigentes ugetistas dio confianza al dictador, que no tardó en ofrecer a Largo Caballero, secretario general de la UGT, un puesto en el Consejo de Estado, creado por real decreto en el mes de septiembre. Aunque Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos se opusieron a aceptar el ofrecimiento, la Comisión Ejecutiva del PSOE dejó la decisión en manos de la ejecutiva de la UGT. Por activa o por pasiva, los líderes socialistas se prestaron a una maniobra que pretendía atar al carro de la dictadura a una parte nada desdeñable del movimiento obrero organizado, y el 25 de octubre de 1924 Largo Caballero tomó posesión de su cargo, decisión que fue ratificada por la ejecutiva del partido el 10 de diciembre, que de esta manera se saltó sin contemplaciones la resolución que el Comité Nacional había aprobado en enero de ese año. El fallecimiento de Pablo Iglesias, el 9 de diciembre de 1925, fue un duro golpe, pero no cambió el rumbo general de las organizaciones socialistas.³⁵⁰ En el XII Congreso del PSOE (celebrado del 28 de junio al 4 de julio de 1928) se volvió a tratar la cuestión de la participación de la UGT en el Consejo de Estado. El congreso aprobó la continuación de Largo Caballero como consejero por 5.235 votos contra 593. Poco después, el XVI Congreso de la UGT aprobaba una declaración que señalaba: “No habiendo variado las causas que aconsejaron al Comité Nacional de la UGT la aceptación de un puesto en el Consejo de Estado en representación de la clase obrera española, considera esta Ponencia que no procede la retirada, como propone la organización de Chestre, de nuestro representante en el citado organismo consultivo”. Hasta el último día de la dictadura e incluso más tarde, ya en la Segunda República, muchos dirigentes socialistas justificaron su política de colaboración.

En septiembre de 1927, la dictadura procedió a la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva. Como en ocasiones anteriores, Primo de Rivera no se olvidó de los socialistas. “El Gobierno, según el artículo 20, nombró 6 socialistas para la Asamblea: Largo Caballero, Lucio Martínez, Santiago Pérez, Francisco Núñez Tomás, Fernando de los Ríos y Manuel Llana; incluso se permitió el rasgo humorístico de nombrar a Dolores Cebrián, esposa de Besteiro, ya que el artículo 15 del Decreto establecía que las mujeres casadas podían ser asambleístas si eran ‘debidamente autorizadas por sus maridos’ y siempre que los mismos no perteneciesen a la Asamblea. El Partido [Socialista] y la Unión [General de Trabajadores] convocaron congresos extraordinarios para tratar los problemas que planteaba la convocatoria de la ANC; en el del Partido estuvieron representadas 106 agrupaciones y 5.026 afiliados. El Comité Nacional propuso al congreso que los socialistas no pudiesen aceptar esos cargos, aprobándose un dictamen de clara repulsa en el que se decía: ‘El PSOE protesta con toda energía y sin la más mínima reserva contra el régimen de dictadura imperante desde hace cuatro años. Protesta igualmente contra la creación de la Asamblea Nacional, de la que ningún militante en nuestras filas podrá formar parte, congratulándose de coincidir así con la resolución adoptada ayer en el mismo sentido por la Unión General de Trabajadores. Y declara la imperiosa necesidad de que el país se rija por normas de libertad sinceras y amplias que permitan el desenvolvimiento de nuestros ideales y consientan que en la gobernación de España se refleje fielmente la voluntad nacional, invocada con frecuencia, pero no consultada

³⁵⁰ El hueco dejado por el fundador del PSOE fue ocupado por Julián Besteiro, nombrado presidente de UGT y del PSOE en el congreso de 1928.

por procedimientos democráticos que hagan conocer sus verdaderos designios y obliguen a respetarlos. Madrid, 8 de octubre de 1927'...".³⁵¹

El tono de la declaración, cuyo calificativo más duro contra la dictadura es la *protesta*, daba la medida de la actitud general de los dirigentes socialistas. La falta de escrúpulos políticos a la hora de participar en todo tipo de organismos de la dictadura, lo que permitió a las organizaciones socialistas gozar de un grado de consentimiento del que por razones obvias jamás disfrutaron la CNT ni el PCE, se transformó en una decorosa *protesta* cuando se presentó ante ellos la posibilidad de ser nombrados por el dictador miembros de una Asamblea Nacional igual de fraudulenta, como mínimo, que el Consejo de Estado y otros montajes parecidos. En esta ocasión lo que se les pedía era demasiado, pues una representación socialista en la Asamblea de la dictadura hubiera significado echar por tierra toda la propaganda de décadas a favor de un régimen parlamentario democrático, una mancha que sería muy difícil de limpiar y que hubiese dado munición a todos los competidores del PSOE, comenzando por las organizaciones republicanas y terminando por las organizaciones obreras a la izquierda de los socialistas.

El argumento utilizado por los dirigentes del PSOE para negar su colaboración orgánica con la dictadura —ya que el partido como tal no participó en ningún organismo político de la misma— era absolutamente peregrino. Los vínculos políticos y organizativos entre el partido y el sindicato eran tan estrechos, que éste no adoptó ninguna decisión sin, al menos, la permisividad o el consentimiento tácito de los principales dirigentes y organismos superiores del PSOE. La UGT no sólo participó en el Consejo de Estado y en los comités paritarios de obreros y patronos organizados por la dictadura, también en la Comisión Permanente de Enseñanza Industrial, en el Consejo de Cultura Social, en la Junta Central de Emigración, en el Patronato de Ingenieros y Obreros Pensionados en el Extranjero, en la Caja General del Crédito Marítimo, en la Comisaría Sanitaria, en el Consejo Interventor de Cuentas del Estado, en la Comisión Interina de Corporaciones, en el Consejo de Trabajo... Y si no participó en la Junta Central de Abastos cuando ésta pasó a ser presidida por Martínez Anido ni en el Consejo de Economía Nacional fue porque se le asignó una vocalía a la UGT y otra, en igualdad de condiciones, a los sindicatos católicos.³⁵²

Esta colaboración variada, y prolongada en el tiempo, encontró ardientes defensores en toda una serie de dirigentes que más tarde se convertirían en los líderes de la izquierda socialista, empezando por el mismo Largo Caballero. En 1929, el futuro líder del ala izquierda del PSOE y la UGT manifestaba que “los comités paritarios pueden llevarnos a unos resultados que el Gobierno interpreta de un modo y nosotros, de otro” y reconocía que la huelga no era un arma que pudiera manejarse sistemáticamente, sino que, antes de llegar a ella, debían explorarse todas las posibles soluciones: “estos antagonismos debían y podían tener solución, ahora, en los comités paritarios y por ello la UGT estaba conforme con dichos organismos”. Otro destacado miembro de UGT, Ramos Olivera, escribió en 1932 que los comités paritarios de obreros y patronos fueron “la medida dictatorial que más favoreció al movimiento obrero español”, propició la propaganda y, gracias a ellos, “aumentaron los efectivos de la UGT y se vertebraron mejor los existentes”.³⁵³

LA DICTADURA SE DESMORONA

³⁵¹ Enrique Guerrero, *op. cit.*

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ *Ibid.*

La dictadura de Primo de Rivera no pudo resolver los problemas endémicos que afectaban al capitalismo español, agravados por una estructura económica especialmente atrasada. La crisis de la sociedad se hizo demasiado grande. En semejante situación, los antagonismos de clase sólo permitían el ascenso de un bonapartismo débil.

La situación española distaba mucho de la italiana o de la vivida en Alemania desde finales de los años veinte. El fascismo italiano se organizó antes de llegar al poder y contó con una activa base de masas entre la pequeña burguesía, el lumpen y sectores atrasados del proletariado. Mussolini logró un apoyo social que la dictadura primorriverista jamás alcanzó, gracias a lo cual pudo aplastar a las organizaciones obreras, eliminando su capacidad de respuesta durante muchos años. En el caso de Alemania, el partido nazi existía desde 1925 y experimentó un desarrollo impetuoso entre la pequeña burguesía a partir de 1930, de manera que en las elecciones parlamentarias de ese año se convirtió en el segundo partido más votado, tras el SPD, con un 18'3% de los sufragios y 107 diputados. Los intentos del dictador de organizar la Unión Patriótica como un partido de masas, utilizando para ello las palancas del poder estatal, fracasaron patéticamente. Mientras en Italia y Alemania las organizaciones políticas y sindicales socialdemócratas y comunistas fueron aplastadas, la dictadura de Primo recurrió constantemente a la colaboración de los líderes socialistas. Los trabajadores españoles, a pesar de la clandestinidad y la persecución que padecían sus organizaciones más combativas, no habían sufrido una derrota completa, no habían sido atomizados ni sometidos por completo.

Las dificultades de la dictadura para legitimarse empezaron a aflorar con el descenso de la actividad económica. Enfrentada a los problemas de financiación, a un creciente déficit público y a la especulación, la dictadura se vio obligada a paralizar o disminuir una parte considerable de sus obras públicas. La caída de la inversión estatal, así como el final de las obras para las exposiciones universales de Barcelona y Sevilla, influyeron directamente sobre las condiciones de vida de la clase obrera. Las ventajas que la dictadura obtuvo del boom económico anterior, que mal que bien había provocado un aumento del empleo, se transformaron en su contrario: los salarios de los trabajadores sin cualificar cayeron en picado, pero los de otros sectores también disminuyeron considerablemente, como los de la minería. El número de parados empezó a crecer, mientras los productos de primera necesidad sufrían una escalada inflacionista. Hubo un descenso general del nivel de vida, pero los que se llevaron la peor parte, como era habitual, fueron los jornaleros y campesinos pobres.

La reacción de Primo ante las complicaciones que se le presentaban, no sólo desde el lado del movimiento obrero, también por los roces con un parte de la oligarquía económica, especialmente la catalana, le llevaron a emprender una huida hacia delante, en un intento desesperado por mantener la dictadura. Pero la crisis general de la sociedad indujo a una creciente pérdida de sus apoyos. El 30 de julio de 1929, el dictador hizo público un real decreto (del 26 de julio) por el que se ampliaba la Asamblea Nacional Consultiva, buscando la colaboración de los antiguos representantes del sistema pseudoparlamentario de la Restauración. Se llamaba a participar en la Asamblea a los ex-presidentes del Consejo de Ministros, de las Cámaras y del Consejo de Estado, “por creer firmemente que esta invitación no es una claudicación ni para el régimen gobernante ni para los políticos del derrocado”. En su proyecto incluía la redacción de una nueva constitución. Con este paso, la dictadura manifestaba el grado de decadencia y descomposición en el que se encontraba. Primo también le ofrecía cinco representantes a la UGT, con la novedad de que serían designados libremente por el sindicato. Esta confesión de debilidad señaló el comienzo de un viraje táctico por parte de los dirigentes ugetistas y del PSOE.

Cuando el 12 de agosto se reunió el Comité Nacional de UGT, el enfrentamiento entre los dirigentes socialistas se hizo más patente. Mientras Largo Caballero opinaba que el real decreto planteaba cuestiones de gran trascendencia, como la discusión de un proyecto

constitucional, que hacían necesaria la presencia ugetista en la Asamblea —opinión apoyada por Besteiro dado que era el sindicato quien elegía a sus representantes—, otros dirigentes, como Saborit, se opusieron. Era evidente que el proyecto de constitución sería cocinado por la dictadura, por lo que Saborit afirmaba que “a sabiendas de que no podremos modificar nada, el ir, aunque hiciéramos allí lo que quisiéramos, sería hundirnos políticamente ante el país, sin mérito alguno”. La perspectiva de Saborit era bastante acertada. Finalmente, se aprobó una resolución propuesta por Largo Caballero: “Reunido el Comité Nacional de la UGT de España ha examinado, con la atención que merece, el Decreto Ley de 26 de julio último, por el cual se concede a este organismo el derecho a designar libremente cinco representantes para formar parte de la ANC y, visto el acuerdo tomado por unanimidad en el Congreso extraordinario celebrado en Madrid el 7 de octubre de 1927, en el que se dice: ‘Que no ha lugar a que se acepten por afiliados a la UGT puestos en la ANC’, y considerando que no está en sus atribuciones derogar dicho acuerdo, resuelve atenerse al mismo y, por tanto, no designa ningún representante para la tan repetida Asamblea”.³⁵⁴

Con esta táctica oportunista, los dirigentes socialistas intentaban resguardarse en un momento en que la crisis de la dictadura era ostensible. Respaldar, en esa coyuntura, las maniobras de Primo comprometía peligrosamente a las organizaciones socialistas, más aún cuando la oposición burguesa y republicana se empezaba a activar. Para remarcar su postura, las comisiones ejecutivas de la UGT y del PSOE hicieron público, el mismo 12 de agosto, un manifiesto contra el régimen, prohibido por la censura, pero que circuló masivamente de mano en mano. En el mismo se criticaba el anteproyecto de constitución “por su origen antidemocrático y por el falso plebiscito con que se trata de darle una apariencia de sanción popular (...) Nosotros aspiramos, para realizar nuestros fines, a un Estado Republicano de libertad y de democracia, donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social. Queremos ser una clase directora en los destinos nacionales, y para eso necesitamos de condiciones políticas que nos permitan llegar democráticamente, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica”. El giro político de las organizaciones socialistas preparaba las condiciones para recomponer el frente opositor con las organizaciones republicanas, incluso también con la oposición de derechas, que ya se dibujaba en el horizonte.

Mientras tanto, los partidos republicanos comenzaron una tarea de reagrupamiento: la Acción Republicana, dirigida por Manuel Azaña, y el Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, se unieron en la Alianza Republicana, sin hacer ascos a viejos políticos monárquicos que, como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, abandonaban el edificio carcomido de la monarquía. También el movimiento obrero, pasivo durante años, adquirió un nuevo impulso al calor de la crisis económica. La huelga del ramo textil en Barcelona (junio de 1926) y la declarada contra el impuesto de utilidades fueron los síntomas más claros de ese despertar. La CNT volvió a restablecer su fisonomía orgánica y su actividad, aunque dividida entre los sectores que propugnaban una acción esencialmente sindicalista, encabezados por Ángel Pestaña, y los partidarios del viejo programa anarquista, agrupados en la Federación Anarquista Ibérica, que había sido fundada en 1927.

La oposición y el descontento con la dictadura se extendieron a diferentes capas de la sociedad. La cuestión nacional catalana se agudizó, creándose las bases para la escisión del movimiento nacionalista. Las críticas hacia el conservadurismo de la Lliga, que prestó un apoyo entusiasta a Primo en los primeros años, encontró un espacio mayor entre la pequeña burguesía radicalizada, conformándose el embrión de la futura Esquerra Republicana de Catalunya. El grupo de Francesc Macià (Estat Català) incluso intentó organizar desde Francia un alzamiento armado contra el régimen, que no prosperó.

³⁵⁴ *Ibid.*

Sobre todo, el descontento prendió entre la pequeña burguesía, que, tras haber apoyado, activa o pasivamente, el golpe militar, ahora era presa de los efectos de la crisis económica y el desencanto. La declaración de los comunistas españoles organizados en la Oposición de Izquierdas analiza bastante acertadamente este fenómeno: “La crisis financiera, la carestía subsiguiente de la vida y la política descarada de latrocinio efectuada por los dictadores y dictadorzuelos de toda laya (...) agravó extraordinariamente la situación económica de la clase trabajadora y de las masas pequeñoburguesas. Esto tuvo consecuencias fatales para la dictadura (...) El cambio efectuado por la pequeña burguesía tuvo consecuencias no menos trascendentales. Las masas pequeñoburguesas, que durante los años 1917-1920 vieron con indudable simpatía el movimiento obrero revolucionario, se sintieron presas del más profundo desengaño ante el fracaso del mismo. Decepcionadas del régimen parlamentario, decepcionadas de la clase obrera, volvieron esperanzadas los ojos hacia el dictador. Pero el desencanto no tardó en llegar. Agobiada por los impuestos y las dificultades económicas crecientes, la pequeña burguesía fue volviendo la espalda al dictador y, persuadida de que la monarquía era la causante de todos sus males (el rey había tenido una participación personalísima en la instauración de la dictadura), vio en la república el remedio radical a los mismos. El movimiento republicano tomó un poderoso impulso”.³⁵⁵

La crisis del régimen también se manifestó gráficamente en el alejamiento de la intelectualidad burguesa y pequeñoburguesa. Ortega y Gasset fundó la Agrupación al Servicio de la República, Miguel de Unamuno se autoexilió y Ramón del Valle-Inclán colaboró en la creación de la Alianza Republicana. La represión se extendió a la prensa, con la clausura de diferentes diarios de oposición liberal. En las universidades, los jóvenes estudiantes de clase media se convirtieron en un ariete de las movilizaciones callejeras contra Primo de Rivera. Se sucedieron las huelgas estudiantiles, y el 7 de marzo la Federación Universitaria Española (FUE) organizó en Madrid una manifestación en abierto desafío a la dictadura. El gobierno decretó la pérdida colectiva de matrículas, cerró la Universidad Central y suspendió a sus autoridades. La represión sólo consiguió radicalizar al movimiento juvenil, que prosiguió con intensidad sus manifestaciones tras la caída de Primo.

El descontento afectó incluso a sectores del ejército, suscitado por la política de concesión de privilegios a ciertos grados de la oficialidad en perjuicio de otros, y a los políticos de derechas, que vieron la oportunidad de volver a escena. En enero de 1929 se produjo el complot de Sánchez Guerra, en el que participaron viejos políticos monárquicos en tránsito hacia el republicanismo burgués y que contó con el respaldo de sectores de la dirección de CNT. En su manifiesto, apelaban a la defensa de la soberanía nacional y la convocatoria de Cortes constituyentes para reemplazar a Alfonso XIII. La conspiración era un remedo de los pronunciamientos liberales del siglo XIX, pero los militares, salvo los artilleros de Ciudad Real, permanecieron pasivos. A pesar del fracaso del complot, el juicio militar contra Sánchez Guerra se convirtió en un acto contra la dictadura. “La sentencia absolutoria y las penas levísimas a los procesados militares eran prueba de que los resortes del gobierno dentro del propio aparato del Estado eran cada vez más limitados”.³⁵⁶

Sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, Primo de Rivera le propuso a Alfonso XIII un programa para mantener en lo esencial el entramado institucional de la dictadura, una nueva constitución y nuevas leyes que serían debatidas y aprobadas por esa Asamblea ampliada que proyectaba, en parte procedente de la ya existente, en parte electiva. Primo también pretendía darle nuevo impulso a la Unión Patriótica y los somatenes. Pero, para aquel entonces, los

³⁵⁵ Tesis, redactada por Andreu Nin, aprobada por la III Conferencia de la Oposición de Izquierdas en España; en *Comunismo (1931-1934). La herencia teórica del comunismo español*, Ed. Fontamara, Barcelona, 1978, pp. 58-59.

³⁵⁶ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 219.

sectores fundamentales de la burguesía ya habían abandonado la dictadura a su suerte, conscientes de que era incapaz de resolver una crisis política y económica de tanta envergadura. El desamparo del dictador era también visible para el rey que, comprometido con él hasta los tuétanos, fue entendiendo, por la fuerza de los acontecimientos, que su continuidad podría tener consecuencias dramáticas para la institución que encabezaba. Se imponía un cambio de tercio con el objetivo de salvar la monarquía.

El rey no aceptó la propuesta de Primo de Rivera tal como la formuló y le instó a renovar parcialmente los ayuntamientos y diputaciones, y a agotar el plazo de vida legal de la Asamblea Nacional, para después elegir entre tres opciones: prorrogarla, sustituirla por otra de composición y origen distintos o restablecer las viejas Cortes. Las dificultades de Alfonso XIII para desmarcarse del dictador eran evidentes, pero incluso cuando Primo intentó llevar a cabo la segunda opción no encontró apoyos suficientes. El 20 de enero, el ministro Calvo Sotelo dimitía y el 26 se publicaba una nota oficiosa de Primo de Rivera en la que preguntaba a los diez capitanes generales y jefes de las fuerzas en Marruecos, entre otros, si contaba con su confianza, para dimitir en caso contrario. El golpe de gracia al dictador se lo darían sus propios compañeros de armas, que contestando con evasivas, cuando no negativamente, precipitaron su dimisión. En la noche del 30 de enero de 1930, el rey aceptaba la retirada de Primo de Rivera, poniendo punto y final a seis años de régimen: “La dictadura de Primo de Rivera, privada de toda base social e incluso de la fuerza pretoriana que la sostenía, se desplomó inevitablemente, sin que ni tan siquiera fuera necesario el empujón de las masas”.³⁵⁷

EL FINAL DE LA MONARQUÍA

El colapso de la dictadura abrió las compuertas a un movimiento revolucionario que ejerció una fortísima presión sobre el conjunto de las organizaciones políticas opositoras. Como ya había ocurrido en otros momentos críticos de la lucha de clases, especialmente en la gran crisis de agosto de 1917, las direcciones de las organizaciones obreras no se apoyaron en su base militante, en los grandes batallones de la clase trabajadora y en los campesinos pobres, que demostraron una voluntad de lucha inigualable, sino que concentraron todas sus esperanzas en los acuerdos con los republicanos burgueses y los advenedizos que abandonaban el barco que se hundía.

En la crisis del régimen monárquico pesaron más los intereses de clase de la burguesía que el mantenimiento de una reliquia política del pasado, inservible en la nueva situación. La actitud a este respecto de la clase dominante española no fue ninguna originalidad histórica. Durante la revolución rusa de febrero de 1917, muchos de los políticos más venales y comprometidos con el zarismo, tras considerar inevitable su colapso y ante el temor de que el empuje de las masas lo barriera todo, no dudaron en apoyarse en el nuevo régimen republicano para salvar el pellejo y seguir manteniendo el poder en sus manos. Es una constante reiterada en las crisis revolucionarias, como quedó probado más recientemente en la llamada Transición española, cuando muchos destacados prohombres de la dictadura franquista se convirtieron, obligados por las circunstancias, en demócratas de toda la vida. En todos estos ejemplos, y se pueden citar muchos en la historia mundial del último siglo, el objetivo más importante para la clase dominante siempre ha sido conjurar el peligro de la revolución, es decir, la amenaza de ser expropiada económica y políticamente por la clase obrera.

³⁵⁷ Tesis de la III Conferencia de la Oposición de Izquierdas en España, en *Comunismo (1931-1934). La herencia teórica del comunismo español*, p. 59.

Tras la caída de Primo, el jefe de la casa militar de Alfonso XIII, Berenguer, fue el encargado de salvar a la monarquía y, de paso, a la oligarquía. En febrero de 1930 formó un nuevo gobierno integrado por representantes cualificados de la aristocracia, el clero y el ejército, pero por más que se intentase preservar el régimen monárquico era imposible ocultar su crisis terminal.

En las filas de la burguesía, las divergencias sobre el rumbo a tomar crecían día a día. Un sector abogaba por la represión, mientras otro, el más sutil e inteligente, se inclinaba por la reforma. A su manera, ambos tenían razón y se equivocaban a la vez. Las concesiones políticas podrían estimular, como así ocurrió, un auge del movimiento de las masas. Pero un nuevo golpe no sólo no resolvería nada, sino que amenazaba con provocar un estallido revolucionario muy difícil de contener. Ante el cariz que tomaba la situación, muchos políticos burgueses perspicaces se inclinaron por desviar el curso revolucionario de los acontecimientos, animando una salida “democrática”. Individuos que habían construido su reputación política reprimiendo las luchas obreras y sirviendo fielmente a la monarquía, de la noche a la mañana se convirtieron en republicanos y “demócratas”. Personajes como Miguel Maura o el ex ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora³⁵⁸ juraron su adhesión a la República. Otros muchos siguieron su camino. Los auténticos motivos de esta milagrosa conversión no eran inocentes. Miguel Maura lo reconoció en sus memorias: “Si dejamos que este proceso sin dirección y sin control se desarrolle, sus resultados no pueden ser otros que una revolución profunda en la que no quedará del viejo Estado monárquico nada en pie: la ola popular lo barrerá todo y España será un inmenso sóviet, y anarquista, por añadidura”.³⁵⁹

La agitación entre la pequeña burguesía, especialmente los estudiantes, daba la medida de la temperatura revolucionaria del momento. León Trotsky describió acertadamente los síntomas: “Las manifestaciones activas de los estudiantes son sólo una tentativa de la joven generación de la burguesía, sobre todo de la pequeña burguesía, para dar una salida al equilibrio inestable en que el país se ha encontrado después de la pretendida liberación de la dictadura de Primo de Rivera, de la que se han conservado sus elementos fundamentales. Cuando la burguesía renuncia consciente y obstinadamente a resolver los problemas que se derivan de la crisis de la sociedad burguesa, cuando el proletariado no está aún presto para asumir esta tarea, son los estudiantes los que ocupan el centro del escenario. En el desarrollo de la primera revolución rusa, pudimos observar este fenómeno más de una vez; para nosotros este fenómeno siempre ha tenido una significación enorme y sintomática. Esta actividad revolucionaria o semirrevolucionaria significa que la sociedad burguesa atraviesa una crisis profunda. La juventud pequeñoburguesa, sintiendo que una fuerza explosiva se acumula en las masas, intenta encontrar *a su manera* la salida de ese atolladero e impulsa hacia adelante el desarrollo político”.³⁶⁰

Pero la lucha contra la monarquía encontró su pilar más firme, como no podía ser de otra manera, en la clase obrera, que le dio un tono revolucionario incuestionable. “Durante la primavera y el verano [de 1930] —escribe Joaquín Maurín— la marea huelguística lo invade todo. Cada día surgen nuevas huelgas. Los obreros que van a la vanguardia son los de la construcción. Los peones reflejan el malestar que existe en el campo, de donde proceden en

³⁵⁸ Niceto Alcalá Zamora (1877-1949) y Miguel Maura (1887-1971). Latifundista y ex ministro de Alfonso XII el primero y aristócrata y diputado en las Cortes monárquicas el segundo, ambos fueron fundadores de la Derecha Liberal Republicana a finales de 1930. El enfrentamiento entre ambos, provocado por la defensa del propio prestigio, les llevó a encabezar partidos fantasmas sin ningún apoyo popular. Los seguidores de Alcalá Zamora formaron en junio de 1931 el Partido Progresista y los de Maura, el Partido Republicano Conservador.

³⁵⁹ Miguel Maura, *Así cayó Alfonso XIII*, Ed. Ariel, Barcelona, 1966. Citado por Abel Paz, en *Durruti en la revolución española*, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 2001, p. 321.

³⁶⁰ Trotsky, “Las tareas de los comunistas en España”, en *La revolución española (1930-1939)*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 62.

su mayor parte. En casi todas las huelgas, los obreros rehúsan la intervención de las comisiones de arbitraje, creadas por la dictadura de acuerdo con la socialdemocracia. La lucha adquiere abiertamente un carácter de acción directa. Un gran número de huelgas constituyen una victoria para la clase trabajadora. Otras terminan con el fracaso, pero el movimiento obrero se templea en el combate y se presenta cada vez más aguerrido. Aun después de la derrota, las masas proletarias contemplan el porvenir con absoluta confianza. Un soplo de optimismo lo anima todo. Las huelgas económicas no son más que el prólogo de una gran movilización política de masas. La primera explosión proletaria declaradamente política es la huelga general de Sevilla, a fines de junio. La huelga general de Sevilla, inesperada para la burguesía, que, en sus cálculos, hacía abstracción de la clase obrera, retumba como un cañonazo (...) La explosión de Sevilla constituye el toque a la ofensiva proletaria, y poco a poco, los trabajadores van ocupando el primer plano del combate. En septiembre se subleva casi toda Galicia. Los obreros y campesinos de las provincias de Lugo, Orense y Coruña se yerguen contra la dictadura, arrastrando tras de sí a la pequeña burguesía (...) Pocos días después surge en Barcelona la huelga general del ramo de la construcción. Treinta y siete mil obreros se mantienen en paro durante cinco días (...) A comienzos de octubre le llega el turno a Bilbao. La clase obrera de Bilbao se alza en masa. La huelga general tiene el sabor de una formidable batalla revolucionaria. Los obreros asaltan los depósitos de armas y las fuerzas del gobierno tienen que batirse en retirada durante algún tiempo. El despertar obrero se generaliza. Málaga y Vitoria siguen a Bilbao. La ofensiva gana cada día en intensidad (...) A mediados de noviembre surge inesperadamente la huelga general en Madrid y, como reflejo, la de Barcelona, que ponen de manifiesto que el movimiento obrero sigue un ritmo de ofensiva política en ascenso. La huelga general, de Madrid y Barcelona, señala el crecimiento de la madurez política de la clase obrera en acción (...) A Barcelona le sigue Valencia en la movilización obrera, y a Valencia, Cádiz (...) Durante los seis meses que van de junio a diciembre, el movimiento huelguístico, la movilización, se hace, al mismo tiempo que en las grandes ciudades, en las de segunda y tercera categoría, e incluso en algunos pueblos y aldeas”³⁶¹.

En efecto, la situación política española se había transformado en una auténtica crisis revolucionaria que no se resolvería de inmediato dada la ausencia de una dirección obrera a la altura de las circunstancias y que tendría inevitablemente que transitar por diferentes etapas, incluida la república democrática y parlamentaria. Como antaño, y actuando con fidelidad hacia una tradición muy arraigada, la política vacilante y de colaboración de clases de los principales líderes del PSOE y la UGT permitió a los representantes de la burguesía y la pequeña burguesía republicanas hacerse con el protagonismo, asumiendo una dirección política que en absoluto les correspondía. En palabras de Grandizo Munis: “A medida que pasaba el tiempo, aparecía más imprescindible sacrificar la monarquía para salvar el sistema capitalista. Entonces se vio a representantes del clero y los latifundistas, como Alcalá Zamora, alzar el crucifijo junto al gorro frigio de la República. Maura, hijo de un conocido político monárquico del mismo nombre, hizo otro tanto. Sánchez Guerra, un primer ministro de su majestad, sin declararse republicano, citaba versos llamando gusano al rey, mientras su hijo —uno de esos personajillos por herencia— brincaba al campo republicano como asistente de Alcalá Zamora. Un monárquico impenitente, Osorio y Gallardo, atribuía ideas republicanas inclusive a su gato y se confesaba ‘monárquico sin rey’ presto a servir a la República. El viejo y degenerado Partido Republicano, que dirigía el venal Lerroux asistido por Martínez Barrio, empezó a recibir adhesiones de burgueses y mensajes secretos de generales que presentían la tolvanera revolucionaria. Igualmente, discurseaba y prometía el

³⁶¹ Joaquín Maurín, *La revolución española: de la monarquía absoluta a la revolución socialista*, Ed. Anagrama, Barcelona, 1977, pp. 69-73.

oro y el moro el Partido Radical-Socialista, remedo herriotista³⁶² de Marcelo Domingo y Álvaro de Albornoz. Y como los socialistas, deliberadamente, y los anarquistas, tácitamente, se mantenían en un segundo plano, los republicanos burgueses aparecían como los principales conductores y catalizadores del movimiento”.³⁶³

La teoría etapista de la revolución volvió a desplegarse con intensidad, justificada por los teóricos del PSOE con el objetivo prioritario de aupar al poder a las fuerzas republicanas, para así liquidar la monarquía y establecer un régimen parlamentario y constitucional. Existía casi un consenso universal, que también incluía a las cúpulas sindicales, en torno a que la lucha contra la monarquía lo disculpaba todo. Aunque la UGT y, sobre todo, la CNT organizaban un gran número de huelgas, ambos sindicatos carecían de una política independiente frente a las maniobras de los republicanos liberales. Los líderes anarcosindicalistas, imbuidos de prejuicios antipolíticos, en la práctica no actuaron de forma muy diferente a los líderes socialistas, brindando su colaboración a los “comités revolucionarios” organizados por estos y los republicanos burgueses.³⁶⁴

Las ilusiones de los líderes socialistas en que la crisis podría conducir a una revolución democrática burguesa exitosa favorecieron que la política de colaboración de clases se profundizase. A través del pacto de San Sebastián —cuyos paralelismos con el comité revolucionario organizado en 1917 eran más que evidentes—, se acordó un plan de acción para proclamar la república y constituir un gobierno provisional. La reunión que alumbró el acuerdo, celebrada el 17 de agosto de 1930 en el ateneo de San Sebastián, contó con “ilustres” asistentes: Lerroux, Marcelino Domingo, Azaña, Casares Quiroga, Alcalá Zamora, Maura, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, entre otros.

El movimiento “revolucionario” se organizó siguiendo un guión muy similar al de 1917. Los líderes socialistas consideraron el concurso del movimiento obrero, que había dado sobradas muestras de su enorme fuerza en aquellos meses, como un elemento secundario. Apartando a los trabajadores del centro de la estrategia, negando su papel protagonista por el temor evidente a no poder controlarlos, los dirigentes del PSOE y la UGT colocaron a los mandos militares de simpatías republicanas en el vértice de sus maniobras. En lugar de organizar y preparar política y militarmente la insurrección, a través de la huelga general indefinida en las fábricas, tajos y latifundios, y el armamento general del pueblo, se repitió el esquema de la huelga de agosto del 17; se estableció un comité ejecutivo integrado, entre otros, por Alcalá Zamora, Miguel Maura, Indalecio Prieto y Manuel Azaña, que, llegado el momento, actuaría como gobierno provisional. Como en 1917, el movimiento obrero sólo tuvo un papel auxiliar en los planes trazados por la *intelligentsia* republicano-socialista, a pesar de que las huelgas generales crecían en cantidad y calidad, en Barcelona, San Sebastián, Galicia, Cádiz, Málaga, Granada, Asturias, Vizcaya... Por si había duda del objetivo del movimiento, Azaña lo aclaró en el mitin del 28 de octubre en la madrileña plaza de toros de Las Ventas: “una república burguesa y parlamentaria tan radical como los republicanos radicales podamos conseguir que sea”.

El comité ejecutivo salido del pacto de San Sebastián, transformado en el mes de octubre en gobierno provisional de la República, después de varios aplazamientos fijó la fecha del levantamiento antimonárquico para el 15 de diciembre. Pero hubo militares implicados que

³⁶² Referencia a Édouard Herriot, dirigente del Partido Radical Socialista francés que en los años 30 del siglo XX participó en un gobierno de unidad nacional.

³⁶³ Grandizo Munis, *op. cit.*, p. 79.

³⁶⁴ “La participación de la CNT había sido aceptada, en principio, en una entrevista que celebraron en Barcelona el 29 de octubre los delegados del Comité Miguel Maura y Ángel Galarza, con Joan Peiró y Pedro Masón en nombre de la central sindical. Pero la decisión definitiva fue tomada en el Pleno Nacional de Regionales del 17 de noviembre”. Tuñón de Lara, *El movimiento obrero en la historia de España*, *op. cit.*, p. 300.

no pudieron ser avisados y empezaron el pronunciamiento en Jaca (Huesca) tres días antes. Los capitanes republicanos Fermín Galán y García Hernández, quedaron aislados y sin apoyo de otras guarniciones militares comprometidas. Un consejo de guerra, celebrado en la madrugada del 13, y que tan sólo duró 40 minutos, les condenó a muerte. Fueron fusilados al día siguiente. Los nombres de Galán y Hernández adquirieron en la conciencia de las masas la aureola de mártires de su propia causa. “El acto de Jaca y la muerte estoica de los capitanes” escribe Munis, “acendraron mucho más el odio de las masas al régimen. Por todo el país crecieron las protestas y las manifestaciones, las huelgas por objetivos económicos y políticos se multiplicaron...”³⁶⁵ El 15 de diciembre las huelgas fueron significativas en Bilbao, San Sebastián, Santander, Gijón, Pamplona, Eibar, Tolosa, Coruña, Alicante, Jaén, Zaragoza, Logroño, Salamanca, Zamora...también en las zonas mineras de Puertollano y Río Tinto, en Asturias y Vizcaya; en zonas de Levante y Aragón el levantamiento adquirió rasgos muy duros por la participación de los militantes de la CNT. Pero en Madrid la huelga apenas fue perceptible.³⁶⁶

Tras los sucesos de diciembre, a pesar de la represión y las detenciones de los miembros del gobierno provisional, las perspectivas del régimen monárquico eran claramente adversas. Sin base social, incapaz de contener el movimiento revolucionario de los trabajadores y la radicalización de las capas medias, a comienzos de 1931 Berenguer propuso la celebración de elecciones legislativas. La propuesta, o mejor dicho la trampa, fue rechazada por las organizaciones socialistas y los líderes republicanos. Lo más llamativo es que esta maniobra también concitó la oposición, o cuando menos el escepticismo, de los sectores más conscientes de la burguesía, que no estaban dispuestos a prolongar la agonía del régimen. La *dictablanda* de Berenguer entró en crisis definitiva. En los tres meses previos a la proclamación de la Segunda República, los principales muñidores políticos de Alfonso XIII lo intentaron todo para salvar la situación. Emilio Mola, director general de la Seguridad, aplicó una férrea represión sobre la CNT, para intentar dejarla fuera de combate; el conde de Romanones intentó remontar la situación precipitando la caída de Berenguer y reemplazándolo por un gobierno presidido por el almirante Aznar. Maniobras infructuosas que no salvaron a Alfonso XIII.

Muchos políticos del viejo orden comprendían que el fin de la monarquía estaba muy cerca. El gobierno, acosado, convocó elecciones municipales para el 12 de abril, con la esperanza de contener el movimiento de oposición y lograr el apoyo de los sectores republicanos al establecimiento de una monarquía constitucional. Pero ya era tarde. Las ansias de acabar de una vez por todas con la monarquía, alcanzar las libertades democráticas e implantar la república contagiaban a toda la sociedad, incluida la CNT, que no pudo impedir que miles de sus militantes votaran a las candidaturas de la conjunción republicano-socialista.

El fraude electoral y los manejos de los caciques monárquicos en las zonas rurales no fueron suficientes para impedir el triunfo de las candidaturas republicano-socialistas, que arrasaron

³⁶⁵ Grandizo Munis, Op. Cit., p 83

³⁶⁶ León Trotsky hizo balance del movimiento: “La insurrección republicana de diciembre de 1930 será indudablemente inscrita en la historia como un jalón entre dos épocas de la lucha revolucionaria. El ala izquierda de los republicanos estableció contacto con los jefes de las organizaciones obreras a fin de obtener la unidad de acción. Los obreros desarmados tuvieron que desempeñar el papel de coro cerca de los corifeos republicanos. Este objetivo fue realizado en la medida necesaria para poner de manifiesto de una vez para siempre la incompatibilidad del complot militar con la huelga revolucionaria. El gobierno halló en el interior del propio ejército suficientes fuerzas contra el complot militar, que oponía un arma a la otra. Y la huelga, privada de objetivo independiente y de dirección propia, quedó reducida a nada tan pronto la sublevación militar fue vencida.” León Trotsky, *La revolución española y las tareas de los comunistas*, 24 de enero de 1931, en *Escritos sobre la revolución española*, Op. Cit. p 83.

en las grandes ciudades. El desbordante entusiasmo popular y las perspectivas sombrías que acongojaban a los políticos monárquicos contrastaban con la actitud taciturna de los líderes opositores, tanto conservadores travestidos en republicanos como republicanos tradicionales o socialistas, con su falta de confianza en que todo aquello pudiese precipitar la caída de Alfonso XIII. Su escepticismo hacia las masas, típico de la pequeña burguesía, era más fuerte que la evidencia de los hechos. Miguel Maura retrata ese estado de ánimo: “Ya casi de día [13 de abril], hacia las cinco de la madrugada, abandonábamos la Casa del Pueblo Largo Caballero, Fernando de los Ríos y yo. Fatigados y silenciosos, bajamos a pie y marchamos despacio, hasta el paseo de Recoletos. De pronto, Fernando dijo: ‘El triunfo de hoy nos permite acudir a las elecciones generales que se celebrarán en octubre y, entonces, el éxito, si es como el de hoy, puede traernos la república’. Miré a Largo, y con asombro veía que asentía a este peregrino argumento. Por lo visto, ni el uno ni el otro habían medido las consecuencias inevitables de lo que había acontecido en la jornada. Recuerdo la vehemencia con que les hice ver el error que estaban, anunciándoles que antes de cuarenta y ocho horas *estaríamos gobernando*, y advirtiéndoles del riesgo que podían correr muchas cosas vitales para todos si no era así, por timidez o vacilación nuestra”.³⁶⁷

A pesar de la desconfianza de sus dirigentes, las masas oprimidas habían emprendido el camino de derribar la monarquía y no se iban a dejar engañar con más maniobras de última hora. La voluntad de los trabajadores fue el factor decisivo, imponiéndose a las dudas y el escepticismo de los líderes socialistas y sus aliados republicanos. Tras un año de crisis revolucionaria, huelgas obreras, manifestaciones masivas y agitación política a lo largo y ancho de todo el Estado español, el 14 de abril de 1931, dos días después de las elecciones municipales, la odiada monarquía de Alfonso XIII cayó y se proclamó la Segunda República, entre el júbilo de millones de personas. Para la clase dominante, el 14 de abril supuso un mal menor, una prórroga política para reorganizar sus maltrechas fuerzas. Para las masas trabajadoras del campo y la ciudad, la República representó una gran esperanza que podría, por fin, cambiar sus vidas y la de sus hijos. Sin duda, una etapa decisiva de la revolución española había comenzado.

³⁶⁷ Miguel Maura, *op. cit.*, p. 147-148.

VII

EL GOBIERNO DE CONJUNCIÓN REPUBLICANO-SOCIALISTA

El 13 de abril de 1931, las calles de Madrid ya estaban llenas de una masa popular que desfilaba bajo la bandera tricolor, en la calle de Alcalá, en la Cibeles, en la Puerta del Sol. A pesar de los disparos que los esbirros del jefe de la Dirección General de Seguridad, el general Mola, lanzaron contra los manifestantes en Recoletos, la policía permaneció pasiva, impotente ante aquella marea humana que copaba el centro de la capital. Imágenes semejantes se repetían en toda la geografía: Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Valencia... Las fuerzas militares también observaban los hechos sin capacidad para intervenir. Los capitanes generales, en comunicación constante con Berenguer, transmitían las noticias del movimiento popular. Cualquier intento de sacar los militares a la calle para defender a Alfonso XIII sólo habría empeorado las cosas en una proporción difícil de imaginar. Finalmente, el rey y sus más fieles se resignaron. Al día siguiente, los emisarios del monarca se encontraron con Alcalá Zamora para negociar las condiciones de la abdicación.

El 14 de abril, el entusiasmo se volvió a desatar. El ayuntamiento de Eibar fue el primero en izar la bandera republicana en su balcón, a las siete de la mañana. En Barcelona, los trabajadores abandonaron las fábricas nada más conocer los resultados de las elecciones municipales y abarrotaron la plaza de la Generalitat y las calles más céntricas. El entusiasmo era tremendo. Lluís Companys, elegido concejal, proclamó el nuevo régimen desde el balcón del ayuntamiento, y los concejales republicanos cantaban *La Marsellesa* seguidos por la multitud. Momentos después, Francesc Macià hizo otro tanto al anunciar la República catalana como parte de la “Federación Ibérica”. La profunda transformación del ambiente político aumentaba la audacia de la población: miles de personas se dirigieron a la cárcel Modelo de la capital catalana, incendiaron sus puertas y liberaron a los presos, ante la atónita mirada de los funcionarios.

En Madrid, miles de trabajadores venidos desde todos los rincones llenaban la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, todo el centro de la ciudad. Los fieles a Alfonso XIII intentaron negociar desesperadamente una salida favorable, pero las expectativas se vinieron definitivamente abajo cuando el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, dio su adhesión al gobierno provisional. “El director de la Guardia Civil —escribe Tuñón de Lara— que felicitó a sus hombres el 17 de diciembre anterior por la represión del movimiento revolucionario, a quien el 28 de marzo había condecorado el rey con la gran cruz de Carlos III, dio su lanzada al moro muerto y consolidó posiciones. Ya sabía él que el rey se iba y que sus hombres no responderían”.³⁶⁸ Tras unas horas de grandes manifestaciones populares, entusiasmo desbordado y ambiente festivo, el gobierno provisional republicano entró en la sede de Gobernación. A las ocho y media de la tarde, Alcalá Zamora proclamó la Segunda República.

LOS REPUBLICANOS

³⁶⁸ Tuñón de Lara, *La España del siglo XX. De la Segunda República a la guerra civil (1931-1936)*, Ed. Laia, Barcelona, 1981, p. 289.

La marea revolucionaria barrió la monarquía y trajo la República. La burguesía española, en consecuencia, no tuvo más remedio, so pena de provocar una rebelión mayor, que aceptar los hechos y despedir a Alfonso XIII con el beneplácito del nuevo gobierno.

Una profunda conmoción se apoderó de toda la sociedad. La monarquía borbónica, identificada con la oligarquía, la Iglesia y el Ejército, con la represión del movimiento obrero y de las libertades democráticas, con el militarismo y la guerra colonial, fue derribada por un movimiento de masas. La confianza de millones de personas en sus propias fuerzas no hizo sino aumentar tras el 14 de abril. Una fuerza que provenía de un sentimiento profundo, de una convicción firme que creía posible acabar con siglos de explotación y oprobio. En el otro lado, las clases pudientes se sumían en el desconcierto temporal, buscando un camino para recuperarse del golpe recibido. Es cierto que la Segunda República no alteró los fundamentos de la propiedad capitalista y mantuvo esencialmente intactos los pilares del aparato del Estado monárquico. Pero fue el fruto, y esta es la contradicción fundamental que recorrió toda su existencia hasta 1936, de un gran movimiento revolucionario que movilizó a la población trabajadora del campo y la ciudad, a la pequeña burguesía defraudada y frustrada, despertando grandes esperanzas en millones de personas. Las ilusiones en la democracia y en un cambio radical de la vida económica, política y cultural florecieron en todos los rincones.

Los momentos de grandes virajes históricos ponen a prueba a las organizaciones y sus líderes. En tales situaciones, es un hecho que la vieja rutina y el espíritu acomodaticio entra en crisis, choca de lleno con las aspiraciones de un cambio radical. Y en las horas que precedieron la proclamación de la República, no pocas “personalidades”, que jugarían un destacado papel en la política republicana, hicieron gala de vacilaciones nerviosas y una extraordinaria falta de confianza. Un comportamiento que se repetiría a lo largo de los años.

El caso de Manuel Azaña, líder de Acción Republicana y figura encumbrada por todo el espectro político en años posteriores, es un ejemplo paradigmático. Miguel Maura, colega en el primer gobierno provisional, relata en sus memorias los contactos que mantuvo con él en aquellas jornadas. Al margen del resentimiento que este viejo filibustero de la política albergaba con el intelectual republicano, las notas que proporciona coinciden llamativamente con el comportamiento que el futuro primer ministro y presidente de la República mantendría posteriormente. Maura relata así su encuentro con Azaña, escondido desde el intento de golpe de diciembre de 1930: “No fue fácil localizarle porque el secreto que envolvía su paradero era celosamente guardado por sus íntimos. Al fin, me indicaron el domicilio de su cuñado, Cipriano Rivas Cherif. Fui en su busca. Tras no pocas formalidades, y teniendo que dar el nombre y esperar un buen rato, fui introducido en una habitación del fondo de la casa. Allí estaba, pálido, con palidez marmórea, sin duda por haber permanecido en aquellas habitaciones más de cuatro meses. Le hice presente el objeto de mi visita y le conminé para que me acompañase, sin pérdida de tiempo, a mi casa. Se negó rotundamente, alegando que nosotros habíamos sido ya juzgados y prácticamente absueltos, pero que él seguía en rebeldía y, cualquiera, un simple guardia, podía detenerle y encarcelarle. ¡No salía yo de mi asombro! Le expliqué la euforia del pueblo, la visita y el ofrecimiento de Sanjurjo, y cuanto podía estimular el espíritu más timorato, sin lograr conmover su decisión de permanecer oculto. Ya me disponía a dejarle encerrado, cuando apareció su cuñado Rivas Cherif, que regresaba de la calle en un estado de excitación y entusiasmo similar al de los republicanos en esa hora. Confirmó con pormenores cuanto yo venía diciendo y, por fin, Azaña, de muy mala gana, se decidió a seguirme (...) Azaña, hombre de una inteligencia extraordinaria y de cualidades excelsas, estaba aquejado de un miedo físico insuperable”.³⁶⁹

³⁶⁹ Miguel Maura, *op. cit.*, p. 167.

Manuel Azaña sintetizaba la impotencia política de estos sectores republicanos liberales, orgánicamente incapaces de enfrentarse a las grandes tareas de la historia. “A nivel de su dirección —escribió León Trotsky—, los republicanos españoles se distinguen por un programa social extremadamente conservador: su ideal lo ven en la Francia reaccionaria de hoy. Creyendo que con la República vendrá la riqueza, no están dispuestos de ninguna de las maneras a seguir el camino de los jacobinos franceses, ni siquiera son capaces de ello: su miedo a las masas es mayor que su odio a la monarquía”.³⁷⁰ Las agrupaciones republicanas, de izquierdas o de derechas, no tenían ninguna intención de subvertir el orden. Todas rendían culto a la propiedad privada, el parlamentarismo burgués y las instituciones del Estado. En todo caso, el crisol ideológico republicano cambiaba en función de aspectos específicos, como la actitud hacia la Iglesia, que dividía a católicos y laicos, o la cuestión nacional.

La mayoría de las organizaciones republicanas,³⁷¹ a excepción de la formación de Maura y Zamora y del Partido Radical de Lerroux, cuya identificación con la patronal y el gran capital era evidente desde hacía muchos años, reflejaban el punto de vista de la política pequeñoburguesa, más o menos liberal, más o menos conservadora, pero mayoritariamente ligada por múltiples intereses a las clases acomodadas de la sociedad. Miguel Maura señaló en sus memorias las intenciones que guiaron a estos políticos, especialmente a aquellos que, como él, se reconvirtieron al republicanismo y fueron magníficamente aceptados en las filas de la oposición: “La Monarquía se había suicidado y, por lo tanto, o nos incorporábamos a la revolución naciente, para defender dentro de ella los principios conservadores legítimos, o dejábamos el campo abierto, en peligrosísima exclusividad, a las izquierdas y a las agrupaciones obreras”.³⁷² Una vez más, la burguesía repartía los huevos en varias cestas. De su parecer era también el terrateniente y viejo ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República. Zamora razonaba con una sinceridad sorprendente: “Una República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, mas falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerensky para implantarla en mi patria”.³⁷³

La razón fundamental que inclinó a la clase dominante a mantener una actitud de expectativa y no oponerse frontalmente al cambio de régimen fue una correlación de fuerzas desfavorable. Además, la burguesía era muy consciente de los límites del movimiento republicano. Para controlar con mayor efectividad sus organizaciones y, al mismo tiempo, contraponerlas a la fuerza de los partidos y sindicatos obreros, propició que se llenaran de

³⁷⁰ *La revolución española y las tareas de los comunistas*, recogido en *Escritos sobre la Revolución española*, León Trotsky, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid 2010, p. 71.

³⁷¹ En el bienio reformista hubo tres formaciones republicanas que adquirieron relevancia por su participación gubernamental. 1) *Acción Republicana*. Creada durante la dictadura de Primo de Rivera bajo el nombre de Acción Política. En 1930 adoptó el de Acción Republicana ya bajo el claro liderazgo de Azaña. Incorporó a intelectuales como José Giral, Honorato de Castro. Integrada en la Alianza Republicana, fue una de las organizaciones que impulsó el pacto de San Sebastián. En las elecciones constituyentes de junio de 1931, Acción Republicana obtuvo 27 diputados. En el primer bienio proporcionó una importante cantidad de cuadros al Estado. En las elecciones de noviembre de 1933, sólo obtuvo 5 diputados. Un año después se fusionó con la mayoría del Partido Radical-Socialista y de la Organización Republicana Gallega (ORGA), dando lugar a Izquierda Republicana. 2) *Partido Republicano Radical-Socialista*. Escisión del Partido Radical en 1929, representó un intento jacobino del republicanismo pequeñoburgués. En 1931 obtuvo 51 diputados en las Cortes constituyentes. Sus principales dirigentes eran Álvaro de Albornoz, Ángel Garalza, Marcelino Domingo, Félix Gordón Ordax y Fernández Clérigo. 3) *Derecha Liberal Republicana*. Fundada por Alcalá Zamora y Miguel Maura. En agosto de 1931 pasó a llamarse Partido Republicano Progresista. En enero de 1932, los partidarios de Maura se escindieron para formar el Partido Republicano Conservador.

³⁷² Miguel Maura, *op. cit.*, p. 48.

³⁷³ *Ibid.*, p. 57.

políticos profesionales provenientes del régimen monárquico. Los dirigentes republicanos no pusieron el menor reparo, todo lo contrario: “Los republicanos acogieron a los monárquicos en las zonas rurales para fortalecer sus partidos. Hay que tener en cuenta que los partidos republicanos locales tenían escasos miembros; muchos de ellos carecían de organizadores, oradores e incluso personal de base. Irónicamente, a menudo fueron necesarios ex monárquicos con experiencia política para el funcionamiento mismo de los partidos republicanos”.³⁷⁴ Una masa de funcionarios del Estado, de los ayuntamientos, caciques, empresarios, ventajistas de todo tipo, se involucraron con la bandera tricolor para defender en la nueva hora sus privilegios e influencia, y nutrieron de cuadros a las organizaciones republicanas. Un lastre conservador que pugnaría tenazmente contra los deseos de cambio y revolución de miles de trabajadores y jornaleros.

La burguesía, al menos sus sectores decisivos en el plano económico y político, aceptó como un mal menor la república. Por mucho que las cosas se complicaran, podría neutralizar las decisiones más negativas para sus intereses utilizando a unos políticos que, en su mayoría, eran maleables, o al menos eso creían. Como señala Tuñón de Lara: “El gobierno provisional republicano, preocupado hasta la exageración por las formas del derecho y el mantenimiento de las esencias liberales, fijó el reconocimiento de la libertad de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de propiedad como piezas esenciales, así como el sometimiento de los actos gubernamentales a las Cortes constituyentes (...) España se encontraba en el umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social basado en la propiedad privada de los medios de producción y circulación, es decir, lo que suele llamarse un régimen de democracia burguesa”.³⁷⁵ Lo que no entraba dentro de los cálculos iniciales de los capitalistas era que la lucha de clases se radicalizara con tanta rapidez. Para los auténticos protagonistas del derrocamiento de la monarquía, la república tenía un significado muy concreto que pasaba, sin duda, por una mejora sustancial y tangible de sus miserables condiciones de existencia.

LA FUERZA DE LA IZQUIERDA EN 1931

En las jornadas previas a la insurrección de octubre de 1917, Lenin explicó las cuatro condiciones necesarias para el triunfo de revolución socialista: 1) Que la clase dominante no pudiese seguir manteniendo su dominación por los medios habituales. 2) La disposición de la clase obrera a luchar hasta el final. 3) Una actitud favorable, o al menos neutral, de la pequeña burguesía hacia el movimiento revolucionario. Y 4) la existencia de un partido con un programa, una táctica y una estrategia a la altura de las circunstancias históricas capaz de dirigir a las masas oprimidas al poder.

En 1931, las tres primeras condiciones estaban presentes en la crisis política que vivía el Estado español, pero no así la última y más importante de todas, es decir, la dirección política revolucionaria del proletariado. Este hecho determinó, necesariamente, que la crisis revolucionaria abierta con la caída de la monarquía tuviese que atravesar por una fase de democracia burguesa parlamentaria extremadamente frágil e inestable. Tanto el primer bienio de gobierno de conjunción republicano-socialista como el segundo, dominado por la reacción de derechas, confirmaron lo que la lucha de clases había dejado claro en décadas anteriores:

³⁷⁴ Nigel Towson, *La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936)*, Ed. Taurus, Madrid, 2002, p. 67.

³⁷⁵ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 293.

culminar y completar con éxito las reformas democráticas, incluso las más tímidas, sería el resultado de una lucha encarnizada contra la oligarquía.

El factor de la dirección era, de todo punto de vista, el más importante para resolver la crisis política de 1931. Después de décadas de régimen monárquico y seis años de dictadura militar, las aspiraciones democráticas se convirtieron en una poderosa palanca revolucionaria. Las demandas a favor de las libertades democráticas podían y debían ligarse a la lucha por la transformación socialista de la sociedad; formaban parte inseparable de la estrategia para el derrocamiento del capitalismo.

La oportunidad era inmejorable, pero, como en otras coyunturas críticas, los dirigentes de la izquierda contemplaban las reivindicaciones democráticas como algo divorciado de la lucha por el socialismo. La experiencia vivida años atrás no contaba, parecía un libro cerrado con siete llaves para la mayoría de los dirigentes obreros. En la coyuntura de 1931, era muy evidente que la palabra *democracia* representaba cosas muy diferentes según la clase que la utilizara. Para la burguesía, significaba mantener intacta su capacidad para seguir sometiendo y explotando a la clase obrera y el campesinado, seguir gozando del monopolio de la propiedad de la tierra, que las fábricas y las empresas estuvieran bajo su firme control, que el ejército garantizara esas relaciones de propiedad contra el enemigo interior, además de la unidad *sagrada* de la patria; que otras instituciones del Estado, como el parlamento o la judicatura, defendieran la propiedad capitalista y persiguieran a la clase obrera cuando la pusiera en cuestión.

Muy diferente era el caso para los trabajadores y los campesinos, para los cuales la proclamación de la República significaba, en primer término, la democracia económica y social. Millones veían en la democracia el equivalente a terminar con las jornadas extenuantes y los salarios de miseria, y mejorar significativamente sus condiciones de vida. La República traería la ansiada reforma agraria. Se pondría punto y final al poder de la Iglesia. Con la democracia republicana, pensaba la mayoría, se depuraría de elementos fascistas el aparato del Estado, la judicatura, las administraciones y, sobre todo, el ejército, y se lograrían las libertades democráticas (expresión, reunión, organización...). Para la pequeña burguesía de las nacionalidades históricas se concretaría el derecho de autodeterminación, y muchos confiaban en que se acabaría con la ocupación militar de Marruecos, concediendo la independencia a los territorios ocupados.³⁷⁶

La ausencia de una estrategia y un programa concreto que ligase la lucha por las demandas democráticas a la transformación socialista fue el talón de Aquiles de las organizaciones obreras, tanto de las socialistas y anarcosindicalistas como del partido comunista oficial. La fortaleza numérica de las organizaciones del proletariado, sindicatos y partidos, su vasta influencia frente a la escasa capacidad de movilización de los republicanos burgueses, no bastó para liderar la crisis revolucionaria. Al contrario, los dirigentes de la izquierda cedieron el protagonismo a fuerzas políticas y sociales cuya representación fue inflada artificialmente por la ley electoral.

El peso político del proletariado y sus organizaciones no había dejado de aumentar durante la crisis revolucionaria, y se incrementó después del triunfo de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones constituyentes de junio de 1931. Ya hemos señalado que en las dos décadas anteriores se habían producido cambios en la base productiva, fortaleciendo el peso del proletariado industrial. Con una población de más de veintitrés millones y medio de habitantes, el número de obreros industriales superaba los dos millones, a los que había que

³⁷⁶ Las “Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”, escritas por Lenin para el I Congreso de la IC, sintetizan la posición de marxismo revolucionario al respecto. Se pueden consultar en *La Internacional Comunista. Tesis, manifiestos y resoluciones de los cuatro primeros congresos*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS.

sumar casi cuatrocientos mil ocupados en los transportes y comunicaciones. Las organizaciones socialistas experimentaron un gran salto en su militancia a principios de la década de los treinta, y aumentarían mucho más sus efectivos en tan sólo dos años. La UGT, que en diciembre de 1930 contaba con 287.332 militantes y 1.881 secciones, llegó a 1.054.599 afiliados y 5.107 secciones en junio de 1932. El PSOE también registró un crecimiento muy importante, de 16.878 afiliados en junio de 1930 a 75.133 dos años más tarde.³⁷⁷

Bajo la dictadura de Primo de Rivera, el repunte económico atrajo a un importante caudal de jóvenes campesinos hacia la construcción de obras públicas, las empresas textiles y metalúrgicas, buena parte de los cuales se adhirieron a las organizaciones obreras en la crisis final de la dictadura, llenos de ilusión, sin el peso muerto de la rutina burocrática y los sinsabores de anteriores derrotas. Con la situación abierta tras el 14 de abril, el proceso se fortaleció, adquiriendo proporciones formidables. La enorme afluencia de trabajadores, anteriormente apartados de la lucha política, hacia las organizaciones tradicionales de la izquierda era un síntoma inequívoco del avance y la profundidad de la revolución. Las masas del proletariado, el campesinado pobre y la juventud despertadas a la vida consciente se orientaron hacia sus organizaciones tradicionales, partidos y sindicatos, que encarnaban un pasado de lucha y combate. El PSOE y la UGT, a pesar de su política colaboracionista con la dictadura de Primo, y la CNT se transformaron en el instrumento de millones de oprimidos para cambiar sus vidas. Esta relación dialéctica entre las organizaciones tradicionales y la clase obrera, condicionada por la propia experiencia de las masas y las presiones ejercidas por la clase dominante sobre la cúpula de estas organizaciones, explica los enfrentamientos y divisiones que tendrían lugar en el seno del movimiento socialista y anarcosindicalista. El debate en torno a reforma o revolución pronto estallaría con toda crudeza.

La inmensa mayoría de los dirigentes socialistas coincidían en defender el carácter *burgués* de la revolución que había acabado con la monarquía. Según su planteamiento, los sectores liberales y progresistas de la burguesía española, con la colaboración del PSOE, tendrían la oportunidad de emprender las transformaciones democráticas consumadas en Inglaterra y Francia en los siglos anteriores. A través de la reforma agraria se barrerían los vestigios feudales, la propiedad latifundista de la tierra y el poder político de los terratenientes. Una reforma tan profunda de la estructura agraria alumbraría una clase de pequeños propietarios agrícolas, que se convertirían en un firme apoyo del nuevo régimen republicano. Con el poder ejecutivo en sus manos y la mayoría del legislativo, lograrían la separación de la Iglesia y el Estado, poniendo cerco al poder económico e ideológico de aquélla. Abordarían la modernización de la administración, el ejército y la justicia, velando por las libertades públicas, sin las cuales sería imposible dar al régimen su fundamento democrático. Un gobierno de colaboración abriría, según sus cálculos, una perspectiva positiva para la solución del problema nacional, al menos en Catalunya, donde las fuerzas nacionalistas de izquierda, con una base amplia entre la pequeña burguesía, habían alcanzado un mayor grado de desarrollo y se presentaban como tácitas aliadas del gobierno para la construcción del Estado democrático. Se daría carta de naturaleza a un capitalismo avanzado, con un tejido industrial diversificado y una red de transportes moderna. Conquistar esta etapa democrático-burguesa era una antesala obligatoria de cualquier otra transformación revolucionaria de mayor calado.

El guión era el mismo que defendieron los mencheviques rusos en su momento o los socialdemócratas alemanes en 1917 y 1918. El proletariado y su dirección tenían que subordinarse a la burguesía *democrática y progresista*, para ir creando las condiciones de un largo período de desarrollo capitalista que, a su vez, facilitaría el crecimiento de las

³⁷⁷ Tuñón de Lara, *El movimiento obrero en la historia de España*, vol. II, Ed. Sarpe, 1985, p. 307.

organizaciones obreras y su poder dentro de las instituciones políticas y económicas: parlamento, ayuntamientos, tribunales, cooperativas. En palabras de Fernando de los Ríos, la función política del PSOE era “sostener la democracia política e ir realizando una ordenación socialista de la economía (...) La construcción del nuevo Estado habrá de descansar sobre tres bases: libertad, democracia y un profundo sentido socialista para sentir la democracia y articular el liberalismo”.³⁷⁸

Junto al movimiento socialista, el semillero más importante para la revolución, por tradición y militancia, era la CNT. Más allá de cualquier visión mítica, los acontecimientos de 1931 pusieron de relieve que los dirigentes anarcosindicalistas estaban mayoritariamente imbuidos del espíritu dominante de euforia y unidad. “Los principales dirigentes del anarcosindicalismo —escribe Julián Casanova— no se cansaban de saludar, aunque con los reparos típicos de su antipoliticismo, al nuevo régimen, desde la prensa, desde los mítines y reuniones sindicales, y con escritos dirigidos a las autoridades (...) Aunque las declaraciones iban siempre acompañadas de una enérgica ratificación del carácter antiparlamentario y revolucionario de la CNT, la negación a dar la batalla desde el principio al régimen republicano reflejaba las ilusiones que impregnaban la atmósfera española”.³⁷⁹

El avance de la CNT fue similar al de las organizaciones socialistas. Sus vínculos con el movimiento obrero organizado, sobre todo en Barcelona, cuarteados bajo la represión, se restablecieron sólidamente durante la crisis de la dictadura y los meses previos a la proclamación republicana. En el otoño de 1931, rondaba los 800.000 afiliados, y un año después superaba el millón.³⁸⁰ Su fuerza en Catalunya y Andalucía era manifiesta (300.000 afiliados en cada una), que junto a Aragón y País Valenciano se convirtieron en los grandes feudos cenetistas.

La celebración del congreso cenetista en junio de 1931, el primero en la legalidad desde 1919, no sólo permitió pasar revista a sus efectivos, también sirvió para proyectarla públicamente, aumentar la ligazón entre los diferentes sindicatos y sacar a la superficie el enfrentamiento latente, y no resuelto, entre el ala sindicalista, encabezada por una parte considerable de sus cuadros históricos, y los elementos anarquistas radicalizados provenientes de la FAI y con fuertes posiciones en los sindicatos de la construcción. El congreso abordó cuestiones de peso pero, sin duda, una de las discusiones más importantes y más polémicas orbitó en torno a la posición cenetista hacia las elecciones a Cortes constituyentes, programadas para ese mismo mes.³⁸¹

En la ponencia presentada, además de señalar los postulados generales del anarcosindicalismo —“suceda lo que suceda, quiere decir que legislando o no las Cortes constituyentes en sentido reaccionario o democrático, la CNT ha de seguir siempre sus normas de acción directa, impulsando al pueblo en sentido francamente revolucionario hacia el comunismo libertario”—, se planteaban una serie de peticiones al gobierno nacido de las

³⁷⁸ *La II República española. El primer bienio* (III Coloquio de Segovia sobre Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de Lara), Siglo XXI editores, Madrid, 1987, p. 53.

³⁷⁹ Julián Casanova, *De la calle al frente (el anarcosindicalismo en España 1931-1939)*, Ed. Crítica, Barcelona, 1997, p. 13.

³⁸⁰ La CNT disponía además de órganos de expresión de amplia difusión, que fueron sometidos a ataques constantes por las autoridades gubernativas, suspensiones y secuestros de ejemplares, sobre todo a partir de enero de 1932. Junto a *Solidaridad Obrera*, el portavoz oficial del sindicato publicado por decenas de miles de ejemplares, el diario *CNT* de Madrid, cuya edición fue acordada en el Congreso de junio de 1931, tenía una tirada de 31.000 ejemplares.

³⁸¹ A ese congreso de la CNT, celebrado en Madrid, asistieron 418 delegados en representación de 511 sindicatos y 535.565 afiliados. Además de tratar sobre la reorganización de la estructura orgánica, el congreso decidió la creación de las federaciones de industria. Este aspecto suscitó una importante controversia con los delegados anarquistas más intransigentes, que se opusieron a ellas.

urnas en demanda de los derechos democráticos. Esta última propuesta provocó un encontronazo con los anarquistas intransigentes, delegados del sindicato metalúrgico de Sagunto o de la construcción de Madrid, como Cipriano Mera, que se negaron a votar favorablemente el dictamen de la ponencia: “El solo hecho de formular peticiones (...) ante las Cortes Constituyentes implica el reconocimiento de su eficacia, cuando a los militantes de la Confederación nos consta, o debía constar, que tales órganos legislativos son un engranaje burgués, por medio del cual se pretende consolidar el régimen de explotación constante”. El dictamen se aprobó, pero el enfrentamiento —incluido los reproches a Peiró y Pestaña por haberse comprometido con Macià a no hacer campaña abstencionista— anunciaba una era de grandes turbulencias en la vida interna de la CNT.³⁸²

Los primeros pasos del gobierno republicano enturbiaron las relaciones con el movimiento anarcosindicalista. La represión de las huelgas, los asesinatos de obreros y la saña con la que se persiguió a la CNT desde los ministerios republicanos y socialistas rompieron definitivamente la confianza y las ilusiones que pudieran albergar en el gobierno. Las palabras de Buenaventura Durruti en un mitin celebrado a finales de abril de 1931, estaban cargadas de premonición: “Si fuésemos republicanos, aseguraríamos que el Gobierno es incapaz de reconocer el triunfo que le ha dado el pueblo. Pero nosotros no somos republicanos y sí auténticos obreros y, en nombre de ellos, llamamos la atención del Gobierno sobre el peligroso camino que ha emprendido, que de no cambiarlo conduciría al país al borde de la guerra civil. La República no nos interesa como régimen político, y si lo hemos aceptado es pensándola como punto de partida de un proceso de democratización social. Pero, naturalmente, a condición de que esta República garantice los principios según los cuales libertad y justicia social no son expresiones vanas. Si la República olvida todo esto, y con ello hace un desprecio a las exigencias proletarias y campesinas, entonces, el poco interés que los obreros tienen por la República lo perderán, porque su actuación no corresponde a las esperanzas que la clase obrera puso en ese régimen el 14 de abril”.³⁸³

La otra corriente del proletariado al margen de las grandes organizaciones socialistas y anarco-sindicalistas era el Partido Comunista de España, cuyo desarrollo había estado condicionado por diferentes factores. En primer lugar, por la presencia de una organización anarcosindicalista con una larga tradición que mantenía una influencia real entre la vanguardia revolucionaria de los trabajadores y los campesinos. En segundo lugar, por la existencia del PSOE, que logró retener importantes puntos de apoyo entre la clase obrera y mantener un fuerte sindicato. En tercer lugar, el PCE sufrió la persecución sin tregua de la dictadura primorriverista, cuyos golpes represivos llevaron a la dispersión de sus cuadros y la parálisis de su dirección. Pero sin menospreciar todos estos hechos, que tuvieron una incidencia real en la evolución del PCE, sus escasas fuerzas en 1931 no se explican sólo por ellos. La influencia del bolchevismo en las filas socialistas y anarquistas había sido enorme, y los ataques del aparato estatal no solo habían afectado al PCE, también la CNT los había sufrido muy duramente y eso no impidió que, en el momento de cambio de régimen, se recuperase con rapidez.

El PCE, a pesar de no rebasar en militancia al PSOE, logró un apoyo considerable en zonas industriales de Vizcaya y Asturias, y en provincias andaluzas como Córdoba y Sevilla. En las condiciones de finales de los años 20, su crecimiento sólo podía provenir de una intervención paciente en la lucha de clases, orientando su acción hacia la base militante del movimiento socialista y cenetista, ligando la lucha por las demandas democráticas al programa de la revolución. La formación de cuadros, la conquista de posiciones en el movimiento sindical y la defensa del frente único obrero contra la dictadura y la monarquía tendrían que haber sido

³⁸² Julián Casanova, *op. cit.*, p. 26.

³⁸³ *Solidaridad Obrera*, 21/4/1931.

tareas centrales del partido. En 1927, el PCE reforzó sus efectivos tras el ingreso colectivo de una parte de los cuadros sevillanos de la CNT, que contaban con una influencia significativa entre la clase obrera de la provincia. Sin embargo, su progresión se vio obstaculizada, y frenada, por la escasez de dirigentes preparados y, sobre todo, por los efectos políticos del ascenso del estalinismo en la URSS y en la Internacional Comunista.

Igual que en el caso de otros partidos comunistas occidentales, los zigzags de la dirección estalinista determinaron la política sectaria con la que el PCE se aproximó a los acontecimientos revolucionarios de 1930-1931, que lo mantuvieron como un mero espectador de los mismos y aislado de las masas que los protagonizaban. Los militantes comunistas resistieron abnegadamente la represión de la dictadura de Primo de Rivera pero todos sus sacrificios, los encarcelamientos, el exilio de muchos de ellos, fueron malogrados por la política de la Internacional Comunista en aquellos años.

Las tesis ultraizquierdistas oficiales de la Internacional estalinizada, la doctrina del *tercer período y el socialfascismo*, las aventuras escisionistas en los sindicatos de masas³⁸⁴, separaron al PCE del movimiento revolucionario y de su vanguardia. En el caso de los sindicatos y especialmente en relación al movimiento anarcosindicalista, la postura defendida por el PCE, a instancias de la dirección de la Internacional, era muy contraproducente. De gran tradición y con una base de masas, la CNT contrastaba mucho con las grandes organizaciones sindicales reformistas de raíz socialdemócrata europeas. Una tendencia revolucionaria, comunista, debía considerar la intervención en las filas de la CNT como una prioridad. Las posibilidades que ofrecía el contacto con miles de trabajadores conscientes eran mucho más importantes que las dificultades que provendrían de los círculos anarquistas del sindicato. La tradición anarcosindicalista era muy fuerte, pero los mejores militantes podrían ser ganados a un programa auténticamente comunista, que conectara y demostrara en la práctica su viabilidad. Esta era la posición de León Trotsky al emplazar a los comunistas españoles a intervenir enérgicamente en la CNT: “La Confederación Nacional del Trabajo agrupa indiscutiblemente a su alrededor a los elementos más combativos del proletariado. En dicha organización, la selección se ha efectuado en el transcurso de una serie de años. Reforzar dicha confederación, convertirla en una verdadera organización de masas es el deber de todo obrero avanzado y ante todo del comunista”.³⁸⁵ Sin embargo, la dirección del PCE, a

³⁸⁴ En su V Congreso (junio-julio de 1924), la Internacional Comunista, dominada por Zinóviev y Stalin, abandonó la política del frente único. En el VI Congreso (1928), tras el fracaso de la huelga general británica de 1926 y la terrible derrota de la revolución china de 1926-1927, la IC aprobó un giro ultraizquierdista, elaborando su doctrina del tercer período y el socialfascismo, que tendría trágicas consecuencias para el proletariado alemán y de toda Europa. En el esquema estalinista, el primer período (crisis del capitalismo y alza revolucionaria) se extendió de 1917 a 1924, el segundo (estabilización del capitalismo) de 1925 a 1928 y el tercer período era el de la crisis final del capitalismo y sostenía que la socialdemocracia y el fascismo eran gemelos: “El fascismo y la socialdemocracia son dos aspectos de un solo y mismo instrumento de la dictadura del gran capital”. Dado que el resto de las corrientes obreras eran calificadas de fascistas (social-fascistas, anarco-fascistas, trotsko-fascistas), era imposible que los partidos comunistas defendieran el frente único antifascista con ellas. Ninguna teoría le podía ser más útil a Hitler en la época en que se preparaba para tomar el poder. De acuerdo con ese nuevo planteamiento, desde 1928 hasta 1934 las tácticas de la IC estuvieron marcadas por el ultraizquierdismo, la división sindical y la formación de sindicatos “rojos”, y la oposición al frente único. En 1934, la IC, siguiendo las instrucciones de Stalin, reemplazó la teoría y la práctica del tercer período por las del frente popular, y en poco tiempo los estalinistas estaban cortejando no sólo a los socialdemócratas, sino también a políticos capitalistas a los que pocos meses antes todavía llamaban fascistas.

³⁸⁵ Trotsky continúa así su propuesta: “Pero al mismo tiempo no debemos hacernos ninguna ilusión respecto a la suerte del anarcosindicalismo como doctrina y como método revolucionario. El anarcosindicalismo, con su carencia de programa revolucionario y su incompreensión del papel del partido, desarma al proletariado. Los anarquistas “niegan” la política hasta que esta les coge por el pescuezo: entonces dejan el sitio libre para la política de la clase enemiga. ¡Así fue en diciembre! (...) La ventaja de las situaciones revolucionarias consiste precisamente en que las masas aprenden con gran rapidez. La evolución de estas últimas provocará inevitablemente diferenciaciones y escisiones no sólo entre los socialistas, sino también entre los sindicalistas.

pesar de la oposición de muchos militantes, dio la espalda a las bases de la CNT, arrojando por la borda la táctica leninista de trabajo paciente en los sindicatos de masas.³⁸⁶

LA REPÚBLICA Y LAS TAREAS DE LOS COMUNISTAS

Los dirigentes estalinistas tenían una visión irreal de la revolución española, lo que determinaba a su vez la impotencia del PCE. El secretario ejecutivo de la Internacional Comunista, Manuilski, analizaba así los acontecimientos que habían provocado la caída de Primo de Rivera: “Es necesario darse cuenta claramente de que, a pesar de las formas de guerra civil a las que da salida el impulso revolucionario de España, la clase obrera no tiene por el momento más que un papel ínfimo en este movimiento. Por ello los movimientos de este tipo desfilan por la pantalla de la historia como un simple episodio que no deja huellas profundas en el espíritu de las masas trabajadoras ni enriquecen su experiencia de la lucha de clases. Una huelga parcial puede tener para la clase obrera internacional una importancia más sugestiva que una ‘revolución’ como la española, que se realiza sin que el PCE y el proletariado ejerzan en ella su papel dirigente”.³⁸⁷

Con semejante “orientación”, mezcla del desdén arrogante del burócrata y de una ignorancia total de los hechos analizados, no resulta difícil entender la actitud de la dirección del PCE en 1931, cuya expresión más acabada se plasmó en las jornadas que culminaron en la proclamación de la República. En el momento que los trabajadores, después de meses de combates y acciones revolucionarias, acababan con la monarquía y se despertaba el entusiasmo general, los dirigentes del PCE se lanzaron a una agitación sectaria con consignas contra la República y a favor de unos sóviets inexistentes. La dirección de PCE renunció a hacerse oír entre las masas y a contribuir a transformar aquel formidable movimiento en una escuela de aprendizaje político a favor de las ideas del marxismo revolucionario. La única consigna en el abecedario político estalinista eran los “sóviets”, sin entender que las demandas democráticas podían y debían vincularse a la lucha por la transformación socialista del régimen republicano. Poco después, Humbert-Droz, dirigente comunista suizo y responsable durante muchos años en la IC de los asuntos concernientes al PCE, envió un informe a Manuilski: “Las elecciones municipales [de abril] han puesto de manifiesto la

En el transcurso de la revolución son inevitables los acuerdos prácticos con los sindicalistas revolucionarios. Nos mostraremos lealmente fieles a estos acuerdos. Pero sería verdaderamente funesto introducir en los mismos elementos de equívoco, de reticencia, de falsedad. Incluso en los días y las horas en que los obreros comunistas luchan al lado de los obreros sindicalistas, no se puede destruir la barrera de principios, disimular las divergencias o atenuar la crítica de la falsa posición del aliado. Sólo con esta condición quedará garantizado el desarrollo progresivo de la revolución”. *La revolución española y las tareas de los comunistas*, en León Trotsky, *Textos sobre la revolución española*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2010, p. 80.

³⁸⁶ La decisión del PCE en 1930 de crear comités de reconstrucción de la CNT, al margen de las estructuras cenetistas, cuando ésta estaba reorganizándose, sólo tuvo incidencia en algunos puntos de Andalucía y en Asturias, donde el Sindicato Único de Mineros pasó a ser controlado por el PCE. En junio de 1932 se celebró una conferencia en Madrid, a la que asistieron representaciones comunistas de sindicatos andaluces, sobre todo de Sevilla, del Sindicato Ferroviario del Norte, de Dependientes de Comercio, del Sindicato Minero de Vizcaya y de la Federación Tabaquera de España. En sintonía con las directrices de la IC, se decidió crear la Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU), cuyo congreso fundacional se realizó en abril de 1934, con una afiliación que escasamente superaba los 100.000 miembros. En noviembre de 1935, la CGTU se integró en la UGT. Esta táctica escisionista no cosechó en ningún caso los frutos esperados por la burocracia estalinista, pero sí permitió reforzar la campaña de los dirigentes reformistas de la UGT y los anarcosindicalistas contra el PCE.

³⁸⁷ Pierre Broué, *La revolución española*, Ediciones Península, Barcelona, 1977, p. 153.

enorme debilidad del partido, su aislamiento completo, su mínima influencia sobre las masas (...) Estamos obligados a comprobar que nos mecíamos de ilusiones y que no hemos contado con la influencia que creíamos tener. Los resultados son inferiores a los cálculos más pesimistas. En Barcelona mismo fue una verdadera tragedia (...) No hemos recogido ni 100 votos, mientras los maurinistas, que desarrollaron una campaña más intensa que nosotros, reunieron más de 3.000 votos. En Sevilla (...) no obtuvimos ni 800. En Madrid no logramos 200. No compartía, desde luego, el optimismo de los que evaluaban nuestra influencia a base del éxito de nuestros actos electorales, pero no creía que el partido fuese tan débil. La oleada republicano-socialista fue considerable y supera todas las previsiones de los propios monárquicos. Fue un verdadero plebiscito contra la Monarquía en todos los lugares donde se pudo votar, es decir, en todos los grandes centros urbanos. La masa estaba en la calle. Centenares de miles de personas de toda clase, que aplaudían las banderas republicanas, cantaban, bailaban y no tenían deseo alguno de luchar ni manifestarse a favor de consignas precisas. Hay que tener en cuenta ese ambiente de fiesta popular para comprender el fenómeno que se ha producido: los comunistas que intentaban manifestar, repartir octavillas o dirigir la palabra a la multitud fueron silbados, abroncados y acogidos con hostilidad amenazadora”.³⁸⁸ La deriva sectaria impidió al PCE aprovecharse de las contradicciones políticas de los dirigentes socialistas, y atraer a sus filas a una parte de los trabajadores que se desencantaban. Gracias a ello, los dirigentes socialdemócratas pudieron disfrutar de un mayor margen de maniobra y conservar una porción considerable de su autoridad.

En 1927, la Internacional había confiado el mando del Partido a José Bullejos, que lo dirigió en pleno tercer período ultraizquierdista a base de expulsiones continuas. A principios de 1931, el PCE no contaba con más de un millar de afiliados, y su dirección había sufrido una depuración permanente. En realidad, de partido sólo tenía el nombre: las escisiones y las expulsiones llevaron a la creación de otros grupos comunistas que mantenían una influencia considerable, incluso mayor que la del partido oficial. La Federación Comunista Catalano-Balear (FCCB), dirigida por Joaquín Maurín, que más tarde se convertiría en el Bloque Obrero y Campesino, alcanzó en Cataluña una presencia mucho mayor que la del PCE. Por su parte, la Oposición Comunista Española, los partidarios de Trotsky, comenzó su andadura a finales de 1930 aglutinando a muchos de los fundadores del comunismo español, cuadros destacados por su nivel teórico y su tradición en el movimiento obrero.³⁸⁹

³⁸⁸ Andrés Suárez (Ignacio Iglesias), *El proceso contra el POUM*, Ed. Ruedo Ibérico, París, 1974, p. 31.

³⁸⁹ El primer grupo de comunistas españoles afines a Trotsky se organizó en el exilio, en torno a la Liga Comunista Francesa, y fue liderado por un antiguo dirigente del PCE de Vizcaya, Francisco García David (Henri Lacroix). Publicó un periódico en el exilio, *Contra la Corriente*, que contó con las adhesiones de algunos desatacados cuadros comunistas. A comienzos de 1930, los trotskistas inician el trabajo en España y en febrero de ese año celebran en Lieja (Bélgica) la I Conferencia de la Oposición Comunista Española (OCE). En la segunda (junio de 1931) se ratificó la publicación de la revista *Comunismo*, de gran predicamento en las filas de la izquierda. En la III Conferencia, que tendría lugar en Madrid en marzo de 1932, la OCE cambió su nombre por el de Izquierda Comunista. Aunque en un primer momento la OCE encontró eco en muchas federaciones del PCE, ninguna se adhirió de una forma clara y definitiva. Como explica el militante opositor García Palacios: “La razón (...) hay que buscarla en la sugestión, en el influjo, en el mito de la Internacional. Se reconoce por casi la totalidad del partido que la Oposición tiene motivos serios; se condena la política del Ejecutivo estaliniano; pero, no obstante, la burocracia internacional ordena y... todo el mundo boca abajo”. En septiembre de 1930 llegó a Barcelona Andreu Nin, expulsado un mes antes de la URSS. Era uno de los militantes comunistas españoles con más prestigio internacional. Secretario de la Internacional Sindical Roja durante su estancia en la URSS, había sido un activo miembro de la Oposición de Izquierdas en Leningrado, junto a Victor Serge. Volvió para organizar la sección española de la Oposición de Izquierdas Internacional junto con los pocos compañeros que se iban adhiriendo en el resto del Estado.

La FCCB, dirigida por Maurín, era el otro gran grupo comunista enfrentado con el partido oficial. Con una presencia importante en Catalunya, en su política destacaba una creciente inclinación hacia posiciones pequeñoburguesas e independentistas respecto a la cuestión nacional catalana. La FCCB se mostró durante años renuente a cuestionar la política estalinista, ni en lo que respecta a la teoría del socialismo en un solo país ni a

La deriva sectaria del estalinismo, incapaz de ofrecer una interpretación marxista de los acontecimientos españoles, contrastaba con el examen cuidadoso que propusieron la Oposición de Izquierdas Internacional y su sección española. Los textos fundamentales de Trotsky sobre la revolución española, desde los más tempranos (1930-31), abordando la crisis del régimen monárquico y las perspectivas para la república, hasta los últimos (1939-40), dedicados al balance de la derrota militar y política del proletariado tras tres años de lucha contra el fascismo, constituyen un preciado tesoro de teoría y estrategia revolucionarias y merecen ser estudiados con detenimiento y rigor.³⁹⁰

A pesar de la lejanía geográfica, Trotsky analizó la crisis revolucionaria de 1930-31 con una metodología diametralmente opuesta a la estalinista. En 1930, desde su exilio en la isla turca de Prinkipo, planteó las siguientes consideraciones: “Este camino supone, por parte de los comunistas, una lucha resuelta, audaz y enérgica, *por las consignas democráticas*. No comprenderlo sería cometer la mayor falta sectaria. En la etapa actual de la revolución, en el terreno de las consignas *políticas*, el proletariado se distingue de todos los otros grupos ‘izquierdistas’ de la pequeña burguesía no por el hecho de que niega la democracia, como lo hacen los anarquistas y sindicalistas, sino por que lucha resuelta y abiertamente por esta consigna, al mismo tiempo que denuncia implacablemente las vacilaciones de la pequeña burguesía. Poniendo por delante las consignas democráticas, el proletariado no quiere con ello decir que España va hacia la revolución burguesa. Sólo podrían plantear así la cuestión fríos pedantes atiborrados de fórmulas rutinarias. España ha dejado muy lejos tras de sí el estadio de una revolución burguesa. Si la crisis revolucionaria se transforma en revolución, superará fatalmente los límites burgueses y, en caso de victoria, deberá entregar el poder al proletariado; pero el proletariado no puede dirigir la revolución en dicha época, es decir reunir alrededor suyo las más amplias masas de trabajadores y de oprimidos y convertirse en su guía, más que a condición de desarrollar actualmente, con sus reivindicaciones de clase y en relación con ellas, todas las reivindicaciones democráticas, íntegramente y hasta el fin”.³⁹¹

El marxismo jamás ha despreciado el valor que las reivindicaciones democráticas tienen en la revolución proletaria. La república, la reforma agraria, las libertades de reunión, asociación y manifestación, el derecho de autodeterminación de las naciones oprimidas, la separación de la Iglesia y el Estado, la depuración de los elementos reaccionarios del aparato estatal... siempre han merecido la mayor atención de los comunistas, exactamente igual que la lucha

las actuaciones burocráticas que habían provocado la expulsión de cientos de dirigentes de la IC acusados de opositoristas. En aquella época, Maurín y otros dirigentes de la FCCB todavía confiaban en un posible apoyo de la IC frente al grupo de Bullejos. Pero estas ilusiones pronto fueron desmentidas: Maurín fue definitivamente excluido de la IC bajo la acusación de agente trotskista-bujarinista. Un extenso análisis de la Izquierda Comunista se puede consultar en dos obras de referencia: Pelai Pagès, *El movimiento trotskista en España 1930-1935*, Ed. Península, Barcelona, 1977; y Pierre Broué, *La revolución española, León Trotsky*, Ed. Fontanella, Barcelona, 1977. Sobre la FCCB y el BOC, se puede consultar Andrew Durgan, *BOC 1930-1936*, Ed. Laertes, Barcelona, 1996.

³⁹⁰ León Trotsky dedicó una gran producción teórica al análisis de la revolución española, entre la que cabe destacar: *Las tareas de los comunistas en España* (mayo 1930), *La revolución española y las tareas de los comunistas* (enero 1931), *La revolución española y los peligros que la amenazan* (mayo 1931), *La traición del Partido Obrero de Unificación Marxista* (enero 1936), *Por la victoria de la revolución española* (febrero 1937), *Lección de España, última advertencia* (diciembre 1937), *Las causas de la derrota de la revolución española* (marzo 1939) y *Clase, partido y dirección. ¿Por qué ha sido vencido el proletariado español?* (agosto 1940). Estos y otros textos más, junto con una amplia selección de la correspondencia de Trotsky con Andreu Nin, ha sido publicada por la FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS en *Escritos sobre la revolución española*, Madrid, 2010. Una edición muy completa de numerosos artículos de dirigentes trotskistas y pousistas de la época se puede consultar en la obra de Pierre Broué referida en la nota anterior.

³⁹¹ León Trotsky, *Las tareas de los comunistas en España*, en León Trotsky, *Textos sobre la revolución española*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2010, p. 63.

por la mejora de las condiciones laborales o sociales de los trabajadores. La diferencia entre marxistas y socialdemócratas no reside en que los primeros nieguen el valor de las reformas, sino que para el marxismo el combate por esas reivindicaciones, parciales pero importantes, no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio para agrupar a la clase obrera en torno al programa de la revolución socialista, elevar su nivel de conciencia y su grado de organización para la batalla decisiva.

Las reivindicaciones democráticas que afectaban a la clase obrera, al campesinado y a la pequeña burguesía, como la experiencia republicana dejó sobradamente probado, no podían encontrar satisfacción en el marco de las relaciones de propiedad capitalista. Chocaban con los pilares en que asentaba su poder la oligarquía y entrañaban, por tanto, una lucha contra ella que sólo podía acabar con su expropiación política y económica: “La burguesía española, en la actualidad aun menos que en el siglo XIX, puede tener la pretensión de desempeñar el papel histórico que desempeñó en otro tiempo la burguesía británica o francesa. La gran burguesía industrial de España, que ha llegado demasiado tarde, que depende del capital extranjero, que está adherida como un vampiro al cuerpo del pueblo, es incapaz de desempeñar, aunque sea por un breve plazo, el papel de caudillo de la ‘nación’ contra las viejas castas. Los magnates de la industria española forman un grupo hostil al pueblo, constituyendo uno de los grupos más reaccionarios en el bloque, corroído por las rivalidades internas, de los banqueros, los industriales, los latifundistas, la monarquía, sus generales y funcionarios”.³⁹²

En enero de 1931, Trotsky señaló de forma muy concreta la dinámica viva de la revolución española y sus perspectivas: “¿Puede esperarse que la revolución española saltará por encima del período del parlamentarismo? Teóricamente, no está excluido. Se puede suponer que el movimiento revolucionario alcanzará, en un período relativamente breve, una fuerza tal que no dejará a las clases dominantes ni el tiempo ni el lugar para el parlamentarismo. Sin embargo, una perspectiva tal es poco probable. El proletariado español, a pesar de sus excelentes cualidades combativas, no cuenta aún con un partido revolucionario reconocido por él ni con la experiencia de la organización soviética. Además, en las filas comunistas, poco numerosas, no hay unidad, ni un programa de acción claro y admitido por todos. Sin embargo, la cuestión de las Cortes ha sido puesta ya a la orden del día. En estas condiciones, hay que suponer que la revolución tendrá que pasar por una etapa de parlamentarismo (...) Constituiría un doctrinarismo lamentable y estéril oponer escuetamente la consigna de la dictadura del proletariado a los objetivos y divisas de la democracia revolucionaria (república, revolución agraria, separación de la Iglesia del Estado, confiscación de los bienes eclesiásticos, libre determinación nacional, Cortes constituyentes revolucionarias). Las masas populares, antes de que puedan conquistar el poder, deben agruparse alrededor de un partido proletario dirigente. La lucha por la representación democrática, así como la participación en las Cortes en una u otra etapa de la revolución, pueden facilitar incomparablemente la realización de este cometido”.³⁹³

El programa comunista fue formulado por Trotsky de acuerdo a los principios que el marxismo revolucionario había desplegado en momentos semejantes de crisis revolucionaria. Sus aspectos más significativos se pueden sintetizar así:

1. La cuestión de la tierra sólo podrá resolverse a través de la confiscación y nacionalización de las grandes propiedades agrarias en beneficio del campesinado pobre.
2. Gobierno barato, poniendo fin a las cargas fiscales, las deudas del Estado, la rapacidad burocrática y las aventuras coloniales en África. Un gobierno semejante no podía ser

³⁹² *Ibid.*, p. 72.

³⁹³ *Ibid.*, p. 76.

asegurado ni por los terratenientes ni por los banqueros o los empresarios, sino por los trabajadores mismos.

3. Un programa radical de *legislación social*: seguro para todos los parados, transferencia de las cargas fiscales a las clases poseedoras, enseñanza general obligatoria.

4. Nacionalización de los ferrocarriles, las riquezas del subsuelo y los bancos. Control obrero de la industria.

5. Separación Iglesia-Estado, entregando sus riquezas al mismo. Incluso los campesinos más atrasados, llenos de prejuicios religiosos, apoyarían una medida de este tipo si la riqueza secularizada, en lugar de ir a parar a los bolsillos de los burgueses, fuera empleada en mejorar la economía y las condiciones de vida del campesinado.

6. Depuración inmediata del aparato del Estado. Expulsión de los militares reaccionarios y monárquicos, y de los mandos policiales vinculados a la represión. Disolución de la Guardia Civil. Control sindical de las academias militares y de la policía. Plenos derechos democráticos para los soldados, incluido el de sindicación.

7. Derogación de las leyes antidemocráticas de la monarquía. Pleno reconocimiento de los derechos de huelga, asociación y expresión.

8. Derecho de autodeterminación para las nacionalidades, lo que no significa hacer propaganda a favor de la independencia, sino el derecho de su población a decidir sus vínculos con el Estado español. Los comunistas defienden la República Socialista de las Nacionalidades Ibéricas.

Trotsky planteó la cuestión del programa revolucionario de una manera dialéctica, huyendo de cualquier formulación sectaria o doctrinaria: “Ni que decir tiene que las consignas democráticas no persiguen en ningún caso como fin el acercamiento del proletariado a la burguesía republicana. Al contrario, crean el terreno para la lucha victoriosa contra la izquierda burguesa, permitiendo poner al descubierto a cada paso el carácter antidemocrático de la misma. Cuanto más valerosa, decidida e implacablemente luche la vanguardia proletaria por las consignas democráticas, más pronto se apoderará de las masas y privará de base a los republicanos burgueses y a los socialistas reformistas, de un modo más seguro los mejores elementos vendrán a nuestro lado y más rápidamente la república democrática se identificará en la conciencia de las masas con la república obrera. *Para que la fórmula teórica bien comprendida se convierta en hecho histórico vivo, hay que hacer pasar esta fórmula por la conciencia de las masas a base de la experiencia, de las necesidades y de las exigencias de las mismas.* Para esto es preciso, sin perderse en detalles, sin distraer la atención de las masas, reducir el programa de la revolución a unas pocas consignas claras y simples, y reemplazarlas según la dinámica de la lucha. En esto consiste la política revolucionaria”.³⁹⁴

Los acontecimientos de los meses posteriores, una vez que el gobierno de conjunción republicano-socialista tomó el control de la situación, mostrarían que las previsiones de Trotsky no iban desencaminadas. La frustración entre amplios sectores de la clase obrera y del campesinado ante la incapacidad del gobierno para llevar a cabo las reformas democráticas prometidas preparó una nueva etapa de radicalización y polarización.

LA COLABORACIÓN DE CLASES

³⁹⁴ *Ibid.*, p. 78. El subrayado es nuestro.

Las credenciales de los dirigentes socialistas, que no en vano habían mantenido una actitud condescendiente y de colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, no suponían en aquel momento una amenaza seria para la oligarquía. Los primeros pasos de socialistas y republicanos así lo confirmaron: “El Gobierno provisional republicano inauguró sus funciones por un acto de traición: impidiendo al país exigir las responsabilidades en que, desde Annual hasta Jaca, había incurrido el monarca, sus generales, sus ministros y principales colaboradores. Esta exigencia había sido uno de los factores de más peso en la campaña contra la Monarquía. Lejos de cumplir sus promesas, el gobierno provisional protegió la huida del Rey poniendo a su disposición una unidad de la flota de guerra y cerrando los ojos ante la fuga de sus cómplices”.³⁹⁵ Tapando los crímenes de la monarquía, se sellaba un pacto espurio para no contrariar ni molestar a los poderes fácticos. Pero la dinámica de concesiones y repliegues del gobierno provisional y, más tarde, de la conjunción republicano-socialista tendría la virtud de no satisfacer a nadie: ni a la burguesía ni a la base social del gobierno. La realidad fue ésta: no era la política de los ministros republicano-socialistas la que encendió las alarmas de la clase dominante, sino la interpretación que de ella hacían los obreros y los campesinos.

Las elecciones a Cortes constituyentes fueron convocadas para el 28 de junio de 1931 en medio de una gran agitación emocional. Era la primera vez, desde el golpe de Estado de 1874 que creó el sistema de la Restauración, que se presentaba la posibilidad de contar con un régimen parlamentario constitucional. Muchos factores se habían conjugado para que la revolución española tuviera que pasar por la experiencia del parlamentarismo burgués: “La revolución plantea los problemas políticos en toda su magnitud y, en su fase actual, les da la forma parlamentaria. La atención de la clase obrera debe centrarse necesariamente en las Cortes, y es ya previsible que incluso los anarcosindicalistas acabarán votando ‘a título individual’ a favor de los socialistas e incluso de los republicanos (...) Precisamente porque las masas populares tienden a sobrestimar la fuerza creadora de las Cortes, es por lo que todo obrero consciente, todo campesino revolucionario, quiere participar en las elecciones. Ni por un momento compartimos las ilusiones de las masas, pero debemos utilizar a fondo lo que de progresista se oculta bajo esas ilusiones. De otro modo, no seríamos revolucionarios, sino despreciables pedantes (...) Durante cierto tiempo, todas las cuestiones de la revolución española se refractarán, de un modo u otro, en el prisma parlamentario (...) pero es estúpido pensar —como hacen los republicanos y socialistas de Madrid— que las Cortes pondrán el punto final a la revolución. No será así. Las Cortes no pueden sino dar un nuevo impulso al movimiento revolucionario, garantizándole una evolución favorable. Esta perspectiva es de extrema importancia para cualquiera que quiera orientarse en los acontecimientos y evitar la aventura”.³⁹⁶ Las perspectivas de Trotsky fueron confirmadas por los acontecimientos de los dos años siguientes.

A pesar de que la ley electoral estaba viciada (sólo tenían derecho a voto los varones mayores de 23 años), los resultados arrojaron un triunfo arrollador de las candidaturas republicano-socialistas. Las elecciones se convirtieron en un auténtico refrendo a favor de los dirigentes que prometieron el cambio, sobre todo para el PSOE, que obtuvo unos resultados históricos y se convirtió en el grupo parlamentario más numeroso. El reparto de escaños fue el siguiente: Socialistas, 117; Acción Republicana, 27; Radical-Socialistas, 59; Organización Republicana Gallega Autónoma, 16; Esquerza Republicana de Catalunya, 32; Al Servicio de la República, 14; Partido Radical, 93; Derecha Liberal Republicana, 16; Vasco-Navarros (PNV y carlistas), 14; Agrarios, 26; Lliga Regionalista, 3. Monárquicos, 36. La derecha se afianzó en las provincias agrarias de Castilla y en Navarra, donde los carlistas tradicionalistas empezaron a

³⁹⁵ Grandizo Munis, *op. cit.*, p. 84.

³⁹⁶ León Trotsky, *La revolución española y los peligros que la amenazan*, en León Trotsky, *Escritos sobre la revolución española*, FFE Madrid 2010, p. 92

poner en marcha, nada más proclamarse la República, sus planes de armamento bajo la dirección del general Orgaz y el banquero Urquijo.

El parlamento ratificó al gobierno provisional republicano-socialista, que con la misma composición ministerial desempeño su labor hasta la primera crisis gubernamental, en octubre de 1931. Era evidente que los resultados electorales no guardaban proporción con la composición del gobierno. Los líderes del PSOE hicieron enormes concesiones a los republicanos burgueses y pequeñoburgueses, de derecha y liberales, a pesar de tener detrás a la parte mayoritaria de la clase obrera y el campesinado pobre que los votó masivamente. No asustar a la clase dominante, no provocar a la reacción, ésta era la directriz más importante en la estrategia de los dirigentes reformistas de PSOE. Una maniobra que sirvió de muy poco, salvo para envalentonar a la derecha.

Los dirigentes socialistas cedieron posiciones claves del gobierno, empezando por la presidencia del mismo, que fue ocupada por el derechista y clerical Niceto Alcalá Zamora. El Ministerio de Guerra quedó en manos de Manuel Azaña (Unión Republicana), que con sólo 23 diputados se convirtió en el gran protagonista del bienio, mientras el de Marina era para Casares Quiroga, el portavoz de la ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma). El de Gobernación, que controlaba el orden público y la policía, fue para Miguel Maura, cuya Derecha Liberal Republicana contaba con 17 escaños. El Ministerio de Economía fue para Nicolau d'Olwer (Acción Catalana), un representante de la pequeña burguesía catalana con buenas conexiones con la patronal. Los Radical-Socialistas ocuparon dos, Álvaro de Albornoz en Fomento y Marcelino Domingo en Instrucción Pública. El PSOE se conformó con tres carteras, que mantendrían durante casi todo el bienio, y que en el primer gobierno fueron repartidas así: Indalecio Prieto en Hacienda, Fernando de los Ríos en Justicia y Largo Caballero en Trabajo, un regalo envenenado, pues la confianza de Largo Caballero en que su experiencia como consejero de Estado, su conocimiento del mundo obrero y su apoyo en la UGT le permitirían aprobar una legislación progresiva y cambiar la estructura de las relaciones económicas y laborales entre obreros y patrones pronto fue desmentida. Lo más increíble fue que los ultrarreaccionarios de Lerroux obtuvieron dos carteras (él mismo en la de Estado y Martínez Barrio en la de Comunicaciones), a pesar del carácter marcadamente derechista del Partido Radical, de que sus vínculos con la patronal y el caciquismo eran públicos y notorios, y de la oposición popular a su participación en el gobierno republicano.³⁹⁷

El gobierno de conjunción incluía un espectro político contradictorio y disolvente. Los puntos de unión eran tan precarios, que las costuras saltaron a las primeras pruebas serias a que se

³⁹⁷ “El Partido Radical era el más grande y sin duda el mejor organizado de todos los republicanos, pero, más que un partido verdaderamente nacional, seguía siendo una agrupación de órganos regionales y provinciales muy autónomos agrupados en torno a la figura carismática de Lerroux (...) Los radicales estaban presentes en las cámaras de comercio, los centros mercantiles, las asociaciones de comerciantes y otros organismos locales y provinciales, ya fuese en calidad de miembros, como organizadores o como funcionarios. Además un sector muy importante del partido provenía de la patronal. En términos generales, alrededor de una cuarta parte de los representantes radicales en el ámbito local procedían de la clase de propietarios industriales y comerciantes. Una proporción casi tan amplia de los diputados elegidos por el partido a las Cortes Constituyentes en la elecciones de junio de 1931 procedía de los mismos estratos (...) Entre los políticos radicales que luego serían elegidos a las Cortes Constituyentes había varios portavoces o agentes de grandes intereses económicos, como Ricardo Samper, de los cultivadores de naranjas valencianos; Andrés Orozco, de las empresas exportadoras de canarias; o Manuel Marraco, de la industria aragonesa de la caña de azúcar; así como Emiliano Iglesias o el propio Alejandro Lerroux, entre otros, en calidad de representantes políticos de los poderosísimos intereses, a menudo secretos, del magnate mallorquín Juan March. Solo teniendo en cuenta los vínculos locales y las conexiones entre el Partido Radical y la patronal se aprecia el amplio solapamiento de intereses entre ambos. Ningún otro sector concreto era, en definitiva, más importante que la patronal en el seno del partido (...) En muchos lugares el Partido Radical se convirtió en el refugio por excelencia para caciques ex monárquicos”. Nigel Towson, *op. cit.*, pp. 41, 61 y 63.

tuvo que enfrentar. Y estas pruebas estaban determinadas por intereses de clase enfrentados e irreconciliables que movilizaban poderosas fuerzas sociales. Era obvio que las aspiraciones de los trabajadores y los campesinos no podían ser satisfechas sólo con discursos y declaraciones. La República debía suponer un cambio real en las vidas de millones de oprimidos. Pero cualquier reforma, cualquier concesión mínima, actuaba directamente contra los intereses de la clase dominante. La burguesía española estaba dispuesta a tolerar las formas democráticas sólo en la medida que sirviesen más eficazmente a sus objetivos y, además, permitiesen frenar el empuje de las masas. Si no era para eso, encontraría otro camino para mantener su poder y privilegios. Sólo hicieron falta dos años para que los sueños de la paz social y concordia entre las clases que pregonaban los teóricos españoles del socialismo gradualista fueran hechos añicos por la oposición activa de la oligarquía empresarial y financiera, los grandes terratenientes, la jerarquía católica y los altos mandos militares a la tímidas reformas emprendidas, y también por el sabotaje que desde el interior del gobierno llevaron a cabo los viejos políticos reaccionarios reconvertidos al republicanism.

EL BIENIO REFORMISTA ANTE LA IGLESIA Y EL EJÉRCITO

La clase dominante siempre contó con el apoyo firme de la jerarquía católica y los altos mandos militares. Según datos obtenidos de una encuesta elaborada por el gobierno, en 1931 el clero católico estaba integrado por 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396 monjas, que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios. Pero estos datos eran en realidad incompletos, puesto que una parte de las órdenes religiosas se negaron a responderla. El clero secular y regular podría rondar los 80.000-90.000, aunque el número de personas que se englobaba en la calificación profesional de “culto y clero” dentro del censo general de población de 1930 era de 136.181. Como se puede imaginar, el mantenimiento de este ejército clerical consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la clase obrera y al campesinado. El presupuesto de la Iglesia ascendía en 1930 a 52 millones de pesetas, y sus miembros más destacados vivían en condiciones de lujo insultante. El cardenal Segura tenía una renta anual de cuarenta mil pesetas; el de Madrid-Alcalá, veintisiete mil; los obispos disponían de sueldos que oscilaban entre veinte y veintidós mil pesetas al año.

La Iglesia era un auténtico poder y actuaba como tal en el mantenimiento del orden social. En su magnífico libro sobre la revolución española, el marxista norteamericano Felix Morrow incide en ello: “Se puede medir el poder económico de la Iglesia a partir del informe presentado ante las Cortes en 1931, en el mismo se reflejaba que los jesuitas poseían la tercera parte de la riqueza nacional. Las tierras confiscadas después de la revolución de 1868 fueron indemnizadas con tal generosidad que la Iglesia se embarcó en la industria y las finanzas. Sus bancos monopolistas de ‘crédito rural’ eran los usureros del campo y sus bancos urbanos, los socios de la industria. Las órdenes religiosas ostentaban verdaderos establecimientos industriales (molinos de harina, lavanderías, talleres de costura, etc.) con mano de obra gratuita (huérfanos, “estudiantes”) que les permitía competir con una gran ventaja frente a la industria. Al ser la religión oficial, recibía anualmente decenas de millones de pesetas del Estado, estaba exenta de toda obligación tributaria, inclusive en la producción industrial, y obtenía grandes regalías en los bautismos, matrimonios, entierros, etc. Su control oficial de la educación significaba librar al estudiante de toda influencia radical y mantenía al campesinado sumido en el analfabetismo: en 1931, la mitad de la población española no sabía leer ni escribir. Podemos tener una idea de la superstición difundida por la Iglesia por el hecho de que hasta hace poco las indulgencias papales se vendían por unas cuantas pesetas;

con la firma del arzobispo, se podían comprar en tiendas que exhibían el anuncio: ‘Se venden bulas baratas’ (...) El número de religiosos superaba al número de estudiantes de enseñanza media y duplicaba el número de universitarios”.³⁹⁸

Según datos del Ministerio de Justicia, en 1931 la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales, 7.828 urbanas y 4.192 censos. El valor declarado de dichas fincas y bienes era de 76 millones de pesetas, aunque los peritos encargados del catastro lo evaluaron en 129. A esto hay que añadir los patronatos eclesiásticos dependientes de la corona (cuyo capital representaba 667 millones) y los títulos de renta concedidos al 3% a la Iglesia como “compensación” por la desamortización del siglo anterior. Pero había más. En lo referido a las congregaciones religiosas, la única estadística, hecha en 1931 y sólo de la provincia de Madrid, dio un valor de 54 millones en fincas urbanas y 112 millones en las rurales.³⁹⁹ ¿Quién puede dudar que para millones de hombres y mujeres la Iglesia representaba el poder que los condenaba a una existencia miserable?

La actitud oficial de la Iglesia y del Vaticano ante la proclamación de la República fue expectante, aunque en realidad, tras esa postura se escondía la abierta hostilidad de la mayoría de la jerarquía y de sus miembros activos, salvo escasas excepciones. Muchos prohombres de sus filas, como el cardenal Segura, declararon públicamente su fidelidad a Alfonso XIII, y en las elecciones municipales de abril de 1931 expresaron abiertamente su apoyo a las candidaturas monárquicas. El diario *El Debate*, órgano oficioso de la Iglesia, incluía en su edición del 10 y 11 de abril un decálogo del elector, basado en opiniones de los obispos, como ésta del cardenal Segura: “Persuadirse de que es deber gravísimo para los católicos dar el voto a candidatos indignos y negárselo a los dignos”.⁴⁰⁰ En un editorial del 10 de abril del diario monárquico *ABC*, titulado “Por qué hay que votar contra los revolucionarios”, se traía a colación la quema de conventos en la Semana Trágica de 1909 y otros acontecimientos anticlericales.

Con la proclamación de la República el 14 de abril, el cardenal Segura y el cardenal primado Isidro Gomà insistieron en el desafío, incluso a costa de incumplir las recomendaciones del Vaticano. El 15 de abril, tan sólo un día después del cambio de régimen, Segura emitió una circular pastoral sobre *Necesidades de la Iglesia y de la Patria* en un tono tremendista y en la que se solicita a las religiosas que “ofrezcan oraciones y penitencias especiales para aplacar la justicia de Dios e impetrar su clemencia sobre nuestra Patria” y a los fieles, que renuncien a las diversiones “por los pecados de nuestro pueblo”.⁴⁰¹ El 1 de mayo de 1931, el cardenal Segura publica una nueva pastoral titulada *Deberes de la hora actual*, en la que se felicita por la colaboración que durante siglos ha mantenido la Iglesia con la monarquía: “de su acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la Historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de oro”. Por si no quedara claro, la pastoral incluye un encendido elogio de Alfonso XIII: “Séanos lícito también expresar aquí un recuerdo de gratitud a Su Majestad Don Alfonso XIII, que durante su reinado supo conservar la antigua tradición de la fe y piedad con sus mayores. ¿Cómo olvidar su devoción a la Santa Sede, y que él fue quien consagró España al Sagrado Corazón de Jesús?”.⁴⁰²

La Iglesia Católica no estaba dispuesta a ceder su espacio en la sociedad sin una lucha a muerte. Acabar con siglos de monopolio clerical de la enseñanza, de oscurantismo ideológico, ignorancia y sumisión, con su fuerte poder en las finanzas, requerían de medidas

³⁹⁸ Felix Morrow, *Revolución y contrarrevolución en España*, Ed. Akal, Madrid, 1977, p. 18.

³⁹⁹ Los datos sobre la Iglesia en Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 301-302

⁴⁰⁰ Antonio Fernández García, *La Iglesia ante el establecimiento de la Segunda República*, Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 5, Ed. Universidad Complutense, Madrid, 1984, p. 217.

⁴⁰¹ *Ibid.*, p. 219.

⁴⁰² *Ibid.*, p. 221.

muy enérgicas y de una movilización seria y contundente de la población. Las primeras leyes en este terreno dictadas por el gobierno provisional iban dirigidas únicamente a declarar algunos derechos fundamentales. Por ejemplo, el decreto del 6 de mayo sobre la voluntariedad de la enseñanza de la religión, que eximía de la misma a los alumnos cuyos padres no la solicitaran expresamente, y a los maestros, de impartirla, aunque en este caso el maestro que no deseara enseñarla solicitaría la colaboración de un sacerdote. Se puede imaginar que en las condiciones de 1931, con la inmensa mayoría del sistema escolar en manos de la Iglesia, con el dominio completo que ejercían en el sistema educativo del medio rural, no sería fácil ejercer este derecho. En cualquier caso, este intento fue utilizado por la Iglesia y la reacción de derechas para atizar la propaganda antirrepublicana. “Un desahogo del sectarismo”, proclamó *El Debate*, mientras la Asociación Nacional Católica de Padres de Familia “lamentó lo que podría ocurrir en casos de maestros comunistas o ateos, que obstaculizarían la entrada del sacerdote y llegarían a prohibir la enseñanza religiosa incluso a quien la pidiere”.⁴⁰³ Una reacción similar se produjo con la promulgación de la escuela única y el decreto del 22 de mayo sobre libertad de cultos.

La actitud de la jerarquía católica fue mucho más allá de una protesta limitada a los aspectos eclesiales. El cardenal Segura se erigió en altavoz de la reorganización de las fuerzas monárquicas ante las inmediatas elecciones a Cortes constituyentes. En un documento público del 9 de mayo, afirmaba: “Es, pues, apremiante en la actualidad el que los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas en las cuales puedan permanecer libremente, se unan de una manera seria y eficaz a fin de conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y su orden social”. Esta actitud de provocación y aliento a la causa monárquica, de identificación con los crímenes del viejo régimen a días tan sólo de ser derribada la corona y proclamada la República, no podía más que excitar la ira de la población. La conexión entre la jerarquía católica y las fuerzas contrarrevolucionarias era pública y notoria.⁴⁰⁴

Cuando el domingo 10 de mayo conocidos personajes reaccionarios del Círculo Monárquico celebraron un acto público de reafirmación, la furia de la población estalló. El marqués Luca de Tena, el duque de Hornachuelos o el conde de Romanones figuraban entre los organizadores, que además contó con la aprobación del director general de Seguridad, Carlos Blanco, amigo de los convocantes. El mitin, que acabó con el cántico de la marcha real, suscitó una reacción inmediata. Cientos de personas se dirigieron a la sede del diario *ABC*, que había dado una ostentosa publicidad a la reunión, pero el ministro de Gobernación, Miguel Maura, ordenó a la Guardia Civil que protegiese el edificio. El choque entre las fuerzas policiales y los manifestantes dejó muchos heridos y dos muertos. Era demasiado. Después de lo ocurrido, una manifestación de más de 5.000 personas recorrió la Puerta del Sol. La actitud de los trabajadores era una seria advertencia a las fuerzas de la reacción monárquica y a la jerarquía católica que la amparaba.

En respuesta a la represión gubernamental, y contra las maniobras de los monárquicos, la CNT y el PCE llamaron a la huelga general para el 11 de mayo, a la que se opusieron la UGT y el PSOE. El día de la huelga, que tuvo un seguimiento desigual, miles de manifestantes se

⁴⁰³ *Ibid.*, p. 233

⁴⁰⁴ Como señaló el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo: “Tal vez el gran daño para la Iglesia fue, en esta hora propicia, tener, en la más alta dignidad nacional, al arzobispo Dr. Segura, inteligencia roma, corazón resentido, alma de guerrillero fanático, espíritu más dispuesto para acaudillar una partida en las guerras carlistas del siglo XIX que para orientar una gran comunidad en la paz que prometía esta transformación política del siglo XX. Cuando no había sonado un tiro en España ni lanzado una piedra y todo eran manifestaciones de alegría, una pastoral agresiva, violenta, retadora del cardenal Segura vino a demostrar, que, si la República no se había puesto frente a la Iglesia, la Iglesia se ponía frente la República”. Marcelino Domingo, *España ante el mundo*, Ed. México Nuevo, México, 1937, p. 134.

lanzaron a las calles más céntricas de Madrid y atacaron edificios religiosos. A la quema de un convento jesuita en las cercanías de la Gran Vía le siguieron otros, como el de los carmelitas de la calle Ferraz, el de la calle Maravillas en Cuatro Caminos, la residencia jesuita en Alberto Aguilera, el convento del Sagrado Corazón en Chamartín, el de las Adoratrices... Muchas voces exigieron la prohibición de las organizaciones monárquicas y el arresto de sus jefes, pero los dirigentes socialistas pidieron calma a los trabajadores y la vuelta inmediata al trabajo, para apoyar finalmente la declaración de la ley marcial y el acuartelamiento de las tropas en las principales ciudades. A final de la jornada, el gobierno provisional declaró el estado de guerra, pero la furia anticlerical se extendió: en Córdoba, donde fueron atacados los locales de la prensa de derechas; en Málaga, con el incendio del palacio episcopal; en Sevilla y Alicante, los conventos jesuitas; también en Valencia y Murcia hubo actos similares. En aquellas dos jornadas, cerca de un centenar de edificios eclesiásticos habían sido incendiados, y los ataques a las sedes de los diarios derechistas también fueron importantes.

Junto a la Iglesia, que actuaba como espada espiritual de la reacción y el orden capitalista, se situaba, muy cerca, el brazo armado. El ejército español continuaba siendo un factor político de primer orden. En 1931, era una maquinaria obsoleta dominada por una casta de oficiales identificados en su gran mayoría con la monarquía y los postulados más derechistas. Su estructura, integrada por 198 generales, 16.926 oficiales, y 105.000 soldados de tropa, consumía improductivamente una parte sustancial del presupuesto nacional.

Entre las asignaturas pendientes y urgentes del gobierno provisional estaba la democratización del ejército y depurarlo de elementos reaccionarios. Sólo así sería posible afirmar que la revolución democrática había cumplido cabalmente con uno de sus compromisos más importantes. Pero acometer medidas que limpiaran seriamente las fuerzas armadas implicaba destituir a toda la casta de oficiales monárquicos duchos en la represión contra el movimiento obrero, en crueles aventuras coloniales de África y en golpes de Estado, y reemplazarlos por otros con garantías probadas de no estar comprometidos con esos crímenes. Una depuración de esta naturaleza, incluida una profunda transformación en el funcionamiento de las academias militares para garantizar la formación democrática de los mandos, significaba tocar uno de los pilares más importantes del aparato del Estado.

Las reformas militares fueron encargadas a Manuel Azaña, quien desde hacía mucho tiempo sentía una personal inclinación hacia estos aspectos, y no por casualidad. Azaña escribió una obra titulada *Estudios de política militar*, en la que alababa el ejército burgués francés. Consideraba que este sería un modelo eficaz para resolver el problema militar español “porque el ejército dejó ser un modo de arribar velozmente a la cúspide de la sociedad” para transformarse supuestamente, según Azaña, en una escuela de ciudadanía y un servicio que todos los franceses podían aceptar.⁴⁰⁵ El ministro tenía un claro sentido de clase en lo que a la cuestión militar se refiere. Lo que pretendía era convertir el ejército español en una maquinaria moderna y bien engrasada, y a ese objetivo orientó la gran mayoría de sus reformas militares.

Los más sonados de sus decretos fueron el del 22 de abril, de promesa de fidelidad a la República, y el del 25 de abril de 1931, que concedía el retiro con el sueldo íntegro a los militares que aceptasen la oferta en un mes. Con el segundo pretendía aligerar las plantillas de personal sobrante antes de acometer la reforma orgánica del ejército.⁴⁰⁶ Hubo otras

⁴⁰⁵ Michael Alpert, *Una reforma inocente: Azaña y el Ejército*, Studia Historica, en *Historia Contemporánea*, vol. 1 (1983), p. 32.

⁴⁰⁶ Posteriormente dictó otros tres decretos más con los que pretendió remodelar la estructura de la oficialidad del ejército: el del 14 de julio de 1931, que fusionó la escala de Reserva Retribuida con la activa; el de 4 de

medidas, como la derogación de la ley de Jurisdicciones de 1906, que colocaba bajo la justicia militar a los civiles acusados de delitos contra la patria o el ejército, o la reforma de la justicia castrense en general, por los decretos del 11 de mayo y 4 de junio, que restringieron el ámbito de los tribunales militares a los delitos de tipo militar cometidos sólo por militares. También, por un decreto de 15 de junio, refundió las academias militares en dos, una para infantería, caballería e intendencia, y otra para armas técnicas, que implicó el cierre de la Academia General Militar, dirigida por Franco. Esta decisión puso en riesgo el grado de general de Franco y suscitó un enfrentamiento público que fue felizmente resuelto: en lugar de castigar su rebeldía, Azaña confirmó a Franco en el escalafón del generalato.

Las reformas emprendidas por Azaña tenían un acusado carácter técnico, pero no iban al fondo de la cuestión. El flamante ministro de la Guerra renunció a depurar el ejército de mandos reaccionarios y monárquicos. Los republicanos liberales, temerosos de la reacción de la casta de oficiales, favorecieron la jubilación de aquellos que no querían jurar fidelidad a la República, pero con la garantía de que seguirían percibiendo la totalidad de su sueldo. Muchos oficiales aprovecharon la oportunidad para conseguir un retiro dorado, pero muchos otros estamparon su firma de servicio a la República y continuaron en sus puestos: “Un fiel colaborador del general Franco ha dicho refiriéndose a aquel momento: ‘muchos le preguntaban si debía solicitar el retiro. Franco les respondió: ¡No! Mucho más útiles a España seréis dentro del ejército’”.⁴⁰⁷

Según la reforma militar pensada por Azaña, el Ejército debía convertirse en garante de la nueva constitucionalidad, pero en la práctica permaneció como una amenaza. ¿De quién era la responsabilidad por mantener esta contradicción? Indudablemente de aquellos que temían, ante todo, provocar a las fuerzas reaccionarias. “Desde la poltrona —señala Gabriel Cardona—, [Azaña] prefirió tratar con generales que con militares republicanos que estaban en grados más bajos del escalafón. Estos mandos intermedios de confianza se vieron aislados y su único contacto con el ministro se redujo a conciliábulos con sus compañeros progresistas que formaban parte del gabinete militar”.⁴⁰⁸ El republicanismo, con su negativa a depurar en profundidad el aparato del Estado, creó las condiciones para que éste siguiese bajo el firme control de los enemigos de la clase obrera. Al fin y al cabo, en su ideario político, ni Azaña, ni Martínez Barrio, ni Casares Quiroga ni ningún otro líder republicano abogó nunca por acabar con el capitalismo. ¿Por qué habrían de transformar un aparato del Estado que defendía unas relaciones de propiedad en las que ellos creían a pies juntillas? “La democratización del ejército era una tarea necesaria, no para el derrocamiento revolucionario de la burguesía —para lo cual se necesitan otros organismos— sino como medida de defensa contra el regreso de la reacción. La incapacidad del gobierno de coalición de realizar esta tarea elemental de la revolución democrática, era una prueba más de que sólo la revolución proletaria podría llevar a cabo las tareas democrático-burguesas de la revolución española”.⁴⁰⁹

El argumento de que una depuración a fondo del estamento militar podría conducir a una guerra civil era absolutamente pueril. La correlación de fuerzas en aquel momento era abrumadoramente favorable al gobierno de conjunción republicano-socialista. Un levantamiento militar podría haber sido enfrentado con firmeza desde gobierno llamando a la movilización activa de las organizaciones obreras, neutralizando así cualquier intentona. Pero

diciembre de 1931, creando el cuerpo de suboficiales, y la ley de Reclutamiento y Ascensos de la Oficialidad del ejército, del 12 de septiembre de 1932. *Ibid.*, p. 35.

⁴⁰⁷ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 297.

⁴⁰⁸ Gabriel Cardona, “Estado y poder militar en la Segunda República”, en *La II República, una esperanza frustrada*, Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 1987, p. 53.

⁴⁰⁹ Felix Morrow, *op. cit.*, p. 21.

la cuestión fundamental es que este planteamiento era completamente ajeno al modo de pensar de los republicanos. Ellos eran burgueses liberales, no revolucionarios. Temían más a las masas revolucionarias que a los militares golpistas. Su comportamiento en 1932 frente a la asonada del general Sanjurjo y en 1936 frente al levantamiento del 18 de julio probó su felonía a la causa de la libertad y la democracia que con tanto ardor pretendían defender. En las palabras de Tuñón de Lara: “Azaña —contra lo que ha dicho una propaganda partidista que jamás argumentó a partir de los hechos— no sólo no se propuso destruir el Ejército, dislate integral para su concepción del Estado y de la política, sino que no intentó tan siquiera algo que hubiera sido mucho más consecuente: crear un ejército republicano. Azaña creía posible el apoliticismo en el Ejército, creencia que pagó muy cara (...) Azaña no había querido, en puridad, republicanizar el Ejército, sino crear un ejército neutro. Lejos de su ánimo el menor atisbo de jacobinismo; sus propósitos parecían engendrados en textos decimonónicos sobre el “Estado liberal”, pero en modo alguno en la realidad histórica del país. Quería un ejército químicamente puro y se encontró con una materia prima, la del ejército del viejo régimen, con todo lo que ello significaba de alineamiento en posiciones sociales, políticas e incluso de grupo profesional privilegiado (...) Dio algunos hachazos para podar ramas del frondoso árbol, pero el tronco y sus raíces quedaron intactos”.⁴¹⁰

La posición del gobierno ante estas cuestiones decisivas se convirtió en una auténtica prueba de fuego para la alianza de socialistas y republicanos burgueses, cuyo primer jalón fue su plasmación en el nuevo texto constitucional. El artículo 26 del proyecto de Constitución, referido a la extinción del presupuesto de culto y clero, y al límite impuesto a la Iglesia sobre su control omnipresente de la enseñanza, representaba una afrenta de envergadura para la derecha republicana. Los dirigentes socialistas quisieron conectar con unas aspiraciones muy sentidas por el pueblo, proponiendo medidas como la disolución de las órdenes religiosas que tuvieran un voto de obediencia especial a una autoridad distinta a la del Estado, asegurar la libertad de culto y conciencia, y secularizar los cementerios. “La separación de la Iglesia del Estado —escribe Felix Morrow— no era una mera tarea parlamentaria. La Revolución Francesa tuvo que apelar a la expropiación de las tierras de la Iglesia, movilizándolo al campesinado con ese fin; disolvió las órdenes religiosas, se apoderó de las iglesias y sus riquezas y durante muchos años ilegalizó y prohibió el funcionamiento del clero. Sólo entonces se logró en Francia la separación funcional de Iglesia y Estado. En la España de 1931 el problema era aun más urgente y apremiante. La Iglesia, obligada por su pasado, no podía ser sino el enemigo mortal de la República. Durante siglos había impedido todo progreso (...) La Iglesia había destruido todas las revoluciones del siglo XIX; a su vez, todas las revoluciones, todo florecimiento de la vida política española, había sido necesariamente anticlerical”.⁴¹¹

El artículo 26 fue uno de los argumentos que utilizaron Alcalá Zamora y Miguel Maura para dimitir y forzar el repliegue de los socialistas. Las presiones de los sectores clericales del republicanismo, que se emplearon como correa de transmisión de los intereses de la jerarquía católica y el Vaticano, lograron impedir que se extinguiera de forma inmediata el presupuesto público que se asignaba al culto católico. El gobierno de conjunción otorgó un plazo de dos años para llevar a cabo la medida, plazo que se prorrogó tras el triunfo de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. La disolución formal, en 1932, de los jesuitas —a pesar del enorme ruido organizado por la Iglesia, sus medios de comunicación y sus portavoces parlamentarios— no supuso tampoco un cambio sustancial. En general, la Compañía de Jesús mantuvo el control sobre sus bienes —inscritos en los registros de propiedad como sociedades de todo tipo (navieras, aceiteras, mineras, hasta bancarias y ferroviarias)— gracias

⁴¹⁰ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 298.

⁴¹¹ Felix Morrow, *op. cit.*, p. 17.

a que se le concedieron todas las oportunidades para transferir la mayor parte de ellos a particulares y otras órdenes. De todas formas, estas tímidas medidas fueron revocadas definitivamente por el gobierno del *bienio negro*.

La enseñanza constituyó otro gran frente de batalla. El mantenimiento del monopolio eclesiástico de la educación había arrojado un saldo de atraso e ignorancia: en 1931, la tasa de analfabetismo del país superaba el 40%. Pero no por ello la Iglesia y la derecha dejaban de considerar el control de la educación como un objetivo estratégico. Junto a cuantiosos ingresos económicos, nada despreciables, la reacción pretendía asegurarse el adoctrinamiento ideológico de la población. Era un asunto de trascendencia, y en la perspectiva del gobierno republicano-socialista una transformación de la estructura educativa sólo podía acometerse a través de un plan a largo plazo. La legislación reformista fue relevante al respecto, pero la mayoría de las medidas de alcance nunca se materializaron.

Como en otros ámbitos, las primeras decisiones adoptadas por el gobierno de conjunción lo fueron a golpe de decreto: el 29 de abril se aprobó el bilingüismo en Catalunya. En la primera semana de mayo se suprimía la obligatoriedad de la enseñanza de la religión. A finales de ese mismo mes, para luchar contra el analfabetismo, elevar el nivel de instrucción de la población y compensar las carencias educativas en el medio rural, se puso en marcha el ambicioso proyecto cultural de las misiones pedagógicas.⁴¹² Todos estos proyectos convergían en la escuela única, que fue el instrumento con el que el gobierno provisional intentó materializar sus proyectos educativos.⁴¹³ Pero la estrella de las reformas fue el ambicioso decreto del 23 de junio de 1931, que aprobó la creación de 7.000 nuevas plazas de maestro y otras tantas nuevas escuelas, a costear mediante un crédito extraordinario y por los ayuntamientos. Formaba parte de un plan quinquenal con el que se pretendía paliar el déficit educativo repartiendo más de 27.000 escuelas por toda la geografía. La ampliación del número de escuelas llevó aparejado una dignificación de las condiciones de trabajo y el aumento del salario de los maestros (en torno a 6.800 maestros pertenecientes al segundo escalafón incrementaron sus ingresos).

Sin embargo, estos proyectos quedaron muy cercenados. La construcción de las miles de escuelas prevista en el primer bienio sólo se llevó a cabo parcialmente debido a la escasez de recursos de las arcas municipales y al boicot de los caciques de siempre. Posteriormente, el gobierno derechista del bienio negro arrinconó definitivamente estos planes, permitiendo de nuevo a la jerarquía católica disfrutar de un amplio control sobre el sistema educativo y garantizando un buen chorro de ingresos a sus arcas.⁴¹⁴ En cualquier caso, muchos de los avances educativos del período republicano fueron el resultado del esfuerzo abnegado de las organizaciones obreras y de sus militantes más comprometidos. Los ateneos libertarios, las casas del pueblo o las misiones pedagógicas se convirtieron en importantes centros de cultura en miles de localidades. Allí se realizaban cursos de alfabetización para adultos y jóvenes, se

⁴¹² Consuelo Domínguez y Cristóbal García, *La escuela en la II República*, en Cuadernos de la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales nº 4. Para un estudio más a fondo de la cuestión se puede consultar: Samaniego Boneu, *La política educativa de la Segunda República*, CSIC, Madrid, 1977; Pérez Galán, *La enseñanza en la Segunda República española*, EDICUSA, Madrid, 1975; Esteban Medina, *La lucha por la educación en España (1770-1790)*, Ed. Ayuso, Madrid, 1977; Molero Pintado, *La reforma educativa en la Segunda República española. Primer bienio*, Ed. Santillana, Madrid, 1977.

⁴¹³ La escuela única propugnaba la gratuidad del tramo de primaria para todos los niños de cualquier clase social y condición, y la unión orgánica de la escuela primaria con los diferentes centros superiores.

⁴¹⁴ Bajo los gobiernos derechistas se sorteó lo aprobado en el primer bienio en la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, que en su artículo 30 estipulaba la prohibición de crear o sostener centros de enseñanza privada directa o indirectamente valiéndose de personas seglares. Lo que se produjo fue una transferencia de titularidad de muchas órdenes religiosas a favor de personas no seglares, pero imbuidas de los mismos principios doctrinarios. Fue así como nació la Sociedad Anónima de Enseñanza Libre. (*Ibid.*)

creaban bibliotecas populares, se estrenaban obras teatrales y se proyectaban películas, y se debatía ardientemente de los problemas políticos del momento.

LA CUESTIÓN NACIONAL

El problema nacional recorre la historia desde la unidad dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón en el siglo XV. El atraso económico y un desarrollo desigual facilitó la persistencia de tendencias localistas y particularismos regionales, tendencias centrífugas que en los momentos de crisis se agudizaban y estallaban con fuerza. Esta fue la base objetiva para que el federalismo y las diferentes expresiones del nacionalismo burgués y pequeñoburgués se extendieran y reforzaran en diferentes partes del territorio del Estado, especialmente en Catalunya, Euskadi y Galiza. El 14 de abril, igual que otras crisis revolucionarias anteriores, abrió un período de fuerte agitación en defensa de los derechos democráticos de las nacionalidades históricas, pero la burguesía republicana rechazó asumir el derecho de autodeterminación. Temerosa de desatar un enfrentamiento con el ejército y la reacción, el gobierno de conjunción asumió, como mal menor, la vía de la autonomía para resolver un problema que hundía sus raíces en la configuración histórica del Estado español.

Los mitos se transmiten con fuerza, pero no siempre tienen vínculos sólidos con la realidad. En ese sentido, a pesar de los mitos, la historia del capitalismo español está sobrada de ejemplos de colaboración política activa de las burguesías vasca y catalana con el Estado centralista y la burguesía española, especialmente cuando se trataba de reprimir al movimiento obrero y alejar la amenaza revolucionaria. En sus orígenes, el nacionalismo no fue la ideología predominante ni entre la burguesía vasca ni entre la catalana, ni mucho menos entre la débil burguesía gallega. Sólo cuando consideró que para la defensa de sus intereses económicos y políticos resultaba más útil explotar los sentimientos nacionales de la pequeña burguesía y del campesinado —en los momentos críticos de fricción y disputa con el aparato gubernamental y financiero de Madrid—, la burguesía de las nacionalidades históricas adoptó con fuerza el discurso nacionalista. Una actitud basada en el cálculo cínico y egoísta, que en ningún caso buscaba liderar consecuentemente la lucha por los derechos democráticos nacionales, sino arrebatar a la burguesía centralista una mayor cuota de explotación sobre la clase obrera y el campesinado de sus nacionalidades respectivas. La fortaleza económica de las burguesías catalana y vasca acrecentó su demagogia nacional, que estallaba periódicamente en proporción inversa a su exclusión del poder político del Estado.

En Euskadi, la burguesía, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, desarrolló una potente industria siderúrgica, minera y de transporte marítimo. A diferencia de lo ocurrido en el centro y sur peninsular, donde las tendencias rentistas de la oligarquía financiera y latifundista se acrecentaron, el comercio de mineral de hierro en Euskadi, la apertura de nuevos mercados y las posibilidades de su costa favorecieron una economía capitalista mucho más avanzada. El crecimiento industrial vasco fue estimulado por la repatriación de capitales tras la pérdida de las colonias y pilotado por una banca local en crecimiento, que se convirtió en un pilar esencial del sistema financiero español. Pero tanto la burguesía vasca como la catalana consolidaron su poder económico gracias a las políticas proteccionistas de la mayoría de los gobiernos monárquicos. Esta fue una base muy importante para el acuerdo político y la colaboración mutua.

En el caso de Cataluña, la transición de su economía, a lo largo del siglo XVIII, desde una producción agrícola y manufacturera para el autoconsumo a la producción para la comercialización en mercados más amplios —donde las colonias españolas jugaron un papel

decisivo— creó las condiciones para su despegue capitalista. El centro gravitatorio de la producción en aquel período fue la producción vinícola y el algodón para la industria textil, que adquiriría gran pujanza en los siglos posteriores. La burguesía catalana tardó mucho en mostrar sus inclinaciones regionalistas y jamás aspiró a una Cataluña independiente. Profundamente conservadora y reaccionaria, identificada con el orden político establecido, la burguesía trató de hacer valer su poder económico para obtener una hegemonía política que nunca lograría.

El nacionalismo catalán de raíz pequeñoburguesa nació como un movimiento de resistencia a la castellanización lingüística y de defensa de las viejas instituciones políticas catalanas, y encontró en el movimiento republicano federal el mejor paraguas político para sus intereses. Pero los republicanos federales fueron incapaces de llevar su programa a la práctica. Tras el fracaso de la Primera República y el pronunciamiento militar de 1874, la burguesía catalana fue un apoyo activo de Cánovas del Castillo y de la restaurada monarquía borbónica, que, en pago a los servicios prestados, volvió a implantar una política económica proteccionista. Los industriales catalanes respaldaron el programa colonial de la burguesía centralista y manifestaron un más que fervoroso patriotismo español cuando estallaron la guerra de Cuba y la sublevación de Filipinas. Estaba en juego la desaparición de unos mercados privilegiados.

Los mentores del catalanismo político de aquel período, como Valentí Almirall, que en los años de la revolución Gloriosa militó en el Partido Republicano Federal, nunca tuvieron en mente otra cosa que liderar un movimiento interclasista en el que la burguesía ilustrada ponía el tono político y la industrial, la fuerza. Utilizando la defensa de la “cultura catalana” y “las viejas instituciones”, desde el principio buscaron el apoyo y la adhesión de los empresarios catalanes. El famoso *Memorial de Greuges* (memorial de agravios) presentado en 1885 al rey Alfonso XII, era en esencia un manifiesto a favor del derecho civil catalán y del proteccionismo de la industria textil catalana frente al librecambismo.

Posteriormente, la burguesía catalana encontró en el regionalismo conservador el mejor canal político para defender sus intereses. A partir de la constitución de la Lliga de Catalunya liderada por Prat de la Riba, el catalanismo empezó a adoptar un cuerpo doctrinal más sólido. En 1891 se aprobaron las Bases de Manresa, el primer proyecto de estatuto de autonomía, completamente alejado de cualquier aspiración independentista. En 1901, con la formación de la Lliga Regionalista, la burguesía catalanista dio un paso adelante. Su programa en defensa de los propietarios industriales y agrícolas marca su enfrentamiento constante con el movimiento obrero, que se acentúa en los momentos de mayor auge de la lucha social: en 1902 durante la huelga general de Barcelona convocada por los anarquistas, o en la Semana Trágica de 1909, cuando la Lliga Regionalista respalda activamente la represión del gobierno, incluidas las ejecuciones sumarísimas. La participación de Cambó, su líder indiscutible, en los gobiernos de concentración nacional de Alfonso XIII es una historia conocida, igual que su papel en la organización del somatén y la violencia armada contra los sindicalistas catalanes, o su entusiasta apoyo al golpe militar de Primo de Rivera.

La política de la Lliga motivaría constantes escisiones en el movimiento catalanista, rupturas que intentaban afirmar un mensaje más nacionalista y combativo contra la burguesía española y hacerse con una base de apoyo popular. Dirigentes como Francesc Layret y Lluís Companys, que crearon el Partit Republicà Català en 1917, o Francesc Macià, que en 1922 fundó Estat Català, se colocaron a la cabeza de este nuevo movimiento. La organización de Companys logró una base de apoyo en el gran sindicato campesino catalán, la Unió de Rabassaires, que impulsó la radicalización nacionalista frente a la burguesía catalana y el aparato centralista estatal. Una vez más, la cuestión nacional y la lucha por la propiedad de la tierra aparecían estrechamente relacionadas. El proceso culminará en marzo de 1931 con la formación de la Esquerra Republicana de Catalunya, la gran organización nacionalista, que en las elecciones parlamentarias de junio obtendría la mayoría de los diputados catalanes.

En el caso de Euskadi, los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco beben del descontento de la pequeña burguesía y los *jauntxos* (propietarios de tierras semiarruinados) frente al poder de las empresas capitalistas. No fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando la burguesía vasca apreció el enorme potencial político que, para sus intereses de clase, representaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Por una parte, le ofrecía un mecanismo de control político e ideológico sobre un sector considerable de la población —el ferviente catolicismo del nacionalismo vasco era un elemento a tener en cuenta—; por otro le permitía inyectar el veneno de la división nacional en el pujante movimiento obrero vasco, dominado por las fuerzas socialistas y comunistas —el PNV formaría el sindicato ELA-STV—; y, finalmente, le era realmente útil como coartada en su pugna política con Madrid en materia fiscal y de legislación social.

En el caso de Galicia, el nacionalismo siguió pautas diferentes a Catalunya y Euskadi. Galicia quedó al margen del desarrollo capitalista de otras zonas del territorio español. Su escasa industrialización se produjo a partir de flujos de capitales catalanes (que monopolizaron la industria conservera) o la inversión inglesa (astilleros). En este contexto e impulsado por la pequeña burguesía, apareció en el siglo XIX el nacionalismo gallego, cuyos ejes principales fueron la protesta contra la miseria campesina y la reivindicación de la lengua y cultura gallegas, despreciadas por la burguesía nativa y la burocracia estatal radicada en Galiza. El movimiento nacionalista se vio inspirado y alentado por la lucha de los campesinos contra los foros, que alcanzaría su máxima expresión a principios del siglo XX (entre 1907-1912 y 1917-1923 fuertemente reprimidos por la Guardia Civil). En aquel momento, las acciones del campesinado gallego se canalizaban a través de Solidaridad Gallega y la Unión Campesina. Al ser proclamada la Segunda República, el nacionalismo gallego se estructuraba en dos organizaciones republicanas de raíz pequeñoburguesa: ORGA y el Partido Galeguista.⁴¹⁵

Como en el resto de las tareas democráticas, una cosa era el punto de vista de los burgueses, aunque estos fueran nacionalistas, y otro muy diferente el de los trabajadores de las nacionalidades oprimidas. En 1931, los nacionalistas vascos afirmaban que, con el 5% de la población total del Estado, disponían del 24% del capital bancario, el 42% de los depósitos bancarios y el 33% de los ahorros personales; el 78 y 74% respectivamente de la producción de hierro y acero y el 71% de la industria del papel y naval. Eran argumentos de peso para hacer valer sus aspiraciones. Cataluña por su parte, con el 12% de la población total, concentraba el 34% de los ahorros personales, producía el 31% de la electricidad y disponía del 19'5% del capital bancario y del 28% del capital industrial. Estas estadísticas dan una idea del abismo que separaba el desarrollo económico entre ambas nacionalidades y el resto del Estado, y, por tanto, de la importancia de la cuestión nacional en el proceso revolucionario.⁴¹⁶ Pero lo que no mostraban estas cifras eran las condiciones de penuria en que vivían la clase obrera y el campesinado vasco y catalán.

La cuestión nacional y la lucha contra el estado centralista jugaron un papel de primer orden en la crisis revolucionaria que acabó con la monarquía. En Catalunya, las secciones más militantes de la pequeña burguesía se agruparon tras la bandera de Esquerra Republicana, que supo explotar el descontento de las masas obreras con los gobiernos de Madrid. Antes de que la República fuera proclamada oficialmente en Madrid, los dirigentes de la Esquerra habían ocupado la sede del ayuntamiento en Barcelona y proclamado la República Catalana. Pero cuando se lee atentamente su manifiesto político, hay pocas dudas de que a la burguesía nacionalista y a los políticos pequeño burgueses les preocupaba, por encima de todo, mantener el control de la situación y hacerse con el autogobierno de Cataluña. El bando,

⁴¹⁵ Los nacionalistas de ORGA obtuvieron quince diputados en las elecciones de 1931, dentro de la conjunción republicano-socialista. Daniel Castelao era el referente del galleguismo progresista.

⁴¹⁶ Eloy Val del Olmo, *Euskal Herria y el socialismo*, p. 130.

publicado el 14 de Abril de 1931 y firmado por Francesc Macià, dice así: “Catalanes: Interpretando el sentimiento y los anhelos del pueblo que acaba de dar su sufragio, proclamo la República Catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica. Rogamos que cada catalán, así como todo ciudadano residente en Catalunya, se haga cargo de la enorme responsabilidad que pesa en estos momentos sobre nosotros. Todo aquel, pues, que perturbe el orden de la naciente República catalana será considerado como un agente provocador y como un traidor a la Patria”. Lógicamente el orden que no había que tocar era el de la propia burguesía y los destinatarios de este mensaje eran las masas, cenetistas principalmente.

Tras los acontecimientos del 14 de abril en Barcelona, una comisión integrada por líderes republicanos y socialistas del gobierno provisional se desplazó desde Madrid a la capital catalana para evitar que la decisión de la Esquerra se materializase. Combinando las promesas de respaldo parlamentario a un estatuto de autonomía, con amenazas extremas de represión, lograron que los nacionalistas catalanes, su fracción de izquierdas, aceptaran un arreglo: renunciarían al supuesto Estado catalán a cambio de un mayor grado de autonomía y autogobierno, incluyendo el restablecimiento de la Generalitat.

En pocos meses, las discusiones en torno a la autonomía catalana cristalizaron en el proyecto de estatuto preparado por la Generalitat y redactado en Núria. El texto reconocía el catalán como lengua oficial junto con el castellano y otorgaba a la Generalitat competencias en enseñanza, servicios internos de policía, transportes ferroviarios, marítimos y por carretera, obras públicas, justicia y ciertos aspectos de la recaudación de impuestos. Finalmente fue sometido a referéndum el 2 de agosto de 1931. Con una participación masiva, en torno al 75% del censo electoral, el estatuto fue apoyado por el 99% de los votantes. En Barcelona, donde el 37% del millón de habitantes no eran catalanes, sólo se registraron 3.000 votos en contra, lo que deja pocas dudas del apoyo de la clase obrera al estatuto, incluyendo, por supuesto, a las bases de la CNT.

En mayo de 1932 comenzó la discusión en las Cortes para ratificar el estatuto catalán. La derecha desató la crispación comenzando una estruendosa campaña contra el “separatismo” y acusando al gobierno de “vender la patria”. Calvo Sotelo, líder monárquico, calificó el estatuto catalán de “expoliación de la soberanía y robo del patrimonio”. A partir de ese momento, las vacilaciones del gobierno de conjunción se multiplicaron y contagiaron a los políticos de la pequeña burguesía catalana, que, retrocediendo en sus aspiraciones autonomistas, aceptaron rebajar el contenido del estatuto a cambio de un acuerdo parlamentario que diese luz verde a su aprobación. Catalunya quedaría considerada como “Región autónoma” en lugar de “Estado autónomo” que era la redacción contemplada en el proyecto de Núria. Pero estas concesiones no contentaron a la derecha. El debate del estatuto se prolongó hasta el 9 de septiembre de 1932, un mes después de la sublevación monárquico-militarista de Sanjurjo, fecha en que, tras acelerarse los trámites parlamentarios, fue aprobado. El 20 de noviembre de ese mismo año se celebraron elecciones catalanas, que encumbraron a Francesc Macià como presidente de la Generalitat y a Lluís Companys como presidente del parlamento autónomo.

En el caso de Euskadi, la dinámica fue diferente, pues en 1931 el movimiento nacionalista vasco estaba controlado por los sectores más clericales y conservadores de la sociedad. En las elecciones a Cortes constituyentes, el PNV se presentó aliado con los carlistas, con el objetivo de “frenar al movimiento obrero y la posibilidad de una revolución”. Consiguieron 15 de los 24 escaños de las 4 provincias vascas (7 nacionalistas, 5 carlistas y 3 católicos independientes) y, una vez constituido el nuevo parlamento, los diputados del PNV se alinearon con la derecha más reaccionaria.

Para la burguesía vasca, la autonomía significaba la defensa del catolicismo, el orden social y las tradiciones fueristas. Un programa semejante al de la Lliga Regionalista catalana, que

había sido barrida de la escena política. Tras el triunfo electoral, los nacionalistas vascos aceleraron sus planes de autonomía. En junio de 1931, representantes de 480 municipios vascos (de un total de 520), incluidos los navarros, se reunieron en la localidad de Estella y aprobaron un proyecto de Estatuto General del Estado Vasco. Con el pretexto de que el movimiento nacionalista vasco era reaccionario, la coalición republicano-socialista se negó a aprobar el estatuto de autonomía, otorgando así a los clericales mayor margen de maniobra para mantener su influencia entre el campesinado y la pequeña burguesía, pero también entre los trabajadores más atrasados políticamente. En junio de 1932 se presentó un nuevo proyecto de estatuto con el apoyo del PSOE. Los carlistas, que habían roto con los nacionalistas vascos y emprendido un giro hacia posiciones musolinianas, encabezaron una activa oposición contra este proyecto, que en Navarra fue rechazado por 123 municipios frente a 104.

El 23 de abril de 1933 se celebraron elecciones municipales. El PNV y ANV (una escisión por la “izquierda” del PNV) lograrían los dos tercios de los concejales del País Vasco, mientras la conjunción republicano-socialista sufrió un retroceso. En este contexto, el 6 de agosto de 1933 los representantes de las tres provincias vascas, en esta ocasión sin Navarra, aprobaron un proyecto definitivo de estatuto que fue sometido a referéndum el 5 de noviembre. Igual que sucediera en Catalunya, el resultado fue abrumador: con una participación del 87%, los votos afirmativos fueron 411.756 y los negativos sólo 14.196. Pero a pesar de este respaldo mayoritario, un análisis más detallado de los votos muestra que el apoyo no había sido homogéneo en todas las provincias: en Álava se abstuvo el 42% del censo y hubo un 11,9% de votos en contra. De hecho, el 22 de diciembre de 1933, 57 de los 77 ayuntamientos alaveses se pronunciaron contra el proyecto autonómico.

Durante el primer bienio republicano-socialista, las nacionalidades históricas no consiguieron el derecho de autodeterminación, sino una autonomía bastante restringida. Pero incluso lo alcanzado sería escamoteado poco después, durante el bienio negro, incluida la suspensión de los propios estatutos tras la insurrección de octubre de 1934. La cuestión nacional permaneció como una herida abierta, exactamente igual que la política colonial en Marruecos. En los territorios ocupados del norte de África, la política del gobierno de conjunción fue incluso peor. Manteniendo el estatus colonial y renunciando a luchar contra los intereses de la oligarquía, de los generales africanistas y de los imperialistas franceses, el gobierno republicano-socialista se enajenó la simpatía del movimiento independentista marroquí. Una actitud que degradó la *aureola* democrática de la Segunda República, con consecuencias nefastas durante la guerra civil.⁴¹⁷

El derecho de las naciones a la autodeterminación forma parte de las tareas de la revolución democrática burguesa. Sin embargo, la historia del Estado español es una sucesión de fracasos de la clase dominante; sometiendo a las nacionalidades al poder arbitrario, chovinista y opresor del Estado centralista, reivindicaba su naturaleza contrarrevolucionaria.

El principio del marxismo revolucionario ante la opresión nacional parte de una idea fundamental: “El pueblo que esclaviza a otro forja sus propias cadenas”. Por la importancia que tiene para el conjunto de las clases y para el proletariado, el marxismo ha formulado una posición precisa y definida al respecto. Partiendo de los intereses generales de la clase obrera y la revolución socialista, subordina cualquier apoyo a una demanda democrática a estos intereses, incluyendo la lucha contra la opresión nacional. A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, el nacionalismo burgués ha considerado a la *nación burguesa* como un todo absoluto, ante la cual deben inclinarse los intereses de todas las clases, al margen de los antagonismos que las enfrentan. El marxismo revolucionario tiene una opinión diferente: los

⁴¹⁷ La cuestión marroquí durante la Segunda República será abordada extensamente en el segundo volumen de esta obra.

intereses de clase de los trabajadores están por encima de cualquier frontera nacional, por eso la lucha de la clase obrera es internacionalista. A la proclamación del principio de “unidad nacional” de las clases, que en todo movimiento nacional enarbola la burguesía nacionalista, el marxismo responde con la lucha de clases y considera el problema de las naciones oprimidas como un aspecto de esta lucha.

El movimiento marxista siempre ha combatido cualquier manifestación de opresión, sea de clase, nacionalidad, raza o género. La clase obrera que quiera ganar al conjunto de los oprimidos a su causa, incluyendo a las masas de la pequeña burguesía y del campesinado de una nacionalidad oprimida, debe ser especialmente sensible con el problema nacional y apoyar aquellas demandas progresistas que sirvan para demostrar, con hechos, que no tiene ningún interés en mantener la opresión nacional. Defender y luchar de forma consecuente a favor de una reivindicación democrática como es el derecho de autodeterminación, pasaba en los años treinta, como también pasa en la actualidad, por señalar que la opresión nacional es una consecuencia directa de la existencia de la sociedad de clases y que, por tanto, sólo puede resolverse de forma efectiva a través del derrocamiento del capitalismo y su sustitución por un régimen de democracia obrera. Sólo una federación socialista puede hacer realidad el derecho de autodeterminación y la auténtica libertad de las naciones.

LA REFORMA AGRARIA

La Revolución Francesa liquidó las relaciones feudales en el campo atacando sin descanso a los grandes terratenientes que sostenían la Monarquía. La cuestión agraria también fue un factor decisivo en la revolución rusa de 1917. Las promesas que los mencheviques y eseristas habían realizado a las masas campesinas fueron olvidadas una vez que gobernaron en coalición con los capitalistas y terratenientes. La consigna de la entrega de la tierra al campesinado fue inscrita en la bandera del Partido Bolchevique, cuyo primer decreto tras la toma del poder fue para hacerla efectiva. En ambos casos, la reforma agraria no pudo llevarse a cabo más que con una política y unos métodos revolucionarios.

El carácter atrasado del capitalismo español se dejaba sentir en el enorme peso del sector primario en la economía del país: todavía en 1931 la agricultura aportaba el 50% de la renta nacional y constituía dos tercios de las exportaciones. El 70% de la población vivía en el medio rural, la mayoría en condiciones penosas entre cosecha y cosecha. Los trabajadores del campo sobrevivían con sueldos de miseria de dos o tres pesetas diarias y, en el mejor de los casos, los jornaleros de Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al año.

La disyuntiva planteada en la Francia revolucionaria del siglo XVIII o en la Rusia de 1917 se repitió nada más proclamarse la Segunda República. Desde cualquier punto de vista, una reforma que intentase repartir la tierra entraría inmediatamente en conflicto con los intereses de los latifundistas y, en consecuencia, con la oligarquía económica ligada por mil hilos visibles e invisibles al aparato del Estado y la política. En su estudio sobre la reforma agraria en la Segunda República, que se ha convertido en referencia obligada para este asunto, Edward Malefakis señala: “La posesión de 250 hectáreas de tierra cultivable es suficiente para calificar a una persona de gran propietario. Si posee más de 500 hectáreas de tierra cultivables entra a formar parte de una categoría especial que incluye probablemente a menos del 0’1 por ciento de la población activa agrícola. Y sin embargo, más de las tres cuartas partes de los nobles citados en el Registro para las seis provincias latifundistas estudiadas [Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo] poseían, sólo en estas provincias, sin

tener en cuenta sus propiedades en el resto de España, tierras con una extensión mayor a las 500 hectáreas”.⁴¹⁸

Recurriendo a los datos disponibles por los estudios realizados de cara a la ley de Reforma Agraria del gobierno republicano, y teniendo en cuenta que se referían tan sólo a 99 nobles terratenientes, se puede apreciar la tremenda extensión de sus propiedades en 1933: el duque de Medinaceli poseía 79.147 hectáreas de tierra; los duques de Peñaranda, Villahermosa y Alba le seguían con 51.016, 47.204 y 34.455 hectáreas respectivamente. Y los marqueses de la Romana y de Comillas completaban la lista de los seis Grandes, con 29.097 y 23.720 hectáreas. Pero sería un error creer que el problema de la tierra se reducía a la propiedad aristocrática. Como señalamos en el primer capítulo, los terratenientes incluían a numerosos latifundistas burgueses que carecían de título nobiliario, y que “fueron adquiriendo gradualmente una importancia local comparable a la que antaño estaba reservada a la aristocracia”.⁴¹⁹

El carácter rentista y absentista de esta burguesía terrateniente se acrecentó con su renuncia consciente a utilizar técnicas modernas de explotación, variedad de cultivos o construcción de las infraestructuras necesarias para el regadío. La persistencia de una gran masa de jornaleros con salarios de hambre era suficiente para lograr grandes ingresos. Lo habitual era que los grandes propietarios latifundistas ni conociesen ni viviesen en sus tierras. No había más relación con ellas que el título de propiedad y las rentas obtenidas; sus administradores les informaban periódicamente de la marcha de sus fincas. Malefakis proporciona datos muy ilustrativos: “entre los 262 Grandes, que en conjunto poseían 335.000 hectáreas de tierra labrada en el Sur en 1933, sólo 14 habían nacido allí y todos ellos procedían de grandes ciudades, no del campo. En San Sebastián habían nacido más Grandes que en cualquiera de las grandes ciudades del Sur, y más en centros franceses de la alta sociedad como París, Biarritz y Bayona que en todas las capitales del Sur juntas. Pero Madrid era la ciudad favorita de los Grandes: 177 Grandes provenían de la capital en los años treinta —trece veces más que de Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga y Jerez de la Frontera juntas. Es evidente que no era la localización de sus fuentes de ingreso lo que determinaba el lugar de residencia de las familias de los Grandes de España, sino la localización de los sitios en los que estos ingresos podían gastarse de manera más agradable”.⁴²⁰ Absentismo y parasitismo, lujos y excesos. Esa era la vida corriente de los grandes terratenientes, tanto de los que vivían alejados de sus propiedades como de los señoritos de Andalucía, que combinaban lo peor de esos rasgos. En su obra sobre Casas Viejas, Ramón J. Sender hace referencia a estos últimos: “Dice Borrow en el primer tomo de la Biblia de España: ‘Los andaluces de clase alta son probablemente, en términos generales, los seres más necios y vanos de la especie humana, sin otros gustos que los goces sensuales, la ostentación en el vestir y las conversaciones obscenas. Su insolencia sólo tiene igual en su bajeza, y su prodigalidad en su avaricia’”.⁴²¹

⁴¹⁸ Edward Malefakis, *Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX*, Ed. Ariel, Barcelona, 1976, p. 92. En estas provincias, veinte grandes propietarios nobles poseían más de 5.000 hectáreas de tierra; setenta y uno, de 1.000 a 5.000; y de entre 500 y 1.000 Ha había 43 propietarios. El duque de Medinaceli era el latifundista noble con más tierra de estas seis provincias: 30.906 hectáreas, seguido del marqués de la Romana, con 24.297, y del marqués de Comillas, con 23.715.

⁴¹⁹ *Ibid.*, pp. 94-95.

⁴²⁰ *Ibid.*, pp. 106-107. Este tipo de absentismo provocó el crecimiento exponencial de los arriendos —que superaban el 50% de las tierras cultivables de estos burgueses terratenientes en las seis provincias señaladas—, e imponía a estos campesinos arrendatarios unas condiciones de existencia muy parecidas a las de los jornaleros. Muchos arrendatarios tenían que trabajar como braceros para completar sus ingresos.

⁴²¹ Ramón J. Sender, *Casas Viejas*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, p. 9. George Henry Borrow (1803-1881) fue un escritor y viajero inglés que recorrió España entre 1835 y 1840 recogiendo una gran cantidad de notas sobre los pueblos y sus costumbres. Su obra más conocida es *La Biblia en España* (1843), publicada en España en 1921 con traducción de Manuel Azaña.

Cuando el gobierno provisional hizo público su intención de abordar la reforma agraria, era más que evidente que se enfrentaría a un poder fáctico que presionaría duramente en su contra: “si se quería distribuir la tierra entre los campesinos, solamente había un grupo del que podía tomarse: el grupo formado por los propietarios burgueses, que en sus rasgos más esenciales estaban plenamente integrados en la estructura política de la nación y que no podían ser atacados más que a costa de poner en duda muchos de los principios básicos de esta estructura política”.⁴²² En otras palabras, llevar a cabo una reforma agraria que liquidase el poder terrateniente equivalía a transformar las bases materiales y políticas en las que se apoyaba al capitalismo español.

A medida que transcurrían las semanas, el gobierno provisional insistió en dejar claro que su reforma garantizaría la propiedad privada y que sólo serían expropiadas, e indemnizadas, aquellas tierras que fueran susceptibles de utilidad pública, lo que marcaba una tendencia que se mantendría, pero a peor, en los meses posteriores. Al final, la decisión adoptada fue la de posponer el debate sobre la futura ley agraria hasta que fueran elegidas las Cortes constituyentes, decisión que contó con la aprobación de los ministros socialistas. No obstante, sí hubo toda una serie de decisiones previas que calentaron el ambiente.

Entre finales de abril y mediados de julio de 1931 se promulgaron una serie de decretos que intentaron paliar algunas situaciones manifiestamente injustas. Por ejemplo, se prohibió la expulsión arbitraria de los pequeños arrendatarios, cosa habitual, salvo en caso de que desatendieran los cultivos o por impago de la renta. Respecto a los jornaleros, un decreto publicado el 1 de julio estableció la jornada de 8 horas para la mayoría de las faenas agrícolas, lo que en teoría debería provocar una subida de los jornales, ya que las horas que se requirieran más allá de esa jornada se tendrían que pagar aparte. Estas medidas no se pusieron en práctica en muchos lugares porque el dominio absoluto de los caciques impedía su aplicación efectiva. Además, un problema de fondo, acabar con el desempleo crónico entre los jornaleros, no se podía resolver por estas vías. Otra decisión importante del gobierno provisional fue la instauración de los jurados mixtos en el campo, con el fin de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral aprobada y, al mismo tiempo, crear canales institucionales para la contratación colectiva. Pero el problema para estos jurados era que sus decisiones no eran de obligado cumplimiento para los propietarios, que se zafaban con facilidad de sus decisiones.

La legislación incluyó otras medidas, como el decreto de Términos Municipales, del 28 de abril, que estableció la obligatoriedad de contratar en primer lugar a los jornaleros que residían en el término municipal, y el del Laboreo Forzoso, del 7 de agosto. Los ayuntamientos y los sindicatos campesinos controlados por los socialistas se agarraron con especial vehemencia a estas medidas para hacer realidad el cambio en las relaciones contractuales en el campo. Una masa importante de los jornaleros apoyó a los socialistas, pero los decretos también tuvieron otros efectos. Los sindicatos de la CNT rechazaron la nueva legislación, especialmente los jurados mixtos, y se emplearon a fondo en la acción directa para conseguir sus demandas; por otro lado, la ley de Términos perjudicaba a muchos jornaleros que se desplazaban de una zona a otra para ganarse un jornal en las cosechas y labores estacionales. En definitiva, estos decretos, pensados para proteger legalmente a un sector especialmente carente de derechos laborales y aplicados de forma poco severa, seguían sin resolver el problema fundamental del acceso a la propiedad y la lucha contra la falta de trabajo. Pero no cabe duda que significaron una andanada: por primera vez en la historia, la legalidad se inclinaba moderadamente a favor de los campesinos pobres y los jornaleros, y no de los propietarios. Sin ser su pretensión, esta legislación impulsaba al movimiento agrario a

⁴²² Edward Malefakis, *op. cit.*, p. 117.

hacer efectivos estos nuevos derechos adquiridos. La lucha de clases en el campo se exacerbó.

Una vez en marcha las Cortes constituyentes, comenzó el debate en torno a la ley de Reforma Agraria, cuyo primer borrador, elaborado por una comisión técnica, fue presentado el 20 de julio. El proyecto no pretendía, ni mucho menos, una expropiación de la propiedad burguesa de la tierra, sino medidas tendentes al rápido asentamiento de los campesinos a través de la movilización de los recursos públicos, afectando limitadamente a la propiedad aristocrática. La fórmula ideada era la “ocupación temporal” de aquellas parcelas de las grandes fincas del sur que excediesen de unas “ciertas dimensiones”. Para Malefakis, “puesto que estas ocupaciones ‘temporales’ iban a ser de duración indeterminada, en realidad lo que hacían era revivir los arrendamientos obligatorios que habían presentado la médula de las propuestas agrarias de los ministros de Carlos III a finales del siglo XVIII.” La comisión técnica fijó como objetivo el asentamiento de 60.000 a 75.000 familias campesinas por año, con la esperanza de que a ese ritmo la reforma se completara en un plazo de doce a quince años. Para financiar la reforma se estimaban unas necesidades de entre 200 y 250 millones de pesetas anuales, aproximadamente el 6% del presupuesto nacional, obtenidos de un impuesto especial progresivo sobre los grandes latifundios, a pagar por los propietarios.⁴²³

Como respuesta inmediata al proyecto, y para luchar contra él, los grandes propietarios crearon la Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas. La prensa católica y reaccionaria publicó editoriales incendiarios en los que rechazaba el proyecto en su totalidad, mientras la minoría parlamentaria de derechas y los diputados agrarios comenzaron una campaña histórica de denuncia y bloqueo en las Cortes, que se mantendría durante todo el debate legislativo. El proyecto presentado también aceleró las divisiones dentro de la conjunción gubernamental: los diputados del Partido Radical, igual que Alcalá Zamora y Maura, se opusieron frontalmente. La presión se hizo tan fuerte, que “los pocos dirigentes y periódicos de la izquierda republicana que en un principio habían defendido tibiamente el proyecto lo abandonaron rápidamente”.⁴²⁴ A la semana de su presentación, la propuesta de la comisión técnica fue derrotada en las Cortes.

La campaña de la derecha había logrado sus objetivos: paralizó un proyecto bastante moderado y dio fuerza a sus planteamientos hasta el punto de que Alcalá Zamora, como presidente del gobierno, decidió tomar el control directo de la situación a través de una nueva comisión ministerial que él encabezaría y que elaboraría un nuevo proyecto de ley. Nada bueno se podía esperar de un político de credenciales tan poco fiables, que era además un conocido terrateniente. Lamentablemente, los ministros socialistas aceptaron este giro a la derecha y respaldaron a Alcalá Zamora, quien el 25 de agosto, con el apoyo del PSOE, presentó a las Cortes su nueva propuesta de reforma, mucho más descafeinada, y que se limitaba a tres tipos de fincas: las que estuviesen localizadas en zonas de regadío pero no estuviesen regadas, las que hubiesen estado arrendadas sistemáticamente y las propiedades nobles de “origen feudal”. Según la nueva propuesta, los propietarios que cultivasen directamente sus tierras de acuerdo con el “buen uso y costumbre” eran explícitamente excluidos de la reforma, pero esta redacción tan ambigua en realidad abría la puerta a mantener intacta la propiedad terrateniente. La definición de *cultivo directo* no implicaba el cultivo personal, sino que todo aquel propietario que participara en la administración de sus tierras, o invirtiera algún capital en ellas, podría ser considerado como cultivador directo.

Incluso el proyecto de Alcalá Zamora, que era una capitulación en toda regla, fue recibido con hostilidad por los círculos conservadores y católicos, que no querían oír hablar de impuestos progresivos y expropiaciones, aunque fueran ridículas. La polarización en torno a

⁴²³ *Ibid.*, p. 209.

⁴²⁴ *Ibid.*, p. 211.

la cuestión agraria aumentó. En las filas socialistas, un proyecto semejante, a pesar del apoyo inicial de sus parlamentarios, no podía dejar de provocar sarpullidos. Las bases socialistas y los sindicatos campesinos no iban a aceptar sin lucha, y sin una lucha muy dura, que se les escamoteasen legalmente las promesas que el gobierno y sus dirigentes habían hecho en los meses previos. La República y la reforma agraria eran sinónimos en la conciencia colectiva de miles de jornaleros. La presión de las bases se reflejó en la actitud de los parlamentarios socialistas, que mantenían en aquellos momentos una agria disputa con Alcalá Zamora por la cuestión clerical. Finalmente, socialistas y republicanos de izquierda lograron que el proyecto de Alcalá Zamora fuera modificado sustancialmente en la comisión parlamentaria, donde tenían mayoría, con la aprobación de toda una serie de recomendaciones recogidas directamente del primer proyecto elaborado por la comisión técnica. Inmediatamente, la prensa católica tildó la propuesta de “legislación soviética”.

Revelando con claridad los límites de la política de colaboración de clases, las contradicciones internas de la conjunción provocaron la primera gran crisis gubernamental. Alcalá Zamora presentó su renuncia irrevocable el 14 de octubre. La cuestión religiosa y la reforma agraria se convirtieron en el medio para ejercer una fuerte presión política, buscando la marcha atrás del gobierno hacia posiciones aceptables para la burguesía, los terratenientes y la jerarquía católica. Tras la dimisión de Alcalá Zamora, el líder de Acción Republicana, Manuel Azaña, lo sustituyó al frente del ejecutivo, pero la estabilidad política quedó definitivamente rota.

La presión por la derecha era muy intensa, pero, desde la izquierda, la movilización y la irritación creciente de los jornaleros colocaban a los diputados socialistas en una situación cada vez más difícil. Los socialistas exigieron debatir un nuevo proyecto de reforma agraria simultáneamente al de la constitución, al contrario de lo que Azaña pretendía. El tercer proyecto de reforma agraria, propuesto por la comisión parlamentaria, fue presentado a las Cortes el 26 de noviembre, manteniendo lo fundamental de las medidas contempladas en el proyecto originario de la comisión técnica. La oposición de la derecha fue brutal, desde el partido de Lerroux y la minoría agraria, a los nacionalistas vascos y los diputados de la Lliga Catalana. Los políticos vinculados a los grandes propietarios y capitalistas se lanzaron a la batalla. Y ocurrió lo mismo que en ocasiones anteriores. La reacción, que utilizó todas sus palancas para armar una campaña pública de grandes proporciones, arrugó al gobierno, incluido a los diputados socialistas, y logró que la discusión del proyecto se pospusiera hasta que la constitución fuera aprobada en las Cortes. Para inicios de 1932, Azaña se enfrentó a una cruda realidad que había sido maquillada en los días de alborozo. Las cuestiones de clase, desde las relaciones con la Iglesia y el ejército, la dura represión del movimiento obrero y la crucial reforma agraria, actuaron como divisoria definitiva. La colaboración de clases se estrelló contra el muro de las relaciones capitalistas, que las reformas planteadas eran incapaces de atravesar.

Los líderes republicanos de “izquierdas”, con un temperamento débil y vacilante, no querían bajo ningún concepto alimentar la polarización, mucho menos apoyarse en el movimiento de las masas para resolver esta cuestión de una manera justa. “El 21 de diciembre —señala Malefakis— en un discurso pronunciado en Barcelona, Azaña informó sobre la nueva orientación de su gobierno al calificar la reforma agraria como una cuestión de tal complejidad que solamente podría resolverse lentamente y que representaría, por consiguiente, la obra de más de una generación. El mismo día, Marcelino Domingo, el dirigente radical-socialista que acababa de ocupar el Ministerio de Agricultura, anunció que el último proyecto de la Comisión Parlamentaria sería anulado en su totalidad redactándose en su lugar un nuevo proyecto para ser presentado a las Cortes en enero, coincidiendo con su

reapertura”.⁴²⁵ La izquierda republicana se negó a sí misma y cedió vergonzosamente ante los grandes propietarios, dándoles aliento y confianza en sus propias fuerzas.

El nuevo proyecto, que hacía el número cuatro y que con tanto mimo fue depurado de cualquier elemento que pudiera incomodar a los grandes terratenientes, fue debatido en marzo de 1932. La tardanza se explica no sólo por el estallido de huelgas y sangrientos conflictos campesinos, también por las dificultades de lograr el respaldo de los diputados del PSOE, cosa que finalmente se consiguió. Este último proyecto representaba una versión completamente edulcorada de reforma agraria, incapaz de acabar con el problema de fondo, la gran propiedad. En esencia, sólo se propuso la confiscación de aquellas propiedades que se considerasen ilegítimas. Todas las adquiridas “legítimamente”, aunque fuesen de la nobleza o susceptibles de expropiación, serían indemnizadas mucho más generosamente. También se abandonó el objetivo de asentar a 60.000 familias de colonos al año y el presupuesto para llevar a cabo la reforma descendió notablemente. El proyecto era una retirada en toda regla, un abandono de cualquier intento serio y ambicioso por resolver el problema agrario.

Los debates parlamentarios del proyecto se extendieron desde mayo a septiembre, y fue discutido al menos en 46 de las 71 sesiones de ese período. Los diputados de derechas, especialmente los diputados agrarios, obstaculizaron la tramitación recurriendo a la presentación masiva de enmiendas. A principios de agosto de 1932 sólo se habían aprobado cuatro artículos, de los 24 de que constaba el proyecto. Esta agonía acabó después del intento de golpe de Estado del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Finalmente, el 9 de septiembre, fue aprobado por una aplastante mayoría de votos: 318 contra 19. A pesar de que 130 diputados no participaron en la votación, este resultado reflejaba perfectamente el carácter superficial y nada lesivo de la ley respecto a los intereses de los grandes propietarios burgueses —al margen de la gran cacofonía que habían hecho sus portavoces políticos y mediáticos—. Dirigentes como Lerroux o Maura le dieron su aprobación, con lo que ello representaba.

La ley dispuso la confección de un censo de beneficiarios potenciales de la reforma agraria y señalaba que no podrían expropiarse tierras más que en catorce provincias del sur, “en las restantes treinta y seis provincias, la ley disponía que la redistribución de las tierras tendría lugar sólo en etapas posteriores”. Los resultados de las labores técnicas de evaluación de las tierras donde la reforma agraria podría aplicarse fueron sorprendentes: “De las 879.371 fincas afectadas por la Reforma, sólo 154.716 (el 17,6%) se hallaban en las once provincias latifundistas donde se había propuesto circunscribir la reforma”.⁴²⁶ Más de las dos terceras partes de los propietarios inventariados provenían del norte y el centro del país. Esto, indudablemente, enajenó el apoyo a la República de miles de pequeños propietarios, inteligentemente jaleados por la derecha, que esgrimió la reforma como una amenaza de expropiación, que por supuesto no llegó nunca. El verdadero objetivo de una auténtica reforma agraria integral eran los 12.000 grandes propietarios agrícolas, que pudieron sortear la ley aprobada sin muchos problemas: “La esperanza optimista de que las tierras de la Grandeza abrirían las puertas al asentamiento de colonos en millones de hectáreas resultó ser una ilusión”.⁴²⁷

La reforma se vio todavía más perjudicada por la renuncia a financiarla a través de una política de impuestos progresivos sobre la propiedad agrícola, como originalmente se había concebido, y su sustitución por un impuesto sobre la renta, que fue un esperpento.⁴²⁸ La ley

⁴²⁵ *Ibid.*, p. 231.

⁴²⁶ *Ibid.*, pp. 256-257.

⁴²⁷ *Ibid.*, p. 264.

⁴²⁸ “La propuesta de Ley de Impuestos sobre la renta sometida a las Cortes el 15 de octubre de 1932 era tan tímida, que sus tipos variaban sólo del 1 por ciento, para rentas superiores a 100.000 pesetas, al 77 por ciento,

instituía un Instituto de Reforma Agraria encargado de realizar el censo de tierras sujetas a “expropiación”. Increíblemente, dicho registro tenía por base la declaración hecha por sus propietarios y estaban sujetas al pago de indemnización. Los créditos para satisfacerlas, y para aplicar el conjunto de la reforma, procederían del Banco Agrario Nacional, con un capital inicial de 50 millones de pesetas, pero cuya administración dependía no de los jornaleros ni sus organizaciones, sino de representantes del Banco de España, el Banco Hipotecario, el Cuerpo Superior Bancario y el Banco Exterior de España, es decir, del gran capital financiero ligado a los terratenientes.⁴²⁹ El proyecto además, obviaba el problema de los minifundios, que obligaban a una vida miserable a más de un millón y medio de familias campesinas en Galicia, Castilla la Vieja y otras zonas.

Otro aspecto importante fue el debate específico, en julio de 1933, del borrador de la ley de Arrendamientos. En teoría esta ley pretendía fijar una duración más justa de los contratos de arriendo —nunca menos de seis años— y las rentas a pagar —nunca superiores al líquido imponible, que a su vez oscilaba entre la tercera y la cuarta parte de los ingresos reales de la finca—. También en teoría, se quería facilitar el acceso a la propiedad de miles de arrendatarios, pues en el borrador se les otorgaba el derecho de tanteo y retracto en el caso de que las tierras arrendadas fueran puestas a la venta. Pero, una vez más, el proyecto quedó en agua de borrajas: “Todas estas cláusulas fueron modificadas por la presión de la minoría agraria, que se configuraba así en la salvaguarda de los intereses de los pequeños, medianos y grandes propietarios (...) El profundo rechazo de la minoría agraria (...) logró que lo establecido finalmente fuese que aquellos arrendatarios que aspirasen a la propiedad de las tierras usufructuadas se viesan obligados a pagar a su propietario el valor alcanzado por las mismas en el mercado. De nuevo, la desidia de los diputados de la izquierda republicana dio al traste con las pretensiones más reformistas del proyecto de ley en cuestión”.⁴³⁰ Este aspecto es muy importante, pues supuestamente el gobierno trataba de responder con su política a las necesidades de lo que ellos consideraban el *bloque centrista* de la sociedad, las capas medias y aquellos sectores rurales que podían convertirse en los equivalentes a los pequeños campesinos alemanes o franceses. Sin embargo, como señala el profesor Cabo Romero: “Puede afirmarse que apenas se pusieron en marcha políticas agrícolas en defensa estricta de la pequeña propiedad, tales como la creación de instrumentos bancarios y entidades financieras orientadas hacia la concesión de créditos blandos, o préstamos hipotecarios, que contribuyesen al mantenimiento de la pequeña propiedad o al acceso a la misma de los pequeños arrendatarios y aparceros”.⁴³¹

La reforma agraria del gobierno Azaña fue un fiasco en toda regla. “En 1933, ciento veinte años después de que las Cortes de Cádiz aprobasen las primeras leyes desamortizadoras — escribe Malefakis— la aristocracia continuaba siendo una importante clase terrateniente. Sus propiedades que en su mayor parte eran cultivables (...) representaban más de medio millón de hectáreas en las seis provincias latifundistas estudiadas (Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Toledo) (...) La nobleza poseía de una sexta a una octava parte de toda la tierra incluida en el Registro de Badajoz, Córdoba y Sevilla. En Cádiz y Cáceres la nobleza

tipo máximo aplicable a las rentas superiores al millón de pesetas (...) De tal modo que los que no percibían unos ingresos noventa y tres veces superiores a la media nacional, por lo menos, quedarían exentos de contribuir por el Impuesto sobre la renta (...) Un impuesto sobre la renta de proporciones tan ridículas no podía contribuir en modo alguno a la financiación de la reforma agraria: durante los tres años en que se devengó, su aportación a los ingresos del Estado no pasó de las tres décimas partes del uno por ciento del total”. Malefakis, *Ibid.*, p. 267.

⁴²⁹ En los consejos de administración de estos bancos se sentaban grandes terratenientes como los duques de Alba y del Infantado, los marqueses de Urquijo y de Aledo, los Garnica, los Martínez Campo... Se puede imaginar qué reforma agraria estaban dispuestos a hacer estos individuos.

⁴³⁰ Francisco Cobo Romero, *Por la reforma agraria hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la II República y la Guerra Civil (1930-1939)*, Universidad de Granada, 2007, p. 13.

⁴³¹ *Ibid.*, p. 132.

debía controlar algo así como la cuarta parte de las tierras incluidas en el Registro [se refiere a los datos del registro de 1959, que utiliza como base para el estudio]”. Y continúa: “A finales de 1933, solamente había instalados 4.399 campesinos en 24.203 hectáreas. No había una sola provincia en la que se hubiese distribuido una extensión suficiente de tierras como para alterar significativamente la estructura social agraria existente. El Estado se había apropiado de 20.133 hectáreas más, propiedad de los participantes en el levantamiento de Sanjurjo, por la ley de 24 de agosto de 1932, pero en ellas se asentaron incluso menos colonos (...) Así pues, ni el proyecto socialista de instalar 100.000 a 150.000 campesinos por año, ni el propósito de la Comisión Técnica, que situaba esa cifra entre los 60.000 y los 75.000, ni siquiera el más modesto de Vázquez Humasqué, de asentar de 10.000 a 15.000 colonos anualmente, se había logrado. Dos años y medio después de la proclamación de la República, solamente habían cambiado de manos 45.000 hectáreas en beneficio de unos 6.000 ó 7.000 campesinos”.⁴³²

TIERRA Y LIBERTAD

Las tradiciones revolucionarias del movimiento jornalero transcurren paralelas a las del proletariado industrial y se confunden con ellas. En las insurrecciones federales de 1869, en las ocupaciones de tierras durante la Primera República, en las grandes huelgas del trienio bolchevique y en las movilizaciones de masas contra la monarquía, los jornaleros y campesinos pobres se colocaron a la vanguardia de la lucha social. Unas tradiciones transmitidas de generación en generación que llenan la conciencia colectiva de pueblos y comarcas de Andalucía y Extremadura, de La Mancha y Aragón.

Esta memoria histórica quedó recogida en el libro de Ronald Fraser *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, del que citaremos un pasaje, el del testimonio del jornalero Juan Moreno, oriundo de Castro del Río, que retrata fielmente las condiciones que padecían cientos de miles de jornaleros y campesinos pobres. Dice así: “Tras la muerte de su padre a causa de la tuberculosis, Juan Moreno, que a la sazón tenía 10 años, empezó a trabajar en una finca. Su primer recuerdo era el día que perdió uno de los cerdos que le habían encargado que vigilase y regresó a la finca llorando. El capataz le rebajó la ración, es decir, el pedacito de tocino que echaban al potaje de los jornaleros y que prácticamente era ‘la única cosa nutritiva que en él había’. Juan había empezado su aprendizaje. Pronto salió a trabajar a los campos. Araba, sembraba y segaba con la hoz en las fincas donde los jornaleros contratados pasaban jornadas fijas, ‘siempre hambrientos a causa de los poco que nos daban de comer, delgados como esqueletos’, durmiendo sobre paja en el suelo de tierra de los cobertizos, ‘todos juntos como en un cuartel’ (...) ‘Odiábamos a la burguesía, que nos trataba como a animales. Los burgueses eran nuestros peores enemigos. Cuando les mirábamos creíamos estar viendo al mismo diablo. Y lo mismo pensaban ellos de nosotros. Había odio entre nosotros, un odio tan grande que no hubiera podido ser peor. Ellos eran burgueses, ellos no tenían que trabajar para ganarse la vida, ellos vivían cómodamente. Nosotros sabíamos que éramos trabajadores y que teníamos que trabajar, pero queríamos que ellos nos pagasen un jornal decente y que nos tratasen como a seres humanos, con respeto. Sólo había una forma de conseguirlo: luchando como ellos’”.⁴³³

⁴³² Malefakis, *op. cit.*, pp. 92 y 325.

⁴³³ Ronald Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Ed. Crítica, Barcelona, 1979, vol. I, p. 123.

Las condiciones de barbarie del campo se habían arrastrado desde tiempos inmemoriales, alimentando luchas, huelgas, insurrecciones y ocupaciones de tierra. Los jornaleros sabían lo que era pelear por la reforma agraria. Lo habían intentado durante más de un siglo y se encontraron como respuesta invariable la violencia de los caciques y su brazo armado, la Guardia Civil. Los jornaleros y campesinos pobres tenían una historia de organización a sus espaldas. Los militantes anarquistas y anarcosindicalistas tuvieron un papel trascendental en la lucha contra los grandes propietarios, por la tierra y la libertad. A ellos se unirían los socialistas, aunque de manera discontinua y desigual.

Desde los grandes movimientos de masas contra la monarquía, la UGT comenzó la reorganización sistemática de sus sindicatos agrarios hasta constituir, en abril de 1930, la poderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT).⁴³⁴ No cabe duda que los decretos agrarios aprobados por el gobierno provisional, y la acción desde los ayuntamientos socialistas para lograr su aplicación, beneficiaron el crecimiento del sindicalismo socialista entre los trabajadores del campo. Por otra parte, y a pesar de la práctica reformista que en un primer momento mantuvo la dirección del sindicato, la explosión de luchas jornaleras y ocupaciones de fincas reforzó aún más su influencia. En definitiva, si en 1930 el número de miembros de la FNTT no sobrepasaba los 29.000, en 1931 alcanzaba los 193.059 y en septiembre de 1932 eran 392.953.⁴³⁵ Siete diputados socialistas de las Cortes pertenecían a la FNTT y *El Obrero de la Tierra*, su órgano de expresión, editaba 80.000 ejemplares. El sindicato campesino se extendió desde sus feudos tradicionales en Badajoz, Cáceres y las montañas cordobesas, a la mayor parte de La Mancha y Andalucía Oriental. Tenía una influencia importante en Sevilla y Valencia, y adquirió también una presencia destacada en las dos Castillas. Solamente en Catalunya, Aragón y Cádiz contó con una escasa implantación.

La CNT, que también experimentó un crecimiento explosivo, conservó su influencia preponderante entre el campesinado aragonés y en la Rioja, en la parte sur de la vega del Guadalquivir y una gran presencia en el Levante. Respecto a los decretos del gobierno y el debate de la reforma agraria, la CNT defendió la inmediata incautación de todas las grandes propiedades y la total abolición de impuestos, rentas e hipotecas que pesaban sobre las pequeñas propiedades. Los anarcosindicalistas no tardaron en arreciar su campaña de huelgas y acción directa contra los propietarios.

El crecimiento exponencial de la UGT y la CNT daba la medida de la auténtica guerra de clases que se libraba en el campo. Muchos ayuntamientos controlados por el PSOE, y por tanto por dirigentes de la propia FNTT, comenzaron una feroz lucha contra los propietarios agrarios al intentar aplicar los decretos del gobierno. Es verdad que ninguno de ellos contemplaba medidas expropiadoras, pero el mero hecho de intentar llevar a cabo las leyes de Términos Municipales, de Laboreo Forzoso, de Jurados Mixtos o de Colocación Obrera “amenazaba peligrosamente el sistema mismo de dominación patronal, y colocaba en un serio trance a la mayor parte de las estrategias tradicionalmente utilizadas por esta última con vistas a la disminución de los costos laborales o la ampliación de la jornada de trabajo (...)

⁴³⁴ A partir de la segunda década del siglo XX, la UGT comenzó a intensificar su tarea de organización en el campesinado y el movimiento jornalero andaluz, a pesar de la competencia y el arraigo de los sindicatos agrarios anarquistas predominantes en las provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Presionados por los grandes movimientos campesinos del trienio bolchevique, la UGT y el PSOE aprobaron su programa agrario en 1918. Para finales de 1919, la UGT estaba sólidamente implantada en la zona montañosa de Córdoba y en las provincias de Jaén y Granada, y su afiliación campesina suponía casi una tercera parte. En abril de 1930 quedó constituida la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), en un congreso que contó con 235 delegados provenientes de 157 pueblos, en representación de 27.340 afiliados. La mayoría de las fuerzas de la FNTT se concentraba en Andalucía y Extremadura, seguidas por Castilla-La Mancha y el País Valenciano.

⁴³⁵ Memoria del II Congreso de la FNTT, 17 de septiembre de 1932. La militancia total de la UGT en 1932 era de 1.041.539 afiliados.

Los medianos y grandes propietarios rústicos (...) se resistían tenazmente a obedecer las prescripciones sobre laboreo dictadas por las Comisiones municipales de Policía Rural o por los propios alcaldes socialistas”.⁴³⁶

En los dos años que duró el debate sobre la reforma agraria, la situación en el campo se volvió explosiva. La legislación laboral aprobada por el gobierno de conjunción no fue el único factor que alentó la oposición de los grandes propietarios. Otros hechos, como la caída del valor de las cosechas por la crisis inflacionaria o el ascenso de los costes salariales y, en consecuencia, la reducción de los beneficios empresariales, se combinaron para endurecer la posición de los terratenientes, que recurrieron constantemente al impago de salarios y al incumplimiento de las bases de trabajo.⁴³⁷ Otro factor que influyó de manera determinante en esta guerra campesina fue el crecimiento del desempleo, que se convirtió en un problema crónico e insoluble. En junio de 1932 el Ministerio de Trabajo cifraba los desempleados en 446.263, de los que 258.570 eran trabajadores agrícolas. En 1933, de un total de cuatro millones de trabajadores había 593.627 parados, de los cuales 382.965 eran agrícolas, el 64’5%. Durante toda la República, los desempleados carecieron de cualquier subsidio.⁴³⁸

La sed de tierras del campesinado, que soportaba las terribles consecuencias del paro forzoso mientras muchas de las grandes propiedades permanecían yermas, arreció las ocupaciones de latifundios desde los primeros meses de la República. En Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Aragón, La Rioja... el movimiento jornalero tomaba las fincas de los grandes latifundistas para ponerlas a producir. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de conjunción? En agosto de 1931, los sindicatos campesinos de la CNT declararon huelgas en Bujalance y Baena (Córdoba), Moraleda de Zafayona (Granada) y Écija y Estepa (Sevilla). A principios de septiembre, la lucha prendió en Doña Mencía (Córdoba), y las huelgas se extendieron a Jerez y Arcos de la Frontera (Cádiz) prolongándose hasta la primavera del siguiente año. En octubre, estallaron en Pozoblanco (Córdoba). Pero la situación empeoró a finales de año. En Castilblanco, pueblo del noroeste de la provincia de Badajoz, la FNTT convocó una huelga general, para los días 30 y 31 de diciembre, contra el gobernador y el coronel de la Guardia Civil, a quienes acusaba de apoyar a los propietarios y caciques frente a la legislación social aprobada. La huelga fue pacífica, pero el ministro Casares Quiroga decidió enviar a la Guardia Civil para restablecer el “orden”. El 31, cuando los manifestantes volvían a sus hogares, fueron atacados y en el forcejeo murió por disparos un campesino. En una reacción iracunda, los huelguistas mataron a cuatro guardias. La acción punitiva que en venganza desató la Benemérita fue terrible: numerosas localidades jornaleras, como Almancha, Jerez, Calzada de Calatrava y Puertollano, sufrieron sus *razzias*. En Zalamea de la Serena mataron a dos campesinos e hirieron a tres más. En Épila, los trabajadores de la fábrica de azúcar convocaron una huelga en defensa de las contrataciones a los censados en el término municipal. El domingo 3 de enero, ante una concentración de 500 personas, la guardia civil la emprendió a tiros, dejando dos jornaleros muertos y varios heridos. En la localidad valenciana de La Safor, una manifestación campesina fue disuelta por disparos de los guardias, con un saldo de cuatro muertos y trece heridos, dos de ellos mujeres. Más tarde le tocó el turno al pueblo riojano de Arnedo: seis hombres y cinco mujeres fueron asesinados y hubo más de treinta heridos. La lucha por la reforma agraria y por los derechos jornaleros

⁴³⁶ Cobo Romero, *op. cit.*, p. 143-145

⁴³⁷ La producción agrícola disminuyó, afectada por la caída de las exportaciones a consecuencia de la recesión mundial. Años de malas cosechas y de sequía complicaron aún más las cosas en Andalucía. Según un informe del ministerio de Trabajo publicado a finales de 1930, la pérdida de la cosecha de aceituna en 1930-1931 dejó sin trabajo a un tercio de los jornaleros de Jaén y Granada. El desempleo se hizo crónico en la mayoría de las comarcas jornaleras andaluzas y extremeñas.

⁴³⁸ Malefakis, *op. cit.*, p. 331.

pronto se tiñó de sangre. *Tierra y Libertad*, el órgano de la Federación Anarquista Ibérica (FAI), denunciaba: “España está secuestrada por la Guardia Civil”.

La lucha continuó durante la primavera en Sevilla, donde para el 19 de mayo de 1932 la CNT convocó una gran huelga contra los jurados mixtos. Para abortarla, el gobierno Azaña clausuró todos los locales de la CNT de la provincia y arrestó a sus principales dirigentes. La represión gubernamental se cernió feroz contra los intentos anarquistas de organizar un movimiento semejante al del trienio bolchevique en Andalucía. Pero la CNT no tenía la paternidad exclusiva de este aumento de las huelgas jornaleras: “Sería injusto atribuir a los anarcosindicalistas o a los comunistas toda la responsabilidad por los continuos disturbios campesinos —señala Malefakis—. La política seguida por la CNT-FAI de total oposición al régimen no creó, sino solamente acentuó, la lucha sostenida por el campesinado contra sus enemigos tradicionales, los terratenientes y la Guardia Civil”. Es innegable que la FNTT organizó y participó activamente en este movimiento general. Según Malefakis, “durante los 26 meses comprendidos entre abril de 1930 y junio de 1932, los grupos de la FNTT participaron en no menos de 925 huelgas”⁴³⁹

La actividad de la FNTT destacó en uno de sus grandes feudos, Extremadura. Aunque esta región permaneció más tranquila que Andalucía, durante el invierno de 1932-33 la situación de los yunteros extremeños se volvió insostenible. Hubo numerosos desahucios y, ante la amenaza generalizada de perder sus aperos y bestias después de que los grandes propietarios se negaran a renovar sus contratos, la FNTT lanzó un gran movimiento de ocupaciones de tierras. “En las comarcas latifundistas de Cáceres, la ocupaciones de fincas alcanzaron proporciones tan desmesuradas que un incontable número de propietarios, alarmado ante el cariz que habían adoptado los acontecimientos, decidió huir de sus lugares de residencia”⁴⁴⁰.

La frustración provocada por el debate de los sucesivos proyectos de reforma agraria y la aprobación definitiva de una ley descafeinada y absolutamente insuficiente empujaron a la FNTT a una postura cada vez más combativa. Pierre Vilar lo reconoce implícitamente: “La reforma agraria, paulatinamente aplicada, no había conquistado el alma de los campesinos. No había sido ni la noche del 4 de agosto, ni el decreto de Lenin. En 1933, la masa agraria se desviaba de la República para unirse al movimiento obrero en las filas de la oposición”.⁴⁴¹ En el editorial del 1 de mayo de 1933 del *Obrero de la Tierra*, el presidente de la FNTT escribió: “Hemos perdido casi dos años por no haber quebrado la espina dorsal del caciquismo con la reforma agraria, por no haberla puesto en práctica en agosto de 1931”. Las críticas se hicieron mucho más violentas en los estertores del gobierno Azaña, en agosto de 1933, concentrándose contra los responsables gubernamentales y los técnicos del Instituto de Reforma Agraria. Así, el *Obrero de la Tierra* del 16 de agosto clamaba contra “este despreciable Instituto que, más que Instituto de Reforma Agraria, debería denominarse Instituto de Antirreforma Agraria”. En el cómputo general, si en 1931 las huelgas agrarias fueron 85, en 1932 alcanzaban las 198 y para 1933 fueron 448.⁴⁴²

En los dos años de gobierno de conjunción, los dirigentes socialistas justificaron el no ir más lejos en la cuestión agraria por la necesidad de mantener el “consenso” con los republicanos y evitar provocar a los terratenientes. Con ello no hacían más que obviar la terca realidad. Los terratenientes ya estaban “provocados” y nunca renunciarían a lo que consideraban como un derecho sagrado: sus propiedades. Pensar que estos individuos, que habían conservado sus latifundios a base de hambrear al pueblo y de ejercer una violencia sistemática contra él, iban

⁴³⁹ *Ibid.*, p. 354-355.

⁴⁴⁰ *Ibid.*, p. 225. Para el mes de octubre de 1933 se habían ocupado en Extremadura un total de 99.130 Ha.

⁴⁴¹ Pierre Vilar, *Historia de España*, RBA, Barcelona, 2005.

⁴⁴² *Ibid.*, p. 362.

a dejarse arrebatar la fuente de su poder y sus privilegios sin una lucha a muerte era un sueño utópico.

La sed de tierras no fue saciada y las viejas relaciones de propiedad siguieron intactas. El debate sobre la reforma agraria, y la guerra campesina que se sucedió ininterrumpidamente en estos dos años, planteó con toda crudeza que la solución al problema de la tierra estaba estrechamente ligada a la revolución socialista y al derrocamiento del capitalismo.⁴⁴³ La única reforma agraria posible, el único proyecto realista para dar satisfacción a las demandas de millones de familias campesinas, pasaba por la expropiación forzosa de los latifundios sin indemnización. Incluso esta medida, absolutamente justa, tenía que ir necesariamente acompañada de la nacionalización de la banca para proveer de créditos sin interés a las cooperativas, pequeños propietarios y colectividades campesinas, que así podrán modernizar el utillaje y la producción, garantizar precios justos para los productos agrarios y poner fin al monopolio de los intermediarios. Con este programa, y movilizándolo todo, hubiera sido perfectamente posible acabar con los problemas históricos del campo, proporcionando trabajo estable y condiciones de vida dignas a los campesinos pobres y sus familias.

LA CLASE OBRERA EN LUCHA

El conflicto campesino y las luchas de la clase obrera se entrecruzaron constantemente. Los trabajadores urbanos no fueron menos en poner su sello en los acontecimientos con numerosas huelgas en defensa de más salarios, mejores contratos, contra los cierres patronales y el desempleo, y contra la carestía de la vida. Igual que los jornaleros, pronto se enfrentaron a una legislación laboral que en apariencia garantizaba ciertos derechos, pero que en la práctica servía para poco. Y cuando optaron por la acción directa para conquistar sus reivindicaciones, se las tuvieron que ver con leyes y un aparato policial tan represivos, que en pocos aspectos se distinguía de lo que soportaron en tiempos de la monarquía.

Las promesas de poner fin al entramado de leyes reaccionarias y garantizar las libertades de expresión, reunión y huelga destacaban en el programa republicano-socialista. No obstante, en lo referido a las libertades públicas, los cambios de fondo fueron muy pocos. Toda una serie de salvaguardias políticas fueron dictadas con un fin evidente: la burguesía quería disponer de cláusulas que les permitieran anular la legislación y aprobar medidas de excepción en caso de que los trabajadores *desbordasen* las instituciones.

Apenas establecido el gobierno provisional, se aprobó un estatuto jurídico que le otorgaba plenos poderes en materia de orden público, y que fue empleado sin miramientos para reprimir numerosas huelgas. La legislación laboral y las leyes orgánicas más importantes se impregnaron de un contenido muy viciado desde el punto de vista de las garantías democráticas. La constitución aprobada el 9 de diciembre de 1931⁴⁴⁴ incluía en su título preliminar una declaración llamativa: “España es una República democrática de trabajadores de toda clase”, una demagógica concesión a las palabras y sobre todo a la correlación de fuerzas del momento, pero sin la menor correspondencia con la realidad. Sin atisbo de duda,

⁴⁴³ Una crítica magnífica al proyecto de reforma agraria fue realizada por uno de los teóricos más destacados de la Oposición de Izquierdas. Véase L. Fersen, “Crítica de la reforma agraria”, en *Revista Comunismo, la herencia teórica del marxismo español*, Ed. Fontamara, Barcelona, 1978, p. 133.

⁴⁴⁴ Tras la ratificación parlamentaria de la constitución, Alcalá Zamora fue elegido presidente de la Segunda República.

la constitución sancionaba el carácter burgués de la República. No sólo eso. La Constitución republicana incluía elementos típicos de un régimen presidencialista. Las atribuciones del presidente incluían legislar por decreto mientras las Cortes no se hallasen reunidas, suspender las sesiones ordinarias en cada legislatura hasta por un mes en el primer período y por quince días en el segundo, y disolver las Cortes hasta dos veces durante un mismo mandato presidencial. La constitución estableció asimismo la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales, con atribuciones para anular la legislación, cuyos sillones fueron ocupados por reconocidos reaccionarios. También se creó un complejo sistema legal para reformar el propio texto constitucional.

Algo semejante ocurrió en materia laboral. Cuando, en junio de 1931, el Ministerio de Trabajo fue ocupado por Francisco Largo Caballero, se cumplía una aspiración muy sentida por las bases socialistas. Por primera vez en la historia, un socialista se encargaría de dirigir las relaciones laborales del país. La confianza en sus reformas llenó de entusiasmo a miles de trabajadores, sindicalistas y cuadros dirigentes de la UGT. No podía ser para menos. Pero ese entusiasmo tenía su contrapunto en los cálculos de la burguesía republicana respecto a este paso, aparentemente tan trascendental. Ellos confiaban que la autoridad de los dirigentes socialistas, y especialmente la de Largo Caballero, sirviese para frenar al movimiento obrero.

Largo Caballero aprobó numerosas leyes y decretos, como la ley de Contrato de Trabajo, con la pretensión declarada de modernizar las relaciones contractuales entre empresarios y trabajadores, concederles a estos últimos algunas garantías legales para sus convenios y salarios, e incluso ampliar, al menos en teoría, las competencias de los sindicatos y asociaciones obreras en el mercado de trabajo (negociación de las contrataciones, etc.). Pero eran leyes respetuosas con el capital y no cuestionaban la propiedad privada, que seguía siendo el pilar básico de las relaciones económicas. Y por eso, tal como sucedió con las leyes agrarias, sus aspectos más progresistas jamás se aplicaron debido a la oposición visceral de la patronal. Entre sus proyectos, el ministro socialista intentó adaptar la cogestión sindical que se había desarrollado en Alemania durante la década de los años 20, con la redacción de un proyecto de ley de Intervención Obrera en las industrias, que se presentó el 20 de octubre de 1931. El fin no era establecer el control obrero a través de delegados de taller elegidos directamente por los trabajadores, sino que el sindicato designase a sus representantes en la empresa y solo ante ella rindiera cuentas de su intervención. Como en otros asuntos, el proyecto fue finalmente retirado debido a la presión de los republicanos.

Opuesto frontalmente al anarcosindicalismo y la acción directa, Caballero intentó por todos los medios restringir las huelgas. Mantuvo en lo esencial la legislación precedente y el derecho de huelga se siguió rigiendo por la normativa de 1909, modificada parcialmente por un decreto del 27 de noviembre de 1931, que establecía los jurados mixtos, remedo de los comités paritarios de la dictadura primorriverista. Estos jurados eran los encargados de intentar la conciliación antes de que se declarase una huelga, lo que en la práctica era una seria limitación de un derecho esencial para la clase obrera y, además, una medida hostil contra el anarcosindicalismo. Largo Caballero ya había mostrado sus intenciones anteriormente cuando el 23 de julio declaró: “Introduciremos el arbitraje obligatorio. Las organizaciones obreras que no se sometan al mismo serán declaradas ilegales”.⁴⁴⁵ A pesar de todo, el intento de evitar una oleada de huelgas obreras fracasó.

La proclamación de la República activó un amplio movimiento por hacer realidad los frutos de esa victoria, iniciando el desquite contra la patronal y los propietarios de tierras. La agitación obrera en favor de la jornada de 8 horas, el aumento de los salarios, el subsidio de paro y la reforma agraria aumentó formidablemente. El Primero de Mayo de 1931 fue testigo de esta nueva correlación de fuerzas: en Madrid, más de 100.000 personas desfilaron

⁴⁴⁵ Felix Morrow, *op. cit.*, p. 26.

encabezadas por los ministros y dirigentes socialistas. En tan sólo unas semanas, antes incluso de las elecciones de junio, las movilizaciones adquirieron una gran dimensión. Los pescadores de Pasajes (Guipúzcoa) protagonizaron a finales de mayo la primera gran huelga contra el Gobierno, y se les respondió a tiro limpio: ocho obreros fueron muertos por la Guardia Civil en el barrio de Ategorrieta. Posteriormente el turno le tocó a los mineros asturianos, que pararon el 1 de junio; el 17 del mismo mes fueron los trabajadores de Girona los que decretaron la huelga general; el 28, la huelga estalló en Málaga por la muerte de un trabajador, que se extendió a Granada, donde se mantuvo hasta el 3 de julio. “En esos escasos meses —señala Julián Casanova— hubo abundantes muestras de la forma en que iban a tratarse los problemas de orden en la República (...) parece fuera de duda que una buena parte de aquellos sucesos que acabaron teñidos en sangre eran simples manifestaciones y protestas colectivas a las que siempre se respondía con armas de fuego. La intimidación y la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales se erigieron en norma”.⁴⁴⁶

Uno de los grandes hitos de la lucha obrera de aquel período, habría cientos de ellos en sólo dos años, lo protagonizaron los trabajadores de la Telefónica, que el 6 de julio iniciaron una gran huelga que se prolongó varios meses.⁴⁴⁷ A principios de 1931, la CNT había aumentado notablemente sus efectivos entre la plantilla —y sufrido las consecuencias de ello con el despido de numerosos afiliados—. Prevista en principio para el 4 de julio, la huelga se declaró finalmente dos días después y para todo el Estado, tras el fracaso de una mediación de última hora del ministro de Comunicaciones, Martínez Barrio, del Partido Radical. El pliego de reivindicaciones incluía mejoras salariales, en los contratos y las jubilaciones, reducción de las horas de trabajo, readmisión de los despedidos por motivos sindicales y otras demandas. El seguimiento fue masivo: de los 7.000 empleados de la plantilla, secundaron la huelga 6.200, y fue en Barcelona, Sevilla, Madrid y Zaragoza donde tuvo mayor incidencia.

Si el gobierno hubiera procedido a la nacionalización de la Telefónica, habría contado con el apoyo inequívoco de la plantilla y del movimiento obrero. Pero la política de la conjunción era hostil a semejante planteamiento: si no quería las expropiaciones ni nacionalizaciones para el capital español, mucho menos para el norteamericano. La decisión de proteger los intereses del capital estadounidense motivo una dura reacción contra la huelga, pero no fue la única razón. El gobierno, y en eso estaban de acuerdo plenamente tanto republicanos como socialistas, querían impedir a toda costa el avance de la CNT. Los dirigentes socialistas llenaron de calumnias a los huelguistas, Largo Caballero incluso los acusó de querer impedir la celebración de las elecciones a Cortes constituyentes. Con apoyo de la empresa y de unos cuantos esquirolas, se intentó crear un sindicato amarillo que pidió el ingreso en la UGT. Durante el transcurso de la huelga, la dirección de la UGT azuzó el esquirolaje, saboteando en numerosas ocasiones las acciones decididas por los trabajadores. Pero el ambiente de apoyo a la huelga era tal, que no pudieron impedir que diferentes sindicatos ugetistas la apoyaran y enviaran dinero a la caja de resistencia. Desde el gobierno, la represión desatada para doblegar a los trabajadores no se contuvo. El ministro de la Gobernación y antiguo monárquico, Miguel Maura, prometió colocar una pareja de la Guardia Civil en cada poste telefónico. La huelga fue derrotada después de varios meses, y más de 2.000 obreros fueron detenidos a lo largo del conflicto.

⁴⁴⁶ Julián Casanova, *op. cit.*, p. 17.

⁴⁴⁷ Durante la Dictadura de Primo de Rivera, los servicios telefónicos fueron entregados a una empresa norteamericana, la American Telephone Company, sin plazo de reversión, con exención de impuestos y condiciones leoninas para el caso de rescate por el Estado. El contrato de concesión fue juzgado en sí como un abuso de poder. El 25 de abril de 1930, Indalecio Prieto pronunció una conferencia en el Ateneo de Madrid y prometió en aquella ocasión que la futura república negaría validez al contrato. Llegó a declarar que la situación en la Compañía Telefónica era la de una colonia de EEUU.

El desprecio de los ministros republicanos por los trabajadores estaba fuera de toda discusión. Azaña declaró su desdén hacia los huelguistas y los militantes de la CNT en decenas de discursos. Maura no era menos cristalino: “Qué concepto de la autoridad y del mando podrían tener unos sujetos que desde que nacieron no habían visto ni oído otra cosa que revueltas, conspiraciones, cuarteladas, huelgas motines; y respirado odio contra la fuerza pública, contra las autoridades y contra todo lo constituido?”⁴⁴⁸ El divorcio entre el gobierno y su base social se ampliaba cada día que pasaba, y no se trataba de una desencuentro pasajero. La utilización sistemática de la Guardia Civil y la violencia policial radicalizó el movimiento.

El 18 de julio, un obrero sevillano de la empresa Osborne que participaba en una huelga fue asesinado por un esquirol. Miles de trabajadores asistieron a su entierro dos días después, cuando la huelga de Telefónica estaba en pleno apogeo. La Guardia Civil se empleó con contundencia para reprimir la protesta, que acabó con cuatro trabajadores y tres guardias civiles muertos. El día 21, la huelga general se extendió por toda la ciudad de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas, La Campana, Coria del Río y otras localidades jornaleras. El gobierno republicano-socialista reaccionó brutalmente: el día 22 declaró el estado de guerra y, en aplicación de la ley de Fugas, cuatro obreros comunistas que eran conducidos al penal de Cádiz fueron asesinados en el sevillano parque de María Luisa. Los enfrentamientos volvieron a estallar, pero en lugar de retroceder, el gobierno autorizó al ejército a utilizar la artillería, causando varios muertos y centenares de detenidos. Todos los dirigentes republicanos, desde los conservadores hasta los más “progresistas”, se comprometieron con la represión. Companys, dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña, declaró: “Reconozco que cuando surge el desorden en la calle, la autoridad tiene que restablecer el orden como sea”. Por su parte, el gobernador civil de Sevilla envió un informe reservado al Gobierno que concluía de manera categórica: “Estamos en plena guerra civil, amparándose el enemigo, que cuenta con jefes, pistoleros y mercenarios, planes de lucha, táctica propia y unidad de acción, en los derechos y libertades existentes para destruirlos por la violencia”.⁴⁴⁹

La deriva represiva del gobierno de conjunción era el resultado inevitable de sus posiciones políticas y su negativa a depurar el aparato del Estado. En palabras de Julián Casanova: “Utilizaron los mismos mecanismos de represión que los de la Monarquía y no rompieron ‘la relación directa existente entre la militarización del orden público y politización de sectores militares’. El poder militar siguió ocupando una buena parte de los órganos de administración civil del Estado, desde las jefaturas de policía, Guardia Civil y de Asalto, hasta la Dirección General de Seguridad, pasando incluso por algunos gobiernos civiles. Sanjurjo, Mola, Cabanellas, Muñoz Grandes, Queipo de Llano o Franco, protagonistas del golpe de Estado de 1936, constituyen buenas muestras de esa conexión en los años treinta, como lo habían sido Pavía y Martínez Campos en 1873. La subordinación y entrega del orden público al poder militar comenzó desde la misma proclamación de la República. El 16 de abril llegaba Cabanellas a Sevilla para ponerse al mando de la Capitanía General de la 2ª Región Militar y declaró el estado de guerra. Mantenido inicialmente durante casi dos meses, sirvió para clausurar todos los centros obreros de la CNT, dirigidos, según declaraba el general en un Bando del 22 de mayo, ‘por una minoría de audaces e indocumentados, muchos de ellos antiguos pistoleros, profesionales de la revuelta y del desorden, que en la época de dictadura fueron modelo de mansedumbre y contención’ (...) Ese tono despreciativo y amenazante con los sindicalistas y socialistas era muy típico de los militares encargados de dirigir la represión de los conflictos sociales”.⁴⁵⁰

⁴⁴⁸ Miguel Maura, *op. cit.*, p. 267.

⁴⁴⁹ Tuñón de Lara, *La España del siglo XX*, vol. II, Ed. Laia, Barcelona, 1981, p. 320.

⁴⁵⁰ Julián Casanova, *op. cit.*, pp. 20-21.

Ante el incremento de los conflictos laborales, huelgas y ocupaciones de fincas, el 21 de octubre de 1931 el gobierno aprobó la inefable ley de Defensa de la República, que incluía la prohibición de difundir noticias que perturbaran el orden público y la buena reputación, denigrar las instituciones, rehusar “irracionalmente” trabajar y promover huelgas que no hubieran seguido el procedimiento del arbitraje. En la práctica se convirtió en un arma de choque contra las huelgas políticas y en un medio para suspender las garantías constitucionales concediendo plenos poderes al ministro de la Gobernación. Bajo el paraguas de esta ley, y alentados por el gobierno de conjunción, los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en el asesinato de decenas de campesinos y trabajadores. Posteriormente, esta ley sería utilizada con todo rigor por la derecha durante el bienio negro.

Un sentimiento general de rabia actuaba como combustible para mantener viva la acción. Los anarquistas impulsaron una oleada de huelgas generales en septiembre de 1931 que afectó a ciudades como Zaragoza, Granada, Santander o Salamanca.⁴⁵¹ En Barcelona, durante todo el mes de agosto, más de doscientos mil obreros del metal se declararon en huelga, y no fue la última: a finales del mismo mes, y tras la agitación que los presos políticos de la CNT llevaron a cabo, la huelga general se extendió por la ciudad catalana y fue reprimida brutalmente por el gobernador civil. En el conflicto, la Guardia Civil tomó la sede del Sindicato de la Construcción y asesinó a ocho trabajadores. Era el 4 de septiembre.

La movilización creciente de la clase obrera y la actitud hostil del gobierno de conjunción no sólo generó frustración, creó a su vez el fermento para que las organizaciones anarcosindicalistas, una vez más, encontraran una justificación para la táctica insurreccional. Sectores de la dirección cenetista, espoleada por los militantes de la FAI, promovieron levantamientos obreros y jornaleros en pueblos y pequeñas ciudades, la mayoría de las veces aislados y sin esperanza. Como era habitual en este tipo de movimientos, no sólo se prescindía de cualquier balance sobrio sobre la correlación de fuerzas, en general se despreciaba cualquier tipo de preparación previa. Olvidando las enseñanzas del pasado, los dirigentes anarquistas insistían en que la espontaneidad y “el espíritu revolucionario del pueblo” serían suficientes para el triunfo de la revolución.

La CNT, como organización de masas, tenía muchas debilidades, acentuadas por la visión organizativa de una dirección que, aunque se declaraba anarcosindicalista o anarquista y denunciaba activamente el burocratismo y el autoritarismo, no solía predicar con el ejemplo. Muchos activistas de la CNT, no sólo faístas doctrinarios, reprochaban a estos líderes su gusto por esgrimir los principios libertarios en grandes celebraciones y en los manifiestos de aniversario, cuando en la práctica vaciaban la acción sindical de cualquier perspectiva revolucionaria. Los dirigentes acusados, por su parte, se blindaban en el aventurerismo y la falta de cualquier proporción en los golpes insurreccionales que sus críticos alentaban, y que acababan en sonados fracasos. Y esta contradicción, en aquella atmósfera, daría lugar a la ruptura más importante del movimiento libertario: la formación del bloque treintista y la escisión de la CNT.

Dirigentes de la CNT como Peiró y Pestaña y numerosos secretarios de sindicatos de industria firmaron, el 30 de agosto de 1931, el llamado *manifiesto de los Treinta*. En el escrito exponían su interpretación del momento revolucionario proponiendo una alternativa al “concepto simplista, clásico y un tanto peliculero, de la revolución”, que se había asentado en

⁴⁵¹ Muchas de estas huelgas buscaban imponer el reconocimiento de los sindicatos cenetistas y el derecho de huelga al margen de la restrictiva legislación republicana. Azaña, apunta en sus memorias el 26 de septiembre de 1931: “Los sindicatos de la CNT vienen negándose a cumplir en Cataluña la legislación social. No acatan los Comités Paritarios ni aceptan la inspección de trabajo. En el Consejo de Ministros hemos tenido bastantes dificultades por este motivo, y Largo Caballero ha pugnado mucho por no ceder a las pretensiones de los catalanes y por someter a los indisciplinados sindicalistas a la acción de los órganos del ministerio de Trabajo”. Citado en Julián Casanova, *op. cit.*, p. 51).

“determinados núcleos de militantes”.⁴⁵² La pugna con la FAI fue tremenda y, en palabras del dirigente de la AIT Schapiro, concluyó con la imposición de quienes “quisieron hacer la revolución social sin interesarse lo más mínimo por ver si las condiciones eran o no, propicias, y sobre todo sin tomar en consideración (...) los intereses de la Confederación Nacional del Trabajo”. ¿Por qué la FAI logró tanta notoriedad en las filas de la CNT? Para responder a este interrogante es mejor huir de explicaciones simplistas y esquemáticas. La vuelta a los viejos principios bakuninistas en la dirección anarcosindicalista no sólo provenía de los avances que la FAI había logrado en ella, tenía mucho que ver con la situación objetiva y la marea de radicalización y desesperación que prendió en sectores de la clase obrera. En la fuerza de atracción de los planteamientos faístas y su creciente predominio en la CNT desde mediados de 1931 pesaron mucho la actuación del gobierno, impotente a la hora de satisfacer las demandas más elementales de su base social, pero dispuesta siempre a emplear la violencia para reprimirlas.⁴⁵³

La polarización creciente, la dureza de los enfrentamientos y la febril actividad de los comités de apoyo a los militantes cenetistas que llenaban las prisiones segaron la hierba bajo los pies de los dirigentes sindicalistas más moderados de la CNT, que habían mantenido, en buena medida, una actitud contemporizadora con el gobierno republicano. Todo ello dio una oportunidad a los militantes faístas.⁴⁵⁴ En palabras de Orobón Fernández, uno de los más

⁴⁵² *Ibid.*, p. 87.

⁴⁵³ La salida represiva para resolver los conflictos laborales fue la tónica predominante en la reacción del gobierno. De hecho, no sólo se trataba de enfrentar directamente los conflictos una vez que estallaban, sino intervenir policialmente para mandar a prisión a los dirigentes. Casanova señala al respecto: “El 21 de enero de 1932, Casares Quiroga, que había sustituido a Maura como ministro de Gobernación en la crisis de mediados de octubre de 1931, solicitaba a los gobernadores de ocho provincias, Valencia, Zaragoza y seis andaluzas, ‘me informen de las personas más extremistas y peligrosas que se encuentran por esas provincias, expresándome sus nombres y el concepto por el cual pueden producir perturbaciones del orden público a fin de aplicar si fuera posible la Ley de Defensa de la república’”. Julián Casanova, *op. cit.*, p. 55.

La legislación antihuelga volvió a sufrir otra vuelta de tuerca con la aprobación de la ley de Asociaciones Profesionales, del 8 de abril de 1932, que fue denunciada por la CNT como una imposición arbitraria de intervención gubernamental en los conflictos entre el capital y el trabajo, con el único fin de negar el derecho de huelga y la posibilidad de emplear la acción directa.

⁴⁵⁴ Juan Gómez Casas escribió la monografía más completa sobre la Federación Anarquista Ibérica disponible hasta el momento. Respecto a la fuerza de la FAI en las fechas de la ruptura con los treintistas, Gómez Casas recurre a las cifras sobre el Pleno peninsular de octubre de 1933 proporcionadas por Balcells: 569 grupos que encuadraban a 4.839 miembros aunque se recibió la adhesión escrita de otros 632 grupos con 5.334 afiliados más. “Total —señala Juan Gómez Casas— 10.173 adherentes en 1933, que acaso fueran menos en 1931 y 1932, fecha del fenómeno escisionista. Si se tiene en cuenta que la masa confederal representada en el Congreso del Conservatorio [1931] era de más de medio millón de afiliados, por la fecha del cisma, resulta que por cada afiliado a los grupos de la FAI había más de cincuenta afiliados a la CNT.” Juan Gómez Casas, *Historia de la FAI*, Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid, 2002, p. 150.

Por su parte Julián Casanova señala: “Si la FAI hizo valer su autoridad en la CNT está claro que no fue por su fuerza numérica y aún menos por su notoriedad como organización. Durante los primeros años republicanos y después le tocó vivir todavía tiempos peores, la FAI ni siquiera llegaba a ser una organización. Eran grupos, con pocas cosas en común, que pululaban alrededor de un Comité Peninsular, encabezado por Juan Manuel Molina, y que contaba, eso sí, con un núcleo notable de *periodistas* y aficionados a la escritura que ponían su pluma al servicio de la revolución (...) el semanario *Tierra y Libertad* los aglutinaba (...) Felipe Alaiz, A. G. Gilbert, José Espada, Dionisio Eroles, José Alberola, Miguel Jiménez, Severino Campos, José Bonet, Liberto Callejas e Isaac Puentes eran algunas de las firmas que más aparecían, a las que se añadieron muy pronto las de Jacinto Toryho, Jaime Balius (...) Tenían un destacado dirigente, Manuel Rivas, en el Comité Nacional de la CNT, a Arturo Perea en el Comité Regional de Cataluña, y a un grupo de activistas bien distribuidos por los sindicatos de la construcción más numerosos de la CNT: Cipriano Mera y Miguel González en Madrid; José González en Sevilla; Progreso Fernández en Valencia; y Joaquín Aznar y Joaquín Ascaso en Zaragoza (...) en el Pleno Peninsular de Regionales de la FAI celebrado a finales de octubre de 1933, las cifras de militancia eran las siguientes: 546 grupos, con 3.986 afiliados, a los que se sumaban 40 grupos y 1.000 afiliados de la regional Portuguesa y 27 grupos y 250 afiliados de la Federación Anarquista de Lengua Española en Francia. Catalunya, Andalucía y Aragón aportaban la mayoría de los afiliados”. Julián Casanova, *op. cit.*, pp. 87-92.

brillantes y perspicaces teóricos anarcosindicalistas: “El advenimiento de la República marcó por unos días la apoteosis más inefable y abigarrada de la confusión de clases (...) Pero pronto los fusiles de la Guardia Civil (...) vinieron a delimitar implacablemente las clases y recordar a todos que la República era un poder esencialmente capitalista”.⁴⁵⁵

Las filas de la FAI se fortalecieron con militantes provenientes de los comités de acción de la CNT y de los Comités Pro Presos. Grupos como el de *Los Solidarios*, integrado por Francisco Ascaso, Durruti, García Oliver, Gregorio Jover y Ricardo Sanz, entre otros, se unieron a la lucha contra los viejos dirigentes, jugando un papel destacado en las asambleas de los sindicatos de construcción de Barcelona. En marzo de 1932, las presiones llegaron al punto de provocar la dimisión de Ángel Pestaña como secretario general de la CNT y, un mes después, la de Emiliano Mira, secretario del Comité Regional de Catalunya. Ambos fueron sustituidos por los faístas Manuel Rivas y Alejandro G. Gilabert. Pero el desenlace llegaría en septiembre de ese año, cuando los sindicatos controlados por los treintistas fueron expulsados de la Confederación. La CNT perdió sindicatos en poblaciones donde se concentraba una gran parte de la clase obrera industrial de la provincia barcelonesa (Mataró, Manresa, Sabadell) y los treintistas organizaron la Federación Sindicalista Libertaria. La confianza de la dirección faísta en su estrategia provenía, qué duda cabe, de la fortaleza que mostraba la organización sindical: a finales de año la CNT llegaba a su punto álgido, con cerca de un millón doscientos mil afiliados.

La fractura interna del sindicato dio impulso al movimiento insurreccional. El 19 de enero de 1932, en la cuenca minera del Alto Llobregat (Berga, Sallent, Figols, Cardona y Suria), los anarcosindicalistas promovieron un levantamiento minero que culminó con la toma de los ayuntamientos y la proclamación del comunismo libertario. Las causas de la lucha no eran los panfletos incendiarios de unos cuantos iluminados, sino las penosas condiciones de trabajo, sin seguridad en los pozos, y la constante negativa a reconocer sus derechos sindicales, de reunión y expresión por parte de las empresas y las autoridades locales. El gobierno de coalición, tan moderado con los patronos, los terratenientes y los militares reaccionarios, no escamoteó en nada para derrotar a los mineros catalanes. El ministro de la Guerra, Manuel Azaña, comunicó a los mandos militares una orden tajante: “Aplastar el levantamiento”. La represión, utilizando el instrumento legal de la ley de Defensa de la República, se alzó con un botín importante: más de cien militantes anarcosindicalistas fueron deportados a Guinea, entre los que se encontraban Durruti y Ascaso. La tensión era tan fuerte que el gobierno decretó la prohibición de manifestaciones para el 1º de Mayo, cuando el año anterior se había dado un baño de multitudes en Madrid.

El ascenso huelguista de 1931-1932 se convirtió en el mejor termómetro de las profundas tensiones sociales que el gobierno de conjunción y la política de colaboración de clases provocaron y del progreso de la conciencia obrera, pero también hacía resaltar la debilidad e inmadurez de la dirección revolucionaria. Ésta se hallaba muy retrasada respecto a las tareas históricas del movimiento, y en eso consistía la principal debilidad de los trabajadores. La gran oleada de luchas, y el carácter semiespontáneo de muchas de ellas, representaba una etapa inevitable del proceso revolucionario, unía a las capas más avanzadas de la clase con las más atrasadas. Pero esto no era suficiente. La necesidad de que esas energías encontraran un canal adecuado para transformarse en organización consciente, en un programa acabado, en una táctica y una estrategia que preparase concienzudamente la toma del poder, era una cuestión decisiva. Meses antes, Trotsky ya había advertido contra los peligros que una situación semejante podría deparar a la revolución española: “Lo que en la etapa actual constituye la fuerza del movimiento —su carácter espontáneo— amenazaba con convertirse mañana en su debilidad (...) Si en el proceso de la lucha el proletariado no tuviera la

⁴⁵⁵ Intervención en el Ateneo de Madrid el 6 de abril de 1932.

sensación en los meses próximos de la claridad de los objetivos y de los métodos, de que sus filas se cohesionan y robustecen, se iniciaría inevitablemente en él la desmoralización. Los anchos sectores, impulsados por primera vez por el movimiento actual, caerían en la pasividad. En la vanguardia, a medida que se sintiera vacilar el terreno bajo los pies, empezarían a resucitar en general las tendencias aventureras de los grupos de acción. En este caso, ni los campesinos ni los elementos pobres de las ciudades hallarían una dirección con prestigio. Las esperanzas suscitadas se convertirían rápidamente en desengaño y exasperación. Se crearía en España una situación parecida hasta cierto punto a la de Italia después del otoño de 1920. Si la dictadura de Primo de Rivera no fue una dictadura fascista, sino una dictadura de camarillas militares típicamente española que se apoyaba en determinados sectores de las clases poseedoras, en caso de producirse las condiciones más arriba indicadas —pasividad y actitud expectativa del partido revolucionario y carácter espontáneo del movimiento de las masas—, en España podría aparecer un terreno propicio para un fascismo auténtico. La gran burguesía podría apoderarse de las masas pequeñoburguesas, sacadas de su equilibrio, decepcionadas y desesperadas, y dirigir su indignación contra el proletariado. Hoy nos hallamos aún lejos de esto. Pero no hay tiempo que perder”.⁴⁵⁶ En poco tiempo, las líneas generales de la perspectiva señalada por Trotsky dejarían de ser un pronóstico y se convertirían en realidad.

INDULGENCIA CON LOS GOLPISTAS, BRUTALIDAD CON LOS CAMPESINOS

Los capitalistas españoles, que habían asumido con mucha cautela el cambio de régimen, nunca confiaron en sus posibilidades. Mientras presionaban con fuerza a los gobernantes republicanos y socialistas, saboteaban la economía trabajando simultáneamente por una alternativa que sirviera directamente, y sin ninguna concesión, a sus intereses inmediatos.

El crack de 1929 y la contracción de los mercados europeos no tuvieron una repercusión automática, pero desde finales de 1932 el débil capitalismo español empezó a sentir los efectos la gran recesión mundial.⁴⁵⁷ La producción textil y siderúrgica, las materias primas y,

⁴⁵⁶ León Trotsky, *La revolución española y las tareas de los comunistas*, en *Escritos sobre la revolución española*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2010, p. 81.

⁴⁵⁷ Tras la Primera Guerra Mundial, EEUU concentraba las mayores reservas de oro del mundo, el dólar era la única moneda convertible en oro y el superávit acreedor de EEUU alcanzaba los 3.000 millones de dólares. La industria norteamericana registró un gigantesco avance gracias a la aparición de nuevos mercados para sus manufacturas (Europa y Latinoamérica). Paralelamente, la aplicación de nuevos inventos y tecnología militar a la producción civil favoreció el desarrollo de nuevas ramas de la producción (plástico, aeronáutica, telecomunicaciones...). Un proceso dinámico que se intensificó gracias a una nueva organización del trabajo fabril (fordismo y taylorismo), que impulsó un fuerte aumento de la productividad. No obstante, los primeros síntomas claros de desaceleración de la actividad productiva se manifestaron a finales de 1926 derivados del estancamiento europeo y de la saturación en los mercados mundiales de cereales y productos agrícolas. A partir de ahí se produjo un fenómeno típico de los períodos de ascenso: la sobreabundancia de capitales existentes, ya que no todos podían ser colocados de manera rentable en la economía productiva, empezó a pujar con fuerza en el mercado bursátil y la especulación inmobiliaria en busca de mayores beneficios. Entre 1926 y 1929 se agudizó la brecha entre la actividad económica real y la bolsa de valores, enmascarando la crisis de sobreproducción latente. Cuando el estallido se produjo, nada lo pudo detener.

El crack financiero de 1929 se trasladó inmediatamente al sector bancario, que se vio incapaz de recuperar los créditos multimillonarios que había concedido para financiar la compra de títulos y empresas que ya no valían nada. Entre 1929 y 1932, más de 7.000 entidades financieras entraron en bancarrota. El colapso del crédito aceleró la caída abrupta de la actividad productiva. Las tasas de inversión privada colapsaron, y el desempleo creció a niveles desconocidos en EEUU: de 1,5 millones de parados en 1929 se pasó a 4,5 millones en 1930, 7,9 en 1931, 11,9 en 1932 y 13 millones en 1933.

especialmente, la agricultura de exportación empezaron a decaer sensiblemente, sin que la devaluación de la peseta lo impidiera. El año 1933 fue crítico: el desempleo afectaba ya a más de medio millón de trabajadores y la reducción de los jornales hacía aún más difícil la vida de las familias obreras.

La República no había modificado las estructuras económicas del país. Por ejemplo, la reforma del sistema bancario, planteada por el ministro socialista Indalecio Prieto en 1931, no pasó de ser un intento superficial y sin ninguna trascendencia. En todo caso, el Banco de España seguía contando entre sus consejeros con lo más granado de la aristocracia financiera y terrateniente del país. La banca seguía controlando la parte del león de la producción industrial. “Hablar de la banca supone hablar de las grandes empresas, ya que sería enojosa repetición la de reiterar los estrechos vínculos entre una y otra. Una simple ojeada a las listas nominales de los consejos de administración de los bancos y de la casi totalidad de empresas dotadas de fuerte capital puede sacar de dudas a aquel que todavía las tuviere. Esta concentración del poder bancario y empresarial en un núcleo muy reducido de personas, fenómeno paralelo al ya secular de la propiedad agraria (y entrelazado con éste en un buen número de casos), ha planteado en nuestra patria el problema económico, sociológico y político de la oligarquía, de las ‘grandes familias’, con una tendencia cada vez más monopolista, al que hemos hecho referencia repetidas veces”.⁴⁵⁸

En efecto, las grandes palancas del poder económico permanecieron inalterables en el primer bienio reformista y pronto se puso en evidencia el sabotaje de los empresarios: “La contracción de la Formación Bruta de Capital Fijo durante el primer bienio republicano hay que imputarla por entero a la defeción de la inversión privada, a la oligarquía financiera que recelaba de la República y que durante los primeros meses del nuevo régimen llevó a cabo una cuantiosa fuga de capitales”.⁴⁵⁹ Si se toma como índice 100 en 1930, la importación de maquinaria descendió al 55 en 1931, al 27’9 en 1932 y al 25’3 en 1933. La tónica se mantuvo los dos años siguientes.

Muchos historiadores que han estudiado detalladamente la política económica del gobierno de coalición coinciden en resaltar que la mayoría de sus proyectos no pasaron de los buenos propósitos. Fue el caso de los intentos de establecer una contribución sobre la renta, que fracasaron sin pena ni gloria por la oposición de los capitalistas, a lo que se añadía la cruel paradoja de que los pagos por la deuda del Estado, que no dejaban de crecer, beneficiaban precisamente a la única clase que podía invertir en ella. El análisis de los principales epígrafes del gasto público que registraron los sucesivos presupuestos del Estado ilustra perfectamente el carácter de clase de la política económica del gobierno republicano-socialista. El presupuesto dedicado al servicio de la deuda pública, clases pasivas, fuerzas de seguridad (Gobernación) y Defensa representó, del total de gasto público, el 51’6% en 1931, el 47’4% en 1932 y el 52’8% en 1933.⁴⁶⁰

El boicot económico era una parte de la estrategia burguesa, pero no la única. La polarización política se manifestó rápidamente en el campo de la derecha con la formación de grupos

La crisis no se detuvo en las fronteras de EEUU y se trasladó a Europa, donde el sistema financiero quedó suspendido en el aire tras la repatriación de los capitales estadounidenses. Pero lo que tuvo mayores consecuencias a la hora de ampliar y profundizar el movimiento recesivo fue la adopción generalizada de medidas proteccionistas y devaluaciones competitivas entre las diferentes potencias para proteger sus mercados. Los efectos políticos de la depresión económica fueron tremendos. El orden capitalista se vio amenazado en todo el mundo. En Europa se produjo una completa ruptura del equilibrio político y se abrió una fase en la lucha de clases europea sólo comparable con el período revolucionario de 1917-1923.

⁴⁵⁸ Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 371.

⁴⁵⁹ Ramón Tamames, *La República. La era de Franco*, en *Historia de España Alfaguara*, t. VII, Alianza Editorial, Madrid, 1986, p. 120.

⁴⁶⁰ *Ibid.*, p. 123.

reaccionarios que apelaban abiertamente al golpe militar y la salida fascista. En octubre de 1931, los monárquicos alfonsinos, encabezados por Antonio Goicoechea, crearon Acción Nacional, más tarde Acción Popular, federación en la que participaban Herrera Oria y Gil Robles, y a la que se adhirieron monárquicos como Ramiro de Maeztu, Pedro Sainz Rodríguez o José María Pemán. Ramiro Ledesma Ramos, que dirigía la publicación *La conquista del Estado*, se uniría a las conservadoras y católicas Juntas Castellanas de Acción Hispánica para formar las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista). Paralelamente, José Antonio Primo de Rivera, Rafael Sánchez Mazas y Julio Ruiz de Alda fundarían el Movimiento Español Sindicalista, que en octubre de 1933 se convertiría en Falange Española.

La dinámica de los acontecimientos pronto se trasladó a los cuartos de banderas, donde los militares más derechistas, que habían conservado sus privilegios y posiciones, empezaron a conspirar abiertamente contra el régimen republicano. Las concesiones permanentes del gobierno de conjunción y de su ministro de la Guerra Manuel Azaña alimentaron la confianza de la casta de oficiales reaccionarios en las posibilidades de un golpe militar. “Los oficiales más decididos, que habían luchado y conspirado contra la Dictadura [de Primo de Rivera], carecían del fervor del ministro y, en consecuencia, de poder —escribe Gabriel Cardona—. En el verano [de 1931], la soberbia de Azaña y los temores de Miguel Maura hicieron que el general Sanjurjo detuviera al teniente coronel Camacho, al comandante Romero Basart y a varios oficiales republicanos, acusados injustamente de preparar la revolución social en la base de Tablada. Todos ellos eran antiguos luchadores por la democracia, mientras que Sanjurjo había colaborado activamente en el golpe de Estado de 1923 y ocupó ininterrumpidamente la jefatura de la Guardia Civil desde 1928 (...) Esta falta de calor de sus propios políticos dispersó progresivamente a los militares republicanos, acosados por las presiones internas del propio Ejército. El general Villegas, un antirrepublicano notorio, pasó a mandar las tropas de Madrid, y el capitán Gallego, un republicano, fue detenido mientras custodiaba un polvorín, acusado de comunista. Como siempre, todo era una falacia y fue puesto en libertad por falta de pruebas. Azaña se enteró del asunto por la prensa, pero no hizo nada por enmendar aquella y sucesivas sevicias que segaban la hierba bajo sus pies”.⁴⁶¹

Desde los primeros meses de 1932, un amplio sector de militares, encabezados por los generales Ponte y Orgaz y respaldados por plutócratas como José Luis Oriol y el conde de Vallengano, planeaban un golpe militar, al que se sumó el general Sanjurjo, ex director de la Guardia Civil y en ese momento jefe del cuerpo de Carabineros. Muchos de los protagonistas activos del levantamiento militar del 18 de julio de 1936 participaron en esa conspiración: el general Goded, el coronel Varela... Asimismo, significados representantes del capital vasco con apellidos señeros, como Urquijo, Zubiría, Goicoechea, Lequerica..., prestaron apoyo económico y logístico a los golpistas. “En el aparato del Estado no faltaban las colaboraciones, cosa explicable dado que la República, excepción hecha de la poda de alguna que otra cabeza visible, seguía utilizando los engranajes del Estado monárquico: así, colaboraban en la conspiración varios funcionarios del gabinete telefónico-telegráfico de la Dirección General de Seguridad”.⁴⁶² Era, pues, una trama apoyada por un amplio sector de la oligarquía capitalista, la aristocracia, los terratenientes, la cúpula militar y el aparato del Estado.

Los puntos de apoyo para el golpe se extendían a Pamplona, Madrid, Málaga, Cádiz y Sevilla. En la noche del 9 de agosto, y con el gobierno al corriente de la conjura, los golpistas intentaron apoderarse en Madrid del Palacio de Comunicaciones y el Ministerio de la Guerra. Fracasaron después de dos horas de enfrentamientos con las fuerzas militares leales. Pero no

⁴⁶¹ Gabriel Cardona, *op. cit.*, p. 55.

⁴⁶² Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 338.

ocurrió lo mismo en Sevilla, donde en la mañana del 10 de agosto, el general Sanjurjo sublevó a toda la guarnición militar, ocupando los lugares estratégicos de la ciudad y deteniendo al gobernador civil. Fue la reacción masiva de la clase trabajadora sevillana, que declaró la huelga general, la que acabó con el golpe militar. En la acción se destacaron los militantes cenetistas y comunistas, que organizaron una agitación ejemplar y que con su decisión frustraron lo que se hubiera convertido en una auténtica carnicería.

La sublevación monárquico-militarista de Sanjurjo pretendía acabar con el gobierno y establecer una nueva dictadura en defensa de los intereses de la oligarquía. La excusa utilizada fue impedir la aprobación del proyecto de ley del estatuto catalán y evitar la sanción parlamentaria de la ley de Reforma Agraria. La actitud del gobierno hacia los golpistas fue toda una declaración de principios. Aunque Sanjurjo fue condenado a muerte, posteriormente fue indultado con el voto favorable de los ministros socialistas. Muchos de los condenados pudieron, más tarde, regresar a sus puestos tras la amnistía que se les concedió durante el bienio negro. La actitud permisiva del gobierno contra aquellos que habían intentado acabar con el orden constitucional contrastaba demasiado con la intransigencia brutal que manifestaba contra los trabajadores.

El desgaste de la conjunción, prisionera de una política que se deslizaba cada vez más a la derecha, se acentuó tras los nuevos capítulos represivos contra el movimiento obrero. Siguiendo con su política insurreccional, los círculos dirigentes de la FAI y CNT promovieron nuevos levantamientos en enero de 1933, que fracasaron a consecuencia de su aislamiento y de la represión gubernamental. Como un año antes, los enfrentamientos salpicaron toda la península. Los anarcosindicalistas organizaron la toma efímera de ayuntamientos, desde los que proclamaban el comunismo libertario. En numerosas localidades del campo andaluz se produjeron auténticos levantamientos (Jerez de la Frontera, Utrera, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada...). Pero fue en Casas Viejas, una pequeña localidad gaditana cercana a Medina Sidonia,⁴⁶³ donde la actuación represiva de la Guardia Civil adquirió unos trazos de crueldad inhumana.

Casas Viejas contaba con seis mil hectáreas de tierra cultivable, pero tan sólo dos mil estaban productivas. Mientras tanto, más de quinientos trabajadores agrícolas padecían un desempleo crónico. El 11 y 12 de enero, los campesinos, siguiendo las directrices de la CNT de Jerez, declararon el “comunismo libertario” en la localidad y cercaron el cuartel de la Guardia Civil. En los enfrentamientos, varios guardias perdieron la vida. Para acabar con el levantamiento, el gobierno envió una columna de guardias que ocupó todas las salidas de la población, con órdenes directas del ministro del Interior, Casares Quiroga, de “no tomar prisioneros”. El teniente al mando, Fernández Artal, comenzó la caza de los rebeldes. Cogieron a dos y los torturaron hasta que señalaron la casa de la familia de Francisco Cruz Gutiérrez, apodado *Seisdedos*, un carbonero de 72 años, afiliado a la CNT que se atrincheró con sus hijos, nietos y dos vecinos. La resistencia de los encerrados se prolongó durante toda la noche a pesar del brutal asedio de los guardias civiles, reforzados por cuarenta guardias de asalto al mando del

⁴⁶³ “Medina Sidonia es la sede de un magnífico señor que ha dilatado su jardín, su alcoba, sus cristales y porcelanas por una extensión de tres kilómetros cuadrados (...) En Casas Viejas, como en el resto de Andalucía, hablan recio los que comen. Hablan quedo los hambrientos. Así es de terriblemente simple la cuestión. Pero observemos también que el hambriento de Andalucía no es como el de Castilla o el del Norte (...) Hay un hambre que no es ya humana, ni ciudadana. Un hambre cetrina y rencorosa, de perro vagabundo (...) Claro es que el hambre enloquece. Hay centenares de hombres en ese y en otros pueblos de la provincia locos de hambre. Y algunas familias, en cada uno de ellos, locas de miedo. Entretanto, la Guardia Civil, mirando con un ojo a los propietarios y con otro a los campesinos, ejerce un protectorado civil o una dictadura despótica, según los casos (...) Es muy elocuente que 500 obreros hablen de la casa-cuartel como de un lugar donde hay pan y vestidos abundantes. Donde entra cada mes una ‘fortuna’ para pagar a los guardias. En líneas generales, el aspecto de la vida en Casas Viejas es ése. ¿Monarquía? ¿República? Hambre por un lado, miedo y desprecio por otro”. Ramón J. Sender, *op. cit.*, pp. 15, 25-26.

capitán Rojas. Al amanecer, las fuerzas del “orden” incendiaron la cabaña: *Seisdedos* y otros cinco ocupantes murieron abrasados, mientras otros dos encerrados fueron ametrallados sin contemplaciones cuando intentaban huir. Pero la acción punitiva no terminó ahí. Horas después de quemar la casa de *Seisdedos*, el capitán Rojas emprendió una caza del hombre que acabó con la vida de doce campesinos, once de ellos fusilados en las tapias del pueblo

Los sucesos de Casas Viejas minaron enormemente la credibilidad del gobierno republicano-socialista. En un primer momento, Azaña se negó a investigar los crímenes y retrasó las interpellaciones en las Cortes, pero la presión de la opinión pública y la demagógica campaña de la derecha le obligaron a aceptar el debate. En él, Azaña dejó al descubierto las motivaciones políticas que le guiaban, afirmando sin empacho que “no se encontrará un atisbo de responsabilidad para el Gobierno (...) En Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos, sino lo que tenía que ocurrir. Se produce un alzamiento en Casas Viejas, con el emblema que han llevado al cerebro de la clase baja trabajadora española de los pueblos sin instrucción y sin trabajo, con el emblema del comunismo libertario, y se levantan unas docenas de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agraden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil ¿Qué iba a hacer el gobierno?”.⁴⁶⁴ Los parlamentarios monárquicos y católicos derramaron lágrimas de cocodrilo por los campesinos masacrados y se quedaron afónicos de tanto denunciar las crueldades del gobierno. Al final, los diputados que sostenían la conjunción, incluidos los socialistas, salvaron la cara de Azaña y Quiroga al aprobar una moción de confianza a su favor. Los crímenes quedaron impunes.

El horror por los campesinos asesinados y la saña empleada contra ellos por las fuerzas enviadas por el gobierno dejó las heridas muy abiertas. Ramón J. Sender lo consideró una completa bancarrota política de la República: “He aquí en pocas líneas, la conducta de la República *socialista* y republicana ante los hechos: el Parlamento apoya y justifica al Gobierno. El Gobierno disculpa, rehabilita y defiende a las fuerzas represoras —Guardia Civil y de Asalto—. Estas han asesinado a los campesinos hambrientos de Casas Viejas, defendiendo a los terratenientes feudales, monárquicos. La fuerza pública, el Gobierno, el Parlamento y la República socialista-republicana asesinan a los campesinos de Casas Viejas y confirman su sumisión a los feudales terratenientes andaluces, que hasta producirse la tragedia eran monárquicos y combatieron a la República y que ahora, agradecidos por la sangrienta represión, ingresan en los partidos republicanos. Todo el aparato de la falsa democracia republicana se ha puesto, en el Parlamento, en el Gobierno Civil de Cádiz y en el pueblecito ensangrentado de Casas Viejas, al servicio del señor feudal, latifundista, católico y monárquico”.⁴⁶⁵

HACIA LOS COMBATES DECISIVOS

Las llamadas a la insurrección, con su rosario de huelgas, produjeron efectos muy nocivos sobre la vanguardia campesina y obrera, especialmente entre las bases de la CNT. Aunque 1933 marcó un punto álgido en la curva huelguista,⁴⁶⁶ la gran mayoría de las luchas acabaron

⁴⁶⁴ Discurso parlamentario, 2 de febrero de 1932.

⁴⁶⁵ *Ibid.*, p. 105.

⁴⁶⁶ Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, en 1933 se produjeron 1.127 huelgas de carácter laboral, la cumbre de la conflictividad social de todo el período precedente. Más de 800.000 trabajadores se vieron afectados, sin que se computase en esta cifra las huelgas políticas, con un balance de 14,5 millones de jornadas perdidas.

en derrotas traumáticas, y los anarcosindicalistas salieron muy afectados, víctimas de sus propios métodos. La fuerza de la CNT se resquebrajó, perdió numerosos afiliados y base de apoyo entre la clase obrera. Las cárceles rebosaban de obreros y campesinos, de cuadros, activistas y militantes cenetistas, mientras cientos de locales sindicales eran clausurados. El reflujó posterior, aunque muy temporal y superficial, asfaltó el terreno para la audacia de la reacción y el crecimiento de la derecha, que inmediatamente movió ficha contra el gobierno de Azaña.

El balance de dos años de debates parlamentarios mostraba a las claras la equivocación de aquellos que pensaban que sólo con discursos y retórica se podía transformar la realidad. “Era un parlamento típico de figurantes charlatanes —escribió Munis— sin brizna de energía revolucionaria, de los muchos que desde mediados del siglo pasado han destripado revoluciones por el mundo. Federico Engels se burlaba de la timidez y la incapacidad de los parlamentarios de Francfort durante la revolución alemana de 1848. Al lado de nuestros constituyentes, eran casi unos jacobinos. Miseria ideológica, huera pedantería discurseril, ignorancia, condescendencia para con la reacción, brutalidad y engaño para con el proletariado y los campesinos, reaccionario respeto de todos los intereses creados, he ahí la silueta de las Cortes Constituyentes. Desde cualquier ángulo que se las juzgue, se sitúan más cerca de los estamentos isabelinos de 1834, que de un parlamento revolucionario. Como los estamentos, las Constituyentes anunciaron a bombo y platillo la solución de todos los problemas; imitándoles, ni siquiera arañaron la estructura social del país, dejando los problemas básicos de la revolución democrática en el estado en que los encontraron”.⁴⁶⁷ Es un juicio duro, pero sin duda muy cercano a la realidad de los hechos.

El desgaste del gobierno era fortísimo. Las contradicciones en la coalición republicano-socialista se agravaron, con una parte de los diputados republicanos del partido de Azaña girando a la derecha descaradamente, mientras que Lerroux y su partido se lanzaron en tromba reclamando insistentemente la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Por si fuera poco, el 23 de abril de 1933 se renovaron cerca de 20.000 concejales, y los resultados fueron un nuevo golpe para el gobierno. Los partidos de la coalición gubernamental fueron los más votados, pero sólo recibieron un tercio del total de los votos emitidos. La minoría agraria de derechas, que en las elecciones de junio de 1931 había obtenido un 5% de los escaños de las Cortes, en esta ocasión logró el 20% de los concejales.

La crisis gubernamental dio fuerza a la derecha republicana que participaba en el gobierno y sirvió para que Alcalá Zamora destituyera al gobierno Azaña el 8 de junio. La lucha de clases y la actitud beligerante de la burguesía contra las tímidas reformas emprendidas decidieron el resultado. Aunque cuatro días después se formó un nuevo gabinete, presidido también por Azaña, las presiones inclinaron la balanza más a la derecha. La descomposición política de la colación gubernamental no hizo más que acelerarse en los meses siguientes y alcanzó su apogeo en septiembre, después de los reveses que el gobierno sufrió en la elección de los quince miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales. Individuos como Juan March, que estaba encarcelado acusado de apropiación ilegal de fondos del Estado durante la dictadura de Primo de Rivera, o José Calvo Sotelo, el más próximo colaborador del dictador, fueron elegidos, dejando en claro que el aparato del Estado seguía mayoritariamente en manos de los elementos reaccionarios. Aunque Azaña ganó un voto de confianza (146 contra 3), en la sesión sólo participaron una tercera parte de los diputados.

Carcomida la fortaleza, Alcalá Zamora exigió, el 8 de septiembre, la dimisión del gobierno. Azaña, cada vez más desautorizado por sus partidarios, dio libertad a sus diputados para colaborar con el Partido Radical. Cinco días después, los partidos republicanos aceptaron la participación en un gobierno de transición, encabezado por el lugarteniente de Lerroux,

⁴⁶⁷ Grandizo Munis, *op. cit.*, p. 106.

Martínez Barrio, con el fin de preparar nuevas elecciones generales. Los republicanos sellaron el abandono del PSOE como aliado gubernamental.

Cuando el Presidente Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre, la reacción de derechas había reconquistado una parte considerable del terreno perdido el 14 de abril. En el transcurso de estos dos años, la burguesía había sacado conclusiones bastante acabadas de su experiencia; se convenció de que los líderes republicanos de izquierdas eran poco fiables para enfrentarse a una clase obrera y jornalera emergente y con confianza en sus propias fuerzas y que la “democracia” no era el medio más idóneo para salvaguardar sus intereses. Una opinión reforzada por los acontecimientos dramáticos que estaban teniendo lugar en Europa, especialmente en Italia y Alemania.

Utilizando el sufragio universal y las elecciones cada cuatro años, apoyándose en la farsa de la “división de poderes” y sacando partido a la representación “obrera” en las instituciones, la democracia burguesa oculta el auténtico gobierno de la sociedad, que nadie elige, que nadie vota, pero que decide con mano de hierro sobre las vidas de millones de personas. Este gobierno no es otra cosa, en realidad, que la dictadura del capital financiero, de los consejos de administración de los grandes monopolios y la banca, que toleran las formas democráticas a condición de que el poder real quede en sus manos. Cuando las contradicciones insalvables del capitalismo empujan a la sociedad burguesa a crisis revolucionarias, entonces la política parlamentaria, los iconos democráticos, se convierten en un obstáculo para la clase capitalista. Tolerar sindicatos, partidos obreros, huelgas, manifestaciones... se vuelve una carga insoportable.

La crisis política y económica del capitalismo europeo en los años 30, pudrió las bases de la democracia parlamentaria y rompió el equilibrio de la sociedad, acelerando la salida fascista. “El régimen fascista —escribió Trotsky— ve llegar su turno porque los medios ‘normales’ militares y policiales de la dictadura burguesa, con su cobertura parlamentaria, no son suficientes para mantener a la sociedad en equilibrio. A través de los agentes del fascismo, el capital pone en movimiento a las masas de la pequeña burguesía irritada y a las bandas del lumpemproletariado, desclasadas y desmoralizadas, a todos esos innumerables seres humanos, a los que el capital financiero ha empujado a la rabia, a la desesperación. La burguesía exige al fascismo un trabajo completo: puesto que ha aceptado los métodos de la guerra civil, quiere lograr calma para varios años (...) la victoria del fascismo conduce a que el capital financiero coja directamente en sus tenazas de acero todos los órganos e instrumentos de dominación, dirección y de educación: el aparato del Estado con el ejército, los municipios, las escuelas, las universidades, la prensa, las organizaciones sindicales, las cooperativas (...) y demanda, sobre cualquier otra cosa, el aplastamiento de las organizaciones obreras”.⁴⁶⁸

La amenaza del fascismo, después de su triunfo en Italia en 1923, planeaba ahora sobre Alemania. La República de Weimar no había logrado evitar el desempleo de millones de trabajadores alemanes ni el empobrecimiento de una parte significativa de las capas medias. Esas masas pequeñoburguesas, que podían haber sido ganadas a la causa del proletariado si las organizaciones obreras hubiesen defendido un programa revolucionario, dieron un bandazo violento a la derecha. En una sociedad en descomposición, los nazis consiguieron aumentar considerablemente su influencia entre ellas y en las legiones del lumpemproletariado que poblaban las ciudades. En las elecciones de septiembre de 1930, el SPD obtuvo 8.577.700 votos; el Partido Comunista (KPD), 4.592.100; y el partido nazi 6.409.600. Si el KPD había incrementado sus votos en relación a las anteriores elecciones de 1928 en un 40%, los nazis lo habían hecho en un 700%. En 1932, los nazis obtuvieron

⁴⁶⁸ Trotsky, “¿Y ahora?”, en *La lucha contra el fascismo*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2004, p. 131.

11.737.000 votos, pero todavía entre el KPD y el SPD lo superaban, con más de 13 millones de votos. Estas cifras son el mejor testimonio de que el apoyo de millones en las urnas no vale de mucho si no se cuenta con una política revolucionaria.

En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller sin que tuviera que enfrentarse a una respuesta de envergadura por parte de la socialdemocracia o el KPD. Mientras que los primeros aceptaban la victoria de Hitler porque era *democrática* y advertían a sus militantes de abstenerse en participar en ninguna acción de protesta, los líderes estalinistas, rechazando reconocer la gravedad de la situación, se contentaron con plantear patéticamente que el triunfo de los nazis sería el preludio de la victoria comunista. No hubo ninguna respuesta armada del proletariado, a pesar de que el SPD y el KPD contaban con milicias que encuadraban a medio millón de obreros. Los dirigentes paralizaron políticamente al proletariado alemán, el más fuerte de Europa, y los nazis completaron el trabajo aplastando las organizaciones obreras, que fueron pulverizadas. En febrero de 1933, Hitler disolvió el Reichstag y el KPD fue ilegalizado y miles de sus militantes, encarcelados.

No fue la última victoria sobre el proletariado europeo. En Austria, el gobierno del socialcristiano Dollfuss (el modelo en el que se inspiraba Gil Robles), clausuró el parlamento en marzo de 1933 y gobernó durante más de un año con poderes especiales. Los trabajadores y militantes del Partido Socialdemócrata Austriaco (SPÖ) exigieron a la dirección que convocara una huelga general para frenar los ataques contra las libertades y derechos democráticos que se sucedían sin interrupción. Pero los dirigentes del SPÖ seguían una táctica de retirada permanente similar en lo fundamental a la política derrotista de la socialdemocracia germana. En abril se prohibieron las huelgas, en el verano fue ilegalizado el Partido Comunista de Austria (KPÖ), y la legislación contra la clase obrera se endureció aún más (por ejemplo se suprimió la ley sobre la jornada laboral y se recortó el subsidio de desempleo). La única reacción del SPÖ fue recurrir a los tribunales de justicia.

La derrota de los trabajadores alemanes y austríacos, como anteriormente sucedió con los italianos, era un recordatorio de que las organizaciones obreras, por poderosas que sean en afiliación, recursos, aparato, son completamente impotentes en los momentos críticos si abandonan una política de clase. En el caso de la revolución española, los líderes socialistas en el gobierno pudieron comprobar que sus esquemas doctrinarios, por más realistas que a ellos les resultasen, apenas se habían traducido en resultados prácticos, salvo el fortalecer a la derecha. Su alianza con los republicanos burgueses se resquebrajó, minada por las contradicciones políticas, con un saldo claro en su contra. La credibilidad del PSOE y de la UGT disminuía proporcionalmente al sentimiento de frustración que se extendía entre un amplio sector de su base.

A comienzos de 1933, la burguesía española había emprendido firmemente el camino de cohesionar sus fuerzas y pasar a la ofensiva, preparando las futuras batallas, las parlamentarias y las que se librarían en las calles, las más decisivas. Entre febrero y mayo de ese año se constituyó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA). Su líder, José María Gil Robles, encabezaba Acción Popular, la formación más importante de la coalición, a la que se sumaron otras organizaciones, como Derecha Regional Valenciana, Bloque Agrario de Valencia, Asociación Católica Nacional de Propagandistas o la Confederación Nacional Católica Agraria. La CEDA contaba con más de 700.000 militantes y una fuerte sección de choque en torno a sus juventudes (las JAP, Juventudes de Acción Popular). Su base social movilizaba a los medianos y pequeños propietarios de Castilla la Vieja, León, Valencia, Murcia, y otras zonas del Estado, y por supuesto, a la pequeña burguesía de las ciudades influida por el clero. No era ningún secreto que la financiación y el respaldo político de la CEDA provenían de los industriales, banqueros y grandes terratenientes del país.

Las intenciones de la coalición liderada por Gil Robles eran transparentes, aunque cierta historiografía haya intentado lavar su imagen. El domingo 15 de octubre, en plena campaña electoral, Gil Robles protagonizó un mitin en el madrileño Monumental Cinema, que fue también transmitido por radio. Las palabras que dirigió a sus correligionarios, recogidas dos días más tarde por *El Debate*, diario católico y portavoz oficioso de la CEDA, dejan poco margen a la duda: “Había que dar estructura a las nuevas derechas españolas. Era necesario ir a la reconquista de España (...) Y a medida que se avanzaba, las avanzadas y los grupos de resistencias que se encontraban fueron agrupándose en una organización al mismo tiempo flexible y recia, y se constituyó la Confederación de Derechas Autónomas (...) Se ha hecho con propósito de englobar a todos con un espíritu generoso, sin ánimo de monopolio, con deseo de abrazar a los que vengan a luchar por las batallas por Dios y por la Patria. ¿Se ha hecho todo eso tan sólo para constituir un partido? El propósito era más amplio, más generoso, más comprensivo. Se quería dar a España una verdadera unidad, un nuevo espíritu, una política totalitaria (...) El elemento unitario para una política totalitaria lo encontramos en nuestra gloriosa tradición (...) Nosotros buscamos ese principio unitario y totalitario en el ideal cristiano de nuestra Patria (...) Vamos a ocuparnos del presente (...) Estamos en el momento electoral (...) Para mí sólo hay una táctica hoy: formar un frente antimarxista, y cuanto más amplio mejor. Es necesario, en el momento presente, derrotar implacablemente al socialismo [Muchos aplausos] (...) Hay que llamar a todas las fuerzas sociales y antirrevolucionarias, a todas las que vayan contra el materialismo y contra todos los errores que se cifran en una sola palabra: marxismo [Grandes aplausos. Una voz: ‘Y contra Macià’]. Yo centro mis ataques (...) en el socialismo, y de ahí los derivo a todos los elementos que con él han tenido contacto. De la división de España son en gran parte responsables los socialistas. Sin ellos no se hubiera podido aprobar el Estatuto [Aplausos]. Lo que ocurre es que centro mis ataques contra los socialistas porque han sido los únicos beneficiarios del más vergonzoso de los pactos, el de San Sebastián, en el que se aliaron el sectarismo, el separatismo y el socialismo (...) La gran necesidad del momento actual es la derrota del socialismo (...) Proyectemos ahora una mirada hacia el porvenir (...) Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, una Nación nueva; dejar la Patria depurada de masones, de judaizantes... [Grandes aplausos] (...) Hay que ir a un Estado nuevo y para ello se imponen deberes y sacrificios ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entretanto no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo [Aplausos]. Llegado el momento el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer [Aplausos] (...) Llamo, eso sí, a todos, cuanto mayor número mejor, para terminar esta primera tarea de frenar y liquidar de una vez la revolución (...) Y nada más (...) [Gran ovación. El público despide al orador con aclamaciones de entusiasmo]”.

En las páginas de *El Debate*, las simpatías hacia Hitler eran constantes, con alabanzas hacia la prohibición de las organizaciones obreras y la imposición de leyes de excepción laboral. Muchas voces han querido excluir a la CEDA de un supuesto catálogo de organizaciones fascistas “químicamente puras”. En este sentido, conviene distinguir que el fascismo nunca se presentó de una forma homogénea en sus fuentes doctrinarias, y aunque existían diferencias conceptuales destacables, por ejemplo entre el fascismo de Mussolini y el programa nazi de Hitler, las bases materiales y políticas de ambos coincidían plenamente. El fascismo alemán o italiano, utilizando los métodos de la guerra civil, arrasó las instituciones de la democracia parlamentaria, aniquiló las organizaciones obreras, suprimió la libertad de expresión, organización y manifestación, e impuso en las empresas un régimen de terror contra los trabajadores. La paz social, la caída absoluta de los salarios y la extensión de la jornada

laboral durante los gobiernos de Hitler y Mussolini permitieron a los capitalistas recuperar e incrementar espectacularmente sus beneficios. En ambos casos, transcurrido unos años en el poder, los regímenes fascistas fueron perdiendo una parte considerable de su base de masas y se transformaron en dictaduras bonapartistas sostenidas por la maquinaria militar y policial. Pero de esto nos ocuparemos en extenso en el segundo volumen.

La CEDA, como instrumento contrarrevolucionario de la burguesía, compartía muchos de sus objetivos con los fascistas y los nazis, pero adaptó su programa al acervo reaccionario de raíz hispana.⁴⁶⁹ La familia, la unidad sagrada de la patria y su pasado imperial, la lucha contra el marxismo, la defensa de la propiedad, el Estado corporativo... eran algunas de las consignas que compartían con los grupúsculos fascistas de la Falange y semejantes. Las fronteras entre ellos, de hecho, se desdibujaron con el estallido de la guerra civil: los militantes de la CEDA y de las JAP llenaron las columnas falangistas de la retaguardia dedicadas a labores de exterminio de militantes de izquierdas, y de cuadros dirigentes a la administración político-militar del nuevo Estado franquista.

Los resultados de las elecciones de noviembre de 1933 dieron la vuelta a la composición de las Cortes. El descontento y la enorme crítica de la clase obrera hacia la política gubernamental se hicieron visibles en las urnas, sobre todo entre el sector que había permanecido en la vanguardia de las luchas. La CNT, que no pudo impedir en 1931 que miles de sus afiliados votaran por las candidaturas republicano-socialistas, desarrolló en esta ocasión una intensa campaña de boicot que logró un amplio eco. La abstención fue del 32%, pero en la ciudad de Barcelona alcanzó el 40% y en Andalucía, el 45%. El PSOE retuvo una parte sustancial de los votos —en torno a 1.800.000, aproximadamente el 20% del censo electoral—, pero la ley electoral aprobada por el gobierno de conjunción, que favorecía a las agrupaciones y/o bloques electorales, castigó duramente a los socialistas, cuyos escaños se redujeron de 116 a 61, de un total de 471. El PCE consiguió en torno a 200.000 votos y un diputado; y Esquerra Republicana, cerca de 350.000 y 19 diputados. El desplome de los

⁴⁶⁹ “Hay similitudes asombrosas entre el apoyo social, los objetivos ideológicos y la crucial importancia dada a sus respectivas causas, de los fascistas [italianos] y de la CEDA, ambas organizaciones de bases agrarias. Se pueden establecer igualmente comparaciones válidas entre Renovación Española y la Asociación Nacionalista Italiana, tanto en sus relaciones con los grupos más populistas y radicales, la Falange y el fascismo, respectivamente, como en el papel desproporcionado que sus teóricos habían de tener más tarde en ambas dictaduras (...) A este respecto, la opinión de fascistas contemporáneos tanto italianos como españoles es significativa. Casi todos aceptaron que Renovación Española y la CEDA compartían las recetas económicas, sociales y políticas del fascismo. Creyeron que la derecha conservadora había intentado modernizarse al ‘fascistizar’ su retórica y métodos operativos. Según ellos, las diferencias se encontraban en el desprecio ‘elitista’ de los monárquicos de Renovación Española por la movilización masiva y en las lealtades vaticanistas de la CEDA (...) La actitud de Gil Robles era muy ambigua. Hizo una visita a Italia en enero de 1933, elogiaba los logros de Mussolini con frecuencia y permitió a su propio movimiento juvenil, la Juventud de Acción Popular, que se comportase como un partido fascista, con sus uniformes, sus grandes mítines y su adopción de consignas fascistas. Tenía reservas, sin embargo, acerca del panteísmo fascista. Aun así, la participación de Gil Robles en la campaña electoral de 1933, durante la cual hablaba de fundar un nuevo Estado y de purgar la patria de ‘masones judaizantes’, indujo a José Antonio Primo de Rivera a alabar sus principios fascistas y a aplaudir el ‘entusiasmo fascista’ de su estilo. Sin embargo, en el mismo debate parlamentario previo a la guerra durante el cual Calvo Sotelo se declaró fascista, Gil Robles expresó dudas sobre lo que él consideraba los elementos de socialismo de Estado del fascismo. Para el radical Ramiro Ledesma Ramos, fundador de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, se trataba de unos conservadores tradicionales que se ‘fascistizaban’, impregnando su retórica de elementos fascistas para engañar a las masas a fin de que les apoyaran (...) Deben tenerse en cuenta las características individuales de cada fascismo nacional. Estas se derivan en parte de las tradiciones específicas del país en materia de retórica patriótica y conservadora. No obstante, la característica esencial de un determinado movimiento fascista y de su subsiguiente régimen nacía de la naturaleza especial de la crisis que había de resolver (...) Consecuentemente, el análisis de cualquier alianza contrarrevolucionaria nacional debe basarse en el conocimiento de la naturaleza y el desarrollo del capitalismo correspondiente a que estaba vinculada”. Paul Preston, *La política de la venganza, El fascismo y el militarismo en la España del siglo XX*, Ediciones Península, 2004, pp. 48-51.

republicanos de izquierda fue espectacular: pasaron de 118 diputados a 19 (Acción Republicana de Azaña, 5; Radical-Socialistas de Gordón Ordax, 1; Radical-Socialistas independientes, 6; ORGA, 6; Republicanos Federales, 1). En la derecha, los radicales de Lerroux consiguieron 104 escaños y la CEDA, 115. Las organizaciones de derechas y las autodenominadas centristas obtuvieron aproximadamente 3.350.000 votos.⁴⁷⁰ De todas formas, en noviembre de 1933, un amplio sector de la burguesía española era consciente de que la entrada inmediata de la CEDA en el gobierno se entendería como una provocación hacia las organizaciones obreras. Consideraban más oportuno ganar tiempo para reforzar su control del aparato estatal y el parlamento. La CEDA, a pesar de sus magníficos resultados, se dispuso a gobernar a través de los radicales de Lerroux, dispuestos a llevar a cabo todas las medidas que Gil Robles les pidiera.

Los resultados electorales mostraban a las claras el giro a la derecha de un amplio sector de las capas medias. Ocurrió algo similar en 1923 con el triunfo del golpe de Primo de Rivera, pero, ese apoyo de la pequeña burguesía al dictador se disolvió en la gran crisis revolucionaria de 1929-1931. Si la conjunción hubiera desarrollado acciones audaces contra los grandes monopolios, la gran banca y los terratenientes, llevando a cabo reformas concretas y tangibles, no cabe duda de que la diferenciación política se habría manifestado en estos sectores. Sólo medidas de ese calado lograrían su neutralidad o, incluso, que se convirtieran en firmes aliadas de la política revolucionaria. Las vacilaciones y las continuas concesiones al gran capital por parte del gobierno de conjunción proporcionaron una enorme oportunidad a la derecha para reunificar a ese estrato en torno a su demagogia reaccionaria.⁴⁷¹

El fracaso electoral de los republicanos y socialistas coronó, en esta fase, la política de colaboración de clases. Los que siguieron manteniendo la fe en esa estrategia, como Indalecio Prieto, también lo reconocieron en aquel momento. Cuando el ex ministro de Hacienda socialista concedió una entrevista al diario francés *Le Petit Journal* al poco de fracasar la insurrección de octubre de 1934, no se mordió la lengua. Ante la pregunta del periodista: “¿Cómo explica usted el descontento en España y el éxito de Gil Robles en las elecciones?”, Prieto, llevado por la franqueza, respondió: “Precisamente, a la política derechista del régimen de izquierdas. Este gobierno, nacido con la Republica y creado por la Republica, se convirtió en el escudo de las fuerzas adversas a la Republica”.⁴⁷²

La política de colaboración con la burguesía republicana se convirtió en un completo fraude. Y aunque fue retomada por el estalinismo en su etapa frente populista, sólo volvió a probar su esterilidad para lograr las reformas que pregonaba. Como los dirigentes socialistas en 1931, los estalinistas, rebuscando en su imaginación, intentaron presentar como un hecho la existencia de una *burguesía nacional democrática* interesada en la modernización del país y contrapuesta a la oligarquía tradicional. Pero, por mucha imaginación que se tenga, un animal de esa naturaleza jamás hizo acto de presencia en la historia de nuestro país. El conjunto de la burguesía industrial, comercial o financiera, considerada como clase, no tenía intereses contrapuestos a los de los terratenientes, dado que el capitalista y el terrateniente eran, en la gran mayoría de los casos, el mismo individuo. El conde de Romanones, uno de los mayores

⁴⁷⁰ Debido a la ley electoral, las cifras oscilan. Estas están tomadas de Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 360.

⁴⁷¹ Trotsky dedicó una importante cantidad de trabajos al comportamiento y la psicología de las clases medias en este período histórico de revolución y contrarrevolución. En *Adónde va Francia* escribió: “La pequeña burguesía se distingue siempre por su dependencia económica y su heterogeneidad social. Su capa superior toca inmediatamente a la gran burguesía. Su capa inferior se mezcla con el proletariado y llega incluso al estado del lumpemproletariado. Conforme a su situación económica, la pequeña burguesía no puede tener una política independiente. Oscila siempre entre los capitalistas y los obreros. Su propia capa superior la empuja hacia la derecha; sus capas inferiores, oprimidas y explotadas, son capaces, en ciertas condiciones, de virar bruscamente a la izquierda”. *Adónde va Francia*, FUNDACIÓN FEDERICO ENGELS, Madrid, 2006, p. 23.

⁴⁷² Felix Morrow, *op. cit.*, p. 31.

terratenientes de España, con latifundios que se extendían por toda Castilla-La Mancha, era concesionario de la producción de mercurio, principal accionista de las minas del Rif, de las de Peñarroya, de los ferrocarriles... La concentración del capital era muy alta. Las grandes familias de la oligarquía, no más de cien, controlaban la mayoría de la propiedad agraria, industrial y bancaria, y por tanto la riqueza del conjunto del país. Junto con ellas, el capital extranjero, que había penetrado profundamente en la economía española, dominaba sectores productivos estratégicos. Si esta era la composición de la clase dominante, ¿dónde estaba la burguesía nacional progresista? A excepción de individuos aislados que no representaban a su clase, sencillamente no existía, como quedó absolutamente probado durante el levantamiento fascista del 18 de julio de 1936 y en la guerra civil. El ejército de Franco fue armado, organizado y financiado por los capitalistas, no sólo españoles, para defender su poder y sus propiedades.

El giro electoral de 1933 abrió un gran espacio a las fuerzas contrarrevolucionarias, que en los años siguientes intentaron aprovecharlo. Y como en otros momentos críticos, el látigo de la contrarrevolución hizo avanzar con botas de siete leguas la dinámica revolucionaria, le dio una profundidad, consistencia y madurez de las que carecía en las primeras etapas. La llegada de la CEDA a las puertas del poder conmocionó a la clase obrera, pero el proletariado y el movimiento jornalero estaban muy lejos de sentirse derrotados. Lejos de inducir al repliegue, el triunfo de la reacción dio lugar a una profunda reflexión colectiva. Los acontecimientos internos, pero también los externos, concretamente la forma en que los nazis aplastaron al proletariado alemán, el más fuerte y mejor organizado del mundo, sembraron la conciencia de los trabajadores y sus organizaciones, especialmente la juventud obrera: había que impedir, por todos los medios, la victoria del fascismo.

A partir de la derrota electoral, el sentimiento de unidad y lucha contra la amenaza fascista se extendió por el movimiento obrero, por cada fábrica, cada sindicato. Las organizaciones socialistas, el PSOE, la UGT y, sobre todo, las Juventudes, se sumergieron en una profunda crisis, de la que nació una potente ala de izquierdas, una radicalización que traducía las circunstancias críticas en que se desenvolvía la lucha de clases y que impulsó con fuerza el combate por completar la revolución socialista.

Ha transcurrido mucho tiempo y una nueva generación se siente irresistiblemente atraída por aquellos años. No podía ser de otra manera. En la insurrección de octubre de 1934 y el triunfo del frente popular; en la resistencia victoriosa que protagonizó la clase obrera de Barcelona y Madrid contra el golpe militar del 18 de julio; en las milicias obreras, las patrullas y los tribunales populares; en las colectividades agrarias y las fábricas bajo control obrero; en los tres años de lucha armada contra el fascismo... se palpa el latir revolucionario de los obreros y jornaleros españoles, su gesta por cambiar el mundo. Los combates más decisivos estaban aún por llegar.⁴⁷³

⁴⁷³ El segundo volumen del libro estará dedicado a analizar la etapa que se extiende de 1934 a 1939.